

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Año LXXI

Núm. 2.202

Noviembre de 2017



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE JUSTICIA

ISSN: 1989-4767

NIPO: 051-15-001-5

www.mjusticia.es/bmj

Enlaces

Publicaciones del Ministerio de Justicia

Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado. <https://cpage.mpr.gob.es>

Contacto

Contacto Boletín

Edita

Ministerio de Justicia
Secretaría General Técnica

Maquetación

Subdirección General de Documentación y Publicaciones

ISSN

1989-4767

NIPO

051-15-001-5

Depósito Legal

M.883-1958

DIRECTOR
D. Antonio Pau
Registrador de la Propiedad
Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

SECRETARIO
D. Máximo Juan Pérez García
Profesor Titular de Derecho Civil

SUMARIO

AÑO LXXI • NOVIEMBRE 2017 • NÚM. 2.202

SECCIÓN DOCTRINAL

Recensión

—*La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual. Análisis y comentarios*

SECCIÓN INFORMATIVA

Condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado

—*Octubre 2016*

Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

—*Mercedes Jiménez Ruiz v. España*

Escalafón de la Carrera Fiscal

Recensión

Título: La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual. Análisis y comentarios

Autores: Rafael Sánchez Arísti, Nieves Moralejo Imbernón, Sebastián López Maza

Primera edición, 2017. (930 páginas)
Editorial: Fundación SGAE. Departamento de publicaciones

Carmen Jerez Delgado

Profesora Titular de Derecho Civil
Universidad Autónoma de Madrid

La jurisprudencia europea no es ajena sino propia de los países miembros de la Unión. Son muchos los campos que abarca, tanto de Derecho público como de Derecho privado. Celebradas son las bases de datos que la ordenan y facilitan localizar las sentencias dictadas en una determinada materia. Novedosos son, sin embargo, los esfuerzos por seleccionar y comentar esa jurisprudencia. El acierto de la obra titulada «La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual» es precisamente este: los coautores, Rafael Sánchez Arísti, Nieves Moralejo Imbernón y Sebastián López Maza, especializados en el ámbito de los derechos de autor y discípulos todos ellos de un reconocido maestro en la materia, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, ponen a disposición del lector un elenco de comentarios a interesantes sentencias europeas del ámbito de la propiedad intelectual. El hecho de que la obra haya sido editada por el departamento de publicaciones de la Fundación SGAE acredita, de otra parte, el valor de este trabajo para el público al que va dirigido.

El libro dedica casi novecientas páginas al comentario y análisis de noventa y siete sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordenadas cronológicamente. Al final de la monografía se ofrecen otros tres índices prácticos para el lector: por número de asunto, onomástico y analítico. Este último quizás sea el más valioso: los autores han logrado organizar por materias el conjunto de sentencias, que va desde las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual hasta el Tratado de la Unión Europea.

Avalan la calidad de la obra una presentación de Carlos López Sánchez, secretario general del Instituto de Derecho de Autor, y un prólogo de Ramón Casas Vallés, profesor titular de Derecho civil de la Universidad de Barcelona, así como de la escuela judicial del Consejo General del Poder Judicial. Tras ellos, una introducción de los tres coautores nos ubica en el objetivo y ámbito del trabajo: comentar y sistematizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resuelva controversias centradas en los derechos de autor y derechos conexos. Expresamente se excluye lo que no sea propiedad intelectual en sentido estricto –tal y como la expresión se emplea en España y otros sistemas–, esto es, no se aborda en concreto ni lo

relativo a derechos de propiedad industrial (v. gr. patentes, marcas, diseños), ni lo centrado en el Derecho de la competencia.

Explican los autores que buscaron la exhaustividad, recogiendo todos los pronunciamientos del citado Tribunal europeo existentes en la materia, hasta alcanzar un total de 97 sentencias: comienza así la extensa sección de comentarios con un fallo de 8 de junio de 1971 (caso *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c. Metro-SB-Grossmärkte GmbH & Co. KG*, asunto C-78/70); concluye con la sentencia de 16 de noviembre de 2016 (caso *Marc Soulier y Sara Doke c. Premier ministre y Ministre de la Culture et de la Communication*, asunto C-301/15).

Cada comentario se inicia con una ficha en la que constan los datos completos de la sentencia, siendo el descriptor una guía muy útil para localizar el tema a tratar. Se relatan los hechos, y brevemente el proceso y la cuestión prejudicial (con alguna excepción en que el origen del fallo lo constituyó un recurso por incumplimiento); se extracta la doctrina que sirve de base para dictar sentencia y se comenta. Por último, se dedica un apartado a las referencias cruzadas a otras resoluciones relacionadas.

Junto a los comentarios a las sentencias, hay que destacar el Estudio Preliminar realizado por Rafael Sánchez Aristi, en el que, a lo largo de treinta y seis páginas, nos presenta un panorama de la normativa comunitaria en materia de derechos de autor y derechos conexos, y –más extensamente– un análisis de la evolución de la jurisprudencia europea en este ámbito.

En primer lugar, se refiere el autor a los derechos de propiedad intelectual frente al principio de libre circulación de bienes y servicios. Destaca aquí la tensión inicial entre la protección de la propiedad intelectual y la garantía de libre circulación de bienes y servicios, así como la tendencia a asuntos relativos al derecho exclusivo de control de la distribución de la obra que corresponde al autor. En segundo lugar, aborda la comunicación pública de obras grabadas en fonogramas procedentes de otro Estado miembro, destacando aquí un grupo de casos a finales de los ochenta. En tercer lugar, se refiere al derecho de comunicación pública, materia debatida en relación con la posibilidad de agotamiento de los derechos de los autores y resuelta de forma negativa: no se agota el derecho a la comunicación pública. En cuarto lugar, se centra en las diferentes legislaciones nacionales y la prohibición de trato discriminatorio a ciudadanos procedentes de otros Estados miembros: junto a la constatación de diferencias entre unos sistemas y otros, se resuelve la no aplicación de la ley de forma discriminatoria hacia ciudadanos procedentes de otros Estados miembros.

En quinto lugar, el autor destaca la cuestión de la necesidad de una armonización judicial para alcanzar una armonización legislativa: la clave para ello está en la estandarización de la interpretación que los tribunales nacionales hagan de los conceptos, derechos y límites establecidos en las Directivas. Entre los litigios surgidos en la materia, Rafael Sánchez Aristi distingue varias fases: la primera es la que denomina fase de inhibición o de eclecticismo por parte del TJUE; la segunda es una etapa de mayor implicación, en la que destacan las sentencias sobre límites, especialmente (aunque no solo) los límites sobre copia privada y su compensación equitativa. Se observa también una etapa de activismo judicial, en la que se delimita el concepto de comunicación pública. Lo mismo sucede con la delimitación de otros derechos de explotación. Ya en 2016, destaca la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de noviembre, que analiza el control del autor a través del ejercicio de sus

derechos exclusivos concedidos por la Directiva 2001/29 (en particular, los de comunicación pública y reproducción). Se depura también la noción de originalidad, concepto que –según expresa el autor– aparece de forma fragmentaria en algunas de las Directivas. Otro apartado acoge un ámbito sobre el que también han versado varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el relacionado con las acciones judiciales y otras medidas de protección. Más escasa es la jurisprudencia sobre los contratos de transmisión de los derechos, aunque merece ser destacada desde esta óptica de armonización. Por último, se abordan los aspectos relativos al plazo de protección.

Terminado el elenco de materias en las que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha buscado armonizar los sistemas, un sexto apartado de los relativos a la evolución jurisprudencial se destina a los aspectos regulados en directivas verticales: en particular, las bases de datos y programas de ordenador. El Estudio Preliminar concluye con un apartado dedicado a los recursos por incumplimiento del Derecho comunitario.

Consciente de que esta recensión es más descriptiva que crítica, quisiera no obstante –desde mi condición de coordinadora del Centro Español del European Law Institute (Spanish Hub)– destacar la importancia de que se multipliquen obras como esta, que comenten y aproximen a nuestros estudiantes, profesores y operadores jurídicos en general al Derecho europeo a través de su jurisprudencia. Es una labor imprescindible hoy en día y sin duda digna de elogio y consideración. Felicito por ello a los autores.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida por Motivos Extraordinarios

El Ministerio de Justicia, ha resuelto la concesión de la condecoración de Orden de San Raimundo de Peñafort, que se relaciona en el Anexo

El Director de la División de Derechos de Gracia y Otros Derechos, Nicolás Cabezudo Rodríguez

ANEXO

Gran Cruz

Excmo. Sr. Don José Manuel Maza Martín

A título póstumo

R.D. 1003/2017, de 24 de noviembre (BOE 25.11.17)



Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado

Del 1 al 31 de octubre de 2016



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE JUSTICIA

CLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR SU MATERIA

I NACIMIENTO, FILIACIÓN Y ADOPCIÓN	9
I.1 Nacimiento	9
I.1.1 Inscripción de nacimiento fuera de plazo	9
I.1.2 Rectificación registral del sexo Ley 3/2007	s/r
I.2 Filiación	17
I.2.1 Inscripción de filiación	17
I.3 Adopción	s/r
I.3.1 Inscripción, adopción nacional	s/r
I.3.2 Inscripción, adopción internacional	s/r
I.4 Competencia	s/r
I.4.1 Competencia en nacimiento, filiación y adopción	s/r
II NOMBRES Y APELLIDOS	31
II.1 Imposición del nombre propio	31
II.1.1 Imposición del nombre propio, prohibiciones	31
II.1.2 Nombre propio del extranjero naturalizado	s/r
II.2 Cambio de nombre	37
II.2.1 Cambio de nombre, prueba uso habitual	s/r
II.2.2 Cambio de nombre, justa causa	37
II.2.3 Cambio de nombre, prohibiciones Art. 54 LRC	45
II.3 Atribución de apellidos	50
II.3.1 Régimen de apellidos de los extranjeros nacionalizados	s/r
II.3.2 Régimen de apellidos de los españoles	50
II.4 Cambio de apellidos	53
II.4.1 Modificación de Apellidos	53

II.5	Competencia	55
II.5.1	Competencia en cambio de nombre propio	55
II.5.2	Competencia en cambio de apellido	s/r
III	NACIONALIDAD	58
III.1	Adquisición de la nacionalidad española	58
III.1.1	Adquisición de nacionalidad de origen <i>iure soli</i>	58
III.1.2	Adquisición de nacionalidad de origen <i>iure sanguinis</i>	63
III.1.3	Adquisición de nacionalidad de origen por Ley 52/2007 de memoria histórica	67
III.1.3.1	Adquisición de nacionalidad de origen, anexo I Ley 52/2007	67
III.1.3.2	Adquisición de nacionalidad de origen, anexo II Ley 52/2007	326
III.1.3.3	Adquisición de nacionalidad de origen, Anexo III Ley 52/2007	s/r
III.1.3.4	Adquisición de nacionalidad de origen, Anexo IV Ley 52/2007	s/r
III.2	Consolidación de la nacionalidad española	s/r
III.2.1	Adquisición de nacionalidad por consolidación	s/r
III.3	Adquisición de nacionalidad por opción	358
III.3.1	Opción a la nacionalidad española por patria potestad, art. 20-1a CC	358
III.3.2	Opción a la nacionalidad española por hijo español, art. 20-1b CC	s/r
III.3.3	Opción a la nacionalidad española, supuestos, art. 20-1c CC ...	s/r
III.4	Adquisición de nacionalidad por residencia	s/r
III.4.1	Actuación del Ministerio Fiscal en expedientes de nacionalidad por residencia	s/r
III.5	Conservación, pérdida y renuncia a la nacionalidad	391
III.5.1	Conservación, pérdida y renuncia a la nacionalidad española ..	391
III.6	Recuperación de la nacionalidad	s/r
III.6.1	Recuperación de la nacionalidad española	s/r
III.7	Vecindad civil y administrativa	s/r
III.7.1	Recursos sobre vecindad civil y administrativa	s/r

III.8	Competencia en expedientes de nacionalidad	401
III.8.1	Competencia en expedientes de nacionalidad por residencia ...	401
III.8.2	Competencia territorial en expedientes de nacionalidad	403
III.8.3	Expedientes de nacionalidad, alcance de la calificación, art. 27 LRC	414
III.9	Otras cuestiones en expedientes de nacionalidad	441
III.9.1	Expedientes de nacionalidad de menores. Autorización previa y otras peculiaridades	441
III.9.2	Expedientes de nacionalidad. Renuncia a la nacionalidad anterior	s/r
III.9.3	Caducidad de la concesión de la nacionalidad española	s/r
IV	MATRIMONIO	444
IV.1	Inscripción de matrimonio religioso	444
IV.1.1	Inscripción de matrimonio religioso celebrado en España	444
IV.1.2	Inscripción de matrimonio religioso celebrado en el extranjero	447
IV.2	Expediente previo para la celebración del matrimonio civil	455
IV.2.1	Autorización de matrimonio	455
IV.2.2	Expedición de certificado de capacidad matrimonial	506
IV.3	Impedimento de ligamen	514
IV.3.1	Impedimento de ligamen en el expediente previo a la celebración del matrimonio	s/r
IV.3.2	Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio	514
IV.4	Matrimonio celebrado en el extranjero	526
IV.4.1	Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por español o extranjero naturalizado	526
IV.4.1.1	Se deniega la inscripción por ausencia de consentimiento matrimonial	539
IV.4.1.2	Se inscribe. No puede deducirse la ausencia de consentimiento matrimonial	635
IV.4.1.3	Inscripción de matrimonio celebrado por extranjero naturalizado actuando con arreglo a su anterior nacionalidad	s/r
IV.4.2	Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros	s/r
IV.4.3	Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero por menor de edad	s/r

IV.5	Matrimonio civil celebrado en España	s/r
IV.5.1	Inscripción de matrimonio civil celebrado en España	s/r
IV.6	Capitulaciones matrimoniales	s/r
IV.6.1	Recursos sobre capitulaciones matrimoniales	s/r
IV.7	Competencia	s/r
IV.7.1	Competencia en expedientes de matrimonio	s/r
V	DEFUNCIÓN	s/r
V.1	Inscripción de la defunción	s/r
V.1.1	Inscripción de la defunción fuera de plazo	s/r
VI	TUTELAS	s/r
VI.1	Tutela, patria potestad y emancipación	s/r
VI.1.1	Recursos sobre tutela, patria potestad y emancipación	s/r
VII	RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y TRASLADO DE INSCRIPCIONES	640
VII.1	Rectificación de errores	640
VII.1.1	Rectificación de errores, art. 93 y 94 LRC	640
VII.1.2	Rectificación de errores, art. 95 LRC	659
VII.2	Cancelación	668
VII.2.1	Cancelación de inscripción de nacimiento	668
VII.2.2	Cancelación de inscripción de matrimonio	s/r
VII.2.3	Cancelación de inscripción de defunción	s/r
VII.3	Traslado	s/r
VII.3.1	Traslado de inscripción de nacimiento	s/r
VII.3.2	Traslado de inscripción de matrimonio	s/r
VII.3.3	Traslado de inscripción de defunción	s/r
VIII	PROCEDIMIENTO Y OTRAS CUESTIONES	684
VIII.1	Cómputo de plazos	s/r
VIII.1.1	Recurso interpuesto fuera de plazo	s/r
VIII.2	Representación	684
VIII.2.1	Recurso interpuesto por medio de representante	684
VIII.2.2	Representación y/o intervención del menor interesado	s/r

VIII.3	Caducidad del expediente	686
VIII.3.1	Caducidad por inactividad del promotor, art. 354 RRC	686
VIII.4	Otras cuestiones	689
VIII.4.1	Recursos en los que se aprecia vicio de incongruencia	s/r
VIII.4.2	Recursos en los que ha decaído el objeto	689
VIII.4.3	Validez de sentencias extranjeras	s/r
VIII.4.4	Procedimiento y otras cuestiones	693
IX	PUBLICIDAD	700
IX.1	Publicidad formal, acceso de los interesados al contenido del RC	700
IX.1.1	Publicidad formal, expedición de certificaciones y consulta libros del registro	700
IX.1.2	Publicidad formal, libro de familia	s/r
IX.2	Publicidad material, efectos de la publicidad registral	s/r
IX.2.1	Publicidad material	s/r
X	ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	s/r
X.1.1	Organización y funcionamiento en el registro civil	s/r
XI	OTROS	s/r
XI.1.1	Otras cuestiones no incluidas en los apartados anteriores	s/r

*s/r: Sin resolución este mes

I.1 NACIMIENTO

I.1.1 INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO FUERA DE PLAZO

Resolución de 7 de octubre de 2016 (44ª)

I.1.1. Inscripción fuera de plazo de nacimiento

Procede que al practicar la inscripción fuera de plazo del nacido en Melilla en 2009 se haga constar la filiación paterna del no inscrito pero, no acreditado en debida forma el matrimonio de los padres y su vigencia en el momento del nacimiento, no es posible asentar que la filiación materna y paterna es matrimonial.

En el expediente sobre inscripción fuera de plazo de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Melilla en fecha 19 de febrero de 2014 la Sra. L. T., mayor de edad y domiciliada en dicha ciudad, interesa que se proceda a la inscripción fuera de plazo del nacimiento de su hijo A. M. exponiendo que nació en Melilla el de 2009 y aportando la siguiente documentación: otorgamiento de poder apud acta a doña S. B. R., impreso de declaración de datos para la inscripción, certificado emitido el 13 de diciembre de 2013 de constancia en el Libro de Partos del Hospital Comarcal de M., con el número de orden 885, de Doña L. T., que dio a luz un feto vivo de sexo varón a las 05:30 horas del día arriba indicado; del no inscrito, copia simple de pasaporte marroquí, certificación negativa de inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Melilla entre el 10 de junio de 2009 y el 30 de enero de 2014 y copia literal de acta de nacimiento marroquí, redactada el 30 de junio de 2009, en la que consta asentada en fecha 13 de noviembre de 2013 marginal que expresa que, en virtud de sentencia de 24 de octubre de 2013 del TPI de Nador, Z., se corrige el lugar de nacimiento del interesado, que pasa a ser M. en lugar de Z.; de la promotora, copia simple de NIE y de pasaporte marroquí, volante individual de empadronamiento en Melilla y copia literal de acta de nacimiento marroquí con una marginal de fecha 11 de junio de 2007, de matrimonio contraído con M. M. el 16 de febrero de 2007, y otra de fecha 12 de julio de 2012, de divorcio en virtud de sentencia de fecha 12 noviembre

de 2009; copia simple de tarjeta nacional de identidad y extracto de partida de nacimiento de quien en la certificación del registro local del no inscrito consta como padre y acta de divorcio contencioso, irrevocable y definitivo levantada el 22 de febrero de 2011 por el Tribunal de primera Instancia de Nador, Sección Notarial de Z., a solicitud de la promotora.

2. En el mismo día, 19 de febrero de 2014, la promotora se ratificó en el contenido del escrito presentado, se acordó la formación del oportuno expediente y comparecieron dos testigos, que manifestaron que les consta de ciencia propia que es cierto todo cuanto expone la solicitante. Seguidamente se acordó librar oficio a la Jefatura Superior de Policía de M. a fin de que informe sobre el nacimiento, con el resultado de que M. M. y L. T. están divorciados, según consta en acta de divorcio inscrita con fecha 22 de febrero de 2011 bajo el nº, y que la promotora está en posesión de un certificado de asistencia al parto, librado por el Hospital comarcal de la ciudad en el que consta que el 10 de junio de 2009 dio a luz un varón vivo, significándose que en el acta de nacimiento del menor que presentan consta que nació en Z., Marruecos.

3. El ministerio fiscal informó que, tras un estudio pormenorizado de la documentación aportada, se opone a la inscripción del menor, porque ya está inscrito en el registro extranjero, y el juez encargado, razonando que queda suficientemente acreditado el nacimiento en el Hospital Comarcal de Melilla, a las 5,30 horas del día 10 de junio de 2009, de un varón hijo de L. T., nacida en O. S. el 4 de diciembre de 1985, hija de B. y de Z., de nacionalizada marroquí y estado civil de divorciada y que la filiación paterna pretendida no resulta probada ni de la documental médica presentada ni por presunción de matrimonio (reconocido en España), dictó auto de fecha 27 de julio de 2014 disponiendo que, sin perjuicio de promover la determinación de la filiación paterna con posterioridad por cualquiera de las vías expresamente previstas en el art. 120 del Código Civil, se proceda a la inscripción de nacimiento con las circunstancias que han quedado acreditadas y T. como apellido único del menor según su ley personal.

4. Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, su apoderada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que con la partida de nacimiento de la madre ha quedado sobradamente acreditado que el nacimiento se produjo estando vigente el matrimonio de los padres y que el certificado de nacimiento marroquí del menor recoge expresamente su filiación paterna.

5. De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que impugnó el recurso e interesó la confirmación de la resolución apelada por sus propios fundamentos, y el juez encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 113, 115 y 120 del Código civil (CC); 2, 15, 16, 23, 26, 66, 68, 69, 95 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 85, 94 y 311 a 316 del Reglamento del

Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 1-14ª de septiembre de 2011 y 19-103ª de diciembre de 2014.

II. Solicita la promotora que se proceda a la inscripción fuera de plazo del nacimiento de su hijo A. M., exponiendo que nació en Melilla el 10 de junio de 2009, y el juez encargado, razonando que queda suficientemente acreditado el nacimiento en el Hospital Comarcal de Melilla, a las 5,30 horas del día 10 de junio de 2009, de un varón hijo de L. T., nacida en O. S. el 4 de diciembre de 1985, hija de B. y de Z., de nacionalizada marroquí y estado civil de divorciada y que la filiación paterna pretendida no resulta probada ni de la documental médica presentada ni por presunción de matrimonio, dispuso que, sin perjuicio de promover posteriormente la determinación de la filiación paterna por cualquiera de las vías previstas en el art. 120 del Código Civil, se proceda a la inscripción de nacimiento con las circunstancias que han quedado acreditadas y T. como apellido único del inscrito, según su ley personal, mediante auto de 27 de julio de 2014 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por la apoderada de la promotora.

III. La cuestión debatida, por tanto, es si en la inscripción de nacimiento fuera de plazo, que el encargado ha acordado practicar con la sola filiación materna, debe hacerse constar la filiación paterna por la presunción de paternidad del marido de la madre que, según se alega, existe tanto en la legislación marroquí como en la nuestra. Al respecto conviene precisar que la normativa española prevé que al margen de la inscripción de nacimiento se ponga nota de referencia a la de matrimonio y no contempla que el divorcio sea objeto de análoga anotación porque es la inscripción de matrimonio la que hace fe del acto del matrimonio y de la fecha en que se contrae (art. 69 LRC) y la disolución del vínculo por divorcio adquiere publicidad y surte efecto respecto de terceros por medio de inscripción marginal practicada en la de matrimonio. De ahí que las marginales sobre el particular asentadas en el acta de nacimiento de la promotora no acrediten nada sobre su estado civil de casada y, posteriormente, de divorciada máxime teniendo en cuenta que en el impreso de declaración de datos ha consignado y firmado que en el momento del nacimiento del menor era soltera y el padre casado y que el acta de divorcio no recoge la fecha de celebración del matrimonio. Así pues, a falta del acta de matrimonio y a salvo lo que resulte en un expediente posterior, no es posible determinar por el momento la filiación matrimonial del no inscrito.

IV. Sin perjuicio de lo anterior, del examen del acta de nacimiento marroquí del menor presentada, cuya legalidad y autenticidad no ofrecen duda (cfr. arts. 23,II LRC y 85,I RRC), resulta que fue levantada veinte días después de acaecer el hecho por declaración del padre, aunque no refleja el estado civil de los progenitores, expresa la filiación paterna y materna del nacido y, estando legalmente previsto que el certificado del registro extranjero constituya en sí mismo y por sí solo título formal de una inscripción, con mayor razón su aportación a un expediente fuera de plazo como una prueba más de las circunstancias que deben figurar en el asiento ha de permitir tener por suficientemente acreditada la filiación paterna no matrimonial que proclama.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar parcialmente el recurso y disponer que, no acreditada por el momento la filiación matrimonial materna y paterna, se practique la inscripción de nacimiento del no inscrito con filiación paterna no matrimonial.

Madrid, 25 de Enero de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil Consular en Melilla

Resolución de 21 de octubre de 2016 (33ª)

I.1.1. Inscripción de nacimiento fuera de plazo

Tratándose de inscribir un nacimiento ocurrido en 1874 es preciso justificar un interés legítimo particular para promover el expediente, lo que aquí no consta.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil de Cartagena.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado el 19 de agosto de 2011 en el Registro Civil del Consulado General de España en Santiago de Chile, la Sra. L.-R. G. C., con domicilio en la misma ciudad, solicitaba la inscripción de nacimiento en el registro civil español de su abuelo paterno, M. G. D., nacido en L. U. (Murcia), el 23 de septiembre de 1874, hijo de G. G. y de I. D., alegando que su registro de nacimiento resultó destruido en un incendio como consecuencia de una revuelta minera en 1898. Aportaba la siguiente documentación: certificado chileno de primera filiación referido a M.G. D., nacido el 23 de septiembre de 1874 en L. U. (España), quien se identificó por primera vez en la oficina de S. el 2 de diciembre de 1936; registro de nacimiento chileno de G. D. G., nacido el 28 de febrero de 1909, hijo de M. G. y de [E. o E.] P. Z., ambos de nacionalidad española; inscripción de nacimiento chilena de la promotora, nacida el 11 de abril de 1950, hija de G. D. G. Z. y de L. C. I.; inscripción chilena de defunción de M. G. D. en S. el 25 de marzo de 1954, quien había nacido en L. U. (España) el 23 de septiembre de 1874, hijo de G. G. y de I.D.; certificaciones negativas de bautismo de dos parroquias de L. U. y certificación negativa de inscripción en el Registro Civil de La Unión.

2. Remitido el expediente al Registro Civil de Cartagena, competente para su resolución, previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado dictó auto el 8 de abril de 2013 denegando la inscripción solicitada por no considerar acreditados los datos necesarios para practicarla a partir de los documentos aportados, que son solo fotocopias.

3. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) alegando la promotora que su interés en obtener la

inscripción de nacimiento de su abuelo está relacionada con la aspiración de que se le reconozca a ella misma la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre (si bien más adelante en el mismo escrito asegura la recurrente que ya se le ha otorgado dicha nacionalidad), que ha aportado documentación suficientemente acreditativa de las circunstancias relativas al nacimiento de su abuelo y que, estando reconocida en Chile la nacionalidad española del no inscrito, considera incomprensible que no se reconozca en España. Con el escrito de recurso, además de otros documentos ya incorporados al expediente desde su inicio, añadía los siguientes: comunicación a la interesada el 11 de marzo de 2013 de su inscripción en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero, certificado chileno de matrimonio celebrado el 15 de marzo de 1908 entre M.G. D. y E. P. Z. y certificación chilena de defunción el 29 de junio de 1971 de P. Z. A., viuda de M. G. D. y de nacionalidad española.

4. La interposición del recurso, tras haber sido considerado, erróneamente, como presentado fuera de plazo, se trasladó finalmente al ministerio fiscal, que se adhirió a la pretensión de la recurrente. La encargada del Registro Civil de Cartagena remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso con informe favorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24, 26, 95 y 97 de la Ley del Registro Civil; 311 a 316, 346 y 348 del Reglamento del Registro Civil, la circular de 29 de octubre de 1980 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) sobre el expediente de inscripción fuera de plazo de nacimiento, la instrucción de 7 de octubre de 1988, y las resoluciones, entre otras, 25-2ª de septiembre de 1997, 24-2ª de abril de 1998, 19-1ª de febrero de 1999, 11-3ª de enero de 2007, 18-12ª de noviembre de 2008 y 29-12ª de octubre de 2012.

II. Pretende la promotora la inscripción de nacimiento de su abuelo paterno, al parecer nacido en la localidad de L. U. (Murcia) el 23 de septiembre de 1874 y que, posteriormente, emigró a Chile, alegando que el nacimiento no figura registrado en España por destrucción de los libros durante una revuelta ocurrida en 1898.

III. Como pusieron de relieve la circular y la instrucción citadas en el fundamento primero, es necesario dar solución a los casos de personas cuya inscripción de nacimiento no consta o se ignora si se practicó en su momento en el registro civil, por haber sido destruidos los libros, especialmente cuando no hay motivos para dudar de la nacionalidad española originaria del no inscrito. La obligación, que podría alcanzar incluso al ministerio fiscal, de promover la inscripción omitida (o destruida) e incoar, en su caso, el oportuno expediente (arts. 24 y 97 LRC) debe entenderse lógicamente limitada a aquellos supuestos en que persista el interés público primordial de lograr la concordancia entre el registro y la realidad (cfr. art. 26 LRC), interés superior que permitiría también subsanar defectos en la legitimación de los promotores (cfr. art. 348 RRC). Sin embargo, cuando, como ocurre en este caso, se pretende la inscripción

de nacimiento de una persona ya fallecida (en 1954, concretamente), la cuestión afecta únicamente al interés privado y es entonces forzoso acreditar tal interés legítimo particular para la incoación del expediente (cfr. arts. 97 LRC y 346 RRC). Por ello, antes de entrar en el fondo del asunto, procede examinar la concurrencia o no de interés legítimo en la promotora.

IV. La recurrente, chilena de origen, alegaba en el escrito de recurso que su interés residía en la pretensión de obtener para ella misma la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, para lo que debía acreditar previamente la nacionalidad española originaria de su abuelo, lo que, en efecto, constituiría un principio de prueba de ese interés legítimo particular en el momento en el que se inició el expediente. Sin embargo, más adelante en ese mismo escrito, la promotora asegura que ya ha obtenido la nacionalidad española, de manera que el interés que podría haberse apreciado inicialmente ya ha decaído, en tanto que, aparte de la mencionada declaración de la Sra. G. C., el consulado español en Santiago de Chile remitió un escrito a este centro fechado el 17 de noviembre de 2014 del que se desprende que, una vez recibida comunicación del Registro Civil de La Unión informando de que los libros en los que podría haber estado inscrito don M. G. D. habían sido destruidos durante unas revueltas populares a finales del siglo XIX, se decidió aceptar las certificaciones chilenas como documentos acreditativos de la nacionalidad y datos personales del no inscrito a efectos de la solicitud de nacionalidad española por parte de su nieta. Si a ello se añade la notable demora en el tiempo (por variadas circunstancias, bien que no imputables a la promotora) de las actuaciones en este caso, no puede considerarse ya que el interés legítimo para la inscripción persista y, en consecuencia, no procede entrar a examinar si resultan o no acreditados los extremos necesarios para practicarla.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Cartagena (Murcia).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (49ª)

I.1.1. Inscripción de nacimiento

No procede la inscripción de un nacimiento ocurrido en Cabo Verde en 2013 alegando la nacionalidad española del presunto padre porque la certificación del registro local y demás documentación aportada, por falta de garantías, no da fe de la filiación.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Praia (Cabo Verde).

HECHOS

1. Mediante formulario presentado el 6 de marzo de 2015 en el Registro Civil Consular de España en Praia (Cabo Verde), don A. J. G. M., nacido en C. (Murcia) en 1994 y de nacionalidad española y con domicilio en S. V. (Cabo Verde), solicitaba la inscripción de nacimiento en el registro civil español de su hija S. P., nacida en Cabo Verde el de 2013. Aportaba la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción, en el que hace constar que la menor es hija suya y de J. L. G., nacida en S. V. (Cabo Verde) en 1990, certificación de nacimiento caboverdiana de la menor, sin traducir, practicada el 13 de junio de 2013 y nacida en S. V. el de 2013, hija de A. J. G. M. y de J. L. G., ambos solteros y declarantes en la inscripción, cédula personal de la menor, inscripción de nacimiento española del promotor, pasaporte español del promotor, expedido el 2 de diciembre de 2011 y con una primera entrada en Cabo Verde el 13 de enero de 2012, salida el día 3 de abril siguiente y última entrada el 14 de septiembre de 2012 con visado válido hasta el 5 de febrero de 2013, sin que conste la salida, documento nacional de identidad español del promotor, certificado literal de nacimiento de la madre de la menor, Sra. L. G., sin traducir y tarjeta de identidad de ciudadana nacional expedida por la República de Cabo Verde en el año 2009 y con validez hasta marzo de 2014.

2. El encargado del registro consideró insuficiente la documentación presentada para tener por acreditado el hecho que se pretendía inscribir, por lo que requirió a los progenitores de la menor documentación médica relativa al seguimiento del periodo de su gestación, que fue aportada por el promotor con fecha 7 de abril de 2015 y en la que el encargado apreció datos que relacionados con las fechas de los viajes del promotor hacían surgir dudas sobre la filiación paterna de la menor.

3. El encargado del registro, previo informe del órgano en funciones de ministerio fiscal, dictó resolución el 16 de abril de 2015 denegando la práctica del asiento, porque de la documentación aportada y las diligencias de averiguación realizadas se deduce que no se cumplen los requisitos establecidos en la normativa del registro civil para llevar a cabo la inscripción.

4. Notificada la resolución, el interesado presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que no entendía muy bien porque se le pidió la aportación del documento médico sobre la gestación de la menor, manifestando que la madre de la menor y él son pareja desde enero del año 2012, reclamando de nuevo la inscripción del nacimiento de su hija.

5. La interposición del recurso se trasladó al órgano en funciones de ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del registro civil consular se ratificó en la decisión adoptada, detallando los datos del documento médico que suscitó las dudas suficientes sobre la filiación de la menor, y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 11-3ª de marzo de 2002; 2-2ª de febrero de 2004; 30-2ª de noviembre de 2005; 24-4ª de enero de 2006; 3-5ª y 23-3ª de octubre y 27-5ª de diciembre de 2007; 13-3ª de octubre de 2008; 20-4ª de abril de 2009 y 27-2ª de enero de 2010.

II. Se pretende el acceso al registro civil español de un nacimiento que tuvo lugar en 2013 en Cabo Verde y cuya inscripción, según la certificación local aportada, se practicó en el mes de junio del mismo año, atribuyendo la filiación paterna a un ciudadano español. El encargado del registro civil consular, a la vista de la certificación local de nacimiento, de la documentación médica de la gestación de la menor y del pasaporte del promotor, dictó resolución denegando la inscripción solicitada por considerar que no se cumplen las garantías que exige la legislación registral. La citada resolución constituye el objeto del presente recurso.

III. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que afecte a algún ciudadano español (art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23.2 LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española” (art. 85.1 RRC).

IV. En el presente caso la certificación no literal de nacimiento local aportada carece de elementos suficientes para probar la filiación pretendida, no consta qué documentos sirvieron de base para practicar el asiento, por lo que se requirió como documentación suplementaria la correspondiente al seguimiento médico de la gestación de la madre de la menor, apreciándose en ella fechas que resultan difíciles de encajar con los viajes del Sr. G. M. C. V., que en su recurso declara una relación de pareja con la madre de la menor desde enero de 2012, siendo que él llegó por primera vez a Cabo Verde el día 13 de dicho mes, saliendo el 3 de abril y no volviendo hasta más de 5 meses después, el 14 de septiembre de 2012, fecha que se ha hecho constar en el documento médico como de inicio de la gestación, añadiéndola a la información existente, cuando es prácticamente imposible tener tanta certeza en dicho comienzo cuando además, con fecha 16 de mayo de 2013, el documento médico refiere que hay una gestación de 36 semanas, pero además 8 días después el 24 de mayo de 2013, un día antes del nacimiento de la menor, el médico hace una última anotación relativa a que se trata de una gestación de 38 semanas, lo que retrasaría la fecha del comienzo hasta unas fechas en las que el ciudadano español no estaba en Cabo Verde. Todo ello plantea fundadas dudas sobre la realidad del hecho inscrito en Cabo Verde y sobre su legalidad

conforme a la legislación española (art. 23.2 LRC), no pudiendo darse por acreditada la filiación pretendida.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Praia (Cabo Verde).

I.2 FILIACIÓN

I.2.1 INSCRIPCIÓN DE FILIACIÓN

Resolución de 7 de octubre de 2016 (49ª)

I.2.1. Inscripción de filiación paterna

En Navarra, el reconocimiento de un menor por comparecencia del padre ante el encargado del registro es válido e inscribible sin necesidad de requisito complementario alguno (ley 69 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra).

En las actuaciones sobre inscripción de filiación paterna no matrimonial de una menor nacida en Navarra remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la progenitora contra la resolución del encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

HECHOS

1. Mediante comparecencia efectuada el 15 de enero de 2015 en el Registro Civil de Tudela (Navarra), don V. L. G. reconocía como hija no matrimonial suya a la menor S. M. C., nacida en T. el de 2014 e inscrita únicamente con filiación materna. Al mismo tiempo, el compareciente solicitaba la inscripción de la filiación paterna declarada y la atribución a la nacida de los apellidos L. M. Consta en el expediente la siguiente documentación: DNI, volante de empadronamiento e inscripción de nacimiento del declarante e inscripción de nacimiento de la menor, hija de Y. M. C.
2. Notificada la madre de la menor, expresó su desacuerdo con el reconocimiento efectuado alegando que nunca ha tenido vinculación con quien dice ser el padre de su hija.
3. Previo informe del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 11 de febrero de 2015 acordando la práctica de la inscripción de reconocimiento paterno de la menor interesada en virtud de lo dispuesto en la ley 69 del Fuero Nuevo de Navarra sobre determinación de la filiación paterna, dado que la norma foral, que es la que resulta aplicable al caso, no exige requisito supletorio alguno de consentimiento del

otro progenitor ya conocido, sin perjuicio de que el reconocimiento efectuado pueda ser impugnado judicialmente mediante la correspondiente acción.

4. Notificada la resolución, la madre de la menor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) alegando que inscribió a su hija solo con filiación materna porque el verdadero padre biológico de la nacida, llamado I., no aceptó reconocer su paternidad, que el Sr. L. G. no es el padre biológico y, además, tiene vecindad civil aragonesa, por lo que no le es aplicable la legislación foral navarra, y que, sin desconocer la tesis sostenida en varias resoluciones de la DGRN en casos similares, entiende la recurrente que el contenido de la ley 69 del Fuero Nuevo de Navarra debe ser interpretado en relación con artículos básicos de la Constitución Española, concretamente, el 14 (no discriminación), el 18 (derecho a la intimidad personal) y el 24.1 (interdicción de la indefensión), que considera vulnerados si se mantiene que para el reconocimiento de los hijos basta una declaración unilateral de quien dice ser el padre concurriendo la oposición expresa de la madre del menor reconocido.

5. Trasladado el recurso a la otra parte, el Sr. L. G. alegó que la propia madre había reconocido su paternidad en declaración –cuya copia adjunta junto con otros documentos relativos al mismo procedimiento– efectuada ante un juzgado de Tudela antes de nacer su hija con ocasión de una denuncia infundada de malos tratos que presentó contra él y que dio lugar a un procedimiento, aún no concluido, a lo largo del cual la recurrente ha manifestado en varias ocasiones que mantuvo con el interesado una relación análoga a la matrimonial, que el declarante se encuentra empadronado en T. y, aunque carece de vecindad civil navarra, ello no es impedimento para la aplicación a este caso del derecho foral navarro puesto que su hija nació en ese territorio y que, tal como ha establecido en varias resoluciones la DGRN, el contenido del auto impugnado es ajustado al derecho aplicable, sin perjuicio de que el reconocimiento efectuado pueda ser impugnado en vía judicial, en la que considera el exponente que quedará debidamente probada la veracidad de su paternidad.

6. Trasladadas las actuaciones al ministerio fiscal, interesó la desestimación del recurso y la confirmación del auto apelado. El encargado del Registro Civil de Tudela emitió informe ratificando la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la ley 69 de la Compilación de Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra (CDCFN), los artículos 9 y 14 del Código Civil (CC); 48 y 49 de la Ley del Registro Civil (LRC) y las resoluciones 7-1ª de mayo de 1998, 4 de junio de 1999, 17-2ª de junio de 2000, 27-2ª de septiembre 2001, 17 de marzo de 2003 y 20-20ª de noviembre de 2015.

II. Efectuado, mediante comparecencia ante el encargado del registro civil de quien dice ser el padre, el reconocimiento paterno de una menor nacida en T. e inscrita

únicamente con filiación materna, la madre de la nacida expresa su oposición a la inscripción del mencionado reconocimiento alegando que el declarante no es el padre biológico de su hija. El encargado del registro acuerda practicar la inscripción, aun sin el consentimiento de la madre, porque así lo prevé la legislación foral navarra aplicable al caso, sin perjuicio del ejercicio de la acción judicial de impugnación que proceda. Contra la resolución adoptada se presentó el recurso analizado insistiendo la progenitora en la necesidad de contar con su consentimiento para poder inscribir la filiación pretendida.

III. Partiendo de la base de que a la nacida, de nacionalidad española, le corresponde la vecindad civil navarra, la cuestión relativa a la determinación de su filiación ha de resolverse a la luz de lo que establece la ley personal aplicable, es decir las normas civiles vigentes de Navarra (cfr. art. 9.4 CC, tanto en su redacción vigente en el momento en que se realizó el reconocimiento como en su redacción actual, según modificación por la Ley 26/2015, de 28 de julio, en relación con el art. 14 CC). Así, de acuerdo con las normas forales navarras –que contienen una regulación completa de la filiación no matrimonial determinada por reconocimiento, de manera que no tienen que ser completadas con normas del Código Civil–, el reconocimiento de la paternidad de un menor de edad efectuado por el padre mediante declaración ante el encargado del registro (ley 69) no está sujeto a requisito supletorio alguno de consentimiento, de modo que la validez y eficacia de tal reconocimiento y su consiguiente inscripción en el Registro Civil no pueden quedar subordinadas al cumplimiento de los requisitos que el artículo 124 CC exige cuando se trata de reconocimientos regulados por el derecho común. Cabe precisar asimismo que aunque la ley 68 del Fuero Nuevo de Navarra señala que la filiación no matrimonial se determina para cada uno de los progenitores por su reconocimiento “sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación del Registro Civil”, esta salvedad ha de interpretarse en el sentido de que siguen vigentes las formas de determinación de la filiación no matrimonial reguladas especialmente en la Ley del Registro Civil, como sucede con las hipótesis de los artículos 47 (determinación de la filiación materna por coincidir en ella declaración y el parte médico) y 49 (determinación por expediente de la filiación paterna o materna), respecto de las que el Fuero Nuevo de Navarra no dice nada. Por el contrario, la determinación de la filiación no matrimonial por reconocimiento voluntario está regulada íntegramente por la ley foral y su aplicación no puede quedar desvirtuada exigiendo requisitos no impuestos por las normas. Ello no impide, sin embargo, que el reconocimiento pueda ser impugnado tanto por el propio hijo al alcanzar la plena capacidad como por su representante legal durante la minoría de edad y con justa causa (cfr. leyes 69 y 70), pero tal impugnación requiere ejercitar judicialmente la correspondiente acción.

IV. Finalmente, en relación con parte del contenido del escrito de recurso, cabe apuntar que no corresponde a este centro un pronunciamiento sobre la alegada inconstitucionalidad de determinadas normas forales.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra)

Resolución de 14 de octubre de 2016 (19ª)

I.2.1. Inscripción de filiación materna

No prospera el expediente del art. 49 LRC para inscribir la filiación materna no matrimonial de dos hermanos nacidos en 1966 y 1971, respectivamente, por existir oposición de parte interesada y del ministerio fiscal.

En las actuaciones sobre determinación de filiación materna en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil de Sevilla.

HECHOS

1. Mediante comparecencia ante el Registro Civil de Sevilla el 20 de noviembre de 2014 los hermanos M.-A. y C.-A. E. D. solicitaban la inscripción de su filiación materna respecto a Dª C. O. F., ya fallecida, alegando que hasta hacía poco tiempo no sabían que dicha filiación no constaba en el registro civil. Añadían que su madre estuvo casada y tuvo varios hijos matrimoniales con los que los promotores no han tenido contacto, si bien, posteriormente, el matrimonio se separó y la Sra. O. F. inició la relación con el padre de los promotores, Don A. E. D., también fallecido, con quien convivió hasta su muerte. En el mismo acto facilitaron los datos de identificación de tres de los hijos matrimoniales de su madre. Consta en el expediente la siguiente documentación: certificación de matrimonio celebrado en S. el 2 de agosto de 1951 entre M. G. A. y C. O. F. con marginal de separación el 7 de diciembre de 1964 por sentencia del tribunal eclesiástico correspondiente; inscripciones de nacimiento de M.-A. (nacido en S. el 1 de octubre de 1966) y C.-A. (S., 27 de marzo de 1971) E. D., inscritos ambos solo con filiación paterna respecto de A. E. D.; certificados de empadronamiento histórico conjunto en S. de los promotores, su padre y Dª C. O. F. entre el 1 de abril de 1986 y el 17 de agosto de 1995, cuando causaron baja por traslado a la localidad de G.; formulario de declaración de datos para la inscripción de nacimiento de C.-A., cumplimentado por su padre en 1971, sin indicar los datos de filiación materna del nacido, si bien consta adjunto en el mismo documento el parte del facultativo que asistió al nacimiento el 27 de marzo de 1971 en Cruz Roja de T., quien certifica que la madre del nacido es C. O. F., e inscripciones de defunción de A. E. D. (fallecido el 26 de octubre de 2014) y de C. O. F. (el 24 de noviembre de 2011), ambos con el mismo último domicilio conocido.

2. El encargado del registro requirió la comparecencia de los Sres. S., M. y J.-L. G. O., identificados por los promotores como sus hermanos por parte de madre, quienes,

personados en el registro, manifestaron su oposición a la determinación de la filiación pretendida por no estimar probados los hechos.

3. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 9 de febrero de 2015 denegando la inscripción de la filiación solicitada porque, aunque existen indicios de la veracidad de los hechos declarados, especialmente en el caso del hermano menor por tenerse constancia del parte médico declarativo en el momento de su nacimiento, no concurre el requisito indispensable previsto en el artículo 49 de la Ley del Registro Civil de que no haya oposición de parte interesada, ya que varios hijos de la Sra. O. F. se han manifestado contrarios a la determinación de la filiación pretendida.

4. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando los promotores que existen pruebas fundadas de que al menos uno de los hermanos es hijo de la Sra. O. F. y que, habiendo fallecido ambos progenitores, es procedente la declaración de filiación materna mediante el expediente previsto en el artículo 49 de la Ley del Registro Civil, resultado acreditada, por otro lado, la posesión de estado de hijo de ambos recurrentes a través de la documentación aportada.

5. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil de Sevilla se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 113 y 120 del Código Civil (CC); 49 de la Ley del Registro Civil (LRC); 189 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones 3-1ª de diciembre de 1999; 15-1ª de enero, 21-2ª y 25 de febrero, 30 de septiembre y 14-5ª de noviembre de 2002; 2-4ª de febrero y 2-4ª de febrero de 2005; y 17-3ª de octubre de 2007; 26-6ª de noviembre de 2008; 15-5ª de septiembre de 2010; 18-56ª de julio de 2013 y 22-14ª de mayo de 2014.

II. En ausencia de reconocimiento formal, la filiación materna no matrimonial puede quedar determinada legalmente por expediente gubernativo cuando se prueba cumplidamente el hecho del parto y la identidad del hijo, también cuando exista escrito indubitado de la madre en que expresamente reconozca la filiación y, finalmente, cuando el hijo se halle en la posesión continua de estado de hijo. En dichos supuestos puede inscribirse la filiación en el Registro Civil por medio del expediente registral al que alude el artículo 120.3º CC y que regulan los artículos 49 LRC y 189 RRC. Pero para que prospere dicho expediente es necesario que se notifique personalmente a todos los interesados y que no se oponga a la petición ninguno de estos ni el ministerio fiscal.

III. A la vista de los anteriores requisitos, el presente expediente no puede prosperar, pues, como han señalado tanto el ministerio fiscal como el encargado del registro, aunque sí parece existir posesión de estado de hijo de ambos hermanos y, en relación

con uno de ellos, consta también el parte firmado por el facultativo que asistió al parto identificando a la mujer que dio a luz con los mismos datos proporcionados por los recurrentes, lo cierto es que el artículo 49 LRC exige, además, que no haya oposición (“siempre que no hubiera oposición”, es la expresión que emplea) del ministerio fiscal o de parte interesada notificada personal y obligatoriamente. En el presente caso, sin embargo, consta la oposición, al menos, de tres interesados, hijos del disuelto matrimonio de la Sra. Ortiz Ferrete y, por esa misma causa, también se ha opuesto el ministerio fiscal, lo que obliga a que la inscripción de la filiación materna haya de obtenerse por la vía judicial ordinaria (cfr. art. 49 LRC y 189 RRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Sevilla.

Resolución de 14 de octubre de 2016 (22ª)

I.2.1. Inscripción de filiación paterna

No procede la inscripción de filiación paterna atribuida a un ciudadano cubano distinto del exmarido de la madre por resultar dicha filiación afectada por la presunción de paternidad matrimonial del art. 116 CC, que no ha sido destruida.

En las actuaciones sobre determinación de filiación paterna en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana.

HECHOS

1. Mediante formulario presentado en el registro civil del consulado de España en La Habana el 4 de febrero de 2013, Dª Y.-C. B. B., mayor de edad y con doble nacionalidad cubana y española, solicitó la inscripción de nacimiento, previa opción a la nacionalidad española, de su hija L., entonces todavía menor de edad. Constan en el expediente los siguientes documentos: cuestionario de declaración de datos para la inscripción; carné de identidad e inscripción de nacimiento cubana de L. P. B., nacida en C. (Cuba) el 21 de julio de 1996, hija de la promotora y de Ó. P. Á.; carné de identidad cubano de este último; pasaporte español e inscripción de nacimiento española de la promotora con marginal de nacionalidad española por opción ejercitada el 8 de abril de 2009; certificación cubana de matrimonio celebrado el 2 de agosto de 1990 entre I. Y. B. y Y.-C. B. B. con marginal de divorcio por sentencia de 4 de diciembre de 1998 e inscripción de matrimonio en el registro civil español celebrado en Cuba el 6 de mayo de 2009 entre R. S. P. y Y.-C. B. B.

2. Una vez suscrita por madre e hija el acta de opción y previa declaración de consentimiento del Sr. Ó. P. Á., la encargada del registro consular dictó auto el 24 de abril de 2014 por el que se ordenaba la inscripción de nacimiento de la optante y su nacionalidad española pero exclusivamente con filiación y apellidos maternos por no considerar suficientemente acreditada su filiación paterna.

3. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la interesada, ya mayor de edad, que su filiación paterna consta claramente en la certificación de nacimiento local incorporada al expediente. Con el escrito de recurso se aportaba certificación de nacimiento cubana de un hermano de la recurrente nacido en 2002, tarjeta de residencia en España de la promotora, certificado de homologación de estudios y certificado de matrícula en un centro de enseñanza secundaria.

4. Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, se interesó la confirmación de la resolución recurrida. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 113 y 116 del Código Civil (CC); 386 de la Ley del Enjuiciamiento Civil (LEC); 2, 48 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 183, 184 y 185 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 2 de junio de 1981; y las resoluciones, entre otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3ª de abril y 20-4ª de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3ª de junio de 2003; 31-1ª de enero de 2004; 25-1ª de noviembre y 9-1ª de diciembre de 2005; 4-4ª de junio de 2007 y 9-4ª de julio de 2008; 25-3ª de febrero de 2009; 26-1ª de octubre de 2011; 1-2ª de junio y 23-36ª de agosto de 2012; 15-44ª de abril y 15-93ª y 95ª de noviembre de 2013; 22-9ª de enero y 12-30ª y 34ª de marzo de 2014.

II. Pretende la recurrente la inscripción en el Registro Civil español de su filiación paterna respecto de quien consta como progenitor en la certificación cubana de nacimiento. La madre de la solicitante se había casado anteriormente con otro ciudadano cubano del que se divorció más de dos años después del nacimiento de la hija, sin que conste incorporado al expediente documento alguno que acredite desde cuándo la pareja estaba separada de hecho. La encargada del registro ordenó la inscripción de la interesada únicamente con la filiación y los apellidos de la madre por no considerar suficientemente probada la filiación paterna que se pretende, dado que cuando la inscrita nació continuaba vigente el primer matrimonio de la madre, por lo que resulta aplicable la presunción de paternidad matrimonial del artículo 116 CC. Dicha decisión constituye el objeto del presente recurso.

III. La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna que debe figurar en la inscripción de nacimiento en España de la promotora cuando, constante el matrimonio de la madre, se declara que el padre de la nacida no es el marido, de quien se divorció

después, sino otro ciudadano cubano que figura como progenitor en la certificación local de nacimiento. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (art. 116 CC) queda o no destruida con las declaraciones formuladas y las pruebas aportadas.

IV. A estos efectos hay que tener en cuenta que, si la madre se había casado anteriormente y el nacimiento tuvo lugar constante el matrimonio, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 del Código civil, mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (cfr. art. 386 LEC).

V. En este caso, si bien la filiación paterna solicitada es la misma que figura en la certificación de nacimiento cubana de la interesada, lo cierto es que existió un matrimonio previo de la madre con otro hombre que continuaba vigente en el momento del nacimiento de la hija, sin que se hayan aportado pruebas que acrediten desde cuándo los cónyuges estaban separados de hecho. En definitiva, no pudiéndose comprobar la existencia de la separación previa, legal o de hecho, desde al menos trescientos días antes del nacimiento de la hija, de acuerdo con la legislación española aplicable, no es posible en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial respecto al exmarido. La mera declaración de los interesados negando tal filiación no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente para destruirla, de modo que la filiación paterna pretendida tendrá que intentarla la interesada bien por medio de un nuevo expediente gubernativo, siempre que se acredite convenientemente la existencia de separación del matrimonio al menos trescientos días antes de su nacimiento, o bien en la vía judicial ordinaria. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la práctica de una anotación marginal en la inscripción española, con valor meramente informativo, para hacer constar los apellidos de la inscrita conforme a su ley personal cubana (art. 38.3º LRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (32º)

I.2.1. Inscripción de filiación paterna

No procede la inscripción de filiación paterna atribuida a un ciudadano cubano distinto del exmarido de la madre por resultar dicha filiación afectada por la presunción de paternidad matrimonial del art. 116 CC, que no ha sido destruida.

En las actuaciones sobre determinación de filiación paterna en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por

la promotora contra auto dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana.

HECHOS

1. Mediante formulario presentado en el registro civil del consulado de España en La Habana el 24 de marzo de 2010, D^a M. M. F., mayor de edad y con doble nacionalidad cubana y española, solicitó la inscripción de nacimiento, previa opción a la nacionalidad española, de su hijo, entonces todavía menor de edad, A. V. M. Constan en el expediente los siguientes documentos: cuestionario de declaración de datos para la inscripción; tarjeta de identidad e inscripción de nacimiento cubana del interesado, nacido el 28 de abril de 1993, hijo de la promotora y de O. V. M.; carné de identidad e inscripción de nacimiento cubana de este último; pasaporte español e inscripción de nacimiento de la promotora con marginal de opción a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, ejercitada el 5 de marzo de 2009; certificación de marginales en la inscripción de nacimiento de la promotora según las cuales la inscrita contrajo matrimonio con S. F. A. el 28 de agosto de 1986, de quien se divorció por sentencia de 7 de septiembre de 1992, e inscripción en el registro civil español del matrimonio de la promotora con O. V. M. celebrado el 23 de abril de 1996.

2. Una vez suscrita el acta de opción por madre e hijo e incorporada al expediente acta de consentimiento del Sr. O. V. M., la encargada del registro consular dictó auto el 16 de junio de 2010 por el que se ordenaba la inscripción de nacimiento del entonces menor y su nacionalidad española pero exclusivamente con filiación y apellidos maternos por no considerar suficientemente acreditada su filiación paterna.

3. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado insistiendo la promotora en que el padre de su hijo es el ciudadano cubano que figura como tal en la certificación de nacimiento cubana.

4. Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, se interesó la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana ratificó la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 113 y 116 del Código Civil (CC); 386 de la Ley del Enjuiciamiento Civil (LEC); 2, 48 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 183, 184 y 185 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la circular de 2 de junio de 1981; y las resoluciones, entre otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3^a de abril y 20-4^a de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3^a de junio de 2003; 31-1^a de enero de 2004; 25-1^a de noviembre y 9-1^a de diciembre de 2005; 4-4^a de junio de 2007 y 9-4^a de julio de 2008; 25-3^a de febrero de 2009; 26-1^a de octubre de 2011; 1-2^a de junio y 23-36^a de agosto de 2012; 15-44^a de abril y 15-93^a y 95^a de noviembre de 2013; 22-9^a de enero y 12-30^a y 34^a de marzo de 2014.

II. Pretende la promotora la inscripción en el registro civil español de la filiación paterna de su hijo, nacido el 28 de abril de 1993, respecto de quien consta como progenitor en la correspondiente certificación cubana de nacimiento. La solicitante se había casado anteriormente con otro ciudadano cubano de quien se divorció el 7 de septiembre de 1992, sin que se haya acreditado documentalmente desde cuándo la pareja estaba separada de hecho. La encargada del registro ordenó la inscripción del hijo únicamente con la filiación y los apellidos de la madre por no considerar suficientemente probada la filiación paterna que se pretende, dado que, cuando el hijo nació, no había transcurrido el plazo señalado por el artículo 116 CC desde la disolución del primer matrimonio de la madre. Dicha decisión constituye el objeto del presente recurso.

III. La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna que debe figurar en la inscripción de nacimiento en España del hijo de la promotora cuando, no habiendo transcurrido en el momento del nacimiento al menos trescientos días desde el divorcio de la madre, se declara que el padre del nacido no es el primer marido sino otro ciudadano que figura como progenitor en la certificación cubana de nacimiento y con quien, posteriormente, también contrajo matrimonio la madre. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (art. 116 CC) queda o no destruida con las declaraciones formuladas y las pruebas aportadas.

IV. A estos efectos hay que tener en cuenta que, si la madre es casada y el nacimiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 del Código Civil, mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (cfr. art. 386 LEC).

V. En este caso, si bien la filiación paterna solicitada es la misma que figura en la certificación de nacimiento cubana del menor interesado, lo cierto es que existió un matrimonio previo de la madre con otro ciudadano cubano entre cuya disolución, el 7 de septiembre de 1992, y el nacimiento del hijo, el 28 de abril de 1993, aún no habían transcurrido los mencionados trescientos días. No habiéndose aportado prueba alguna que permita acreditar la existencia de separación previa, legal o de hecho, de la pareja, de acuerdo con la legislación española aplicable, no es posible en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial respecto al exmarido. La mera declaración de la promotora negando tal filiación no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente para destruirla, de modo que la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía de un expediente gubernativo y tendrá que intentarla la interesada en la judicial ordinaria o bien por medio de un nuevo expediente gubernativo siempre que se acredite previamente la existencia de separación de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento del hijo. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la práctica de una anotación marginal en la inscripción española, con valor

meramente informativo, para hacer constar los apellidos del inscrito conforme a su ley personal cubana (art. 38.3º LRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de octubre de 2016 (2ª)

I.2.1. Inscripción de filiación no matrimonial

1º. No procede la inscripción de nacimiento con filiación no matrimonial de un menor de 14 años, nacido en Colombia en el año 2012, porque no resulta acreditada al resultar dicha filiación afectada por la presunción de paternidad matrimonial respecto del marido de la madre, que no ha sido destruida.

2º. Una vez inscrita la filiación matrimonial derivada de la presunción del art. 116 CC, la determinación de una filiación distinta solo es posible a través de la vía judicial.

En las actuaciones sobre filiación en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra resolución dictada por el magistrado juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Mediante comparecencia en el Registro Civil de Órdenes (La Coruña) el 7 de diciembre de 2012, localidad de su domicilio, Doña M. G. C. R., mayor de edad, nacida en C. (Colombia) el 21 de agosto de 1992 y de nacionalidad española, obtenida por la opción del artículo 20.1.a del Código Civil con fecha 30 de junio de 2010, solicitaba autorización para optar a la nacionalidad española en nombre de su hijo, menor de 14 años, J. D. G. C. como hijo suyo y de don L. G. O., nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntaba la siguiente documentación: documento nacional de identidad español de la promotora, pasaporte colombiano del menor con visado expedido por el Consulado español en Bogotá válido hasta el 19 de mayo de 2013 y con entrada en España el 25 de noviembre de 2012, certificado de empadronamiento de la promotora en Ó., consentimiento del Sr. G. O. declarado ante notario en Colombia, certificado de nacimiento colombiano del menor, no consta el estado civil de los padres, ambos nacionales colombianos, y consta la firma del Sr. G. O. el apartado dedicado al reconocimiento paterno e inscripción de nacimiento en el registro civil español de la madre del menor, con marginal relativa a que su madre obtuvo la nacionalidad española por residencia con fecha 10 de junio de 2010 y la propia inscrita la obtuvo por la opción del artículo 20 del Código Civil con fecha 30 del mismo mes. El ministerio fiscal emite informe favorable a lo solicitado y con fecha 9 de enero de 2013 la

encargada del registro dicta auto concediendo la autorización solicitada, que fue rectificado mediante otro de fecha 15 de febrero siguiente en cuanto al segundo apellido de la promotora. Con fecha 21 de mayo de 2013 comparece la Sra. C. para ejercitar la opción. Posteriormente se remite la documentación al Registro Civil Central, competente en su caso para la inscripción.

2. El encargado del Registro Civil Central siendo conocedor de que la Sra. C. había contraído matrimonio con fecha 6 de septiembre de 2011 en el Registro Civil de La Coruña con un ciudadano colombiano, F. J. J. T., dictó providencia el 2 de abril de 2014, acordando que se notifique el expediente al precitado como esposo de la madre del menor, para que declare su conocimiento sobre la gestación y parto del menor y para que mediante declaración auténtica destruya en su caso la presunción de hijo matrimonial de éste, y que en su caso se lleve a cabo por la madre del menor y el Sr. G. O. el reconocimiento de éste como hijo común por alguno de los medios admitidos en derecho.

3. Con fecha 8 de mayo de 2014 comparece la promotora ante el Registro Civil de Órdenes declarando que aportará sentencia de divorcio o separación de su matrimonio, en su caso, que su marido cuando nació su hijo era el Sr. J. T., que el padre del menor es el Sr. G. O. domiciliado en M. (Colombia). El día 9 de mayo comparece de nuevo la Sra. C. y el Sr. J., declarando ambos que se encuentran separados de hecho desde finales del año 2012, sin haber reanudado su relación desde entonces y el Sr. J. declara no reconocer la paternidad del menor, J. D. Con fecha 13 de mayo comparece como testigo la Sra. R. M., abuela materna del menor, declarando que cuando contrajo matrimonio su hija se encontraba embarazada y que le manifestó que el padre era su marido, viajando su hija a Colombia sin la compañía de su marido para que el niño naciera allí, que a los tres meses del nacimiento su hija le manifestó que el padre del menor no era su marido, que éste se había dado cuenta y que no quería hacerse cargo del mismo, añadiendo que el padre era L. G. O., residente en Colombia y al que conocía hace tiempo, por último con fecha 27 de mayo siguiente comparece como testigo la Sra. O. D., amiga del marido de la promotora, declarando que le consta que el Sr. J. vive separado de su esposa desde principios del año 2012, después de que naciera el niño, J., que sabe que éste nació en Colombia y que cuando volvió con la madre a España le dijeron al Sr. J. que el niño no era suyo y se separaron, no volviendo a reanudar su relación.

4. Con fecha 20 de mayo de 2014 la encargada del Registro Civil de Órdenes dicta providencia acordando devolver el expediente al Registro Civil Central al no haberse podido llevar a cabo la comparecencia para el reconocimiento del menor por parte del Sr. G. al residir éste en Colombia. Posteriormente el ministerio fiscal emite informe en el sentido de que no ha quedado destruida la presunción de paternidad matrimonial del menor y en el mismo sentido, con fecha 25 de agosto siguiente, el encargado dicta auto acordando que procede la inscripción de nacimiento del menor, hijo de ciudadana española, con la filiación paterna matrimonial, sin perjuicio de impugnación de la misma y determinación de la filiación pretendida en la vía jurisdiccional ordinaria.

5. Notificada la resolución, la promotora interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, declarando que su marido y ella se separaron a finales del año 2012, que el menor fue inscrito en Colombia por el padre, reconociendo éste su paternidad, adjunta documentos nuevos como certificados de empadronamiento de ella y su marido en L. C. en domicilios diferentes, él en el suyo desde septiembre de 2013 y ella en otro desde septiembre de 2014, cédula de ciudadanía colombiana del Sr. G. y documento notarial colombiano recogiendo las manifestaciones del Sr. G. O. el 12 de diciembre de 2014 relativas a que es el padre del menor J. D. G. R. y que se hace cargo de la paternidad.

6. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, que considera procedente confirmar por sus propios fundamentos el acuerdo impugnado. El encargado del registro civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso. Consta a este centro directivo inscripción literal del matrimonio de la madre del menor y el Sr. J. T., con marginal de que se ha disuelto mediante divorcio acordado en sentencia de 4 de junio de 2015, firme el 18 de junio siguiente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 113, 116, 134 y 136 del Código Civil; 183 del Reglamento del Registro Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); la circular de 2 de junio de 1981, y las resoluciones, entre otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3ª de abril y 20-4ª de septiembre de 2002; 17 de abril y 25-3ª de junio de 2003; 31-1ª de enero de 2004; 25-1ª de noviembre y 9-1ª de diciembre de 2005; 4-4ª de junio de 2007 y 9-4ª de julio de 2008.

II. Se pretende la atribución de filiación paterna no matrimonial a un menor nacido en Colombia en enero del año 2012, hijo de ciudadana española de origen colombiano, asegurando que, a pesar de que la madre estaba casada con otro hombre en el momento del nacimiento de su hijo, el marido, con quien contrajo matrimonio en septiembre de 2011 y de quien se encuentra separada de hecho desde finales del año 2012, no es el padre. El encargado del registro, sin embargo, ordenó la práctica de la inscripción con filiación matrimonial por no considerar destruida la presunción de paternidad del art. 116 CC.

III. La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna y, en consecuencia, los apellidos que deben figurar en la inscripción de nacimiento de un menor cuando, constante el matrimonio de la madre celebrado antes del nacimiento, se declara que el nacido no es hijo del marido sino de otro ciudadano. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (art. 116 CC) queda o no destruida con las declaraciones formuladas y pruebas aportadas.

IV. A estos efectos hay que tener en cuenta que, si la madre es casada y el alumbramiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la presunción de paternidad

del marido de la madre del artículo 116 del Código Civil mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (cfr. art. 386 LEC).

V. En este caso no se ha aportado ninguna prueba que permita acreditar la existencia de separación de hecho de los cónyuges antes del nacimiento del hijo, al contrario ambos cónyuges declaran que se separaron a finales del año en el que el menor nació, no produciéndose el divorcio hasta junio del año 2015, cuando el menor tenía 3 años, por lo que, de acuerdo con la legislación aplicable, no es posible en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial. La mera declaración de los interesados carece de carácter objetivo y de virtualidad como prueba con fuerza suficiente para destruir la presunción de paternidad matrimonial, de modo que la filiación pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía del expediente gubernativo y tendrán que intentarla los recurrentes en la judicial ordinaria. Por otra parte, aunque la circular de 2 de junio de 1981 de la DGRN sobre régimen legal de la filiación contempla la posibilidad de que, ante una declaración de filiación contradictoria con la que se deriva de la presunción matrimonial del art. 116 CC, no se haga constar la filiación paterna del marido en la inscripción solicitada dentro de plazo cuando la presunción deje de existir a la vista de la declaración auténtica del marido, que en este caso comparece en vía de recurso a través de una declaración ante notario en Colombia país de su residencia, de la declaración de la madre y de las demás diligencias probatorias de la calificación, el encargado del registro en este caso, sin realizar más prueba complementaria que la toma de declaración a dos testigos que tampoco corroboraron suficientemente la paternidad declarada del ciudadano colombiano, ya que se contradijeron en cuanto al momento de separación del matrimonio y lo que conocían respecto a la paternidad del menor era por la información que habían recibido de los miembros de la pareja optó por practicar la inscripción atribuyendo la paternidad al marido, de manera que, una vez realizado el asiento, que hace fe de la filiación del inscrito (art. 41 LRC), de acuerdo con la legislación aplicable no es posible ya en esta instancia dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial y la filiación pretendida tendrán que intentarla los interesados en la vía judicial ordinaria.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

II NOMBRES Y APELLIDOS

II.1 IMPOSICIÓN DEL NOMBRE PROPIO

II.1.1 IMPOSICIÓN DEL NOMBRE PROPIO, PROHIBICIONES

Resolución de 7 de octubre de 2016 (48ª)

II.1.1. Imposición nombre propio. Prohibiciones

Es admisible la imposición de “lakes” como nombre propio apto para varón porque no incurre en ninguna de las limitaciones del art. 54 LRC.

En las actuaciones sobre imposición de nombre remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra la calificación de la encargada del Registro Civil de Getxo (Bizkaia).

HECHOS

1. Mediante formulario cumplimentado el 21 de noviembre de 2014 en el Registro Civil de Getxo (Bizkaia), don I. A. B. y doña G. S. L., ambos firmantes de la solicitud y con domicilio en la misma localidad, solicitaban la inscripción de nacimiento de su hijo, nacido dos días antes, con el nombre de lakes. Consta en el expediente la siguiente documentación: DNI de los progenitores, certificado de empadronamiento, copia de la edición de 1972 del nomenclátor onomástico vasco en la que se incluye el nombre con la grafía solicitada y libro de familia de los padres del progenitor donde consta el nacimiento de un hijo en 1983 llamado J.-lakes.

2. La encargada del registro dictó auto el 28 de noviembre de 2014 denegando la inscripción en la forma solicitada alegando que actualmente la Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca) no admite dicha grafía, siendo Jakes la correcta para el nombre elegido.

3. Practicada la inscripción, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la calificación efectuada insistiendo los progenitores en su pretensión inicial alegando que, si bien la Euskaltzaindia ha modificado su criterio, en ediciones anteriores del diccionario onomástico sí admitía expresamente la grafía solicitada, tal como se acredita con la aportación de una copia del mencionado documento, y que el propio Registro Civil de Getxo la admitió para el hermano del recurrente, nacido en 1983.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación por considerar que el nombre pretendido incurría en una de las prohibiciones del art. 54 al perjudicar objetivamente a la persona. La encargada del Registro Civil de Getxo remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC); 192 y 193 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de marzo, 21-5ª de abril, 31-232ª de julio y 29-34ª de diciembre de 2014 y 2-46ª de octubre de 2015.

II. Los recurrentes solicitaron que se practicara la inscripción de nacimiento de su hijo atribuyéndole el nombre de Jakes. La encargada del registro denegó la inscripción del nombre con la grafía solicitada alegando que, actualmente, la forma correcta, según la Euskaltzaindia, es únicamente Jakes, nombre con el que finalmente se practicó la inscripción, recurriendo a continuación los progenitores la calificación efectuada.

III. El nombre solicitado fue rechazado porque no se acomoda a la grafía declarada actualmente correcta por la Euskaltzaindia tras las modificaciones realizadas por dicha institución en su labor de normalización de la lengua vasca. Los recurrentes alegan que, aunque las normas lingüísticas hayan cambiado, lo cierto es que la grafía pretendida sí se consideraba admisible en ediciones anteriores del diccionario onomástico de la misma institución y que, de hecho, un familiar muy cercano del nacido tiene atribuido Jakes como segundo nombre en el mismo registro. Se trata pues en este caso de la imposición inicial de un nombre al nacido, no de una sustitución del ya inscrito, no pudiendo ser rechazado el elegido –ya se trate de un nombre en cualquiera de las lenguas españolas, extranjero o incluso uno de los denominados “de fantasía”– más que cuando claramente infrinja alguna de las prohibiciones del artículo 54 LRC, que han de ser interpretadas siempre de forma restrictiva. Así, al margen de la adecuación o no de la grafía propuesta a la lengua vasca en virtud de las actuales directrices lingüísticas, lo cierto es que el nombre en la forma pretendida no vulnera ninguna de las prohibiciones legales, pues no puede afirmarse, como sostiene en su informe el ministerio fiscal, que aquella “perjudique objetivamente” al nacido (el mismo informe admite que la incorrección ortográfica solo es evidente para el vasco parlante y, a juzgar por los antecedentes aportados, parece que ni siquiera lo sería para el conjunto de ellos) y, por otro lado, se ha podido comprobar a través de las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística que, aunque con muy escasa frecuencia, el nombre discutido figura atribuido a otras personas en la misma comunidad autónoma, todas ellas, eso sí, de edad varios años superior a la del menor interesado. Por ello debe considerarse admisible el nombre propuesto, de forma similar a lo que ocurriría con uno de los llamados nombres “de fantasía” o que se pretendiera inscribir en cualquier grafía antiguamente válida aunque no de uso corriente en la actualidad. Cosa distinta sería, pues no concurriría entonces justa causa, la pretensión de sustituir un nombre correctamente inscrito (Jakes, en este

caso) por una variante obsoleta que, si bien figuró admitida en ediciones anteriores relativas a la onomástica en lengua vasca, actualmente no se considera acorde con la norma lingüística establecida oficialmente por la misma institución.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar la imposición de lakes como nombre propio apto para designar a un varón.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Getxo (Bizkaia)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (51ª)

II.1.1. Imposición nombre propio. Prohibiciones

Es admisible “Palmera” como nombre propio apto para mujer.

En las actuaciones sobre imposición de nombre remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra la calificación de la encargada del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria.

HECHOS

1. Mediante formulario presentado el 19 de marzo de 2015 en el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria, don R. R. M. y doña A.-E. A. A. solicitaban la inscripción de nacimiento de su hija, nacida en la misma localidad el de 2015, con el nombre de Palmera. Consta en el expediente DNI de los progenitores, formulario de declaración de datos para la inscripción y borrador del asiento registral con el nombre pretendido firmado por los solicitantes.
2. La encargada del registro dictó providencia el 20 de marzo de 2015 denegando la inscripción con el nombre solicitado por entender que el vocablo elegido no tiene entidad suficiente para ser considerado nombre de persona, pudiendo resultar perjudicial para la menor, e instando a los progenitores a designar un nombre alternativo para su hija.
3. Notificada la resolución, los interesados solicitaron la práctica de la inscripción con el nombre de Martina al tiempo que interponían recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) contra la calificación efectuada insistiendo en su pretensión inicial alegando que el nombre solicitado no contraviene ninguna de las prohibiciones legales, las cuales, además, han de ser interpretadas de forma restrictiva; que llamaban así a su hija mucho antes de producirse el nacimiento; que no cabe considerar que, objetivamente, el nombre elegido pueda resultar perjudicial para la persona que lo lleve ni por su origen histórico-bíblico (sostienen que es la traducción del nombre hebreo “Tamar”, presente en el Antiguo Testamento) ni por su origen geográfico (hay un municipio así llamado) ni por su significado en el terreno de

la botánica y que la Circular de la DGRN de 2 de julio de 1980 estableció el principio general de libertad de los padres para imponer al nacido el nombre que consideren más conveniente, que solo podrá ser rechazado cuando claramente incurra en alguna de las prohibiciones legales, e incluyó en la categoría de nombres admisibles, entre otros, cualquier nombre abstracto, común o de fantasía que no induzca a error en cuanto al sexo, habiendo sido admitidos hasta el momento numerosos nombres, en principio comunes, de flores y plantas. Con el escrito de recurso adjuntaban varios documentos hospitalarios y administrativos relativos a su hija en los que esta figura identificada como Palmera R. A.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria emitió informe ratificándose en su decisión y añadiendo que, a su juicio, el nombre objeto de recurso no es apropiado y puede resultar perjudicial para la menor por ser indicativo de la pertenencia a una localidad (La Palma, concretamente), al igual que “aragonesa”, “leonesa” o “gaditana”, y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC); 192 y 193 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones 25-2ª de septiembre y 21-1ª de octubre de 2003, 17-3ª de noviembre de 2004, 4-1ª de enero, 13-3ª de abril y 16-3ª de junio de 2005, 23-1ª de marzo y 26-3ª de diciembre de 2006, 16-4ª de abril, 8-3ª de mayo y 8-1ª de noviembre de 2007, 17-3ª de septiembre de 2009 y 15-75ª de noviembre de 2013, 11-18ª y 30-10ª de diciembre de 2015.

II. Los recurrentes solicitaron que se practicara la inscripción de nacimiento de su hija atribuyéndole el nombre de Palmera. La encargada del registro no admitió el nombre elegido porque consideró que no tenía entidad suficiente para ser utilizado como nombre de persona y podía resultar perjudicial para la menor. La calificación fue recurrida alegando los progenitores que el nombre solicitado no contraviene ninguna de las prohibiciones del artículo 54 LRC y no puede considerarse que, objetivamente, perjudique a la persona.

III. El nombre solicitado fue rechazado, por tanto, al considerar la encargada del registro que infringía el artículo 54 LRC porque podría resultar perjudicial para la inscrita al considerar que es susceptible de confusión con el gentilicio de una localidad canaria. El veto parece referirse pues a la prohibición de imponer “nombres que objetivamente perjudiquen a la persona”, si bien, a partir de la aclaración contenida en el informe posterior a la presentación del recurso, también cabe que se haya tenido en cuenta la mención del mismo artículo 54 LRC relativa a los nombres que hagan confusa la identificación. En realidad, el nombre discutido en este caso corresponde a un vocablo polisémico (además de un gentilicio, como indica la encargada, su significado remite de forma principal a otros conceptos) y, si bien es evidente que no se trata de un nombre de uso corriente ni ampliamente conocido, tampoco puede

afirmarse que, “objetivamente” (como literalmente señala el art. 54 LRC), perjudique a la persona, puesto que en ninguna de sus acepciones remite de modo inequívoco e inmediato a una idea de connotación denigrante, ofensiva o siquiera inconveniente, sino más bien al nombre de un árbol, debiendo recordarse a este respecto que ya la Circular de la DGRN de 2 de julio de 1980 declaró expresamente admisible esta categoría de nombres. Por otra parte, por su morfología, resulta adecuado para mujer y no se observa riesgo alguno de confusión ni en cuanto al sexo de la inscrita ni en virtud de ninguna otra causa. Finalmente, ha de reiterarse que las prohibiciones en materia de imposición de nombres deben ser interpretadas siempre de forma restrictiva.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar la imposición de Palmera como nombre propio apto para designar a una mujer.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (52ª)

II.1.1. Imposición nombre propio. Prohibiciones.

Es admisible “Noa” como nombre propio ambiguo apto para varón porque no es inequívocamente femenino.

En las actuaciones sobre imposición de nombre remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra resolución de la encargada del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1. Mediante formulario presentado el 7 de abril de 2015 en el Registro Civil de Madrid, don J. M. G. y doña E.-D.-R. O. S. solicitaron la inscripción de nacimiento de su hijo, nacido el de 2015, con el nombre de Noa.
2. La encargada del registro dictó providencia el mismo día denegando la inscripción con el nombre en la forma solicitada por entender que se trata, inequívocamente, de un nombre de mujer que induciría a error en cuanto al sexo del inscrito y requiriendo a los padres para designar un nombre alternativo.
3. En comparecencia ante el registro, el progenitor solicitó que la inscripción se practicara con el nombre de Noah, a la vez que presentaba recurso contra la calificación efectuada alegando que el nombre pretendido inicialmente es válido para un varón y que en Francia, país del que es nacional la madre del nacido, se permite su imposición.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Madrid se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC), 192 y 193 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 23-2ª de julio de 2004, 4-1ª de enero y 16-3ª de junio de 2005, 26-3ª de diciembre de 2006, 16-4ª de abril y 8-3ª de mayo de 2007, 17-3ª de septiembre de 2009, 21-80ª de junio y 15-75ª de noviembre de 2013, 13-61ª de febrero y 30-10ª de diciembre de 2015.

II. Los recurrentes solicitaron que se practicara la inscripción de nacimiento de su hijo atribuyéndole el nombre de Noa, si bien, ante la negativa de la encargada del registro, que consideró que el nombre elegido es propio de mujer e induce a confusión en cuanto al sexo del nacido, consintieron en que se practicara la inscripción con el nombre de Noah que, según la encargada, sí es masculino, pero recurriendo a continuación la calificación efectuada.

III. El nombre solicitado fue rechazado, por tanto, al considerar la encargada del registro que infringía una de las normas del artículo 54 por ser un nombre femenino que, en consecuencia, puede inducir a error en cuanto al sexo del inscrito. Sin embargo, esta limitación ha de ceñirse exclusivamente a aquellos casos en los que el nombre elegido remita inequívocamente al sexo opuesto al del nacido, pues las prohibiciones en esta materia han de ser interpretadas siempre de forma restrictiva. Desde esta perspectiva, la prohibición de imponer nombres que induzcan a error cuanto al sexo podría invocarse, a modo de ejemplo, para rechazar la imposición de “Santiago” para una niña o “Marta” para un niño, pero no debe extenderse a nombres que resultan ambiguos para uno u otro sexo. Así, aunque el nombre pretendido en este caso, de origen extranjero pero relativamente frecuente en nuestro país desde hace algunos años, es mayoritariamente utilizado en España como propio de mujer, lo cierto es que, según las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, también figura atribuido a varones, aunque en número mucho menor pero en proporción similar a lo que sucede con otros nombres tradicionales en España susceptibles de ser atribuidos a hombre o a mujer como Trinidad, Guadalupe o Rosario. Por otro lado, se ha constatado que en países extranjeros también se utiliza indistintamente para uno y otro sexo, en proporción variable según el país de que se trate, e incluso en algún caso – significativamente en Francia, país del que es nacional la madre del inscrito– parece que el número de hombres que llevan el nombre de Noa es superior al de mujeres. Al hilo de esta circunstancia, es pertinente recordar asimismo el caso de algún nombre que en España se considera propio de mujer mientras que en otro país de nuestro entorno, con la misma forma, es un nombre masculino (caso de Andrea, por ejemplo, que en Italia es un nombre de varón muy común), lo que ha supuesto que en ciertas ocasiones haya resultado conveniente variar doctrina anterior de este centro para

adaptarla a los cambios que se van produciendo en nuestra sociedad a partir de fenómenos tan determinantes como las migraciones o la libre circulación de ciudadanos comunitarios. Finalmente, y en consonancia con lo hasta ahora expuesto, lo que no cabe es atribuir a la presencia de una “h” final, que no se pronuncia, en la grafía del nombre cuestionado entidad suficiente como para determinar, en el ámbito sociológico de nuestro país (no se olvide que se trata de un nombre de origen extranjero), la condición inequívocamente masculina de quien lo ostenta en contraposición con la versión sin ese carácter gráfico que, según la calificación realizada, sería inequívocamente femenina. Por todo ello, se considera admisible Noa –al igual que ya se ha declarado en relación con Noah en resolución de 13(61ª) de febrero de 2015)– como un nombre ambiguo, apto para hombre o mujer, que no incurre en ninguna de las prohibiciones del art. 54 LRC.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar la imposición de Noa como nombre propio apto para designar a un varón.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Madrid

II.2 CAMBIO DE NOMBRE

II.2.2 CAMBIO DE NOMBRE, JUSTA CAUSA

Resolución de 14 de octubre de 2016 (20ª)

II.2.2. Cambio de nombre y nueva inversión de apellidos

No hay justa causa para autorizar un cambio de nombre y una nueva inversión de apellidos cuando el inscrito, siendo mayor de edad, ya había solicitado y obtenido anteriormente tanto la inversión de apellidos como el cambio de nombre.

En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre e inversión de apellidos en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Valencia.

HECHOS

1. Mediante comparecencia el 7 de enero de 2015 en el Registro Civil del Juzgado de Paz de S. (Valencia), Don Gusé R. V., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba el cambio de su nombre por José, así como la inversión de sus apellidos para que vuelvan al orden original alegando motivos de reconciliación familiar. Consta en el expediente la siguiente documentación: certificado de

empadronamiento, DNI e inscripción de nacimiento de José V. R. (asiento original), nacido en Valencia el 3 de enero de 1947, con marginal de 20 de enero de 2006 de cambio de nombre a petición del inscrito por Gusé e inversión del orden de los apellidos, que pasan a ser R. V.

2. La encargada del registro dictó auto el 21 de enero de 2015 denegando el cambio propuesto porque, en virtud del principio de estabilidad del estado civil y salvo casos excepcionales, tanto el cambio de nombre como la inversión de apellidos, son facultades que se pueden ejercitar una sola vez.

3. Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el interesado que el cambio anterior provocó gran malestar en sus hijos, especialmente en uno de ellos con el que se quebró toda relación, razón por la cual, en aras del restablecimiento de la armonía familiar, solicita este nuevo cambio para volver a ostentar su nombre y apellidos originales.

4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó la confirmación de la resolución recurrida. La encargada del Registro Civil de Valencia se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 109 del Código Civil (CC); 54, 55 y 60 de la Ley de Registro Civil; 192, 198 y 206 del Reglamento de Registro Civil y las resoluciones, entre otras, 19-2ª de enero y 8-4ª de septiembre de 2001; 25-2ª de marzo, 13-1ª y 25-5ª de junio de 2002; 22-1ª de septiembre de 2003; 4-4ª de febrero y 22-2ª de noviembre de 2004; 18-1ª de enero, 24-1ª de febrero y 8-3ª de junio de 2006; 9-1ª de marzo y 21-5ª de septiembre de 2007; 26-4ª de marzo, 6-1ª de mayo, 4-6ª de septiembre, 5-1ª de noviembre, 26-3ª y 30-2ª de diciembre de 2008; 7-5ª de enero 2-6ª y 10-3ª de marzo de 2009; 5-1ª de marzo, 12-2ª y 3ª de mayo de 2010; 28-31ª de junio y 2-108ª de septiembre de 2013; 4-144ª de septiembre y 28-131ª de octubre de 2014; 17-54ª de abril y 4-56ª de diciembre de 2015.

II. Solicita el promotor el cambio del nombre y apellidos que constan actualmente en su inscripción de nacimiento por los originales cuya modificación él mismo solicitó en 2006 alegando que aquel cambio no fue aceptado por sus hijos, especialmente por uno de ellos, y provocó la ruptura de la relación familiar, situación que pretende revertir recuperando su nombre y apellidos originales. La encargada denegó la pretensión por considerar que tanto el cambio de nombre como la inversión de apellidos son facultades susceptibles de ser ejercitadas por una sola vez.

III. Tanto la sustitución del nombre por su equivalente en cualquiera de las lenguas españolas como la inversión del orden de los apellidos de los mayores de edad requieren únicamente la declaración de voluntad del interesado ante el encargado del registro civil pero son facultades cuyo ejercicio está previsto para una sola vez, de manera que, así obtenido el cambio, no es posible, salvo casos excepcionales, que por

el mismo camino se deje sin efecto o se obtenga un nuevo cambio en comparecencia posterior, pues ello entraría en abierta contradicción con el principio de estabilidad que, para cumplir eficazmente su labor de identificación e individualización de las personas, se atribuye al nombre y a los apellidos, los cuales se encuentran, por esa razón, sustraídos del juego de la autonomía de la voluntad de los particulares. Cabe recordar, en consonancia con el contenido del artículo 7.2 del Código Civil, que la ley no ampara el abuso del derecho y el Registro Civil no puede estar al albur de una injustificada y variable voluntad de los ciudadanos.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Valencia.

Resolución de 21 de octubre de 2016 (34ª)

II.2.2. Cambio de nombre propio

1º) *Hay justa causa para cambiar Ignacio por Íñigo.*

2º) *No puede autorizarlo el encargado del registro civil del domicilio si no se acredita suficientemente la habitualidad en el uso del nombre solicitado pero lo concede la DGRN por economía procesal y por delegación.*

En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

HECHOS

1. Mediante escrito presentado el 16 de marzo de 2015 en el Registro Civil de Tudela (Navarra), don Ignacio A. N., mayor de edad y con domicilio en C., solicitaba el cambio del nombre que consta en su inscripción de nacimiento por Íñigo, alegando que es este el que utiliza habitualmente y por el que es conocido. Adjuntaba los siguientes documentos: DNI e inscripción de nacimiento del promotor en C. el 14 de marzo de 1964, certificado de empadronamiento, tarjetas de visita profesionales y dos artículos del Diario de Navarra referidos al solicitante.

2. Previa comparecencia de dos testigos e informe favorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 31 de marzo de 2015 denegando el cambio de nombre propuesto por falta de justa causa.

3. Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) alegando el interesado que su solicitud cumple los presupuestos legales e insistiendo en que el nombre pretendido, totalmente distinto

del atribuido en el registro y que no es ni traducción ni diminutivo ni forma coloquial de Ignacio, es el que utiliza desde hace años y por el que se le conoce en todos los ámbitos.

4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, se adhirió a la pretensión. El encargado del Registro Civil de Tudela se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil (LRC); 206, 209, 210, 218, 354 y 365 del Reglamento de Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 19-7ª y 21-1ª de junio de 2001; 18-1ª de mayo de 2002; 26-2ª de octubre de 2004; 4 de marzo y 10-3ª de abril de 2006; 8-6ª de mayo y 7-6ª de diciembre de 2007; 1-4ª y 27-5ª de febrero, 2-2ª de julio y 3-1ª de septiembre de 2008; 18-4ª de junio de 2010; 18-9ª de marzo y 25-7ª de enero de 2011; 15-22ª de noviembre y 20-66ª de diciembre de 2013; 30-47ª de enero, 20-104ª de marzo, 21-24ª y 30-8ª de abril de 2014 y 17-71ª de abril de 2015.

II. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º y 365 del RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y no haya perjuicio para tercero (cfr. 210 del RRC).

III. En este caso, ni siquiera se ha entrado a valorar la realidad de ese uso habitual, pues el encargado denegó la pretensión por no apreciar en ella la concurrencia del presupuesto general de la justa causa, si bien la resolución resulta confusa y no está claro cuál sea la razón última de la decisión en tanto que, por un lado parece basarse en que se trata de una modificación mínima del nombre actual mientras que, a continuación, reconoce que el nombre solicitado es completamente distinto del actualmente consignado. Pues bien, en efecto, Ignacio e Íñigo son nombres distintos y es evidente que, más allá de que ambos compartan algunos signos gráficos, la sustitución del primero por el segundo supone una modificación sustancial.

IV. Sin embargo, lo que no parece suficientemente acreditado en la solicitud, aunque la resolución no entra a valorar este extremo, es la habitualidad en el uso, dada la parquedad de las pruebas presentadas (unas tarjetas de visita y dos artículos periodísticos fechados solo unos días antes de iniciar el expediente, lo que no permite apreciar la existencia de una situación de uso consolidado y mantenido en el tiempo). Y cuando no se prueba la habitualidad en el uso del nombre solicitado, la competencia excede de la atribuida al encargado del registro y corresponde al ámbito general del Ministerio de Justicia (arts. 57 LRC y 205 RRC) y hoy, por delegación (Orden JUS/696/2015, de 16 de abril), a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

V. En consecuencia, conviene examinar ahora si la pretensión planteada puede ser acogida por esta vía, dado que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del ministerio ante el registro civil del domicilio (art 365

RRC). Razones de economía procesal aconsejan ese examen, ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa (cfr. 354 del RRC) exigir la reiteración formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

VI. Desde esta perspectiva, aunque, como se ha dicho, las pruebas presentadas no justifican el uso habitual del nombre pretendido, sí cabe considerar que constituyen un indicio razonable de la existencia de ese uso, lo que unido al hecho de que el nombre solicitado no incurre en ninguna de las prohibiciones legales y no perjudica a tercero, permite autorizar el cambio propuesto por estimarse cumplidos los requisitos específicos exigidos para la modificación (art. 206.3º RRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Estimar el recurso y revocar la resolución apelada.

2º. Autorizar, por delegación del ministro de Justicia (Orden JUS/696/2015, de 16 de abril) el cambio de nombre del interesado por Íñigo, no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme a lo que dispone el art. 218 del Reglamento de Registro Civil. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones ordenadas por el art. 217 del mismo reglamento.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (38ª)

II.2.2. Cambio de nombre

No hay justa causa para cambiar "Abrahán" por "Abraham".

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife.

HECHOS

1. El 17 de marzo de 2015 don Abrahán-S. D. H., nacido el 1 de julio de 1981 en S. C. T., comparece en el Registro Civil de dicha población al objeto de promover expediente gubernativo de cambio del nombre inscrito por Abraham-S. exponiendo que este último es el que viene usando habitualmente en todos los actos de su vida social y acompañando certificación literal de inscripción de nacimiento, copia simple de DNI y, con el nombre solicitado, certificado de bautismo, certificado de empadronamiento y residencia en S. C. T. y copia simple de carné universitario.

2. Ratificado el promotor en el escrito presentado, se tuvo por promovido el oportuno expediente, comparecieron como testigos la madre y la pareja del solicitante, que manifestaron que este siempre ha usado el primero de sus nombres acabado en “m” y que así es conocido en todos los ámbitos de su vida familiar y social, el ministerio fiscal informó que a través de la prueba aportada no ha quedado acreditada la concurrencia de los requisitos y presupuestos necesarios y el 27 de marzo de 2015 la juez encargada, invocando la doctrina de la dirección general sobre las modificaciones de escasa entidad, dictó auto disponiendo denegar el cambio de nombre solicitado.

3. Notificada la resolución al ministerio fiscal y al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, tras documentarse sobre las raíces del nombre, de origen hebreo, inició el expediente para corregir en documentos como el DNI y el carné de conducir lo que considera una falta gramatical que le ha ocasionado diferentes conflictos administrativos.

4. De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la desestimación del recurso y la consiguiente confirmación de la resolución impugnada, y el juez encargado informó que se remite a lo detallado en el auto apelado y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 205, 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 14-1ª de marzo de 1995, 10-2ª de octubre de 1996; 10-5ª de febrero, 17-1ª y 30-2ª de mayo y 8-6ª de septiembre de 1997; 7-5ª y 17-1ª de febrero y 20-5ª de octubre de 1998, 18-2ª de febrero y 29-5ª de marzo de 1999, 18-3ª de julio de 2000, 19-5ª de junio de 2001, 7-2ª de febrero y 20-1ª de marzo de 2002, 30-3ª de septiembre y 8-2ª, 14-4ª y 22-2ª de octubre de 2003; 3 de enero, 13-1ª de abril, 18-2ª de septiembre, 9-3ª y 4ª de noviembre y 10-1ª de diciembre de 2004; 13-1ª de abril, 10-1ª y 2ª de junio, 18-3ª de julio y 22 de octubre de 2005; 1-2ª de febrero, 2-5ª de marzo, 7-3ª de junio, 7-5ª de julio, 24-1ª de octubre y 16-3ª de noviembre de 2006; 2-2ª de enero, 11-2ª de mayo, 3-7ª de julio, 3-3ª, 7-1ª, 18-4ª y 25-5ª de octubre y 11-5ª, 17-1ª y 20-1ª de diciembre de 2007; 21-1ª de febrero, 22-6ª de abril, 23-6ª y 7ª de mayo y 16-5ª de septiembre de 2008; 19-5ª de enero y 11-3ª de febrero de 2009, 13-2ª de mayo y 14-17ª de diciembre de 2010, 20-3ª de enero y 13-3ª de mayo de 2011; 18-2ª de febrero, 15-53ª de abril, 21-22ª, 27-4ª y 28-7ª de junio, 18-53ª de julio y 11-149ª y 20-65ª de diciembre de 2013; 10-38ª de enero, 10-4ª y 8ª de febrero, 13-17ª y 20-98ª de marzo, 21-19ª de abril, 9-40ª y 24-113ª de junio, 9-14ª de julio y 1-30ª de octubre de 2014 y 29-15ª de mayo, 5-40ª de junio 3-44ª de julio, 28-16ª de agosto, 2-42ª, 9-44ª y 30-20ª de octubre y 18-35ª de diciembre de 2015.

II. Uno de los requisitos exigidos para el cambio de nombre propio, sea en expediente de la competencia del encargado del Registro Civil del domicilio o de la general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC

y 206, III y 210 RRC) y es doctrina constante de la dirección general que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, es objetivamente mínima e intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.

III. Siendo evidentemente modificación mínima la sustitución de la consonante final por otra que, en esa posición, no produce variación fonética apreciable, la antedicha doctrina es de directa aplicación a este caso, en el que se pretende cambiar “Abrahán” por “Abraham”, y no cabe exceptuarla por razones de índole ortográfica puesto que, aunque el promotor alega en el recurso que considera que hay una falta gramatical en la grafía del nombre inscrita, consta que en España miles de varones lo ostentan en esa forma.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife.

Resolución de 28 de octubre de 2016 (13ª)

II.2.2. Cambio de nombre

No hay justa causa para autorizar un cambio de nombre cuando la persona inscrita, siendo mayor de edad, ya había solicitado y obtenido el cambio del nombre impuesto inicialmente.

En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Vilanova i la Geltrú.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado (no consta fecha) en el Registro Civil de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Don Noel R. R., mayor de edad, nacido en O. y con domicilio en S., promovió expediente de rectificación de la mención relativa al sexo en su inscripción de nacimiento para hacer constar que es hombre y no mujer, solicitando al mismo tiempo el cambio de su nombre actual por Tom y la práctica de una nueva inscripción cancelándose la anterior. Consta en el expediente la siguiente documentación: certificado de empadronamiento, DNI e inscripción de nacimiento de Beatriz R. R. (cuerpo principal del asiento), nacida en O. el 12 de marzo de 1995, con marginal de 21 de mayo de 2013 de cambio del nombre inscrito por Noel por uso habitual.

2. Requerido, a instancia de la encargada, para comparecer ante el registro, el interesado declaró que cuando inició el tratamiento para el cambio de sexo su psicóloga le había recomendado que se cambiara el nombre por uno ambiguo que pudiera ser tanto femenino como masculino, dado que aún se requerían dos años más para poder rectificar la mención de sexo. Por ello solicitó como nombre transitorio Noel, si bien todo el mundo le conoce como Tom.

3. Previo informe del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 30 de marzo de 2015 acordando la rectificación de la mención relativa al sexo y la práctica de una nueva inscripción cancelando la anterior pero denegando el cambio de nombre por no concurrir los presupuestos legales necesarios.

4. Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el interesado que Tom es el nombre que viene utilizando desde hace seis años, si bien con anterioridad había solicitado el cambio de su nombre original por Noel con el fin de evitar problemas de identificación, debido a la discordancia del nombre oficial con su físico, en tanto completaba el tratamiento para poder modificar legalmente el sexo y adecuar finalmente el nombre inscrito al que utiliza habitualmente. En prueba de sus alegaciones aportaba varios informes médicos en los que el recurrente figura identificado con el nombre de Tom.

5. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, no se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Vilanova i la Geltrú remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54, 59 y 60 de la Ley de Registro Civil (LRC); 206, 209 y 210 del Reglamento de Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 4-4ª de febrero y 22-2ª de noviembre de 2004; 8-3ª de junio de 2006; 9-1ª de marzo y 21-5ª de septiembre de 2007; 26-4ª de marzo, 6-1ª de mayo, 4-6ª de septiembre, 5-1ª de noviembre, 26-3ª y 30-2ª de diciembre de 2008; 7-5ª de enero y 2-6ª de marzo de 2009; 5-1ª de marzo de 2010; 8-8ª de marzo de 2011; 28-31ª de junio y 2-108ª de septiembre de 2013 y 28-131ª de octubre de 2014.

II. El promotor, inscrito inicialmente como mujer a quien se le impuso el nombre de Beatriz, que posteriormente, una vez alcanzada la mayoría de edad, cambió por Noel, interesó la rectificación de la mención relativa al sexo para que constara que se trata de un hombre, así como un nuevo cambio del nombre inscrito por Tom, alegando que es este el que habitualmente utiliza y por el que es conocido, mientras que el que ostenta actualmente lo pidió de forma transitoria hasta cumplir con los requisitos establecidos para poder modificar legalmente la mención relativa al sexo. La encargada del registro, que acordó la rectificación de este último dato, no autorizó sin embargo un nuevo cambio de nombre por no concurrir justa causa.

III. Todo cambio de nombre exige la concurrencia de una justa causa y está previsto que, en casos de disforia de género, la persona que solicita la rectificación del sexo

que consta en su inscripción pueda pedir asimismo un cambio de nombre para adecuarlo al nuevo sexo inscrito. Pero, como es norma general en materia de nombre y apellidos, el ejercicio de esa facultad está previsto para una sola vez, de manera que, obtenido el cambio, no es posible, salvo casos excepcionales, que por el mismo camino se deje sin efecto o se obtenga un nuevo cambio en comparecencia posterior, pues ello entraría en abierta contradicción con el principio de estabilidad que, para cumplir eficazmente su labor de identificación e individualización de las personas, se atribuye al nombre y a los apellidos, los cuales se encuentran, por esa razón, sustraídos del juego de la autonomía de la voluntad de los particulares. En este caso, el cambio promovido por el interesado en 2013 -concedido, por otra parte, porque alegó que era ese el que usaba habitualmente, según consta en la inscripción y en contra de lo que ahora declara- es perfectamente compatible con su condición masculina, por lo que, en aras del mencionado principio de estabilidad, no se aprecia que concurra justa causa para un nuevo cambio dos años después de obtenido el anterior.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

II.2.3 CAMBIO DE NOMBRE, PROHIBICIONES ART. 54 LRC

Resolución de 28 de octubre de 2016 (15ª)

II.2.3. Cambio de nombre

Es admisible Bibi como nombre propio de mujer que no incurre en ninguna de las prohibiciones del art. 54 LRC.

En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Salamanca.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado el 27 de marzo de 2015 en el Registro Civil de Salamanca, Dª Eusebia C. A., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba el cambio de su nombre actual por Bibi alegando que es este el que utiliza habitualmente desde la infancia y por el que es conocida. Aportaba los siguientes documentos: DNI, certificado de empadronamiento e inscripción de nacimiento de la promotora en el Registro Civil de Salamanca, varios documentos de una empresa de seguros, un recibo bancario, correspondencia personal, una invitación de boda y una comunicación de un centro comercial.

2. Practicada prueba testifical y previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 16 de abril de 2015 denegando el cambio propuesto porque, aunque desde 2007 es posible inscribir como nombre propio los diminutivos o variantes familiares, consideró que el nombre solicitado en este caso induce a error en cuanto al sexo, ya que puede referirse tanto un hombre como a una mujer, incurriendo así en una de las prohibiciones del artículo 54 de la Ley del Registro Civil.

3. Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando la promotora que solo cabe rechazar un nombre cuando claramente incurra en alguna de las prohibiciones del artículo 54 de la Ley del Registro Civil y que el suyo no induce a error en cuanto al sexo aunque también pueda ser utilizado por un varón, pues existen muchos otros nombres con esa misma característica (Reyes, Patrocinio, Amor, Tránsito...). Añadía que la estructura del nombre solicitado es similar a la de otros nombres inequívocamente femeninos como Paqui, Pepi o Puri y que numerosas resoluciones de la dirección general de los Registros y del Notariado han admitido cambios similares al que aquí se pide.

4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su estimación. La encargada del Registro Civil de Salamanca se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54, en la redacción dada por la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 192, 209 y 210 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 16-2ª de junio de 2005, 20-7ª de septiembre de 2007, 24-5ª de marzo y 26 de abril de 2008, 10-4ª de febrero de 2009, 12-1ª de febrero y 18-4ª de marzo de 2010, 23-15ª de marzo de 2011, 29-9ª de junio y 4-38ª de octubre de 2012, 15-52ª de abril de 2013 19-25ª de diciembre de 2014 y 13-11ª de marzo de 2015.

II. Pretende la promotora el cambio de su nombre actual, Eusebia, por el que utiliza habitualmente desde hace años, Bibi. La encargada del registro denegó la solicitud por considerar que incurría en una de las prohibiciones del artículo 54 LRC al inducir a error en cuanto al sexo.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente posterior, un nombre propio que ya inicialmente debería ser rechazado.

IV. En este caso no se plantea duda acerca de la utilización del nombre pretendido de forma habitual por la interesada, pero la encargada no lo consideró admisible invocando una de las prohibiciones legales. Pues bien, a este respecto hay que recordar en primer lugar que la modificación introducida en el art. 54 LRC por la Ley 3/2007, de 15 de marzo eliminó la prohibición anterior de nombres diminutivos o variantes familiares. Además, como se ha indicado ya en numerosas resoluciones de este centro, la limitación relativa a los nombres que induzcan a error en cuanto al sexo ha de ceñirse exclusivamente a aquellos casos en los que el nombre elegido remita inequívocamente al sexo opuesto al del nacido, pues las prohibiciones en esta materia han de ser interpretadas siempre restrictivamente. La mencionada prohibición podría invocarse, a modo de ejemplo, para rechazar la atribución de “Pedro” para una mujer o “Teresa” para un hombre, pero no debe extenderse a nombres que resultan ambiguos para uno u otro sexo y, en cualquier caso, el nombre del que se trata en esta ocasión, por su morfología, resulta sin duda apropiado para una mujer, de manera que es perfectamente admisible.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar el cambio de nombre de la interesada por Bibi.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Salamanca.

Resolución de 28 de octubre de 2016 (16ª)

II.2.3. Cambio de nombre

Es admisible Vega como nombre propio de mujer que no incurre en ninguna de las prohibiciones del art. 54 LRC.

En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Santa Cruz de la Palma.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado el 26 de febrero de 2014 en el Registro Civil de Santa Cruz de la Palma, Don M.Á. B. L. y Doña E-G. A. R., con domicilio en B. B., solicitaban el cambio del nombre actual de su hija, María-Vega B. A., por Vega, alegando que es este el único que siempre ha utilizado la menor y por el que es conocida en todos los ámbitos. Aportaban los siguientes documentos: DNI del promotor y de su hija, certificado de empadronamiento, inscripción de nacimiento de la menor, nacida el de 2009, certificado de bautismo de Vega B. A. y certificado del centro escolar al que

acudía en ese momento la interesada en el que se acredita que es conocida por profesores y alumnos con el nombre de Vega.

2. Ratificados los promotores y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 19 de marzo de 2015 en el que, aunque admitía la existencia de uso habitual, denegaba el cambio propuesto por considerar que el nombre pretendido es susceptible de confusión con un apellido, de manera que incurriría en una de las prohibiciones del artículo 54 de la Ley del Registro Civil al hacer confusa la identificación.

3. Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando los promotores, entre otras cosas, que la anteposición de “María” al nombre por ellos elegido para su hija se realizó exclusivamente por exigencia del registro en el momento de la inscripción pero que la menor siempre ha sido conocida como Vega en todos los ámbitos y que, además, la aducida confusión con un apellido es más probable con el nombre actual que con el que ellos pretenden, pues teniendo en cuenta que es muy habitual en la vida cotidiana la utilización de un solo apellido, resulta que la menor podría ser identificada como “María Vega B.”, dando a entender que María es el nombre y Vega B. los apellidos, mientras que con el único nombre de “Vega” resulta claro que B. tiene que ser el primer apellido. Además, aportaban datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística de los que se desprende que el nombre de Vega figuraba atribuido en ese momento a 3.692 mujeres en los registros civiles españoles. Finalmente, como petición subsidiaria y con el fin de evitar cualquier riesgo de confusión, solicitaban la anteposición de la partícula “de” antes del primer apellido, de manera que el nombre y apellidos definitivos de su hija resulten “Vega de B. A.”.

4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Santa Cruz de la Palma se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 192, 209 y 210 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones 18-3ª de enero de 2007, 30-1ª de diciembre de 2008 y 6-36ª de noviembre de 2015.

II. Pretenden los promotores el cambio de nombre de su hija, María-Vega, por el nombre simple Vega, que es el que la menor utiliza habitualmente y por el que se la conoce en todos los ámbitos desde que nació. La encargada del registro denegó la solicitud por considerar que incurría en una de las prohibiciones del artículo 54 LRC al hacer confusa la identificación por tratarse de un apellido muy común.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya

perjuicio de tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente posterior, un nombre propio que ya inicialmente debería ser rechazado.

IV. En este caso, a diferencia de lo que sostienen los progenitores en el recurso, la encargada no cuestiona la realidad del uso habitual del nombre pretendido por la interesada, pero no lo consideró admisible invocando una de las prohibiciones legales, así como el criterio sostenido en casos similares por este mismo centro. Pues bien, una de las limitaciones contenidas en el art. 54 LRC se refiere, en efecto, a aquellos nombres que hagan confusa la identificación, entendiéndose que ello sucede cuando se trata de imponer un nombre que es comúnmente identificado como apellido. Ciertamente “Vega” se ha asociado tradicionalmente en el sentir popular a un apellido y por esa razón, cuando este centro ha tenido que pronunciarse al respecto (vid. resoluciones citadas en el fundamento primero), ha venido sosteniendo que no era admisible porque su imposición como nombre simple de mujer incurría en la mencionada prohibición legal al inducir a confusión en la identificación de la persona, lo que no ocurría en caso de elegir “María de la Vega” por ser una conocida advocación mariana con relativa tradición de uso como nombre compuesto de mujer. Sin embargo, este criterio no puede seguir manteniéndose habida cuenta de la evolución y cambio en los usos sociales, siendo evidente que en los últimos años “Vega” ha ido ganando terreno como nombre que hoy día ostentan muchas mujeres, hasta el punto de que, atendiendo a los datos ofrecidos por las bases del Instituto Nacional de Estadística, actualmente son muchísimas más las que figuran inscritas en los registros civiles con ese nombre simple que las que ostentan alguna de las variantes de nombre compuesto precedido de “María” (María de la Vega o María-Vega), estas últimas con una media de edad sensiblemente superior a las primeras. En consecuencia, la reciente resolución de 6 de noviembre de 2015 (6ª) ha modificado la doctrina anterior para concluir que lo que antes era considerado inequívocamente un apellido español ha alcanzado ya autonomía suficiente también como nombre propio, al igual que otros vocablos que notablemente ostentan esa doble condición, lo que supone el decaimiento de la inadmisión que derivaba de su anterior consideración exclusivamente como apellido.

V. Por otro lado, conviene mencionar también que uno de los requisitos previos exigidos para autorizar cualquier cambio de nombre propio, ya sea de la competencia del encargado del registro civil del domicilio, ya corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (arts. 60 de la LRC y 206, último párrafo, y 210 del RRC). Y a estos efectos, es doctrina constante de este centro directivo que las menciones de identidad, para poder cumplir su función de identificación y diferenciación de las personas, deben estar dotadas de estabilidad, por lo que no se considera que concurra justa causa cuando se trata de cambiar el nombre de menores de muy corta edad sin un motivo que justifique suficientemente la pertinencia del cambio, dada la amplia libertad que tienen los progenitores para elegir el nombre que consideren más conveniente para sus hijos. En este caso, sin embargo,

aunque la menor interesada tenía menos de cinco años cuando se presentó la solicitud, debe tenerse en cuenta que es posible que, atendiendo al criterio anterior de este centro, el registro no admitiera en su momento la imposición del nombre elegido si no iba precedido de “María”, tal como alegan los recurrentes, pues, aunque no se haya probado tal circunstancia, sí resulta significativo que en la partida de bautismo, expedida solo unas semanas después, la nacida figure identificada con el único nombre de “Vega”.

VI. Finalmente, lo que no cabe es atender a la pretensión de los recurrentes de añadir la partícula “de” antes del primer apellido, pues el artículo 195 RRC contempla esa posibilidad solo cuando el primer apellido sea un vocablo generalmente conocido como nombre propio con el fin de evitar que sea confundido con un segundo nombre, mientras que en este caso ocurre justo lo contrario, pues es el nombre el que, a su vez, puede tener la condición de apellido.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar el cambio de nombre de la menor interesada por Vega.

Madrid, 28 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife).

II.3 ATRIBUCIÓN DE APELLIDOS

II.3.2 RÉGIMEN DE APELLIDOS DE LOS ESPAÑOLES

Resolución de 28 de octubre de 2016 (10ª)

II.3.2. Atribución de apellidos

Los apellidos de un español son los determinados por la filiación según la ley española, primero del padre y primero de los personales de la madre, de modo que, ejercida por los progenitores la opción prevista en el artículo 109 del Código Civil de anteponer el apellido materno, no cabe atribuir al nacido como primer apellido el segundo de su madre española ya que el hecho de que en el país de nacimiento haya sido inscrito con dicho apellido no puede condicionar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Registro Civil.

En las actuaciones sobre atribución de apellidos en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra calificación del encargado del Registro Civil Consular de Toronto (Canadá).

HECHOS

1. Doña M. Ma. Z., de nacionalidad española, mayor de edad y domiciliada en la demarcación del Consulado General de España en Toronto, presenta en el registro civil consular declaración de datos para la inscripción de nacimiento de su hija A., nacida en T. de padre austriaco el de 2015, con los apellidos Z. Mi. que constan en la certificación del registro local aportada y por el encargado se acuerda la inscripción de la nacida con los apellidos Ma. Mi., practicándose el asiento el 8 de mayo de 2015.

2. Notificada la anterior resolución a la promotora, los dos progenitores interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que desean que la menor ostente como primer apellido el segundo de su madre porque, menos frecuente que el primero, se perdería en la siguiente generación en la familia materna, con la que prácticamente se ha criado la madre y a la que podría ocasionar serios problemas alterar el orden de los suyos, que su hija es canadiense *iure soli* y el mantenimiento de la inscripción en los términos en que se ha practicado provoca inseguridad jurídica y una clara problemática futura para la menor, cuyos intereses han de primar sobre cualquier otra circunstancia, y que, de no admitirse su solicitud, se estaría discriminando por razón de sexo a la abuela materna de la nacida; y aportando copia de DNI y de pasaporte de la madre, de pasaporte austriaco del padre y de certificado de nacimiento y pasaporte canadienses de la menor.

3. De la interposición del recurso se dio traslado al canciller en funciones de ministerio fiscal (art. 54 RRC), que informó que estima que el interés de la menor se ha salvaguardado registrándola de la manera prescrita por los arts. 9.9 y 109 del Código Civil, y el encargado del registro civil consular, por su parte, informó que los recurrentes no pueden pretender que la nacionalidad canadiense prevalezca sobre la española en el registro civil español y seguidamente dispuso la remisión de las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 109 del Código Civil (CC); 53 y 55 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 194 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de mayo de 2007 y las resoluciones, entre otras, de 9-1ª de octubre de 2000, 25-3ª de enero de 2002, 17-2ª de marzo de 2004, 20-5ª de octubre de 2006, 28-4ª de noviembre de 2007, 6-4ª de marzo de 2008, 28-2ª de noviembre de 2011, 6-22ª y 9-20ª de mayo de 2013; 27-3ª de enero, 9-153ª y 31-68ª de marzo, 21-22ª de abril, 16-26ª de septiembre y 26-39ª de diciembre de 2014 y 29-12ª de mayo y 23-47ª de octubre de 2015.

II. Interesa la promotora que se inscriba a su hija, nacida en T. el de 2015 de madre española y padre austriaco, con los apellidos Z. Mi. que constan en la certificación del registro local aportada, el encargado del registro civil consular dispone la inscripción de la nacida con los apellidos Ma. Mi., primero de la madre y único del padre, y los dos progenitores recurren la inscripción respecto al primer apellido atribuido a la menor.

III. El artículo 194 RRC, que dispone que, si la filiación está determinada por ambas líneas y a salvo la opción prevista en el artículo 109 CC., el primer apellido de un español es el primero del padre y el segundo el primero de los personales de la madre, es una norma de Derecho interno referida a la composición de los apellidos de las personas de nacionalidad española y, por tanto, no cabe, como pretenden los recurrentes que, tras haber decidido “el orden de transmisión de su respectivo primer apellido” (art. 109 CC), se aplique la legislación del país de nacimiento y se haga constar como primer apellido de un español el segundo apellido de su madre española.

IV. Si bien, en principio, la menor a la que se refieren estas actuaciones, al parecer de doble nacionalidad española y canadiense, podría verse abocada a ser identificada de forma distinta en los dos países de los que es nacional, para asegurar la adecuada identificación de las personas en quienes concurre esta circunstancia el Derecho Internacional Privado y los ordenamientos jurídicos internos prevén la coordinación de los registros civiles de los diferentes Estados y la legislación española admite que este hecho, que afecta al estado civil de un español según una ley extranjera, sea objeto de anotación registral, conforme al artículo 38.3 de la Ley del Registro Civil, a fin de poner en relación el contenido de los registros español y extranjero y disipar dudas en cuanto a la identidad del inscrito.

V. De otro lado, el derecho de los interesados plurinacionales o de sus representantes legales a elegir una de las leyes nacionales concurrentes puede ejercitarse a través del expediente registral de cambio de apellidos regulado en los artículos 57 y siguientes de la Ley del Registro Civil, que se instruye por el registro civil del domicilio de los promotores y se resuelve por el Ministerio de Justicia y hoy, por delegación (orden JUS/696/2015, de 16 de abril), por la Dirección General de los Registros y del Notariado, que puede autorizar el cambio de apellidos si resulta acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos (cfr. arts. 57 LRC y 205 RRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Toronto (Canadá).

II.4 CAMBIO DE APELLIDOS

II.4.1 MODIFICACIÓN DE APELLIDOS

Resolución de 28 de octubre de 2016 (8ª)

II.4.1. Cambio de apellidos

1º. Siendo los apellidos de un español primero del padre y primero de los personales de la madre (arts. 109 Cc y 194 RRC), prospera el expediente incoado de oficio a fin de adecuar los inscritos a lo dispuesto por la ley.

2º. Una vez inscrita al margen del asiento de nacimiento de la menor la resolución dictada por el encargado ha de hacerse constar la inversión de apellidos formalizada por el padre en un momento posterior con expresión clara de los apellidos que en adelante corresponden a la inscrita (cfr. arts. 197 y 217 RRC).

En el expediente sobre rectificación de apellido en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el promotor contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de Loja (Granada).

HECHOS

1. Advertido error en la inscripción de nacimiento de Á. J. G., nacida el 31 de agosto de 2014 e inscrita en el Registro Civil de Huétor Tájar (Granada) el 4 de septiembre de 2014 en virtud de lo dispuesto en el art. 16.2 LRC, el 18 de noviembre de 2014 el registro civil promueve de oficio expediente gubernativo para la rectificación del primer apellido de la menor ya que el primero del padre es R. y por los datos aportados por los progenitores se consignó el que consta, contrario a la norma. Al escrito inicial se unieron certificación literal de las inscripciones de nacimiento de la menor y de sus progenitores, copia cotejada del DNI de estos, comparecencia de ambos, a efectos de inscripción en el registro civil de su domicilio, en la que manifiestan y firman no haber promovido la inscripción de Á. J. G. en el registro civil de nacimiento y borrador de asiento registral, asimismo suscrito de conformidad por ambos.

2. Recibidas las actuaciones en el Registro Civil de Loja y acordada la incoación del oportuno expediente, el ministerio fiscal emitió informe favorable y el 20 de febrero de 2015 el juez encargado dictó auto disponiendo que, efectivamente comprobado el error, se rectifique en el asiento de nacimiento el primer apellido de la inscrita.

3. Notificada la resolución al ministerio fiscal y, en comparecencia en el Registro Civil de Huétor Tájar de 26 de marzo de 2015, a los dos progenitores, el padre interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que él tiene modificado en el registro el orden de los apellidos, aportando certificación literal de su inscripción de nacimiento, en la que consta practicada el 30 de marzo de 2015 marginal de inversión de apellidos en virtud de comparecencia efectuada en esa misma fecha ante el encargado del Registro Civil de Antequera (Málaga), y solicitando que se revoque la resolución dictada.

4. De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, visto que la nueva documentación presentada da constancia de la inscripción de una alteración en los apellidos del padre, se adhirió al recurso y seguidamente el juez encargado del Registro Civil de Loja dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 109 del Código Civil (Cc); 2, 23, 26, 55, 59, 60, 93 y 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 194, 197, 209, 210, 212, 217, 305, 306 342, 358 y 365 de su Reglamento (RRC); y las resoluciones de 12-2ª de marzo de 2008 y 29-38ª de diciembre de 2014.

II. Advertido error en la inscripción de nacimiento de una menor, nacida el de 2014 e inscrita en el Registro Civil de Huétor Tájar con el segundo del padre como primero, e incoado por el registro civil de dicha población el oportuno expediente a fin de adaptar los apellidos a lo dispuesto por la norma, el juez encargado del Registro Civil de Loja, comprobado el error, dispone que en el asiento de nacimiento de la menor se rectifique el primer apellido de la inscrita mediante auto de 20 de febrero de 2015 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por el padre, que alega que él tiene modificado en el registro el orden de sus apellidos, y al que se adhiere el ministerio fiscal.

III. Dispone el art. 194 RRC que “si la filiación está determinada por ambas líneas y a salvo la opción prevista en el artículo 109 del Código Civil, primer apellido de un español es el primero del padre y segundo apellido el primero de los personales de la madre”; constando de la inscripción de nacimiento del padre (cfr. art. 2 LRC) que sus apellidos son R. J., la atribución a la hija del apellido J. supone una infracción de los antedichos preceptos que compete al encargado subsanar (cfr. arts. 59.2º LRC y 209.2º RRC) y, en consecuencia, procede confirmar el auto por el que se acuerda modificar el primer apellido de la nacida, cuya legalidad y corrección jurídica no resulta afectada por el hecho de que entre la notificación a los progenitores de la resolución dictada y la interposición del recurso el padre haya formalizado la inversión de los apellidos que ostenta. La concordancia del registro con la realidad, por la que el encargado ha de velar (cfr. art. 26 RRC), impone que en la inscripción de nacimiento de la menor conste como primer apellido del inscrito el que es en el momento del nacimiento primero del padre y que, una vez inscrita marginalmente la resolución dictada, se anote la inversión de apellidos formalizada en fecha posterior por el padre (cfr. art. 217 RRC) con expresión clara de los apellidos que en adelante corresponden al nacido (cfr. art. 197 RRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Loja (Granada).

II.5 COMPETENCIA

II.5.1 COMPETENCIA EN CAMBIO DE NOMBRE PROPIO

Resolución de 28 de octubre de 2016 (7ª)

II.5.1. Competencia en expediente de cambio de nombre

El encargado no puede autorizar el cambio de nombre si en el expediente no queda acreditado el uso habitual del propuesto pero, por economía procesal y por delegación, la dirección general examina la pretensión y la concede, por concurrir la justa causa requerida.

En el expediente sobre cambio de nombre remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Salamanca.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Salamanca en fecha 29 de abril de 2015 doña Maximina G. M., nacida el 7 de marzo de 1997 en L. y domiciliada en C. (Salamanca), solicita el cambio del nombre inscrito por “Kira” exponiendo que este último es el que siempre ha venido usando y por el que es conocida en su entorno familiar y social y acompañando copia simple de DNI y de libro de familia de sus padres y, en prueba del uso alegado, perfil de *Facebook* y dirección de correo electrónico.
2. En el mismo día, 29 de abril de 2015, la promotora ratificó la solicitud y comparecieron como testigos dos vecinos, que manifestaron que la conocen desde hace más de cuatro años uno y de dos el otro, que toda la gente la llama “Kira” y que ni siquiera sabían que su nombre fuera otro, y el 19 de mayo de 2015 la interesada presentó volante individual de empadronamiento en C. y certificación literal de inscripción de nacimiento.
3. El ministerio fiscal informó que no tiene inconveniente alguno en que se acceda a lo solicitado y el 28 de mayo de 2015 la juez encargada, considerando que la prueba aportada, solo de redes sociales, no llega a justificar la habitualidad en el uso del nombre pretendido, dictó auto disponiendo no acceder al cambio.
4. Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que a través de la prueba testifical que ha ofrecido puede comprobarse que sus familiares y amigos la conocen por el nombre que solicita y que el cambio viene motivado por el rechazo al que ostenta, que incluso la hace objeto de burla o mofa por parte de compañeros de estudios y conocidos.
5. De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que informó que, a la vista de las alegaciones formuladas, no se opone a la estimación del recurso y la juez

encargada, por su parte, informó que estima que debe mantenerse el auto apelado por las razones en él expuestas y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 54, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 206, 209, 210, 217, 218, 354, 355 y 365 del Reglamento de Registro Civil; la Orden ministerial JUS/696 de 16 de abril de 2015 y las resoluciones, entre otras, de 23-1ª de mayo de 1998, 28 de febrero y 26-1ª de abril de 2003, 26-2ª de octubre de 2004, 5-4ª de abril y 9-4ª de diciembre de 2005; 28-5ª de junio, 13-5ª de julio y 29-3ª de noviembre de 2006, 8-6ª de mayo y 7-6ª de diciembre de 2007, 8-4ª de abril y 1-6ª de julio de 2008, 19-2ª de enero y 9-1ª de febrero de 2009, 15-7ª de marzo de 2010, 18-9ª de marzo de 2011, 15-22ª de noviembre y 11-106ª de diciembre de 2013; 20-104ª de marzo, 21-24ª de abril y 24-60ª de junio de 2014 y 17-14ª de julio de 2015.

II. Solicita la promotora el cambio del nombre, Maximina, que consta en su inscripción de nacimiento por “Kira”, exponiendo que este último es el que siempre ha venido usando y por el que es conocida en su entorno familiar y social, y la juez encargada, considerando que la prueba aportada no llega a justificar la habitualidad de uso invocada, dispone no acceder al cambio mediante auto de 28 de mayo de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (cfr. arts. 209.4º y 365 del RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (cfr. 210 del RRC) y siempre que, además, el solicitado no infrinja las normas que regulan su imposición (cfr. arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio, no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente de cambio, un nombre que en una inscripción inicial debe ser rechazado.

IV. En este caso, no justificado el uso habitual del nombre solicitado, la competencia para aprobar el expediente no pertenece al encargado sino al Ministerio de Justicia (cfr. arts. 57 LRC y 205 RRC) y, por delegación (Orden JUS/696/2015, de 16 de abril), a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

V. Conviene, por tanto, examinar si la pretensión del promotor puede ser acogida, habida cuenta de que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del Ministerio de Justicia ante el registro civil del domicilio (cfr. art. 365 RRC) y de que poderosas razones de economía procesal aconsejan ese examen, ya que sería superfluo y desproporcionado con la causa (cfr. 354 RRC) exigir la tramitación formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.

VI. A la cuestión planteada hay que darle una respuesta afirmativa: aun cuando de la prueba testifical y documental aportada al expediente no resulta acreditado el uso habitual del nombre propuesto en el que la promotora basa la solicitud, con las alegaciones de otra índole formuladas en el escrito de recurso queda suficientemente

fundamentada su petición, ello permite apreciar la concurrencia de justa causa para el cambio, este no perjudica a tercero y, en definitiva, resultan cumplidos los requisitos específicos exigidos por la normativa registral (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Estimar el recurso.

2º. Por delegación del Sr. ministro de Justicia (Orden JUS/696/2015, de 16 de abril) autorizar el cambio del nombre inscrito, Maximina, por "Kira", no debiendo producir esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento de la interesada y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación, conforme dispone el artículo 218 RRC. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 del mencionado reglamento.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Salamanca.

III NACIONALIDAD

III.1 ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

III.1.1 ADQUISICIÓN DE NACIONALIDAD DE ORIGEN IURE SOLI

Resolución de 7 de octubre de 2016 (1ª)

III.1.1. Declaración sobre nacionalidad.

Es español iure soli el nacido en España de padres colombianos y nacidos en Colombia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Exclusivo de Barcelona.

HECHOS

1. Mediante solicitud formulada ante el Registro Civil Exclusivo de Barcelona el 10 de noviembre de 2014, los ciudadanos colombianos don J. F. M. M. y doña Z. C. G. B., solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hijo V. M. G. nacido en B. el de 2014.

Adjuntaban la siguiente documentación: certificado literal de nacimiento del menor inscrito en el Registro Civil de Barcelona; certificación expedida por el Consulado General de Colombia en Barcelona, en el que se indica que el menor no ha sido inscrito en dicha sede consular; certificados de inscripción padronal de los progenitores del menor, expedidos por el Ayuntamiento de B. y pasaportes colombianos y documentos de identidad de extranjeros de los progenitores.

2. Ratificadas las partes en el expediente, el ministerio fiscal emite informe desfavorable a las pretensiones de los promotores en fecha 23 de abril de 2015, dándose traslado del mismo a los interesados, a fin de que formulen alegaciones en el término de diez días.

Dentro del plazo establecido, los progenitores del menor formulan alegaciones al informe emitido por el ministerio fiscal, solicitando se declare la nacionalidad española de origen a su hijo, en base a lo establecido en el artº 17.1.c) del Código Civil, toda vez que la legislación colombiana, no concede la nacionalidad de forma directa a los

nacidos en España. Aportan como documentación: certificados de empadronamiento actualizados de los progenitores, expedidos por el Ayuntamiento de B.; libro de familia de los padres; certificado literal español de nacimiento del menor; certificación expedida por el Consulado General de Colombia en Barcelona el 09 de junio de 2015, en la que se indica que el menor no se encuentra inscrito en dicha oficina consular; certificado apostillado de matrimonio de los progenitores, expedido por la República de Colombia; documento acreditativo del derecho a asistencia sanitaria y diversa documentación de la actividad profesional en España del progenitor.

3. El Ministerio Fiscal, a la vista del escrito de alegaciones, se reitera en su informe desfavorable, y la Encargada del Registro Civil Exclusivo de Barcelona dicta auto el 05 de octubre de 2015 por el que se desestima la solicitud de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del menor, por considerar que los progenitores no inscribieron al mismo en el consulado de origen al tener ventajas de ser español y a que actualmente los progenitores residen en España.

4. Notificada la resolución, los promotores presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción para su hijo, alegando que conforme a la vigente Constitución Política de Colombia, en su capítulo I, relativo a la nacionalidad, artículo 96 b), “son nacionales colombianos... los hijos de padre o madre colombianos que hubieran nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registren en una oficina consular de la República...”, por lo que los hijos de colombianos nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad colombiana, sino que solo se puede adquirir por un acto posterior, citando como fundamentos jurídicos, numerosas resoluciones de esta Dirección General de los Registros y del Notariado que resuelven de forma favorable casos similares al planteado en el presente expediente y acompañando, entre otros, certificado expedido por el Consulado General de Colombia en Barcelona de fecha 20 de octubre de 2015, en el que se indica que el menor no se encuentra inscrito en dicha sede consular.

5. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, emitió informe desfavorable y la Encargada del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil (RRC); 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989; y las resoluciones de 16-2ª de octubre y 7-4ª y 5ª de noviembre de 2002; 28-4ª de junio y 4-1ª de julio de 2003; 28-3ª de mayo y 23-1ª de julio de 2004; 30-4ª de noviembre y 7-2ª de diciembre de 2005; 14-3ª de febrero y 20-1ª de junio de 2006; 17-4ª de enero de 2007, 10-5ª de diciembre de 2007; 11-7ª de junio y 10-6ª y 7ª de julio de 2008; 27-4ª de Enero de 2009.

II. Plantea el recurso la cuestión de si tiene la nacionalidad española de origen un niño nacido en España el de 2014, hijo de padres colombianos nacidos en Colombia. La petición se funda en la atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al nacido una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c) CC). Por el juez encargado se dictó auto denegando la solicitud. Dicho auto constituye el objeto del presente recurso.

III. Reiteradamente tiene establecido esta dirección general, de acuerdo con el conocimiento adquirido de la legislación colombiana, que los hijos de colombianos nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad colombiana, la cual solo puede adquirirse por un acto posterior (cfr. art. 96.1.b de la Constitución Política de Colombia de 1991, modificado por el acto legislativo 01 de 2002). Se da, por lo tanto, una situación de apatridia originaria en la cual la atribución de la nacionalidad española *iure soli* se impone. No ha de importarse por otro lado que el nacido pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV. Tal conclusión, como también se ha dicho reiteradamente, se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto que establece que el niño tendrá desde su nacimiento derecho a adquirir una nacionalidad y que los Estados partes velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Estimar el recurso y dejar sin efecto el auto apelado.

2º. Declarar con valor de simple presunción que el menor es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de su nacimiento.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Exclusivo de Barcelona

Resolución de 7 de octubre de 2016 (27ª)

III.1. 1. Declaración sobre nacionalidad.

Es española iure soli la nacida en España de padres colombianos y nacidos en Colombia.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Marbella.

HECHOS

1. Mediante solicitud formulada ante el Registro Civil de Marbella el 23 de noviembre de 2012, los ciudadanos colombianos don Y. O. A. O. y D^a S. M. S. L. solicitaban la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción para su hija V. A. S. nacida en Marbella el de 2011.

Adjuntaban la siguiente documentación: certificado literal de nacimiento de la menor inscrito en el Registro Civil de Marbella; certificación expedida por el Consulado General de Colombia en Sevilla, en la que se indica que la menor no ha sido inscrita en dicha sede consular; tarjetas de permiso de residencia de los progenitores; certificados expedidos por el Consulado General de Colombia en Sevilla, sobre inscripción de los progenitores en el registro consular; informe de convivencia expedido por el Ayuntamiento de Marbella y copia del libro de familia.

2. Ratificadas las partes en el expediente, previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil de Marbella dictó auto el 02 de agosto de 2013 denegando la solicitud de declaración de la nacionalidad española al considerar que la menor no ha sido inscrita en el Consulado de Colombia, por un acto de voluntad de los padres, por lo que en principio no debería otorgársele la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción, ya que dicho país sí les otorga la nacionalidad, y por tanto no son apátridas.

3. Notificada la resolución, la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción para su hija, alegando que conforme a la vigente Constitución Política de Colombia, en su capítulo I, relativo a la nacionalidad, artículo 96 b), “son nacionales colombianos... los hijos de padre o madre colombianos que hubieran nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registren en una oficina consular de la República...”, por lo que los hijos de colombianos nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad colombiana, sino que solo se puede adquirir por un acto posterior.

5. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste consideró acreditados los hechos alegados por los promotores, mostrándose favorable a la declaración solicitada, indicando que en el presente supuesto nos encontramos ante una menor nacida en España, que no tiene la nacionalidad colombiana ni ninguna otra, por lo que teniendo en cuenta el superior interés de la menor existe presunción de nacionalidad española a su favor conforme al artº 17.1.c) del Código Civil. El encargado del registro civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

6. Recibidas las actuaciones en la Dirección General de los Registros y del Notariado, se solicita del Registro Civil de Marbella, se requiera a los promotores a fin de que aporten certificados de empadronamiento actualizados de la menor y de los progenitores, así como certificados actualizados expedidos por el Consulado General

de Colombia en España en el que se indique si la menor y sus progenitores se encuentran inscritos en los libros de nacimiento de dicha oficina consular.

Atendiendo al requerimiento, se aporta la siguiente documentación: informe de convivencia expedido por el Ayuntamiento de M. el 05 de septiembre de 2016 y certificados expedidos por el Consulado General de Colombia en Sevilla, con fecha 13 de septiembre de 2016, en los que se indica que la menor no se encuentra inscrita en el registro de colombianos de dicha oficina consular, encontrándose inscritos los progenitores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del registro Civil (LRC); 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil (RRC); 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989; y las resoluciones de 16-2ª de octubre y 7-4ª y 5ª de noviembre de 2002; 28-4ª de junio y 4-1ª de julio de 2003; 28-3ª de mayo y 23-1ª de julio de 2004; 30-4ª de noviembre y 7-2ª de diciembre de 2005; 14-3ª de febrero y 20-1ª de junio de 2006; 17-4ª de enero de 2007, 10-5ª de diciembre de 2007; 11-7ª de junio y 10-6ª y 7ª de julio de 2008; 27-4ª de Enero de 2009.

II. Plantea el recurso la cuestión de si tiene la nacionalidad española de origen una niña nacida en España el 17 de enero de 2011, hija de padres colombianos nacidos en Colombia. La petición se funda en la atribución *iure soli* de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al nacido una nacionalidad (cfr. art. 17.1.c) Cc). Por el juez encargado se dictó auto denegando la solicitud. Dicho auto constituye el objeto del presente recurso.

III. Reiteradamente tiene establecido esta dirección general, de acuerdo con el conocimiento adquirido de la legislación colombiana, que los hijos de colombianos nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad colombiana, la cual solo puede adquirirse por un acto posterior (cfr. art. 96.1.b de la Constitución Política de Colombia de 1991, modificado por el acto legislativo 01 de 2002). Se da, por lo tanto, una situación de apatridia originaria en la cual la atribución de la nacionalidad española *iure soli* se impone. No ha de importar por otro lado que el nacido pueda adquirir más tarde *iure sanguinis* la nacionalidad de sus progenitores porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida *ex lege* en el momento del nacimiento.

IV. Tal conclusión, como también se ha dicho reiteradamente, se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto que establece que el niño tendrá desde su nacimiento derecho a adquirir una nacionalidad y que los Estados partes velarán por la aplicación de este derecho, "sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1º. Estimar el recurso y dejar sin efecto el auto apelado.
- 2º. Declarar con valor de simple presunción que la menor es española de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de su nacimiento.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Marbella (Málaga).

III.1.2 ADQUISICIÓN DE NACIONALIDAD DE ORIGEN IURE SANGUINIS

Resolución de 7 de octubre de 2016 (33ª)

III.1.2. Declaración de la nacionalidad española.

No es posible declarar la nacionalidad española de origen del promotor nacido en Aaiún (Sáhara Occidental) porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo de su nacimiento.

Asimismo, no es aplicable el artículo 18 del Código Civil cuando no se acredita que el promotor hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años.

En las actuaciones sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el ministerio fiscal, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

HECHOS

1. Mediante comparecencia en el Registro Civil de Tudela (Navarra) el 19 de mayo de 2014, don F. B. nacido en 1971 en A. (Sáhara Occidental), de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, solicitaba el reconocimiento de la nacionalidad española por haber nacido y vivido en el Sahara cuando éste era territorio sometido a administración española.

Adjuntaba, entre otros, los siguientes documentos: tarjeta de permiso de residencia de larga duración; pasaporte marroquí; pasaporte español de su padre, don A. A. D.; certificado expedido por la Unidad Central de Documentación de Españoles del Ministerio del Interior, en relación con el documento de identidad saharauí del progenitor que, en la actualidad, carece de validez; certificado de concordancia de nombres del progenitor, traducido y legalizado, expedido por el Reino de Marruecos;

certificado de parentesco del interesado, traducido y legalizado, expedido por el Reino de Marruecos; partida de nacimiento en extracto del interesado, traducida y legalizada, expedida por el Reino de Marruecos y volante de empadronamiento del promotor, expedido por el Ayuntamiento de T., con fecha de alta en el municipio de 09 de diciembre de 2013.

2. Ratificado el interesado y efectuada la comparecencia de los testigos, con fecha 11 de febrero de 2015, el ministerio fiscal emite informe desfavorable, indicando que los nacidos en el Sáhara, cuando éste era posesión española, no se consideran propiamente nacionales, sino solo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española. Este principio es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975 y del Real Decreto de 10 de agosto de 1976, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sáhara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de año a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto, no encontrándose acreditado que el padre del interesado haya ostentado la nacionalidad española, por lo que no pudo transmitirla a su hijo y, por otra parte, el solicitante en modo alguno ostentó la nacionalidad española, teniendo un pasaporte marroquí, por lo que tampoco se trataría de un supuesto de apátrida.

3. Con fecha 13 de febrero de 2015, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra) dictó auto declarando con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen del interesado, por aplicación retroactiva del artº 17.3º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

4. Notificada la resolución, el ministerio fiscal presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando se revoque el auto recurrido y se declare que al promotor no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción, toda vez que no procede la aplicación del artº 17 del Código Civil, dado que los nacidos en el territorio del Sáhara, cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por lo que no está probado que sus progenitores hayan ostentado en algún momento la nacionalidad española, ni que no hayan podido optar a la misma por encontrarse en un campo de refugiados o similar. Por otra parte, tampoco cabe la aplicación al promotor de lo dispuesto en el artº 18 del Código Civil, habida cuenta de que cuando España salió del territorio del Sáhara, el promotor tenía 5 años de edad y no ha ostentado con posterioridad ninguna documentación que le acredite encontrarse en posesión de la nacionalidad española.

5. Notificado el interesado de la interposición del recurso por el ministerio fiscal, aporta copia de tarjeta de afiliación del extinto Instituto Nacional de Previsión, correspondiente a su progenitor, en el que se le incluye como beneficiario y el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra) remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe en el

que muestra su disconformidad con las alegaciones formuladas por el ministerio fiscal en su recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17 y 18 del Código Civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 9-1ª de septiembre, 20-2ª y 4ª y 22-5ª de diciembre de 2006; 12-3ª y 4ª de enero, 10 de febrero, 5-2ª de marzo, 21 de abril, 21-6ª de mayo, 11-1ª de junio y 20-2ª de diciembre de 2007; 3-1ª, 28-1ª y 29-3ª de enero, 22-5ª y 29-6ª de febrero, 3-2ª y 4ª de marzo y 25-3ª y 4ª de noviembre de 2008, 2-4ª de Marzo de 2009, 16 (3ª) de Junio de 2009 y 22-3ª de Marzo de 2010.

II. El promotor, mediante escrito presentado en el Registro Civil Tudela (Navarra) solicitó la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción por haber nacido en 1971 en el territorio del Sahara y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 17 y 18 del Código Civil. El encargado del registro dictó auto estimando la petición del interesado y declarando la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción, por aplicación retroactiva del artº 17.3º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio, interponiendo recurso el ministerio fiscal oponiéndose a la declaración de nacionalidad española del interesado, siendo dicho auto el que constituye el objeto del presente recurso.

III. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. art. 96-2º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el encargado del registro civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC).

IV. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y

ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del *ius soli* tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de “territorio nacional” o “territorio español”.

Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni y de autodeterminación en el Sahara.

Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible colorario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharauí de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los *stati* entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).

No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un

régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca -recalcaba- ha formado parte del territorio nacional».

VI. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente, pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En el caso presente caso, el promotor se encuentra documentado con pasaporte marroquí, por lo que no es apátrida, no procediendo la aplicación retroactiva del artículo 17.3 del Código Civil, en su redacción dada por Ley 51/1982. Por otra parte, no consta la nacionalidad española de su padre o de su madre al tiempo de su nacimiento para la aplicación del artículo 17 del Código Civil, según redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al caso examinado

De otro lado, no está probada a través de la documentación la posesión de la nacionalidad española en los términos y duración que establece el artículo 18 Cc, en el que se indica que la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el registro civil que después es anulado, toda vez que no ha ostentado ninguna documentación como español, teniendo pasaporte marroquí.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y declarar que al promotor no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra).

III.1.3 ADQUISICIÓN DE NACIONALIDAD DE ORIGEN POR LEY 52/2007 DE MEMORIA HISTÓRICA

III.1.3.1 Adquisición de nacionalidad de origen, anexo I Ley 52/2007

Resolución de 3 de octubre de 2016 (1ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña A. G. P. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados literales locales de nacimiento propio y de su madre, así como el su abuelo, expedido por el registro civil español, constando en este último que nació en Cuba en 1924, y que perdió la nacionalidad española, al cumplir la mayoría de edad en 1945.
2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 14 de febrero de 2014 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1970, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 13 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su

directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 14 de febrero de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado los extremos reflejados en su solicitud, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-. En este caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, es lo cierto que la nacionalidad española originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho). Todo lo contrario, el abuelo de la recurrente perdió la nacionalidad española en 1945 según consta en la certificación de nacimiento acompañada a este expediente, razón por la que no pudo transmitir dicha nacionalidad a su hija, nacida en 1949 y, por tanto, la madre de la solicitante no es española de origen.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la madre de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo de la interesada, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española por parte del abuelo como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto, sin embargo, sí se ha documentado que el abuelo nació en Cuba en 1924, y que perdió la nacionalidad española, al cumplir la mayoría de edad, por lo que se puede afirmar sin margen de error que la vida del abuelo de la recurrente transcurrió en dicho país desde 1924 y no puede ser considerado exiliado ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por Doña A. G. P. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 19 de febrero de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

Resolución de 3 de octubre de 2016 (2ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don F-J. M. G. presenta escrito en el Consulado de España en L-H. (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional

séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados literales locales de nacimiento propio y de su madre, y el de su abuelo expedido por el registro civil español. También acompaña documentación sobre inmigración y extranjería del abuelo, en la que se refleja el acta de adquisición de la ciudadanía cubana de éste, que tuvo lugar el 21 de marzo de 1910, circunstancia que le impidió transmitir la nacionalidad española a la madre del recurrente nacida en 1923. En vía de recurso incorpora al expediente certificado de matrimonio de los abuelos maternos, que tuvo lugar en Cuba el 1 de marzo de 1919.

2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 7 de febrero de 2014 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Cuba en 1948, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional". La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de julio de 2010 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 7 de febrero de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que

no ha acreditado los extremos reflejados en su solicitud, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-. En este caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, es lo cierto que la nacionalidad española originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho). A mayor abundamiento, el hecho de que el abuelo accediera a la ciudadanía cubana en 1910 impidió que transmitiera la nacionalidad española a su hija nacida en 1923.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la madre del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo del recurrente, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española por parte del abuelo

como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto, sin embargo si está acreditado que el abuelo adquirió la ciudadanía cubana en 1910, contrajo matrimonio en Cuba en 1919 y su hija, madre de la interesada nació en dicho país en 1923. Por todo ello que se puede afirmar, sin margen de error, que su vida transcurrió en Cuba y no pueden ser considerado exiliado ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por Don F-J. M. G. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 19 de febrero de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

Resolución de 3 de octubre de 2016 (3ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña M-C. J. H. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y, los de su madre y su abuela expedidos por el Registro Civil español, constando en el de la madre que nació en Cuba y que optó a la nacionalidad española, en base a la Ley 52/2007, cuando la interesada ya había alcanzado la mayoría de edad. Así mismo, el de la abuela refleja

que nació en Cuba en 1928 y que recuperó la nacionalidad española el 21 de octubre de 2011.

2. El Encargado del Registro Civil Consular, mediante auto de fecha 23 de septiembre de 2014 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4.- Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007; 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2010.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular, como española de origen, a la nacida en Cuba en 1973, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. En este caso la madre de la interesada tienen la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada, en acta suscrita el 22 de febrero de 2010 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 6 de septiembre de 2010, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 2 de diciembre de 2011 mediante el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 23 de septiembre de 2014, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa, esencialmente, su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada instrucción, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la disposición adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las

previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

Esta cuestión fue abordada por la instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008. Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 22 de febrero de 2010, la ahora optante, nacida en 1973, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima.

V.- El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente. En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la

reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”. Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogidos al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido

fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la disposición transitoria tercera. Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo. Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad... los emigrantes y sus hijos, cuando

Ministerio de Justicia

hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”. El alcance de ambas disposiciones transitorias (segunda y tercera) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la instrucción de este centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”. Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la instrucción de esta dirección general de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados

en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria tercera. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria segunda (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la disposición transitoria tercera, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución Española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria tercera “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 n°1, b). Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 n°2, f del Código Civil).

XII.- La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las

enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta dirección general.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 n°1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela de la optante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española, por parte de la abuela, como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto y sí que la abuela nació en Cuba en 1928, por lo que se puede afirmar que su vida transcurrió en dicho país y no puede ser considerada exiliada ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por Doña M-C. J. H. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la

Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 19 de febrero de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

Resolución de 3 de octubre de 2016 (4ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don J. R. M. G. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y el de su padre, expedido por el registro civil español.
2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 27 de febrero de 2014 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005,

5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Cuba el 23 de noviembre de 1991, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 27 de febrero de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, toda vez que el solicitante no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, concretamente considera que el progenitor español del solicitante optó por la nacionalidad española de origen, según la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 30 de octubre de 2009, cuando el solicitante era mayor de edad, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En este caso, dicha certificación ha sido aportada y acredita que obtuvo la nacionalidad española originaria el 30 de octubre de 2009, fecha anterior a que el recurrente cumpliera los 18 años el 23 de noviembre de 2009.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- se ha acreditado que el padre del optante obtuvo la nacionalidad española de forma originaria cuando el interesado era menor de edad, por lo que se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, en relación con el artículo 20.1.a del Código Civil.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, estima el recurso interpuesto por don J. R. M. G. y revoca el auto apelado por ser la solicitud conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, ordenando su inscripción como español en el Registro Civil correspondiente.

Madrid, 3 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)

Resolución de 3 de octubre de 2016 (5ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don F. D. G. F. presenta escrito en el Consulado de España La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y, el de su madre, nacida en 1928, expedido por el registro civil español en el que consta que optó a la ciudadanía española por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002, y que su madre, abuela del recurrente nació en España en 1895. También se incorpora al expediente, certificado de bautismo de la abuela, expedido por la Diócesis de T. y certificado de matrimonio de los abuelos, que se celebró en Cuba en 1914, siendo el contrayente cubano, fecha en la que la abuela pierde la

nacionalidad española, conforme a lo establecido en el artículo 22 del Código Civil de 1889, vigente en la época.

2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 28 de mayo de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º, 23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y 1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Cuba en 1965, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita el 3 de febrero de 2003 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 11 de febrero de 2003, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 6 de mayo de 2010 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de

2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto 28 de mayo de 2010, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que no prueba los hechos manifestados en su declaración, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

Hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución Española y 24 del Código Civil.

Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del

nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código Civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20 nº1.b) del Código Civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V. En el presente expediente, la progenitora del optante, nacida en 1928, ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código Civil, toda vez que su madre perdió la nacionalidad española por matrimonio contraído en 1914 con ciudadano cubano, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela del optante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado la nacionalidad española de la abuela del solicitante, nacida el 2 de enero de 1895, sin que a tales efectos sea suficiente la partida de bautismo, ya que no cabe atribuir a la misma valor como prueba de los actos concernientes al estado civil de las personas acaecidos con posterioridad a la creación del registro civil en España (cfr. art. 35 LRC de 1870, y resolución de 20 de octubre de 2003-2ª). Tampoco consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española, por parte de la abuela, como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España

entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto y sí está acreditado que la abuela contrajo matrimonio en Cuba el 14 de abril de 1914 y que su hija, madre del recurrente, también nació en dicho país el 24 de febrero de 1928, por lo que no puede ser afirmar, que la vida de la abuela transcurrió, desde esos años en Cuba y no puede ser considerada exiliada ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, desestima el recurso interpuesto por don F. D. G. F. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 3 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)

Resolución de 3 de octubre de 2016 (6ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don J. B. A. presenta escrito en el Consulado de España La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y, los de su madre y su abuelo, expedidos por el registro civil español, constando en el de la madre que optó a la ciudadanía española por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002, cuando el interesado había alcanzado la mayoría de edad.

2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 1 de diciembre de 2011 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º, 23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y 1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Cuba en 1966, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita el 21 de marzo de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 8 de mayo de 2007, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 12 de abril de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto 1 de diciembre de 2011, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que no prueba los hechos manifestados en su declaración, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

Hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución Española y 24 del Código Civil.

Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que

hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código Civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20 nº1.b) del Código Civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V. En el presente expediente, la progenitora del optante, ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código Civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo del optante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otra parte no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española, por parte del abuelo, como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto por lo que no puede ser considerado exiliado ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, desestima el recurso interpuesto por don J. B. A. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 3 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)

Resolución de 3 de octubre de 2016 (7ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que acrediten ser hijo de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don E. M. M., ciudadano cubano presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado de nacimiento propio en el que consta que nació en Cuba el 5 de julio de 1985 y literal de inscripción de nacimiento del padre del promotor en el registro civil español, hijo de E. M. M. nacido el 20 de septiembre de 1908 en T. y de nacionalidad española.

2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 25 de febrero de 2014 deniega lo solicitado por el interesado ya que, a la vista de la documental presentada, le correspondería recuperar su nacionalidad española de origen, que perdió por no declarar en plazo su voluntad de conservarla, y no ejercer la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

3. Notificado el interesado, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su deseo de acceder a la nacionalidad española, en base a la documentación ya aportada.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. El encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo ratificándose en su decisión, reiterando que el Sr. E. M. M. incurrió en pérdida de la nacionalidad española el 5 de julio de 2006, fecha en que cumplió 21 años sin haber declarado su voluntad de conservar dicha nacionalidad, y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 17 y 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la

instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de España en La Habana como español de origen al nacido en Cuba en 1985, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual, podrán optar a la nacionalidad española de origen aquellos cuyos padre o madre hubiesen sido españoles de origen.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 29 de noviembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil consular se dictó auto el 25 de febrero de 2014, denegando lo solicitado.

III. El acuerdo apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por corresponderle ejercer la recuperación de la nacionalidad española que perdió, prevista en el artículo 26 del Código Civil español.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, se ha aportado certificación de nacimiento del registro civil de Cuba del interesado donde consta que nació en el año 1985 y certificación de nacimiento del registro civil español de su padre, don. E. M. I., donde consta que nació en el año 1960 en Cuba, hijo de un ciudadano nacido en España en 1908 y de nacionalidad española. En atención a los documentos y pruebas aportadas, debe

darse por probado que el padre del interesado, en el momento de su nacimiento y, conforme a la legislación española vigente, obtuvo la nacionalidad española originaria, ya que según el artículo 17.1 del Código Civil, vigente en aquél momento, son españoles “los hijos de padre español”.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- se ha acreditado que el padre del interesado ostentó la nacionalidad española de forma originaria por lo que se cumple con el requisito esencial del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto por don E. M. M. y revocar el auto apelado, declarando el derecho del interesado a la opción a la nacionalidad española de origen conforme al apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 3 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)

Resolución de 3 de octubre de 2016 (8ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña S. M. M. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y, los de su padre y su abuela expedidos por el registro civil español, constandingo en el del padre que nació en

Cuba y que optó a la nacionalidad española, en base a la Ley 52/2007, cuando la interesada ya había alcanzado la mayoría de edad.

2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 21 de enero de 2014 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007; 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2010.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular, como española de origen, a la nacida en Cuba en 1963, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En este caso el padre de la interesada tienen la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada, en acta suscrita el 16 de marzo de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 24 de noviembre de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

III. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de noviembre de 2011 mediante el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 21 de enero de 2014, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa, esencialmente, su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada instrucción, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la disposición adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

Esta cuestión fue abordada por la instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 16 de marzo de 2009, la ahora optante, nacida en 1963, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima.

V. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se

ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia

acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la disposición transitoria tercera.

Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho

suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas disposiciones transitorias (segunda y tercera) ha de ser analizado conjuntamente, a fin de poder interpretarlas coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde

la declaración sexta de la instrucción de esta dirección general de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria tercera. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria segunda (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la disposición transitoria tercera, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución Española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria tercera “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la

opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 n°2, f del Código Civil).

XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta dirección general.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 n°1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela de la optante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española, por parte de la abuela, como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos

en el apartado V de la citada instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto por lo que la abuela no puede ser considerada exiliada ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, desestima el recurso interpuesto por Doña S. M. M. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 3 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)

Resolución de 3 de octubre de 2016 (9ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña P. A. P. H. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados literales locales de nacimiento propio y de su madre, así como el de su abuela expedido por el registro civil español. También se incorpora al expediente certificación de matrimonio de los abuelos maternos, celebrado en Cuba el 22 de noviembre de 1908, siendo el contrayente cubano, fecha en la que la abuela pierde la nacionalidad española conforme a lo previsto en el artículo 22 del Código Civil de 1889. Así mismo se aporta copia de la inscripción de la abuela en el Registro de Extranjeros cubano, cuando contaba 54 años de edad, es decir en 1943, documento de carácter administrativo que carece de eficacia legal frente a la normativa legal vigente en España.

2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 7 de mayo de 2014 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1943, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 15 de diciembre de 2010 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 7 de mayo de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado los extremos reflejados en su solicitud, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En este caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, es lo cierto que la nacionalidad española originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho). Todo lo contrario, la abuela de la recurrente, nacida en España, perdió la nacionalidad española en 1908 al contraer matrimonio con un ciudadano cubano, el 22 de noviembre de 1908, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente en la fecha de matrimonio de los abuelos maternos de la promotora “La mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido”. Por lo tanto, en el momento de nacer la madre de la solicitante, en noviembre de 1912, aquélla (abuela materna) ya no ostentaba la nacionalidad española y, por tanto, la madre de la solicitante no es española de origen.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la madre de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela de la recurrente, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española por parte de la abuela como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria

Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto, sin embargo, la abuela contrajo matrimonio en Cuba en 1908 y, la madre de la interesada nació en dicho país en 1912, por lo que se puede afirmar sin margen de error que la vida de la abuela transcurrió en Cuba y no puede ser considerada exiliada ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, desestima el recurso interpuesto por Doña P. A. P. H. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 3 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (17ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, los que acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don P. R. H., presenta escrito en el Consulado General de España en La Habana (Cuba), a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que hace constar que nació el 12 de diciembre de 1952 en C., M., C. (Cuba), hijo de don P. R. T., nacido el 29 de junio de 1909 en L. V. (Cuba) y de Dª E. E. H. D., nacida el 16 de septiembre de 1920 en G., L. V.(Cuba); carnet de identidad cubano y certificado literal de nacimiento del interesado legalizado, expedido por el Registro del Estado Civil de Chambas (Cuba); certificado en extracto de inscripción de nacimiento y de defunción cubanas de la madre del interesado; certificado español de nacimiento del abuelo materno del interesado, don A. H. M., nacido en enero de 1884 en T. (España) y documentos de inmigración y extranjería del abuelo materno.

2. Con fecha 15 de julio de 2013, la encargada del registro civil consular dicta auto por el que se deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción de la nacionalidad española de origen del interesado, ya que estima que no se prueban suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en el interesado concurren los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.

3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente y se estime la opción a la nacionalidad española de origen establecida en la disposición adicional primera de la Ley 52/2007, aportando copias de los certificados españoles de nacimiento de dos hermanas de su madre, que recuperaron la nacionalidad española y de dos hijas de éstas que optaron por la nacionalidad española de origen, así como de los documentos de inmigración y extranjería del abuelo materno aportados por el interesado y por sus familiares, en los cuales el número del expediente coincide, si bien hay diferencias en cuanto al lugar de la inscripción, indicando el promotor que la diferencia obedece a un error en la confección del documento por parte de las oficinas registrales cubanas, que ha solicitado nuevos certificados de inmigración en las oficinas de su localidad y que los aportará debidamente legalizados en cuanto disponga de los mismos.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, estima que en la tramitación del expediente se han guardado las prescripciones legales y que el auto que se recurre resulta conforme a derecho. La encargada del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, en el que indica que, teniendo en cuenta que los documentos de inmigración y extranjería del abuelo aportados presentan ciertas irregularidades que hacen presumir falsedad documental, no permite determinar que en el solicitante concurren los requisitos exigidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.

5. Recibidas las actuaciones en la Dirección General de los Registros y del Notariado, se solicita del registro civil consular, requiera al promotor a fin de que aporte certificado literal de nacimiento de su progenitora, original y legalizado, así como certificado literal de las autoridades cubanas de inmigración y extranjería, actualizado, sobre la inscripción en el registro de extranjeros del abuelo materno del interesado.

Atendiendo al requerimiento el interesado aporta la siguiente documentación, actualizada y legalizada: certificado literal cubano de nacimiento de su madre y certificado en extracto de defunción, en el que se hace constar que el estado civil de la misma es soltera; documentos de inmigración y extranjería del abuelo materno del promotor, en los que se indican que no consta en el Registro de Ciudadanía que éste

haya obtenido la ciudadanía cubana por naturalización y que consta en el Registro de Extranjeros la inscripción formalizada en S. I. L., con el número de expediente

Junto con el oficio de remisión, la encargada del registro civil consular indica que no se aprecian incongruencias en cuanto a la legalización de dichos documentos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba), como español de origen, al nacido en Cuba el 12 de diciembre de 1952 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de diciembre de 2009 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil consular se dictó auto el 15 de julio de 2013, denegando lo solicitado.

III. El acuerdo apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su madre fuese española de origen, toda vez que los documentos de inmigración y extranjería del abuelo, no están expedidos en el formato, cuño y firma habitualmente utilizada por la funcionaria que los expide. Interpuesto recurso por el promotor, frente a la resolución desestimatoria anteriormente citada y a la vista de las alegaciones formuladas en el mismo, se le requiere a fin de que aporte documentación actualizada, debidamente legalizada, siendo atendido el requerimiento por el solicitante.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se

exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº 7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada, pero esto no ha sido ni debe ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello. En este caso, la certificación de la progenitora presentada procede del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, en quien basa su opción a la nacionalidad, concretamente de la madre del interesado. Asimismo se ha aportado certificado literal español de nacimiento del abuelo materno del promotor y certificados de inmigración y extranjería del mismo, debidamente legalizados, en los que se indica que no consta inscrito en el Registro de ciudadanía cubano y que consta la inscripción del mismo en el registro de extranjeros, así como certificado cubano de defunción de la progenitora del promotor, en el que se indica que el estado civil de la misma es soltera.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- se ha acreditado que el abuelo materno del promotor, español de origen, no perdió su nacionalidad española, por lo que la madre del optante nació originariamente española, cumpliéndose con el requisito esencial del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y dejar sin efecto el acuerdo apelado, instando al encargado del Registro Civil consular para que se proceda a la inscripción de nacimiento del recurrente con la marginal de la nacionalidad española por opción correspondiente.

Madrid, 07 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado/a del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (21ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. D^a. S. C. N., nacida el 16 de enero de 1957 en S., S. P. (Brasil), de nacionalidad brasileña, hija de don E. C. y de D^a N. D. S., nacidos en Brasil, presenta solicitud (Anexo I) en el Consulado de España en São Paulo el 27 de diciembre de 2011 a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, sin adjuntar ninguno de los documentos probatorios necesarios.

2. Con fecha 04 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo requiere a la interesada a fin de que subsane su solicitud, concediéndole un plazo de treinta días para que aporte la documentación que falta en el expediente. Dicho requerimiento fue notificado a la interesada el 12 de junio de 2015, de acuerdo con certificado de acuse de recibo del Servicio de Correos brasileño que se encuentra en el expediente y, transcurrido el plazo establecido, la promotora no presentó la documentación solicitada.

3. Con fecha 27 de julio de 2015, el encargado del registro civil consular, mediante auto, deniega lo solicitado por la interesada por no concurrir los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no haber aportado ninguno de los documentos que le fueron requeridos.

4. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando que no pudo aportar la documentación solicitada en el plazo establecido y acompañando, entre otros documentos, su certificado literal de nacimiento brasileño; los certificados literales de nacimiento brasileños de sus progenitores; el certificado brasileño de matrimonio de sus padres; la partida de bautismo española de su abuela materna, D^a I. L. G. y la certificación negativa de inscripción de la misma en el Registro Civil de Vilardevós (Orense).

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe en el que indica que, el análisis de la documentación integrante del expediente, no permite acreditar que la interesada se encuentre comprendida dentro del ámbito de aplicación del apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, toda vez que la abuela materna de la promotora perdió la nacionalidad española al contraer

matrimonio con ciudadano brasileño en fecha 27 de mayo de 1937, al amparo de lo dispuesto en el artº 22 del Código Civil en su redacción originaria, vigente en ese momento. Por consiguiente, la madre de la solicitante no ostenta la nacionalidad española de origen. Se aporta al expediente copia del certificado de matrimonio de los abuelos maternos de la interesada celebrado en Brasil.

El encargado del Registro Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe, redactado en los mismos términos expresados por el órgano en funciones de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en S, S P (Brasil) en 1957, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 27 de julio de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su progenitor sea español de origen, al no haber aportado ninguno de los documentos requeridos.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Brasil, es lo cierto que la nacionalidad originaria de la progenitora no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Si bien de la documentada aportada en fase de recurso, en particular partida de bautismo y certificado negativo de inscripción en el registro civil español de la abuela materna de la interesada, se constata que la misma es originariamente española, de acuerdo con lo establecido en el artº 22 del Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente en la fecha de matrimonio de la abuela de la promotora, Sra. L. G., “La mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido”. Así, la abuela de la solicitante, originariamente española, perdió la nacionalidad española al contraer matrimonio el 27 de mayo de 1937 con un ciudadano brasileño. Por lo tanto, en el momento de nacer la madre de la solicitante, 01 de agosto de 1938, aquélla (abuela de la interesada) ya no ostentaba la nacionalidad española y, por tanto, la madre de la promotora no es española de origen.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de Sao Paulo (Brasil)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (24ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Dª A. P. S., nacida el 30 de junio de 1989 en S. P. (Brasil), de nacionalidad brasileña, presenta en fecha 21 de junio de 2011 en el Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil), solicitud de opción a la nacionalidad española de origen (Anexo I) en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, sin acompañar ninguno de los documentos probatorios necesarios.

2. Con fecha 29 de mayo de 2015 el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) requiere a la interesada a fin de que aporte los documentos probatorios necesarios para subsanar su solicitud, otorgándole un plazo de treinta días para su aportación. El requerimiento de documentación fue notificado a la interesada el 11 de junio de 2015, de acuerdo con el certificado emitido por el Servicio de Correos Brasileño y, transcurrido un mes desde la notificación, la interesada no aportó ninguno de los documentos que le fueron requeridos.

3. Previo informe desfavorable del Canciller del Consulado General de España en São Paulo (Brasil), en funciones de ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular dicta auto en fecha 02 de septiembre de 2015 por el que se acuerda denegar la solicitud de opción a la nacionalidad española formulada por la interesada, al no haberse podido comprobar si se encontraba comprendida dentro del ámbito de aplicación del apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no haber aportado la documentación requerida.

4. Notificada la resolución, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citada, alegando que no tuvo tiempo para presentar los documentos en plazo, debido a las dificultades para conseguir el certificado literal español de nacimiento de sus abuelos paternos. Aportó, entre otros, fotocopias de la siguiente documentación: certificado literal de nacimiento brasileño de la interesada; certificado literal de nacimiento brasileño de sus padres, Don A. P. M. y Dª D. S.; certificado de matrimonio

brasileño de sus padres; certificado literal de nacimiento español de su abuela paterna, D^a M. M. G.; certificación española en extracto de acta de nacimiento de su abuelo paterno, don J. A. P. M.; libro de familia de los abuelos paternos y documentos de identidad de extranjero de los mismos, expedidos por las autoridades brasileñas, en los que consta su nacionalidad española.

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe indicando que, para verificar si la interesada cumple los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, deberían examinarse los originales de los certificados aportados, dado que constan únicamente fotocopias de los mismos, y el encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, redactado en los mismos términos formulados por el órganos en funciones de ministerio fiscal.

6. Recibidas las actuaciones en la Dirección General de los Registros y del Notariado, se solicita del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil), requiera a la interesada a fin de que aporte los documentos originales que por copia acompañó al escrito de recurso, que deberán ser presentados, en su caso, debidamente traducidos y legalizados.

El requerimiento de subsanación fue notificado a la interesada el 09 de marzo de 2016, según consta en el acuso de recibo remitido por el servicio de correos de Brasil, aportado al expediente y, transcurridos tres meses desde su notificación, la promotora no ha aportado ninguno de los documentos requeridos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida el 30 de junio de 1989 en S. P. (Brasil), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de junio de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre

de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 02 de septiembre de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no se ha podido acreditar que el padre de la promotora fuese español de origen, toda vez que la promotora no aportó ninguno de los documentos que le fueron requeridos dentro del plazo establecido al efecto. Interpuesto recurso por la interesada, aportó fotocopias simples de los documentos justificativos de su pretensión, siéndole requerida la aportación de los documentos originales, debidamente traducidos y legalizados. El citado requerimiento no fue atendido por la solicitante dentro de los plazos establecidos.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente expediente no ha podido acreditarse que la promotora cumpla los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, en particular, que su progenitora sea originariamente española, dado que no atendió al requerimiento de documentación dentro del plazo establecido al efecto.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de Sao Paulo (Brasil)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (35ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don C. A. M. Á., ciudadano cubano, presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que hace constar que nació el 11 de enero de 1966 en B., C. (Cuba), hijo de A. M. M., nacido en C., V. C. (Cuba) sin mencionar la fecha y de I. Á. M., nacida en C. Á., C. en 1939, casados en 1962, certificado de nacimiento del promotor, inscrito en 1978, 12 años después de su nacimiento, carné de identidad cubano del promotor, certificado no literal de nacimiento de la madre del promotor, Sra. Á. M., inscrita en 1952, 13 años después de su nacimiento, hija de E. Á. F., natural de España y de Á. M. M., natural de C. Á., literal de inscripción de nacimiento española del abuelo materno del promotor, Sr. Á. F., nacido en C.(Orense), en 1904, hijo de J. Á., segundo apellido ilegible y E. H., ambos naturales de la misma localidad, certificado no literal de defunción del abuelo materno del promotor, fallecido en Cuba en el año 1965 a los 61 años de edad, certificado no literal de matrimonio de los padres del promotor y certificados de las autoridades cubanas de inmigración y extranjería relativos al Sr. Á. F., expedidos a petición del promotor en el año 2010, declarando que consta inscrito en el Registro de extranjeros con nº de expediente, formalizado en L. H. a los 32 años, es decir en 1936 y que no consta inscrito en el Registro de Ciudadanía.

2. Con fecha 27 de noviembre de 2012 el encargado del registro civil consular, mediante resolución, deniega lo solicitado por el interesado ya que la documentación aportada, en la que se aprecian irregularidades, no permiten acreditar que su madre, Sra. Á. M., es española de origen.

3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando que probablemente se equivocó al utilizar el anexo I, ya que pretendía acogerse a la nacionalidad española por su condición de nieto de español, nacido en España.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que en el expediente examinado se han guardado en su tramitación las prescripciones legales y,

en consecuencia, el auto es conforme a derecho. La encargada del registro civil consular emite su informe preceptivo mostrando su conformidad con la decisión en su día adoptada, añadiendo que los documentos de inmigración y extranjería aportados no están expedidos en el formato habitual ni con la firma utilizada por la funcionaria que los suscribe, por lo que se aprecian irregularidades y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

5. Posteriormente este centro directivo requiere del promotor, a través del registro civil consular, certificados actualizados de las autoridades de inmigración y extranjería cubanas en relación con el Sr. Á. F., originales y debidamente legalizados, documentos que son aportados en agosto del año 2016 y que reiteran la inscripción del precitado en el registro de extranjeros y su no inscripción en el registro de ciudadanía como naturalizado cubano, si bien variando el nº de expediente, la localidad cubana y la edad en que se formalizó la inscripción,

6. Consta en el expediente solicitud, firmada por el interesado, en modelo oficial, anexo I, de nacionalidad española por opción (Apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007), declarando que hace constar que “la nacionalidad de origen de su progenitor es española”. Se incluye un párrafo que dice textualmente “la presente solicitud de nacionalidad española se fundamenta en que el solicitante es hijo/a de padre o madre originariamente español”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en C. (Cuba) en 1966 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de agosto de 2010 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 27 de noviembre de 2012, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, dicha certificación no fue aportada durante la tramitación del expediente y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto que la nacionalidad originaria de la madre no pudo entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, además de existir irregularidades en el formato y firma en algunos documentos cubanos sobre el abuelo materno del promotor, ciudadano nacido en España y originariamente español, pero habiéndose aportado al tiempo de proceder a resolver el recurso interpuesto nueva documentación, de la que no existen dudas formales que actualiza la información a que se referían aquellos documentos que adolecían de irregularidades, conviene tomar en consideración dichos datos y pese a que ha de estimarse correcto el auto recurrido que se atuvo, al tiempo de ser dictado, a los hechos acreditados por el interesado; no obstante constando ahora en el expediente el documento y aplicando criterios de economía procesal con el fin de evitar la reiteración del mismo debe tenerse en cuenta el mismo.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- se ha acreditado que la progenitora del optante ostentó la nacionalidad española de forma originaria por lo

que se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y dejar sin efecto el acuerdo apelado, instando al encargado del registro civil consular para que se proceda a la inscripción de nacimiento del recurrente con la marginal de la nacionalidad española por opción correspondiente.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (36ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Lima (Perú).

HECHOS

1. Don R. M. E. M., ciudadano peruano, presenta escrito en el Consulado de España en Miami, Florida (Estados Unidos de América), correspondiente a su domicilio, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que se hace constar que nació el 26 de febrero de 1985 en L., hijo de A. F. E. C., nacido en L. en 1949 y de R. M. M. P., nacida en P., I. (Perú) en 1949, casados en 1970, certificado literal de nacimiento del promotor, ambos progenitores de nacionalidad peruana, licencia de conducir del estado de Florida, tarjeta de residente permanente en Estados Unidos de América, desde el 30 de junio de 2009, certificado literal de nacimiento del padre del promotor, Sr. E. C., hijo de A. E., natural de Argentina y de dicha nacionalidad y de R. C., de nacionalidad peruana, documento notarial peruano de 1928 que eleva a público el documento privado entregado por don A. E. C., natural de España y residente en L., reconociendo como varios hijos naturales de su relación con G. P. G., natural de M. de 44 años, es decir nacida en 1884, alguno de ellos nacidos en Argentina y otros en M., entre ellos A. E., nacido en M. el 7 de noviembre de 1916, certificado literal de nacimiento español de A. F.A. P. y G., nacido en M. en 1916, hijo natural de G. P. G., natural de M. (Islas Filipinas) en 1882, siendo sus abuelos maternos naturales de Madrid, certificado de

las autoridades peruanas de migraciones y naturalizaciones, expedido en 1996, relativo a que el Sr. E. P. no se encuentra inscrito en el Registro de Naturalizaciones y copia de tarjeta de extranjero, expedida en Perú en 1977, del Sr. A. E., aunque consta nacido en 1917. La documentación fue remitida al Registro Civil Consular de Lima, competente en su caso para la inscripción.

2. Con fecha 28 de marzo de 2012, el encargado del registro civil consular requiere, a través del Registro Consular de Miami, del Sr. E., en aplicación de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y de Notariado de 4 de noviembre de 2008, que procediera a aportar certificado de nacimiento de su padre, debidamente apostillado, en el que se hiciera constar el nombre completo de su padre, abuelo del promotor y documentación que acredite que éste ostentaba la nacionalidad española cuando nació el padre del interesado.

El requerimiento fue reiterado con fecha 8 de abril de 2014, aportando el promotor documento de las autoridades peruanas de migración y naturalización relativa a que en los registros de nacionalidad no se encuentra inscripción de A. E.

3.- Previo informe del órgano en funciones de ministerio fiscal, con fecha 6 de noviembre de 2014 el encargado del registro civil consular, mediante resolución, deniega lo solicitado por el interesado porque una vez requerido para que acreditara las circunstancias en que basaba su petición, no había procedido a la aportación de toda la documentación pertinente, por lo que no quedaba acreditado que se encontrara en el supuesto contemplado por la Ley 52/2007.

4. Notificado el interesado, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando que su abuelo A. E. P. nació en Madrid en 1916 aunque con otro nombre que rectificó cuando en 1928 fue reconocido por A. E. C., añadiendo que los documentos presentados son los mismos utilizados por su padre, tíos paternos y primos que han obtenido la nacionalidad española, adjuntando inscripción literal de nacimiento de su padre en el Registro Civil Consular de Lima, con marginal de recuperación de la nacionalidad española con fecha 28 de abril de 2014, certificado literal de matrimonio peruano de sus abuelos paternos, celebrado en Perú en 1944, se hace constar que el contrayente es natural de España, certificación en extracto del nacimiento del abuelo del promotor, Sr. A. F. A. P. G., sin filiación paterno,

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este se ratifica en su informe previo ya que la documentación no se presentó cuando fue requerida, añadiendo que vista la posterior presentada podría resolverse el recurso en sentido favorable a la pretensión del promotor. El encargado del registro civil consular emite su informe en el mismo sentido del ministerio fiscal y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en L. (Perú) en 1985, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 31 de octubre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 6 de noviembre de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuese español de origen, al no haber aportado la documentación requerida, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba

de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 n°7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, dicha certificación no fue aportada con la solicitud, y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Perú, en este caso posteriormente en vía de recurso se aportó certificación del registro civil español, pese a lo cual no puede entenderse acreditada la nacionalidad de origen del padre del promotor, existiendo datos contradictorios en alguno de los documentos, respecto a la fecha de nacimiento del presunto abuelo paterno, respecto a la edad de la madre de éste y su lugar de nacimiento, según la inscripción de nacimiento de su hijo, Sr. A. F. A. P. G., ella nació en Filipinas, sin que conste acreditada su nacionalidad española, como tampoco la del presunto padre de su hijo, Sr. A. E. C., del que se menciona su nacimiento en España en el documento de reconocimiento de 1928, que además no reúne los requisitos previstos en la legislación española del momento ni fue inscrito en el registro civil español, pero no se acredita en forma alguna, mientras que en la inscripción de nacimiento de su hijo, Sr. E. C., padre del promotor se menciona que nació en Argentina y es de dicha nacionalidad, todo ello resulta insuficiente para acreditar la petición (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el progenitor del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. Debiendo significarse finalmente, respecto a la nacionalidad española otorgada a sus familiares, alegación formulada por el recurrente, sólo cabe decir que si se observa que la documentación que sirvió de base en su momento para la concesión de la nacionalidad española de aquéllos era similar a la contenida en el presente expediente, procedería que, si el ministerio fiscal considerara que les ha sido otorgada dicha nacionalidad de modo improcedente, cabría, a instancia de dicho órgano, incoar nuevos expedientes para dejar sin efecto la opción de nacionalidad y cancelar la inscripción practicada. A este respecto conviene recordar que, en desarrollo del principio básico de la legislación registral de concordancia del registro civil con la realidad, es doctrina reiterada de este centro directivo que, mientras subsista ese interés público de concordancia, no opera en el ámbito del registro civil el principio de autoridad de cosa juzgada.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de Lima (Perú)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (37ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por aplicación de la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución de la encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. D^a. T. V. D., ciudadana cubana, presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, disposición adicional séptima, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que nació el 15 de octubre de 1966 en L. I., G. (Cuba), hija de N. V. V. y L. D. G., ambos nacidos en G. en 1911 y 1935, respectivamente, casados en 1989, certificado de nacimiento de la promotora, en la que se menciona un lugar de nacimiento del padre diferente al mencionado en la hoja declaratoria de datos, carné de identidad cubano de la promotora, certificado literal de nacimiento español de la madre de la promotora, Sra. D. G., hija de P. D., sin segundo apellido, nacido en G. (Cuba) en 1911, de nacionalidad cubana y de M. G. F., nacida en V. M., isla de L. P. (Santa Cruz de Tenerife) en 1895 y de la que no consta su nacionalidad, con marginal de opción a la nacionalidad española con base en el artículo 20.1.b del Código Civil, según la redacción dada por la Ley 36/2002, con fecha 27 de enero de 2003 y anotación marginal con fecha 5 de junio de 2014 de subsanación del dato de nacionalidad de la madre de la inscrita, es cubana y certificación de matrimonio de los padres de la promotora, celebrado en Cuba en 1989, constando como nombre del padre de la contrayente P. D. A..

2. La encargada del registro civil consular, mediante resolución de fecha 21 de abril de 2014 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia, ya que no se han acreditado los requisitos exigidos, especialmente la nacionalidad española de origen de su progenitor.

3. Notificada la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando

que solicitó su nacionalidad fundamentada en su madre cuando lo correcto es que lo hubiera hecho basada en su abuela, Sra. G. F., casada con un ciudadano español, Sr. A. P., que llegaron a Cuba en 1924, dónde nació su madre 11 años después, en 1935, siendo inscrita en 1946 por un amigo de la familia, Sr. P. D. F., ya que su padre había fallecido, y aquél nunca se casó con su madre, adjunta certificados de las autoridades cubanas de inmigración y extranjería relativas a que el Sr. I. A. P. no consta inscrito en el registro de ciudadanía ni en el registro de extranjeros, lo mismo sucede en el caso de la abuela de la promotora, Sra. G. F., certificado de defunción de la precitada, fallecida en Cuba, a los 62 años en 1965, es decir habría nacido en 1903 y de estado civil casada, literal de nacimiento española de la abuela de la promotora, nacida en 1895, certificado literal de matrimonio español de la Sra. G. F. y el Sr. A. P., en V. M. en 1913, inscripciones de nacimiento y defunción en el Registro Civil Consular de La Habana, en el Registro Civil de Villa de Mazo y en el registro civil cubano de familiares de la recurrente, según declara, que ostentan los apellidos A. G., nacidos con bastante anterioridad a la madre de la promotora, certificado de nacimiento del abuelo de la promotora, Sr. D. F., nacido en Cuba en 1913 e inscrito en 1975, certificado de que el precitado era de estado civil soltero y certificado de defunción del mismo, en Cuba en 1988 siendo soltero.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. La encargada del registro civil consular emite su informe preceptivo conforme con la decisión previamente adoptada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

5. Consta en el expediente solicitud, firmada por la interesada, en modelo oficial, anexo I, de nacionalidad española por opción (apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007), en el que se hace constar en el apartado correspondiente que la nacionalidad de origen de su progenitor es “española” y en el que se incluye un párrafo que dice textualmente “la presente solicitud de nacionalidad española se fundamenta en que el solicitante es hijo/a de padre o madre originariamente español”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º, 23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y 1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen a la nacida en Cuba en 1966, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

En este caso la madre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 n°1, b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita el 27 de enero de 2003 e inscrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de noviembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil se dictó auto el 21 de abril de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su madre no fue española de origen, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

Hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución Española y 24 del Código Civil.

Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2 del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código Civil, por la que accedió a la ciudadanía española el padre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.nº1.b) del Código Civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V. En el presente caso la progenitora de la optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código Civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición

adicional séptima de la Ley 52/2007. Sin que haya quedado acreditada la relación de filiación de la progenitora de la promotora con el ciudadano español I. A. P., a tenor de la documentación cubana de su nacimiento en la que consta que es hija del Sr. P. D. F., ciudadano natural de Cuba y de dicha nacionalidad.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado/a del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (38ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren optado anteriormente por la nacionalidad española de origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don Y. G. S., ciudadano cubano, presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, disposición adicional séptima, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que nació el 9 de enero de 1980 en M., H. (Cuba), hijo de R. G. A., nacido en Cuba en 1952 y de M. S. C., nacida en S. T., H. (Cuba) en 1960, certificado de nacimiento del promotor, carné de identidad cubano del promotor, certificado de nacimiento cubano del padre del promotor, Sr. G. A., inscrito en 1972, 20 años después de su nacimiento, hijo de J. G. S., nacido en España y de G. V. A. V., nacida en P., C. (Cuba), inscripción literal de nacimiento española del abuelo paterno del promotor, Sr. G. S., nacido en T. (La Coruña) en 1900, hijo de P. G. P., nacido en C. (La Coruña) y de J. S., sin que conste su segundo apellido, nacida en O. (La Coruña) y copia de carta de ciudadanía cubana otorgada al precitado en 1940.

2. El encargado del registro civil consular, mediante resolución de fecha 3 de enero de 2013 deniega lo solicitado por el interesado, habida cuenta que el progenitor del

promotor, siendo éste mayor de edad, también optó por la nacionalidad española con base en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

3. Notificado el interesado, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando que la misma se basaba en la nacionalidad española de su abuelo, no de su padre que no era español y estaba también en proceso de naturalización.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. La encargada del registro civil consular emite su informe preceptivo conforme con la decisión previamente adoptada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

5. Consta en el expediente solicitud, firmada por el interesado, en modelo oficial, anexo I, de nacionalidad española por opción (apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007). Se incluye un párrafo que dice textualmente “la presente solicitud de nacionalidad española se fundamenta en que el solicitante es hijo/a de padre o madre originariamente español.

6. Consta a esta Dirección General que el padre del promotor, Sr. G.A., optó a la nacionalidad española con base en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, con fecha 22 de septiembre de 2010, siendo inscrita en el Registro Civil del Consulado de España en La Habana con fecha 16 de junio de 2016, con marginal de nacionalidad española por la opción descrita.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2010.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Cuba en 1980, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En este caso el padre del interesado solicitó su nacionalidad española en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada mediante

solicitud. suscrita el 22 de septiembre de 2010, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad..

III. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 13 de diciembre de 2010 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó acuerdo el 20 de febrero de 2013 denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el padre del promotor también ha optado por la nacionalidad española en base a la misma norma cuando aquél ya era mayor de edad, lo que le impide acceder a opción de nacionalidad según la instrucción de esta dirección general de 4 de noviembre de 2008, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la disposición adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor del recurrente opta por la nacionalidad española en ejercicio de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, solicitada el 22 de septiembre de 2010, el ahora optante, nacido el 9 de enero de 1980, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima.

V. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso el progenitor del recurrente ostentaría la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los

adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogidos al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se

explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la disposición transitoria tercera.

Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas disposiciones transitorias (segunda y tercera) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar

por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria tercera. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria segunda (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la disposición transitoria tercera, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución Española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria tercera “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las

personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código Civil).

XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta dirección general.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al

artículo 22 nº1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, como en el caso presente ya que no consta acreditado que la pérdida o renuncia a la nacionalidad española del abuelo del promotor, Sr. G. S., se hubiera producido como consecuencia del exilio.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (39ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución de la magistrada juez encargada del Registro Civil de Salamanca.

HECHOS

1. Don J. G. R. R., ciudadano estadounidense, presenta escrito en el Consulado de España en San Juan (Puerto Rico), correspondiente a su domicilio, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que hace constar que nació el 13 de agosto de 1965 en S., hijo de N. R. N., nacido en N. Y.(Estados Unidos de América) en 1939 y de M. R. F., nacida en B. (Puerto Rico) en 1942, casados en 1964, licencia de conducir de Puerto Rico y pasaporte estadounidense del promotor, certificado literal de nacimiento español del promotor, certificado de nacimiento estadounidense del promotor, inscrito en diciembre de 1965 en el Consulado General de Estados Unidos de América en Madrid, certificado literal de nacimiento español de la madre del promotor, Sra. R. F., inscrita en el Registro Civil Consular de San Juan, hija de G. R. S. M., nacido en I. (Asturias) en 1899 y de nacionalidad española y de H. F., segundo apellido ilegible, nacida en R. P. (Puerto Rico) en 1917 y de nacionalidad estadounidense, casados en 1940, con marginal de recuperación de la nacionalidad española con fecha 7 de diciembre de

2011 e inscrita el día 15 del mismo mes. La documentación es remitida al Registro Civil de Salamanca, competente en su caso para la inscripción.

2. El ministerio fiscal emite informe manifestando no tener inconveniente en acceder a lo solicitado. Con fecha 7 de octubre de 2013 la encargada del registro civil, mediante resolución, deniega lo solicitado por el interesado ya que cuando formula su solicitud su progenitora no había recuperado la nacionalidad española.

3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 requiere que el progenitor del optante fuera español de origen no que haya recuperado dicha nacionalidad.

4. Notificado el ministerio fiscal, este informa ahora que debe confirmarse la resolución impugnada porque no han quedado acreditados los requisitos de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. La encargada del Registro Civil de Salamanca remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil de Salamanca como español de origen al nacido en S. en 1965, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de noviembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil se dictó auto el 7 de octubre de 2013, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que en el momento de su solicitud su madre hubiera recuperado la

nacionalidad española de origen, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe posterior al recurso interpuesto.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, dicha certificación fue aportada durante la tramitación del expediente y es lo cierto que la nacionalidad española originaria de la madre pudo entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación que incluye la inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española por parte de la inscrita, nacida en Puerto Rico hija de ciudadano español.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- se ha acreditado que la progenitora de la optante ostentó la nacionalidad española de forma originaria por lo que se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y dejar sin efecto el acuerdo apelado, instando al encargado del registro civil para que se proceda a la inscripción de la marginal de la nacionalidad española por la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, apartado primero en la inscripción de nacimiento del optante.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Salamanca.

Resolución de 7 de octubre de 2016 (41ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Sao Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Don J-C. F. A., ciudadano brasileño presenta escrito en el Consulado de España en Sao Paulo, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, no aportando documentación alguna, tras posterior requerimiento del encargado del registro civil consular adjunta en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que se hace constar que nació el 10 de diciembre de 1959 en S. P. (Brasil) hijo de C. J. F., nacido en S. P. en 1922 y de D. A., nacida en S. P. en 1929, casados en 1947, documento de identidad brasileño del promotor, certificación literal de nacimiento del promotor, certificado literal de nacimiento del padre del promotor, Sr. F., hijo de F-J. F. y de E. L. C-J., ambos brasileños y de padres brasileños, certificado literal de nacimiento de la madre del promotor, Sra. A., hija de José A. y Antonio N., casados, certificación negativa del Registro Civil de Málaga, presunto lugar de nacimiento del abuelo materno del promotor, respecto a que no consta inscrito J-A. entre el 24 de julio y el 26 de agosto de 1907, certificación negativa de la Diócesis de Málaga respecto a la imposibilidad de acreditar el bautismo del Sr. A. por la destrucción de los archivos entre 1931 y 1936, certificado literal de matrimonio de los padres del promotor, ambos brasileños, se hace constar que los padres de la contrayente, conteniendo error en los datos de uno de ellos, son naturales de España, certificación negativa de naturalización del Sr. A., expedida por el departamento de extranjeros.

2. Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, con fecha 25 de noviembre de 2014 el encargado del registro civil consular, mediante resolución, deniega lo solicitado por el interesado porque una vez requerido para que acreditara las circunstancias en que basaba su petición, no había procedido a la aportación de toda la documentación pertinente, especialmente el certificado de nacimiento de su abuelo español, por lo que no quedaba acreditado que se encontrara en el supuesto contemplado por la Ley 52/2007.

3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando la imposibilidad de presentar el documento de nacimiento español de su abuelo, pero que aportó los documentos que probaban la entrada, permanencia y fallecimiento

como españoles de sus abuelos, los cuales tenían cédula personal como extranjeros y en la que constaba su nacionalidad española, adjunta certificado del Archivo Público del Estado de Sao Paulo sobre la existencia de una ficha de registro correspondiente a J. A. M., nacido en M. en julio de 1907, hijo de J. A. R. y M. M. C., español y que desembarcó en Brasil por S. (Sao Paulo), aunque no consta fecha sólo unas referencias a 1971 y 1973 y documento de la división de migración correspondiente a J. A. M., sin que conste ninguna fecha.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este emite su informe mostrándose conforme con la resolución impugnada, ya que no se ha aportado documentación alguna de nacimiento del ciudadano originariamente español. El encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo de acuerdo con la decisión en su día adoptada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Brasil en 1959, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 6 de octubre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 25 de noviembre de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su madre fuese española de origen, al no haber aportado la documentación suficiente que le fue requerida, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria. A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-. En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Brasil, no obstante de la misma no puede entenderse acreditada la nacionalidad de origen de la madre del promotor, que contiene un error en la identidad de uno de sus progenitores, ya que se mencionan que son José A. y Antonio N., error que también se contiene en el certificado de matrimonio de los padres del promotor, en el que se menciona a José Alarcón y Antonio Nabo, aunque sí menciona su nacimiento en España, pero además no se ha aportado documento alguno que acredite el nacimiento del abuelo materno del promotor en España, no siendo suficientes los aportados en vía de recurso, por lo que son insuficientes otros para acreditar la petición (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Sao Paulo (Brasil)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (55ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.º1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don D. S. R. presenta escrito en el Consulado de España La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y, el de su madre y su abuelo, expedidos por el registro civil español, constando en el de la madre que optó a la ciudadanía española en base al artículo 20.º1.b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, cuando el recurrente había alcanzado la mayoría de edad. En vía de recurso aporta certificado de nacimiento español de su abuela y certificado de matrimonio de los abuelos, que tuvo lugar en España en 1920. Así mismo presenta documentación sobre inmigración y extranjería de la abuela a efectos de acreditar que se inscribió en el registro de extranjeros cubano, a la edad de 60 años. Interesa recordar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Código Civil, en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente en la fecha de matrimonio de los abuelos maternos del promotor “La mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido”.

Por otra parte, el solicitante aportó documentación, de dudosa procedencia y autenticidad, toda vez que los documentos de inmigración y extranjería del abuelo, acompañados al expediente, hacen referencia a un número de expediente (.....) inscrito en el registro de extranjeros de la Dirección de Inmigración y Extranjería de Cuba, el cual es igual al que consta consignado en el certificado de matrícula consular expedido en el año 1931 por el Vicecónsul Honorario de España en Villa Clara. Posteriormente en fecha 8 de abril de 2011, el solicitante aportó carta de intención de ciudadanía de su abuelo que contradice lo dictado por las autoridades de inmigración y extranjería. Adicionalmente cabe señalar que en el legajo de la madre del solicitante consta certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería de Cuba con número de expediente diferente al consignado en los documentos aportados por el optante. Todas estas irregularidades hacen que la mencionada documentación revista una presunción de falsedad que no permite tomarla en consideración.

2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 18 de junio de 2012 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil Consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º, 23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y 1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Cuba en 1971, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita el 8 de febrero de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 11 de septiembre de 2007, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 13 de julio de 2010 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto 18 de junio de 2012 denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que no prueba los hechos manifestados en su declaración, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

Hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución Española y 24 del Código Civil.

Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los

dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código Civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20 nº1.b) del Código Civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V. En el presente expediente, la progenitora del optante, nacida en 1931, ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código Civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de españoles de los abuelo del optante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Además no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española, por parte de los abuelos, como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto y sí se ha acreditado que su hija, madre del recurrente nació en Cuba en 1931, por lo que los abuelos ya residían en esa fecha en dicho país y no puede ser considerados exiliados ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por don D. S. R. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se

establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (56ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña E. S. R. presenta escrito en el Consulado de España La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y, el de su madre y su abuelo, expedidos por el registro civil español, constando en el de la madre que optó a la ciudadanía española en base al artículo 20.nº1.b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, cuando la recurrente había alcanzado la mayoría de edad. En vía de recurso aporta certificado de nacimiento español de su abuela y certificado de matrimonio de los abuelos, que tuvo lugar en España en 1920. Así mismo presenta documentación sobre inmigración y extranjería de la abuela a efectos de acreditar que se inscribió en el registro de extranjeros cubano, a la edad de 60 años. Interesa recordar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente en la fecha de matrimonio de los abuelos maternos de la promotora, “La mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido”.

Por otra parte, la solicitante aportó documentación, de dudosa procedencia y autenticidad, toda vez que los documentos de inmigración y extranjería del abuelo, acompañados al expediente, hacen referencia a un número de expediente (.....) inscrito en el registro de extranjeros de la Dirección de Inmigración y Extranjería de Cuba, el cual es igual al que consta consignado en el certificado de matrícula consular expedido en el año 1931 por el Vicecónsul Honorario de España en Villa Clara. Posteriormente

en fecha 8 de abril de 2011, la solicitante aportó carta de intención de ciudadanía de su abuelo que contradice lo dictado por las autoridades de inmigración y extranjería. adicionalmente cabe señalar que en el legajo de la madre de la solicitante consta certificado de la Dirección de Inmigración y Extranjería de Cuba con número de expediente diferente al consignado en los documentos aportados por la optante. Todas estas irregularidades hacen que la mencionada documentación revista una presunción de falsedad que no permite tomarla en consideración.

2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 18 de junio de 2012 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º, 23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y 1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1954, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita el 8 de febrero de 2007 e inscrita en el Registro

Civil Consular de España en La Habana el 11 de septiembre de 2007, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de marzo de 2010 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto 18 de junio de 2012 denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que no prueba los hechos manifestados en su declaración, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

Hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución Española y 24 del Código Civil.

Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla,

así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código Civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20 nº1.b) del Código Civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V. En el presente expediente, la progenitora de la optante, nacida en 1931, ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código Civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de españoles de los abuelos de la optante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Además no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española, por parte de los abuelos, como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto y sí se ha acreditado que su hija, madre de la recurrente nació en

Cuba en 1931, por lo que los abuelos ya residían en esa fecha en dicho país y no puede ser considerados exiliados ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por doña E. S. R. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)

Resolución de 14 de octubre de 2016 (14ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en San José (Costa Rica).

HECHOS

1. Don T.-F. P. A., ciudadano costarricense, presenta escrito en el Consulado General de España en San José, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació en S. (Costa Rica), el 27 de julio de 1965, hijo de A.-I. P. M., nacido en S. en 1934 y de M.-E. A. H., nacida en S. en 1938, casados en 1959, cédula de identidad costarricense del promotor, inscripción literal de nacimiento del promotor, consta que es hijo de costarricenses, inscripción literal de nacimiento de la madre del promotor, Sra. A. H., hija de costarricenses, inscripción no literal de nacimiento del padre del promotor, Sr. P. M., inscrito en 1952, 18 años después de su nacimiento, hijo de E. P. A., español y de E. M. C., costarricense, inscripción literal de matrimonio de los padres del promotor, ambos contrayentes constan como costarricenses e hijos de costarricenses, certificado literal de nacimiento costarricense de persona identificada como F.-M. P. A., cuya vinculación con el promotor no se menciona, nacido en Costa Rica en 1901 e inscrito ese mismo año por su padre, F. P. y A. A., españoles y certificado de la inscripción como costarricense de origen del precitado, solicitada en comparecencia en el Registro Civil local en 1943.

2. Con fecha 3 de abril de 2014 la encargada del registro civil consular, mediante resolución, deniega lo solicitado por el interesado ya que de la documentación aportada no se establece que concurren los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la prueba de su filiación con un español de origen.

3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, alegando su condición de hijo y nieto de ciudadano español, añadiendo que cuando su abuelo llegó a Costa Rica tuvo varios hijos y muchos más nietos a los que en su mayoría se les ha concedido la nacionalidad española, por lo que considera que tiene derecho a la nacionalidad española por la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este no formula alegación alguna. La encargada del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución. Posteriormente este centro directivo requirió del interesado, a través del Registro Civil Consular de San José, nueva documentación, certificado literal de nacimiento de su padre y de su abuelo paterno, ambos nacidos en Costa Rica. El Sr. P. presenta certificación no literal de nacimiento de su padre, que difiere en formato y alguno de los datos de la presentada con la solicitud inicial y en la que no consta la nacionalidad de los padres del inscrito, certificaciones no literales de nacimiento de su abuelo paterno, nacido en Costa Rica en 1898, en las que no consta la fecha de inscripción, en una consta que la nacionalidad de sus padres, bisabuelos del promotor, era la española y en la otra que eran costarricenses aunque con una anotación de 1939 relativa a que los padres del inscrito eran españoles, en una consta como E. M. y en otra como E. M. G. y, por último, presenta certificado de la constancia en el registro de naturalizados de Costa Rica de la inscripción en 1961 del Sr. E.-M. G. P. A.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en S. (Costa Rica) en 1965, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española

de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 7 de septiembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil se dictó auto el 3 de abril de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuese español de origen, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Costa Rica, esta tampoco permite tener por acreditada su nacionalidad española de origen, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente, ya que su padre y abuelo paterno del promotor, Sr. P. A., nacido en Costa Rica en 1898, no llegado a dicho país como alega el recurrente, según se hizo constar hijo de españoles, de los que no consta inscripción de nacimiento española, fue inscrito en el registro civil local aunque desconocemos la fecha, en todo caso antes de 1939, momento en el que se rectificó la nacionalidad de sus padres, circunstancia que teniendo en cuenta lo establecido en la Constitución de Costa Rica de 1871, vigente en su último periodo de 1919 a 1949, respecto a la consideración de naturales costarricenses, no naturalizados, de los hijos de extranjero, en este caso de ciudadano presuntamente nacido en España y del que no se acredita el mantenimiento de su nacionalidad española, y que se inscriban por

su propia voluntad en el Registro Cívico después de los 21 años, o sean inscritos por sus padres antes de dicha edad.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el progenitor de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en San José (Costa Rica).

Resolución de 14 de octubre de 2016 (15ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Ciudad de Guatemala (Guatemala).

HECHOS

1. Dª. M.-E. V. D., ciudadana guatemalteco, presenta escrito en el Consulado de España en Los Ángeles, California (Estados Unidos de América), correspondiente a su domicilio, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que se hace constar que nació el 1 de abril de 1974 en C. (Guatemala), hija de A. V. M., nacido en la misma localidad en 1947 y de A. D. R., nacida en R. en 1935, certificado no literal de nacimiento de la promotora, pasaporte guatemalteco de la promotora, certificado no literal de nacimiento del padre de la promotora, Sr. V. M., hijo de J. M., sin segundo apellido y sin lugar de origen y de E. V., sin segundo apellido y originario de España, sin que conste la nacionalidad de los progenitores, certificado no literal de matrimonio de los padres de la promotora, celebrado en C. en 1994, certificado literal de nacimiento español de E. V. P., presunto abuelo paterno de la promotora, ya que en la documentación de

Guatemala no consta el segundo apellido, nacido en A. (Palencia) en 1878, hijo de F. V. y de J. P., ambos naturales de la misma localidad. La documentación fue remitida al Registro Civil Consular de Guatemala, competente en su caso para la inscripción.

2. Posteriormente el Registro Civil Consular de Guatemala solicita del de Los Ángeles que debe completarse la documentación con algún documento oficial español correspondiente al Sr. V. P., pasaporte, inscripción en el Registro de Matrícula Consular, etc o documento guatemalteco que acredite que el precitado, ciudadano nacido en España y originariamente español mantenía dicha nacionalidad en 1947 cuando nació su hijo y padre de la promotora. Con fecha 28 de febrero de 2011, se hace llegar el requerimiento a la promotora, que el día 1 de marzo siguiente, presenta escrito alegando la nacionalidad española de su abuelo y que éste siempre la mantuvo, aportando certificado no literal de nacimiento de su padre, igual al que ya constaba en el expediente salvo porque en el apartado de lugar de origen del padre se ha sustituido España por nacionalidad española y certificado del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, relativo a que no consta entre los registros de nacionalidades concedidas el nombre del Sr. V. P.

3. Con fecha 19 de febrero de 2015 el encargado del registro civil consular, mediante resolución, deniega lo solicitado por la interesada porque con la documentación aportada no quedaba acreditado que se encontrara en el supuesto contemplado por la Ley 52/2007, pues no se acreditaba la nacionalidad española de origen de su progenitor.

4. Notificada la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, reiterando las alegaciones formulada en su escrito anterior, añadiendo que ella nunca manifestó que su padre fuese español de origen sino que realizó los trámites como nieta de ciudadano español, aporta nuevo certificado no literal de nacimiento del Sr. V. D., diferente en formato a los dos anteriores, en el que se menciona la edad de los padres, 38 la madre y 68 el padre, la nacionalidad española de este y que el fue la persona que declaró el nacimiento para la inscripción, identificándose con documento de Guatemala nº 410 y expedido en C.

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que procede desestimar el recurso. La encargada del registro civil consular emite su informe en el mismo sentido del ministerio fiscal y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

6. Consta en el expediente solicitud, firmada por la interesada, en modelo oficial, anexo I, de nacionalidad española por opción (apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007), declarando que hace constar que “la nacionalidad de origen de su progenitor es española”. Se incluye un párrafo que dice textualmente “la presente solicitud de nacionalidad española se fundamenta en que el solicitante es hijo/a de padre o madre originariamente español”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Guatemala en 1974, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 28 de enero de 2010 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 19 de febrero de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuese español de origen, al no ser suficiente la documentación aportada tras ser requerida, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba

de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, dicha certificación no fue aportada con la solicitud, y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Guatemala, mediante ésta no puede entenderse acreditada la nacionalidad de origen del padre del promotor, existiendo datos que han sido sustituidos en alguno de los documentos expedidos por el Registro Civil de Guatemala, sin que conste el fundamento del cambio, concretamente el lugar de origen del abuelo paterno, España, por su nacionalidad, española, sin que el mantenimiento de la misma quede acreditado, por lo que resulta insuficiente para acreditar la petición (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el progenitor del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Guatemala.

Resolución de 14 de octubre de 2016 (16ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren optado anteriormente por la nacionalidad española de origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución de la encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don M. P. C., ciudadano cubano, presenta escrito en el Consulado de España en La Habana, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, disposición adicional séptima, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que nació el 12 de marzo de 1978 en M. (Cuba), hijo de G.-M. P. F., nacido en G. (Cuba) en 1949 y E.-E. C. R., nacida en P. (Cuba) en 1951, certificado no literal de nacimiento del promotor, carné de identidad cubano del promotor e inscripción literal de nacimiento española de la madre del promotor, Sra. C. R., hija de E.-F. C. Q., nacido en P. en 1920 y de nacionalidad cubana, y de C. R. G., nacida en G. (Cuba) en 1925 y de nacionalidad cubana, con marginal de opción a la nacionalidad española con base en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 con fecha 14 de abril de 2009.

2. La encargada del registro civil consular, mediante resolución de fecha 10 de septiembre de 2013 deniega lo solicitado por el interesado, habida cuenta que su progenitora optó por la nacionalidad española con base en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en el año 2009 cuando el interesado ya era mayor de edad.

3. Notificado el interesado, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando la nacionalidad española de su abuela materna, sobre la que según manifiesta insistió al registro consular cuando presentó su solicitud, por lo que no le queda clara la negativa a su petición, adjuntando inscripción literal de nacimiento de su abuela materna, Sra. Ramos González, en el Registro Civil Consular de La Habana, hija de Á.-T. R. C., nacido en P. (Santa Cruz de Tenerife) en 1891 y de nacionalidad española y de A. G. H., nacida en Canarias en 1905 y de nacionalidad española, con marginal de que la inscrita recuperó la nacionalidad española en noviembre del año 2003 y fue inscrita en enero del año 2004, también aporta documento consular relativo a la concesión de prestación económica que para el año 2007 la abuela del promotor había solicitado al gobierno español.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. La encargada del registro civil consular emite su informe preceptivo conforme con la decisión previamente adoptada, añadiendo que el Sr. Piedra, ya formuló una solicitud similar en octubre del año 2010, que fue denegada en el mismo año, impugnada por el interesado mediante recurso de apelación que también fue desestimado con fecha 13 de marzo de 2012, mediante resolución cuya copia consta en el expediente, y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único

de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Cuba en 1978, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En este caso la madre del interesado solicitó su nacionalidad española en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada mediante solicitud. suscrita el 14 de abril de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad..

III. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 de octubre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil se dictó acuerdo el 10 de septiembre de 2013 denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el interesado no reúne los requisitos necesarios para admitir su opción de nacionalidad española, ya que su progenitora había optado por la misma en base a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 cuando él era mayor de edad, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la disposición adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

Esta cuestión fue abordada por la instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 n° 1 a) del Código Civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora del recurrente opta por la nacionalidad española en ejercicio de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, solicitada el 14 de abril de 2009, el ahora optante, nacido el 12 de marzo de 1978, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima.

V. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso la progenitora del recurrente ostentaría la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogidos al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en

cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la disposición transitoria tercera.

Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas disposiciones transitorias (segunda y tercera) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad,

dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta dirección general de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria tercera. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición

transitoria segunda (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la disposición transitoria tercera, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución Española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria tercera “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI.- Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminedada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 n°1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 n°2, f del Código Civil).

XII.- La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, como en el caso presente ya que no consta acreditado que la pérdida o renuncia a la nacionalidad española de la abuela del promotor, Sra. Ramos González, luego recuperada se hubiera producido como consecuencia del exilio.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

Resolución de 14 de octubre de 2016 (17ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. D^a. A. C. R., ciudadana cubana, presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 12 de julio de 1965 en B. (Cuba), hija de E. C. R., nacido en B. en 1926 y L. M. R. B., nacida en Q. en 1923, certificación literal de nacimiento de la promotora, en la que consta que su abuelo materno era natural de Canarias, carné de identidad cubano de la promotora, certificación literal de nacimiento cubano de su madre, Sra. R. B., hija de M. R. R., nacido en Canarias y J. B. A., nacida en Q., abuelos paternos y maternos naturales de Canarias, certificación literal de nacimiento española del abuelo materno de la promotora, Sr. R. R., nacido en T. (Las Palmas), en 1896, hijo de G. R. P. y M. R., certificación literal de matrimonio de los padres de la promotora, celebrado en Cuba en 1960, certificado literal de matrimonio de los abuelos maternos de la promotora, celebrado en Cuba en 1921 y copia de la inscripción en el registro civil cubano de la comparecencia en 1927 del Sr. R. R. para optar a la ciudadanía cubana con previa renuncia a su ciudadanía de origen, a los 30 años, casado y con 3 hijos, entre ellos la madre de la promotora, se hace constar como fundamento de la petición el artículo 13.b de la Constitución “vigente” en la República de Cuba, éste artículo en la Constitución de 1901, vigente en 1927, no tiene nada que ver con la nacionalidad cubana y su forma de obtención.

2. Con fecha 20 de marzo de 2014 la encargada del registro civil consular, mediante resolución, deniega lo solicitado por el interesado ya que de la documentación aportada, en la que se aprecian irregularidades, no se establece que concurren los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, no pudiendo accederse a lo solicitado.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando que la nacionalidad española invocada es la de su abuelo, no la de su padre como consignó por error en su solicitud, por la defectuosa información recibida, añadiendo que en el Consulado deben constar documentos relativos a su abuelo que han servido para la concesión de la nacionalidad a otros familiares, sin mencionar datos de los mismos.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. La encargada del registro civil consular emite su informe preceptivo ratificándose en la decisión adoptada en su día, añadiendo que la carta de ciudadanía aportada para acreditar la nacionalidad de origen de la progenitora de la promotora resulta irregular ya que incluye una referencia legal a un artículo, 13.b de la Constitución vigente en 1927, cuya temática no guarda relación y sí que corresponde a la Constitución de 1940, por lo que no podría estar en un documento extendido 13 años antes y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

5. Consta en el expediente solicitud, firmada por la interesada, en modelo oficial, anexo I, de nacionalidad española por opción (apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007), declarando que hace constar que “la nacionalidad de origen de su progenitor es española”. Se incluye un párrafo que dice textualmente “la presente solicitud de nacionalidad española se fundamenta en que el solicitante es hijo/a de padre o madre originariamente español”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1966, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada con fecha 30 de octubre de 2009 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil se dictó auto el 20 de marzo de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que

fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aunque no es obstáculo para la tramitación de la solicitud que la certificación corresponda al país de su nacimiento, en este caso Cuba, es lo cierto que la nacionalidad originariamente española de la progenitora no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, habida cuenta las irregularidades observadas por la encargada del registro civil consular en el documento registral cubano que supuestamente acreditaba el mantenimiento de la condición de extranjero, como ciudadano español, del Sr. Rivero Ramos, abuelo del optante en su residencia en Cuba, irregularidades relacionadas con el contenido y fundamento legal de la ciudadanía otorgada con base en un legislación todavía no existente en la época de redacción del documento.

VI. Debiendo significarse finalmente, respecto a la nacionalidad española otorgada a sus familiares, alegación formulada por la recurrente, sin datos concretos, sólo cabe decir que si se observa que la documentación que sirvió de base en su momento para la concesión de la nacionalidad española de aquéllos era similar a la contenida en el presente expediente, procedería que, si el ministerio fiscal considerara que les ha sido otorgada dicha nacionalidad de modo improcedente, cabría, a instancia de dicho órgano, incoar nuevos expedientes para dejar sin efecto la opción de nacionalidad y cancelar la inscripción practicada. A este respecto conviene recordar que, en desarrollo del principio básico de la legislación registral de concordancia del registro civil con la realidad, es doctrina reiterada de este centro directivo que, mientras subsista ese interés público de concordancia, no opera en el ámbito del registro civil el principio de autoridad de cosa juzgada

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

Resolución de 14 de octubre de 2016 (18ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por aplicación de la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución de la encargada del Registro Civil Consular en San José (Costa Rica).

HECHOS

1. D^ª. K. G. S., ciudadana costarricense, presenta escrito en el Consulado de España en San José a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, disposición adicional séptima, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que nació el 14 de abril de 1972 en S., hija de C. G. V., nacido en R. (Italia) en 1945 y M.-A. S. G., nacido en Panamá en 1944, documento consular sustitutivo de certificado de nacimiento del padre de la promotora, Sr. G. V., expedido por la Embajada de Italia en San José, certificado literal de nacimiento español de la madre de la promotora, Sra. S. G., hija de A.-A. S. H., nacido en B. (Argentina) en 1915, de nacionalidad argentina y de J.-T. G. S., nacida en C. (Lérida) en 1920 y de nacionalidad española, casados en España en 1937 y con marginal de opción a la nacionalidad española con base en el artículo 20.1.b del Código Civil, según la redacción dada por la Ley 36/2002, con fecha 24 de febrero de 2009 e inscrita el 13 de abril siguiente, sin renunciar a su nacionalidad costarricense anterior, certificado literal de nacimiento de la promotora, en el que se hace constar que es hija de costarricenses, certificado literal de nacimiento argentino del abuelo materno de la promotora, Sr. S. H., identificado con sólo el primer apellido, hijo de T. S., español y soltero y sin que, salvo error, conste su filiación materna, inscripción literal de nacimiento española de la abuela materna de la promotora, Sr. G. S., hija de M. G. y de R. S., literal de matrimonio de los padres de la promotora, celebrado en Costa Rica en 1969, el contrayente consta como italiano e hijo de italianos y la contrayente como costarricense hija de ciudadano del que no se menciona la nacionalidad y de ciudadana costarricense, resolución del Ministerio de Hacienda español relativa a la pensión que percibe el abuelo materno de la promotor como miembro de las Fuerzas Armadas al servicio de la República española en 1937,

documento de empadronamiento en Barcelona, en el año 1930, en el que consta el Sr. S. G. con sus padres T. S. y P. H., pasaporte expedido a la abuela materna de la promotora por el Cónsul de España en Toulouse, sin que se aprecie la fecha, con visado del Consulado General de Chile en París en 1939 y pasaporte español expedido a la precitada en el año 2009.

2. La encargada del registro civil consular, mediante resolución de fecha 17 de enero de 2013 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia, ya que no se han acreditado los requisitos exigidos, especialmente la nacionalidad española de origen de su progenitora, puesto que su madre y abuela de la interesada había perdido la nacionalidad española por su matrimonio con un ciudadano argentino.

3. Notificada la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando la nacionalidad española de su abuela, que se mantuvo al casarse con un ciudadano español nacido en Argentina, como lo prueba que éste cobrara una pensión del gobierno español como miembro de las Fuerzas Armadas en el año 1937.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este no formula alegaciones. La encargada del registro civil consular emite su informe preceptivo conforme con la decisión previamente adoptada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

5. Consta en el expediente solicitud, firmada por la interesada, en modelo oficial, anexo I, de nacionalidad española por opción (apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007), en el que se hace constar en el apartado correspondiente que la nacionalidad de origen de su progenitor es “española” y en el que se incluye un párrafo que dice textualmente “la presente solicitud de nacionalidad española se fundamenta en que el solicitante es hijo/a de padre o madre originariamente español”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010 (4ª), 23 de marzo de 2010 (5ª), 23 de marzo 2010 (6ª) 24 de marzo de 2010 (5ª), 28 de abril de 2010 (5ª), 6 de octubre de 2010 (10ª) 15 de noviembre de 2010 (5ª), 1 de diciembre de 2010 (4ª), 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011 (3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 (4ª). 10 de febrero 2012 (42ª) 17 de febrero 2012 (30ª) 22 de

febrero 2012 (53ª) 6 de julio 2012 (5ª) 6 de julio 2012 (16ª) 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de enero 2013 (28ª).

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen a la nacida en Costa Rica en 1972, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita el 24 de febrero de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Panamá el 13 de abril siguiente, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 9 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil se dictó auto el 17 de enero de 2013, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su madre no fue española de origen, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

Hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, la que se produce *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido

adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española y 24 del Código Civil.

Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2 del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código Civil, por la que accedió a la ciudadanía española el padre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.nº1.b) del Código Civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V. En el presente caso la progenitora de la optante ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código Civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en San José (Costa Rica).

Resolución de 14 de octubre de 2016 (39ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Dª H.-Mi. F. D., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta, en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 08 de marzo de 1959 en S. (Cuba), hija de Don C. F. R., nacido el 11 de mayo de 1926 en H. (Cuba) y de Dª M. D. A., nacida el 12 de mayo de 1931 en C. (Cuba); carnet de identidad cubano y certificado literal local de nacimiento de la solicitante; certificado local de nacimiento de la madre; certificado español de nacimiento de la madre de la solicitante, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española de origen, en virtud de la opción establecida en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 11 de noviembre de 2009; certificado español de nacimiento de la abuela materna de la interesada, Dª A. A. R., nacida el 14 de mayo de 1903 en A., S.; certificados locales de defunción de la madre y de la abuela materna y de la promotora y documentos de inmigración y extranjería de la abuela, los cuales, de acuerdo con el informe emitido por la encargada del registro civil consular, presentan

dudas de autenticidad, apreciándose que son documentos escaneados y manipulados simulando su originalidad.

2. Con fecha 27 de diciembre de 2013, la encargada del registro civil consular, mediante auto, deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen de la promotora, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, habida cuenta de las irregularidades detectadas en los documentos aportados por la solicitante.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente y alegando que aportó toda la documentación que le fue exigida, estimando que acredita los requisitos establecidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal de la interposición del recurso, emite informe desfavorable y la encargada del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, en el que indica que, teniendo en cuenta que los documentos de inmigración y extranjería de la abuela se encuentran escaneados y manipulados para simular su originalidad, se aprecia que la documentación aportada presenta ciertas irregularidades que hacen presumir falsedad documental, no permitiendo determinar que en la solicitante concurren los requisitos exigidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º, 23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y 1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1959, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si

formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 24 de junio de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil se dictó auto de fecha 27 de diciembre de 2013 denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su madre fuese española de origen, a la vista de las irregularidades detectadas en los documentos de inmigración y extranjería de la abuela materna de la interesada.

La madre de la promotora adquirió la nacionalidad española de origen por opción en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 11 de noviembre de 2009, siendo inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) el 24 de noviembre de 2009.

IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la disposición adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

Esta cuestión fue abordada por la instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 11 de noviembre de 2009 inscrita con fecha 24 de noviembre de 2009, la ahora optante, nacida el 08 de marzo de 1959, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuela española, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima.

V. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de

nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogidos al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la disposición transitoria tercera.

Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas disposiciones transitorias (segunda y tercera) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la

entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria tercera. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria segunda (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la disposición transitoria tercera, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria tercera “beneficia, sobre

todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código Civil).

XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de

la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 n°1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 14 de octubre de 2016 (40ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don E.-A. P. R., ciudadano cubano, presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 07 de abril de 1988 en B. (Cuba), hijo de Don A. P. C., nacido el 08 de abril de 1943 en M. (Cuba) y de Dª M. R. A., nacida el 30 de julio de 1957 en S. (Cuba); documento de identidad cubano y certificado local de nacimiento del promotor; certificado español de nacimiento del padre del promotor, en el que consta inscripción marginal de opción por la nacionalidad española de origen, en virtud de lo establecido en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007; certificado

español de nacimiento del abuelo paterno del interesado, Don H. P. Y., nacido el 03 de diciembre de 1892 en A. (Lugo) y carta de adquisición de la ciudadanía cubana por el abuelo paterno en fecha 16 de diciembre de 1941.

2. Con fecha 04 de febrero de 2014, la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el interesado, toda vez que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, toda vez que el progenitor español del solicitante optó por la nacionalidad española no de origen según la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 27 de agosto de 2010, cuando el promotor era mayor de edad, por lo cual no ha quedado establecido que en el interesado concurren los requisitos exigidos en la directriz sexta de la instrucción de 04 de noviembre de 2008 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que regula especialmente en lo que se refiere a estar sujeto a la patria potestad de un español.

3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando que formuló su petición en base a que su abuelo Sr. P. Y., era ciudadano español de origen, nacido en A., Lugo.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal de la interposición del recurso, emite informe desfavorable y el encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe en el que indica que, teniendo en cuenta que el progenitor español del solicitante optó a la nacionalidad española de origen según la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, en fecha 27 de agosto de 2010, cuando el solicitante era mayor de edad, no ha quedado establecido que concurren los requisitos exigidos en la directriz sexta de la instrucción de 04 de noviembre de 2008, que regula la aplicación de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a estar sujeto a la patria potestad de un español.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º, 23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y 1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Cuba en 1988, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 03 de noviembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil se dictó auto de fecha 04 de febrero de 2014 denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su padre fuese español de origen, toda vez que el progenitor del interesado adquirió la nacionalidad española de origen por opción en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 27 de agosto de 2010, siendo inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) el 02 de diciembre de 2010.

IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la disposición adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 27 de agosto de 2010, inscrita con fecha 02 de diciembre de 2010, el ahora optante, nacido el 07 de abril de 1988, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan

acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima.

V. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr.

número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogidos al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del

precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la disposición transitoria tercera.

Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas disposiciones transitorias (segunda y tercera) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al

cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta dirección general de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria tercera. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria segunda (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la disposición transitoria tercera, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del

marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria tercera “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código Civil).

XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la

misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 n.º1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV. Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo del solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 04 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art.º 358-II RRC). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del abuelo, acredita la nacionalidad española de este, no consta ni se ha acreditado en modo alguno, la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción, no encontrándose justificada la condición de exiliado del abuelo, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 14 de octubre de 2016 (41ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la

interesada contra la resolución de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. D^a M. R. A., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta, en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 12 de septiembre de 1966 en L. (Cuba), hija de Don R. R. G., nacido el 21 de septiembre de 1940 en S. (Cuba) y de D^a M.-I. A. C., nacida el 30 de noviembre de 1942 en C. (Cuba); documento de identidad cubano y certificado local de nacimiento de la interesada; certificado local de nacimiento de la madre de la interesada, en el que consta que ésta es hija de Don P. A. G., natural de España; certificado literal español de nacimiento del abuelo materno de la interesada, nacido el 29 de junio de 1891 en L. (León) y carta de ciudadanía cubana del abuelo materno, otorgada el 09 de septiembre de 1941.

2. Con fecha 06 de abril de 2015, la encargada del registro civil consular, mediante auto, deniega lo solicitado por la interesada ya que estima que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando que si bien su madre es de origen cubano, su abuelo es originariamente español y ha optado por la nacionalidad española de su abuelo.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, estima que en la tramitación del expediente se han guardado las prescripciones legales y el auto recurrido resulta dictado conforme a derecho. La encargada del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, en el que indica que el abuelo español de la solicitante obtuvo la nacionalidad cubana en fecha 09 de septiembre de 1941, y su hija, madre de la solicitante, nace en fecha 30 de noviembre de 1942, no quedando establecido que en la interesada concurren los requisitos exigidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de

febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1966, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil se dictó auto de fecha 06 de abril de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado la filiación española de la interesada.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto que la nacionalidad originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que

podiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente de referencia, se aporta la carta de ciudadanía cubana del abuelo materno de la promotora de fecha 09 de septiembre de 1941 y su hija, progenitora de la solicitante, nace el 30 de noviembre de 1942, con posterioridad a la adquisición de la nacionalidad cubana por su progenitor, por lo que adquirió al nacer la nacionalidad cubana. De este modo, la madre de la solicitante no ostenta la nacionalidad española de origen, por lo que no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo de la solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 04 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. artº 358-II RRC). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del abuelo, acredita la nacionalidad española de este, no consta ni se ha acreditado en modo alguno, la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción, no encontrándose justificada la condición de exiliado del abuelo, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 14 de octubre de 2016 (42ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Don A. de P. F., nacido el 09 de agosto de 1979 en S. (Brasil), de nacionalidad brasileña, presenta solicitud (Anexo I) en el Consulado de España en São Paulo el 31 de octubre de 2011 a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, sin adjuntar ninguno de los documentos probatorios necesarios.

2. Con fecha 31 de julio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo requiere al interesado a fin de que subsane su solicitud, concediéndole un plazo de treinta días para que aporte la documentación que falta en el expediente. Dicho requerimiento fue notificado al interesado el 13 de agosto de 2015, de acuerdo con certificado de acuse de recibo del Servicio de Correos brasileño que se encuentra en el expediente y, transcurrido el plazo establecido, el promotor no presentó la documentación solicitada.

3. Con fecha 15 de septiembre de 2015, el encargado del registro civil consular, mediante auto, deniega lo solicitado por el interesado por no concurrir los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no haber aportado ninguno de los documentos que le fueron requeridos.

4. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando que no pudo aportar la documentación solicitada en el plazo establecido y acompañando copia de su certificado literal de nacimiento brasileño; del certificado literal de nacimiento brasileño de sus padres, Don L. F. y Dª I. F. de P.; copia del certificado de matrimonio brasileño de sus abuelos paternos, Don J. F. y Dª E. R. y copia de los certificados de inscripción en el registro de extranjeros brasileño y de los documentos de identidad de extranjero expedidos a los abuelos paternos del promotor.

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe en el que indica que, el interesado no acredita ser hijo de español/a de origen y estar comprendido, por tanto, dentro del ámbito de aplicación del apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, toda vez que no consta en el expediente el certificado literal de nacimiento español de los abuelos paternos del

interesado, documentos que, junto con los certificados de inscripción en el registro de extranjeros a nombre de los abuelos paternos, podrían probar que el progenitor del interesado nació en Brasil de padres españoles y, por tanto, tuvo la condición de español de origen no inscrito.

El encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe, redactado en los mismos términos expresados por el órgano en funciones de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español de origen al nacido en S. (Brasil) en 1979, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 31 de octubre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 15 de septiembre de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su progenitor sea español de origen.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, el promotor no ha acompañado a su solicitud ni al escrito de recurso el certificado literal de nacimiento español de sus abuelos paternos, documentos que, junto con el certificado de inscripción en el registro de extranjeros brasileño de estos, hubieran podido probar la nacionalidad española de origen de su progenitor. De este modo, no se encuentra acreditado en el expediente que el interesado sea hijo de progenitor español de origen, no cumpliéndose los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española de origen.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Sao Paulo (Brasil).

Resolución de 14 de octubre de 2016 (43ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Don A. de P. F., nacido el 10 de junio de 1988 en S. (Brasil), de nacionalidad brasileña, presenta solicitud (anexo I) en el Consulado de España en São Paulo el 31 de octubre de 2011 a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley

52/2007 disposición adicional séptima, sin adjuntar ninguno de los documentos probatorios necesarios.

2. Con fecha 31 de julio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo requiere al interesado a fin de que subsane su solicitud, concediéndole un plazo de treinta días para que aporte la documentación que falta en el expediente. Dicho requerimiento fue notificado al interesado el 13 de agosto de 2015, de acuerdo con certificado de acuse de recibo del Servicio de Correos brasileño que se encuentra en el expediente y, transcurrido el plazo establecido, el promotor no presentó la documentación solicitada.

3. Con fecha 15 de septiembre de 2015, el encargado del registro civil consular, mediante auto, deniega lo solicitado por el interesado por no concurrir los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no haber aportado ninguno de los documentos que le fueron requeridos.

4. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando que no pudo aportar la documentación solicitada en el plazo establecido y acompañando copia de su certificado literal de nacimiento brasileño; del certificado literal de nacimiento brasileño de sus padres, Don L. F. y D^a I. F. de P.; copia del certificado de matrimonio brasileño de sus abuelos paternos, Don J. F. y D^a E. R. y copia de los certificados de inscripción en el registro de extranjeros brasileño y de los documentos de identidad de extranjero expedidos a los abuelos paternos del promotor.

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe en el que indica que, el interesado no acredita ser hijo de español/a de origen y estar comprendido, por tanto, dentro del ámbito de aplicación del apartado 1^º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, toda vez que no consta en el expediente el certificado literal de nacimiento español de los abuelos paternos del interesado, documentos que, junto con los certificados de inscripción en el registro de extranjeros a nombre de los abuelos paternos, podrían probar que el progenitor del interesado nació en Brasil de padres españoles y, por tanto, tuvo la condición de español de origen no inscrito.

El encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe, redactado en los mismos términos expresados por el órgano en funciones de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2^a de octubre de 2005, 5-2^a de enero, 10-4^a de febrero y 20-5^a de junio de 2006; 21-2^a de

febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en S. (Brasil) en 1988, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 31 de octubre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 15 de septiembre de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su progenitor sea español de origen.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, el promotor no ha acompañado a su solicitud ni al escrito de recurso el certificado literal de nacimiento español de sus abuelos paternos, documentos que, junto con el certificado de inscripción en el registro de extranjeros brasileño de estos, hubieran podido probar la nacionalidad española de origen de su progenitor. De este modo, no se encuentra acreditado en el expediente que el interesado sea hijo de progenitor español de origen, no cumpliéndose los requisitos

establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española de origen.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Sao Paulo (Brasil).

Resolución de 14 de octubre de 2016 (44ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Don J. F. P., nacido el 11 de noviembre de 1959 en C. (Brasil), de nacionalidad brasileña, presenta en fecha 18 de mayo de 2009 en el Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil), solicitud de opción a la nacionalidad española de origen (Anexo I) en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, aportando la siguiente documentación: certificado literal de nacimiento brasileño del interesado; certificado literal de nacimiento brasileño de sus padres, Don A. P., nacido el 20 de mayo de 1926 en C. (Brasil) y Dª Z. B., nacida el 11 de octubre de 1931 en C. (Brasil); certificado de matrimonio brasileño de los progenitores del promotor y el certificado negativo de naturalización en Brasil del abuelo paterno del solicitante, Don A. P. A.

2. El interesado no aportó junto con su solicitud el certificado literal de nacimiento español de su abuelo paterno y los documentos brasileños aportados no estaban legalizados, por lo que con fecha 27 de mayo de 2015 el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) requiere al interesado a fin de que aporte los documentos probatorios faltantes para subsanar su solicitud, otorgándole un plazo de treinta días para su aportación. El requerimiento de documentación fue notificado al interesado el 10 de junio de 2015, de acuerdo con el justificante de acuse de recibo emitido por el Servicio de Correos brasileño. Transcurrido un mes desde la notificación del requerimiento de subsanación, el interesado no aportó ninguno de los documentos que le fueron requeridos.

3. Previo informe desfavorable del Canciller del Consulado General de España en São Paulo (Brasil), en funciones de ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular dicta auto en fecha 10 de septiembre de 2015 por el que se acuerda denegar la solicitud de opción a la nacionalidad española formulada por la interesado, al no haberse podido comprobar si se encontraba comprendido dentro del ámbito de aplicación del apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no haber aportado la documentación requerida.

4. Notificada la resolución, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citada, alegando que no tuvo tiempo de presentar los documentos en plazo debido a que tardó en conseguir el certificado literal de nacimiento español de su abuelo paterno. Adjuntó la siguiente documentación: certificados brasileños del interesado y de sus padres, debidamente legalizados; certificado de no naturalización del abuelo paterno del promotor, debidamente legalizado y copia del certificado literal de nacimiento español de su abuelo paterno.

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe indicando que, para verificar si el interesado cumple los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, debería examinarse el original del certificado literal de nacimiento español del abuelo paterno, que constaba únicamente en fotocopia en dicho Consulado General, y el encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, redactado en los mismos términos formulados por el órganos en funciones de ministerio fiscal.

6. Recibidas las actuaciones en la Dirección General de los Registros y del Notariado, se solicita del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil), requiera al interesado a fin de que aporte los documentos originales que por copia acompañó al escrito de recurso, que deberán ser presentados, en su caso, debidamente traducidos y legalizados.

El requerimiento de subsanación fue notificado al interesado el 08 de marzo de 2016, según consta en el acuso de recibo remitido por el servicio de correos de Brasil, aportado al expediente y, transcurridos tres meses desde su notificación, el promotor no ha aportado ninguno de los documentos requeridos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de

febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido el 11 de noviembre de 1959 en C. (Brasil), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 18 de mayo de 2009 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 10 de septiembre de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no se ha podido acreditar que el padre del promotor fuese español de origen, toda vez que el promotor no aportó la totalidad de los documentos que le fueron requeridos dentro del plazo establecido al efecto. Interpuesto recurso por el interesado, aportó los certificados brasileños requeridos debidamente legalizados y fotocopia del certificado literal de nacimiento español de su abuelo paterno, siéndole requerida la aportación del original de dicha certificación. El citado requerimiento no fue atendido por el solicitante dentro de los plazos establecidos.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente expediente no ha podido acreditarse que el promotor cumpla los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, en particular, que su progenitor sea originariamente española, dado que no atendió al requerimiento de documentación dentro del plazo establecido al efecto.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Sao Paulo (Brasil).

Resolución de 14 de octubre de 2016 (45ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña P.-V. G. C. presenta escrito en el Consulado de España La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y, el de su padre y su abuelo, expedidos por el registro civil español, constando en el del padre que optó a la ciudadanía española en base al artículo 20.nº1.b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, cuando la recurrente había alcanzado la mayoría de edad. También se incorpora al expediente documentación sobre inmigración y extranjería del abuelo que contiene irregularidades en la firma y sello gomígrafo, que le hacen adolecer de ilegalidad, por lo que no puede ser tomada en consideración. Esta documentación entra en clara contradicción con la que se ha incorporado de oficio al expediente, tomada del legajo del padre de la interesada, que acredita la no inscripción del abuelo en el registro de extranjeros. Además, también se incorpora al expediente copia de los documentos de inmigración y extranjería del abuelo, tomados del expediente de un primo de la recurrente, Sr. G. A., que corrobora que el abuelo no se inscribió en el mencionado registro.

2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 23 de julio de 2014 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º, 23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y 1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1960, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita el 26 de Noviembre de 2003 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 6 de septiembre de 2004, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 12 de febrero de 2010 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto 23 de julio de 2014 denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que no prueba los hechos manifestados en su declaración, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

Hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución Española y 24 del Código Civil.

Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los

dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código Civil, por la que accedió a la ciudadanía española el padre de la ahora recurrente. Como señala la instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20 nº1.b) del Código Civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V. En el presente expediente, el progenitor de la optante, ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código Civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo de la optante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Además no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española, por parte del abuelo, como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto y, de dar credibilidad a la documentación sobre inmigración y extranjería presentada por la interesada, nos encontraríamos con que el abuelo se inscribió a la edad de 33 años, es decir en 1935, por lo que el abuelo ya residía en ese año en dicho país y no puede ser considerado exiliado ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por Doña P.-V. G. C. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la

Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 14 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

Resolución de 14 de octubre de 2016 (46ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña B.-G. B. C. presenta escrito en el Consulado de España La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y, el de su madre y su abuela, expedidos por el registro civil español, constando en el de la madre que optó a la ciudadanía española en base al artículo 20.nº1.b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, cuando la recurrente había alcanzado la mayoría de edad. Así mismo la certificación de nacimiento de la abuela contiene una anotación marginal de recuperación de la nacionalidad española que tuvo lugar el 4 de marzo de 2000, la cual había perdido cuando contrajo matrimonio con ciudadano cubano el 6 de mayo de 1949. En vía de recurso se incorpora al expediente la certificación de nacimiento del hermano de la recurrente, en la que consta que obtuvo la nacionalidad española por “residencia”,
2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 17 de septiembre de 2014 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º, 23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y 1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1971, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

En este caso la madre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española "b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España", opción que fue documentada en acta suscrita el 20 de marzo de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 4 de mayo de 2007, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto 17 de septiembre de 2014 denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que no prueba los hechos manifestados en su declaración, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas

personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

Hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución Española y 24 del Código Civil.

Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho

también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código Civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20 nº1.b) del Código Civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V. En el presente expediente, la progenitora de la optante, ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código Civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela de la optante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Además no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española, por parte de la abuela, como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto por lo que la abuela no puede ser considerada exiliada ni prosperar éste recurso por esta vía.

VII. Finalmente, por lo que se refiere a la última de las alegaciones formuladas en el escrito de recurso sobre el reconocimiento del derecho de opción a la nacionalidad española a favor de otros descendientes de su abuela, no corresponde en vía de éste recurso valorar la procedencia o improcedencia del mismo, a la vista de las circunstancias de hecho concurrentes respecto a los mismos y los preceptos jurídicos en base a los cuales se les haya podido reconocer tal derecho de opción, si no únicamente valorar el reconocimiento o no de este derecho a favor del recurrente en atención a las circunstancias de hecho que en él concurren y a los preceptos jurídicos por él invocados. No obstante cabe indicar que el hermano de la recurrente adquirió la nacionalidad española por residencia, que es un supuesto con requerimientos distintos al ahora examinado.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por Doña B.-G. B. C. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 14 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

Resolución de 17 de octubre de 2016 (1ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don V. R. Á., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta, en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 20 de enero de 1971 en Cuba, hijo de D^a. C. Á. T., nacida en S. M., Badajoz (España) el 11 de abril de 1928; carnet de identidad cubano y certificado local de nacimiento del interesado; certificado español de nacimiento de la madre del promotor en el que consta que su padre, abuelo del recurrente, nació en Cuba y certificado local de defunción de la misma. También se aporta certificado de nacimiento de la abuela materna expedido por el Registro Civil español de Santa María (Badajoz).
2. Con fecha 10 de julio de 2009, el encargado del registro civil consular, mediante auto, deniega lo solicitado por el interesado ya que de la documentación aportada no se establece que concurren los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su madre.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, estima que en la tramitación del expediente se han guardado las prescripciones legales y el auto recurrido resulta dictado conforme a derecho y el encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe, en el que indica que no ha quedado establecido que en la solicitante concurren los requisitos exigidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

5. Recibidas las actuaciones en la Dirección General de los Registros y del Notariado, con fecha 30 de junio de 2014 se solicita del Registro Civil Consular de España en La Habana, se requiera al interesado a fin de que aporte certificado de nacimiento de su abuelo, don.J. A. Á. M., a fin de acreditar su nacionalidad española. Se reitera dicha solicitud el 5 de febrero de 2015.

La encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana, informa que se requirió el interesado para aportar la citada documentación, el 2 de septiembre de 2015, aportándose al expediente diligencia de la citación efectuada por el Consulado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Cuba en 1971, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de mayo de 2009 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 10 de julio de 2009, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitora.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- los números 2.1 y 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establecen entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del solicitante expedida por el registro civil local en que conste inscrita. Tratándose de un registro extranjero, a salvo lo dispuesto en los Tratados Internacionales, la certificación deberá estar legalizada o apostillada, en los términos previstos en los artículos 88 y 89 RRC” y “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, se ha aportado certificación española literal de nacimiento de la progenitora y certificación local en extracto de nacimiento del interesado y, habiéndose requerido al promotor a fin de que aporte la certificación literal de nacimiento de su abuelo para acreditar su nacionalidad, no la ha aportado a pesar de haber transcurrido más de un año desde que se le requirió la documentación oportuna, por lo que no puede entenderse acreditada la nacionalidad española del abuelo del solicitante y, en consecuencia, que su progenitora ostente la nacionalidad española de origen.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado la filiación española del promotor, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela del optante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado, no se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española, por parte de la abuela, como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria

Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto y sí está acreditado que su hija, madre del recurrente, nació en Cuba el 11 de abril de 1928, por lo que no puede ser afirmar, que la vida de la abuela transcurrió, desde esos años en Cuba y no puede ser considerada exiliada ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 17 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba)

Resolución de 17 de octubre de 2016 (2ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don J. L. E. L. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados literales locales de nacimiento propio y de su madre, y el de su abuelo expedido por el registro civil español. También se incorpora al expediente documentación sobre inmigración y extranjería del abuelo que adolece de irregularidades en la firma y sello gomígrafo. Dadas las irregularidades mencionadas, esta documentación no puede ser tomada en consideración, teniendo en cuenta, además, que su contenido no coincide con la misma documentación presentada por una hija del abuelo, a la que se le concedió la nacionalidad española.

2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 18 de junio de 2012 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Cuba en 1964, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de marzo de 2010 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 18 de junio de 2012, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado los extremos reflejados en su solicitud, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que

fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En este caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, es lo cierto que la nacionalidad española originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la madre del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo del recurrente, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española por parte del abuelo como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto, y de dar credibilidad a la documentación sobre inmigración y extranjería aportada al expediente, nos encontraríamos con que el abuelo se inscribió en el registro de extranjeros cubano en el año 1918, cuando contaba 31 años de edad. Por todo ello que se puede afirmar, sin margen de error, que su vida transcurrió en Cuba y no pueden ser considerado exiliado ni prosperar éste recurso por esta vía.

VII. Finalmente, por lo que se refiere a la última de las alegaciones formuladas en el escrito de recurso sobre el reconocimiento del derecho de opción a la nacionalidad

española a favor de otros descendientes de su abuelo, no corresponde en vía de éste recurso valorar la procedencia o improcedencia del mismo, a la vista de las circunstancias de hecho concurrentes respecto a los mismos y los preceptos jurídicos en base a los cuales se les haya podido reconocer tal derecho de opción, si no únicamente valorar el reconocimiento o no de este derecho a favor del recurrente en atención a las circunstancias de hecho que en él concurren y a los preceptos jurídicos por él invocados.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por Don J. L. E. L. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura

Madrid, 17 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado/a del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba)

Resolución de 17 de octubre de 2016 (3ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No puede optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la disposición adicional séptima el que no acredite ser nieto de abuelo originariamente español, que hubiere perdido la nacionalidad español por causa del exilio, por presentarse para la acreditación de ello documentación contradictoria o incongruente.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña M. P. P. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y los de su madre y su abuelo expedidos por el registro civil español. También se acompaña documentación de dudosa procedencia y autenticidad para demostrar la condición de exiliado del abuelo; en concreto, la Carta de Ciudadanía expedida a favor del mismo por el registro civil local de San Miguel del Padrón, La Habana, refleja que la inscripción de dicho documento se practicó en el año 1951, al tomo 4 y folio 254. Comparando estos datos con una muestra de carta de ciudadanía legal (incorporada al expediente) se advierte que los asientos registrales de ciudadanías, practicados en el mismo registro civil en el año

1943, figuran en un tomo muy posterior al 4, es decir en el Tomo 21. Resulta contradictorio que en el año 1951, 8 años después, el mencionado registro civil haya formalizado una inscripción de ciudadanía en un tomo muy inferior como es el caso, Tomo 4. Esta irregularidad hace que dicho documento revista carácter de falsedad y que no pueda ser tomado en consideración para documentar la presente solicitud.

2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 17 de noviembre de 2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º, 23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y 1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1971, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrá optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 4 de octubre de 2009 en el modelo normalizado del anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. El encargado del registro consular dictó auto el 17 de noviembre de 2011, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que no ha quedado establecido que en la solicitante concurren los requisitos exigidos por la disposición adicional séptima de la Ley 52/07, especialmente en lo que se refiere a la condición de exiliado de su abuelo ya que se ha aportado una certificación, a todas luces falsa, para tratar de acreditar

que el abuelo perdió la nacionalidad española como consecuencia del exilio, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. La opción a la nacionalidad española que la interesada pretende ejercitar y la consiguiente inscripción de nacimiento en el registro civil español están condicionadas no solo a la prueba del vínculo de filiación que resulta de las certificaciones de nacimiento expedidas por el registro civil español y local de Cuba, así como a la legalidad de la documentación procedente de cualquier otro registro local que constituya prueba irrefutable para la resolución del expediente, la cual, en cuanto a su eficacia registral en España, está condicionada al principio de equivalencia de garantías de su autenticidad y veracidad conforme a lo que establecen los artículos 23 LRC y 85 RRC, lo que exige valorar dichas certificaciones en virtud del canon normativo que resulta del derecho español.

Dudas sobre la exactitud de los datos que, en el presente caso, vienen avaladas por los hechos descritos en los apartados anteriores, por lo que no podrá entenderse acreditada la pérdida de la nacionalidad española del abuelo como consecuencia del exilio, en la que ha de apoyarse el ejercicio de la opción prevista por el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

V. En consecuencia, a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado la pérdida de la nacionalidad española del abuelo de la recurrente, como consecuencia del exilio, por lo que no se cumplen los requisitos esenciales del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por Doña M. P. P. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 17 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba)

Resolución de 17 de octubre de 2016 (4ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que

(el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don G. J. M. D. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio, y los de su madre y su abuelo expedidos por el registro civil español, constando en el de la madre que nació en Cuba y que optó a la nacionalidad española, en base a la Ley 52/2007, cuando el interesado ya había alcanzado la mayoría de edad.
2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 17 de septiembre de 2014 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007; 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2010.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular, como español de origen, al nacido en Cuba en 1988, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En este caso la madre del interesado tienen la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado

primero de la disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada, en acta suscrita el 20 de julio de 2010 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 3 de octubre de 2014, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

III. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de julio de 2010 mediante el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 17 de septiembre de 2014, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa, esencialmente, su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada instrucción, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la disposición adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 20 de julio de 2010, el ahora optante, nacido en 1988, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima.

V. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los

adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas – artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogidos al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se

explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la disposición transitoria tercera.

Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas disposiciones transitorias (segunda y tercera) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la instrucción de este centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar

por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la instrucción de esta dirección general de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria tercera. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria segunda (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la disposición transitoria tercera, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución Española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria tercera “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las

personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código Civil).

XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición

adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 n°1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo del recurrente, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española por parte del abuelo como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto, por lo que el abuelo no puede ser considerado exiliado ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por Don G. J. M. D. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 17 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba)

Resolución de 17 de octubre de 2016 (5ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. D^a M. E. F. G., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta, en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 20 de julio de 1963 en M. (Cuba), hija de don J. L. F. J., nacido el 1 de agosto de 1934 en M. (Cuba) y de D^a M. E. G.F., nacida el 07 de julio de 1937 en M. (Cuba); documento de identidad cubano y certificado literal local de nacimiento de la interesada; certificado español de nacimiento del presunto padre, don J. L. F. J., con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española el 8 de noviembre de 2004; certificado de la inscripción de matrimonio de la madre de la promotora, en el que se indica que la inscrita formalizó matrimonio con don C. M. G., el 15 de junio de 1956 y certificado de divorcio de ambos contrayentes de fecha 10 de diciembre de 1962; certificado de matrimonio de la madre de la recurrente con el presunto padre de la interesada de fecha 15 de octubre de 1963.

2. Con fecha 18 de junio de 2014 el encargado del registro civil consular, mediante auto, deniega lo solicitado por la interesada ya que de la documentación aportada no se establece que concurren los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la filiación paterna de la solicitante.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, interesando la revisión de su expediente en base a que sus padres no pudieron contraer matrimonio hasta que se sustanció el divorcio de su madre de su anterior marido, a pesar de que su relación era muy anterior a esa fecha.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, estima que en la tramitación del expediente se han guardado las prescripciones legales y el auto recurrido resulta dictado conforme a derecho y el encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe, en el que indica que, teniendo en cuenta que la madre de la solicitante contrajo matrimonio con don C. M. G., el 15 de junio de 1956, que fue disuelto en fecha 10 de diciembre de 1962 por sentencia de divorcio, y la interesada nació el 20 de julio de 1963, antes de que se cumplieran 300 días desde la firmeza de dicho divorcio, no ha quedado establecida la filiación de la promotora con don J. L. F. J., por lo que no ha quedado probado que en la solicitante concurren los requisitos exigidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la filiación española.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley

29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1963, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de octubre de 2009 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 18 de junio de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado la filiación española de la interesada.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

Sin embargo surge un problema previo, cual es que no resulta suficientemente acreditada la filiación paterna de la interesada respecto de un ciudadano español, puesto que, según la legislación española, se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a

su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges. De manera que, para desvirtuar la eficacia probatoria de la presunción de filiación matrimonial (art. 116 CC), presunción *iuris tantum* que, en consecuencia, admite prueba en contrario, es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, cuando la hija nació, la madre no hacía 300 días que se había divorciado de un ciudadano distinto de quien asegura ser el padre. A estos efectos, la mera declaración de los interesados no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente-, la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía del expediente gubernativo, pues, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la mencionada presunción, no se considera probado, por ahora, que la promotora sea hija de progenitor español de origen.

Por otra parte y aún en el supuesto de que se hubiese acreditado la filiación paterna de la recurrente respecto del Sr. F.J., no se cumpliría el requisito de que la recurrente hubiese estado sometida a la patria potestad de un ciudadano español (artículo 20 del Código Civil), toda vez que este recuperó la nacionalidad española el 8 de noviembre de 2004, cuando la interesada era mayor de edad, por lo que no estaría legitimada para adquirir la nacionalidad española por esta vía.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado la filiación de la promotora respecto de progenitor originariamente español, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 17 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. encargado/a del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba)

Resolución de 17 de octubre de 2016 (6ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la

interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña F. M. G. A. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados literales locales de nacimiento propio y de su madre, nacida en Cuba en 1915, así como el su abuelo, expedido por el registro civil español. También aporta documentación sobre inmigración y extranjería de este último, en la que se refleja que accedió a la nacionalidad cubana el 12 de junio de 1913.
2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 3 de julio de 2014 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1945, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 de abril de 2010 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre

de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 3 de julio de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado los extremos reflejados en su solicitud, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En este caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, es lo cierto que la nacionalidad española originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho). Todo lo contrario, el abuelo de la recurrente perdió la nacionalidad española en 1913 según consta en la certificación sobre inmigración y extranjería acompañada a este expediente, razón por la que no pudo transmitir dicha nacionalidad a su hija, nacida en 1915 y, por tanto, la madre de la solicitante no es española de origen.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la madre de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo de la interesada, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española por parte del abuelo como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto, sin embargo, sí se ha documentado que el abuelo se nacionalizó cubano en 1913, y que su hija, madre de la recurrente, nació en dicho país en 1915, por lo que se puede afirmar sin margen de error que la vida del abuelo transcurrió en dicho país desde esos años y no puede ser considerado exiliado ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por Doña F. M. G. A. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura

Madrid, 17 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr./a encargado/a del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba)

Resolución de 17 de octubre de 2016 (8ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que acrediten ser hijo de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña Y. D. M., ciudadana cubana presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley

52/2007, disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado de nacimiento propio en el que consta que nació en S. de C. Provincia de Camagüey, el 8 de abril de 1986 y literal de inscripción de nacimiento de la madre de la promotora en el registro civil español, hija de A.M. P. nacido el 14 de diciembre de 1897 en España y de nacionalidad española.

2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 13 de abril de 2012 deniega lo solicitado por la interesada, ya que a la vista de la documental presentada le correspondería recuperar su nacionalidad española de origen, que perdió por no declarar en plazo su voluntad de conservarla, y no ejercer la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su deseo de acceder a la nacionalidad española, en base a la documentación ya aportada

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. El encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo ratificándose en su decisión, reiterando que la Sra. Delgado Martiño incurrió en pérdida de la nacionalidad española el 8 de abril de 2007, fecha en que cumplió 21 años sin haber declarado su voluntad de conservar la nacionalidad, y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 17 y 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de España en La Habana como española de origen a la nacida en Cuba en 1986, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual, podrán optar a la nacionalidad española de origen aquellos cuyos padre o madre hubiesen sido españoles de origen.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 6 de abril de 2010 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de

2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil consular se dictó auto el 13 de abril de 2012, denegando lo solicitado.

III. El acuerdo apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por corresponderle ejercer la recuperación de la nacionalidad española que perdió, prevista en el artículo 26 del Código Civil español.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, se ha aportado certificación de nacimiento del Registro Civil de Cuba de la interesada donde consta que nació en el año 1986 y certificación de nacimiento del Registro Civil Consular español de La Habana de su madre, Sra. M. V., donde consta que nació en el año 1964 en Cuba, hija de ciudadano nacido en España en 1897 y de nacionalidad española. En atención a los documentos y pruebas aportadas, debe darse por probado que la madre de la interesada era española en el momento de su nacimiento, 1986 y, conforme a la legislación española vigente en aquél momento, obtuvo la nacionalidad española originaria, ya que según el artículo 17.1 del Código Civil, son españoles “los hijos de padre español”.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- se ha acreditado que la madre de la interesada ostentó la nacionalidad española de forma originaria por lo que se cumple con el requisito esencial del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto por Doña. Y. D. M. y revocar el auto apelado, declarando el derecho de la interesada a la opción a la nacionalidad

española de origen conforme al apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 17 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba)

Resolución de 21 de octubre de 2016 (23ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el hijo del interesado por fallecimiento de éste, contra auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Don J. M. C., nacido el 16 de noviembre de 1928 en B., S. P. (Brasil), de nacionalidad brasileña, presenta solicitud (anexo I) en el Consulado de España en São Paulo el 27 de diciembre de 2011 a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima. Aportaba la siguiente documentación: certificado literal de nacimiento brasileño del interesado; certificado literal de nacimiento de los progenitores del interesado, don M. C., nacido el 15 de febrero de 1908 en J., S. P. (Brasil) y Dª A. B., nacida el 16 de septiembre de 1909 en S. J. B., S. P. (Brasil); certificado de matrimonio de los progenitores del promotor; certificación negativa de inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Sayalonga (Málaga) del abuelo paterno del interesado, don M. C.; certificación negativa de bautismo del abuelo paterno en el archivo diocesano de la Diócesis de M. y certificado negativo de naturalización en Brasil del mismo.

2. Con fecha 05 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo requiere al interesado a fin de que subsane su solicitud, concediéndole un plazo de treinta días para que aporte la documentación que falta en el expediente, toda vez que los certificados literales de nacimiento de los padres del interesado no se encontraban legalizados y no se aportó certificado literal de nacimiento español del abuelo paterno. Dicho requerimiento fue notificado al interesado el 15 de junio de 2015, de acuerdo con certificado de acuse de recibo del servicio de correos brasileño que se encuentra en el expediente y, transcurrido el plazo establecido, el promotor no presentó la documentación solicitada.

3. Con fecha 15 de septiembre de 2015, el encargado del registro civil consular, mediante auto, deniega lo solicitado por el interesado por no concurrir los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no quedar acreditado que el promotor sea hijo de padre o madre originariamente español.

4. Notificada la resolución, don V. M. C., hijo del interesado y con interés legítimo en el expediente, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de la solicitud antes citada, toda vez que su padre y promotor del expediente falleció el 28 de marzo de 2015, de acuerdo con el certificado brasileño de defunción incorporado al expediente, indicando que, dado que el abuelo del promotor nació en 1870 y el registro civil comenzó a funcionar en España en 1871, no puede exigirse la aportación de certificado español de nacimiento de éste y que los archivos parroquiales fueron destruidos durante la Guerra Civil, por lo que tampoco puede ser aportado el certificado de bautismo del abuelo del solicitante, habiéndose aportado al expediente certificado de desembarque en Brasil del abuelo paterno que acreditaría la nacionalidad española de éste.

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe en el que indica que, don V. M. C., no acredita con la documentación presentada que su padre fuese hijo de español de origen y estuviese comprendido, por tanto, dentro del ámbito de aplicación del apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, toda vez que no consta en el expediente el certificado literal de nacimiento español ni del padre ni de la madre del interesado, ni el certificado literal de nacimiento español de su abuelo paterno, que hubiese podido servir para probar, junto con el certificado de no naturalización en Brasil de este último, la condición de español de origen de don M. C.

El encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe, redactado en los mismos términos expresados por el órgano en funciones de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en B., S. P. (Brasil) en 1928, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o

madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 15 de septiembre de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su progenitor sea español de origen.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, no se ha acompañado a la solicitud ni al escrito de recurso el certificado literal de nacimiento español ni del padre ni de la madre del interesado, ni el certificado literal de nacimiento español del abuelo paterno del mismo, ni consta que el recurrente hubiese iniciado un expediente para inscribir el nacimiento del Sr. C. A. fuera de plazo, documentos que, junto con el certificado de inscripción en el Registro de extranjeros brasileño de este, hubieran podido probar la nacionalidad española de origen de su progenitor. De este modo, no se encuentra acreditado en el expediente que el interesado sea hijo de progenitor español de origen, no cumpliéndose los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española de origen.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en São Paulo (Brasil).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (24ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Don H. M. V., de nacionalidad brasileña, presenta solicitud (anexo I) en el Consulado de España en São Paulo el 25 de enero de 2011 a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, aportando copia del certificado literal de nacimiento español de Dª J. M. M., nacida el 05 de abril de 1937 en S. P. (Brasil), con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española el 26 de enero de 1999.
2. Con fecha 12 de junio de 2015, el encargado del registro civil consular de España en São Paulo requiere al interesado a fin de que subsane su solicitud, concediéndole un plazo de treinta días para que aporte la documentación que falta en el expediente. Dicho requerimiento fue notificado al interesado el 01 de julio de 2015, de acuerdo con certificado de acuse de recibo del servicio de correos brasileño que se encuentra en el expediente y, transcurrido el plazo establecido, el promotor no presentó la documentación solicitada.
3. Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, con fecha 11 de septiembre de 2015, el encargado del registro civil consular, mediante auto, deniega lo solicitado por el interesado por no concurrir los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no haber aportado ninguno de los documentos que le fueron requeridos.
4. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se le conceda un plazo adicional de 90 días para presentar la documentación requerida.
5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe en el que indica que, el análisis de la documentación no permite acreditar que el interesado se

encuentre comprendido dentro del ámbito de aplicación del apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, toda vez que no ha quedado probado que tenga la condición de hijo de español/a de origen.

El encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe, redactado en los mismos términos expresados por el órgano en funciones de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en S. P. (Brasil) en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 25 de enero de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 11 de septiembre de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su progenitor/a sea español/a de origen.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la

Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, el promotor no ha acompañado a su solicitud ni al escrito de recurso su certificado literal de nacimiento, ni el certificado literal de nacimiento de sus progenitores, debidamente legalizados. De este modo, a la vista de la documentación aportada, no resulta posible determinar si el interesado cumple los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española de origen.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en São Paulo (Brasil).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (25ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, los que acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Dª. L. C. R. F., nacida el 23 de abril de 1976 en S. P. (Brasil), hija de don. C. F., nacido el 10 de enero de 1938 en S. P. (Brasil) y de Dª Y.C.R.F., nacido el 21 de agosto de 1936 en D., S. P. (Brasil), presenta solicitud (anexo I) en el Consulado de España en São Paulo el 23 de septiembre de 2009 a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, aportando copia de su certificado literal de nacimiento brasileño.

2. Con fecha 04 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo requiere a la interesada a fin de que subsane su solicitud, concediéndole un plazo de treinta días para que aporte la documentación que falta en el expediente. Dicho requerimiento fue notificado a la interesada por correo certificado en fecha 16 de junio de 2015 y, transcurrido el plazo establecido, la promotora no presentó la documentación solicitada.

3. Con fecha 10 de septiembre de 2015, el encargado del registro civil consular, mediante auto, deniega lo solicitado por la interesada, toda vez que al no haber aportado la totalidad de los documentos que le fueron requeridos, no se ha podido comprobar si podía acogerse a lo dispuesto en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

4. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando que no pudo presentar la documentación en plazo dado que no consiguió el certificado literal de nacimiento de su abuelo español a tiempo. Junto con el recurso, acompañó la siguiente documentación: copia de su certificado literal de nacimiento brasileño; copia de los certificados literales de nacimiento brasileños de sus progenitores; copia del certificado literal de nacimiento español de su abuelo materno, don F. B. C. P., nacido el 03 de febrero de 1907 en E. R., Pontevedra y copia del certificado negativo de naturalización en Brasil de este último.

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe en el que indica que, si bien la interesada no llegó a presentar el expediente completo en el plazo establecido, teniendo en cuenta los antecedentes y la documentación que se encuentra en el expediente, considera que la interesada sí que se encontraba comprendida aparentemente dentro del ámbito de aplicación del apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, aunque para verificar fehacientemente este extremo, deberían examinarse los originales, debidamente legalizados, de los certificados que constan únicamente en copia en dicho consulado general.

El encargado del registro civil consular remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, junto con informe redactado en los mismos términos expresados por el órgano en funciones de ministerio fiscal.

6. Recibidas las actuaciones en la Dirección General de los Registros y del Notariado, por oficio de 16 de febrero de 2016, se solicita del encargado del registro civil consular, requiera a la interesada a fin de que aporte los documentos originales, traducidos y legalizados, que por copia se acompañaron al escrito de recurso.

Atendiendo al requerimiento formulado, la promotora acompaña originales, traducidos y legalizados de su certificado literal brasileño de nacimiento; de los certificados literales de nacimiento brasileños de sus padres, del certificado brasileño de matrimonio de sus progenitores y del certificado negativo de naturalización de su

abuelo materno. Asimismo acompaña original del certificado literal español de nacimiento de su abuelo materno.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en S. P. (Brasil) el 23 de abril de 1976 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de septiembre de 2009 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 10 de septiembre de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que se encuentre comprendida dentro del ámbito de aplicación de la citada norma, al no haber aportado la totalidad de los documentos probatorios que le fueron requeridos. Posteriormente, dicha documentación fue aportada por la interesada junto con su escrito de recurso.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la

documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

V. Si bien la promotora no aportó la documentación requerida por el encargado del registro civil consular dentro del plazo conferido al efecto, la misma fue aportada junto con el escrito de recurso, por lo que en virtud del criterio de economía procesal, procede determinar si en el expediente se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el presente expediente se ha aportado certificados literales locales de nacimiento de la interesada y de su progenitora; certificado literal español de nacimiento de del abuelo materno de la solicitante y certificado negativos de naturalización en Brasil del mismo.

De este modo, se constata que el abuelo materno de la interesada no perdió su nacionalidad española, por lo que, cuando nace la progenitora de la solicitante, en fecha 21 de agosto de 1936 en Brasil nació originariamente española, de acuerdo con la redacción del artº 17.2º del Código Civil, por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente en dicha fecha, en el que se indicaba que son españoles, “los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España”, cumpliéndose los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y dejar sin efecto el acuerdo apelado, instando al encargado del registro civil consular para que se proceda a la inscripción de nacimiento de la recurrente con la marginal de la nacionalidad española por opción correspondiente.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en São Paulo (Brasil).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (26ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el

interesado contra auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Don D. A. M. de nacionalidad brasileña, presenta solicitud (anexo I) en el Consulado de España en São Paulo el 30 de mayo de 2011 a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, aportando copia del certificado de bautismo de su abuelo materno, don A. M. M., nacido en C., Murcia (España) el 27 de noviembre de 1921.

2. Con fecha 30 de julio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo requiere al interesado a fin de que subsane su solicitud, concediéndole un plazo de treinta días para que aporte la documentación que falta en el expediente. Dicho requerimiento fue notificado al interesado el 12 de agosto de 2015, de acuerdo con certificado de acuse de recibo del servicio de correos brasileño que se encuentra en el expediente y, transcurrido el plazo establecido, el promotor no presentó la documentación solicitada.

3. Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, con fecha 16 de septiembre de 2015, el encargado del registro civil consular, mediante auto, deniega lo solicitado por el interesado por no concurrir los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no haber aportado la totalidad de los documentos que le fueron requeridos.

4. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando que no consiguió reunir en plazo la documentación requerida, acompañando la siguiente documentación: fotocopias simples de su certificado literal de nacimiento brasileño; del certificado literal de nacimiento brasileño de sus padres, don C. A. y D^a N. R. M.; del certificado de matrimonio brasileño de sus padres y del certificado negativo de naturalización en Brasil de su abuelo materno español, don A. M. M..

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe en el que indica que, el análisis de la documentación no permite acreditar que el interesado se encuentre comprendido dentro del ámbito de aplicación del apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, toda vez que no ha quedado probado que tenga la condición de hijo de español/a de origen, al no constar en el expediente el certificado literal de nacimiento español de su abuelo materno, documento que, junto con el certificado de no naturalización en Brasil de este último, podría servir para probar que la madre del solicitante nació en Brasil de padre español y, por tanto, tuvo la condición de española de origen no inscrita y, por otra parte, tampoco consta que el interesado haya promovido el expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo previsto en los artículos 311 y siguientes del Reglamento del Registro Civil, de conformidad con lo dispuesto en la instrucción de 04 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el derecho de opción a la

nacionalidad española establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

El encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe, redactado en los mismos términos expresados por el órgano en funciones de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en S. P. (Brasil) en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de mayo de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 16 de septiembre de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su progenitor/a sea español/a de origen.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija

las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, el promotor no ha acompañado a su solicitud ni al escrito de recurso el certificado literal español de nacimiento de su abuelo materno, documento que, junto con el certificado de no naturalización en Brasil del mismo, podría servir para probar que la madre del solicitante nació en Brasil de padre español, no constando tampoco que el interesado haya promovido el expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, previsto en los artículos 311 y siguientes del Reglamento del Registro Civil y en la instrucción de 04 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

De este modo, a la vista de la documentación aportada, no resulta posible determinar si el interesado cumple los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española de origen.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en São Paulo (Brasil).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (27ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. D^a C. A. G., nacida el 01 de agosto de 1978 en S. P. (Brasil), de nacionalidad brasileña, presenta en fecha 31 de octubre de 2011 en el Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil), solicitud de opción a la nacionalidad española de origen (anexo I) en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima. Acompañó la siguiente documentación: copia del certificado literal de nacimiento brasileño originario de la interesada; copia del oficio del juez de Menores Auxiliar dirigido al oficial del Registro Civil de Campinas, en el que interesa la inscripción de la adopción de la interesada por don J. C. C. G. y D^a M. C. A. G., de conformidad con la sentencia dictada en el proceso 160/79-2^o oficio, de fecha 25 de mayo de 1982; certificado literal de nacimiento brasileño de la interesada, en el que consta que es hija de don J. C. C. G. y de D^a M. C. A. G.; certificados literales de nacimiento y de matrimonio brasileños de sus padres; copia del certificado literal de nacimiento español de su abuelo paterno, don J. J. M., nacido en L. U. (Murcia) el 12 de marzo de 1904 y el certificado negativo de naturalización en Brasil del mismo.

2. Con fecha 31 de julio de 2015 el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) requiere a la interesada a fin de que aporte la documentación probatoria necesaria para subsanar su solicitud, en particular, la sentencia de adopción dictada en el proceso 160/79-2^o oficio, otorgándole un plazo de treinta días para su aportación. El requerimiento de documentación fue notificado a la interesada el 14 de agosto de 2015, de acuerdo con el certificado emitido por el servicio de correos brasileño y, transcurrido un mes desde la notificación, la interesada no aportó el documento requerido.

3. Previo informe desfavorable del canciller del Consulado General de España en São Paulo (Brasil), en funciones de ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular dicta auto en fecha 15 septiembre de 2015 por el que se acuerda denegar la solicitud de opción a la nacionalidad española formulada por la interesada, al no haberse podido comprobar si se encontraba comprendida dentro del ámbito de aplicación del apartado 1^o de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no haber aportado la documentación requerida.

4. Notificada la resolución, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citada, alegando que no cuenta con la sentencia de adopción requerida y solicitando un nuevo plazo adicional para poder aportarla.

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe indicando que, el análisis de la documentación integrante del expediente no permite acreditar que la interesada se encuentre comprendida dentro del ámbito de aplicación del apartado 1^o de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que no ha quedado probado que tenga la condición de hija de español/a de origen, al no haber aportado la sentencia de adopción que se le requirió en fecha 31 de julio de 2015.

El encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, redactado en los mismos términos formulados por el órgano en funciones de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida el 01 de agosto de 1978 en S. P. (Brasil), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 31 de octubre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 15 de septiembre de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no se ha podido acreditar que la interesada tenga la condición de hija de español de origen, toda vez que la promotora no aportó la documentación que le fue requerida dentro del plazo establecido al efecto, en particular, la sentencia de adopción de la misma. Interpuesto recurso por la interesada, solicitó la concesión de un nuevo plazo adicional para aportar la documentación requerida, no habiéndose aportado hasta el momento por la solicitante la información que le fue requerida.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente expediente no ha podido acreditarse que la promotora cumpla los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, en particular, que tenga la condición de hija de español de origen, al no haber aportado la sentencia de adopción que le fue requerida, dentro del plazo establecido al efecto.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en São Paulo (Brasil).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (28ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Dª L. A. F. (A. T.), nacida el 22 de octubre de 1971 en B., S. P. (Brasil), de nacionalidad brasileña, hija de don B. A. y de Dª A. F. A., nacidos en Brasil, presenta solicitud (anexo I) en el Consulado de España en São Paulo el 27 de diciembre de 2011 a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima. Aportó la siguiente documentación: certificado literal de nacimiento brasileño de la promotora; copia de los certificados literales de nacimiento brasileños de sus

progenitores; copia del certificado de matrimonio brasileño de sus padres; copia del certificado de bautismo de su abuelo paterno don J. A. B., expedido por el director del Archivo Histórico Diocesano de S. C.; copia de la certificación negativa de inscripción del abuelo paterno en el Registro Civil de A. (Pontevedra) entre el 02 de noviembre de 1894 y el 02 de enero de 1900 y la certificación negativa de naturalización en Brasil de este último.

2. Con fecha 08 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo requiere a la interesada a fin de que subsane su solicitud, concediéndole un plazo de treinta días para que aporte la documentación que falta en el expediente, en particular, el certificado español de nacimiento de su abuelo paterno y la legalización de la documentación brasileña aportada. Dicho requerimiento fue notificado a la interesada el 23 de junio de 2015, de acuerdo con certificado de acuse de recibo del servicio de correos brasileño que se encuentra en el expediente y, transcurrido el plazo establecido, la promotora no presentó la documentación solicitada.

3. Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, con fecha 18 de septiembre de 2015, el encargado del registro civil consular, mediante auto, deniega lo solicitado por la interesada por no concurrir los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no haber aportado la totalidad de los documentos que le fueron requeridos.

4. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando las dificultades para obtener el certificado de nacimiento español de su abuelo y aportando la siguiente documentación: documentos brasileños originales requeridos, debidamente legalizados así como el certificado literal de nacimiento español de su abuelo paterno, don J. A. B., nacido en S. C. (Pontevedra) el 20 de marzo de 1894, siendo hijo legítimo de don M. A. J., natural de C. (Portugal) y de la ciudadana originariamente española D^a E. B. P., natural de S. C. (Pontevedra) y nieto por línea paterna de abuelos naturales de C. (Portugal).

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe en el que indica que, el análisis de la documentación no permite acreditar que la interesada se encuentre comprendida dentro del ámbito de aplicación del apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, toda vez que no ha quedado acreditado que su abuelo paterno, nacido en España, fuese español y que su padre, don B. A. (bisabuelo de la interesada), fuese hijo de español y que, por tanto, tuviese la condición de español de origen no inscrito.

El encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe, redactado en los mismos términos expresados por el órgano en funciones de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en B., S. P. (Brasil) el 22 de octubre de 1971 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 18 de septiembre de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su progenitor sea español de origen.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba

de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de español de origen del progenitor de la interesada, se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil brasileño de la solicitante y de su padre, así como certificado español de nacimiento del abuelo paterno, en el que consta que nació el 20 de marzo de 1894 en Pontevedra, siendo hijo de ciudadano nacido en Portugal (cuyos padres igualmente nacieron en Portugal) y de ciudadana originariamente española que perdió su nacionalidad al contraer matrimonio con ciudadano extranjero, al amparo de lo dispuesto en el entonces vigente artº 22 del Código Civil en su redacción originaria. Asimismo, no consta en el certificado literal de nacimiento español del abuelo paterno, que el mismo hubiese optado por la nacionalidad española al amparo de lo dispuesto en el artº 19 del Código Civil en su versión originaria, en la que se dispone que “los hijos de un extranjero nacidos en los dominios españoles deberán manifestar, dentro del año siguiente a su mayor edad o emancipación, si quieren gozar de la calidad de españoles que les concede el artº 17”. De este modo, no se encuentra justificada en el expediente la nacionalidad española del abuelo de la interesada y, por tanto, de su progenitor.

De este modo, a la vista de la documentación aportada, la interesada no acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española de origen.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en São Paulo (Brasil).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (29ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. D^a E. R. Z., nacida el 06 de junio de 1957 en S. P. (Brasil), de nacionalidad brasileña, hija de don M. R., nacido en Argentina y de D^a P. Z. R., nacida en Brasil, presenta solicitud (anexo I) en el Consulado de España en São Paulo el 22 de julio de 2009 a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima. Aportó la siguiente documentación: copia del certificado literal de nacimiento brasileño de la promotora y certificado literal español de nacimiento del abuelo paterno de la interesada, don J.R.G.

2. Con fecha 01 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo requiere a la interesada a fin de que subsane su solicitud, concediéndole un plazo de treinta días para que aporte la documentación que falta en el expediente. Dicho requerimiento fue notificado a la interesada el 17 de junio de 2015, de acuerdo con certificado de acuse de recibo del servicio de correos brasileño que se encuentra en el expediente y, transcurrido el plazo establecido, la promotora no presentó la documentación solicitada.

3. Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, con fecha 10 de septiembre de 2015, el encargado del registro civil consular, mediante auto, deniega lo solicitado por la interesada al no quedar acreditado que se halle comprendida dentro del ámbito de aplicación del apartado 1^o de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, toda vez que la promotora no aportó la totalidad de los documentos que le fueron requeridos.

4. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando que no pudo presentar la documentación solicitada en plazo porque no consiguió el certificado literal de nacimiento de su madre. Junto con el recurso, aportó la siguiente documentación: copia de su certificado literal de nacimiento brasileño; copia del certificado literal de nacimiento argentino de su padre; copia del certificado literal de matrimonio brasileño de sus padres; copia del certificado literal de nacimiento español de su abuelo paterno y copia del documento de autenticación de la certificación negativa de naturalización en Brasil de este último.

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe en el que indica que, el análisis de la documentación no permite acreditar que la interesada se encuentre comprendida dentro del ámbito de aplicación del apartado 1^o de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, toda vez que no consta en el expediente el certificado negativo de naturalización en Brasil del abuelo paterno de la interesada, y tampoco consta el certificado negativo de naturalización de este último en Argentina, país donde el abuelo paterno residía en el momento del nacimiento del progenitor de la interesada; estos documentos hubiesen podido servir para probar que el padre de la interesada nació de padre español y que tendría, por tanto, la condición de español de origen no inscrito. Por otra parte, se indica que, con la excepción del

certificado literal de nacimiento español del abuelo paterno, el resto de los documentos aportados son copias y/o no se encuentran legalizadas.

El encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe, redactado en los mismos términos expresados por el órgano en funciones de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida el 06 de junio de 1957 en S. P. (Brasil), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de julio de 2009 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 10 de septiembre de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su progenitor sea español de origen.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la

documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de español de origen del progenitor de la interesada, se han aportado copias del certificado literal de nacimiento brasileño de la interesada y del certificado literal de nacimiento argentino de su progenitor, así como certificado español de nacimiento del abuelo paterno de la interesada, nacido el 30 de junio de 1891 en A. (Jaén). Si bien el abuelo paterno de la promotora nació originariamente español, no se ha aportado al expediente el certificado negativo de naturalización en Brasil y el certificado negativo de naturalización en Argentina del mismo, que podrían servir para probar que el abuelo paterno de la solicitante conservaba su nacionalidad española en el momento del nacimiento de su hijo, progenitor de la interesada.

De este modo, a la vista de la documentación aportada, la interesada no acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española de origen.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en São Paulo (Brasil).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (30ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Dª M. H. D. M., nacida el 27 de diciembre de 1951 en S. P. (Brasil), de nacionalidad brasileña, hija de don L. D. y de Dª A. M., nacidos en Brasil, presenta solicitud (anexo I)

en el Consulado de España en São Paulo el 21 de octubre de 2010 a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, sin aportar ninguno de los documentos probatorios necesarios.

2. Con fecha 01 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo requiere a la interesada a fin de que subsane su solicitud, concediéndole un plazo de treinta días para aportar dichos documentos. Dicho requerimiento fue notificado a la interesada el 10 de junio de 2015, de acuerdo con certificado de acuse de recibo del servicio de correos brasileño que se encuentra en el expediente y, transcurrido el plazo establecido, la promotora no presentó la documentación solicitada.

3. Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, con fecha 04 de septiembre de 2015, el encargado del registro civil consular, mediante auto, deniega lo solicitado por la interesada por no concurrir los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no haber aportado la totalidad de los documentos que le fueron requeridos.

4. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, aportando la siguiente documentación: fotocopias de su certificado literal de nacimiento brasileño; del certificado literal de nacimiento brasileño de su madre; del certificado de matrimonio brasileño de sus progenitores; de las cédulas de nacionalidad expedidas por el Viceconsulado de España en Beni-Saf (Argelia) a los abuelos maternos de la interesada, don F. F. M. y D^a C. G. Á.; del certificado de desembarque en Brasil del abuelo materno; del certificado de inscripción en el Registro de Españoles de la Agencia Consular de España en San Carlos (Brasil) expedido a nombre de don F. M. G.; del certificado negativo de naturalización en Brasil de don F. F. M./F. M. G. y del certificado de matrimonio francés de los abuelos maternos de la promotora.

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe en el que indica que, el análisis de la documentación no permite acreditar que la interesada se encuentre comprendida dentro del ámbito de aplicación del apartado 1^o de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no quedar acreditado que tenga la condición de hija de española de origen, ya que a pesar de la múltiple documentación existente en el expediente, no consta el certificado literal de nacimiento español de sus abuelos maternos, documento que, junto con su certificado negativo de naturalización en Brasil, podría servir para probar que la madre de la solicitante nació en Brasil de padres españoles y, por tanto, tuvo la condición de española de origen no inscrita.

El encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe, redactado en los mismos términos expresados por el órgano en funciones de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en S. P. (Brasil) el 27 de diciembre de 1951 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de octubre de 2010 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del Registro Civil se dictó auto de fecha 04 de septiembre de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su progenitora sea española de origen.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba

de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de española de origen de la progenitora de la interesada, se han aportado las correspondientes certificaciones literales de nacimiento brasileñas de la promotora y de su madre, así como el certificado negativo de naturalización en Brasil del abuelo materno de la interesada, pero no se ha aportado el certificado literal de nacimiento español del mismo. Por tanto, no resulta posible acreditar que la progenitora de la interesada naciera originariamente española.

De este modo, a la vista de la documentación aportada, la interesada no acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española de origen.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en São Paulo (Brasil).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (31ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, los que acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Don F. F. C., nacido el 28 de noviembre de 1965 en R. C., S. P. (Brasil), hijo de don A. F. y de Dª A. H. C. M., nacidos en Brasil, presenta solicitud (anexo I) en el Consulado de España en São Paulo el 14 de abril de 2011 a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, aportando copia del certificado literal español de nacimiento de su progenitora, nacida el 13 de julio de 1936 en S. P. (Brasil), en el que consta inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española el 25 de octubre de 2010.

2. Con fecha 23 de marzo de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo requiere al interesado a fin de que subsane su solicitud, concediéndole un plazo de treinta días para que aporte la documentación que falta en el expediente. Dicho requerimiento fue notificado al interesado por correo certificado en fecha 28 de abril de 2015 y, transcurrido el plazo establecido, el promotor no presentó la documentación solicitada.

3. Con fecha 14 de septiembre de 2015, el encargado del registro civil consular, mediante auto, deniega lo solicitado por el interesado, toda vez que al no haber aportado la totalidad de los documentos que le fueron requeridos, no se ha podido comprobar si podía acogerse a lo dispuesto en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

4. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, adjuntando, entre otros documentos, su certificado literal de nacimiento brasileño, debidamente legalizado; copia del certificado literal de nacimiento de su progenitor y el certificado de matrimonio brasileño de sus progenitores, debidamente legalizado.

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe en el que indica que, si bien el interesado no llegó a presentar el expediente completo en el plazo establecido, teniendo en cuenta los antecedentes y la documentación que se encuentra en el expediente, considera que el promotor tiene la condición de hijo de española de origen, por lo que se encuentra comprendido dentro del ámbito de aplicación del apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

El encargado del registro civil consular remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, junto con informe redactado en los mismos términos expresados por el órgano en funciones de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en S. P. (Brasil) el 28 de noviembre de 1965 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española

de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 14 de abril de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 14 de septiembre de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que se encuentre comprendido dentro del ámbito de aplicación de la citada norma, al no haber aportado la totalidad de los documentos probatorios que le fueron requeridos. Posteriormente, dicha documentación fue aportada por el interesado junto con su escrito de recurso.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

V. Si bien el promotor no aportó la documentación requerida por el encargado del registro civil consular dentro del plazo conferido al efecto, la misma fue aportada junto con el escrito de recurso, por lo que en virtud del criterio de economía procesal, procede determinar si en el expediente se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el presente expediente se ha aportado, entre otros, el certificado literal de nacimiento brasileño del interesado, debidamente legalizado, así como el certificado literal español de nacimiento de su madre, en el que consta inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española el 25 de octubre de 2010, en virtud de lo establecido en el artº 26.1 del Código Civil.

De este modo, se constata que el interesado es hijo de progenitora española de origen, cumpliéndose los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y dejar sin efecto el acuerdo apelado, instando al encargado del registro civil consular para que se proceda a la inscripción de nacimiento del recurrente con la marginal de la nacionalidad española por opción correspondiente.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en São Paulo (Brasil).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (43ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Dª. M. G. P. (T. G.), ciudadana cubana, presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que hace constar que nació el 20 de mayo de 1965 en M., L. H. (Cuba), hija de E. T. T. B., nacido en V. T., L. T. (Cuba) en 1933, soltero y de G. J. G. P., nacida en C. (Cuba) en 1932, casada, carné de identidad cubano de la promotora, certificado no literal de nacimiento de la promotora, en el que se consigna como apellidos T. G., certificado literal de nacimiento cubano de la madre de la promotora, Sra. G. P., hija de C. G. G., natural de Canarias (España) y de G. P. B., natural de M., actualmente G. (Cuba) y nieta por línea paterna de ciudadanos naturales de España, consta nota marginal de que la inscrita contrajo matrimonio en 1952 con el ciudadano J. Á. G., certificación literal de defunción de la precitada, fallecida en Cuba en 2001 y de estado civil casada, literal de inscripción de nacimiento española del abuelo materno de la promotora, Sr. G. G., inscrito en 1919 previo expediente y nacido en S. C. T. en 1899, hijo de C. G. T. y de S. G. T., certificado literal de matrimonio de los abuelos maternos de la promotora, celebrado en Cuba en 1920, certificado literal de defunción cubano del Sr. G. G., fallecido en Cuba en 1984 a los 85 años,

natural de España y con ciudadanía cubana, con marginal de enero del año 2009 que subsana error declarando que debe tenerse por omitida la ciudadanía del finado, certificados de las autoridades cubanas de inmigración y extranjería relativos al Sr. G. G., expedidos a petición de persona distinta de la promotora en el año 2009, declarando que no consta inscrito en el Registro de extranjeros ni en el de ciudadanía, certificados de las precitadas autoridades expedidos en el año 2010 a petición de la interesada, que declaran que el Sr. G. G. estaba inscrito en el Registro de Extranjeros con nº de expediente, formalizado en C. a los 37 años, es decir en 1936 y que no consta inscrito en el Registro de Ciudadanía.

2. Con fecha 3 de octubre de 2012 el encargado del registro civil consular, mediante resolución, accede a lo solicitado por la interesada en cuanto a que en ella concurren los requisitos para la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 ya que su madre es originariamente española, si bien no ha quedado acreditada su filiación paterna respecto del Sr. T. B., ya que su madre estaba casada con otro ciudadano cubano, por lo que se inscribirá a la interesada con su filiación materna, G. P.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, mostrando su disconformidad con el hecho de que no se haya tenido en cuenta su filiación respecto al Sr. T. B., que entiende acreditada con su documentación de nacimiento cubana en la que consta que fue inscrita por declaración de sus padres.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que en el expediente examinado se han guardado en su tramitación las prescripciones legales y, en consecuencia, el auto es conforme a derecho. La encargada del registro civil consular emite su informe preceptivo mostrando su conformidad con la decisión en su día adoptada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

5. Consta a este centro directivo inscripción literal de nacimiento en el Registro Civil Consular de La Habana de la madre de la promotora, Sra. G. P., inscrita en 1989, se hace constar que su padre, Sr. G. G., es de nacionalidad española y su madre, Sra. P. B., de nacionalidad cubana, también consta anotación marginal relativa a que la inscrita ha sido advertida de que se practica la inscripción sin que está suficientemente acreditada su nacionalidad española. Consta igualmente inscripción literal de defunción en el Registro Civil Consular de La Habana del abuelo materno de la promotora, Sr. G. G., fallecido en Cuba en 1984 e inscrito ese mismo año, haciéndose constar su nacionalidad española.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67

de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en L. H. (Cuba) en 1965 en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 1 de diciembre de 2009 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 3 de octubre de 2012, accediendo a lo solicitado pero con la salvedad de que la interesada sería inscrita con su filiación materna, G. P., al no quedar debidamente acreditada su filiación paterna respecto del Sr. T. B.

III. El auto apelado se basa en que la progenitora de la promotora, ciudadana originariamente española, estaba casada con un ciudadano cubano, Sr. Á. G. desde el año 1952, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, dicha certificación no fue aportada durante la tramitación del expediente y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación

del progenitor presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, posteriormente ha sido conocida por este centro directivo y es lo cierto que unida a la certificación literal de defunción española del padre de la misma y abuelo de la promotora, cabe entender que la nacionalidad originaria de la madre está acreditada por lo que ha de estimarse correcto el auto recurrido, que también lo es respecto a considerar que lo que no queda acreditada legalmente es la filiación paterna invocada por la interesada.

V. En el presente caso la madre de la interesada, Sra. G. P., había contraído matrimonio en 1952 con el Sr. Á. G., vínculo matrimonial que no consta disuelto hasta la fecha de su fallecimiento en el año 2001, habiendo nacido la recurrente en 1965, es decir durante la vigencia del matrimonio, circunstancia que hace aplicable el artículo 116 del Código Civil que presume que son hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges.

Por tanto, se plantea en este recurso la cuestión de la filiación paterna de la optante, al respecto, sin prejuzgar el contenido del Derecho cubano sobre las formas o títulos de determinación de la filiación (cfr. art. 9 nº4 del Código Civil), lo cierto es que la acreditación de la filiación está condicionada a la prueba del vínculo que resulta de la certificación de nacimiento de la optante en el registro local cubano, la cual, en cuanto a su eficacia registral en España está, a su vez, condicionada al principio de equivalencia de garantías de su autenticidad y veracidad conforme a lo que establecen los artículos 23 de la Ley del Registro Civil y 85 de su reglamento, documento en el que no consta el estado civil de los progenitores, que podría haber afectado a la determinación de la filiación, lo que exige valorar dicha certificación en virtud del canon normativo que resulta del Derecho español, con arreglo al cual, debe quedar destruida la presunción de filiación matrimonial establecida en el artículo 116 del Código Civil. Por tanto, siendo la madre casada, si el alumbramiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado reconocer la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (cfr. art. 113 CC) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 del Código Civil, mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (cfr. arts. 386 LEC). Desde el momento en que se solicita la inscripción de una filiación está cumplido el requisito exigido para admitir como prueba la presunción de paternidad del marido (cfr. arts. 113 CC y 2 LRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (48ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que acrediten ser hijo de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo de la encargada del Registro Civil Consular de España en Manila (Filipinas).

HECHOS

1. D^a. C. Y. Q., ciudadana filipina, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en Manila, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que hace constar que nació el 15 de julio de 1955 en M., hija de E. Y. F., nacido en M. en 1929 y de L.Q. R., también nacida en M. en 1932, pasaporte filipino de la promotora, certificado literal de nacimiento filipino de la promotora consta que ambos progenitores eran españoles, certificado de graduación de la promotora en el instituto C. de M., certificado no literal de nacimiento filipino del padre de la promotora, Sr. Y. F., hijo de A. Y. y E. F., certificados de nacionalidad expedidos en 1958 y relativo a los padres de la promotora, inscritos en el registro de matrícula de españoles desde el año 1952, certificación en extracto de la inscripción en el Registro Civil Consular del matrimonio de los padres de la promotora, celebrado en M. en 1951 y certificado literal filipino del citado matrimonio.

2. La encargada del registro civil consular, mediante resolución de fecha 3 de marzo de 2010 deniega lo solicitado por la interesada, ya que a la vista de la documental presentada y la información que le consta al propio registro, la misma poseía de origen la nacionalidad española y la perdió al obtener su padre la nacionalidad filipina cuando ella era menor de edad, por tanto le correspondería recuperar la nacionalidad española de origen y no ejercer la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

3. Notificada la interesada, esta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando su petición, así como que dos hermanos suyos ya la han obtenido en aplicación de la Ley 52/2007, y adjuntando su certificado literal de nacimiento español, en el que se hace constar que es nieta por línea paterna de A.Y. F., natural de V. y de E. F. C., natural de M. y por línea materna de A. Q. y V., natural de M. y de C. R. V., natural de B., aparece una inscripción marginal de 1965 relativa a que la inscrita, menor de edad, perdió su ciudadanía española por haber obtenido su padre la filipina, según certificado de naturalización, en 1964.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que no tiene alegación alguna que formular. El encargado del registro civil consular emite su informe

preceptivo en el sentido de que la promotora era española de origen, al igual que su padre, pero éste incurrió en pérdida de dicha nacionalidad al obtener la filipina y también su hija menor de edad en aquél momento, por lo que le correspondería recuperarla, y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

5. Consta a este centro directivo certificación literal de nacimiento española del padre de la promotora, Sr. Y. F., inscrito en el Registro Civil Consular de Manila en 1939, 10 años después de su nacimiento, haciéndose constar la nacionalidad española de su padre y que sus dos progenitores estaban inscritos en el Registro de Nacionalidad del Consulado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 17 y 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones que en la inscripción de nacimiento de la interesada, nacida en M. en 1955, en el Registro Civil Consular de España en Manila se haga constar su nacionalidad española en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual, podrán optar a la nacionalidad española de origen aquellos cuyos padre o madre hubiesen sido españoles de origen.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 24 de abril de 2009 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil consular se dictó acuerdo el 3 de marzo de 2010, denegando lo solicitado.

III. El acuerdo apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al ser española de origen puesto que lo es su padre, habiendo perdido dicha nacionalidad y, en su caso, corresponderle ejercer la recuperación de la nacionalidad española, prevista en el artículo 26 del Código Civil español.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas "cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español", derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se

exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso se ha aportado certificación de nacimiento de la promotora del registro civil local con la solicitud y español en vía de recurso, consta igualmente certificado de nacimiento español del padre de la promotora y certificado en extracto de la inscripción en el registro civil español del matrimonio de sus padres, documentos que permiten llegar a la conclusión de que la promotora nació hija de ciudadano de nacionalidad española, por lo que según el artículo 17 del Código Civil en su redacción dada por la ley de 15 de julio de 1954, vigente en aquél momento, era española porque lo eran “los hijos de padre español”.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su reglamento- se ha acreditado que el padre de la interesada ostentó la nacionalidad española de forma originaria por lo que se cumple con el requisito esencial del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la resolución apelada, declarando el derecho de la interesada a la opción a la nacionalidad española de origen conforme al apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Manila (Filipinas).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (50ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren optado anteriormente por la nacionalidad española de origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución de la encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. D^a. M. L. D., ciudadana cubana, presenta escrito en el Consulado de España en La Habana, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, disposición adicional séptima, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que nació el 3 de mayo de 1988 en L.H. (Cuba), hija de E. B. L. R., nacido en M. (Cuba) en 1962 y M. J. D. L., nacida en L. H. (Cuba) en 1961, casados en 1987, certificado no literal de nacimiento de la promotora, carné de identidad cubano de la promotora, inscripción literal de nacimiento española de la madre de la promotora, Sra. D. L., hija de M.D. C. y de Z. L. M., ambos nacidos en L.H. en 1929 y 1935, respectivamente y de nacionalidad cubana, con marginal de opción a la nacionalidad española con base en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 con fecha 2 de junio de 2009, inscripción literal de nacimiento española del abuelo materno de la promotora, Sr. D. C., hijo de J. D. S., nacido en L. (Asturias) en 1894 y del que no se hace constar su nacionalidad y de D. C. V., nacida en L. H. en 1889, de nacionalidad cubana, con marginal de que el inscrito optó por la nacionalidad española con base en el artículo 20.1.b del Código Civil con fecha 25 de agosto de 2008 e inscrito el 11 de febrero de 2009, anotación marginal de que los padres del inscrito contrajeron matrimonio en 1922, anotación de que la nacionalidad del padre del inscrito es la española y la recuperación de la nacionalidad española por parte del inscrito con fecha 17 de junio de 2009 y certificado no literal cubano de matrimonio de los padres de la promotora.

2. La encargada del registro civil consular, mediante resolución de fecha 11 de febrero de 2014 deniega lo solicitado por la interesada, habida cuenta que su progenitora optó por la nacionalidad española con base en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en el año 2009 cuando la interesada ya era mayor de edad.

3. Notificada la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando la nacionalidad española de su abuelo materno, sobre la que según

manifiesta quería presentar su solicitud, por lo que es un error que se le deniegue por su madre.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. La encargada del registro civil consular emite su informe preceptivo conforme con la decisión previamente adoptada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2010.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1988, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En este caso la madre de la interesada solicitó su nacionalidad española en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada mediante solicitud suscrita el 2 de junio de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

III. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 12 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil se dictó acuerdo el 11 de febrero de 2014 denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la interesada no reúne los requisitos necesarios para admitir su opción de nacionalidad española, ya que su progenitora había optado por la misma en base a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 cuando ella era mayor de edad, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la disposición adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española

de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

Esta cuestión fue abordada por la instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora de la recurrente opta por la nacionalidad española en ejercicio de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, solicitada el 2 de junio de 2009, la ahora optante, nacida el 3 de mayo de 1988, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima.

V. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso la progenitora de la recurrente ostentaría la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, -de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción-, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación

actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del título primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria -artículo 17- y las adquisiciones derivativas -artículos 19 a 22-), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogidos al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX. En la proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la disposición transitoria tercera.

Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas disposiciones transitorias (segunda y tercera) ha de ser analizado conjuntamente, a fin de poder interpretarlas coordinadamente. Por ello, la instrucción de este centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción -con efectos de nacionalidad de origen-, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la instrucción de esta dirección general de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria tercera. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria segunda (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la disposición transitoria tercera, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución Española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria tercera “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 n°1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 n°2, f del Código Civil).

XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente

español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado -nietos-, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta dirección general.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, como en el caso presente ya que no consta acreditada que la pérdida o renuncia a la nacionalidad española del abuelo de la promotora, Sr. D. C., luego recuperada se hubiera producido como consecuencia del exilio.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (51ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren optado anteriormente por la nacionalidad española de origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución de la encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don C. A. F. F., ciudadano cubano, presenta escrito en el Consulado de España en La Habana, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007, disposición adicional séptima, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que nació el 27 de enero de 1984 en P. R. (Cuba), hijo de C. G. F. A. y S. M. F. D., ambos nacidos en P. R. en 1954 y 1959, respectivamente, certificado no literal de nacimiento del promotor, carné de identidad cubano del promotor, inscripción literal de nacimiento española del padre del promotor, Sr. F. A., hijo de J.Á. F. P. y de M. J. A. C., ambos nacidos en P. R. en 1909 y 1920 y ambos de nacionalidad cubana, casados en Cuba, con marginal de opción a la nacionalidad española con base en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 con fecha 13 de marzo de 2009 e inscripción literal de nacimiento española de la abuela paterna del promotor, Sra. A. C., hija de J. R. A. P., nacida en L. (Asturias) en 1884 y de nacionalidad española y de T. C. L., nacido en P. R. (Cuba) en 1888 y de nacionalidad cubana, casados en Cuba en 1910, con marginal de recuperación de la nacionalidad española con fecha 11 de mayo de 2007.
2. La encargada del registro civil consular, mediante resolución de fecha 21 de enero de 2014 deniega lo solicitado por el interesado, habida cuenta que su progenitor optó por la nacionalidad española con base en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en el año 2009 cuando el interesado ya era mayor de edad.
3. Notificado el interesado, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando la nacionalidad española de su abuela y bisabuelo paternos, sobre la que quería presentar su solicitud, reiterando su deseo de obtener la nacionalidad española, añadiendo que adjunta documentos que tuvo en cuenta para su solicitud pero que no están unidos al escrito de recurso.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta

conforme a derecho. La encargada del registro civil consular emite su informe preceptivo conforme con la decisión previamente adoptada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2010.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Cuba en 1984, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En este caso el padre del interesado solicitó su nacionalidad española en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada mediante solicitud suscrita el 13 de marzo de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

III. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de noviembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil se dictó acuerdo el 21 de enero de 2014 denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el interesado no reúne los requisitos necesarios para admitir su opción de nacionalidad española, ya que su progenitor había optado por la misma en base a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 cuando él era mayor de edad, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la disposición adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

Esta cuestión fue abordada por la instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de

padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del n° 1 del artículo 20 del Código Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 n° 1 a) del Código Civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor del recurrente opta por la nacionalidad española en ejercicio de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, solicitada el 13 de marzo de 2009, el ahora optante, nacido el 27 de enero de 1984, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima.

V. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso el progenitor del recurrente ostentaría la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, -de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción-, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del título primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la

que se da nueva redacción al artículo 18 del código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria -artículo 17- y las adquisiciones derivativas -artículos 19 a 22-), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogidos al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente

hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX. En la proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la disposición transitoria tercera.

Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo

26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas disposiciones transitorias (segunda y tercera) ha de ser analizado conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la instrucción de este centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción -con efectos de nacionalidad de origen-, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la instrucción de esta dirección general de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados

en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera conditio iuris o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria tercera. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria segunda (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la disposición transitoria tercera, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución Española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria tercera “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código Civil).

XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las

enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado -nietos-, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta dirección general.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, como en el caso presente ya que no consta acreditado que la pérdida o renuncia a la nacionalidad española de la abuela del promotor, Sra. A. C., luego recuperada se hubiera producido como consecuencia del exilio.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 24 de octubre de 2016 (6ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don J. C. O. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados literales locales de nacimiento propio y de su madre, y el de su abuelo expedido por el registro civil español. También se incorpora al expediente documentación sobre inmigración y extranjería del abuelo que adolece de irregularidades en la firma y sello gomígrafo, por lo que no puede ser tomada en consideración.
2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 12 de mayo de 2014 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Cuba en 1946, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de marzo de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 12 de mayo de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado los extremos reflejados en su solicitud, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En este caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, es lo cierto que la nacionalidad española originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la madre del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo del recurrente, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española por parte del abuelo como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto, y sí consta que su hija, madre del interesado nació en Cuba en 1922 y, de dar credibilidad a la documentación sobre inmigración y extranjería aportada al expediente, nos encontraríamos con que el abuelo se inscribió en el Registro de Extranjeros cubano en el año 1927, cuando contaba 32 años de edad. Por todo ello que se puede afirmar, sin margen de error, que su vida transcurrió en Cuba y no pueden ser considerado exiliado ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por don J. C. O. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 24 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 24 de octubre de 2016 (7ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña T. L. A. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados literales locales de nacimiento propio y de su padre, así como el de bautismo de su abuela expedido por la Diócesis de L. P. También se incorpora al expediente certificación de matrimonio de los abuelos paternos, celebrado en Cuba el 22 de diciembre de 1923, el contrayente también español, naturalizado cubano el 3 de febrero de 1939, fecha en la que la abuela pierde la nacionalidad española conforme a lo previsto en el artículo 22 del Código Civil de 1889, vigente en la época. Así mismo se aporta copia de la inscripción de la abuela en el Registro de Extranjeros cubano, cuando contaba 31 años de edad, es decir en 1936, y carta de naturalización de la misma como ciudadana cubana de fecha 2 de noviembre de 1942, documento expedido por las autoridades cubanas que carece de eficacia legal frente a la normativa vigente en España.
2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 13 de febrero de 2013 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1942, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual "1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional".

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 6 de octubre de 2009 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 13 de febrero de 2013, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado los extremos reflejados en su solicitud, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En este caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, es lo cierto que la nacionalidad española originaria del padre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho). Todo lo contrario, la abuela de la recurrente, nacida en España, perdió la nacionalidad española en 1939 cuando su marido adquirió la ciudadanía cubana el 3 de febrero de 1939, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Código Civil en su redacción originaria, Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente en esa fecha “La mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido”. Por lo tanto, en el momento de nacer el padre de la solicitante, en abril de 1942, aquélla (abuela paterna) ya no ostentaba la nacionalidad española y, por tanto, el padre de la solicitante no es español de origen.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que el padre de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela de la recurrente, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado la nacionalidad española de la abuela de la solicitante, nacida el 6 de febrero de 1905, sin que a tales efectos sea suficiente la partida de bautismo, ya que no cabe atribuir a la misma valor como prueba de los actos concernientes al estado civil de las personas acaecidos con posterioridad a la creación del registro civil en España (cfr. art. 35 LRC de 1870, y resolución de 20 de octubre de 2003-2ª). Así mismo no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española por parte de la abuela como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto, sin embargo, la abuela contrajo matrimonio en Cuba en 1923, por lo que se puede afirmar que la vida de la abuela transcurrió en Cuba y no puede ser considerada exiliada ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil ha acordado desestimar el recurso interpuesto por doña T. L. A. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 24 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 24 de octubre de 2016 (8ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad

que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña L. M. Q. G. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y, los de su padre y su abuela expedidos por el registro civil español, constando en el del padre que nació en G. a bordo del vapor español M. d. C. y que optó a la nacionalidad española, en base a la Ley 52/2007, cuando la interesada ya había alcanzado la mayoría de edad.
2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 4 de marzo de 2015 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007; 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2010.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular, como española de origen, a la nacida en Cuba en 1967, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En este caso el padre de la interesada tienen la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada, en acta suscrita el 10 de enero de 2010 e inscrita en el Registro Civil de España en Gibraltar el 19 de enero de 2010, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

III. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de febrero de 2010 mediante el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 4 de marzo de 2015, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa, esencialmente, su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada instrucción, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la disposición adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

Esta cuestión fue abordada por la instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 10 de enero de 2010, la ahora optante, nacida en 1967, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima.

V. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige,

pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, -de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción-, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del título primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes

fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria -artículo 17- y las adquisiciones derivativas -artículos 19 a 22-), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogidos al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio,

el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX. En la proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la disposición transitoria tercera.

Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas disposiciones transitorias (segunda y tercera) ha de ser analizado conjuntamente, a fin de poder interpretarlas coordinadamente. Por ello, la instrucción de este centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción -con efectos de nacionalidad de origen-, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si

el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la instrucción de esta dirección general de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria tercera. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria segunda (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la disposición transitoria tercera, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución Española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria tercera “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código Civil).

XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado -nietos-, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta dirección general.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 n.º1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela de la optante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española, por parte de la abuela, como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto por lo que la abuela no puede ser considerada exiliada ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por doña L. M. Q. G. y confirma el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura

Madrid, 24 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 24 de octubre de 2016 (10ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.n.º1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña L. C. G. presenta escrito en el Consulado de España La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y, el de su padre y su abuela, expedidos por el registro civil español, constando en el del padre que optó a la ciudadanía española por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002, cuando la interesada había alcanzado la mayoría de edad. También se incorpora al expediente, certificado de matrimonio canónico de los abuelos, que se celebró en Cuba en 1923, siendo el contrayente cubano, y los certificados, de inmigración y extranjería, expedidos a nombre de la abuela, en los que se especifica que entró en Cuba el 8 de julio de 1917 y que no consta que haya obtenido la ciudadanía cubana por naturalización.
2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 2 de diciembre de 2014 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º, 23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y 1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1964, en virtud del ejercicio de la opción

prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 n°1, b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita el 24 de abril de 2012 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 29 de enero de 2015, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 5 de julio de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto 2 de diciembre de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que no prueba los hechos manifestados en su declaración, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

Hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o iter jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar ope legis desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no

pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución Española y 24 del Código Civil.

Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código Civil, por la que accedió a la ciudadanía española el padre de la ahora recurrente. Como señala la instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20 nº1.b) del Código Civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V. En el presente expediente, el progenitor de la optante, nacido en 1930, ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código Civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela de la optante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española, por parte de la abuela, como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmete, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto, y sí está acreditado, tal y como la propia interesada corrobora en su escrito de recurso, que la abuela ingresó en Cuba el 8 de julio de 1917, contrajo matrimonio canónico en dicho país el 20 de agosto de 1923 y su hijo nació, también en Cuba el 26 de mayo de 1930. Por todo ello se puede afirmar, sin margen de error que la vida de la abuela transcurrió en Cuba y no puede ser considerada exiliada ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por doña L. C. G. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura

Madrid, 24 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 24 de octubre de 2016 (11ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.n.º1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña L. C. G. presenta escrito en el Consulado de España La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y, el de su padre y su abuela, expedidos por el registro civil español, constando en el del padre que optó a la ciudadanía española por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002, cuando la interesada había alcanzado la mayoría de edad. También se incorpora al expediente, certificado de matrimonio canónico de los abuelos, que se celebró en Cuba en 1923, siendo el contrayente cubano, y los certificados, de inmigración y extranjería, expedidos a nombre de la abuela, en los que se especifica que entró en Cuba el 8 de julio de 1917 y que no consta que haya obtenido la ciudadanía cubana por naturalización.
2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 2 de diciembre de 2014 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º, 23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y 1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1966, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 n°1, b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita el 24 de abril de 2012 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 29 de enero de 2015, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de junio de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto 2 de diciembre de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que no prueba los hechos manifestados en su declaración, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

Hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o iter jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar ope legis desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 n°2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 n°3 de la Constitución Española y 24 del Código Civil.

Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 n°2 y 19 n°2 del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del n°1 del artículo 20 del Código Civil, por la que accedió a la ciudadanía española el padre de la ahora recurrente. Como señala la instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20 n°1.b) del Código Civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V. En el presente expediente, el progenitor de la optante, nacido en 1930, ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.n°1.b) del Código Civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela de la optante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española, por parte de la abuela, como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos

en el apartado V de la citada instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto, y sí está acreditado, tal y como la propia interesada corrobora en su escrito de recurso, que la abuela ingresó en Cuba el 8 de julio de 1917, contrajo matrimonio canónico en dicho país el 20 de agosto de 1923 y su hijo nació, también en Cuba el 26 de mayo de 1930. Por todo ello se puede afirmar, sin margen de error que la vida de la abuela transcurrió en Cuba y no puede ser considerada exiliada ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por doña L. C. G. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 24 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de octubre de 2016 (3ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten, a la vista de la falta de garantías de la documentación, ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don A. O. M. B., ciudadano cubano, presenta escrito en el consulado español en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, anexo I, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación, tras dos requerimientos: hoja declaratoria de datos, en la que hace constar que nació el 28 de octubre de 1955 en C. d. S., P. d. R. (Cuba), hijo de A. L. M. P. y de G. B. P., nacidos ambos en C. d. S. en 1923 y 1934, respectivamente, certificado no literal de nacimiento del promotor, inscrita en 1956, 1 año después de su nacimiento, carné de identidad cubano del promotor, certificación literal de

nacimiento española del padre del promotor, Sr. M. P., inscrito en 1984, 61 años después de su nacimiento, hijo de A. M. A., natural de H., isla de L. G. (S. C. d. T.) donde nació el 13 de junio de 1881 y de nacionalidad española y de A. P. A., natural de P. d. R. (Cuba), nacida en 1902 y de nacionalidad cubana, casados en Cuba en 1916, con marginal relativa a que el inscrito el 12 de septiembre de 1984 declaró en acta la voluntad de conservar la nacionalidad española de su padre y certificados de las autoridades cubanas de inmigración y extranjería, expedidos a petición del promotor en el año 2009, sobre el Sr. A. M. A., abuelo paterno del promotor, relativo a que no consta inscrito en el Registro de Ciudadanía como naturalizado cubano y si aparece en el Registro de Extranjeros con el nº, inscripción formalizada en L. H. a los 40 años, es decir en 1921, según su fecha de nacimiento y siendo su estado civil soltero.

2. El encargado del registro civil consular, mediante resolución de fecha 15 de junio de 2011 deniega lo solicitado por el interesado porque no se ha acreditado que el progenitor del promotor fuera español de origen, habida cuenta las irregularidades detectadas en la documentación.

3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria, alegando que su opción de nacionalidad española debió por su abuelo paterno, español, adjuntando como documento nuevo certificado no literal de bautismo, expedido por el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), en el que se declara que el 16 de diciembre de 1978 se bautizó a A. N. d. I. E., del que no consta su lugar de nacimiento, pero sí la fecha, 5 de diciembre de 1878, hijo de J. M. M. y V. A. P., ambos naturales de L. G., tampoco consta el nombre de la madrina.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. El encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo ratificándose en la decisión adoptada en su día y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

5. Consta en el expediente solicitud, firmada por el interesado, en modelo oficial, anexo I, de nacionalidad española por opción (apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007), declarando que hace constar que “la nacionalidad de origen de su progenitor es española”. Se incluye un párrafo que dice textualmente “la presente solicitud de nacionalidad española se fundamenta en que el solicitante es hijo/a de padre o madre originariamente español”.

6. Consta a este centro directivo que con fecha 10 de febrero de 2014 se dictó resolución por el encargado del Registro Civil Consular de La Habana, que cancelaba la inscripción marginal de conservación de la nacionalidad española en la de nacimiento del padre del promotor, Sr. M. P. por ineficacia del acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 29-1ª de junio, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, 11-3ª de abril de 2008 y 19-6ª de febrero y 27-6ª de mayo de 2009; 23-9ª de junio de 2010.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en 1955 en P. d. R. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 24 de mayo de 2010 al amparo del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 en su directriz segunda. La encargada del registro civil consular dictó auto el 15 de junio de 2011 denegando la solicitud al no quedar acreditada la concurrencia de los requisitos necesarios, ya que se habían detectado irregularidades entre la documentación aportada. Este auto constituye el objeto del presente recurso.

III. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En el presente caso, dicha certificación ha sido aportada pero es lo cierto que tras la cancelación practicada en relación con la inscripción marginal de la misma, la nacionalidad originaria del padre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente, que además presentan contradicciones respecto a fechas de nacimiento del abuelo del promotor, diciembre de 1878, según su documento de bautismo, en el que no consta su lugar de nacimiento y junio de 1881 según el certificado de nacimiento de su hijo y padre del promotor y según la documentación cubana aportada para acreditar el mantenimiento de su nacionalidad española, pese a que esta tiene firma dudosa, además en esta consta que se inscribió como extranjero a los 40 años, en L. H., siendo soltero, cuando el documento de nacimiento español del padre del promotor recoge que los padres de éste habían contraído matrimonio en 1916.

A la vista de estas circunstancias lo cierto es que la nacionalidad originaria del padre no puede entenderse acreditada por dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 31 de octubre de 2016 (1ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don J.-J. M. C. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y, los de su madre y su abuela expedidos por el registro civil español, constando en el de la madre que nació en Cuba y que optó a la nacionalidad española, en base a la Ley 52/2007, cuando el interesado ya había alcanzado la mayoría de edad. También se refleja en dicho certificado que los abuelos contrajeron matrimonio en Cuba, el 18 de marzo de 1925, siendo el contrayente cubano, fecha en la que la abuela pierde la nacionalidad española, conforme a lo establecido en el artículo 22 del Código Civil de 1889, vigente en la época. “La mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido”. Así mismo, en el certificado de nacimiento de la abuela consta que nació en España en 1905 de padres españoles.
2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 20 de mayo de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007; 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2010.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular, como español de origen, al nacido en Cuba en 1952, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En este caso la madre del interesado tienen la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue

documentada, en acta suscrita el 8 de febrero de 2010 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 28 de junio de 2010, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

III. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 8 de febrero de 2010 mediante el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 20 de mayo de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa, esencialmente, su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada instrucción, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la disposición adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

Esta cuestión fue abordada por la instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 8 de febrero de 2010, el ahora optante, nacido en 1952, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima.

V. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, -de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción-, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del título primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los

adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria -artículo 17- y las adquisiciones derivativas -artículos 19 a 22-), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogidos al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “...que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se

explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX. En la proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la disposición transitoria tercera.

Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas disposiciones transitorias (segunda y tercera) ha de ser analizado conjuntamente, a fin de poder interpretarlas coordinadamente. Por ello, la instrucción de este centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción -con efectos de nacionalidad de origen-, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar

por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la instrucción de esta dirección general de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria tercera. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria segunda (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la disposición transitoria tercera, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución Española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria tercera “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las

personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código Civil).

XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado -nietos-, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta dirección general.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición

adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 n.º1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de española de la abuela del optante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española, por parte de la abuela, como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto y sí que contrajo la abuela matrimonio en Cuba el 18 de marzo de 1925 y, su hija, madre del interesado, nació en dicho país en 1927, por lo que se puede afirmar, sin margen de error, que la vida de la abuela transcurrió en Cuba, por lo que no puede ser considerada exiliada ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por Don J.-J. M. C. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 31 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 31 de octubre de 2016 (2ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo del artículo 20. n.º 1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña A. L. H. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y los de su padre, nacido en 1956, y su abuelo, expedidos por el registro civil español, constando en el del padre que optó a la nacionalidad española cuando la interesada ya era mayor de edad. También se acompañan al expediente certificados sobre inmigración y extranjería del abuelo que acreditan que obtuvo carta de ciudadanía cubana el 22 de octubre de 1941.
2. El encargado del registro civil consular, mediante el auto de fecha 6 de abril de 2016 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el auto denegatorio de su solicitud antes citada.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; 28 de abril de 2010.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1984, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

En este caso el padre de la interesada, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad española, no de origen, al amparo del artículo 20 n.º1, b) del Código Civil, en el año 2003, cuando la recurrente era mayor de edad, acredita tener la condición de español de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio del

derecho de opción reconocido por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 25 de marzo de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 15 de mayo de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

III. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 25 de junio de 2009 según el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó el auto el 6 de abril de 2016, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en la citada instrucción.

IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la disposición adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo optante).

Esta cuestión fue abordada por la instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada instrucción de 4 de noviembre de 2008.

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 25 de marzo de 2009 inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 15 de mayo de 2009, la ahora optante, nacida en 1984, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la disposición adicional séptima.

V. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, -de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción-, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del título primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida en el código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los

adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era español.

VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria -artículo 17- y las adquisiciones derivativas -artículos 19 a 22-), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogándose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así, el proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “... que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se

explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

IX. En la proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la disposición transitoria tercera.

Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.

Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990, “queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad ... los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

El alcance de ambas disposiciones transitorias (segunda y tercera) ha de ser analizado conjuntamente, a fin de poder interpretarlas coordinadamente. Por ello, la instrucción de este centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de la nacionalidad española por opción -con efectos de nacionalidad de origen-, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la misma instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar

por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la transcrita instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la instrucción de esta dirección general de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria tercera. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria segunda (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la disposición transitoria tercera, esta última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución Española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria tercera “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.

XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las

personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. artículo 22 nº2, f del Código Civil).

XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2 de la misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado -nietos-, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta dirección general.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición

adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 n°1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

XIV. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo de la recurrente, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española por parte del abuelo como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, y no consta documento alguno en el expediente que acredite dicho extremo. Por ello el abuelo no puede ser considerado exiliado ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por Doña A. L. H., conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 31 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 31 de octubre de 2016 (3ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña E. R. D. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificados literales locales de nacimiento propio y de su madre, así como el su abuelo, expedido por el registro civil español, constando en nota marginal que recuperó la nacionalidad española el 5 de julio de 2007. También aporta certificado de reinscripción de nacimiento del abuelo en el registro civil cubano, el 16 de enero de 1940, fecha en la que pierde la nacionalidad española.
2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 17 de septiembre de 2014 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1ª y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1971, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 17 de septiembre de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado los extremos reflejados en su solicitud, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

En este caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, es lo cierto que la nacionalidad española originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho). Todo lo contrario, el abuelo de la recurrente perdió la nacionalidad española en 1940 al reinscribirse como nacido en Cuba en el correspondiente registro civil, razón por la que no pudo transmitir dicha nacionalidad a su hija, nacida en 1949 y, por tanto, la madre de la solicitante no es española de origen.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la madre de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo de la interesada, aunque incurre en el error, se supone ortográfico,

de alegar que opta a la nacionalidad española de su abuela, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española por parte del abuelo como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten, documentalente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto, por lo que no puede ser considerado exiliado ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por Doña E. R. D. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 31 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 31 de octubre de 2016 (4ª)

III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Don M. F. G. presenta escrito en el Consulado de España La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y, el de su madre y su abuelo, expedidos

por el registro civil español, constando en el de la madre que optó a la ciudadanía española por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, cuando el recurrente había alcanzado la mayoría de edad y, en el del abuelo, que nació en L. V. (Islas Canarias) el 19 de mayo de 1919. También se incorpora al expediente, certificado de nacimiento del abuelo, expedido por el registro civil cubano, reinscripción realizada en octubre de 1937, fijando su nacimiento en Cuba, fecha en la que el abuelo pierde la nacionalidad española. Dicha reinscripción ha sido anulada por sentencia dictada en Guanabacoa el 30 de junio de 1999.

2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 13 de marzo de 2015 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.

4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º, 23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y 1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Cuba en 1977, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción

que fue documentada en acta suscrita el 29 de enero de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 7 de septiembre de 2007, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 29 de marzo de 2010 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto 13 de marzo de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que no prueba los hechos manifestados en su declaración, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

Hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o *iter* jurídico de su atribución, atribución que tenía lugar *ope legis* desde el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código Civil.

Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad española (arts. 11 nº2 de la Constitución y 25 del Código Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11 nº3 de la Constitución Española y 24 del Código Civil.

Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo

necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17 nº2 y 19 nº2 del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su apartado 2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código Civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre del ahora recurrente. Como señala la instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20 nº1.b) del Código Civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.

V. En el presente expediente, la progenitora del optante, nacida en 1949, ostenta la nacionalidad española con carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código Civil, toda vez que su padre perdió la nacionalidad española en 1937 al ser reinscrito como ciudadano cubano, nacido en Cuba, y no la recuperó hasta el año 1999, cuando ésta era mayor de edad, por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de español del abuelo del optante, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Además no consta ni se ha acreditado, en modo alguno, la pérdida o renuncia de la nacionalidad española, por parte del abuelo, como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción. A efectos de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica, solo pueden ser considerados exiliados los españoles que acrediten,

documentalmente, que tuvieron que abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En el presente expediente no consta documentación alguna al respecto por lo que no puede ser considerado exiliado ni prosperar éste recurso por esta vía.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por Don M. F. G. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 31 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

III.1.3.2 Adquisición de nacionalidad de origen, anexo II Ley 52/2007

Resolución de 7 de octubre de 2016 (22ª)

III.1.3.2. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Don P. R. F. M., nacido el 05 de febrero de 1973 en M. C., S. P. (Brasil), de nacionalidad brasileña, presenta en fecha 27 de diciembre de 2011 en el Registro Civil Consular de España en São Paulo escrito de solicitud (anexo II), a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, sin adjuntar documentación probatoria de su pretensión.

2. Con fecha 09 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) requiere al interesado a fin de que subsane su solicitud y aporte la documentación necesaria, concediéndole un plazo de treinta días para aportar dichos documentos. El citado requerimiento fue notificado al promotor el 30 de junio de 2015, no aportando la documentación solicitada en el plazo establecido.

3. Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) dicta auto en fecha 31 de julio de 2015 por el que se acuerda denegar la solicitud de opción a la nacionalidad española del interesado, al no quedar acreditado que se halle comprendido dentro del ámbito de aplicación del apartado 2º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, toda vez que el promotor no aportó ninguno de los documentos que le fueron requeridos.

4. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citada, alegando que no tuvo tiempo para reunir la documentación requerida en el plazo previsto en el requerimiento de subsanación y adjuntando, entre otros documentos, copia de su certificado literal de nacimiento brasileño; de los certificados literales de nacimiento y de matrimonio brasileños de sus padres; del certificado literal de nacimiento español de su abuela materna, Dª C. G. M. y del certificado de desembarque de esta última en Brasil, que tuvo lugar el 03 de febrero de 1914.

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe desfavorable interesando la desestimación del recurso y el encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, en el que indica que no procede acceder a la petición formulada por el interesado, al no quedar acreditado que se halle comprendida su solicitud dentro del ámbito de aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que no se encuentra acreditado que la abuela materna del interesado fuese exiliada y que hubiese perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio, toda vez que consta en el expediente certificado de desembarque en Brasil de la misma, que tuvo lugar en fecha 03 de febrero de 1914, es decir, antes del período de exilio recogido en el punto V de la instrucción de 04 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española de origen establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 523/2007, de 26 de diciembre, donde se recoge que “se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras de de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de

2010,1 de diciembre de 2010,7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª),25 de octubre de 2011 (3ª),2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Brasil el 05 de febrero de 1973, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil consular se dictó auto el 31 de julio de 2015 denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio.

IV. El apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones locales de nacimiento del solicitante y de su madre, así como el certificado español de nacimiento de su abuela materno. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V. A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del registro civil consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del registro civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VI. En el presente expediente no se encuentra acreditado que la abuela del promotor hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio, habiéndose aportado al expediente el certificado de desembarco de esta última en Brasil, que tuvo lugar en fecha 03 de febrero de 1914, es decir, con anterioridad al período establecido en el punto V de la Instrucción de 04 de noviembre de 2008 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 n° 2, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a

cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de Sao Paulo (Brasil)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (23ª)

III.1.3.2. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Don J.-M. F. M., nacido el 14 de junio de 1956 en G., S. P. (Brasil), de nacionalidad brasileña, presenta en fecha 27 de diciembre de 2011 en el Registro Civil Consular de España en São Paulo escrito de solicitud (anexo II), a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, sin adjuntar documentación probatoria de su pretensión.

2. Con fecha 09 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) requiere al interesado a fin de que subsane su solicitud y aporte la documentación necesaria, concediéndole un plazo de treinta días para aportar dichos documentos. El requerimiento fue comunicado al interesado mediante a través del tablón de anuncios del registro civil consular, agotadas todas las posibilidades de notificación, no aportando el solicitante ninguno de los documentos requeridos en el plazo establecido.

3. Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) dicta auto en fecha 29 de julio de 2015 por el que se acuerda denegar la solicitud de opción a la nacionalidad española del interesado, al no quedar acreditado que se halle comprendido dentro del ámbito de aplicación del apartado 2º de la disposición

adicional séptima de la Ley 52/2007, toda vez que el promotor no aportó ninguno de los documentos que le fueron requeridos.

4. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citada, alegando que no tuvo tiempo para reunir la documentación requerida en el plazo previsto en el requerimiento de subsanación y adjuntando, entre otros documentos, copia de su certificado literal de nacimiento brasileño; de los certificados literales de nacimiento y de matrimonio brasileños de sus padres; del certificado literal de nacimiento español de su abuela materna, D^a C.G. M. y del certificado de desembarque de esta última en Brasil, que tuvo lugar el 03 de febrero de 1914.

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe desfavorable interesando la desestimación del recurso y el encargado del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, en el que indica que no procede acceder a la petición formulada por el interesado, al no quedar acreditado que se halle comprendida su solicitud dentro del ámbito de aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que no se encuentra acreditado que la abuela materna del interesado fuese exiliada y que hubiese perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio, toda vez que consta en el expediente certificado de desembarque en Brasil de la misma, que tuvo lugar en fecha 03 de febrero de 1914, es decir, antes del período de exilio recogido en el punto V de la instrucción de 04 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española de origen establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 523/2007, de 26 de diciembre, donde se recoge que “se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23 y 24 de marzo, 28-5^a de abril, 15 de noviembre y 1 de diciembre de 2010, 7-4^a y 9 de marzo, 3-17^a y 25-3^a de octubre y 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Brasil el 14 de junio de 1956, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad

española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil consular se dictó auto el 29 de julio de 2015 denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio.

IV. El apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones locales de nacimiento del solicitante y de su madre, así como el certificado español de nacimiento de su abuela materno. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V. A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas,

debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del registro civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VI. En el presente expediente no se encuentra acreditado que la abuela del promotor hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio, habiéndose aportado al expediente el certificado de desembarco de esta última en Brasil, que tuvo lugar en fecha 03 de febrero de 1914, es decir, con anterioridad al período establecido en el punto V de la instrucción de 04 de noviembre de 2008 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 n° 2, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de Sao Paulo (Brasil)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (25ª)

III.1.3.2. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Don M. R. C. G., nacido el 17 de febrero de 1975 en S. P. (Brasil), de nacionalidad brasileña, presenta en fecha 27 de diciembre de 2011 en el Registro Civil Consular de España en São Paulo escrito de solicitud (anexo II), a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, sin adjuntar documentación probatoria de su pretensión.

2. Con fecha 08 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) requiere al interesado a fin de que subsane su solicitud y aporte la documentación necesaria, concediéndole un plazo de treinta días para aportar dichos documentos. Transcurrido el plazo establecido, el interesado no aportó ninguno de los documentos probatorios necesarios.

3. Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) dicta auto en fecha 17 de septiembre de 2015 por el que se acuerda denegar la solicitud de opción a la nacionalidad española del interesado, al no quedar acreditado que se halle comprendido dentro del ámbito de aplicación del apartado 2º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, toda vez que el promotor no aportó ninguno de los documentos que le fueron requeridos.

4. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citada, alegando que no tuvo tiempo para reunir la documentación requerida en el plazo previsto en el requerimiento de subsanación y adjuntando, entre otros documentos, su certificado literal de nacimiento brasileño; copia de certificado literal de nacimiento brasileño de su padre, don J.A. G.; copia del certificado literal de nacimiento portugués de su madre, Dª M. C. C. C.; copia del certificado de matrimonio brasileño de sus padres; copia del certificado literal de nacimiento español de su abuelo paterno, don R. F.G.y C. y el certificado negativo de naturalización en Brasil de sus abuelos paternos.

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe desfavorable interesando la desestimación del recurso y el encargado del registro civil consular

remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, en el que indica que no procede acceder a la petición formulada por el interesado, al no quedar acreditado que se halle comprendida su solicitud dentro del ámbito de aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que no se encuentra acreditado que el abuelo paterno fuese exiliado y que hubiese perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio, no constando en el expediente ningún documento que acredite la fecha de salida de España del abuelo y se ha aportado certificado negativo de naturalización en Brasil de este último, que probaría que no perdió o tuvo que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras de de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Brasil el 17 de febrero de 1975, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargo del registro civil consular se dictó auto el 17 de septiembre de 2015 denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio.

IV. El apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones locales de nacimiento del solicitante y de su padre, así como el certificado español de nacimiento de su abuelo paterno. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuelo español, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V. A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: "a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del registro civil consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del registro civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en

la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VI. En el presente expediente no se encuentra acreditado que el abuelo del promotor hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio, no habiéndose aportado ninguna documentación que acredite la fecha de salida de España del mismo. Por otra parte, se ha aportado al expediente el certificado negativo de naturalización en Brasil del abuelo paterno, que probaría que no perdió o tuvo que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio, por lo que no pueden entenderse cumplidos los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 n° 2, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de Sao Paulo (Brasil)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (26ª)

III.1.3.2. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el acuerdo dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Don P. A. A. B., nacido el 19 de enero de 1963 en Brasil, de nacionalidad brasileña, presenta en fecha 14 de noviembre de 2011 en el Registro Civil Consular de España en São Paulo escrito de solicitud (anexo II), a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, sin adjuntar documentación probatoria de su pretensión.

2. Con fecha 24 de marzo de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) requiere al interesado a fin de que subsane su solicitud y aporte la documentación necesaria, concediéndole un plazo de treinta días para aportar dichos documentos. El interesado, en fecha 16 de junio de 2015, solicitó la concesión de un plazo adicional para presentar la documentación requerida, concediéndole tres meses adicionales, transcurridos los cuales, el promotor no presentó ninguno de los documentos requeridos.

3. Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) dicta auto en fecha 17 de septiembre de 2015 por el que se acuerda denegar la solicitud de opción a la nacionalidad española del interesado, al no quedar acreditado que se halle comprendido dentro del ámbito de aplicación del apartado 2º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, toda vez que el promotor no aportó ninguno de los documentos que le fueron requeridos.

4. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citada, alegando que no tuvo tiempo para reunir la documentación requerida en el plazo previsto en el requerimiento de subsanación, solicitando un nuevo plazo adicional. Al recurso adjunto copia de partida de nacimiento española correspondiente a don M. A. L.

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe desfavorable interesando la desestimación del recurso y el encargado del registro civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, en el que indica que no procede acceder a la petición formulada por el interesado, al no quedar acreditado que se halle comprendida su solicitud dentro de los alcances de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23 y 24 de marzo, 28-5ª de

abril, 15 de noviembre y 1 de diciembre de 2010, 7-4ª y 9 de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en Brasil el 19 de enero de 1963, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 14 de noviembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil consular se dictó auto el 17 de septiembre de 2015 denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio.

IV. El apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el presente expediente, el interesado no ha aportado ninguno de los documentos requeridos, a excepción de un certificado literal español de nacimiento correspondiente a don M. A. L.. De este modo, no puede acreditarse la filiación del promotor con abuelo español de origen que hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio, no cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado 2º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española de origen.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de Sao Paulo (Brasil)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (42ª)

III.1.3.2. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución de la encargada del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

HECHOS

1. Don G-A. R. D., ciudadano argentino, comparece en el Consulado General de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: cédula de identidad argentina del promotor, certificado literal de nacimiento español del promotor, nacido el 15 de octubre de 1968 en B. A., hijo de O. R. M., nacido en B. A. en 1929 y de E. D. J., nacida en S-F. (Argentina) en 1938, ambos de nacionalidad argentina, con anotación marginal relativa a que la madre del inscrito optó por la nacionalidad española en el año 2003 y anotación de que el inscrito no tiene acreditada la nacionalidad española, certificado literal de nacimiento español de M. J. F., abuela materna del promotor, nacida en P. G. (C.) en 1917, hija de F. J. B., natural de la misma localidad y de C. F. R., certificado literal de matrimonio de los abuelos maternos del promotor, celebrado en Argentina en 1937, en el documento se hace constar la nacionalidad española de la contrayente y de sus padres y documento de identidad de la abuela materna del promotor incompleto. Consta a esta Dirección General inscripción literal de nacimiento en el registro civil español de la madre del promotor, Sra. D. J., nacida en Argentina e hija de A-A. D. G., nacido en S-F. en 1912 y de nacionalidad argentina y de M. J. F., nacida en P. G. (C.) en 1917 y de nacionalidad española, consta inscripción marginal de opción a la nacionalidad española con base en el artículo 20.1.b del Código Civil según redacción dada por la Ley 36/2002, con fecha 2 de octubre de 2003 e inscrita con fecha 23 de enero de 2004.

2. La encargada del registro civil consular, mediante resolución de fecha 6 de abril de 2015 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia, ya que no se ha acreditado que la abuela del promotor tuviera la condición de exiliada ni que perdiera la nacionalidad

española por tal circunstancia, por lo que no sería de aplicación lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, declarando que su abuelos maternos llegaron a Argentina en 1922, que abandonaron España por la cercanía de conflictos bélicos, primera guerra mundial, guerra de África y movimientos políticos en España, por lo que si puede considerarse un exilio, entendiéndose que si tiene derecho a la nacionalidad española de sus ascendientes.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe en el que se muestra conforme con la resolución recurrida. La encargada del registro civil consular se ratifica en su acuerdo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras de 23 de marzo de 2010, 24 de marzo de 2010, 28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1 de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de 2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Central como español de origen al nacido en B-A. (Argentina) en 1968, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 24 de julio de 2009, mediante formulario correspondiente al anexo II de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Por la encargada del registro civil consular se dictó acuerdo con fecha 6 de abril de 2015, denegando lo solicitado.

III. El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado la condición de exiliada de su abuela ni que ésta hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas

personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”. En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil del solicitante y de su abuela, Sra. J. F., resultando de esta su nacimiento en España en el año 1917 y su nacionalidad originariamente española, por lo que la resolución se limitará únicamente analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda . Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011). Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su

nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código Civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código Civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código Civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución) Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de registro civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la administración española a los exiliados.;

b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del registro civil consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del registro civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de española; que la misma hubiera podido perder su nacionalidad española por su matrimonio en 1937 con un ciudadano extranjero, argentino, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Código Civil en su redacción originaria, vigente en aquél momento, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, puesto que el propio interesado en su recurso declara que su abuela llegó antes de esa fecha a Argentina, en 1922, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 19 de febrero de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)

Resolución de 14 de octubre de 2016 (38ª)

III.1.3.2. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo dictado por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Dª Y. B. R., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta, en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 29 de diciembre de 1976 en S. (Cuba), hija de Don F. B. T., nacido el 19 de febrero de 1951 en S. (Cuba) y de Dª M.-E. R. Á., nacida el 10 de febrero de 1953 en S. (Cuba); carnet de identidad cubano y certificado local de nacimiento de la promotora; certificado español de nacimiento del padre, con inscripción de la adquisición de la nacionalidad española por opción, en virtud de lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, en fecha 22 de marzo de 1999; certificado español de nacimiento de la abuela paterna de la interesada, Dª B. T. R., nacida el 26 de enero de 1927 en S., Granada (España); certificación en extracto de acta de matrimonio de los abuelos paternos de la interesada, celebrado en S., Granada (España) el 18 de octubre de 1947 y certificado de notas marginales en la inscripción de matrimonio de los progenitores de la interesada.

2. Con fecha 08 de enero de 2014, la Encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) dicta auto por el que se desestima la inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción de la nacionalidad española de origen de la promotora, toda vez no haber quedado establecido que en la interesada concurren los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a que su abuela perdió o tuvo que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citada, solicitando

se revise su expediente y se inscriba su nacimiento en el registro civil español, alegando haber entregado toda la documentación requerida.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe desfavorable interesando la desestimación del recurso y la encargada del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, en el que indica, teniendo en cuenta que la abuela española de la solicitante contrajo matrimonio en S., Granada (España) en el año 1947 con ciudadano cubano, en ese momento incurrió en pérdida de la nacionalidad española según expresa el artº 22 del Código Civil en su redacción originaria. De este modo, cuando la abuela de la interesada emigra a Cuba, lo hace como cubana y no como española, por lo que no se acreditan los requisitos exigidos en el apartado 2º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la pérdida de la nacionalidad española de su abuela como consecuencia del exilio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; el artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones de 18-17ª, 18-20ª, 18-21ª y 18-25ª de mayo, 23-74ª, 23-76ª y 23-79ª de agosto, 4-2ª y 31-3ª de octubre, 21-48ª, 21-50ª y 21-53ª de noviembre y 10-7ª de diciembre de 2012.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en S. (Cuba) en 1976, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 25 de noviembre de 2010 en el modelo normalizado del anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del registro civil consular se dictó auto el 08 de enero de 2014 denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el órgano en funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : "...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; ... 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ... ”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuela española se han aportado la correspondiente certificación local de nacimiento del registro civil de la solicitante, así como certificados españoles de nacimiento de su padre y de su abuela paterna, por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de una verdadera *conditio iuris* o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las resoluciones de 24 de octubre de 2011, 25 de octubre de 2011).

Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, el asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia directa de su matrimonio con extranjero (lo que ocurría hasta la reforma del Código Civil por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código Civil según la redacción dada al mismo por la citada Ley) o aun conservándola,(bien por no haber contraído matrimonio con extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular de la patria potestad (cfr. art.18 del Código Civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución).

Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma “el derecho de opción previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela el anteriormente referido apartado 3 de la Regla V de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del registro civil consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. En el presente expediente no se encuentra acreditada la condición de exiliada de los abuela, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22 n° 2, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (22ª)

III.1.3.2. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Dª A. A. R., nacida el 01 de mayo de 1973 en B., S. P. (Brasil), de nacionalidad brasileña, presenta en fecha 27 de diciembre de 2011 en el Registro Civil Consular de España en São Paulo escrito de solicitud (anexo II), a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, sin adjuntar documentación probatoria de su pretensión.
2. Con fecha 08 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) requiere a la interesada a fin de que subsane su solicitud y aporte la documentación necesaria, concediéndole un plazo de treinta días para aportar dichos documentos. Transcurrido el citado plazo, la promotora cumplió parcialmente con el requerimiento de documentación solicitada.
3. Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) dicta auto en fecha 18 de septiembre de 2015 por el que se acuerda denegar la solicitud de opción

a la nacionalidad española de la interesada, al no quedar acreditado que se halle comprendida dentro del ámbito de aplicación del apartado 2º de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, toda vez que no aportó la totalidad de la documentación requerida, en particular, el certificado literal de nacimiento del abuelo español y la prueba de condición de exiliado del mismo.

4. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citada, alegando las dificultades para obtener el certificado de nacimiento español de su abuelo, aportando la siguiente documentación: documentos brasileños originales requeridos debidamente legalizados y el certificado literal de nacimiento de su abuelo paterno, don J. A. B., nacido en S. C. (Pontevedra) el 20 de marzo de 1894, siendo hijo legítimo del ciudadano portugués don M. A. J., natural de C. (Portugal) y de la ciudadana originariamente española Dª E. B. P., natural de S. C. (Pontevedra), que perdió la nacionalidad española al contraer matrimonio con ciudadano extranjero, al amparo de lo dispuesto en el artº 22 del Código Civil en su redacción originaria, vigente en dicha fecha.

5. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emitió informe desfavorable interesando la desestimación del recurso, toda vez que no consta en el certificado literal de nacimiento español del abuelo paterno de la interesada que el mismo optase por la nacionalidad española al amparo de lo dispuesto en el artº 19 del Código Civil, que en su versión originaria disponía que “los hijos de un extranjero nacidos en los dominios españoles deberán manifestar, dentro del año siguiente a su mayor edad o emancipación, si quieren gozar de la calidad de españoles que les concede el artº 17”, por lo que no queda acreditado que el abuelo paterno de la promotora fuese español, exiliado y que hubiese perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio, no cumpliéndose los requisitos establecidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para acceder a la nacionalidad española de origen.

El encargado del registro civil consular remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe, redactado en los mismos términos expresados en el informe emitido por el órgano en funciones de ministerio fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23 y 24 de marzo, 28-5ª de

abril, 15 de noviembre y 1 de diciembre de 2010, 7-4ª y 9 de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en B., S. P. (Brasil) el 01 de mayo de 1973, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil consular se dictó auto el 18 de septiembre de 2015 denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo fuese español y que hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio.

IV. El apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “...2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante; ...2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;... b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ...”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil brasileño de la solicitante y de su padre, así como certificado español de nacimiento del abuelo paterno, en el que consta que nació el 20 de marzo de 1894 en P., siendo hijo de ciudadano portugués y de ciudadana originariamente española que perdió su nacionalidad al contraer matrimonio con ciudadano extranjero, al amparo de lo dispuesto en el entonces vigente artº 22 del Código Civil en su redacción originaria. Asimismo, no consta en el certificado literal de nacimiento español del abuelo paterno, que el mismo hubiese optado por la

nacionalidad española al amparo de lo dispuesto en el artº 19 del Código Civil en su versión originaria, en la que se dispone que “los hijos de un extranjero nacidos en los dominios españoles deberán manifestar, dentro del año siguiente a su mayor edad o emancipación, si quieren gozar de la calidad de españoles que les concede el artº 17”. De este modo, no se encuentra acreditada en el expediente la nacionalidad española del abuelo de la interesada.

V. Por otra parte, a fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la regla V de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del registro civil consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del registro civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VI. En el presente expediente no se encuentra acreditado que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española, toda vez que se ha aportado al expediente, certificado de no adquisición de la nacionalidad brasileña por el abuelo paterno de la interesada. Por otra parte, tampoco resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España -y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que

no pueden entenderse cumplidos ninguno de los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en São Paulo (Brasil).

Resolución de 24 de octubre de 2016 (9ª)

III.1.3.2. Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuelo de nacionalidad española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Doña A. R. U., presenta escrito en el Consulado de España en La Habana, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal local de nacimiento propio y, el de su madre y su abuelo, expedidos por el registro civil español. También se presenta fotocopia de la carta de ciudadanía cubana otorgada al abuelo el 19 de marzo de 1938, y certificado de nacimiento de su tía O., hija del abuelo, que acredita su nacimiento en Cuba el 14 de junio de 1930. Por otra parte, interesa traer a colación que con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante expediente gubernativo, practicado en el Registro Civil Consular de la Habana, se procedió a la cancelación de la inscripción marginal de opción de origen en la partida de nacimiento del hermano de la recurrente, que al igual que ella, promovió su solicitud de opción en virtud del anexo II, apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

2. El encargado del registro civil consular, mediante auto de fecha 3 de diciembre de 2014 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el acuerdo denegatorio de su solicitud antes citado.

4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular emite su informe preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil; los artículos 20 del Código Civil; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23 y 24 de marzo, 28-5ª de abril, 15 de noviembre y 1 de diciembre de 2010, 7-4ª y 9 de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2 de diciembre de 2011.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como española de origen a la nacida en Cuba en 1971, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 2 de diciembre de 2003 en el modelo normalizado del anexo II de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto de fecha 3 de diciembre de 2014, denegando lo solicitado.

III. El auto apelado basa, en esencia, su denegación en que la interesada no puede ejercer la opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su abuelo hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

IV. El apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud: “2.1 Certificación literal de su nacimiento ; y 2.3 a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela

españoles- del solicitante; b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 -de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela”.

En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del registro civil extranjero de la solicitante y las de su madre y su abuelo, nacido en España en 1897, de padres españoles, expedidas por el registro civil español. Por lo que, no cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuelo español de origen, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.

V. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que el abuelo de la solicitante hubiere perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que el mismo se cumpliría no solo cuando el abuelo hubiese adquirido voluntariamente otra nacionalidad que correlativamente hubiese motivado la pérdida de su nacionalidad española sino, también, cuando dicha pérdida derivase del asentimiento voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad. Pero en todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española por parte del abuelo por cualquiera de aquellas circunstancias será necesario acreditar que la misma se ha producido como consecuencia del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

VI. A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el anteriormente referido apartado 3 de la regla V establece como medios de prueba: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola el exilio; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del registro civil consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de

matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del registro civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.

VII. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su reglamento-, aunque se entienda acreditada la condición de la solicitante de nieta de español y que, el abuelo no haya podido transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante en el momento de su nacimiento el 10 de noviembre de 1938, por haber perdido dicha nacionalidad el anterior 19 de marzo de 1938, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliado del abuelo con anterioridad a la pérdida de la nacionalidad española, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición, conforme a lo anteriormente reseñado, ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España -y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A mayor abundamiento, según consta en la certificación de nacimiento de la tía de la recurrente, ésta nace el 14 de junio de 1930 en C. (Cuba) lo cual viene a poner de manifiesto, que el abuelo ya residía en dicho país en esa fecha y no puede ser considerado como exiliado.

Por todo ello no pueden entenderse cumplidos, en su totalidad, los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por doña A. R. U. y confirmar el auto apelado, dictado conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Madrid, 24 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

III.3 ADQUISICIÓN DE NACIONALIDAD POR OPCIÓN

III.3.1 OPCIÓN A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR PATRIA POTESTAD, ART. 20-1A CC

Resolución de 7 de octubre de 2016 (18ª)

III.3.1. Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia en 2013, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación de Ghana acompañada no da fe de dicha filiación por falta de garantías.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra acuerdo dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Con fecha 31 de octubre de 2014 se levanta acta de declaración de opción a la nacionalidad española en el Registro Civil de Pamplona, mediante la cual don R. O.T. S., nacido el 14 de agosto de 1998 en B., B. A. (Ghana), asistido por sus padres y representantes legales, don J. O. T. T. y Dª M. S., opta a la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artº 20.1.a) del Código Civil, renunciando a su nacionalidad anterior y prestando juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y demás leyes españolas.

Adjunta como documentación: hoja declaratoria de datos; documento de identidad de extranjeros, certificado de empadronamiento y certificado literal de nacimiento del interesado, traducido y legalizado, expedido por la República de Ghana; documento nacional de identidad y certificado literal español de nacimiento del presunto padre, don J. O. T. T., nacido el 15 de enero de 1979 en B., B. A. (Gana), con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia el 01 de marzo de 2013; pasaporte ghanés de la madre del interesado, Dª M. S. y traducción del certificado de matrimonio de la madre con el presunto padre, celebrado en Ghana el 04 de noviembre de 2011.

2. Recibida toda la documentación en el Registro Civil Central, se dicta providencia por la que se solicita del Registro Civil de Pamplona se remita testimonio del expediente de nacionalidad tramitado al presunto padre del interesado, particularmente, en lo que hace alusión a su estado civil e hijos habidos.

3. Con fecha 08 de mayo de 2015, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción de nacionalidad del interesado, toda vez que el presunto padre no le mencionó en su expediente de nacionalidad por residencia, como venía obligado, ya que a la fecha de la declaración efectuada por el padre, éste era menor de edad.

4. Notificada la resolución, el promotor, presunto padre del solicitante, presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se autorice la inscripción de nacimiento y la opción a la nacionalidad española de su hijo, alegando que el motivo de que no mencionase a su hijo en su expediente de nacionalidad por residencia, se debió a haber entendido que debía nombrar solamente a los hijos que vivían con él en España.

5. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y el encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-Vistos los artículos 20 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, de 24-2ª, 24-3ª de abril de 2003; 2-1ª de septiembre de 2004; 24-2ª de octubre de 2005; 26-2ª de junio de 2006; 29-2ª de noviembre de 2007; 27-6ª de mayo, 2-6ª de julio y 14-2ª de octubre de 2008.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).

III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia el 01 de marzo de 2013 y pretende el promotor, asistido por ella, inscribir el nacimiento de su presunto hijo por medio de una certificación ghanesa, en la cual se hace constar que éste nació el 14 de agosto de 1998 en B., B. A. (Ghana), si bien la inscripción de nacimiento se extendió catorce años después, en abril de 2013. Igualmente se constata que el presunto padre no mencionó al optante en su expediente de nacionalidad por residencia, como venía obligado, al ser entonces menor de edad, habiendo formulado solicitud con fecha 13 de abril de 2010, ratificada ante el encargado del Registro Civil de Pamplona, en la que indicaba que su estado civil era casado con Dª D. P. y que tenía una hija menor de edad a su cargo, nacido en 2007, no mencionando en modo alguno al interesado.

IV. En esta situación no puede prosperar el expediente tanto, como se ha dicho, por la falta de garantías de la certificación local aportada como por no haber mencionado el presunto padre del interesado la existencia de éste en el expediente de nacionalidad por residencia, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede

considerarse acreditado por ahora que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto a la patria potestad de un español (cfr. art. 20 CC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 7 de octubre de 2016 (19ª)

III.3.1. Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia en 2004, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación gambiana acompañada no da fe de dicha filiación por falta de garantías.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra acuerdo dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Con fecha 09 de octubre de 2012, en el Registro Civil de Huesca, se levanta acta de opción a la nacionalidad española, por la cual don H. S., nacido el 15 de julio de 1994 en B. K. (G.), opta por la nacionalidad española de su padre, don T. S. S., nacido el 01 de enero de 1961 en B. K. (Gambia), de nacionalidad española adquirida por residencia el 28 de octubre de 2004, al amparo de lo establecido en el artº 20.1.a) del Código Civil, prometiendo fidelidad a S.M. El Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas y renunciando a su anterior nacionalidad.

Adjunta como documentación: hoja declaratoria de datos; optante.- tarjeta de identificación de extranjeros, pasaporte gambiano, volante histórico de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de H. y traducción jurada de certificado de nacimiento legalizado expedido por la República de Gambia; presunto padre.- certificado literal de nacimiento con inscripción de la adquisición de la nacionalidad española por residencia el 28 de octubre de 2004.

2. Con fecha 01 de abril de 2014, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central, dicta acuerdo por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción de nacionalidad del interesado, sin perjuicio de que el mismo pueda solicitar la nacionalidad española por vía de residencia, toda vez que en el expediente de nacionalidad del presunto padre, éste no mencionó en modo alguno al optante, como

venía obligado, ya que a la fecha de la declaración efectuada por el padre, era menor de edad.

3. Notificada la resolución, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la nacionalidad española por opción alegando que su padre mencionó a sus cuatro hijos menores en su expediente de nacionalidad por residencia, entre los que se encontraba el optante y se anule la resolución impugnada.

4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y el encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, de 24-2ª, 24-3ª de abril de 2003; 2-1ª de septiembre de 2004; 24-2ª de octubre de 2005; 26-2ª de junio de 2006; 29-2ª de noviembre de 2007; 27-6ª de mayo, 2-6ª de julio y 14-2ª de octubre de 2008.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).

III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia el 28 de octubre de 2004 y pretende el optante, asistido por ella, inscribir su nacimiento por medio de una certificación gambiana, en la cual se hace constar que ésta nació el 15 de julio de 1994 en B. K. (Gambia), si bien la inscripción de nacimiento se extendió diecisiete años después, el 19 de septiembre de 2011 y mediante declaración de un tercero.

Igualmente se constata que en el expediente de nacionalidad por residencia, el presunto padre del promotor declaró el 28 de octubre de 2004 mediante comparecencia ante el encargado del Registro Civil de Huesca, en relación con su solicitud de nacionalidad por residencia, que su estado civil era el de casado y que tenía cuatro hijos menores de edad, de 5, 10, 14 y 16 años, sin hacer mención a la existencia de hijos gemelos, como es el caso que nos ocupa.

IV. En esta situación no puede prosperar el expediente tanto, como se ha dicho, por la falta de garantías de la certificación local aportada como por no haber mencionado el

presunto padre de la interesada la existencia de éste en el expediente de nacionalidad, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto a la patria potestad de un español (cfr. art. 20 CC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 7 de octubre de 2016 (20ª)

III.3.1. Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en 2010, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación cubana acompañada no da fe de dicha filiación por falta de garantías.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Con fecha 15 de febrero de 2013 se levanta acta de declaración de opción a la nacionalidad española en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba), mediante la cual don A. V. S., mayor de edad, nacido el 02 de mayo de 1993 en B., L. H. (Cuba), opta por la nacionalidad española de su presunto padre don A. V. M., nacido el 04 de marzo de 1974 en L. H. (Cuba) y de nacionalidad española adquirida en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al amparo de lo establecido en el artículo 20.2.c) del Código Civil, sin renunciar a su anterior nacionalidad cubana, prestando juramento o promesa de fidelidad a S.M. El Rey y de obediencia a la Constitución y a las Leyes Españolas.

Adjunta como documentación: hoja declaratoria de datos; documento de identidad cubano y certificado de nacimiento del optante inscrito en el Registro del Estado Civil de la República de Cuba; pasaporte español y certificado de nacimiento del presunto padre, inscrito en el Consulado General de España en La Habana (Cuba), con inscripción de la adquisición de la nacionalidad española por opción en fecha 11 de

febrero de 2010 en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007; certificado de nacimiento de la madre del interesado, D^ª M. A. S. M., expedido por el Registro del Estado Civil de la República de Cuba; y certificado de notas marginales en la inscripción de nacimiento de ésta, en el que se indica que, el matrimonio de la progenitora con don J. M. V. G., formalizado el 15 de agosto de 1986, quedó disuelto por sentencia dictada por el Tribunal de San Miguel del Padrón, que quedó firme el 09 de septiembre de 1994.

2. Con fecha 27 de mayo de 2014 la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) dicta auto por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción de nacionalidad del optante, toda vez que no ha quedado establecido que en el promotor concurren los requisitos exigidos en el artº 20 del Código Civil, especialmente en lo que se refiere a la filiación paterna.

3. Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revisión de su expediente y que se autorice su inscripción de nacimiento y la opción a la nacionalidad española.

4. Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, junto con informe en el que indica que la madre del interesado contrajo matrimonio el 15 de agosto de 1986 con persona distinta al presunto padre del optante, disuelto por sentencia de divorcio que quedó firme el 09 de septiembre de 1994 y el promotor nace en fecha 02 de mayo de 1993, bajo la vigencia del matrimonio anterior de su madre, por lo que en aplicación del artº 116 del Código Civil no queda establecida la filiación paterna del optante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 113 y 116 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 23-2ª de mayo y 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de enero, 11-3ª de marzo y 8-1ª de abril de 2009.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en

cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).

III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 11 de febrero de 2010 y pretende el optante asistida por ella, inscribir su nacimiento por medio de una certificación cubana, en la cual se hace constar que nació el 02 de mayo de 1993 en B., L. H. (Cuba).

IV. La inscripción de nacimiento del interesado en el registro civil español requiere que antes prospere la opción ejercitada, basada en el artículo 20.1a) Cc, lo que le atribuiría la condición de español. Sin embargo surge un problema previo, cual es que no resulta suficientemente acreditada su filiación paterna respecto de un ciudadano español, puesto que, según la legislación española, se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges. De manera que, para desvirtuar la eficacia probatoria de la presunción de filiación matrimonial (art. 116 Cc), presunción iuris tantum que, en consecuencia, admite prueba en contrario, es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, cuando el hijo nació, la madre se encontraba casada con un ciudadano distinto de quien asegura ser el padre. A estos efectos, la mera declaración de los interesados no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente-, la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía del expediente gubernativo, pues, dada la fuerza probatoria (art. 113 Cc) de la mencionada presunción, no se considera probado, por ahora, que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto a la patria potestad de un español.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (30ª)

III.3.1. Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad si el interesado, cuando el padre adquiere la nacionalidad española por residencia, ya era mayor de edad según su estatuto personal.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra acuerdo dictado por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Con fecha 14 de abril de 2014, en el Registro Civil de Igualada (Barcelona), se levanta acta de opción a la nacionalidad española por la que don S. D., nacido el 13 de diciembre de 1994 en O. (Marruecos), opta por la nacionalidad española de su padre, don M. D. K., nacido el 21 de octubre de 1954 en D.-A.-A. (Marruecos), de nacionalidad española adquirida por residencia el 20 de septiembre de 2013.

Adjunta como documentación: permiso de residencia y certificado literal de nacimiento del interesado, expedido por el Reino de Marruecos; volante de empadronamiento colectivo, expedido por el Ayuntamiento de I.; documento nacional de identidad y certificado literal español de nacimiento del progenitor, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia el 20 de septiembre de 2013 y permiso de residencia de la madre del interesado.

2. Con fecha 07 de abril de 2015, el encargado del Registro Civil Central, dicta acuerdo por el que se deniega el derecho de opción a la adquisición de la nacionalidad española del promotor, toda vez que en el solicitante no concurren los requisitos a que se refiere el artículo 20.1.a) del Código Civil vigente, al no haberse encontrado nunca bajo la patria potestad de un español, pues en la fecha de adquisición de la nacionalidad española por su padre, contaba con 18 años de edad cumplidos.

3. Notificada la resolución, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que en la fecha de solicitud de la nacionalidad por su padre, el mismo ya cumplimentó los datos de su hijo, que en dicho momento era menor de edad y que, debido a la tardanza en la concesión favorable de la nacionalidad por residencia a su padre, el recurrente se convirtió en mayor de edad, solicitando se estime su recurso y se acuerde concederle la nacionalidad española por opción.

4. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, 20 y 22 del Código Civil (CC); 17 y 23 del Código Civil en su redacción por la Ley de 15 de julio de 1954; 15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones de 2-3ª de febrero, 14-1ª de marzo y 2-2ª de diciembre de 2002; 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 11-3ª de octubre de 2005; 19-3ª de enero, 11-2ª de marzo y 17-3ª de julio de 2006; 18-8ª de septiembre y 25-9ª de octubre de 2007.

II. El interesado, nacido en O. (Marruecos) el 13 de diciembre de 1994, ha intentado optar a la nacionalidad española por razón de patria potestad, alegando la nacionalidad española de su padre adquirida por residencia en fecha 20 de septiembre de 2013. Dado que en esta fecha, que es la que ha de tomarse para el cómputo de la edad, el hijo ya era mayor de edad según su estatuto personal, hay que concluir que no ha estado nunca sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a la nacionalidad española por este concepto.

III. Ha de quedar a salvo que, si así se solicita, pueda inscribirse el nacimiento del recurrente en el registro civil español, por afectar el hecho al estado civil, a la relación paterno-filial respecto de un español, pero en tal caso habría de hacerse constar expresamente en el asiento que no está acreditada conforme a Ley la nacionalidad española del nacido (cfr. art. 66 “fine” RRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 7 de octubre de 2016 (31ª)

III.3.1. Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad alegando que la presunta madre adquirió la nacionalidad española por residencia en 2010, por no resultar acreditada la filiación materna y porque la certificación ecuatoguineana acompañada no da fe de dicha filiación por falta de garantías.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra acuerdo dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Con fecha 03 de abril de 2014, en el Registro Civil de Lleida, Dª H. S. N., nacida el 07 de febrero de 1969 en S. (Guinea Ecuatorial), de nacionalidad española por residencia, solicita autorización ante el encargado del registro civil para optar en representación de su hija, Z. M. S., nacida el de 2000 en M.-Y.-M. L(Guinea Ecuatorial) a la nacionalidad española.

Adjunta como documentación: certificado de convivencia, expedido por el Ayuntamiento de L.; documento de identidad de extranjeros, pasaporte ecuatoguineano y certificado literal de inscripción de nacimiento de la menor en el Registro Civil de Guinea Ecuatorial; documento nacional de identidad y certificado literal español de nacimiento

de la presunta madre, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia el 15 de julio de 2010; documento de identidad ecuatoguineano del progenitor y escritura de autorización paterna para que su hija adquiriera la nacionalidad española.

2. Previo informe favorable del ministerio fiscal, con fecha 05 de junio de 2014, la encargada del Registro Civil de Lleida dicta auto por el que autoriza a la promotora en calidad de representante legal de su hija menor de edad para formular para ésta y en su instancia solicitud de opción de nacionalidad española y vecindad civil catalana.

El acta de opción a la nacionalidad española se levantó el 06 de junio de 2014 en las dependencias del Registro Civil de Lleida.

3. Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central, con fecha 04 de noviembre de 2014 se dicta providencia, interesando del registro civil correspondiente, se remita testimonio del escrito de solicitud y posterior ratificación del expediente de nacionalidad de la presunta madre de la menor, en los particulares que hacen alusión a su estado civil e hijos habidos.

4. Con fecha 23 de enero de 2015, el encargado del Registro Civil Central, dicta acuerdo por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción de nacionalidad de la menor, sin perjuicio de que la misma pueda solicitar la nacionalidad española por vía de residencia, toda vez que en el expediente de nacionalidad por residencia de la presunta madre, ésta no mencionó en modo alguno a la optante, como venía obligada, ya que a la fecha de la declaración efectuada por la madre, era menor de edad.

5. Notificada la resolución, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la nacionalidad española por opción a su hija, alegando que sí la declaró en la solicitud de nacionalidad por residencia como Z. B. N. S., si bien por error indicó que nació el 27 de abril de 1997, cuando lo cierto es que la fecha de nacimiento de la misma es de de 2000.

6. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y el encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, de 24-2ª, 24-3ª de abril de 2003; 2-1ª de septiembre de 2004; 24-2ª de octubre de 2005; 26-2ª de junio de 2006; 29-2ª de noviembre de 2007; 27-6ª de mayo, 2-6ª de julio y 14-2ª de octubre de 2008.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro

extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el Registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).

III. En este caso la presunta madre adquirió la nacionalidad española por residencia el 15 de julio de 2010 y pretende la promotora, asistida por ella, inscribir el nacimiento de la menor optante por medio de una certificación ecuatoguineana, en la cual se hace constar que nació el de 2000 en Guinea Ecuatorial, si bien la inscripción de nacimiento se extendió trece años después, el 15 de febrero de 2013, en virtud de expediente fuera de plazo, tramitado y aprobado por el Registro Civil de Bata.

Igualmente se constata que en el expediente de nacionalidad por residencia, la presunta madre de la menor manifestó en fecha 04 de marzo de 2008, mediante solicitud formulada ante el encargado del Registro Civil de Lleida que su estado civil era de soltera y que tenía cinco hijos menores de edad bajo su patria potestad, no mencionando en modo alguno a la menor, nacida el de 2000, que en aquel momento, era menor de edad.

IV. En esta situación no puede prosperar el expediente tanto, como se ha dicho, por la falta de garantías de la certificación local aportada como por no haber mencionado la presunta madre de la interesada la existencia de ésta en el expediente de nacionalidad por residencia, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que la optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de un español (cfr. art. 20 CC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 7 de octubre de 2016 (47ª)

III.3.1. Inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española

1º) Procede la inscripción en el registro civil español del nacido en Colombia en 1998 al resultar acreditada su filiación respecto de una ciudadana española.

2º) No procede, por el momento, la inscripción de opción a la nacionalidad española porque no consta la comparecencia del interesado, actualmente mayor de edad.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en Bogotá (Colombia).

HECHOS

1. Mediante formulario presentado el 23 de septiembre de 2013 en el Registro Civil del Consulado General de España en Bogotá, doña O.-M. M. R., con doble nacionalidad española y colombiana, y don J.-D. Z. L., de nacionalidad colombiana, solicitaban la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español y el ejercicio del derecho de opción a la nacionalidad española previsto en el artículo 20.1a) del Código Civil en nombre de su hijo J.-F. Z. M., por estar sujeto a la patria potestad de una española. Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción y formulario de solicitud de opción a la nacionalidad española; certificación local de nacimiento de J.-F. Z. M., nacido en Colombia el 29 de julio de 1998 e hijo de los promotores, inscrito por declaración del progenitor el 19 de julio de 1999, si bien consta una nueva inscripción, con la misma filiación aunque distinto número de identificación personal del progenitor, practicada el 21 de julio de 2010 por “corrección de datos de padre o madre”; DNI, pasaporte español, certificado de empadronamiento e inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Madrid de O.-M. M. R. con marginal de nacionalidad española por residencia practicada el 7 de mayo de 2013; poder notarial otorgado por la Sra. M. R. en favor del padre de su hijo para solicitar la opción a la nacionalidad española del menor; acta de declaración notarial de don J.-D. Z. L. para hacer constar que no solicitó la inscripción de su hijo hasta un año después de su nacimiento porque en ese momento él se encontraba trabajando en M. y que la inscripción fue rectificadas posteriormente en 2010 para corregir el número de su cédula de ciudadanía colombiana; autorización paterna para la salida de Colombia de su hijo y certificados de movimientos migratorios.

2. Celebrada audiencia reservada con ambos progenitores y previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, la encargada del registro dictó acuerdo el 27 de mayo de 2014 denegando la inscripción por no considerar acreditada la relación de filiación del entonces menor de edad con el ciudadano colombiano.

3. Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reiterando que el optante es hijo no matrimonial de los promotores, tal como figura en la inscripción colombiana, practicada un año después del nacimiento por declaración del progenitor, que se ha presentado la pertinente documentación justificativa y que la resolución denegatoria carece de motivación.

4. La interposición del recurso se trasladó al órgano en funciones de ministerio fiscal, que no presentó alegaciones. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en Bogotá se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código Civil (CC); 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 11-3ª de octubre de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio, 2-2ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 16-6ª de mayo y 28-5ª de noviembre de 2007; 27-2ª de mayo, 28-7ª de noviembre y 4-6ª de diciembre de 2008; 25-10ª de febrero y 9-2ª de marzo de 2009; 19-17ª de noviembre de 2010 y 13-28ª de diciembre de 2013.

II. Se pretende la inscripción de nacimiento en el registro civil español, previa opción a la nacionalidad española por razón de patria potestad, del hijo nacido en Colombia el 29 de julio de 1998 e inscrito con doble filiación un año después, de una ciudadana colombiana de origen que adquirió la nacionalidad española por residencia en 2013. La encargada del registro denegó la pretensión por no considerar acreditada la filiación paterna.

III. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que afecte a algún ciudadano español (art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23 LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española” (art. 85 RRC).

IV. La denegación se ha basado en este caso en la duda, por parte de la encargada del registro, acerca de la veracidad de la filiación paterna del no inscrito respecto del ciudadano colombiano que figura como padre en la inscripción de nacimiento. Sin embargo, la duda acerca de la paternidad no impedía la inscripción solicitada cuando no se discute la filiación materna respecto de una ciudadana española, de manera que, si no se consideraba suficientemente acreditada la filiación paterna por constarle a la encargada del registro elementos de juicio suficientes para estimar que existe una filiación contradictoria, podría haberse practicado en cualquier caso la inscripción solo con la materna. Por otro lado, a falta de una declaración jurada de la madre acerca de su estado civil en el momento del nacimiento del hijo y, en su caso, acreditación del matrimonio o matrimonios por ella contraídos antes o después de ese momento, lo cierto es que del examen de la documentación remitida a este centro no se desprenden evidencias que permitan dudar en este caso de la veracidad del contenido y de la legalidad y autenticidad de la documentación colombiana acompañada, de la que resulta que la inscripción del nacimiento, ocurrido en julio de 1998, se extendió el 19 de julio de 1999 por declaración ante el registro del progenitor con la comparecencia y firma de la madre del inscrito.

V. No es posible, sin embargo, resolver en este momento acerca de la solicitud de opción a la nacionalidad española para el no inscrito, que contaba con quince años en el momento de la solicitud y actualmente ya es mayor de edad y no ha comparecido en ningún momento ante el registro para mostrar su conformidad con la solicitud, siendo necesaria la suscripción por parte del interesado del acta de opción a la nacionalidad española (art. 20.2b CC), así como el pronunciamiento previo del encargado al respecto.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Estimar parcialmente el recurso y revocar la resolución apelada.

2º. Practicar la inscripción de nacimiento del interesado en el registro civil español con la filiación paterna que resulte acreditada y con marginal de adquisición de la nacionalidad española por parte de la madre en 2013 y haciendo constar expresamente, si no se ejercita antes la opción, que no está acreditada conforme a ley la nacionalidad española del inscrito (art. 66 RRC).

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr./a Encargado/a del Registro Civil Consular de España en Bogotá (Colombia)

Resolución de 14 de octubre de 2016 (35º)

III.3.1. Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en 2009, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación cubana acompañada no da fe de dicha filiación por falta de garantías.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Con fecha 09 de mayo de 2014 se levanta acta de declaración de opción a la nacionalidad española en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba), mediante la cual Don R. F. P., nacido el 24 de febrero de 1970 en S. (Cuba), como representante legal de la menor, M. F. O., nacida el de 2004 en M. (Cuba), opta en su nombre a la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en el artº 20.2.a) del Código Civil.

Adjunta como documentación: hoja declaratoria de datos; optante.- tarjeta de menor y certificado de nacimiento expedido por la República de Cuba; presunto padre.- pasaporte español y certificado de nacimiento con inscripción de la adquisición de la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 15 de julio de 2009; madre.- carnet de identidad cubano, certificado de nacimiento expedido por la República de Cuba, certificado cubano de matrimonio con Don R. F. P., celebrado en M. (Cuba) el 03 de octubre de 2013 y certificado de matrimonio anterior con Don F. A. C. R., formalizado el 28 de octubre de 1996 en S. (Cuba) y disuelto por sentencia de divorcio dictada por el Tribunal Municipal Popular de S., firme el 19 de marzo de 2007.

2. Con fecha 16 de junio de 2014, la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) dicta auto por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción de nacionalidad de la optante, toda vez que no ha quedado establecido que en la menor concurren los requisitos exigidos en el artº 20 del Código Civil, especialmente en lo que se refiere a la filiación paterna.

3. Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se autorice la inscripción de nacimiento y la opción a la nacionalidad española de su hija y se revise la documentación integrante del expediente.

4. Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, junto con informe en el que indica que la madre de la menor contrajo matrimonio el 28 de octubre de 1996 con persona distinta al presunto padre de la optante, disuelto por sentencia que quedó firme el 19 de marzo de 2007 y la menor nace en fecha 04 de enero de 2004, bajo la vigencia del matrimonio anterior de su madre, por lo que en aplicación del artº 116 del Código Civil no queda establecida la filiación paterna de la optante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 113 y 116 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 23-2ª de mayo y 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de enero, 11-3ª de marzo y 8-1ª de abril de 2009.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro

extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).

III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 15 de julio de 2009 y pretende, asistido por ella, inscribir el nacimiento de la menor por medio de una certificación cubana, en la cual se hace constar que ésta nació el de 2004 en M. (Cuba).

IV. La inscripción de nacimiento de la interesada en el registro civil español requiere que antes prospere la opción ejercitada, basada en el artículo 20.1a) CC, lo que le atribuiría la condición de española. Sin embargo surge un problema previo, cual es que no resulta suficientemente acreditada su filiación paterna respecto de un ciudadano español, puesto que, según la legislación española, se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges. De manera que, para desvirtuar la eficacia probatoria de la presunción de filiación matrimonial (art. 116 CC), presunción *iuris tantum* que, en consecuencia, admite prueba en contrario, es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, cuando la hija nació, la madre se encontraba casada con un ciudadano distinto de quien asegura ser el padre habiéndose celebrado el matrimonio en fecha 28 de octubre de 1996, siendo disuelto por sentencia que quedó firme el 19 de marzo de 2007 y el nacimiento de la menor se produjo en fecha de 2004, es decir, bajo la vigencia del citado matrimonio de su madre. A estos efectos, la mera declaración de los interesados no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente-, la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía del expediente gubernativo, pues, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la mencionada presunción, no se considera probado, por ahora, que la optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de un español.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 14 de octubre de 2016 (36ª)

III.3.1. Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en 2009, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación cubana acompañada no da fe de dicha filiación por falta de garantías.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Con fecha 07 de junio de 2013 se levanta acta de declaración de opción a la nacionalidad española en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba), mediante la cual D^ª A.-R. P. G., nacida el 08 de abril de 1971 en L. (Cuba), con poder de Don O.-A. F. A., como representante legal de su hija menor de catorce años, L.-A. F. P., nacida el de octubre de 2000 en S. (Cuba), opta en su nombre a la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en el artº 20.2.a) del Código Civil.

Adjunta como documentación: hoja declaratoria de datos; optante.- tarjeta de menor y certificado de nacimiento expedido por la República de Cuba; presunto padre.- documento nacional de identidad y certificado de nacimiento con inscripción de la adquisición de la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 13 de abril de 2009; madre.- carnet de identidad cubano, certificado de nacimiento expedido por la República de Cuba; certificado cubano de matrimonio formalizado en S. (Cuba) el 18 de agosto de 1994 con Don J.-C. H. R.; certificado de divorcio del mismo, según escritura notarial de fecha 25 de enero de 2000 y certificado de vigencia del matrimonio desde el 18 de agosto de 1994 hasta el 25 de enero de 2000.

2. Con fecha 05 de junio de 2014, la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) dicta auto por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción de nacionalidad de la optante, toda vez que no ha quedado establecido que en la menor concurren los requisitos exigidos en el artº 20 del Código Civil, especialmente en lo que se refiere a la filiación paterna.

3. Notificada la resolución, la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se autorice la inscripción de nacimiento y la opción a la nacionalidad española de su hija y se revise la documentación integrante del expediente.

4. Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y la encargada del Registro Civil Consular de España en La

Habana (Cuba) remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, junto con informe en el que indica que la madre de la menor contrajo matrimonio el 18 de agosto de 1994 con persona distinta al presunto padre de la optante, disuelto en fecha 25 de enero de 2000 y la menor nace en fecha de octubre de 2000, dentro del periodo establecido de los 300 días posteriores al divorcio de la madre, por lo que en aplicación del artº 116 del Código Civil no queda establecida la filiación paterna de la optante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 113 y 116 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 23-2ª de mayo y 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de enero, 11-3ª de marzo y 8-1ª de abril de 2009.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).

III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 13 de abril de 2009 y pretende la promotora, asistida por ella, inscribir el nacimiento de la menor por medio de una certificación cubana, en la cual se hace constar que ésta nació el de octubre de 2000 en S. (Cuba).

IV. La inscripción de nacimiento de la interesada en el registro civil español requiere que antes prospere la opción ejercitada, basada en el artículo 20.1a) CC, lo que le atribuiría la condición de española. Sin embargo surge un problema previo, cual es que no resulta suficientemente acreditada su filiación paterna respecto de un ciudadano español, puesto que, según la legislación española, se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges. De manera que, para desvirtuar la eficacia probatoria de la presunción de filiación matrimonial (art. 116 CC), presunción iuris tantum que, en consecuencia, admite prueba en contrario, es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, la hija nació dentro del periodo de los 300 días posteriores al divorcio de la madre de

matrimonio formalizado con un ciudadano distinto del presunto padre, disolución que se produce el 25 de enero de 2000 y el nacimiento de la menor tiene lugar en fecha de octubre de 2000, es decir, dentro del periodo de vigencia del citado matrimonio de su madre. A estos efectos, la mera declaración de los interesados no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente-, la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía del expediente gubernativo, pues, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la mencionada presunción, no se considera probado, por ahora, que la optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de un español.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 14 de octubre de 2016 (37ª)

III.3.1. Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia en 2009, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación dominicana acompañada no da fe de dicha filiación por falta de garantías.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra acuerdo dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Con fecha 11 de junio de 2014, en el Registro Civil de Parla (Madrid) se levanta acta de opción a la nacionalidad española, por la que Dª M.-I. B. T., nacida el 11 de agosto de 1996 en S. (República Dominicana), asistida por Don L.-O. B. F., presunto padre y por Dª M. T. T., madre de la interesada, en calidad de representantes legales, opta a la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 20.2.b) del Código Civil, prestando juramento de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las leyes españolas y no renunciando a su nacionalidad anterior.

Adjunta como documentación: pasaporte dominicano y extracto de acta de nacimiento de la interesada apostillada, expedida por la Junta Central Electoral de la República Dominicana; documento nacional de identidad y certificado español de nacimiento del presunto padre de la interesada, con inscripción marginal de adquisición de la

nacionalidad española por residencia el 21 de octubre de 2009 y documento de identidad de extranjeros-régimen comunitario de la madre de la promotora.

2. Ratificados los interesados, previo informe favorable del ministerio fiscal, con fecha 18 de junio de 2014 se dicta auto por la encargada del Registro Civil de Parla, por el que se resuelve no inscribir la declaración de opción por la nacionalidad española formulada por la promotora, asistida por sus representantes legales, sin que concurra circunstancia alguna que determine la competencia de dicho registro civil, acordando remitir el expediente al Registro Civil Central, como competente para calificar lo solicitado y practicar las inscripciones derivadas de la declaración de opción.

3. Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central, con fecha 12 de noviembre de 2014 se dicta providencia, interesando del registro civil correspondiente se remita testimonio del escrito de solicitud y posterior ratificación del expediente de nacionalidad del presunto padre de la optante, en los particulares que hacen alusión a su estado civil e hijos habidos.

4. Con fecha 11 de marzo de 2015, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central, dicta acuerdo por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción a la nacionalidad española de la interesada, sin perjuicio de que acreditada su filiación biológica con padre español surta los efectos que corresponda, toda vez que el presunto padre no mencionó a la optante en su expediente de nacionalidad española por residencia, como estaba obligado, toda vez que a la fecha de la declaración efectuada por el padre, ésta era menor de edad.

5. Notificada la resolución, la promotora interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la nacionalidad española por opción, alegando que su padre no la mencionó en su expediente de nacionalidad por residencia debido a motivos familiares, al haber tenido una hija extramatrimonial.

6. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y el encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras, de 24-2ª, 24-3ª de abril de 2003; 2-1ª de septiembre de 2004; 24-2ª de octubre de 2005; 26-2ª de junio de 2006; 29-2ª de noviembre de 2007; 27-6ª de mayo, 2-6ª de julio y 14-2ª de octubre de 2008.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su

legalidad conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).

III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia el 21 de octubre de 2009 y pretende la promotora, asistida por ella, inscribir su nacimiento por medio de una certificación dominicana en la cual se hace constar que ésta nació el 11 de agosto de 1996 en Santo Domingo (República Dominicana), constatándose que en el expediente de nacionalidad por residencia, el presunto padre de la optante manifestó en fecha 04 de julio de 2006, ante el encargado del Registro Civil Único de Madrid, que su estado civil era de casado con D^a M. R. B., de nacionalidad española, y que tenía 5 hijos sujetos a su patria potestad, no mencionando en ningún momento a la optante, que en dicha fecha era menor de edad.

En el presente expediente, se solicita la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española de una hija nacida el 11 de agosto de 1996, a la que el presunto padre no mencionó en modo alguno en su expediente de nacionalidad por residencia, como venía obligado ya que a la fecha de la declaración efectuada por el padre, ésta era menor de edad, toda vez que el artº 220 del RRC, establece que, en la solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia se indicará especialmente : “... 2º. Su estado civil; menciones de identidad y lugar y fecha de nacimiento del cónyuge y de los hijos sujetos a la patria potestad”,

IV. En esta situación no puede prosperar el expediente por no haber mencionado el presunto padre de la optante la existencia de ésta en el expediente de nacionalidad por residencia, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que la optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de un español (cfr. art. 20 CC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 21 de octubre de 2016 (16ª)

III.3.1. Opción a la nacionalidad española

No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en 2009, por no resultar acreditada la filiación paterna y

porque la certificación cubana acompañada no da fe de dicha filiación por falta de garantías.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Con fecha 13 de mayo de 2013 se levanta acta de declaración de opción a la nacionalidad española en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba), mediante la cual Don M. P. F., nacido el 18 de diciembre de 1959 en C. (Cuba) y de nacionalidad española adquirida en aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, opta en nombre y representación de su hija menor de catorce años M. E. P. T., nacida el 23 de noviembre de 2004 en C. (Cuba) a la nacionalidad española, de conformidad con lo establecido en el artº 20.2.a) del Código Civil. Se aporta acta de consentimiento de la madre de la menor por la que no se opone a que el nacimiento de su hija se inscriba en el citado registro civil consular. Adjunta como documentación: hoja declaratoria de datos; menor.- tarjeta de menor y certificado de nacimiento expedido por la República de Cuba; presunto padre.- pasaporte español y certificado de nacimiento con inscripción de la adquisición de la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional. séptima de la Ley 52/2007 en fecha 28 de octubre de 2009; madre.- carnet de identidad cubano y certificado de nacimiento expedido por la República de Cuba, certificado de notas marginales en la inscripción de nacimiento, en el que se hace constar el divorcio de la progenitora del matrimonio formalizado el 21 de noviembre de 1990 con Don I. G. D., por sentencia del Tribunal Municipal Popular de Cienfuegos, que quedó firme el 17 de julio de 2009; certificado expedido por la Secretaria Auxiliar del Tribunal Municipal de Cienfuegos, en relación con la sentencia de divorcio de la progenitora del matrimonio formalizado en noviembre de 1990 y certificación de matrimonio civil, inscrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba), entre la progenitora y el presunto padre de la menor optante, formalizado en Cienfuegos el 20 de agosto de 2009.

2. Con fecha 03 de marzo de 2014, la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) dicta auto por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción de nacionalidad de la optante, toda vez que no ha quedado establecido que en la menor concurren los requisitos exigidos en el artº 20 del Código Civil, especialmente en lo que se refiere a la filiación paterna.

3. Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se autorice la inscripción de nacimiento y la opción a la nacionalidad española de la menor, indicando que su hija nació en 2004, cuando su madre no se había divorciado oficialmente de su anterior esposo, quien salió de Cuba de forma ilegal el 05 de mayo de 1996. Aporta copia de la sentencia de

divorcio dictada por la Sección Civil del Tribunal Municipal de Cienfuegos (Cuba) y certificación literal cubana de nacimiento de la menor.

4. Trasladado el recurso al Canciller del Consulado General de España en La Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, junto con informe en el que indica que la madre de la menor contrajo matrimonio el 21 de noviembre de 1990 con persona distinta al presunto padre de la optante, disuelto en fecha 17 de julio de 2009 y la menor nace en fecha 23 de noviembre de 2004, bajo la vigencia del matrimonio anterior de su madre, por lo que en aplicación del artº 116 del Código Civil no queda establecida la filiación paterna del optante, no habiendo sido probadas las alegaciones formuladas por el promotor en su escrito de apelación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 113 y 116 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 23-2ª de mayo y 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de enero, 11-3ª de marzo y 8-1ª de abril de 2009.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).

III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 28 de octubre de 2009 y pretende, asistido por ella, inscribir el nacimiento de la menor por medio de una certificación cubana, en la cual se hace constar que nació el 23 de noviembre de 2004 en Cienfuegos (Cuba).

IV. La inscripción de nacimiento del interesado en el registro civil español requiere que antes prospere la opción ejercitada, basada en el artículo 20.1a) Cc, lo que le atribuiría la condición de español. Sin embargo surge un problema previo, cual es que no resulta suficientemente acreditada su filiación paterna respecto de un ciudadano español, puesto que, según la legislación española, se presumen hijos del marido los nacidos

después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges. De manera que, para desvirtuar la eficacia probatoria de la presunción de filiación matrimonial (art. 116 CC), presunción iuris tantum que, en consecuencia, admite prueba en contrario, es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, cuando la hija nació, la madre se encontraba casada con un ciudadano cubano distinto del presunto padre, matrimonio que quedó disuelto por sentencia de divorcio que quedó firme el 17 de julio de 2009 y el nacimiento de la menor se produjo en fecha 23 de noviembre de 2004, es decir, bajo la vigencia del matrimonio anterior de su madre.

Por otra parte, las alegaciones formuladas por el promotor en su escrito de recurso, en particular, que el anterior esposo de la progenitora salió ilegalmente de Cuba el 05 de mayo de 1996, no han sido probadas con la documentación aportada, toda vez que en la sentencia dictada por la Sección Civil del Tribunal Popular de Cienfuegos de 06 de julio de 2009, se indica en el resultando primero de la misma que “los esposos se encuentran separados desde hace varios años, debido a que el cónyuge abandonó el país y se desconoce su paradero, lo que ha hecho imposible continuar la vida en común”, no constando en ninguno de sus apartados la fecha en la que el anterior esposo de la madre abandonó Cuba.

A estos efectos, la mera declaración de los interesados no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente-, la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía del expediente gubernativo, pues, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la mencionada presunción, no se considera probado, por ahora, que la optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de un español.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

Resolución de 21 de octubre de 2016 (18ª)

III.3.1. Opción a la nacionalidad española

No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en 2009, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación cubana acompañada no da fe de dicha filiación por falta de garantías.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Con fecha 09 de enero de 2013 se levanta acta de declaración de opción a la nacionalidad española en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba), mediante la cual Don A. P. P., nacido el 18 de diciembre de 1974 en M., L-H. (Cuba) y de nacionalidad española adquirida en aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, opta en nombre y representación de su hija menor de catorce años A. P. R., nacida el de 2005 en G., L-H. (Cuba) a la nacionalidad española, de conformidad con lo establecido en el artº 20.2.a) del Código Civil. Se aporta acta de consentimiento de la madre de la menor, Doña M. M. R. H., por la que no se opone a que el nacimiento de su hija se inscriba en el citado registro civil consular.

Adjunta como documentación: hoja declaratoria de datos; menor.- tarjeta de menor y certificado de nacimiento expedido por la República de Cuba; presunto padre.- pasaporte español y certificado de nacimiento con inscripción de la adquisición de la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 19 de noviembre de 2009; madre.- carnet de identidad cubano y certificado de nacimiento expedido por la República de Cuba, certificado de matrimonio con el presunto padre de la menor, formalizado en G. el 19 de noviembre de 2013; certificado de notas marginales en su inscripción de nacimiento, en el que se hace constar el matrimonio formalizado con Don J. I. L. el 09 de diciembre de 1997 y disuelto por sentencia dictada por el Tribunal Municipal Popular de Guanajay de fecha 11 de octubre de 2007, firme el 25 de octubre de 2007 y certificado de sentencia de divorcio expedido por la Presidenta del Tribunal Municipal Popular de Guanajay.

2. Con fecha 11 de junio de 2014, la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) dicta auto por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción de nacionalidad de la optante, toda vez que no ha quedado establecido que en la menor concurren los requisitos exigidos en el artº 20 del Código Civil, especialmente en lo que se refiere a la filiación paterna.

3. Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se autorice la inscripción de nacimiento y la opción a la nacionalidad española de la menor.

4. Trasladado el recurso al canciller del Consulado General de España en La Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, junto con informe en el que indica que la madre de la menor contrajo matrimonio el 09 de diciembre de 1997 con persona distinta al presunto padre de la

optante, disuelto en fecha 25 de octubre de 2007 y la menor nace en fecha de 2005, bajo la vigencia del matrimonio anterior de su madre, por lo que en aplicación del artº 116 del Código Civil no queda establecida la filiación paterna de la optante, no habiendo sido probadas las alegaciones formuladas por el promotor en su escrito de apelación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 113 y 116 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006; 23-2ª de mayo y 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de enero, 11-3ª de marzo y 8-1ª de abril de 2009.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española” (art. 85, I, RRC).

III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 19 de noviembre de 2009 y pretende, asistido por ella, inscribir el nacimiento de la menor por medio de una certificación cubana, en la cual se hace constar que nació el de 2005 en G., L. H. (Cuba).

IV. La inscripción de nacimiento del interesado en el registro civil español requiere que antes prospere la opción ejercitada, basada en el artículo 20.1a) Cc, lo que le atribuiría la condición de español. Sin embargo surge un problema previo, cual es que no resulta suficientemente acreditada su filiación paterna respecto de un ciudadano español, puesto que, según la legislación española, se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges. De manera que, para desvirtuar la eficacia probatoria de la presunción de filiación matrimonial (art. 116 CC), presunción *iuris tantum* que, en consecuencia, admite prueba en contrario, es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, cuando la hija nació, la madre se encontraba casada con un ciudadano cubano distinto del presunto padre, matrimonio que quedó disuelto por sentencia de divorcio que quedó firme el 25 de octubre de 2007 y el nacimiento de la menor se produjo en fecha 03 de diciembre de

2005, es decir, bajo la vigencia del matrimonio anterior de su madre. A estos efectos, la mera declaración de los interesados no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente-, la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía del expediente gubernativo, pues, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la mencionada presunción, no se considera probado, por ahora, que la optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de un español.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (21ª)

III.3.1. Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia en 2013, por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación bangladesí acompañada no da fe de dicha filiación por falta de garantías.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra acuerdo dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Con fecha 05 de enero de 2015, don S. R. H., nacido el 16 de octubre de 1996 en K., B. (Bangladesh) presenta en el Registro Civil Central, solicitud de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en el artº 20.1.a del Código Civil.

Adjunta como documentación: hoja declaratoria de datos; traducción jurada de certificado de nacimiento legalizado del interesado, emitido por la República de Bangladesh; certificado de inscripción consular del promotor, expedido por la Embajada de Bangladesh en Madrid; pasaporte de Bangladesh del solicitante; volante de empadronamiento colectivo expedido por el Ayuntamiento de M. y documento nacional de identidad y certificado literal español de nacimiento del presunto padre del interesado, don I. S. B., con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia el 18 de junio de 2013.

2. Con fecha 27 de febrero de 2015, el encargado del Registro Civil Central dicta providencia, interesando del registro civil correspondiente se remita testimonio del

escrito de solicitud y posterior ratificación del expediente de nacionalidad del presunto padre del promotor, en los particulares que hacen alusión a su estado civil e hijos habidos.

3. Con fecha 21 de mayo de 2015, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central, dicta acuerdo por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción de nacionalidad del promotor, sin perjuicio de que acreditada su filiación biológica con padre español, surta los efectos que corresponda, toda vez que en el expediente de nacionalidad por residencia del presunto padre, éste no mencionó en modo alguno al optante, como venía obligado, ya que a la fecha de la declaración efectuada por el padre, era menor de edad, unido a que la inscripción de nacimiento del interesado se produce en el Registro Civil de Bangladesh diecisiete años después de haberse producido el hecho, y ya adquirida la nacionalidad por quien se dice es el padre.

4. Notificada la resolución, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la nacionalidad española por opción alegando que el hecho de que su padre no le mencionara en su expediente de nacionalidad por residencia, fue debido a la tardanza en la expedición de las actas de nacimiento de su país de origen y el no disponer de ellas en el momento de presentación de la solicitud y que dicha omisión no debe desvirtuar la filiación paterna. Igualmente indica que solicitó en España un visado por reagrupación familiar en régimen comunitario, el cual le fue concedido en octubre de 2014, aportando al expediente la prueba de ADN practicada en septiembre de 2014, la cual demostraría que el Sr. S. B. es su padre biológico.

5. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y el encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, de 24-2ª, 24-3ª de abril de 2003; 2-1ª de septiembre de 2004; 24-2ª de octubre de 2005; 26-2ª de junio de 2006; 29-2ª de noviembre de 2007; 27-6ª de mayo, 2-6ª de julio y 14-2ª de octubre de 2008.

II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el registro civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).

III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia el 18 de junio de 2013 y pretende el promotor, asistido por ella, inscribir su nacimiento por medio de una certificación bangladeshí, en la cual se hace constar que nació el 16 de octubre de 1996 en K., B. (Bangladesh), si bien la inscripción de nacimiento se extendió diecisiete años después, el 15 de mayo de 2013.

Igualmente se constata que en el expediente de nacionalidad por residencia, el presunto padre del promotor manifestó el 06 de abril de 2011 mediante solicitud formulada ante el encargado del Registro Civil Único de Madrid y ratificado en la misma fecha, que su estado civil era de casado con Dª Y. S. y que tenía un hijo menor de edad a su cargo, nacido en junio de 1994, no mencionando en modo alguno al promotor, que en aquel momento era menor de edad.

IV. En esta situación no puede prosperar el expediente tanto, como se ha dicho, por la falta de garantías de la certificación local aportada como por no haber mencionado el presunto padre del interesado la existencia de éste en el expediente de nacionalidad por residencia, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado por ahora que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto a la patria potestad de un español (cfr. art. 20 CC), indicándose que las pruebas biológicas aportadas junto con el escrito de recurso, deberán ser valoradas en vía jurisdiccional.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 21 de octubre de 2016 (46ª)

III.3.1. Opción a la nacionalidad española. Art. 20.1 a) CC

No procede la inscripción de una ciudadana, mayor de edad, nacida en Cuba en 1995, la cual ejercita la opción a la nacionalidad española prevista en el artículo 20.1.a) del Código Civil, porque no resulta acreditado que la interesada sea hija de padre español, al estar afectada la filiación por una presunción de paternidad matrimonial que no ha sido destruida.

En las actuaciones sobre opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra resolución dictada por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana el 13 de septiembre de 2013, D^a. E. R. G., mayor de edad, nacida en V. C. (Cuba) el 26 de mayo de 1995 y de nacionalidad cubana, solicitaba la inscripción de su nacimiento, previa opción a la nacionalidad española, como hija de don L. E. R. G., mayor de edad y de nacionalidad española, obtenida por opción en aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 con fecha 29 de abril de 2009 y D^a E. G. P., nacida en S. C. (V. C.) en 1963. Adjuntaba la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción, en el que hace constar que cuando ella nació el Sr. R. G. era soltero y su madre casada, certificación no literal de nacimiento cubana de la optante, inscripción de nacimiento en el registro civil español del Sr. R. G., con marginal de nacionalidad española, certificación no literal de nacimiento cubana de la madre de la optante, Sra. G. P., carné de identidad cubano de la optante, certificación no literal de matrimonio del Sr. R. G. y la Sra. G. P., formalizado en Cuba en el año 2013, sin que conste el estado civil previo de los contrayentes y acta de opción suscrita por la Sra. R. G., certificado no literal del matrimonio anterior de la Sra. M. T., celebrado en Cuba en 1986 con don L. G. G. y disuelto por divorcio de fecha 19 de enero de 2011 y acta notarial de manifestaciones realizada en España por el Sr. M. R. prestando su consentimiento para que su hija obtenga la nacionalidad española.

2. Con fecha 13 de marzo de 2014, es requerida la optante para que acredite el estado civil de su madre cuando ella nació, lo que realiza mediante la aportación de certificado no literal de matrimonio de la Sra. G. P. con el Sr. F. U. C. R., celebrado en Cuba en 1977 y disuelto por sentencia de divorcio firme el 6 de junio de 1999. El encargado del registro civil consular dictó auto el 23 de mayo de 2014 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por no quedar suficientemente probada la filiación paterna de la optante y por tanto no cumplirse los requisitos del artículo 20 del Código Civil.

3. Notificada la resolución, la optante interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, adjuntando de nuevo su certificado no literal de nacimiento cubano.

4. Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, consideró que se habían guardado en la tramitación las prescripciones legales y por tanto la resolución recurrida era conforme a derecho. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se muestra de acuerdo con la resolución en su día dictada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 113 y 116 del Código Civil (CC); 2, 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 23-2^a de mayo, 7-4^a de noviembre de 2007; 21-1^a de mayo,

16-7ª de julio y 14-3ª de octubre de 2008; 28-4ª de enero de 2009; 24-3ª y 25-1ª de febrero de 2010; 26-1ª de octubre y 28-1ª de noviembre de 2011.

II. Se pretende la inscripción del nacimiento, previa opción a la nacionalidad española, de una ciudadana nacida en Cuba en 1995, alegando la nacionalidad española de su padre, adquirida al amparo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. La petición se basa en el artículo 20.1a) CC, según el cual pueden optar a la nacionalidad española aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. La encargada del registro consular dictó resolución denegando la solicitud por entender que no estaba suficientemente acreditada la filiación paterna. Dicha resolución constituye el objeto del presente recurso.

III. La inscripción de nacimiento de la interesada en el registro civil español requiere que antes prospere la opción ejercitada, basada en el artículo 20.1.a) CC, lo que le atribuiría la condición de española. Sin embargo surge un problema previo, cual es que no resulta suficientemente acreditada su filiación paterna respecto de un ciudadano español, puesto que, según la legislación española, si la madre es casada en el momento del nacimiento, para desvirtuar la eficacia probatoria de la presunción de filiación matrimonial (art. 116 CC), presunción iuris tantum que, en consecuencia, admite prueba en contrario, es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, la madre de la optante estaba casada desde 1977 con el Sr. C.R., cuando se produjo el nacimiento y consta que la disolución de dicho matrimonio se produjo por sentencia judicial el 6 de junio de 1999, es decir cuatro años después del nacimiento, por lo que no habiéndose acreditado la existencia de separación previa y dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la mencionada presunción de paternidad del marido de la madre, no puede prosperar el expediente porque no se considera probado, por ahora, que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto a la patria potestad de un español.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (47ª)

III.3.1. Opción a la nacionalidad española. Art. 20.1 a) CC

No procede la inscripción de una ciudadana, menor de edad, nacida en Cuba en 1994, la cual asistida por su representante legal ejercita la opción a la nacionalidad española prevista en el artículo 20.1.a) del Código Civil, porque no resulta acreditado

que la interesada sea hija de padre español, al estar afectada la filiación por una presunción de paternidad matrimonial que no ha sido destruida.

En las actuaciones sobre opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra resolución dictada por la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana el 10 de septiembre de 2012, D^a. C. A. C. R., menor de edad, nacida en C. H. (Cuba) el 1 de noviembre de 1994 y de nacionalidad cubana, solicitaba asistida por su representante legal, don E. C. V., la inscripción de su nacimiento, previa opción a la nacionalidad española, como hija del precitado Sr. C. V., mayor de edad y de nacionalidad española, obtenida por opción en aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 con fecha 6 de noviembre de 2009 y de D^a M. R.R. R., nacida en M., L. H. (Cuba) en 1969. Adjuntaba la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción, en el que hace constar que cuando ella nació el Sr. C. V. era soltero y su madre casada, certificación no literal de nacimiento cubana de la optante, inscripción de nacimiento en el registro civil español del Sr. C. V., con marginal de nacionalidad española, certificación no literal de nacimiento cubana de la madre de la optante, Sra. R. R., carné de identidad cubano de la optante y de su madre, pasaporte español del Sr. C. V., certificación no literal de matrimonio de la madre de la optante, Sra. R. R. con el Sr. R.G. S. M., nacido en C. L. H. en 1971, formalizado en Cuba en el año 1993, sin que conste su disolución, consentimiento prestado por la madre de la optante para la inscripción y acta de opción suscrita por la interesada, Sra. C. R. y su representante legal, Sr. C. V. ante el encargado del registro civil consular.

2. La encargada del registro civil consular dictó auto el 24 de octubre de 2013 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por no quedar suficientemente probada la filiación paterna de la optante y por tanto no cumplirse los requisitos del artículo 20 del Código Civil.

3. Notificada la resolución, la optante interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, adjuntando de nuevo su certificado no literal de nacimiento cubano y su certificado de partida de bautismo, celebrado en Cuba en 1999.

4. Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, consideró que se habían guardado en la tramitación las prescripciones legales y por tanto la resolución recurrida era conforme a derecho. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se muestra de acuerdo con la resolución en su día dictada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 113 y 116 del Código Civil (CC); 2, 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 23-2ª de mayo, 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio y 14-3ª de octubre de 2008; 28-4ª de enero de 2009; 24-3ª y 25-1ª de febrero de 2010; 26-1ª de octubre y 28-1ª de noviembre de 2011.

II. Se pretende la inscripción del nacimiento, previa opción a la nacionalidad española, de una ciudadana nacida en Cuba en 1994, alegando la nacionalidad española de su padre, que actúa como representante legal, adquirida al amparo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. La petición se basa en el artículo 20.1a) CC, según el cual pueden optar a la nacionalidad española aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. La encargada del registro consular dictó resolución denegando la solicitud por entender que no estaba suficientemente acreditada la filiación paterna. Dicha resolución constituye el objeto del presente recurso.

III. La inscripción de nacimiento de la interesada en el registro civil español requiere que antes prospere la opción ejercitada, basada en el artículo 20.1.a) CC, lo que le atribuiría la condición de española. Sin embargo surge un problema previo, cual es que no resulta suficientemente acreditada su filiación paterna respecto de un ciudadano español, puesto que, según la legislación española, si la madre es casada en el momento del nacimiento, para desvirtuar la eficacia probatoria de la presunción de filiación matrimonial (art. 116 CC), presunción *iuris tantum* que, en consecuencia, admite prueba en contrario, es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, la madre de la optante estaba casada desde enero de 1993 con el Sr. G. S. M., cuando se produjo el nacimiento y no consta hasta la fecha la disolución de dicho matrimonio, por lo que no habiéndose acreditado la existencia de separación previa y dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la mencionada presunción de paternidad del marido de la madre, no puede prosperar el expediente porque no se considera probado, por ahora, que la optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de un español.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

III.5 CONSERVACIÓN, PÉRDIDA Y RENUNCIA A LA NACIONALIDAD

III.5.1 CONSERVACIÓN, PÉRDIDA Y RENUNCIA A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Resolución de 14 de octubre de 2016 (32ª)

III.5.1. Pérdida de la nacionalidad española.

Procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española cuando el interesado alcanzó la mayoría de edad después de la entrada en vigor de la Ley 36/2002, de 8 de octubre, y no formuló la declaración de conservarla en los tres años siguientes a haberla alcanzado.

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto del encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Con fecha 12 de mayo de 2015, el órgano en funciones de ministerio fiscal del Consulado General de España en São Paulo (Brasil) solicita se instruya expediente de pérdida de la nacionalidad española conforme al artº 24.3 del Código Civil a Don T S. B., nacido el 29 de octubre de 1990 en S. (Brasil), hijo de Don L. S. A., nacido en Francia y de nacionalidad española y de Dª B.-M. B., nacida en Marruecos y de nacionalidad francesa.
2. El Cónsul General de España en São Paulo (Brasil) acuerda instruir expediente de pérdida de la nacionalidad española, levantándose acta de notificación al interesado, compareciendo éste el día 12 de mayo de 2015 ante el encargado del registro civil consular, informándole de la instrucción del expediente, por no haber manifestado su voluntad de conservar la nacionalidad española ante el encargado del registro civil consular, en el plazo de tres años desde que alcanzó su mayoría de edad, informándole que, de conformidad con lo dispuesto en el artº 352 del Reglamento del Registro Civil, puede formular las alegaciones que estime conveniente dentro del plazo de diez días naturales.
3. Dentro del plazo establecido al efecto, el interesado presenta escrito de alegaciones ante el registro civil consular indicando que, en enero de 2009 compareció en el Consulado General de España en São Paulo al objeto de renovar su pasaporte, cuando ya había alcanzado la mayoría de edad, no siendo informado de la necesidad de efectuar una declaración de conservación de la nacionalidad española, así como sus antecedentes familiares con España y su vinculación con España.
4. El órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe en fecha 04 de junio 2015 estimando cumplidos los requisitos del artº 24.3 del Código Civil para que se produzca la pérdida de la nacionalidad española.

5. Con fecha 04 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) dicta auto por el que declara que procede la anotación de la pérdida de la nacionalidad española del interesado al hallarse incurso en el supuesto previsto en el artº 24.3 del Código Civil.

6. Notificado el acuerdo al interesado, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente y alegando que la renovación del pasaporte español y la inscripción en la lista electoral son claros indicativos del deseo de mantener la nacionalidad española después de alcanzada la mayoría de edad, que nadie le informó de la necesidad de declarar la voluntad de conservar la nacionalidad española para evitar su pérdida, que el artº 24.4 del Código Civil indica que no se pierde la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en este precepto (artº 24.3) si España se hallare en guerra y que desde el año 2001 España está implicada en la guerra de Afganistán y mencionando la persecución política que sufrió su abuelo en la resistencia contra el franquismo y sus profundos vínculos con España.

7. Notificado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe desfavorable y el encargado del registro civil consular, se ratifica en el acuerdo dictado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 del Código Civil (CC); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil, 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la disposición adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las Resoluciones de 14 de enero de 1981; 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989; 12-2ª de septiembre, 4-1ª de diciembre de 2000; y 8-6ª de noviembre de 2006.

II. Se pretende por el interesado, nacida en S. (Brasil) el 29 de octubre de 1990, la recuperación de la nacionalidad española y que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad española adquirida *iure sanguinis* por su padre, español nacido en el extranjero. El encargado del registro civil consular emitió auto en fecha 04 de junio de 2015 por el que se resolvió se inscribiera al margen de la inscripción de nacimiento del promotor, la pérdida de la nacionalidad española. Este acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III. Dispone el apartado III del artículo 24 CC, que “Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del registro civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación”.

Examinados los datos del interesado resulta que ésta nació y reside en el extranjero (Brasil) y su padre de nacionalidad española también nació en el extranjero. Alcanzó la

mayoría de edad el 29 de octubre de 2008, o sea, después de que entrase en vigor el precepto transcrito (cfr. disposición adicional segunda de la Ley 36/2002) por lo que le es aplicable la causa de pérdida de la nacionalidad por éste establecida y, finalmente, con posterioridad a haber alcanzado la mayoría de edad, ha dejado transcurrir tres años sin formular declaración de conservación de la nacionalidad española, por lo que concurren todas las circunstancias que establece el citado artículo como condicionantes de la pérdida de la nacionalidad española.

En relación con las alegaciones del interesado en el escrito de recurso, no puede entenderse que la solicitud de pasaporte en 2009 sustituya al cumplimiento de la declaración de conservación de la nacionalidad española ante el encargado del registro civil, no resultando aceptable la alegación de que el interesado no fue informado de la necesidad de cumplimiento de dicho trámite. Por otra parte, en contra de lo que indica el recurrente, España no se encuentra en estado de guerra toda vez que no se ha producido ninguna declaración en este sentido según lo dispuesto en el artº 63.3 de la Constitución Española, por lo que no resulta aplicable en este caso lo dispuesto en el artº 24.4 del Código Civil. Por último, las alegaciones relativas a la persecución política que sufrió su abuelo y a los profundos vínculos con España que tiene la familia del interesado, tampoco eximen al mismo de realizar la declaración de conservación prevista en el artº 24.3 del Código Civil.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular Sao Pualo (Brasil).

Resolución de 14 de octubre de 2016 (33ª)

III.5.1. Pérdida de la nacionalidad española.

No procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artº 24.3 del Código Civil, toda vez que la inscripción de la interesada en el registro civil español se produce con posterioridad a la adquisición de su mayoría de edad.

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil).

HECHOS

1. Con fecha 19 de mayo de 2015, el órgano en funciones de ministerio fiscal del Consulado General de España en São Paulo (Brasil) solicita se instruya expediente de

pérdida de la nacionalidad española conforme al artº 24.3 del Código Civil a Dª. J. R. do E. S., nacida el 28 de febrero de 1985 S. (Brasil), hija de Don M.-Á. R. R., nacido en Brasil y de nacionalidad española y de Dª E. do E. S., nacida en Brasil, de nacionalidad brasileña.

2. El Cónsul Adjunto de España en São Paulo (Brasil) acuerda instruir expediente de pérdida de la nacionalidad española, levantándose acta de notificación a la interesada, compareciendo ésta el día 19 de mayo de 2015 ante el encargado del registro civil consular, informándole de la instrucción del expediente, por no haber manifestado su voluntad de conservar la nacionalidad española ante el encargado del registro civil consular, en el plazo de tres años desde que alcanzó su mayoría de edad y que, de conformidad con lo dispuesto en el artº 352 del Reglamento del Registro Civil, puede formular las alegaciones que estime conveniente dentro del plazo de diez días naturales.

3. Dentro del plazo establecido al efecto, la interesada presenta escrito de alegaciones ante el registro civil consular indicando que, en el momento de la solicitud de su inscripción de nacimiento, se encontraba dentro del plazo legal de solicitud de conservación de la nacionalidad española, ya que en dicho momento tenía 20 años de edad, no informándole de la necesidad de efectuar la citada declaración de conservación.

4. El órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe en fecha 04 de junio de 2015 estimando cumplidos los requisitos del artº 24.3 del Código Civil para que se produzca la pérdida de la nacionalidad española.

5. Con fecha 04 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) dicta auto por el que declara que procede la anotación de la pérdida de la nacionalidad española de la interesada al hallarse incurso en el supuesto previsto en el artº 24.3 del Código Civil.

6. Notificado el acuerdo a la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente y alegando que solicitó la nacionalidad española con 20 años, dentro del periodo legal de declaración de voluntad de permanecer con la nacionalidad española; que su certificado de nacimiento se inscribió en el registro civil consular el 11 de abril de 2005 y que considera que la mencionada declaración es prescindible toda vez que su inscripción de nacimiento formulada después de adquirir la mayoría de edad ratifica su voluntad de conservar la nacionalidad española.

7. Notificado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe desfavorable y el encargado del registro civil consular, se ratifica en el acuerdo dictado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 del Código Civil (CC); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil, 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la disposición adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las resoluciones de 14 de enero de 1981; 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989; 12-2ª de septiembre, 4-1ª de diciembre de 2000; y 8-6ª de noviembre de 2006.

II. Se pretende por la interesada, nacida en S. (Brasil) en 1985, que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artº 24.3 del Código Civil, toda vez haber solicitado la inscripción de su nacimiento con posterioridad a su mayoría de edad, dentro del período establecido para formular la declaración de conservación de la nacionalidad española. El encargado del registro civil consular emitió auto en fecha 04 de junio de 2015 por el que se resolvió se inscribiera al margen de la inscripción de nacimiento de la promotora, la pérdida de la nacionalidad española. Este auto constituye el objeto del presente recurso.

III. Dispone el apartado III del artículo 24 CC, que “Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del registro civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación”.

IV. Examinados los datos de la interesada resulta que ésta nació y reside en el extranjero (Brasil) y su padre, de nacionalidad española, también nació en el extranjero (Brasil) y alcanzó la mayoría de edad el 28 de febrero de 2003, o sea, después de que entrase en vigor el precepto transcrito (cfr. disposición adicional segunda de la Ley 36/2002) por lo que le es aplicable la causa de pérdida de la nacionalidad por éste establecida.

Sin embargo, en el caso examinado, no procede la aplicación de la pérdida de la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artº 24.3 del Código Civil, toda vez que la redacción del mismo se entiende referida a aquellos supuestos en los que la inscripción de nacimiento en el registro civil español se ha producido con anterioridad al cumplimiento de la mayoría de edad por los interesados, por la voluntad de sus representantes legales y no de los menores inscritos, motivo por el cual, en el precepto citado, se otorga en estos casos un plazo de tres años a contar desde el cumplimiento de su mayoría de edad o emancipación para que los inscritos manifiesten su voluntad de conservar la nacionalidad española, efectuando al efecto declaración ante el encargado del registro civil.

En el caso que nos ocupa, la interesada adquirió la mayoría de edad el 28 de febrero de 2003 y la inscripción en el Registro Civil Consular de España en Sao Paulo (Brasil) de la misma se produce el 06 de septiembre de 2005, cuando la promotora contaba con 20 años de edad.

Por tanto, la solicitud y posterior inscripción de nacimiento de la interesada, se produce con posterioridad a la adquisición de la mayoría de edad de la recurrente, dentro del periodo establecido para la declaración de conservación de la nacionalidad española por el artº 24.3 del Código Civil de acuerdo con la redacción establecida en la Ley 36/2002, de 8 de octubre, por un acto de declaración de la voluntad de la interesada de ostentar la nacionalidad española, por lo que no se dan las circunstancias establecidas en dicho precepto legal para la pérdida de la nacionalidad española y la inscripción de la pérdida se realizó, por tanto, sin que resultara procedente.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y revocar el auto apelado.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Sao Paulo (Brasil).

Resolución de 14 de octubre de 2016 (34ª)

III.5.1. Pérdida de la nacionalidad española.

Procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española cuando la interesada alcanzó la mayoría de edad después de la entrada en vigor de la Ley 36/2002, de 8 de octubre, y no formuló la declaración de conservarla en los tres años siguientes a haberla alcanzado.

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto del encargado del Registro Civil Consular de España en Porto Alegre (Brasil).

HECHOS

1. Con fecha 02 de junio 2015, el Encargado del Registro Civil Consular de España en Porto Alegre (Brasil) dicta providencia por la que determina que procede instruir expediente de pérdida de la nacionalidad española conforme al artº 24.3 del Código Civil a Dª. A. B. A., nacida el 28 de enero de 1985 en P. (Brasil), hija de Don Y.-L. B., nacido en Brasil y de nacionalidad brasileña y de Dª A.-M. A. B., nacida en Brasil y de nacionalidad española, estableciendo que se cite a la interesada para que haga sus alegaciones y al Canciller del citado Consulado General para que emita su informe.

2. Con fecha 29 de junio de 2015, se levanta acta de audiencia a la promotora, ante el encargado del Registro Civil Consular de España en Porto Alegre (Brasil) en relación con el expediente de pérdida de la nacionalidad española, informándole de la instrucción del expediente, por no haber manifestado su voluntad de conservar la nacionalidad española ante el encargado del registro civil consular, en el plazo de tres años desde que alcanzó su mayoría de edad, y que, de conformidad con lo dispuesto en el artº 352 del Reglamento del Registro Civil, puede formular las alegaciones que

estime conveniente dentro del plazo de diez días naturales. La interesada alegó que declaró su voluntad de conservar la nacionalidad española al solicitar un pasaporte cuando ya había cumplido la mayoría de edad y antes de que transcurriera el plazo legal de tres años para hacerlo, y que se le han expedido certificados de inscripción en el Registro de Matrícula Consular en fecha 16 de julio de 2003 y el 05 y 10 de febrero de 2004.

3. El órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe en fecha 04 de junio 2015 estimando cumplidos los requisitos del artº 24.3 del Código Civil para que se produzca la pérdida de la nacionalidad española.

4. Con fecha 29 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en Porto Alegre (Brasil) dicta auto por el que declara que procede la anotación de la pérdida de la nacionalidad española de la interesada al hallarse incurso en el supuesto previsto en el artº 24.3 del Código Civil.

5. Notificado el acuerdo a la interesada, éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente y alegando que con fecha 10 de febrero de 2004 acudió al Consulado General de España en Porto Alegre para expresar su deseo de mantener su nacionalidad española, aunque no recibió ningún documento o copia firmada, si bien en dicha fecha recibió un certificado de residencia, que siempre ha recibido los documentos para las elecciones en España y que mantiene contacto con su familia en España.

6. Notificado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe desfavorable y el encargado del registro civil consular, se ratifica en el acuerdo dictado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 24 del Código Civil (CC); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil, 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la disposición adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las resoluciones de 14 de enero de 1981; 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989; 12-2ª de septiembre, 4-1ª de diciembre de 2000; y 8-6ª de noviembre de 2006.

II. Se pretende por la interesada, nacida en P. (Brasil) el 28 de enero de 1985, la recuperación de la nacionalidad española y que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad española adquirida *iure sanguinis* por su madre, española nacida en el extranjero. El encargado del registro civil consular emitió auto en fecha 29 de junio de 2015 por el que se resolvió se inscribiera al margen de la inscripción de nacimiento de la promotora, la pérdida de la nacionalidad española. Este acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III. Dispone el apartado III del artículo 24 CC, que “Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre

españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residen les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del registro civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación”.

Examinados los datos de la interesada resulta que ésta nació y reside en el extranjero (Brasil) y su madre de nacionalidad española también nació en el extranjero. Alcanzó la mayoría de edad el 28 de enero de 2003, o sea, después de que entrase en vigor el precepto transcrito (cfr. disposición adicional segunda de la Ley 36/2002) por lo que le es aplicable la causa de pérdida de la nacionalidad por éste establecida y, finalmente, con posterioridad a haber alcanzado la mayoría de edad, ha dejado transcurrir tres años sin formular declaración de conservación de la nacionalidad española, por lo que concurren todas las circunstancias que establece el citado artículo como condicionantes de la pérdida de la nacionalidad española, no existiendo constancia en el Consulado General de España en Porto Alegre de que la promotora haya efectuado la declaración ante el encargado de dicho registro civil prevista en el artº 24.3 del Código Civil, ni la interesada aporta documentación justificativa al respecto.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Porto Alegre (Brasil).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (17ª)

III.5.1. Pérdida de la nacionalidad española.

Procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española toda vez que no es española iure soli la nacida en España hija de padres uruguayos nacidos en Uruguay.

En las actuaciones sobre pérdida de la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores, padres de la menor, contra auto del encargado del Registro Civil Consular de España en Montevideo (Uruguay).

HECHOS

1. Con motivo de la renovación en el Consulado General de España en Montevideo (Uruguay) del pasaporte español de la menor, S. A. de S. M., nacida el 07 de noviembre de 2009 en C. (Tarragona), hija de Don D-G. de S. M. y de Doña S-M. M. M., nacidos en Uruguay, de nacionalidad uruguaya, el órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe el 16 de abril de 2015 por el que, a la vista del certificado literal de nacimiento de la menor, se solicita se instruya expediente para declarar destruida la presunción

de la nacionalidad española de la interesada al no encontrarse dentro de los supuestos legales para el otorgamiento de la misma (artº 17.1c CC), fundamento de la nacionalidad española con valor de simple presunción y se cancele la anotación de presunción de la nacionalidad.

2. Por oficio de fecha 22 de abril de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en Montevideo, comunica a los padres de la menor la incoación de expediente de oficio para declarar con valor de simple presunción si a su hija le corresponde o no la nacionalidad española, habida cuenta de las dudas surgidas acerca de la atribución de su nacionalidad española mediante declaración con valor de simple presunción, disponiendo de un plazo de tres días hábiles para realizar las alegaciones que estimen convenientes. Dicha comunicación fue notificada en fecha 07 de mayo de 2015.

3. Con fecha 11 de mayo de 2015 tiene entrada en el Registro del Consulado General de España en Montevideo (Uruguay), escrito de alegaciones formulado por los padres de la menor, indicando que a su hija le fue declarada la nacionalidad española con valor de simple presunción por resolución dictada por el encargado del Registro Civil de Reus y que estuvieron viviendo más de un año ininterrumpidamente en España, considerando que a su hija le corresponde la nacionalidad española por haber nacido allí y que tiene derecho a ostentar la doble nacionalidad.

4. Mediante providencia de fecha 11 de mayo de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en Montevideo, determina que procede se instruya expediente que declare si a la menor le corresponde o no la anotación de presunción de la nacionalidad española, para lo que se practicarán las pruebas pertinentes, emitiéndose informe por el ministerio fiscal y dictándose en forma de auto la resolución que proceda.

5. Con fecha 14 de mayo de 2015, el órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe estimando que no se han cumplido los requisitos que prescribe el artº 17.1c) del Código Civil, al ostentar la interesada la nacionalidad uruguaya, por aplicación de la Ley uruguaya nº 16.021, de 13 de abril de 1989, no existiendo, por tanto, riesgo de apatridia, toda vez que la legislación de Uruguay concede la nacionalidad a los hijos de uruguayos, sea cual fuere su lugar de nacimiento, cuando el padre, la madre o ambos sean nacidos en la República Oriental de Uruguay.

6. Con fecha 15 de mayo de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España en Montevideo dicta auto por el que declara que a la menor no le corresponde la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción de acuerdo con el artículo 17.1 del Código Civil, en base a la legislación uruguaya de 1989 que establece que tienen la nacionalidad uruguaya, sea cual fuere el lugar de su nacimiento, los hijos de padre o madre nacidos en cualquier punto del territorio de la República, lo que se produce en el presente expediente y que el nacimiento de la menor es posterior a la legislación uruguaya que otorgaba al inscrito dicha nacionalidad desde su nacimiento.

7. Notificado el acuerdo, los padres de la menor interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación de la resolución impugnada y la nacionalidad española de origen a su hija, alegando que la legislación uruguaya en el momento del nacimiento de la menor no reconocía dicha nacionalidad a los hijos de uruguayos nacidos fuera de la República, ya que para ello resultaba imprescindible que más tarde se acercaran en Uruguay y se inscribieran en el Registro Cívico.

8. Notificado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe desfavorable a las pretensiones de los recurrentes, estimando que procede dicha cancelación, por considerar que la menor nació uruguaya en aplicación de la propia ley nacional 16021/1989 de 13 de abril, que atribuye la nacionalidad uruguaya a los hijos de uruguayos, nacidos éstos en Uruguay, sea cual fuere su lugar de nacimiento de aquellos. El encargado del registro civil consular, se ratifica en el acuerdo dictado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil (CC.); 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil (RRC); 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989; y las resoluciones de 16-2ª de octubre y 7-4ª y 5ª de noviembre de 2002; 28-4ª de junio y 4-1ª de julio de 2003; 28-3ª de mayo y 23-1ª de julio de 2004; 30-4ª de noviembre y 7-2ª de diciembre de 2005; 14-3ª de febrero y 20-1ª de junio de 2006; 17-4ª de enero de 2007, 10-5ª de diciembre de 2007; 11-7ª de junio y 10-6ª y 7ª de julio de 2008; 27-4ª de Enero de 2009.

II. Se pretende por los promotores, de nacionalidad uruguaya y nacidos en Uruguay, que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad española adquirida *iure soli* de su hija menor de edad, nacida en C., T., el de 2009. Instruido el correspondiente expediente, por auto de 15 de mayo de 2015, dictado por el encargado del registro civil consular se resolvió que a la menor no le correspondía la nacionalidad española de origen, de acuerdo con lo establecido en el artº 17.1.c) del Código Civil, instando la remisión al encargado del Registro Civil de Cambrils de todo el expediente con el fin de que se practique la cancelación de la anotación marginal que declara la presunción de la nacionalidad española de la menor. Dicho auto constituye el objeto del presente recurso.

III. De acuerdo con el conocimiento adquirido por este centro directivo sobre el Derecho uruguayo sobre la nacionalidad, tienen la cualidad de nacionales de la República Oriental de Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República, y tienen también dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su nacimiento, los hijos de cualquiera de las personas mencionadas anteriormente (vid. Artículos 1 y 2 de la Ley 16.021, de 13 de abril de 1989). En consecuencia, a partir de la entrada en vigor de la citada Ley sólo son españoles *iure soli* los hijos de uruguayos

nacidos en España cuando ni el padre ni la madre hubieren nacido en el territorio de la República Oriental de Uruguay, ya que concurriendo esta última condición tales hijos son uruguayos y no apátridas.

En este caso, ambos progenitores son de nacionalidad uruguaya y nacidos en Uruguay, por lo que la menor, nacida en España con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley uruguaya 16.021 de 13 de abril de 1989, ostenta la nacionalidad uruguaya de sus padres y no es apátrida, no reuniendo, por tanto, los requisitos establecidos para la atribución de la nacionalidad española *iure soli* en aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay)

III.8 COMPETENCIA EN EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD

III.8.1 COMPETENCIA EN EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD POR RESIDENCIA

Resolución de 21 de octubre de 2016 (37ª)

III.8.1. Competencia material del registro civil en expedientes de nacionalidad por residencia

Se declara la nulidad de la resolución de la encargada que acuerda el archivo de una solicitud de nacionalidad española por residencia sin previa remisión del expediente a la DGRN porque carece de competencia para ello.

En las actuaciones sobre adquisición de la nacionalidad española por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra la resolución dictada por la encargada del Registro Civil de Arrecife.

HECHOS

1. Mediante formulario presentado el 1 de abril de 2014 en el Registro Civil de Arrecife, el Sr. C.-A. Z. R., mayor de edad y de nacionalidad boliviana, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Consta en el expediente la siguiente documentación: formulario de solicitud, tarjeta de residencia y pasaporte.

2. La encargada del registro dictó providencia el 1 de abril de 2014 acordando el archivo del expediente por no haber aportado el solicitante los certificados de nacimiento y de ausencia de antecedentes penales de su país de origen.

3. Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando el interesado que había pedido con antelación los certificados correspondientes a su país de origen pero que no se los habían enviado a tiempo para entregarlos el día de la cita en el registro debido a que existía una duplicidad de registros con su identidad y hubo que rectificar el error previamente. Con el escrito de recurso aportaba la siguiente documentación: solicitud de rectificación y cancelación de registro en Bolivia presentada el 28 de enero de 2014, lista de notas marginales de un órgano electoral boliviano con mención de cancelación de partida por doble registro y de rectificación de errores el 28 de enero de 2014, certificado de empadronamiento, pasaporte boliviano, informe de vida laboral, contrato de trabajo, nóminas, justificantes de solicitud de documentos bolivianos, certificado de nacimiento y certificado de ausencia de antecedentes penales en Bolivia.

4. Del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Arrecife se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 21 y 22 del Código Civil; 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 63 de la Ley del Registro Civil; 16, 220 y siguientes y 365 del Reglamento del Registro Civil y las resoluciones 9-1ª y 2ª de julio, 19-2ª de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000; 5-3ª de enero de 2002; 17-3ª de mayo de 2004; 30-1ª de noviembre de 2006; 27-1ª y 2ª de marzo y 15-3ª de octubre de 2008; 24-6ª de 2009; 13-1ª de enero y 25-8ª de noviembre de 2010; 15-42ª de abril y 7-63ª de octubre de 2013; 6-69ª de febrero y 17-45ª de abril de 2015.

II. En los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia el encargado del registro civil del domicilio carece de facultad decisoria porque la competencia para la concesión corresponde al Ministerio de Justicia (arts. 21 y 22 CC). Por ello, si el encargado que había de instruir la primera fase del expediente (art. 365 RRC) -conforme al procedimiento anterior a la reforma operada a partir de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil- estimaba que no se cumplían los requisitos legales para la concesión, debía limitarse a elevar dicho expediente a este centro directivo, una vez tramitado conforme a las reglas generales, con el correspondiente informe-propuesta desfavorable.

III. No se hizo así en este caso, en el que ni siquiera se llegó a requerir al interesado, antes de acordar el archivo, la presentación de la documentación que faltaba, de modo que procede ahora, al resolver el recurso interpuesto, declarar la nulidad de las actuaciones por incompetencia del órgano que resolvió. Así resulta de la aplicación de los artículos 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 16 del Reglamento del Registro Civil.

IV. Por lo demás, no habiéndose completado la tramitación del expediente, es oportuno devolver las actuaciones al Registro Civil de Arrecife para que se realicen los trámites necesarios, elevándose a continuación a esta dirección general.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Estimar el recurso y declarar la nulidad de la resolución recurrida.

2º. Retrotraer las actuaciones devolviendo el expediente al Registro Civil de Arrecife para que se complete la tramitación oportuna y se remita lo actuado a este centro para la resolución de la solicitud.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Arrecife (Las Palmas).

III.8.2 COMPETENCIA TERRITORIAL EN EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD

Resolución de 7 de octubre de 2016 (54ª)

III.8.2. Competencia en expedientes de nacionalidad por motivos distintos de la residencia.

Se declara la incompetencia del registro municipal correspondiente al lugar de domicilio de la interesada, nacida en 1996 en Colombia, que ha resuelto sobre la solicitud de opción a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en el artº 20 del Código Civil, y se retrotraen las actuaciones al Registro Civil Central, que es el verdaderamente competente para resolver.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Pulpi (Almería).

HECHOS

1. Con fecha 25 de abril de 2014, don D. R. N. y doña O. B. C., nacidos en Colombia, solicitan ante el Registro Civil de Pulpi (Almería), la nacionalidad española por opción a favor de D. A. A. B., nacida el 21 de julio de 1996 en C., V. (Colombia), hija de don D. J. A. G., de nacionalidad colombiana y de doña O. B. C., de nacionalidad colombiana, al amparo de lo establecido en el artº 20.1.a) del Código Civil.

Adjuntan como documentación: certificado de empadronamiento colectivo, expedido por el Ayuntamiento de P.; certificado literal español de nacimiento de don D. R. N., esposo de la progenitora, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española el 18 de febrero de 2014; declaración del progenitor de la interesada, ante el

Consulado General de España en Bogotá (Colombia), el 17 de junio de 2011, por la que cede la custodia de su hija menor, para salir del país y residir en España, junto a su madre y su esposo, el Sr. R. N. y certificado literal de nacimiento de la interesada legalizado, expedido por la Dirección Nacional de Registro Civil de Colombia.

2. Ratificados los promotores ante el Registro Civil de Pulpí, se remiten las actuaciones al juez encargado del Registro Civil de Huércal-Overa, a fin de que se le dé el trámite correspondiente.

3. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, por el que se opone a la concesión de la nacionalidad española por opción a la interesada, al no cumplirse los requisitos previstos en el Código Civil, la encargada del Registro Civil de Huerca-Overa dicta providencia con fecha 23 de abril de 2015, por la que se indica que, habiéndose practicado la notificación al ministerio fiscal e informado este negativamente, se remiten las actuaciones al Juzgado de Paz de Pulpí, para que notifique a la interesada la denegación del mismo.

4. Con fecha 20 de mayo de 2015, el encargado del Registro Civil de Pulpí (Almería) dicta auto, por el que se deniega a los promotores, la nacionalidad española y la vecindad civil común a favor de su representada mayor de dieciocho años, al no cumplir los requisitos establecidos en el Código Civil.

5. Notificada la resolución, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se estime la opción a la nacionalidad española y su inscripción en el registro civil, alegando que, si bien su padrastró no tenía la patria potestad sobre la misma, sí tenía su custodia.

6. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil de Pulpí (Almería) remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17, 20 y 22 del Código Civil (CC); 15, 16, 18 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 28 de febrero de 2006 de la Dirección General de los Registros y del Notariado y las Resoluciones de 29-2ª de Octubre de 1999; 13-1ª de Febrero y 22 de Marzo de 2003; 15-3ª de Octubre de 2008; 13-6ª de Abril de 2009; 1-6ª de Diciembre de 2010.

II. Los promotores del expediente, solicitan la opción a la nacionalidad española de la interesada, nacida el 21 de julio de 1996 en Colombia, hija de padres colombianos, por razón de patria potestad. El encargado del registro civil del domicilio dicta auto desestimando la solicitud formulada, al no cumplirse los requisitos establecidos en el artº 20.1.a) del Código Civil. Frente al citado auto, se interpone recurso por la interesada.

III. Con carácter previo a entrar a conocer del fondo del asunto planteado, procede determinar si el Registro Civil de Pulpí (Almería) es competente para resolver la solicitud

de opción por la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artº 20.1.a) del Código Civil, formulada por los promotores.

IV. La directriz cuarta de la instrucción de 28 de febrero de 2006, de la Dirección general de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales en materia de adquisición de la nacionalidad española y adopciones internacionales, establece las reglas especiales respecto de las inscripciones de adquisición de la nacionalidad española.

Así, se indica que, respecto de los supuestos de adquisición de la nacionalidad española por opción de menores de edad nacidos en el extranjero sujetos a la patria potestad de un ciudadano que haya adquirido la nacionalidad española por residencia, hay razones para entender incluidos en la ampliación competencial de los registros municipales llevada a cabo por la Ley 24/2005 aquellas opciones de menores nacidos en el extranjero que trajeran causa directa de expedientes de nacionalidad resueltos favorablemente.

Ahora bien, esta acumulación y ampliación de la competencia a favor del registro civil municipal que haya tramitado el previo expediente registral de adquisición de la nacionalidad española por residencia respecto de las opciones a la nacionalidad española por razón de patria potestad, dado que está justificada por razón de la vinculación de esta opción con el previo expediente de nacionalización del padre o madre del menor, debe mantenerse mientras subsista la propia competencia del registro civil en que se ha instruido el expediente, esto es, hasta la inscripción definitiva del nacimiento y de la adquisición de la nacionalidad española del extranjero naturalizado, por lo que la competencia del registro civil municipal, en cuanto a inscripción de las aludidas opciones, se condiciona a que se formulen las correspondientes declaraciones de opción (cfr. artº 20 nº 2 CC) durante el período de los 180 días siguientes a la notificación de la concesión de la nacionalidad española en que se ha de formalizar la renuncia a la nacionalidad anterior, en su caso, y la promesa o juramento exigidos por la ley (cfr. artº 23 C.c. y 224 RRC).

Por otra parte, de la redacción del artº 16.4 de la Ley del Registro Civil parece desprenderse la exigencia, igualmente, de un segundo requisito: que la causa de adquisición de la nacionalidad española esté sometida a la exigencia legal del juramento o promesa de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las Leyes (cfr. artº 23, a del CC), requisito que se desprende implícitamente del hecho de fijarse en el trámite del levantamiento del acta correspondiente al momento procedimental oportuno para formular la solicitud de inscripción en el registro civil municipal. No obstante, el hecho de que tal requisito no sea exigible en los supuestos de adquisiciones de nacionalidad por parte de menores que no hayan alcanzado la edad de los catorce años, determinaría con arreglo a una interpretación estricta su exclusión del ámbito del citado artículo 16.4 de la Ley, exclusión cuyo fundamento no se alcanza y que, resultaría, además de discriminatoria, contraria al principio de salvaguardia y

protección del superior interés del menor (Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor), por lo que debe descartarse tal interpretación estricta.

V. El expediente que nos ocupa no se encuentra incluido en el supuesto contemplado en la directriz cuarta de la Instrucción de 28 de febrero de 2006, que amplía la competencia a los registros civiles municipales en aquellos casos de adquisición de la nacionalidad española por opción de menores de edad nacidos en el extranjero sujetos a la patria potestad de un ciudadano que haya adquirido la nacionalidad española por residencia. Así, la interesada no está sujeta a la patria potestad de ningún español, toda vez que el progenitor de la misma, de nacionalidad colombiana, siguió ostentado la patria potestad sobre su hija hasta la mayoría de edad de esta, constando en el expediente un escrito de cesión de la custodia del padre a favor del esposo de la progenitora, Sr. R. N. Por tanto, en el presente supuesto no existe vinculación entre la opción efectuada a favor de la interesada, mayor de 14 años en dicho momento, y el previo expediente de adquisición de la nacionalidad española por residencia del esposo de la madre.

VI. La regla general de competencia en materia registral civil se contiene en el artículo 16, apartado primero, de la Ley del Registro Civil al disponer que “la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el registro municipal o consular del lugar en que acaecen”. En el supuesto de tratarse de hechos ocurridos en España no se plantea problema alguno. Aplicándose el principio de competencia territorial que se desprende del transcrito precepto, el hecho deberá inscribirse en el registro municipal, principal o delegado, en cuya circunscripción territorial acaece.

Para el supuesto de hechos ocurridos en el extranjero, inscribibles por afectar a un español, el artículo 12 de la Ley dispone que “Los Cónsules extenderán por duplicado las inscripciones que abren folio en el registro de su cargo, uno de cuyos ejemplares será remitido al Registro Central para su debida incorporación. En uno y otro registro se extenderán en virtud de parte, todas las inscripciones marginales que se practiquen en cualquiera de ellos”. En la Ley del Registro Civil no existe ningún otro precepto que determine o aclare la competencia concreta del Registro Central para practicar las inscripciones que abren folio.

Existe un tercer grupo de hechos, los ocurridos fuera de España cuyos asientos deban servir de base a inscripciones marginales exigidas por el Derecho español, en los supuestos de adquisición de la nacionalidad española por vía de adopción o de adquisición sobrevenida de la misma, respecto de los cuales tampoco está definido en la Ley registral el papel que juega el Registro Civil Central. De las normas hasta ahora mencionadas se desprende que tales hechos de estado civil deberían ser objeto de inscripción principal por los Registros Consulares de los correspondientes lugares de nacimiento, y sólo habría constancia en el Registro Central de las mismas a través de los duplicados recibidos.

El planteamiento anterior no varía por el hecho de que el artículo 18 de la Ley atribuya al Registro Civil Central una competencia residual para los supuestos en que el lugar

de acaecimiento del hecho inscribible no corresponda a la demarcación de ningún registro municipal ni consular, o cuando el registro competente por razones extraordinarias no pueda funcionar.

En definitiva, las dos finalidades a que tiende el Registro Central son la de servir de registro supletorio para ciertos supuestos de excepcionalidad y, en segundo lugar, permitir agrupar o concentrar en un único registro los hechos inscritos en los registros consulares y dar publicidad a las situaciones jurídicas que de los mismos se deriven.

VII. Es preciso acudir a las normas de competencia contenidas en el Reglamento del Registro Civil, para encontrar una determinación más concreta y específica de la competencia del Registro Civil Central en los supuestos antes indicados. En efecto, en el apartado segundo del artículo 68, tras reiterar en el apartado primero la regla general de competencia, se dice que “Cuando sea competente un registro consular, si el promotor estuviere domiciliado en España, deberá practicar antes la inscripción en el Registro Central y después, por traslado, en el consular correspondiente”.

Por tanto, el Registro Central surge inicialmente como un registro supletorio y de centralización de los asientos de los registros consulares, pero tal caracterización queda en parte modificada en el sentido de configurarse simultáneamente como un registro civil ordinario en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, con la particularidad, por otro lado, de que a partir de la reforma de este precepto por el Real Decreto 3455/77, de 1 de diciembre, se rompe además, el criterio general de competencia del artículo 16 de la Ley para la práctica de la inscripción respecto de los hechos ocurridos en el extranjero, criterio que ya no va a ser el lugar de acaecimiento del hecho, sino la circunstancia de que el promotor esté domiciliado en España.

VIII. Pues bien, ninguna razón jurídica abona que este criterio se vea alterado o abrogado en el ámbito de la inscripción de nacimiento y de opción a la nacionalidad española - que se ha de extender al margen de aquella con arreglo a la regla de competencia por conexión que resulta del artículo 46 de la Ley del Registro Civil - que se hayan de practicar por razón del ejercicio de la facultad de opción a la nacionalidad española, debiendo entenderse, con arreglo a lo que resulta de la interpretación sistemática de las citadas normas, sin carácter excluyente y, por tanto, sin perjuicio de la competencia propia del Registro Civil Central cuando, por razón del domicilio en España del solicitante, éste sea el funcionalmente competente para practicar la inscripción, en aplicación de la regla de competencia contenida en el párrafo 2 del artículo 68.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado declarar la nulidad del auto apelado y retrotraer las actuaciones al momento de la recepción de las mismas por el Registro Civil de Pulpí (Almería) a fin de que se dé traslado de ellas al Registro Civil Central competente para la resolución del expediente.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Pulpí (Almería)

Resolución de 14 de octubre de 2016 (21ª)

III.8.2. Competencia territorial del registro civil del domicilio
en expediente de nacionalidad por residencia

El encargado puede y debe declararse incompetente para la actuación registral instada cuando llegue a la convicción de la inexactitud del padrón municipal respecto de la persona que promueve el expediente registral ante el registro civil, cuya competencia depende del domicilio del promotor al que se refiere la inexactitud.

En las actuaciones sobre declaración de incompetencia territorial del registro en un expediente de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil de Talavera de la Reina (Toledo).

HECHOS

1. Mediante escrito presentado el 21 de junio de 2011 en el Registro Civil de Talavera de la Reina, el Sr. A. M. el K., mayor de edad y de nacionalidad marroquí, solicitaba la concesión de la nacionalidad española por residencia. Adjuntaba los siguientes documentos: acta de nacimiento, certificado negativo de antecedentes penales en su país de origen, certificado de empadronamiento, libreta bancaria, declaración de IRPF, informe de vida laboral, pasaporte y tarjeta de residencia.
2. Ratificado el promotor y dado que, según el certificado de empadronamiento aportado, el alta en la localidad de T. había tenido lugar solo un día antes de la presentación de la solicitud, desde el registro se solicitó informe policial acerca del domicilio efectivo del interesado. La comisaría local comunicó que, personados en el domicilio declarado agentes de la brigada local de extranjería en dos días consecutivos (uno por la mañana y al día siguiente por la tarde), habían comprobado que el solicitante no residía allí.
3. El encargado del registro dictó auto el 29 de septiembre de 2011 declarando su incompetencia territorial por considerar que, según se desprende del informe policial incorporado al expediente, el interesado no tenía su domicilio efectivo en Talavera.
4. Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que sí vivía en el domicilio indicado en Talavera, localidad en la que ya había residido varios años anteriormente y a la que volvió para compartir gastos con un familiar cuando se quedó desempleado, si bien había comenzado a trabajar nuevamente a finales de junio, razón por la cual los agentes que visitaron el domicilio no le hallaron en casa. Añade que presentó su solicitud en el momento en que había reunido la documentación necesaria tras haber cumplido dos meses antes los diez años de residencia en España. En prueba de sus alegaciones

aportaba informe de vida laboral con última fecha de alta el 12 de septiembre de 2011 y nómina correspondiente al mes de julio de 2011.

5. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil de Talavera remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) para la resolución del recurso.

6. El 25 de junio de 2015 tuvo entrada en la DGRN escrito del recurrente interesándose por el estado de su expediente y comunicando su nuevo domicilio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 40 del Código Civil (CC); 50 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 63 de la Ley del Registro Civil (LRC); 220 a 224 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 11-4^a de enero de 2007, 14-6^a de octubre de 2008, 19-7^a de junio de 2009, 8-1^a, 3^a y 4^a de julio de 2010, 23-12^a de marzo de 2011, 28-11^a de junio de 2012, 1-42^a de marzo y 5-37^a de julio de 2013, 17-33^a, 34^a y 35^a de marzo de 2014 y 24-40^a de abril de 2015.

II. El interesado presentó en el Registro Civil de Talavera de la Reina su solicitud de concesión de nacionalidad española por residencia. El encargado del registro, tras solicitar y obtener informe policial acerca del domicilio efectivo del solicitante, dictó auto declarando la incompetencia territorial del registro por no considerar acreditada la residencia habitual del promotor en su demarcación. Este auto constituye el objeto del presente recurso.

III. La cuestión que se plantea pues es la posible divergencia entre el domicilio real del interesado y el que declaró en su solicitud, toda vez que dicha circunstancia es la que determina la competencia territorial del registro en la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia. Siendo esto así, deben disiparse las dudas posibles sobre su veracidad mediante la práctica de las diligencias de investigación y comprobación que fuesen necesarias y, en ese sentido, el encargado del registro solicitó informe a la policía local del municipio para intentar determinar la realidad del domicilio declarado por el interesado.

IV. Hay que recordar, en relación con el concepto de domicilio y el valor probatorio de los certificados de empadronamiento, que el artículo 16 de la Ley de Bases de Régimen Local, redactado por Ley 4/1996, de 10 de enero, dispone en su número 1 que “El padrón municipal es un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo”. Además se prevé que las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente. Ahora bien, tal carácter se declara y reconoce legalmente para “todos los efectos administrativos”, pero sólo para ellos. Por tanto, la certificación del padrón municipal no está contemplada ni como prueba exclusiva del domicilio, ni como prueba privilegiada del mismo fuera del ámbito administrativo. Por su parte, el concepto de domicilio a efectos civiles, que es

el que se ha de entender invocado por la legislación del Registro Civil, en general, y por el artículo 365 del Reglamento del Registro Civil, en particular, se encuentra definido en el artículo 40 del Código Civil, conforme al cual “el domicilio de las personas naturales es el de su residencia habitual”, esto es, el lugar en el que la persona vive con cierta permanencia y que se presume para el futuro. La prueba de la residencia habitual constitutiva del domicilio en el ámbito civil es libre, salvo que alguna norma especial exija una modalidad de prueba determinada o exima de pruebas complementarias acreditando el domicilio por ciertos medios. Esto es lo que sucede en el ámbito del Registro Civil en dos casos concretos: a) el artículo 336.3, que dispone que “el domicilio de los apátridas se acreditará por certificación municipal o información testifical”; b) el artículo 68 párrafo tercero del Reglamento del Registro Civil, que establece, a los efectos de aplicar la previsión del artículo 16, párrafo segundo, de la Ley del Registro Civil, que el domicilio del progenitor o progenitores legalmente conocidos se justificará “por exhibición de los documentos nacionales de identidad oportunos o, en su defecto, por certificación del padrón municipal”.

V. En consecuencia, ni la prueba de la certificación del padrón municipal es exclusiva ni viene exigida fuera de los singulares casos citados por la legislación del Registro Civil, por lo que revive la regla general en el ámbito civil de que la residencia habitual puede acreditarse a través de cualquier otro medio admitido en derecho, correspondiendo al encargado del registro civil y, en su caso, a los tribunales la valoración libre de los datos que hayan sido aportados: tener en el lugar establecimiento mercantil, tener casa abierta, actas notariales, censo electoral y, en sentido contrario, carecer de casa abierta, informes policiales adversos, ausencia de visados o permisos de residencia -no de mera estancia- respecto de los extranjeros, etc. (vid. sentencias del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1948 y 23 de junio de 1952, entre otras). Téngase en cuenta que el domicilio como lugar de ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones (art. 40 CC) puede fijarse arbitrariamente por los interesados dando lugar a supuestos de fraude de ley, especialmente facilitado por el hecho de que la inscripción en el padrón municipal tiene lugar por simple declaración del interesado sin verificación fehaciente por parte de la Administración de la realidad de tal declaración (cfr. art. 15 de la Ley de Bases de Régimen Local).

VI. Por ello, como se ha dicho, el juez encargado debe, en caso de duda, investigar la veracidad del domicilio y comprobar si en este concurren las notas de estabilidad y permanencia que lo cualifican como residencia habitual a la vista de la fecha del empadronamiento. Ello supone la práctica de las diligencias que sean necesarias para comprobar la realidad del domicilio del interesado que consta en el certificado de su empadronamiento y que, según el resultado, bien declare su falta de competencia para conocer y resolver el expediente si llega a la convicción de la inexactitud del contenido del padrón municipal, bien, en caso afirmativo, continúe la tramitación del expediente con la práctica de las diligencias que procedan. En el presente caso esas diligencias han sido requeridas y practicadas, constando en el expediente un informe de la policía local de T. según el cual, al tiempo de presentación de la solicitud, el

interesado no residía habitualmente en el domicilio declarado. Por otra parte, no se ha incorporado a las actuaciones la primera página (donde habitualmente figura el domicilio del trabajador) del informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en octubre de 2011, de manera que no hay constancia de cuál era el domicilio declarado del trabajador en ese momento, y en el documento de declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2010 (que se presentó en 2011) figura como domicilio del titular la localidad de R. (Toledo). Si a ello se une que el recurrente no ha aportado tampoco ninguna prueba documental complementaria distinta del volante de empadronamiento de la que pudiera deducirse razonablemente la veracidad de sus alegaciones respecto a la residencia efectiva en T., resulta que, atendiendo al concepto de domicilio antes apuntado, no puede darse por acreditado en este caso que el domicilio efectivo del interesado radicara en T. en el momento de la solicitud y debe confirmarse por ello el auto recurrido.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Talavera de la Reina (Toledo).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (44ª)

III.8.2. Competencia en expedientes de nacionalidad por motivos distintos de la residencia.

Corresponde al registro civil del lugar de nacimiento del solicitante, y no al del domicilio, la calificación y la inscripción de la nacionalidad española de origen en virtud de la opción del apartado primero y segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen, por virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, remitido a este centro directivo en trámite de recurso entablado por el interesado contra la resolución del encargado del Registro Civil Consular en Boston, Massachusetts (Estados Unidos de América).

HECHOS

1. Don A. G. É., ciudadano estadounidense, presentó escrito en el Consulado de España en Miami, lugar de su domicilio, a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima y adjuntó, tras previos requerimientos, en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que se hace constar que nació en S. J. (Puerto Rico) el 15 de junio de 1981, hijo de V. A. G. T. y de M. É. H., ambos nacidos en Cuba en 1946 y 1955, respectivamente, casados en 1978, pasaporte estadounidense del promotor y licencia de conducción del Estado de M., certificado de nacimiento puertorriqueño del promotor, certificado

literal de nacimiento del padre del promotor, Sr. G. T., hijo de C. G. C., natural de A. (Cantabria) y de T. T. natural de S. E. (Asturias) con nota de que sus abuelos paternos y maternos son naturales de España, certificado literal de nacimiento española del abuelo paterno del promotor, Sr. G. C., nacido en A. en 1897, hijo de V. G. E., natural de S. y de P. C., natural de la misma localidad, con marginal de recuperación de la nacionalidad española en 1976, certificado del Ministerio del Interior cubano, relativo a la inscripción en el Registro de Extranjeros del Sr. G. C. con nº de expediente, formalizado en L. H., como ciudadano español a los 37 años de edad, es decir en 1934, acta levantada en 1976 conteniendo la declaración de voluntad del abuelo paterno del promotor de recuperar la nacionalidad española, en ella manifiesta que perdió la nacionalidad española por adquirir voluntariamente la nacionalidad cubana en 1937, certificado no literal de nacimiento de la madre del promotor, certificado no literal de matrimonio de los padres del promotor, celebrado en Cuba en 1978 y certificado eclesiástico del mismo matrimonio celebrado en A. en el mismo año 1978, certificación de partida de bautismo española del promotor, bautizado en A. en 1982, certificado literal de nacimiento español de la abuela paterna del promotor.

Posteriormente el Registro Civil Consular de Miami remitió la documentación al de Nueva York al haber trasladado el promotor su domicilio a esa demarcación consular y, tras otro desplazamiento del promotor el expediente tuvo entrada en el Registro Civil Consular de Boston.

2. El encargado del Registro Civil Consular en Boston, mediante resolución de fecha 6 de abril de 2015, denegó lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su instrucción de 4 de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia, al considerar que no concurrían en él los requisitos para la aplicación de la Ley 52/2007.

3. Notificado el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, alegando lo que estima pertinente en apoyo de su pretensión y solicitando nuevamente la inscripción.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe en el sentido de confirmar el auto impugnado y el encargado del Registro Civil Consular en Boston emitió su informe preceptivo ratificándose en el auto dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; los artículos 15, 16, 23 y 64 de la Ley del Registro Civil; 16, 66, 68, 85, 220 y siguientes, 232 y 358 del Reglamento del Registro Civil; 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; las instrucciones de 20 de marzo de 1991 y de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones de 29-2ª de octubre de 1999; 13-1ª de febrero y 22 de marzo de 2003; 15-3ª de octubre de 2008; 13-6ª de abril de 2009; 1-6ª de diciembre de 2010.

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como español de origen al nacido en 1981 en S. J. (Puerto Rico), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 y 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de diciembre de 2011 en el modelo normalizado del anexo I de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del registro civil se dictó auto el 6 de abril de 2015, denegando lo solicitado.

III. El auto impugnado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no reunía los requisitos para la aplicación de dicha norma al no quedar acreditada la nacionalidad española de ninguno de sus progenitores, posición que el ministerio fiscal comparte en su informe.

No es posible no obstante a la vista de las actuaciones examinar el fondo del asunto, pues existe un problema previo de competencia. En efecto, como establece la directriz segunda de la instrucción de 4 de noviembre de 2008, la solicitud de opción formalizada en el modelo correspondiente se presentará ante el encargado del registro civil español -consular o municipal- correspondiente al lugar del domicilio del interesado. Después de levantar éste acta por duplicado, remitirá uno de los ejemplares al registro civil español consular o municipal correspondiente al lugar del nacimiento que procederá a la práctica de la inscripción principal de nacimiento del interesado y de la inscripción marginal de su nacionalidad española de origen. Este régimen extiende para esta opción, por lo tanto, el procedimiento general previsto en los artículos 226 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (ver en especial el artículo 229).

IV. En el presente caso, en el que el nacimiento que se pretende inscribir acaeció en S. J., Puerto Rico, la competencia para calificar el acta de opción y practicar la inscripción, si procediese, corresponde como se ha dicho al encargado del registro civil consular en cuya demarcación se encuentre el lugar de nacimiento (artículo 16.1 de la Ley del Registro Civil) y no al del domicilio, Boston, que se extralimitó en sus competencias al adoptar el auto recurrido. Procede por tanto declarar la nulidad del mismo por aplicación de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de competencia territorial y de fuero personal de las personas físicas (cfr. art. 50 LEC 1/2000, de 7 de enero), aplicables por la remisión que realiza el artículo 16 de la Ley del registro civil, que contiene un llamamiento supletorio a las normas de jurisdicción voluntaria.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado declarar la nulidad del auto apelado y retrotraer las

actuaciones al momento de la recepción de las mismas por el Consulado General de España en Boston a fin de que se dé traslado de ellas al registro civil competente.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Boston (EEUU).

III.8.3 EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD, ALCANCE DE LA CALIFICACIÓN, ART. 27 LRC

Resolución de 7 de octubre de 2016 (28ª)

III.8.3. Alcance de la calificación del encargado del registro civil. Art. 27 LRC

1º. La competencia del encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento para calificar una resolución de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción dictada por el encargado del registro civil del domicilio está limitada por el art. 27 LRC.

2º. En tales casos, si hay discrepancia con lo resuelto por el órgano competente, el ministerio fiscal puede instar la incoación de expediente para la cancelación del asiento.

3º. No es inscribible el nacimiento porque no se acreditan los datos necesarios para practicar la inscripción.

En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tudela (Navarra), don M. O. H. (E. M. F.), nacido el 14 de abril de 1971 en A. (Sáhara Occidental), solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 17 de julio de 2012, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* del interesado, por aplicación retroactiva del artº 17.3º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

2. Tramitado expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, se remiten las actuaciones al Registro Civil Central.

3. Notificado el ministerio fiscal emite informe desfavorable en fecha 06 de octubre de 2014, toda vez que, a la vista de la documentación unida a las actuaciones, existen dudas respecto de la identidad del solicitante, ni su filiación respecto de un nacional

español, sin perjuicio de que se anote el auto de 17 de julio de 2012 (artº 340 RRC), interesando se inicie expediente de cancelación de la anotación referente a la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción al inscrito, por no ser aplicación en este supuesto el artículo 17.1 del Código Civil, al no haber ocurrido el nacimiento en España ni afectar a ningún ciudadano español.

4. Por auto de fecha 25 de noviembre de 2014 dictado por el encargado del Registro Civil Central se desestima la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, toda vez que no resultan acreditados diversos aspectos del hecho imponible: filiación, fecha y lugar de nacimiento ni la supuesta concordancia de su identidad con ciudadano saharauí, acordándose la práctica de la anotación soporte de nacimiento para la sucesiva inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción, haciéndose constar que a instancias del representante del ministerio fiscal se incoa expediente de cancelación de la anotación soporte practicada.

5. Notificada la resolución, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del auto apelado y acordando la inscripción de nacimiento del interesado, con marginal de nacionalidad española de origen con valor de simple presunción.

6. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación y el encargado del Registro Civil Central se ratifica en el auto dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 27, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316, 335, 338 y 348 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RCC); la Circular de 29 de octubre de 1980, la instrucción de 7 de octubre de 1988, y las resoluciones, entre otras, 5-1ª y 14 de enero, 28 de abril, 31-2ª de mayo y 14-4ª de octubre de 1999; 26-1ª de abril de 2001; 10-6ª de septiembre de 2002; 24 de septiembre de 2005; 13-3ª de enero, 3-1ª de abril y 25-4ª de julio de 2006; 17-5ª de mayo de 2007; 3-2ª de enero, 14-5ª de abril, 22-3ª de octubre y 11-8ª de noviembre de 2008; 8-4ª de enero de 2009 y 10-95ª de abril de 2012.

II. El promotor, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Tudela (Navarra), solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 17 de julio de 2012. Por auto de 25 de noviembre de 2014 el encargado del Registro Civil Central acordó desestimar la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, toda vez que no resultan acreditados diversos aspectos del hecho imponible. Contra este auto se interpuso el recurso ahora examinado.

III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del registro civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho

expediente, la resolución firme del encargado –que da lugar a una anotación al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC)– ha de ser calificada por el encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a la práctica de la anotación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por el artículo 27 LRC a la evaluación de “(...) la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio registro”, no estando facultado el encargado para volver a enjuiciar el fondo del asunto. De manera que debe practicarse la anotación marginal en el Registro Civil Central, sin perjuicio, dada la disconformidad del ministerio fiscal con la declaración presuntiva de nacionalidad acordada por el registro civil del domicilio, de la necesidad de continuar el procedimiento iniciado para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española y proceder, en su caso, a la cancelación de los asientos practicados. Al mismo tiempo, deberá anotarse también marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del asiento (art. 38.1º LRC).

IV. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado, cabe señalar que son inscribibles en el registro civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC); siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que se refiere el artículo 95-5º de la Ley del Registro Civil, cuya tramitación se desarrolla en los artículos 311 a 316 del reglamento.

En este caso la inscripción interesada afecta a un ciudadano de origen saharauí cuya nacionalidad española con valor de simple presunción ha sido declarada por el registro civil de su domicilio, pero no resultan acreditados datos esenciales para practicar la inscripción, en tanto que, a la vista de la documentación aportada al expediente, no queda acreditada la identidad del solicitante, toda vez que se ha aportado recibo de MINURSO a nombre de M. H. , nacido en 1971 en D. (Sáhara Occidental); certificado de familia cheránico en el que figura que M. nació en 1971, hijo de H. U. E. M.; certificado de familia cheránico de M. nacido en 1971, hijo de H. U. E. U. M.; pasaporte mauritano y permiso de residencia a nombre de M. O. H., nacido en 1971 en K. (Mauritania), certificados expedidos por la Delegación Saharaí para Navarra, en los que consta que M. O. E. nació el 14 de abril de 1971 en A., certificado de nacimiento expedido por el Reino de Marruecos, en el que se indica que M. B. nació el 14 de abril de 1971 en A. y certificado de concordancia de nombres, expedido por el Reino de Marruecos, entre M. O. H., nacido en 1971 en K. y M. B. nació el 14 de abril de 1971 en E.A.

Por ello, a la vista de la documentación aportada, no se acreditan las circunstancias esenciales que deben constar en la inscripción y que, en defecto de certificado auténtico, deberán demostrarse por otros medios supletorios de los que se mencionan en los artículos correspondientes al procedimiento de inscripción fuera de plazo del Reglamento del Registro Civil y en la Circular de 29 de octubre de 1980. En

consecuencia, no es posible la inscripción de unos hechos, de los cuales la inscripción de nacimiento da fe, que no están suficientemente acreditados.

V. Por lo que se refiere a la orden del traslado del informe del ministerio fiscal al registro civil del domicilio a efectos de instar un nuevo expediente en el que se declare que al interesado no le corresponde la nacionalidad española, extremo también contenido en la providencia recurrida, es un principio básico de la legislación registral civil (cfr. Arts. 24 y 26 LRC y 94 RRC) el de procurar lograr la mayor concordancia posible entre el Registro Civil y la realidad extrarregistral.

En desarrollo de este principio se ha indicado repetidamente por la doctrina de este centro directivo que, mientras subsista ese interés público de concordancia, no juega en el ámbito del registro civil el principio de autoridad de cosa juzgada, por lo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión ya decidida. Por eso ha de ser posible que, de oficio o por iniciativa del ministerio fiscal o de cualquier interesado o autoridad con competencias conexas con la materia y con intervención en todo caso del ministerio público, se inicie un nuevo expediente para declarar con valor de presunción que a los interesados les corresponde o no les corresponde la nacionalidad española.

La nueva declaración recaída en tal expediente, en caso de ser negativa, ha de tener acceso al registro civil para cancelar en su virtud la anotación preventiva practicada. No es obstáculo para ello que, con arreglo al artículo 92 de la LRR, y a salvo las excepciones previstas en los tres artículos siguientes, las inscripciones solo puedan rectificarse por sentencia firme en juicio ordinario, porque en las anotaciones, en congruencia con su menor eficacia y su valor meramente informativo (cfr. Arts. 38 LRC y 145 RRC), rige un principio distinto. En efecto, el artículo 147 del RRC establece una regla de aplicación preferente, permitiendo que las anotaciones puedan ser rectificadas y canceladas en virtud de expediente gubernativo en el que se acredite la inexactitud, en todo caso con notificación formal a los interesados o sus representantes legales, como exige imperativamente el párrafo primero del artículo 349 RRC. Por todo ello, en aras del principio de concordancia entre el registro civil y la realidad, el ministerio fiscal puede promover de oficio un nuevo expediente de declaración sobre la nacionalidad española de la interesada.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Desestimar la pretensión de inscripción fuera de plazo por falta de acreditación de datos esenciales para practicarla.

2º. Continuar la tramitación del expediente incoado a instancia del ministerio fiscal.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 7 de octubre de 2016 (29ª)

III.8.3. Alcance de la calificación del encargado del registro civil. Art. 27 LRC

1º. *La competencia del encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento para calificar una resolución de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción dictada por el encargado del registro civil del domicilio está limitada por el art. 27 LRC.*

2º. *En tales casos, si hay discrepancia con lo resuelto por el órgano competente, el ministerio fiscal puede instar la incoación de expediente para la cancelación del asiento.*

3º. *No es inscribible el nacimiento porque no se acreditan los datos necesarios para practicar la inscripción.*

En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tudela (Navarra), don D. T., nacido el 23 de noviembre de 1980 en A. (Sáhara Occidental), solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 24 de septiembre de 2013, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* del interesado, por aplicación retroactiva del artº 17.3º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

2. Tramitado expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, se remiten las actuaciones al Registro Civil Central.

3. Notificado el ministerio fiscal emite informe desfavorable en fecha 11 de septiembre de 2014, oponiéndose a lo solicitado e interesando que se inicie nuevo expediente para declarar que al promotor no le corresponde la nacionalidad española.

4. Por auto de fecha 23 de septiembre de 2014 dictado por el encargado del Registro Civil Central se desestima la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, toda vez que no resultan acreditados diversos aspectos del hecho imponible: filiación, fecha y lugar de nacimiento ni la supuesta concordancia de su identidad con ciudadano saharauí.

5. Notificada la resolución, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del auto apelado y acordando la inscripción de nacimiento del interesado, con marginal de nacionalidad española de origen con valor de simple presunción.

6. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación y el encargado del Registro Civil Central se ratifica en el auto dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 27, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316, 335, 338 y 348 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RCC); la Circular de 29 de octubre de 1980, la instrucción de 7 de octubre de 1988, y las resoluciones, entre otras, 5-1ª y 14 de enero, 28 de abril, 31-2ª de mayo y 14-4ª de octubre de 1999; 26-1ª de abril de 2001; 10-6ª de septiembre de 2002; 24 de septiembre de 2005; 13-3ª de enero, 3-1ª de abril y 25-4ª de julio de 2006; 17-5ª de mayo de 2007; 3-2ª de enero, 14-5ª de abril, 22-3ª de octubre y 11-8ª de noviembre de 2008; 8-4ª de enero de 2009 y 10-95ª de abril de 2012.

II. El promotor, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Tudela (Navarra), solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 24 de septiembre de 2013. Por auto de 23 de septiembre de 2014 el encargado del Registro Civil Central acordó desestimar la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, toda vez que no resultan acreditados diversos aspectos del hecho imponible. Contra este auto se interpuso el recurso ahora examinado.

III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del registro civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho expediente, la resolución firme del encargado –que da lugar a una anotación al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC)– ha de ser calificada por el encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a la práctica de la anotación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por el artículo 27 LRC a la evaluación de “(...) la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio registro”, no estando facultado el encargado para volver a enjuiciar el fondo del asunto. De manera que debe practicarse la anotación marginal en el Registro Civil Central, sin perjuicio, dada la disconformidad del ministerio fiscal con la declaración presuntiva de nacionalidad acordada por el registro civil del domicilio, de la necesidad de continuar el procedimiento iniciado para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española y proceder, en su caso, a la cancelación de los asientos practicados. Al mismo tiempo, deberá anotarse también marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del asiento (art. 38.1º LRC).

IV. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado, cabe señalar que son inscribibles en el registro civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC); siendo la vía registral

apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que se refiere el artículo 95-5º de la Ley del Registro Civil, cuya tramitación se desarrolla en los artículos 311 a 316 del reglamento.

En este caso la inscripción interesada afecta a un ciudadano de origen saharauí cuya nacionalidad española con valor de simple presunción ha sido declarada por el registro civil de su domicilio, pero no resultan acreditados datos esenciales para practicar la inscripción, toda vez que en la copia de nacimiento en extracto aportado, expedido por el Reino de Marruecos, se indica que el apellido del promotor es T., sin que corresponda con el apellido de ninguno de sus supuestos progenitores y, por otra parte, de las informaciones testificales practicadas no cabe deducir que los padres sean lo que constan en la documentación aportada, toda vez que los comparecientes que testifican no indican ni fecha, lugar de nacimiento, ni nombre de los padres del interesado, sino que tan solo conocen al promotor del expediente desde hace varios años.

Por ello, a la vista de la documentación aportada, no se acreditan las circunstancias esenciales que deben constar en la inscripción y que, en defecto de certificado auténtico, deberán demostrarse por otros medios supletorios de los que se mencionan en los artículos correspondientes al procedimiento de inscripción fuera de plazo del Reglamento del Registro Civil y en la Circular de 29 de octubre de 1980. En consecuencia, no es posible la inscripción de unos hechos, de los cuales la inscripción de nacimiento da fe, que no están suficientemente acreditados.

V. Por lo que se refiere a la orden del traslado del informe del ministerio fiscal al registro civil del domicilio a efectos de instar un nuevo expediente en el que se declare que al interesado no le corresponde la nacionalidad española, extremo también contenido en la providencia recurrida, es un principio básico de la legislación registral civil (cfr. Arts. 24 y 26 LRC y 94 RRC) el de procurar lograr la mayor concordancia posible entre el Registro Civil y la realidad extrarregistral.

En desarrollo de este principio se ha indicado repetidamente por la doctrina de este centro directivo que, mientras subsista ese interés público de concordancia, no juega en el ámbito del registro civil el principio de autoridad de cosa juzgada, por lo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión ya decidida. Por eso ha de ser posible que, de oficio o por iniciativa del ministerio fiscal o de cualquier interesado o autoridad con competencias conexas con la materia y con intervención en todo caso del ministerio público, se inicie un nuevo expediente para declarar con valor de presunción que a los interesados les corresponde o no les corresponde la nacionalidad española.

La nueva declaración recaída en tal expediente, en caso de ser negativa, ha de tener acceso al registro civil para cancelar en su virtud la anotación preventiva practicada. No es obstáculo para ello que, con arreglo al artículo 92 de la LRR, y a salvo las excepciones previstas en los tres artículos siguientes, las inscripciones solo puedan rectificarse por sentencia firme en juicio ordinario, porque en las anotaciones, en congruencia con su menor eficacia y su valor meramente informativo (cfr. Arts. 38 LRC y 145 RRC), rige un principio distinto. En efecto, el artículo 147 del RRC establece una

regla de aplicación preferente, permitiendo que las anotaciones puedan ser rectificadas y canceladas en virtud de expediente gubernativo en el que se acredite la inexactitud, en todo caso con notificación formal a los interesados o sus representantes legales, como exige imperativamente el párrafo primero del artículo 349 RRC. Por todo ello, en aras del principio de concordancia entre el registro civil y la realidad, el ministerio fiscal puede promover de oficio un nuevo expediente de declaración sobre la nacionalidad española de la interesada.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1º. Desestimar la pretensión de inscripción fuera de plazo por falta de acreditación de datos esenciales para practicarla.
- 2º. Estimar parcialmente el recurso y practicar anotación soporte de nacimiento y anotación de nacionalidad con valor de simple presunción.
- 3º. Continuar la tramitación del expediente incoado a instancia del ministerio fiscal y anotar marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del registro.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 7 de octubre de 2016 (32ª)

III.8.3. Alcance de la calificación del encargado del registro civil. Art. 27 LRC

1º. La competencia del encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento para calificar una resolución de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción dictada por el encargado del registro civil del domicilio está limitada por el art. 27 LRC.

2º. En tales casos, si hay discrepancia con lo resuelto por el órgano competente, el ministerio fiscal puede instar la incoación de expediente para la cancelación del asiento.

3º. No es inscribible el nacimiento porque no se acreditan los datos necesarios para practicar la inscripción.

En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tudela (Navarra), don H. B., nacido en 1975 E. A. (Sáhara Occidental), solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 24 de julio de 2012, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* del interesado, por aplicación retroactiva del artº 17.3º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.
2. Tramitado expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, se remiten las actuaciones al Registro Civil Central.
3. Notificado el ministerio fiscal emite informe desfavorable en fecha 27 de octubre de 2014, indicando que no resulta de aplicación el artº 17.1.c) del Código Civil dado que el interesado no ha nacido en España, ni tampoco se ha acreditado la filiación respecto de un nacional español. Así, el promotor alega que es hijo de M. A. A., documentado con el antiguo DNI saharauí y pasaporte español. Sin embargo, en el certificado de nacimiento del promotor del registro civil marroquí, constan los padres del inscrito de nacionalidad marroquí y el padre fallecido (redactada el 02 de enero de 1978 por declaración de la madre) y se ha aportado al expediente certificado de individualidad de M. A. A. y M. B., en el que se refleja que éste falleció en el año 2011, interesando se inicie expediente para la cancelación de la anotación referente a la nacionalidad española del interesado.
4. Por auto de fecha 25 de noviembre de 2014 dictado por el encargado del Registro Civil Central se desestima la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, toda vez que no resultan acreditados diversos aspectos del hecho imponible: filiación, fecha y lugar de nacimiento ni la supuesta concordancia de su identidad con ciudadano saharauí, acordándose la práctica de la anotación soporte de nacimiento para la sucesiva inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción, haciéndose constar que a instancias del representante del ministerio fiscal se incoa expediente de cancelación de la anotación soporte practicada.
5. Notificada la resolución, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del auto apelado y acordando la inscripción de nacimiento del interesado, con marginal de nacionalidad española de origen con valor de simple presunción.
6. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación y el encargado del Registro Civil Central se ratifica en el auto dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 27, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316, 335, 338 y 348 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RCC); la Circular de 29 de octubre de 1980, la instrucción de 7 de octubre de 1988, y las resoluciones, entre otras, 5-1ª y 14 de enero, 28 de abril, 31-2ª de mayo y 14-4ª de octubre de 1999; 26-1ª de abril de 2001; 10-6ª de septiembre de 2002; 24 de septiembre de 2005; 13-3ª de enero, 3-1ª de abril y 25-4ª de julio de 2006; 17-5ª de mayo de 2007; 3-2ª de enero, 14-5ª de abril, 22-3ª de octubre y 11-8ª de noviembre de 2008; 8-4ª de enero de 2009 y 10-95ª de abril de 2012.

II. El promotor, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Tudela (Navarra), solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 24 de julio de 2012. Por auto de 25 de noviembre de 2014 el encargado del Registro Civil Central acordó desestimar la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, toda vez que no resultan acreditados diversos aspectos del hecho imponible. Contra este auto se interpuso el recurso ahora examinado.

III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del registro civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho expediente, la resolución firme del encargado –que da lugar a una anotación al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC)– ha de ser calificada por el encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a la práctica de la anotación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por el artículo 27 LRC a la evaluación de “(...) la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio registro”, no estando facultado el encargado para volver a enjuiciar el fondo del asunto. De manera que debe practicarse la anotación marginal en el Registro Civil Central, sin perjuicio, dada la disconformidad del ministerio fiscal con la declaración presuntiva de nacionalidad acordada por el registro civil del domicilio, de la necesidad de continuar el procedimiento iniciado para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española y proceder, en su caso, a la cancelación de los asientos practicados. Al mismo tiempo, deberá anotarse también marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del asiento (art. 38.1º LRC).

IV. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado, cabe señalar que son inscribibles en el registro civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC); siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que se refiere el artículo 95-5º de la Ley del Registro Civil, cuya tramitación se desarrolla en los artículos 311 a 316 del reglamento.

En este caso la inscripción interesada afecta a un ciudadano de origen saharauí cuya nacionalidad española con valor de simple presunción ha sido declarada por el registro civil de su domicilio, pero no resultan acreditados datos esenciales para practicar la inscripción, en tanto que el interesado alega ser hijo de M. A. A., documentado con DNI bilingüe y pasaporte español antiguo, constando en el certificado de nacimiento del promotor aportado al expediente y expedido por el Reino de Marruecos, que el padre se encontraba fallecido. Dicha certificación se inscribió el 02 de enero de 1978, por declaración de la madre del interesado. Sin embargo, en el certificado de individualidad del progenitor expedido por el Reino de Marruecos y aportado al expediente, se indica la identidad entre M. Ahmed L. y M. B., fallecido en el año 2011.

Por otra parte, de la información testifical practicada no puede deducirse la filiación del promotor, toda vez que los testigos únicamente manifiestan que conocen al interesado desde hace muchos años, que ha nacido y vivido en el antiguo territorio español y saben que sus padres tenían documentación española, que conocen que desde hace tiempo está residiendo en España, pero no lo saben con exactitud, sin mencionar en ningún momento cómo se llaman los padres, fecha de nacimiento, lugar o hijos que tienen.

Por ello, a la vista de la documentación aportada, no se acreditan las circunstancias esenciales que deben constar en la inscripción y que, en defecto de certificado auténtico, deberán demostrarse por otros medios supletorios de los que se mencionan en los artículos correspondientes al procedimiento de inscripción fuera de plazo del Reglamento del Registro Civil y en la Circular de 29 de octubre de 1980. En consecuencia, no es posible la inscripción de unos hechos, de los cuales la inscripción de nacimiento da fe, que no están suficientemente acreditados.

V. Por lo que se refiere a la orden del traslado del informe del ministerio fiscal al registro civil del domicilio a efectos de instar un nuevo expediente en el que se declare que al interesado no le corresponde la nacionalidad española, extremo también contenido en la providencia recurrida, es un principio básico de la legislación registral civil (cfr. Arts. 24 y 26 LRC y 94 RRC) el de procurar lograr la mayor concordancia posible entre el registro civil y la realidad extrarregistral.

En desarrollo de este principio se ha indicado repetidamente por la doctrina de este centro directivo que, mientras subsista ese interés público de concordancia, no juega en el ámbito del registro civil el principio de autoridad de cosa juzgada, por lo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión ya decidida. Por eso ha de ser posible que, de oficio o por iniciativa del ministerio fiscal o de cualquier interesado o autoridad con competencias conexas con la materia y con intervención en todo caso del ministerio público, se inicie un nuevo expediente para declarar con valor de presunción que a los interesados les corresponde o no les corresponde la nacionalidad española.

La nueva declaración recaída en tal expediente, en caso de ser negativa, ha de tener acceso al registro civil para cancelar en su virtud la anotación preventiva practicada. No es obstáculo para ello que, con arreglo al artículo 92 de la LRR, y a salvo las

excepciones previstas en los tres artículos siguientes, las inscripciones solo puedan rectificarse por sentencia firme en juicio ordinario, porque en las anotaciones, en congruencia con su menor eficacia y su valor meramente informativo (cfr. Arts. 38 LRC y 145 RRC), rige un principio distinto. En efecto, el artículo 147 del RRC establece una regla de aplicación preferente, permitiendo que las anotaciones puedan ser rectificadas y canceladas en virtud de expediente gubernativo en el que se acredite la inexactitud, en todo caso con notificación formal a los interesados o sus representantes legales, como exige imperativamente el párrafo primero del artículo 349 RRC. Por todo ello, en aras del principio de concordancia entre el registro civil y la realidad, el ministerio fiscal puede promover de oficio un nuevo expediente de declaración sobre la nacionalidad española de la interesada.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Desestimar la pretensión de inscripción fuera de plazo por falta de acreditación de datos esenciales para practicarla.

2º. Continuar la tramitación del expediente incoado a instancia del ministerio fiscal.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 7 de octubre de 2016 (34ª)

III.8.3. Alcance de la calificación del encargado del registro civil. Art. 27 LRC

1º. La competencia del encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento para calificar una resolución de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción dictada por el encargado del registro civil del domicilio está limitada por el art. 27 LRC.

2º. En tales casos, si hay discrepancia con lo resuelto por el órgano competente, el ministerio fiscal puede instar la incoación de expediente para la cancelación del asiento.

3º. No es inscribible el nacimiento porque no se acreditan los datos necesarios para practicar la inscripción.

En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Málaga, don M. B. M., nacido en O. (Argelia) el 28 de noviembre de 1969, de acuerdo con la documentación aportada

al expediente, solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Aportó la siguiente documentación: volante de empadronamiento individual, expedido por el Ayuntamiento de M.; pasaporte argelino; permiso de residencia temporal; certificado de familia, expedido por el Juzgado Cheránico de Aaiún, en el que son ilegibles los datos del interesado; tarjeta del Instituto Nacional de Previsión del progenitor del solicitante, don B. M. A.; DNI bilingüe del progenitor; certificado negativo de inscripción del promotor en los Libros Cheránicos; DNI bilingüe de la madre del interesado, D^a J. M. S.; certificados expedidos por la Unidad de Documentación de Españoles y Archivos del Ministerio del Interior, en relación con los documentos saharuis de los progenitores, que en la actualidad carecen de validez y copia de libro de familia de los progenitores, en el que no aparece reflejada la fecha de nacimiento del interesado, ni su segundo apellido.

2. Mediante auto de fecha 17 de agosto de 2011, el encargado del Registro Civil de Málaga, acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen del interesado, por consolidación de la misma.

3. Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central, se dicta providencia interesando se instruya expediente gubernativo ante el registro civil del domicilio del promotor, a fin de acreditar sus datos de nacimiento y filiación.

Atendiendo al requerimiento, el interesado aporta ante el Registro Civil de Logroño copias de la siguiente documentación que ya se encontraba en su expediente: tarjeta de familia numerosa de sus padres; DNI bilingüe de su madre; tarjeta del Instituto Nacional de Previsión de sus padres; libro de familia de sus padres y de certificación de familia. Asimismo aporta, certificado de nacionalidad expedido por la República Árabe Saharaui Democrática, así como copia de certificado de su matrimonio con D^a M. A. A.; copia de la tarjeta de identidad de su esposa y copias de los certificados de nacimiento de las hijas del promotor.

4. La información testifical tiene lugar el 23 de junio de 2014 en el Registro Civil de Logroño y con fecha 07 de julio de 2014 se emite informe por el Instituto de Medicina Legal de La Rioja en el que se indica que, la exploración realizada al promotor es compatible con su edad y, por tanto, con su fecha de nacimiento así como con su sexo.

5. Instruido el expediente, se remiten de nuevo las actuaciones al Registro Civil Central. Solicitado informe al ministerio fiscal, se emite el 22 de diciembre de 2014, en el que se indica que, por la documentación aportada, existen dudas respecto a la filiación del promotor, ya que en el libro de familia aportado, que presenta irregularidades y está muy deteriorado, no consta su año de nacimiento, por lo que considera que no procede la inscripción solicitada, sin perjuicio de que se anote el auto referenciado, e interesando que se inicie expediente de cancelación de la anotación referente a la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del interesado.

6. El magistrado-juez encargado del Registro Civil Central con fecha 29 de enero de 2015 dicta auto por el que se deniega la inscripción de nacimiento con marginal de

nacionalidad española con valor de simple presunción, toda vez no encontrarse acreditados diversos aspectos esenciales del hecho inscribible, tales como filiación, fecha y lugar de nacimiento y la supuesta concordancia de su identidad con ciudadano saharauí, comunicándose al registro civil del domicilio de la parte promotora a los efectos establecidos en el informe del representante del ministerio fiscal y acordándose la práctica de la anotación de nacimiento soporte para la sucesiva inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción.

7. Notificada la resolución al ministerio fiscal y al interesado, éste interpuso recurso contra el auto emitido, solicitando se dicte resolución por la que se revoque el auto impugnado y se acuerde la inscripción de nacimiento fuera de plazo y consecuentemente la nacionalidad española con valor de simple presunción.

8. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación y el encargado del Registro Civil Central se ratifica en el acuerdo dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 27, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316, 335, 338 y 348 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RCC); la Circular de 29 de octubre de 1980, la instrucción de 7 de octubre de 1988, y las resoluciones, entre otras, 5-1ª y 14 de enero, 28 de abril, 31-2ª de mayo y 14-4ª de octubre de 1999; 26-1ª de abril de 2001; 10-6ª de septiembre de 2002; 24 de septiembre de 2005; 13-3ª de enero, 3-1ª de abril y 25-4ª de julio de 2006; 17-5ª de mayo de 2007; 3-2ª de enero, 14-5ª de abril, 22-3ª de octubre y 11-8ª de noviembre de 2008; 8-4ª de enero de 2009 y 10-95ª de abril de 2012.

II. El promotor, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Málaga, solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 17 de agosto de 2011. Por auto de 29 de enero de 2015, el encargado del Registro Civil Central acordó denegar la inscripción del nacimiento con marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción del promotor, toda vez no estimar acreditados diversos aspectos esenciales del hecho inscribible: filiación, fecha y lugar de nacimiento, acordándose la práctica de la anotación de nacimiento soporte para la sucesiva inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción. Contra este auto se interpuso el recurso ahora examinado.

III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del registro civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho expediente, la resolución firme del encargado –que da lugar a una anotación al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC)– ha de ser calificada por el encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a

la práctica de la anotación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por el artículo 27 LRC a la evaluación de "(...) la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio Registro", no estando facultado el encargado para volver a enjuiciar el fondo del asunto. De manera que debe practicarse la anotación marginal en el Registro Civil Central, sin perjuicio, dada la disconformidad del ministerio fiscal con la declaración presuntiva de nacionalidad acordada por el registro civil del domicilio, de la necesidad de continuar el procedimiento iniciado para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española y proceder, en su caso, a la cancelación de los asientos practicados. Al mismo tiempo, deberá anotarse también marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del asiento (art. 38.1º LRC).

IV. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado, cabe señalar que son inscribibles en el registro civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC); siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que se refiere el artículo 95-5º de la Ley del Registro Civil, cuya tramitación se desarrolla en los artículos 311 a 316 del reglamento.

En este caso la inscripción interesada afecta a un ciudadano de origen saharauí cuya nacionalidad española con valor de simple presunción ha sido declarada por el registro civil de su domicilio, pero no resultan acreditados datos esenciales (filiación, fecha y lugar de nacimiento) para practicar la inscripción, en tanto que, en el libro de familia del Gobierno General del Sáhara aportado al expediente, aparece como segundo hijo como M u. B., sin constar segundo apellido, año de nacimiento y filiación materna, por lo que el estado en el que se encuentra no ofrece garantías suficientes para acreditar los hechos alegados. Por otra parte, en el expediente instruido al efecto, no se ha oído a los padres del interesado, ni consta certificado de defunción de los mismos.

Por ello, el documento aportado en prueba del nacimiento no acredita las circunstancias esenciales que deben constar en la inscripción y que, en defecto de certificado auténtico, deberán demostrarse por otros medios supletorios de los que se mencionan en los artículos correspondientes al procedimiento de inscripción fuera de plazo del Reglamento del Registro Civil y en la Circular de 29 de octubre de 1980. En consecuencia, no es posible la inscripción de unos hechos, de los cuales la inscripción de nacimiento da fe, que no están suficientemente acreditados.

V. Por lo que se refiere a la orden del traslado del informe del ministerio fiscal al registro civil del domicilio a efectos de instar un nuevo expediente en el que se declare que al interesado no le corresponde la nacionalidad española, extremo también contenido en la resolución recurrida, es un principio básico de la legislación registral civil (cfr. Arts. 24 y 26 LRC y 94 RRC) el de procurar lograr la mayor concordancia posible entre el registro civil y la realidad extrarregistral.

En desarrollo de este principio se ha indicado repetidamente por la doctrina de este centro directivo que, mientras subsista ese interés público de concordancia, no juega en el ámbito del registro civil el principio de autoridad de cosa juzgada, por lo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión ya decidida. Por eso ha de ser posible que, de oficio o por iniciativa del ministerio fiscal o de cualquier interesado o autoridad con competencias conexas con la materia y con intervención en todo caso del ministerio público, se inicie un nuevo expediente para declarar con valor de presunción que a los interesados les corresponde o no les corresponde la nacionalidad española.

La nueva declaración recaída en tal expediente, en caso de ser negativa, ha de tener acceso al registro civil para cancelar en su virtud la anotación preventiva practicada. No es obstáculo para ello que, con arreglo al artículo 92 de la LRR, y a salvo las excepciones previstas en los tres artículos siguientes, las inscripciones solo puedan rectificarse por sentencia firme en juicio ordinario, porque en las anotaciones, en congruencia con su menor eficacia y su valor meramente informativo (cfr. Arts. 38 LRC y 145 RRC), rige un principio distinto. En efecto, el artículo 147 del RRC establece una regla de aplicación preferente, permitiendo que las anotaciones puedan ser rectificadas y canceladas en virtud de expediente gubernativo en el que se acredite la inexactitud, en todo caso con notificación formal a los interesados o sus representantes legales, como exige imperativamente el párrafo primero del artículo 349 RRC. Por todo ello, en aras del principio de concordancia entre el registro civil y la realidad, el ministerio fiscal puede promover de oficio un nuevo expediente de declaración sobre la nacionalidad española de la interesada.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Desestimar la pretensión de inscripción fuera de plazo por falta de acreditación de datos esenciales para practicarla.

2º. Continuar la tramitación del expediente incoado a instancia del ministerio fiscal y anotar marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del registro.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 14 de octubre de 2016 (31ª)

III.8.3. Alcance de la calificación del encargado del Registro Civil. Art. 27 LRC

1º. La competencia del encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento para calificar una resolución de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción dictada por el encargado del registro civil del domicilio está limitada por el art. 27 LRC.

2º. *En tales casos, si hay discrepancia con lo resuelto por el órgano competente, el ministerio fiscal puede instar la incoación de expediente para la cancelación del asiento.*

3º. *No es inscribible el nacimiento porque no se acreditan los datos necesarios para practicar la inscripción.*

En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Villena (Alicante), Dª F. El G. M.-F. M. nacida el 07 de marzo de 1984 en S. (Argelia), de acuerdo con su pasaporte argelino y el 07 de marzo de 1983 en M. (Sáhara Occidental), de acuerdo con el certificado expedido por la Delegación Saharai para la Comunidad Valenciana, solicitó la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 30 de enero de 2008, la encargada del Registro Civil de Villena (Alicante), acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de la interesada, por aplicación del artº 17.1.d) del Código Civil.

2. Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central, sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo, se solicita informe al ministerio fiscal, que es emitido en fecha 10 de diciembre de 2010, indicando que a la interesada no le son de aplicación los artículos 17.3 y 18 del Código Civil por no concurrir los requisitos legalmente exigidos, interesando se inicie nuevo expediente para declarar con valor de simple presunción, previo traslado a la promotora, la no declaración de la nacionalidad española.

3. El magistrado-juez encargado del Registro Civil Central con fecha 23 de marzo de 2011 dicta auto por el que se deniega la inscripción de nacimiento de la promotora, por cuanto se concedió la nacionalidad española con valor de simple presunción sin reunir los requisitos legalmente establecidos.

4. Notificada la resolución al ministerio fiscal y la interesada, ésta interpuso recurso contra el auto emitido, solicitando se dicte resolución por la que se revoque el auto impugnado y se acuerde la inscripción de nacimiento fuera de plazo y consecuentemente la nacionalidad española con valor de simple presunción.

5. Por resolución de fecha 31 de julio de 2014 de la Dirección General de los Registros y del Notariado se estima parcialmente el recurso interpuesto por la interesada, se revoca la resolución apelada y se retrotraen las actuaciones para que, previa instrucción del expediente, el encargado del Registro Civil Central dicte nuevo auto pronunciándose sobre el fondo del asunto, toda vez que la declaración firme adoptada por el registro civil competente del domicilio, no puede ser calificada volviendo a

enjuiciar el fondo del asunto por el encargado del registro civil competente para entender de la solicitud presentada.

6. Instruido expediente por el Registro Civil Central, se solicita informe al ministerio fiscal, que es emitido el 04 de diciembre de 2014, por el que se opone a la inscripción de nacimiento fuera de plazo solicitada, a la vista de que se procedió a conceder la nacionalidad española sin reunir los requisitos legalmente establecidos, interesando a fin de lograr la concordancia entre el registro civil y la realidad extra registral, se inicie nuevo expediente para declarar que a la interesada no le corresponde la nacionalidad española y cancelar, en su caso, la anotación practicada, debiéndose hacer constar marginalmente el inicio del citado expediente y su finalidad.

7. Con fecha 05 de junio de 2015, el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central dicta auto por el que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada y por consiguiente la conversión de la anotación de nacimiento en inscripción, toda vez que no cabe estimar acreditados diversos aspectos esenciales del hecho imponible: filiación, fecha y lugar de nacimiento y la supuesta concordancia de su identidad como ciudadana saharauí.

8. Notificada la resolución se interpone recurso por la promotora, solicitando se revise su expediente y se le conceda la nacionalidad española con valor de simple presunción.

9. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación y el encargado del Registro Civil Central se ratifica en el acuerdo dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 27, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316, 335, 338 y 348 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RCC); la Circular de 29 de octubre de 1980, la instrucción de 7 de octubre de 1988, y las resoluciones, entre otras, 5-1ª y 14 de enero, 28 de abril, 31-2ª de mayo y 14-4ª de octubre de 1999; 26-1ª de abril de 2001; 10-6ª de septiembre de 2002; 24 de septiembre de 2005; 13-3ª de enero, 3-1ª de abril y 25-4ª de julio de 2006; 17-5ª de mayo de 2007; 3-2ª de enero, 14-5ª de abril, 22-3ª de octubre y 11-8ª de noviembre de 2008; 8-4ª de enero de 2009 y 10-95ª de abril de 2012.

II. La promotora, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Villena (Alicante), solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 30 de enero de 2008. Por auto de 23 de marzo de 2011 el encargado del Registro Civil Central acordó denegar la inscripción del nacimiento con marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción de la promotora, por no reunir los requisitos legalmente establecidos. Frente a dicha resolución se interpone recurso ante esta Dirección General de los Registros y del Notariado, que es estimado parcialmente, retro trayéndose las actuaciones para que, previa instrucción del expediente, el encargado del Registro Civil Central dicte nuevo

auto pronunciándose sobre el fondo del asunto, auto que es dictado el 05 de junio de 2015 por el que se desestima la inscripción de nacimiento solicitada por la promotora al no estimar acreditados diversos aspectos esenciales del hecho imponible: filiación, fecha y lugar de nacimiento y la supuesta concordancia de su identidad como ciudadana saharauí. Frente a dicho auto se interpone recurso por la promotora.

III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del registro civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho expediente, la resolución firme del encargado –que da lugar a una anotación al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC)– ha de ser calificada por el encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a la práctica de la anotación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por el artículo 27 LRC a la evaluación de “(...) la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio registro”, no estando facultado el encargado para volver a enjuiciar el fondo del asunto. De manera que debe practicarse la anotación marginal en el Registro Civil Central, sin perjuicio, dada la disconformidad del ministerio fiscal con la declaración presuntiva de nacionalidad acordada por el registro civil del domicilio, de la necesidad de continuar el procedimiento iniciado para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española y proceder, en su caso, a la cancelación de los asientos practicados. Al mismo tiempo, deberá anotarse también marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del asiento (art. 38.1º LRC).

IV. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado, cabe señalar que son inscribibles en el registro civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC); siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que se refiere el artículo 95-5º de la Ley del Registro Civil, cuya tramitación se desarrolla en los artículos 311 a 316 del reglamento.

En este caso la inscripción interesada afecta a una ciudadana de origen saharauí cuya nacionalidad española con valor de simple presunción ha sido declarada por el registro civil de su domicilio, pero no resultan acreditados datos esenciales (filiación, fecha y lugar de nacimiento) para practicar la inscripción, dadas las incongruencias detectadas en cuanto a la fecha de nacimiento de la promotora, en los documentos aportados al expediente. Así, se aportó certificación expedida por la Delegación Saharaí para la Comunidad Valenciana de fecha 19 de julio de 2006, en la que se indica que la interesada nació el 07 de marzo de 1983 en M. (Sáhara Occidental); certificado de nacimiento expedido por la Misión de la República Árabe Saharaí Democrática en Argel en el que se indica que la promotora nació el 07 de marzo de 1984 en M. (Sáhara Occidental) y pasaporte argelino, en el que consta que la solicitante nació el 07 de marzo de 1984 en S. (Argelia).

Por ello, el documento aportado en prueba del nacimiento no acredita las circunstancias esenciales que deben constar en la inscripción y que, en defecto de certificado auténtico, deberán demostrarse por otros medios supletorios de los que se mencionan en los artículos correspondientes al procedimiento de inscripción fuera de plazo del Reglamento del Registro Civil y en la Circular de 29 de octubre de 1980. En consecuencia, no es posible la inscripción de unos hechos, de los cuales la inscripción de nacimiento da fe, que no están suficientemente acreditados.

V. Por lo que se refiere a la orden del traslado del informe del ministerio fiscal al registro civil del domicilio a efectos de instar un nuevo expediente en el que se declare que al interesado no le corresponde la nacionalidad española, extremo también contenido en la resolución recurrida, es un principio básico de la legislación registral civil (cfr. Arts. 24 y 26 LRC y 94 RRC) el de procurar lograr la mayor concordancia posible entre el registro civil y la realidad extrarregistral.

En desarrollo de este principio se ha indicado repetidamente por la doctrina de este centro directivo que, mientras subsista ese interés público de concordancia, no juega en el ámbito del registro civil el principio de autoridad de cosa juzgada, por lo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión ya decidida. Por eso ha de ser posible que, de oficio o por iniciativa del ministerio fiscal o de cualquier interesado o autoridad con competencias conexas con la materia y con intervención en todo caso del ministerio público, se inicie un nuevo expediente para declarar con valor de presunción que a los interesados les corresponde o no les corresponde la nacionalidad española.

La nueva declaración recaída en tal expediente, en caso de ser negativa, ha de tener acceso al registro civil para cancelar en su virtud la anotación preventiva practicada. No es obstáculo para ello que, con arreglo al artículo 92 de la LRR, y a salvo las excepciones previstas en los tres artículos siguientes, las inscripciones solo puedan rectificarse por sentencia firme en juicio ordinario, porque en las anotaciones, en congruencia con su menor eficacia y su valor meramente informativo (cfr. Arts. 38 LRC y 145 RRC), rige un principio distinto. En efecto, el artículo 147 del RRC establece una regla de aplicación preferente, permitiendo que las anotaciones puedan ser rectificadas y canceladas en virtud de expediente gubernativo en el que se acredite la inexactitud, en todo caso con notificación formal a los interesados o sus representantes legales, como exige imperativamente el párrafo primero del artículo 349 RRC. Por todo ello, en aras del principio de concordancia entre el registro civil y la realidad, el ministerio fiscal puede promover de oficio un nuevo expediente de declaración sobre la nacionalidad española de la interesada.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Desestimar la pretensión de inscripción fuera de plazo por falta de acreditación de datos esenciales para practicarla.

2º. Continuar la tramitación del expediente incoado a instancia del ministerio fiscal y anotar marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del registro.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 21 de octubre de 2016 (19ª)

III.8.3. Alcance de la calificación del encargado del Registro Civil. Art. 27 LRC

1º. La competencia del encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento para calificar una resolución de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción dictada por el encargado del registro civil del domicilio está limitada por el art. 27 LRC.

2º. En tales casos, si hay discrepancia con lo resuelto por el órgano competente, el ministerio fiscal puede instar la incoación de expediente para la cancelación del asiento.

En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tudela (Navarra), don S.B., nacido el 06 de abril de 1975 en E. A. (Sáhara Occidental), solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 24 de septiembre de 2013, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* del interesado, por aplicación retroactiva del artº 17.3º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

Posteriormente, por auto de 29 de abril de 2014 dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela, se acuerda rectificar el error denunciado señalado en el hecho primero del auto de 24 de septiembre de 2013, en el sentido de que el lugar de nacimiento del promotor es E. A. y no el que por error se hizo constar.

2. Tramitado expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, se remiten las actuaciones al Registro Civil Central.

3. Notificado el ministerio fiscal emite informe desfavorable en fecha 11 de septiembre de 2014, indicando que, en este supuesto no resultan de aplicación los artículos 17.3º y 18 del Código Civil, ni el interesado reúne las condiciones exigidas por la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, ya que ni ha estado documentado

como español, ni es apátrida pues aportó pasaporte marroquí, interesando se inicie expediente para la cancelación de la anotación referente a la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del interesado.

4. Por auto de fecha 04 de noviembre de 2014 dictado por el encargado del Registro Civil Central se acuerda la práctica de la marginal de nacionalidad española declarada con valor de simple presunción del interesado en virtud del auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela, haciéndose constar que a instancias del representante del ministerio fiscal se incoa expediente de cancelación de la anotación referente a la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del interesado. Asimismo se indica que, en cuanto a la inscripción de nacimiento fuera de plazo solicitada, no ha lugar a la misma, ya que el promotor se encuentra inscrito en el tomo, folio del Registro Civil Central.

5. Notificada la resolución, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del auto apelado y acordando se declare la nacionalidad española con valor de simple presunción del promotor, conforme a lo establecido en el artículo 17.1.a) del Código Civil.

6. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación y el encargado del Registro Civil Central se ratifica en el auto dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 27, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316, 335, 338 y 348 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RCC); la circular de 29 de octubre de 1980, la instrucción de 7 de octubre de 1988, y las resoluciones, entre otras, 5-1ª y 14 de enero, 28 de abril, 31-2ª de mayo y 14-4ª de octubre de 1999; 26-1ª de abril de 2001; 10-6ª de septiembre de 2002; 24 de septiembre de 2005; 13-3ª de enero, 3-1ª de abril y 25-4ª de julio de 2006; 17-5ª de mayo de 2007; 3-2ª de enero, 14-5ª de abril, 22-3ª de octubre y 11-8ª de noviembre de 2008; 8-4ª de enero de 2009 y 10-95ª de abril de 2012.

II. El promotor, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Tudela (Navarra), solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 24 de septiembre de 2013, rectificado por auto de 29 de abril de 2014, en relación con el lugar de nacimiento del interesado. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, en el que interesa se inicie expediente de oficio para la cancelación de la anotación referente a la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción del interesado, por auto de 04 de noviembre de 2014, el encargado del Registro Civil Central acordó la práctica de la marginal de nacionalidad española declarada con valor de simple presunción del interesado, no habiendo lugar a la inscripción de nacimiento fuera de plazo solicitada, toda vez que el promotor ya se encuentra inscrito en el Registro Civil Central.

III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del registro civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho expediente, la resolución firme del encargado -que da lugar a una anotación al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC)- ha de ser calificada por el encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a la práctica de la anotación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por el artículo 27 LRC a la evaluación de "(...) la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio registro", no estando facultado el encargado para volver a enjuiciar el fondo del asunto. De manera que debe practicarse la anotación marginal en el Registro Civil Central, sin perjuicio, dada la desconformidad del ministerio fiscal con la declaración presuntiva de nacionalidad acordada por el registro civil del domicilio, de la necesidad de continuar el procedimiento iniciado para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española y proceder, en su caso, a la cancelación de los asientos practicados. Al mismo tiempo, deberá anotarse también marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del asiento (art. 38.1º LRC).

IV. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado, cabe señalar que son inscribibles en el registro civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC); siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que se refiere el artículo 95-5º de la Ley del Registro Civil, cuya tramitación se desarrolla en los artículos 311 a 316 del reglamento.

En este caso, no ha lugar a la inscripción de nacimiento fuera de plazo solicitada, toda vez que el promotor ya se encuentra inscrito en el tomo, folio del Registro Civil Central.

V. Por lo que se refiere a la orden del traslado del informe del ministerio fiscal al registro civil del domicilio a efectos de instar un nuevo expediente en el que se declare que al interesado no le corresponde la nacionalidad española, extremo también contenido en la providencia recurrida, es un principio básico de la legislación registral civil (cfr. Arts. 24 y 26 LRC y 94 RRC) el de procurar lograr la mayor concordancia posible entre el registro civil y la realidad extrarregistral.

En desarrollo de este principio se ha indicado repetidamente por la doctrina de este centro directivo que, mientras subsista ese interés público de concordancia, no juega en el ámbito del registro civil el principio de autoridad de cosa juzgada, por lo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión ya decidida. Por eso ha de ser posible que, de oficio o por iniciativa del ministerio fiscal o de cualquier interesado o autoridad con competencias conexas con la materia y con intervención en todo caso del ministerio público, se inicie un nuevo expediente para declarar con valor de presunción que a los interesados les corresponde o no les corresponde la nacionalidad española.

La nueva declaración recaída en tal expediente, en caso de ser negativa, ha de tener acceso al registro civil para cancelar en su virtud la anotación preventiva practicada. No es obstáculo para ello que, con arreglo al artículo 92 de la LRR, y a salvo las excepciones previstas en los tres artículos siguientes, las inscripciones solo puedan rectificarse por sentencia firme en juicio ordinario, porque en las anotaciones, en congruencia con su menor eficacia y su valor meramente informativo (cfr. Arts. 38 LRC y 145 RRC), rige un principio distinto. En efecto, el artículo 147 del RRC establece una regla de aplicación preferente, permitiendo que las anotaciones puedan ser rectificadas y canceladas en virtud de expediente gubernativo en el que se acredite la inexactitud, en todo caso con notificación formal a los interesados o sus representantes legales, como exige imperativamente el párrafo primero del artículo 349 RRC. Por todo ello, en aras del principio de concordancia entre el registro civil y la realidad, el ministerio fiscal puede promover de oficio un nuevo expediente de declaración sobre la nacionalidad española de la interesada.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. No ha lugar a la solicitud de inscripción de nacimiento fuera de plazo, toda vez que el interesado ya se encuentra inscrito en el Registro Civil Central en el tomo ..., folio ...

2º. Continuar la tramitación del expediente incoado a instancia del ministerio fiscal.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 21 de octubre de 2016 (20ª)

III.8.3. Alcance de la calificación del encargado del Registro Civil. Art. 27 LRC

1º. La competencia del encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento para calificar una resolución de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción dictada por el encargado del registro civil del domicilio está limitada por el art. 27 LRC.

2º. En tales casos, si hay discrepancia con lo resuelto por el órgano competente, el ministerio fiscal puede instar la incoación de expediente para la cancelación del asiento.

3º. No es inscribible el nacimiento porque no se acreditan los datos necesarios para practicar la inscripción.

En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tudela (Navarra), don A. Y., nacido el 03 de enero de 1981 en E. A. (Sáhara Occidental), solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 15 de abril de 2013, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen *iure soli* del interesado, por aplicación retroactiva del artº 17.3º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.
2. Tramitado expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, se remiten las actuaciones al Registro Civil Central.
3. Notificado el ministerio fiscal emite informe desfavorable en fecha 19 de agosto de 2014, indicando que no resulta de aplicación el artº 17.3º del Código Civil y la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, puesto que el interesado ha nacido en el año 1981, después de la Ley de Descolonización de 19 de noviembre de 1975, por lo que ni ha nacido en territorio español ni es apátrida, pues tiene pasaporte marroquí. Por otra parte, se indica que tampoco cabría aplicar el artº 18 del Código Civil, pues al haber nacido el interesado en 1981 no ha podido estar en posesión y utilización de la nacionalidad española durante 10 años, interesando se inicie nuevo expediente para declarar que al promotor no le corresponde la nacionalidad española.
4. Por auto de fecha 24 de marzo de 2015 dictado por el encargado del Registro Civil Central se desestima la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, toda vez que no resultan acreditados diversos aspectos del hecho imponible: filiación, fecha y lugar de nacimiento ni la supuesta concordancia de su identidad con ciudadano saharauí.
5. Notificada la resolución, el promotor interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación del auto apelado y acordando la inscripción de nacimiento del interesado, con marginal de nacionalidad española de origen con valor de simple presunción, en base a lo establecido en el artº 17.1.a) del Código Civil.
6. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación y el encargado del Registro Civil Central se ratifica en el auto dictado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 27, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316, 335, 338 y 348 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RCC); la circular de 29 de octubre de 1980, la instrucción de 7 de octubre de 1988, y las resoluciones, entre otras, 5-1ª y 14 de enero, 28 de abril, 31-2ª de mayo y 14-4ª de

octubre de 1999; 26-1ª de abril de 2001; 10-6ª de septiembre de 2002; 24 de septiembre de 2005; 13-3ª de enero, 3-1ª de abril y 25-4ª de julio de 2006; 17-5ª de mayo de 2007; 3-2ª de enero, 14-5ª de abril, 22-3ª de octubre y 11-8ª de noviembre de 2008; 8-4ª de enero de 2009 y 10-95ª de abril de 2012.

II. El promotor, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Tudela (Navarra), solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 15 de abril de 2013. Por auto de 24 de marzo de 2015 el Encargado del Registro Civil Central acordó desestimar la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, toda vez que no resultan acreditados diversos aspectos del hecho imponible. Contra este auto se interpuso el recurso ahora examinado.

III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del registro civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho expediente, la resolución firme del encargado -que da lugar a una anotación al margen de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC)- ha de ser calificada por el encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a la práctica de la anotación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por el artículo 27 LRC a la evaluación de "(...) la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio registro", no estando facultado el encargado para volver a enjuiciar el fondo del asunto. De manera que debe practicarse la anotación marginal en el Registro Civil Central, sin perjuicio, dada la disconformidad del ministerio fiscal con la declaración presuntiva de nacionalidad acordada por el registro civil del domicilio, de la necesidad de continuar el procedimiento iniciado para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española y proceder, en su caso, a la cancelación de los asientos practicados. Al mismo tiempo, deberá anotarse también marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del asiento (art. 38.1º LRC).

IV. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado, cabe señalar que son inscribibles en el registro civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC); siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para declarar el nacimiento, el expediente al que se refiere el artículo 95-5º de la Ley del Registro Civil, cuya tramitación se desarrolla en los artículos 311 a 316 del reglamento.

En este caso la inscripción interesada afecta a un ciudadano de origen saharauí cuya nacionalidad española con valor de simple presunción ha sido declarada por el registro civil de su domicilio, pero no resultan acreditados datos esenciales para practicar la inscripción. Así, no queda acreditado que los padres del interesado, los cuales no han sido oídos en el expediente, ni consta defunción de los mismos, sean los que figuran en la hoja declaratoria de datos, cuyos nombres no resultan coincidentes con los que

se recogen en el certificado de parentesco emitido por el Reino de Marruecos y aportado al expediente.

Por otra parte, de las informaciones testificales practicadas, no cabe deducir que los datos de identificación de los progenitores y la fecha y el lugar de nacimiento del interesado, sean los que constan en la documentación del expediente y en la hoja declaratoria de datos.

Por ello, a la vista de la documentación aportada, no se acreditan las circunstancias esenciales que deben constar en la inscripción y que, en defecto de certificado auténtico, deberán demostrarse por otros medios supletorios de los que se mencionan en los artículos correspondientes al procedimiento de inscripción fuera de plazo del Reglamento del Registro Civil y en la circular de 29 de octubre de 1980. En consecuencia, no es posible la inscripción de unos hechos, de los cuales la inscripción de nacimiento da fe, que no están suficientemente acreditados.

V. Por lo que se refiere a la orden del traslado del informe del ministerio fiscal al registro civil del domicilio a efectos de instar un nuevo expediente en el que se declare que al interesado no le corresponde la nacionalidad española, extremo también contenido en la providencia recurrida, es un principio básico de la legislación registral civil (cfr. Arts. 24 y 26 LRC y 94 RRC) el de procurar lograr la mayor concordancia posible entre el registro civil y la realidad extrarregistral.

En desarrollo de este principio se ha indicado repetidamente por la doctrina de este centro directivo que, mientras subsista ese interés público de concordancia, no juega en el ámbito del registro civil el principio de autoridad de cosa juzgada, por lo que es posible reiterar un expediente sobre cuestión ya decidida. Por eso ha de ser posible que, de oficio o por iniciativa del ministerio fiscal o de cualquier interesado o autoridad con competencias conexas con la materia y con intervención en todo caso del ministerio público, se inicie un nuevo expediente para declarar con valor de presunción que a los interesados les corresponde o no les corresponde la nacionalidad española.

La nueva declaración recaída en tal expediente, en caso de ser negativa, ha de tener acceso al registro civil para cancelar en su virtud la anotación preventiva practicada. No es obstáculo para ello que, con arreglo al artículo 92 de la LRR, y a salvo las excepciones previstas en los tres artículos siguientes, las inscripciones solo puedan rectificarse por sentencia firme en juicio ordinario, porque en las anotaciones, en congruencia con su menor eficacia y su valor meramente informativo (cfr. Arts. 38 LRC y 145 RRC), rige un principio distinto. En efecto, el artículo 147 del RRC establece una regla de aplicación preferente, permitiendo que las anotaciones puedan ser rectificadas y canceladas en virtud de expediente gubernativo en el que se acredite la inexactitud, en todo caso con notificación formal a los interesados o sus representantes legales, como exige imperativamente el párrafo primero del artículo 349 RRC. Por todo ello, en aras del principio de concordancia entre el registro civil y la realidad, el ministerio fiscal puede promover de oficio un nuevo expediente de declaración sobre la nacionalidad española de la interesada.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Desestimar la pretensión de inscripción fuera de plazo por falta de acreditación de datos esenciales para practicarla.

2º. Estimar parcialmente el recurso y practicar anotación soporte de nacimiento y anotación de nacionalidad con valor de simple presunción.

3º. Continuar la tramitación del expediente incoado a instancia del ministerio fiscal y anotar marginalmente la existencia de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del registro.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

III.9 OTRAS CUESTIONES EN EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD

III.9.1 EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD DE MENORES. AUTORIZACIÓN PREVIA Y OTRAS PECULIARIDADES

Resolución de 21 de octubre de 2016 (36ª)

III.9.1. Autorización previa para instar la nacionalidad por residencia de una menor

Procede conceder la autorización a los progenitores, representantes legales de una menor de 14 años, para que soliciten en nombre de su hija la nacionalidad española por residencia mediante un expediente posterior cuya resolución es competencia del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

En las actuaciones sobre autorización a los representantes legales para instar un expediente de nacionalidad por residencia de una menor de catorce años remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Pontevedra.

HECHOS

1. Mediante comparecencia ante el Registro Civil de Pontevedra el 9 de julio de 2014, los Sres. A. A. y K. A., mayores de edad y de nacionalidad marroquí, solicitaban autorización para instar expediente de solicitud de nacionalidad española por residencia en nombre de su hija menor de edad O. A., nacida en Marruecos el de 2001. Aportaban los siguientes documentos: permisos de residencia en España y pasaportes marroquíes de los interesados, certificado conjunto de empadronamiento, acta literal marroquí de nacimiento de la menor, certificado de matrícula escolar en un

centro de P. (Pontevedra), declaración de IRPF del padre y solicitud de alta en la Seguridad Social de la madre.

2. Ratificados ambos progenitores, se requirió la comparecencia de los promoventes para que aclararan en virtud de qué artículo desean solicitar la nacionalidad por residencia para su hija, dado que esta ha nacido en Marruecos y no le es aplicable el plazo reducido de un año del artículo 22.2a) del Código civil (CC). Los interesados declararon que solicitaban la nacionalidad en las condiciones del artículo 22.1 CC.

3. Previo informe del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 26 de septiembre de 2014 denegando la autorización solicitada por no resultar acreditado el periodo mínimo de diez años de residencia legal en España de la menor interesada.

4. Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando los progenitores que su hija reside legalmente en España desde el 16 de junio de 2004, en prueba de lo cual aportaban el correspondiente certificado del Ministerio del Interior.

5. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Pontevedra remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 21 y 22 del Código Civil (CC); 63 de la Ley del Registro Civil (LRC); 348, 355 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones 26-3ª de marzo de 2007, 4-3ª de julio de 2008, 1-10ª de septiembre de 2009, 28-111ª de octubre y 26-67ª de diciembre de 2014 y 6-70ª de febrero de 2015.

II. Se plantea en este expediente si procede o no otorgar autorización por parte del registro a los padres de una menor de nacionalidad marroquí nacida en Marruecos en 2001 para que, posteriormente, puedan solicitar la nacionalidad española por residencia en nombre su hija. La encargada del registro, previo informe en el mismo sentido del ministerio fiscal, denegó la autorización por no considerar acreditado el periodo mínimo de residencia de diez años de la interesada en nuestro país.

III. La concesión de la nacionalidad española por residencia es competencia del Ministerio de Justicia previo expediente instruido, según reciente modificación legal, por la Dirección General de los Registros y del Notariado (Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia), si bien en el momento de emitirse la resolución recurrida, la instrucción de tales expedientes correspondía al registro civil del domicilio de los interesados. De cualquier forma, cuando la nacionalidad se solicita para un menor de 14 años, como en este caso, antes de la instrucción del expediente existe una fase previa en la que sus representantes legales

deben obtener una autorización para solicitar la nacionalidad en nombre del menor. Dicha autorización debe ser concedida por el encargado del registro civil del domicilio de los solicitantes (cfr. art. 20.2a y art. 21.3c CC) y en esta fase los únicos requisitos que deben tenerse en cuenta son la acreditación de la filiación de los solicitantes respecto del menor interesado, la solicitud conjunta o el consentimiento de ambos -a no ser que se pruebe que la patria potestad está atribuida a uno solo de ellos- y que la petición se realiza en interés del menor. En este caso, los dos primeros extremos están perfectamente acreditados y, por lo que se refiere al tercero, se presume que los padres actúan siempre en beneficio e interés de los hijos. Debe tenerse en cuenta, además, que la menor interesada reside y está escolarizada en España. En consecuencia, en esta fase resulta irrelevante la acreditación suficiente del tiempo de residencia legal en España (aunque cabe señalar, por otro lado, que en fase de recurso se ha aportado el certificado expedido por el Ministerio del Interior), circunstancia que sí será determinante, en su caso, en el expediente posterior para la obtención de la nacionalidad cuando deba comprobarse, en la fase correspondiente, por parte del órgano instructor la concurrencia o no de los requisitos necesarios para concederla. Por todo ello, no se aprecia obstáculo legal alguno para la concesión de la autorización solicitada.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y revocar el auto apelado autorizando a los representantes legales de la menor interesada para solicitar en su nombre la nacionalidad española por residencia.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Pontevedra.

IV MATRIMONIO

IV.1 INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO RELIGIOSO

IV.1.1 INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO RELIGIOSO CELEBRADO EN ESPAÑA

Resolución de 28 de octubre de 2016 (27ª)

IV.1.1. Matrimonio Consular en España

No es válido, el matrimonio consular celebrado en España cuando uno de los contrayentes es español.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra acuerdo del juez encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1. Don Á. G. B. nacido en España y de nacionalidad española, presentó impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el 2 de diciembre de 2014 en el Consulado de Marruecos en Madrid con Dª M. A. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Acompañaba como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio, certificado de nacimiento del interesado y permiso de residencia de la interesada.
2. Ratificados los interesados, el ministerio fiscal se opone a la inscripción. El juez encargado del registro civil mediante providencia de fecha 22 de septiembre del 2015 deniega la inscripción del matrimonio pretendida ya que siendo el contrayente español de origen y conforme establece el artículo 49,50 y 73.3º del Código Civil, el matrimonio consular no es una forma válida de contraer matrimonio cuando uno de los contrayentes es español.
3. Notificada la resolución, los interesados interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo por cuanto la resolución recurrida ha hecho una correcta aplicación de lo establecido en los artículos 49,50 y 73.3º del Código Civil. El juez

encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9, 11, 49, 50, 65, 73 y 78 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85 y 256 del Reglamento del Registro Civil; 22 y 31 del Convenio de Viena de Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961, 31 y 43 del Convenio de Viena de Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963; 1, 3 y 7 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre por la que se aprueba el acuerdo de Cooperación entre el Estado Español y la Comisión Islámica de España, la instrucción de 10 de febrero de 1993, y las resoluciones de 21 de septiembre de 1998 y 23-4ª de enero, 12-2ª de mayo y 18-2ª de octubre de 1999, 28-1ª de mayo y 23-3ª de octubre de 2001, 29-3ª de septiembre de 2003 y 19-4ª de enero de 2004 y 7-1ª de noviembre de 2005.

II. Conforme establece hoy claramente el artículo 49 del Código Civil, un español ha de contraer matrimonio en España, bien ante el juez, alcalde o funcionario señalado por el mismo código, bien en la forma religiosa legalmente prevista. El matrimonio consular no es una forma válida si uno de los contrayentes es español, de suerte que en tal caso el matrimonio sería nulo por aplicación del artículo 73-3º del Código Civil, puede por el contrario ser contraído válidamente por dos extranjeros en España, si así lo permite la ley personal de cualquiera de ellos (cfr. al art. 50 del Código Civil).

III. En efecto, el artículo 50 del Código Civil, respecto de los matrimonios celebrados en España entre contrayentes extranjeros, establece una norma de conflicto con puntos de conexión alternativos, favoreciendo la validez formal del matrimonio, en cuya virtud el matrimonio será válido si se ha contraído “con arreglo a la forma prescrita para los españoles o cumpliendo la establecida por la Ley personal de cualquiera de ellos”.

IV. En el presente caso el encargado del registro civil ha denegado la inscripción del matrimonio celebrado el 2 de diciembre de 2014 en el Consulado de Marruecos en Madrid entre un español y una ciudadana marroquí. El ministerio fiscal se opone a la inscripción del matrimonio.

V. Sin embargo, un atento análisis de la situación arroja la conclusión de que la calificación anterior no puede ser mantenida. En efecto, si bien no hay duda de que la nueva regulación introducida por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, es aplicable a los matrimonios en forma religiosa islámica celebrados en España cuando uno o ambos contrayentes tienen la nacionalidad española, por el contrario se ha discutido qué es lo que ha de ocurrir si ambos contrayentes son extranjeros, pues podría pensarse que el artículo 50 del Código Civil, en cuanto autoriza a los extranjeros a acogerse a las formas matrimoniales previstas por la ley personal de cualquiera de ellos, no ha quedado afectado por la citada Ley 26/1992. Esta es precisamente la interpretación que se desprende de la instrucción de esta dirección general de 10 de febrero de 1993. En consecuencia, si se tiene en cuenta que aquel artículo concede una opción a los extranjeros para celebrar el matrimonio en España «con arreglo a la

forma prescrita para los españoles o cumpliendo la establecida por la ley personal de cualquiera de ellos», ha de estimarse que esta opción subsiste y que incluso se ha ampliado porque la forma prescrita para los españoles comprende hoy no sólo la forma civil o la religiosa canónica, sino las formas religiosas previstas por los acuerdos con las confesiones religiosas (lo afirmado vale también para los casos de los matrimonios religiosos según el rito evangélico y según la normativa israelita: vid. leyes 24/1992 y 25/1992, de 10 de noviembre).

Consiguientemente los contrayentes extranjeros tienen dos opciones, bien, como hasta ahora, celebrar su matrimonio en España en la forma religiosa admitida por la ley personal de alguno de ellos (caso en el que la inscripción en el registro civil requerirá la comprobación de los requisitos sustantivos exigidos por el artículo 65 del código, a través de los medios que señalan los artículos 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil) o bien, aunque esa forma religiosa no esté permitida por la ley personal de ninguno de los contrayentes, podrán acogerse al sistema, permitido para los españoles, de los artículos séptimos de los repetidos acuerdos. En el caso de la primera opción, la situación es la misma que la que existía antes de la entrada en vigor de la Ley 26/1992, periodo en el que los matrimonios religiosos por rito islámicos ya constituían formas válidas de celebración para la legislación anterior y así ocurría si se habían celebrado en el extranjero de acuerdo con la *lex loci* (cfr. arts. 49 fine CC y 256.3.º RRC, así como la resolución de 25 de noviembre de 1978) o si se habían celebrado en España, siendo ambos contrayentes extranjeros, y si esa forma era una de las admitidas por la ley personal de cualquiera de ellos (cfr. arts. 50 CC y 256.4.º RRC y las resoluciones de 18 de septiembre de 1981 y de 6 de mayo de 1982), pero no alcanzaron a tener efectos civiles, ni lo han conseguido ahora por las nuevas leyes, tales matrimonios celebrados en territorio español, siendo nacional español uno o ambos contrayentes. Así se deducía del artículo 59 del Código Civil y ha tenido ocasión de precisar la doctrina reiterada de este centro directivo (cfr. resoluciones de 17 de junio, 20 de agosto y 27 de septiembre de 1991 y 24 de junio y 24 de septiembre de 1992).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Madrid.

IV.1.2 INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO RELIGIOSO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO

Resolución de 4 de octubre de 2016 (2ª)

IV.1.2. Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio celebrado en Marruecos por españoles, de origen marroquí, porque no se ha aportado certificado de matrimonio expedido por autoridad o funcionario marroquí, ni se ha tramitado expediente de capacidad matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don L. F. E. S., nacido en O. B. – O. G., Marruecos, y de nacionalidad española adquirida por residencia el 13 de enero de 2014, presentó ante el Registro Civil Central, hoja de declaración de datos para la inscripción del matrimonio coránico celebrado en S. S. – B. M., Marruecos con doña S. L. nacida en O. Z. – B. M., Marruecos, de nacionalidad marroquí. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: copia del acta de matrimonio, copia notarial de acta de constancia del matrimonio, certificación literal de nacimiento del interesado, fotocopia del documento nacional de identidad del interesado y del permiso de residencia de la interesada y certificado de empadronamiento
2. Mediante acuerdo de fecha 9 de octubre de 2015, el encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción del matrimonio pretendida al no existir en este caso el oportuno certificado de matrimonio válido.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que impugna el mismo interesando la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 65 del Código Civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones de 4-2ª de junio de 2001; 9-2ª y 24-2ª de mayo de 2002; 13-3ª de octubre de 2003; 17-2ª de febrero, 31-5ª de mayo y 2-2ª de noviembre de 2004; 16-2ª de noviembre de 2005 y 17-3ª de marzo de 2008.

II. En el presente caso, el interesado, de nacionalidad española, adquirida por residencia el 13 de enero de 2014, pretende inscribir un matrimonio que se celebró en

Marruecos en 1997. Sin embargo la inscripción es denegada por el juez encargado por estimar que no está suficientemente probada la celebración del acto cuya inscripción se solicita ni acreditados determinados datos de los que la inscripción debe hacer fe.

III. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse la cuestión sobre si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado, según se dice, en Marruecos en 1997.

IV. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central. por estar el promotor domiciliado en España. (cfr. art. 68,II RRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. arts. 23 LRC y 85 y 256-3º RRC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento “en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos”.

V. En el caso actual, se pretende la inscripción de un matrimonio mediante una copia de acta de matrimonio, y una copia notarial de acta de constancia del matrimonio. El artículo 85 del RRC dispone al respecto que “para practicar inscripciones sin expediente en virtud de certificación de registro extranjero, se requiere que éste sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española”. El documento presentado no es un certificado, sino un acta autorizada por dos notarios marroquíes que no reúne los requisitos que señala el artículo reglamentario transcrito para que se pueda practicar la inscripción. Así mismo, del acta presentada no resulta qué funcionario o autoridad religiosa autorizó el matrimonio, ni la fecha ni lugar de celebración del mismo. No pueden admitirse en este punto las alegaciones del recurrente, en la medida en que dichas fecha y lugar señaladas en el escrito de recurso no se corresponden a la celebración del matrimonio, sino a la recepción del testimonio del matrimonio, o siguiendo la terminología empleada la “formalización” o “validación”. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de acudir al expediente del artículo 257 RRC “En cualquier otro supuesto el matrimonio sólo puede inscribirse en virtud de expediente, en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos”.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 4 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 14 de octubre de 2016 (27ª)

IV.1.2. Matrimonio celebrado en el extranjero

1º. No es inscribible el matrimonio consuetudinario celebrado en Ghana por quien luego se hizo español, porque en el expediente del art. 257 del Reglamento no se ha acreditado la celebración en forma del matrimonio.

2º. Características del matrimonio consuetudinario.

En el expediente sobre inscripción de matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don M. S. C., nacido en Ghana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2013, presentó ante el Registro Civil Central, hoja declaratoria de datos a fin de inscribir el matrimonio consuetudinario celebrado en Ghana el 21 de septiembre de 1994 con Dª R. G., nacida en Ghana y de nacionalidad ghanesa. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio, expedido por el Registro Civil Ghanés y certificado de nacimiento del interesado y permiso de residencia y certificado de nacimiento de la interesada.

2. El encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2015, deniega la inscripción del matrimonio ya que a la vista de las características del matrimonio que se pretende inscribir “al estilo del país”, es decir de forma consuetudinaria choca frontalmente con el sistema jurídico matrimonial instituido en nuestro país al tratarse de un matrimonio poligámico que permite la subsistencia de vínculos matrimoniales anteriores, como la posibilidad de contraer otros posteriores.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto por estimar que el auto es plenamente ajustado a Derecho. El encargado del Registro Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 65 del Código Civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones de 4-2ª de junio de 2001; 9-2ª y 24-2ª de mayo de 2002; 13-3ª de octubre de 2003; 17-2ª de febrero, 31-5ª de mayo y 2-2ª de noviembre de 2004; 16-2ª de noviembre de 2005 y 17-3ª de marzo de 2008.

II. En el presente caso, el interesado, de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2013, pretende inscribir un matrimonio consuetudinario que se

celebró en Ghana el 21 de septiembre de 1994. La inscripción es denegada por el juez encargado porque dicho matrimonio choca frontalmente con el sistema jurídico matrimonial instituido en nuestro país, ya que es una forma de matrimonio poligámico que permite la subsistencia de otros vínculos matrimoniales anteriores o posteriores al mismo. Sus efectos se producen con independencia de su inscripción la cual es discrecional y puede efectuarse por medio de una simple declaración.

III. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse la cuestión sobre si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado, según se dice, en Ghana en 2004.

IV. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central. por estar los promotores domiciliados en España. (cfr. art. 68,II RRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. arts. 23 LRC y 85 y 256-3º RRC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento “en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos”.

V. En el caso actual, los interesados presentan un certificado de matrimonio civil consuetudinario, celebrado el 21 de septiembre de 1994, según la información consular de que se dispone, el matrimonio consuetudinario es una forma de unión conyugal que produce plenos efectos en Ghana, tratándose de una forma de matrimonio poligámico que permite la subsistencia de otros vínculos matrimoniales anteriores o posteriores al mismo. Por todo ello no es susceptible de inscripción, ni tampoco de la anotación prevista en el artículo 271 del Reglamento o, a través de un expediente con valor de presunción (cfr. art. 38-2º LRC) de la regulada por los artículos 335, 339 y 340 del propio Reglamento.

VI. Por otra parte y en relación con los matrimonios consuetudinarios, de conformidad con la información oficial, el denominado matrimonio consuetudinario admite, con plena eficacia civil, varios matrimonios celebrados por la misma persona sin disolución del vínculo previo (poligamia); permite la unión de niñas a partir de los doce años; y acepta la falta de consentimiento de una de las partes (la mujer es entregada por su familia al marido a cambio de una dote). Sin perjuicio del sometimiento de la capacidad matrimonial al estatuto personal determinado por la nacionalidad de la persona, la aplicación de la Ley extranjera puede y debe ser rechazada cuando su aplicación resulte contraria al orden público internacional español. En concreto, se rechaza la aplicación de la Ley extranjera cuando tal aplicación redundaría en vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables del Derecho español. La cláusula del orden público internacional ha sido aplicada con frecuencia en nuestro Derecho, y en particular en la doctrina de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, que ha entrado a examinar la validez de estos matrimonios considerando la Ley

española como *lex fori*. Los matrimonios celebrados en cualquiera de los tres supuestos enumerados, todos ellos concurrentes en el consuetudinario, son nulos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 73 del Código Civil y, en consecuencia, el aducido por los interesados, no puede tener acceso al Registro Civil español.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 28 de octubre de 2016 (21ª)

IV.1.2. Inscripción de matrimonio otorgado en el extranjero

1º. Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración” pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo.

2º. Sin la previa tramitación de expediente registral tendente a expedir el certificado de capacidad matrimonial, no es inscribible el matrimonio celebrado en Marruecos entre un marroquí y una española, marroquí de origen.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra acuerdo del juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Doña H. S. E-M., nacida en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por opción el 18 de enero de 2010, presentó impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el 8 de julio de 2010 en Marruecos, según la ley local, con Don Y. B. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Acompañaba como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio local, DNI y certificación de nacimiento de la interesada y permiso de residencia del interesado.

2. Mediante providencia de fecha 12 de febrero de 2015, el encargado del registro civil requiere a la interesada a fin de que aporte el certificado de capacidad matrimonial que se exige en estos casos. El juez encargado del Registro Civil Central mediante auto de fecha 18 de mayo de 2015 deniega la inscripción del matrimonio pretendida ya que la interesada, súbdita española, desde el 18 de enero de 2010, contrae matrimonio sin embargo como súbdita marroquí, al ser considerado como tal por las autoridades marroquíes y no reconocer la validez y eficacia de la renuncia a la nacionalidad

marroquí que realizó en su día la interesada. La interesada no ha aportado el certificado de capacidad matrimonial que en estos casos se exige.

3. Notificada la resolución, los interesados, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo por estimar que el acuerdo impugnado es plenamente ajustado a Derecho. El juez encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 45, 49, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85, 252 y 256 del Reglamento del Registro Civil; el convenio número 20 de la Comisión Internacional del Estado Civil relativo a la expedición de un certificado de capacidad matrimonial, firmado en Múnich el 5 de septiembre de 1980 (BOE 16 mayo de 1988); la orden ministerial de 26 de mayo de 1998, las instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las resoluciones, entre otras, de 29-2ª de mayo de 1999, 17-2ª de septiembre de 2001, 14-1ª de junio y 1-2ª de septiembre de 2005, 20-3ª de marzo de 2007, 6-5ª de mayo, 28-6ª de octubre y 3-6ª de noviembre de 2008.

II. Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración” (cfr. art. 49-II CC) pero, aunque la forma sea válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo (cfr. art. 65 CC), comprobación que puede hacerse mediante la calificación de la “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (cfr. art. 256 nº 3 RRC) en las condiciones establecidas por dicho precepto reglamentario o, en ausencia de título documental suficiente, a través del expediente previsto en el artículo 257 del Reglamento del Registro Civil.

III. En este caso concreto, en el que se pretende inscribir un matrimonio celebrado en Marruecos el 8 de julio de 2010 entre un marroquí y una ciudadana española de origen marroquí que obtuvo la nacionalidad española el 18 de enero de 2010, renunciando a su anterior nacionalidad marroquí, ha sucedido que, al no reconocer las autoridades locales validez y eficacia a la renuncia a la nacionalidad de origen, el contrayente español se ha casado como marroquí y, en consecuencia, no se le ha exigido el certificado de capacidad, obligatorio en los matrimonios mixtos. Pero las autoridades españolas no pueden examinar la cuestión del mismo modo porque, en estos supuestos de doble nacionalidad *de facto*, de un español que ostenta además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales, prevalece en todo caso la nacionalidad española (cfr. art. 9 nº 9 CC). Por tanto, para el ordenamiento

jurídico español, se trata de un matrimonio de español celebrado en el extranjero con contrayente extranjero y, presupuesta para tal caso la exigibilidad por parte de la ley marroquí de un certificado de capacidad matrimonial del extranjero, no cabe reconocer como título inscribible la mera certificación de la autoridad extranjera, por lo que, prescindiendo de la posible extralimitación reglamentaria del artículo 256 nº 3 del Reglamento del Registro Civil respecto del artículo 73, párrafo segundo de la Ley, la aplicación de tal precepto tropieza con la excepción reconocida en el artículo 252 del propio reglamento que impone, para los casos en él contemplados y en cuyo tipo normativo se subsume el que es objeto del presente recurso, la previa tramitación de expediente registral, a fin de obtener certeza sobre la capacidad matrimonial del contrayente español. Y ello debe mantenerse tanto si se considera que el citado artículo 252 del reglamento constituye una norma material de extensión inversa o *ad intra* para los supuestos internacionales en ella previstos, por efecto de la cual se “interiorizan” las normas de los ordenamientos jurídicos extranjeros que exigen el certificado de capacidad matrimonial, como si se entiende que, partiendo de la condición de español del contrayente, no se han observado las exigencias para la celebración del matrimonio de la forma prevista por la *lex loci*.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 28 de octubre de 2016 (28ª)

IV.1.2. Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio celebrado en Sáhara por un español, de origen saharauí porque la certificación del registro sobre los hechos de que da fe no reúne garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don S. S. M. nacido en Sáhara occidental y de nacionalidad española, con valor de simple presunción desde el año 2007, presentó ante el Registro Civil Central, hoja de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en B. el 22 de mayo de 2006 con Dª M. L. L. nacida en Sáhara y de nacionalidad argelina. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de

matrimonio expedida por el Ministerio de Justicia y Asuntos Religiosos de la República Árabe Saharaui Democrática, certificado de nacimiento del interesado.

2. Mediante auto de fecha 22 de julio de 2015, el encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción del matrimonio pretendida ya que no ha quedado suficientemente acreditada la celebración del matrimonio, el lugar y la fecha en que tuvo lugar el mismo, así como la identidad, capacidad y libertad de consentimiento y falta de impedimento de los contrayentes.

3. Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que interesa la desestimación del mismo y la confirmación del auto recurrido. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 65 del Código Civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones de 4-2ª de junio de 2001; 9-2ª y 24-2ª de mayo de 2002; 13-3ª de octubre de 2003; 17-2ª de febrero, 31-5ª de mayo y 2-2ª de noviembre de 2004; 16-2ª de noviembre de 2005 y 17-3ª de marzo de 2008.

II. En el presente caso, el interesado de nacionalidad española, con valor de simple presunción desde el año 2007, pretende inscribir un matrimonio que se celebró en Sáhara Occidental en 2006, sin embargo la inscripción es denegada por el juez encargado por estimar que no está suficientemente probada la celebración del acto cuya inscripción se solicita ni acreditados determinados datos de los que la inscripción hace fe.

III. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse la cuestión sobre si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado, según se dice, en Sáhara Occidental en 2006.

IV. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central por estar el promotor domiciliado en España (cfr. art. 68, II RRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. arts. 23 LRC y 85 y 256-3ª RRC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del reglamento “en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos”.

V. En el caso actual, se pretende la inscripción de un matrimonio por transcripción de la certificación de un registro extranjero. El artículo 85 del RRC dispone al respecto que “para practicar inscripciones sin expediente en virtud de certificación de registro extranjero, se requiere que éste sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española”. La calificación por el encargado de la certificación extranjera se extiende al examen de la competencia y autoridad que la expide, la cual ha de actuar en el ejercicio de cargo que la habilite para tal expedición con base legal suficiente, base que en este caso, en el que los interesados aportan un acta de matrimonio expedida por el departamento de contratos y documentación de la República Árabe Saharaui Democrática. Observándose que el título aportado no reúne los requisitos que señala el artículo reglamentario transcrito para que pueda practicar la inscripción. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de acudir al expediente del artículo 257 RRC “En cualquier otro supuesto el matrimonio sólo puede inscribirse en virtud de expediente, en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos”.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

IV.2 EXPEDIENTE PREVIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL

IV.2.1 AUTORIZACIÓN DE MATRIMONIO

Resolución de 7 de octubre de 2016 (6ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, mediante representante legal, contra auto del encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil, doña Z. M. M. nacida en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en 1987 solicitaba la autorización

para contraer matrimonio civil con don J. E. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y copia literal de partida de nacimiento, copia de acta matrimonial y copia de acta de divorcio del interesado.

2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 21 de septiembre de 2015 no autoriza la celebración del matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos, mediante representante legal, interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4. Notificado el ministerio fiscal, éste se opone al recurso interpuesto interesando la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en

realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana española, de origen marroquí y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Los interesados no conocen a los testigos del expediente, ella declara que uno de los testigos no recuerda como se llama porque lo cogieron en la fila del registro civil al fallarle el que traían, y el interesado indica que no recuerda los apellidos de ninguno de ellos. Ella declara que está divorciada hace muchos años, mientras que él dice que ella se divorció hace cuatro años, la interesada desconoce el nombre de la anterior esposa del interesado indicando que se llamaba Y. y que ha fallecido cuando se llama Z. y vive en M. El interesado no conoce todos los nombres de los hermanos de ella. Ella dice que no han hecho pedida de mano ni lo han celebrado conjuntamente con la familia, sin embargo él dice que la pedida de mano se ha hecho en casa de la novia con la familia de ésta. La interesada manifiesta que no conoce a nadie de la familia de él salvo lo que le ha contado su pareja, sin embargo él dice que ella conoce a su familia por teléfono aunque no los ha visto personalmente. El interesado dice que cuando se casen su familia sí asistirá a la boda, ella por el contrario dice que no sabe si la familia de él asistirá. Declaran que hace cuatro años presentaron un expediente de matrimonio que les fue denegado.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Melilla

Resolución de 7 de octubre de 2016 (9ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Sa Pobra.

HECHOS

1. Doña L. B. B. nacida en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por opción en el año 2007 solicita la autorización para contraer matrimonio civil por poder en España con don N. A., nacido y domiciliado en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Adjuntan como documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada y partida literal de nacimiento, atestado de soltería y atestado de residencia del interesado.

2. Ratificados los interesados, se practican las entrevistas en audiencia reservada a los interesados. El ministerio fiscal se opone a la celebración del matrimonio. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 4 de noviembre de 2015, deniega la autorización del matrimonio.

3. Notificada la resolución a los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su desestimación. El juez encargado del registro civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,

11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana española, de origen marroquí y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Los interesados son familia y ambos de confesión musulmana, la interesada declara que no se casan por el rito coránico porque al tener ella la nacionalidad española no le permiten casarse en Marruecos con un súbdito marroquí, sin embargo el interesado declara que se casan civilmente por poderes porque el trámite es más rápido y dice que después piensan casarse en Marruecos por el rito coránico, ya que ella sigue utilizando la nacionalidad marroquí y tiene la documentación marroquí en vigor. Siendo los dos de confesión musulmana lo lógico sería que ella como española solicitara un certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos y luego inscribieran el matrimonio en el registro español y no con este matrimonio civil que no tiene validez en Marruecos. Por otro lado el interesado desconoce la fecha exacta de nacimiento de ella, declara que ella tiene 7 hermanos cuando ella dice que tiene seis hermanas y dos hermanos, por otro lado ella dice que él tiene cinco hermanas y cuatro hermanos mientras que él dice que tiene ocho hermanas. Ella dice que habla bereber mientras que él dice que habla un poco de castellano. La interesada dice que él es ganadero y que se dedica a la compraventa de ganado, sin embargo él dice que es agricultor y que compra y vende productos del

campo. Desconocen gustos y aficiones de cada uno, discrepan en la frecuencia con la que se comunican ya que ella dice que cuatro días en semana mientras que él dice que dos días en semana. También difieren en cuando decidieron contraer matrimonio ya que ella dice que en el año 2012, mientras que él dice que en junio de 2013. Ella dice que vivirán en S. P. porque tienen allí a toda la familia, mientras que él dice que porque allí hay más trabajo. Ella afirma que no sabía que con este matrimonio el interesado podía obtener la nacionalidad española en menos tiempo, sin embargo él declara que lo sabe.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Sa Pobla (Illes Balears)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (10ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don A. M. C. nacido en España y de nacionalidad española y doña A. L., nacida en Rumanía y de nacionalidad rumana, solicitaba, la autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y certificado de defunción de la primera esposa del interesado y certificado de nacimiento y certificado de divorcio de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 10 de noviembre de 2015 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación del auto apelado. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre un ciudadano español y una ciudadana rumana y de las audiencias

reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan en el tiempo que hace que se conocieron ya que él dice que fue hace siete años, mientras que ella dice que fue hace seis años. El interesado declara que viven juntos desde 2011 en una casa de la que es el usufructuario y vive con ellos el hijo de ella, sin embargo ella dice que llevan viviendo juntos unos seis años y medio y viven solos. La interesada declara que tiene dos hijos que viven en Rumanía, sin embargo él dice que uno de los hijos de ella vive en Rumanía y otro en España. El interesado declara que es viudo y ella es divorciada, sin embargo ella indica que es divorciada y él no se llegó a casar. El interesado afirma que ella conoce a su mejor amigo I. y que él no conoce a los amigos de ella, sin embargo ella dice que en España no tiene amigos, que sólo le tiene a él, y que él tampoco es persona de amistades. Difieren en gustos, aficiones y cosas que tienen en común. En lo relativo a lo que hicieron el día anterior el interesado dice que estuvieron en casa, desayunaron, comieron y cenaron en casa, salieron a comprar y aprovecharon para tomar algo en un bar al lado de casa, después cenaron en casa a las 9, tomaron sopa y ella se fue a dormir primero porque estaba cansada; sin embargo ella dice que ayer estuvieron todo el tiempo en casa, aunque salieron al dentista a sacarle un diente, desayunaron, comieron y cenaron en casa, tomaron ensalada, carne y fruta, se fueron a dormir juntos a las 9. Por otro lado el interesado es 30 años mayor que ella.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Barcelona

Resolución de 11 de octubre de 2016 (3ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Almería.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Almería, don A. R. M. nacido en España y de nacionalidad española, solicitaba la autorización para contraer matrimonio civil con doña Z. A. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento del interesado, dni del

interesado, certificado de empadronamiento del interesado, declaración jurada de soltería del interesado, copia literal de la partida de nacimiento de la interesada, fe de soltería de la interesada, certificado de residencia de la interesada, traducidos y legalizados, carta nacional de identidad y pasaporte de la interesada.

2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 16 de septiembre de 2015 deniega la autorización para celebrar el matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4. Notificado el ministerio fiscal, éste se opone a la celebración del matrimonio. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero.

Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Posiblemente no tengan idioma común, ya que la interesada no entendía la mayor parte de las preguntas que se le hicieron, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, probablemente, lo que sucede en este caso. Debe subrayarse que el encargado del registro civil consular, en el acta de la audiencia reservada celebrada con la interesada pone de manifiesto que ésta apenas entiende el idioma español. En este orden de cosas, el contacto que los interesados han mantenido ha sido esencialmente telefónico. Se conocieron personalmente en el viaje que el interesado hizo a C., en agosto de 2014, que duró tan solo una semana. Volvieron a verse en abril de 2015, y durante los períodos que el interesado ha viajado a C., no han vivido juntos. Debe tenerse en cuenta, además, que la interesada desconoce en qué trabaja el contrayente, y no detalla ni las funciones ni el horario correspondiente a su ocupación laboral. Existen así mismo contradicciones sobre el lugar donde pretenden celebrar la boda. Así, él afirma que pretenden casarse en Marruecos, ante las autoridades marroquíes, ella, no obstante declara que piensan celebrar la boda en A. Finalmente, debe señalarse que no ha habido convivencia entre los interesados, como se ha dicho, durante las estancias de él en C. ha vivido con la hermana de la interesada, así mismo de las declaraciones prestadas resulta que no han viajado juntos, de forma que tampoco presentan pruebas de su relación.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Almería

Resolución de 14 de octubre de 2016 (6ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

1.- Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2.- No es válido el poder otorgado por un marroquí residente en su país para celebrar matrimonio en España en contra de la legislación nacional que rige su estado civil y la normativa que regula las relaciones internacionales de carácter consular.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Argenton.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el registro civil, don A. M. E. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en 2004 solicitaba la autorización para contraer matrimonio civil con doña I. H. nacida y domiciliada en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento del interesado y extracto de acta de nacimiento, certificado administrativo de estado civil y poder para contraer matrimonio de la interesada.

2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 22 de julio de 2015 no autoriza la celebración del matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4. Notificado el ministerio fiscal, éste se opone al recurso interpuesto interesando la confirmación del auto recurrido. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª

de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil por poder entre un ciudadano español, de origen marroquí y una ciudadana marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. El interesado, de nacionalidad española desde el año 2004, contrae matrimonio con una ciudadana marroquí en el año 2011 y se divorcia de la misma en 2014. La interesada ha otorgado una escritura notarial para poder contraer matrimonio por poderes en A., siendo la mandataria una señora de F. que vive en España a la que no conoce la interesada y que llevó el promotor al momento del otorgamiento, la interesada sabe que este tipo de enlace no es válido en Marruecos, se le informa que este tipo de matrimonio es denegado porque es contrario a la legislación marroquí sobre un nacional marroquí residente en su país, ella argumenta que opta por este tipo de enlace porque le ha dicho el promotor que en Cataluña admiten el matrimonio civil por poderes a diferencia de otras zonas de España y que será más fácil y rápido el procedimiento para obtener el visado. Se conocieron a través de una sobrina del promotor, que según éste les presentó, sin embargo ella dice que se vieron de forma fortuita en la calle. La interesada jamás ha

ido al colegio, sin embargo el interesado dice que ella tiene estudios primarios. Ella desconoce todo de él, su edad, fecha de nacimiento, cuánto tiempo lleva viviendo en España, cómo y por qué obtuvo la nacionalidad española, no está segura de su estado civil, desconoce donde trabaja, lo que gana, su nivel de estudios. Desde que se conocieron en Semana Santa se han visto dos veces y que decidieron contraer matrimonio cuando se conocieron la primera vez.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Argenton (Barcelona)

Resolución de 14 de octubre de 2016 (13ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se autoriza porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Palafrugell.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el registro civil, Don S. A. M. nacido en España y de nacionalidad española y Dª L.-C. H. L. nacida en Méjico y de nacionalidad mejicana, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento del interesado y acta de nacimiento, declaración jurada de soltería y volante de empadronamiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 6 de octubre de 2015 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento civil; 238, 245, 246 y 247 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 16-1ª de octubre, 3-1ª de noviembre, 21-2ª y 3ª y 28-2ª de diciembre de 2006; 6-3ª y 14-3ª de febrero, 30-4ª de abril, 10-2ª, 28-5ª de mayo, 9-4ª de julio y 28-6ª de septiembre, 1-3ª de octubre, 181ª de diciembre de 2007; y 31-3ª de enero de 2008.

II. Dentro de la tramitación del expediente previo a la celebración del matrimonio civil es trámite esencial la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido por el secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC e instrucción de 9 de enero de 1995, regla 3ª)

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero-en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia del matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulten para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1º CC)

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de autorizar un matrimonio entre un ciudadano español y una ciudadana mejicana y los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Las audiencias reservadas practicadas han revelado que el conocimiento respecto de sus circunstancias personales y familiares alcanza un grado que puede considerarse suficiente.

VI. Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la resolución de 9-2ª de Octubre de 1993, “ante la opción de autorizar un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este centro directivo ha de elegir la primera alternativa”. “Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el ministerio fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 CC) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y autorizar la celebración del matrimonio.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Palafrugell (Girona)

Resolución de 14 de octubre de 2016 (29ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Moraleja de Enmedio.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Dª C. R. B., mayor de edad, soltera, española nacida en España, solicita autorización para contraer matrimonio civil con Don El H. L., mayor de edad, soltero, de nacionalidad marroquí y nacido en Marruecos. Se acompaña la siguiente documentación: fotocopia del DNI de la interesada, fe de vida y estado de la interesada, certificado de nacimiento de la interesada, certificado de empadronamiento en Móstoles de la interesada, fotocopia del pasaporte del interesado, certificado de inscripción en el Registro Consular de Marruecos en Madrid del interesado, certificado marroquí de soltería del interesado, certificado marroquí de nacimiento del interesado, certificado de empadronamiento en M. del interesado y declaración jurada de los interesados de soltería y residencia.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal

alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 3 de diciembre de 2015 no autoriza la celebración del matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4. Notificado el ministerio fiscal, éste se ratifica en su anterior informe. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es

casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí, y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Así, de un lado, él no recuerda haber ido a casa de su novia mientras ella asegura que así ha sido. Él dice tener ocho hermanos, de los que dos viven en España y que dice que los conoce su novia mientras que ella cree que sólo son siete hermanos y que sólo uno vive en España, sin manifestar si conoce si quiera a este, cuando además se ha confundido al nombrarlo. Por último existen discrepancias en cuanto al desarrollo de su veraneo pues mientras que él manifiesta que ninguno salió, ella dice que sí, que fueron a B. con la hija de ella. En el recurso interpuesto no se han realizado alegaciones que desvirtúe lo anterior, por lo que puede entenderse, como veníamos diciendo que el matrimonio cuya autorización se solicita no reúne los requisitos de consentimiento necesarios para su validez. Así lo entiende esta subdirección y el juez encargado del registro civil, quien, por su proximidad con los hechos es quien mejor puede asegurarse de ello.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Moraleja de Enmedio (Madrid).

Resolución de 14 de octubre de 2016 (30ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se autoriza porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial

En las actuaciones sobre autorización de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del juez encargado del Registro Civil de Camas

HECHOS

1. Don R.-A. P. R., mayor de edad, divorciado, nacido en España y de nacionalidad española, y Dª G. A., mayor de edad, de nacionalidad rusa y nacida en Armenia según declara, Rusia según la documentación presentada, presentaron solicitud para

contraer matrimonio civil. Adjuntan como documentación: certificado de nacimiento del interesado, así como de su matrimonio y divorcio anterior, fotocopia cotejada del DNI del interesado, certificado de empadronamiento del interesado certificado ruso de nacimiento de la interesada, certificado de ausencia de acta de matrimonio de la interesada fotocopia cotejada de la tarjeta de residencia permanente de la interesada, certificado de empadronamiento de la interesada y declaración jurada de soltería de ambos interesados.

2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que no existe impedimento legal alguno para la celebración del matrimonio proyectado. Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la autorización del matrimonio. Con fecha 16 de julio de 2015 el juez encargado del registro civil deniega la autorización del matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización del matrimonio, aportando numerosas pruebas.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, se reitera en su anterior informe interesando la confirmación del auto apelado. El juez encargado del registro civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246 y 247 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 16-1ª de octubre, 3-1ª de noviembre, 21-2ª y 3ª y 28-2ª de diciembre de 2006; 6-3ª y 14-3ª de febrero, 30-4ª de abril, 10-2ª, 28-5ª de mayo, 9-4ª de julio y 28-6ª de septiembre, 1-3ª de octubre, 181ª de diciembre de 2007; y 31-3ª de enero de 2008.

II. Dentro de la tramitación del expediente previo a la celebración del matrimonio civil es trámite esencial la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido por el secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC e instrucción de 9 de enero de 1995, regla 3ª)

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero-en cuanto que por él puede en ocasiones

descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia del matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resulten para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1º CC)

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de autorizar un matrimonio entre un ciudadano español y una ciudadana de nacionalidad rusa residente en España y los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Las escuetas audiencias reservadas practicadas han revelado que el conocimiento respecto de sus circunstancias personales y familiares alcanza un grado que puede considerarse suficiente. Así se deduce de las respuestas dadas, en las que no se aprecian grandes contradicciones ni revelan desconocimiento de datos que pudieran considerarse de importancia a los efectos de poder deducir una utilización fraudulenta de la institución matrimonial, coincidiendo en cómo y cuándo se conocieron, datos sobre familiares, trabajo, circunstancias personales, etc.

VI. Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la resolución de 9-2ª de Octubre de 1993, “ante la opción de autorizar un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este centro directivo ha de elegir la primera alternativa”. “Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el ministerio fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 CC) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1.- Estimar el recurso
- 2.- Declarar que no hay obstáculo para que se autorice el matrimonio entre Don R.-A. P. R. y Dª G. A.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Camas (Sevilla).

Resolución de 18 de octubre de 2016 (2ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Lliçá d'Amunt.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Lliçá d'Amunt, doña A. B. G. nacida en España y de nacionalidad española, solicitaba la autorización para contraer matrimonio civil con don Z. A., nacido en Pakistán y de nacionalidad pakistaní. Se acompañaba la siguiente documentación: documentos de identidad de los interesados, certificado de empadronamiento de los interesados, partida de nacimiento y certificado de soltería del interesado, declaración jurada prestada por la madre del interesado ante notario pakistaní sobre estado civil del interesado, todos ellos traducidos y legalizados, certificado literal de nacimiento de la interesada, certificado de matrimonio anterior disuelto por divorcio de la interesada, fe de vida y estado de la interesada.

2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 5 de enero de 2016 deniega la autorización para celebrar el matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4. Notificado el ministerio fiscal, éste se opone a la celebración del matrimonio. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 124, 247, 358, exposición de motivos del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana española y un ciudadano pakistaní y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Don Z. desconoce la edad de la contrayente, así, afirma que no lo sabe exactamente, pero que cree que tiene 54 o 55 años. Por su parte, doña A. manifiesta que tiene 60 años. La interesada desconoce si la vivienda es de alquiler o de un amigo de don Z. Él afirma que dicha vivienda pertenece a un tío suyo. Doña A. manifiesta que cuando se encuentran en el domicilio de L. no duermen juntos, sino que ella duerme en el sofá del comedor y él en la habitación. Ello no concuerda con la declaración prestada por el interesado, en la que afirma que ambos duermen en la misma habitación. Así mismo, los interesados desconocen la formación que posee el otro. Discrepan las declaraciones prestadas en cuanto al tiempo que el interesado ha

permanecido en España, diez años según él, seis según ella, don Z. carece de residencia legal en España, además la interesada contesta explícitamente que pretenden regularizar la situación por la vía del matrimonio. Por los demás, no coinciden las declaraciones prestadas en lo relativo a las aficiones y gustos. A la pregunta relativa a qué hicieron el domingo anterior al trámite de audiencia previa se ofrecen respuestas un tanto distintas, particularmente, sobre lo que cada uno hizo después de comer. Concretamente, la interesada afirma que estuvieron juntos por la tarde, cuando don Z. manifiesta que después de comer ella se fue a L., y él a B. Finalmente, tampoco coinciden las declaraciones en cuanto a los regalos. Él afirma que doña A. le regaló tres camisetas de Lacoste y él le regaló a ella un móvil. Por su parte, la interesada declara que no recuerda cuál fue el último regalo que se hicieron, porque “no son mucho de regalar y no van bien de dinero”

VI. Debe incidirse en ciertas alegaciones del recurrente, en particular sobre la pretendida nulidad de la calificación efectuada por el encargado del registro civil. Según tales alegaciones la nulidad se funda en falta de motivación, circunstancia a la que la Ley 30/1992 anuda tal ineficacia. No cabe compartir tal apreciación, en la medida en que en el vigente régimen, la legislación sobre procedimiento administrativo no es aplicable en el ámbito del registro civil, si quiera con carácter supletorio. Dicha regulación supletoria ha de hallarse en las normas reguladoras de la jurisdicción voluntaria, así, la Exposición de Motivos del vigente Reglamento del Registro Civil pone de manifiesto que “Las normas de jurisdicción voluntaria son de aplicación supletoria, en las actuaciones del registro (...) Esta aplicación está en armonía con la especial naturaleza de la actividad pública registral, tan distinta de la típica administración del Estado, regulada por el Derecho administrativo y sujeta a la jurisdicción contencioso-administrativa. La actividad pública registral, en íntimo contacto con el Derecho común, tiene por fin crear títulos de legitimación sobre el estado civil, constituir, a veces, con otros requisitos, el propio estado y, siempre, proporcionar a los particulares una información sobre la condición civil de las personas en que por sus garantías jurídicas puedan confiar. Estamos, pues, ante cuestiones civiles típicas de la tradicionalmente llamada Administración de Justicia, y por ello, desde su origen, encomendadas a los órganos de la jurisdicción ordinaria.

Lo anterior no significa que las calificaciones del encargado no hayan de estar debidamente motivadas, por cuanto que el artículo 124 del Reglamento del Registro Civil establece con claridad dicho deber de motivación.

Ciertamente, en el presente caso, aunque el encargado ha sido algo parco en la exposición de los argumentos en que fundaba su calificación, queda suficientemente claro que se deniega la autorización de matrimonio al existir indicios racionales de simulación, suficientes para generar en el encargado la convicción de que el matrimonio no persigue sus fines típicos.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid a 18 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego

Sr. juez encargado del Registro Civil de Lliça d'Amunt (Barcelona)

Resolución de 18 de octubre de 2016 (3ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Salamanca.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Salamanca, don A. M. S., nacido en España y de nacionalidad española, solicitaba la autorización para contraer matrimonio civil con doña B. O. Z., nacida en República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Se acompañaba la siguiente documentación: acta de nacimiento y certificación literal del interesado, certificado de defunción de la anterior esposa del interesado, declaración de estado civil del interesado, documentos de identificación del interesado, acta inextensa de nacimiento y acta de soltería de la interesada, apostilladas, y certificado de empadronamiento de los interesados.

2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil, mediante auto de fecha 16 de diciembre de 2015 deniega la autorización para celebrar el matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4. Notificado el ministerio fiscal, éste se opone a la celebración del matrimonio. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York

de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. En las audiencias reservadas, don A. declara que la interesada desconoce a sus hijos, si bien doña B. afirma haberlos conocido personalmente. En el escrito de recurso dicha discrepancia pretende salvarse poniendo de manifiesto que las personas que doña B. considera que son los hijos de don A., son en realidad una pareja joven, amigos del interesado. Así mismo, en el escrito de recurso, don A. trata de justificar que no ha presentado a sus hijos por que las relaciones con ellos son malas, y que

prefiere no hablar de la cuestión con la interesada. Precisamente, lo dicho en las alegaciones puede tomarse como una muestra de cierto desconocimiento mutuo entre los contrayentes. Discrepan las audiencias reservadas, al responder cada uno de los contrayentes que habían cenado el día anterior. Finalmente, de las declaraciones prestadas resulta que la razón para contraer matrimonio no se basa en una relación sentimental al uso, si no en la enfermedad de don A., quien busca compañía y cuidados ante dicha situación.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid a 18 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico

Sr. juez encargado del Registro Civil de Salamanca

Resolución de 21 de octubre de 2016 (1ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se retrotraen las actuaciones para que una vez que se han practicado las audiencias a las interesadas el encargado emita un nuevo auto que resuelva en el sentido de su pretensión.

En las actuaciones sobre autorización para contraer matrimonio, remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por las interesadas contra acuerdo del encargado del Registro Civil de Vélez-Málaga.

HECHOS

1. Doña L. H. E. nacida en España y de nacionalidad española solicita la autorización para contraer matrimonio civil por poder en España con doña S. G. P., nacida y domiciliada en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada española y acta inextensa de nacimiento, declaración jurada de soltería y poder de representación de la interesada dominicana.

2. Ratificados los interesados, se practica la entrevista en audiencia reservada a la interesada española. Mediante exhorto de fecha 23 de mayo de 2015 el Registro Civil de Vélez-Málaga, interesa se realice la entrevista en audiencia reservada a la señora G. P. El Consulado de España en Santo Domingo emite un informe mediante el cual se opone a la celebración de la entrevista a la señora G. P., ya que la Ley dominicana no admite los matrimonios por poder. El ministerio fiscal se opone a lo solicitado. El encargado del Registro Civil de Vélez-Málaga, mediante auto de fecha 26 de junio de 2015, deniega la autorización para contraer matrimonio por poder, a la vista del informe emitido por el Consulado de España en Santo Domingo.

3. Notificada la resolución a las interesadas, éstas interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se opone al mismo interesando la confirmación de la resolución recurrida. El Juez Encargado del Registro Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

5. Mediante oficio de fecha 18 de mayo de 2016, la Dirección General de los Registros y del Notariado solicita al encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo se celebre la entrevista con la señora G. P., ya que los artículos 55 y 59 a los que se hace referencia de la Ley 659 de 17 de julio sobre actos de estado civil sobre los que supuestamente impiden el matrimonio por poder en La República Dominicana, no se hace referencia alguna a la prestación de consentimiento matrimonial por poder, únicamente el artículo 59 ordena que el consentimiento se preste por escrito en acta auténtica o en el acto de matrimonio constando en el acta y se ruega comuniquen en que se fundamenta la prohibición del matrimonio por poder.

6. Mediante oficio de fecha 20 de julio de 2016 el Consulado de España en Santo Domingo remite la audiencia reservada de la señora G. P.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 49 y 56 del Código Civil (CC); 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 243, 244 y 246 del Reglamento del Registro Civil (RRC); las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 9-1ª y 2ª de julio, 19-2ª de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000, 5-3ª de enero de 2002, 17-3ª de mayo de 2004, 29-1ª de enero de 2007, 2-6ª de abril y 5-13ª de noviembre de 2008 y 27-1ª de enero de 2009.

II. En el expediente previo al matrimonio es trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RR C).

III. Como viene reiteradamente insistiendo esta dirección general a través de su constante doctrina y mediante las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, el trámite de audiencia es fundamental y su importancia ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, por éste u otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1º CC).

IV. Dado que por parte del Consulado de España en Santo Domingo se ha remitido la entrevista en audiencia reservada de la señora G. P. y el Registro Civil de Vélez-Málaga ha realizado la entrevista a la señora H. E.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado retrotraer las actuaciones para que sea a la vista de dichas actuaciones, se dicte nuevo auto por el que se resuelva en el sentido que proceda su pretensión.

Madrid a 21 de octubre de 2016

Firmado: El Director General: Francisco Javier Gómez Gállego

Sr/a Juez Encargada del Registro Civil de Vélez-Málaga (Málaga)

Resolución de 21 de octubre de 2016 (6ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Palamós.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el registro civil, doña C. H. A. nacida en España y de nacionalidad española, y don M. I., nacido en Pakistán y de nacionalidad pakistaní, solicitaban la autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento de la interesada y certificado de nacimiento, certificado de no haber contraído matrimonio y volante de empadronamiento del interesado.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 20 de octubre de 2015 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana española y un ciudadano pakistaní y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Los interesados dicen que se conocen desde hace dos años, y cada uno vive en un domicilio diferente como ellos mismos aseguran en las entrevistas y

acreditan con los volantes de empadronamiento, sin embargo en el recurso los interesados alegan que hace más de tres años que conviven en la calle C. de P., no alegan nada en el recurso que permita suponer que tienen una relación. Las respuestas dadas por los interesados en las entrevistas son exactamente iguales, como si las hubieran aprendido de antemano. Por otro lado el interesado entró en España con visado y pasaporte griego. Ninguno de los dos trabaja. No presentan pruebas fehacientes de su relación.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid a 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico

Sr. juez encargado del Registro Civil de Palamós (Gerona)

Resolución de 21 de octubre de 2016 (8ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Cádiz.

HECHOS

1. Doña J. C. R. nacida en España y de nacionalidad española, y don J. L. G. B., nacido en España y de nacionalidad española, solicitaban la autorización para contraer matrimonio. Adjuntan como documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada.

2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se practican las entrevistas en audiencia reservada a los interesados. El ministerio fiscal no se opone a la celebración del matrimonio. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 20 de octubre de 2015, deniega la autorización del matrimonio.

3. Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que informa que debe mantenerse el auto recurrido. El juez encargado del registro civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre dos ciudadanos españoles y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan cuando y donde se conocieron ya que ella dice que se conocieron hace dos años sentados en un banco, sin embargo él dice que se conocieron hace seis años en una cafetería. Ella indica que a los quince días de conocerse iniciaron la relación sentimental y él se fue a vivir con ella, sin embargo él dice que iniciaron la relación hace tres años y se fue a vivir con ella en ese momento. La interesada declara que hace tiempo que tomaron la decisión de casarse pero hace un mes que dieron el paso, sin embargo él dice que ella quería casarse hace más de un año pero que él le dijo que era mejor darle tiempo. La interesada desconoce el nombre y los apellidos del interesado, tampoco sabe su fecha de nacimiento, el interesado desconoce la fecha de nacimiento exacta de ella. El interesado es divorciado y dice que sólo ha estado casado una vez, sin embargo ella dice que él es viudo y que se ha casado dos veces. El interesado desconoce lo que cobra ella de pensión, él se dedica a cuidarla. Ella manifiesta que han llegado a un acuerdo de que él la cuida y ella le paga los gastos, le da las medicinas y le ayuda en el aseo, dice que no tienen relaciones sexuales y entiende que no es una relación de matrimonio, sin embargo el interesado declara que no es cierto que tengan un acuerdo de este tipo y que no tienen relaciones sexuales porque ella no puede desde hace seis meses. Ella declara que ha estado en coma durante quince días, sin embargo él dice que ella ha estado en coma dos o tres días. Ella es veinte años mayor que el interesado y considera que la diferencia de edad es muy importante, sin embargo él dice que la diferencia de edad no es obstáculo alguno para su relación.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid a 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo

Sr. juez encargado del Registro Civil de Cádiz

Resolución de 21 de octubre de 2016 (11ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1. Doña B. Z. B. nacida en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2014 y don M. M., nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí solicita la autorización para contraer matrimonio civil. Adjuntan como documentación: certificado de nacimiento y volante de empadronamiento de la interesada y extracto de acta de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento del interesado.

2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se practican las entrevistas en audiencia reservada a los interesados. El ministerio fiscal se opone a la celebración del matrimonio. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 6 de noviembre de 2015, deniega la autorización del matrimonio.

3. Notificada la resolución a los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su desestimación y la confirmación del auto apelado. El juez encargado del registro civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la

inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana española, de origen marroquí y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. La interesada indica que el interesado vive en Francia y que vino el sábado pasado para hacer la entrevista, dice que vive y trabaja en Francia, sin embargo el interesado dice que viven juntos hace tres meses, desconociendo la calle donde viven, dice que antes vivía en M. en una habitación; desconoce la empresa para la que trabaja ella y lo que gana. La testigo del expediente declara que el interesado vive en España desde más de dos años y que ha residido en M., M. de E. y M. Por otro lado la interesada es 16 años mayor que el interesado. Las pruebas aportadas no son concluyentes.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid a 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico

Sr. juez encargado/a del Registro Civil de Madrid

Resolución de 21 de octubre de 2016 (12ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por la interesada, contra auto del encargado del Registro Civil de Toledo.

HECHOS

1. Doña A. M. M. M. nacida en España y de nacionalidad española, solicitaba la autorización para contraer matrimonio por poder con don A. E. M., nacido y domiciliado en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Adjuntan como documentación: certificado de nacimiento y volante de empadronamiento de la interesada y copia de acta de divorcio de mutuo acuerdo del interesado.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se practican las entrevistas en audiencia reservada a los interesados. El ministerio fiscal se opone a la celebración del matrimonio. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 21 de diciembre de 2015, deniega la autorización del matrimonio.
3. Notificada la resolución a los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que impugna el mismo e interesa la confirmación de la resolución recurrida. El juez encargado del registro civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1° CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. La interesada declara que se conocieron en 2003 mientras que él dice que fue en 2002. Ella manifiesta que mantuvieron relación hasta 2007 fecha en que el interesado regresó a Marruecos; el interesado dice que en 2008 le expulsaron a Marruecos por tráfico de drogas, y que ha convivido con la interesada catorce años (ella omite o desconoce el hecho de que él fue expulsado por tráfico de drogas, declarando simplemente que regresó a Marruecos). Ella dice que decidieron casarse hace dos o tres años pero hasta el año pasado no iniciaron los trámites, y él dice que lo decidieron hace dos años. La interesada desconoce los nombres de los padres de él ya que dice que el padre se llama I. E. M. y la madre Z. E. M. cuando se llaman B. B. A. y Z. B. A., tampoco da con exactitud los nombres de algunos de los hermanos de él. Ella desconoce el lugar de nacimiento de él. En lo relativo a gustos y aficiones discrepan ya que ella dice que no practican deportes y él señala que los dos corren, dice ella que sus aficiones son dormir y estudiar y las de él la informática, sin embargo él dice que la afición de ambos es la lectura. El interesado dice que ella habla inglés sin embargo ella dice que sólo habla español, él dice que habla francés y español, sin embargo ella dice que él habla árabe y español. El interesado declara que ella no le ayuda económicamente sin embargo ella dice que le ayuda económicamente en momentos puntuales.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid a 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego

Sr. juez encargado del Registro Civil de Toledo

Resolución de 21 de octubre de 2016 (15ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Sa Pobra.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña H. A. S. nacida en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por opción en el año 2012 solicitaba la autorización para contraer matrimonio civil por poder con Don A. H. nacido y domiciliado en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada y partida literal de nacimiento y atestado de soltería del interesado.

2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 7 de enero de 2016 no autoriza la celebración del matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto. El encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York

de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana española, de origen marroquí y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. El interesado declara que se conocieron en enero de 2012 en la boda de un primo de ella y la relación comenzó el mismo día, declara que decidieron casarse cuatro meses después de comenzar la relación, sin embargo ella se limita a contestar que se conocieron en 2012, no dice cómo ni dónde y declara que decidieron casarse en verano de 2013 pero que no se acuerda con certeza del año. Discrepan en el número de viajes que ha realizado la interesada a Marruecos ya que ella dice que ha

viajado ocho o nueve veces, sin embargo él dice que tres veces, no coincidiendo las estancias. Tampoco coinciden en lo relativo al motivo de los regalos que se han hecho ya que él dice que fue por San Valentín mientras que ella dice que sólo era un regalo y no hubo motivo. El interesado sabe que ella trabaja en la limpieza pero desconoce empresa(trabaja en casas particulares), desconoce el nivel de estudios de ella y ninguno de los dos sabe los idiomas que habla el otro; ella desconoce los ingresos que tiene él (él declara que su madre le paga en negro por podar los árboles de su casa), el interesado dice que ella vive con sus padres en una casa propiedad de éstos, mientras que ella dice que la casa donde vive con sus padres es alquilada. Desconocen gustos y aficiones, los teléfonos del otro, etc. El interesado declara que en 2010 se iba a casar con una española pero no funcionó. Siendo los dos de confesión musulmana carece de sentido celebrar un matrimonio civil español por poder que no es válido en Marruecos cuando lo lógico sería que al tener ella la nacionalidad española, solicitara un certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio coránico en Marruecos. Al preguntarle sobre esta circunstancia al interesado, contesta con evasivas.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. juez encargado del Registro Civil Consular en Sa Pobra (Balears)

Resolución de 24 de octubre de 2016 (2ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Algeciras.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el registro civil, don H. E. J., mayor de edad, nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí, y doña M. S. A. F., mayor de edad de nacionalidad española y nacida en España, solicitan autorización para contraer matrimonio civil en A. Acompañan la siguiente documentación: copia literal del acta de nacimiento del interesado, certificado de empadronamiento del interesado en el Ayuntamiento de A., certificado de inscripción del interesado en el Registro Consular de Marruecos en A., declaración jurada y certificado de soltería del interesado, fotocopia del pasaporte marroquí del interesado, certificado de empadronamiento de

la interesada en A., certificado de nacimiento de la interesada, declaración jurada y fe de vida y estado de la interesada y fotocopia del DNI de la interesada.

2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 26 de octubre de 2015 no autoriza la celebración del matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4. Notificado el ministerio fiscal, éste se ratifica en su anterior informe. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de

que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre un ciudadano marroquí residente en España y una ciudadana española nacida en España, y de las audiencias practicadas se observa una serie de discordancias y hechos que hacen suponer ciertamente que nos hallamos ante un matrimonio de conveniencia que no reúne los requisitos de validez en nuestro ordenamiento jurídico al perseguir fines impropios de esta institución. Así, la interesada manifiesta desconocer cómo se escribe el segundo apellido de su marido, así como no saber con certeza si su prometido tiene o no algún hijo de otra relación. También desconoce los hechos delictivos que se le han imputado, en su caso, al interesado ni, también en su caso, la pena o medida cautelar que esté cumpliendo su prometido. Además, se observan discordancias entre las declaraciones de las partes como el hecho de que ella manifiesta que a su hijo le lleva al colegio y le ayuda con los deberes otro pariente pues el interesado ni está en casa ni sabe leer, mientras que éste ha declarado ser quien desempeña esta función. Por último debe tenerse en cuenta que en las alegaciones realizadas en la interposición del recurso no ha quedado desvirtuado ninguno de estos hechos. Por ello podemos asegurar que el matrimonio que aquí se proyecta es de los denominados de complacencia. Así lo entiende esta subdirección y el encargado del Registro Civil de Algeciras así como el ministerio fiscal quienes, por su proximidad con los hechos son quienes más fiablemente pueden asegurarlos.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 24 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico

Sr. juez encargado del Registro Civil de Algeciras (Cádiz).

Resolución de 24 de octubre de 2016 (3ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio civil

Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el ministerio fiscal contra auto del magistrado-juez encargado del Registro Civil de Huelva.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Huelva el 29 de abril de 2015, doña A. M. P., mayor de edad, de nacionalidad española nacida en España, solicita autorización para contraer matrimonio en Marruecos con don I. S. M., mayor de edad, nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Acompaña la siguiente documentación: fotocopia del DNI de la interesada, declaración jurada de soltería de la interesada, certificado de empadronamiento en H. de la interesada, fe de vida y estado de la interesada, certificado de nacimiento de la interesada, fotocopia de la carta de identidad del interesado, fotocopia del pasaporte marroquí del interesado, copia literal del acta de nacimiento del interesado, certificado administrativo de residencia del interesado y certificado de soltería del interesado.

2. Ratificados los interesados, con fecha 29 de abril de 2015 se toma audiencia a una testigo que manifiesta que los contrayentes no incurren en causa de impedimento ni prohibición legal alguna para contraer matrimonio. Con la misma fecha se celebra audiencia reservada a la interesada y con fecha 22 de septiembre del mismo año se celebra la audiencia reservada al contrayente ante el encargado del Registro Civil Consular de Tánger.

3. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, con fecha 26 de octubre de 2015, el magistrado-juez encargado del Registro Civil de Huelva, toma declaración a la interesada para hacer las alegaciones que procedan con fecha 30 de octubre de 2015. Con la misma fecha se da traslado al ministerio fiscal que, con fecha 11 de noviembre de 2015 dicta informe ratificándose en el anterior de fecha 26 de octubre. El encargado del Registro Civil de Huelva, con fecha 18 de noviembre de 2015 dicta auto favorable ordenándose que se expida certificado de capacidad matrimonial a la vista del informe favorable emitido por el ministerio fiscal.

4. Notificados los interesados, el ministerio fiscal interpone recurso ante la Dirección General de los Recursos y del Notariado, solicitando se revoque el auto de fecha 2 de diciembre de 2015 y se resuelva no autorizar la celebración del matrimonio civil, alegando que, tal como se expuso en el informe de fecha 26 de octubre de 2015, existen indicios suficientes para considerar que el matrimonio proyectado se trata de un matrimonio de complacencia.

5. De la interposición del recurso se dio traslado a la interesada a fin de que realizase las alegaciones convenientes y, con fecha 28 de enero de 2016 se rectifica el auto dictado en el sentido de indicar que no ha quedado plenamente demostrada la existencia de elementos que excluyan la validez de este matrimonio, no pudiendo presumirse, a criterio de este tribunal que se trate de un matrimonio de complacencia. Con fecha 4 de febrero de 2016 se ordena la remisión del expediente a esta dirección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 68, 69, 70, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; y 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª y 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007; 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo de 2009.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede proporcionar. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En este caso nos hallamos ante la solicitud de autorización para contraer matrimonio en Marruecos entre una española de origen y un ciudadano marroquí, y de las audiencias reservadas a los particulares se deducen una serie de hechos que hacen suponer que el matrimonio aquí proyectado no reúne los requisitos de validez exigidos en nuestro derecho pues se trata de un matrimonio de complacencia, que busca fines que no son propios de la institución de matrimonio. Así entre estos hechos puede

resultar el hecho de que estas personas no han coincidido físicamente en más de una ocasión, aquella en la que precisamente se conocieron, no hablan un idioma en común, por lo que la comunicación telefónica tienen que realizarla a través de terceros, y por último, las partes tienen un desconocimiento recíproco de cuestiones importantes como son la dirección y nivel de ingresos de ella.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto por el ministerio fiscal y revocar resolución apelada.

Madrid, 24 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego

Sr. juez encargado del Registro Civil de Huelva.

Resolución de 28 de octubre de 2016 (20ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, con adhesión del ministerio fiscal, contra auto del encargado del Registro Civil de Melilla.

HECHOS

1. Don A-T. F-L. C. nacido en España y de nacionalidad española y Doña H. M., nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí, solicitaban la autorización para contraer matrimonio civil. Adjuntan como documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento del interesado y permiso de residencia, copia literal de partida de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se practican las entrevistas en audiencia reservada a los interesados. El ministerio fiscal no se opone a la celebración del matrimonio. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 1 de diciembre de 2015, deniega la autorización del matrimonio.
3. Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se adhiere al mismo. El juez encargado del registro civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí y de las audiencias

reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. La interesada contrajo matrimonio con un español en el año 2001, se separa del mismo en el año 2003 y se divorcia en el año 2008. Ella dice que se conocieron en el año 2002 y él dice que hace once años (si la entrevista fue en 2015 sería que se conocieron en 2004); ella afirma que viven juntos desde hace diez años y él dice que hace siete u ocho años. La interesada declara que no tienen muy claro que en el caso de casarse, si harán una fiesta o se lo gastarán en un viaje, sin embargo él dice que lo celebrarán con los más allegados. Ella afirma que el interesado no conoce a su familia porque no lo han aceptado como pareja de ella y no merecen conocerlo, sin embargo el interesado dice que la familia de ella no se opone a su relación y a que se casen. Ella desconoce desde cuando está él divorciado, declara que lleva viviendo en Melilla unos 17 años, sin embargo él dice que ella lleva entre 13 y 15 años viviendo en Melilla. El interesado dice que ella tiene seis hermanos y ella es la quinta, sin embargo ella dice que tiene nueve hermanos y ella es la más pequeña. Ella dice que le gusta pasear, montar en bicicleta y ver la tele, sin embargo él dice que a ella le gusta pasear, montar en bicicleta y bailar. Ella dice que él tiene un coche de color crema metalizado y él dice que su coche es color gris metalizado; el interesado no sabe la fecha exacta de nacimiento de ella. Por otro lado la interesada desconoce el nombre de uno de los testigos (dice que se llama Ju. cuando es Jo.) y los apellidos de los dos testigos. Según el informe del auto del encargado, los interesados solicitaron con anterioridad autorización para contraer matrimonio y se les denegó por no traer testigos que los conociesen. Las pruebas presentadas no son concluyentes.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Melilla.

Resolución de 28 de octubre de 2016 (25ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1. D^a B.-A. M. D. nacida en la República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2007 y Don H. R., nacido en Bangladesh y de nacionalidad bangladeshí, solicitaban la autorización para contraer matrimonio civil. Adjuntan como documentación: certificado de nacimiento y volante de empadronamiento de la interesada y extracto de acta de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento del interesado.

2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se practican las entrevistas en audiencia reservada a los interesados. El ministerio fiscal se opone a la celebración del matrimonio. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 29 de diciembre de 2015, deniega la autorización del matrimonio.

3. Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se reitera en su anterior informe interesando la desestimación del mismo y la confirmación del auto apelado. El juez encargado del registro civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2^a de diciembre de 2005; 31-3^a de mayo, 27-3^a y 4^a de junio, 10-4^a, 13-1^a y 20-3^a de julio, 1-4^a, 7-3^a y 9-2^a de septiembre, 9-1^a, 3^a y 5^a de octubre, 14-2^a, 5^a y 6^a de noviembre y 13-4^a y 5^a de diciembre de 2006; 25-1^a, 3^a y 4^a de enero, 2-1^a, 22-2^a, 27-3^a y 28-4^a de febrero, 30-5^a de abril, 28-6^a y 30-4^a de mayo, 11-3^a y 4^a, 12-3^a de septiembre, 29-4^a y 6^a de noviembre, 14-1^a y 4^a y 26-5^a de diciembre de 2007, 24-4^a de abril y 19-2^a de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la

inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana española, de origen dominicano y un ciudadano de Bangladesh y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. El interesado declara que vive con unos amigos que trabajan en una frutería en la que presta ayuda, sabe el nombre de tres de ellos pero no se acuerda de otro que vive con ellos, sin embargo ella declara que viven juntos desde octubre de 2014. El interesado figura empadronado en el domicilio de la interesada, al ser preguntado por esta circunstancia, el interesado declara que vive con la interesada. Declara el interesado que ella trabaja desde hace dos años de cocinera en un bar, desconociendo el horario, sin embargo ella dice que trabajó en hostelería en B. pero que ahora no trabaja. Ella tiene tres hijos, declarando que los dos mayores de 17 y 14 años nacieron en la República Dominicana y viven con ella y el pequeño de 8 años vive con el padre en B., sin embargo el interesado afirma que los hijos de la interesada, que son dos de 17 y 14 años, nacieron en España, están estudiando desconociendo todo sobre ellos. Por otro lado la interesada es 12 años mayor que el interesado. No aportan pruebas de su relación.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 28 de octubre de 2016 (29ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Toledo.

HECHOS

1. Don F.-J. B. A. nacido en España y de nacionalidad española, y Don J.-G. R. M., nacido en la República Dominicana y de nacionalidad dominicana, solicitaban la autorización para contraer matrimonio civil. Adjuntan como documentación: certificado de nacimiento certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento del contrayente español y acta inextensa de nacimiento, certificado de matrimonio y certificado de divorcio del contrayente dominicano.

2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se practican las entrevistas en audiencia reservada a los interesados. El ministerio fiscal se opone a la celebración del matrimonio. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 21 de diciembre de 2015, deniega la autorización del matrimonio.

3. Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo y la confirmación de la resolución recurrida. El juez encargado del registro civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª

de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre un ciudadano español y un ciudadano dominicano y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan en el tiempo de convivencia ya que el señor B. dice que llevan conviviendo más o menos tres años, mientras que el señor R. dice que llevan cuatro años. Desconocen el nivel de estudios del otro, así el señor B. dice que tiene estudios de 2º de empresas, de perito tasador de seguros, valorador inmobiliario y su pareja bachillerato de su país y cursos de hostelería en A., sin embargo el señor R. dice que tiene estudios de universidad de su país y cursos de hostelería en España y su pareja hizo hasta BUP. El señor B. desconoce los nombres de los hermanos del señor R., declara que a la boda no vendrá ni su familia ni la de su pareja, sin embargo el señor R. dice que a la boda irá la familia de su pareja y espera que venga la suya. No aportan pruebas fehacientes de su relación.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Toledo.

Resolución de 28 de octubre de 2016 (32ª)

IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil de Ceuta.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el registro civil, Dª F.-S. A. A. nacida en Marruecos y de nacionalidad española, con valor de simple presunción desde el año 2011 y Don H. I. S., nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí, solicitaban la autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento de la interesada y copia literal de acta de nacimiento, certificado de soltería y certificado de residencia del interesado.
2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 29 de octubre de 2015 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste se opone al recurso interpuesto interesando la confirmación del auto recurrido. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,

14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil entre una ciudadana española, de origen marroquí y un ciudadano marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando se conocieron ya que ella dice que en el verano de 2010 y él dice que en abril. Ninguno de los dos sabe la fecha de nacimiento del otro, la interesada desconoce los nombres de los hermanos de él ya que da nombres diferentes; desconocen el nivel de estudios del otro. La interesada declara que él trabaja en un local propiedad del interesado sin embargo él dice que es alquilado. Desconocen las direcciones y los teléfonos del otro, ella dice que vive en una casa propiedad de sus padres y vive con éstos y sus hermanos, sin embargo él dice que ella vive en un piso propiedad de la madre de ella con su madre y un hermano porque los padres están separados; por su parte el interesado dice que vive sólo en un

piso alquilado sin embargo ella dice que vive en un piso propiedad del padre y vive con sus padres y hermanos. Desconocen gustos, aficiones, el interesado dice que ella está operada de la vista y ella dice que no ha tenido ninguna operación. La interesada dice que vivirán en C. y aunque no tienen casa comprarán una, sin embargo él dice que el tío de ella tiene dos casas y comprarán una de ellas. En una segunda entrevista que se les practicó el interesado declara que ella vive con su tía y él con el tío de ella, que según él fue quien les presentó, dice que han celebrado la fiesta de compromiso en abril de 2014; y la interesada declara que viven juntos desde el año 2012.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Ceuta.

IV.2.2 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD MATRIMONIAL

Resolución de 7 de octubre de 2016 (8ª)

IV.2.2. Capacidad matrimonial

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados contra auto del juez encargado del Registro Civil de Agramunt.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don B. H. L. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2013, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con doña S. H. nacida y domiciliada en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento del interesado y copia literal de la partida de nacimiento, certificación de estado civil y certificación de residencia de la interesada.

2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal emite un informe desfavorable. El juez encargado del registro civil

dictó auto en fecha 10 de diciembre de 2015 no autoriza la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4. Notificado el ministerio fiscal, éste se opone al recurso interpuesto. El juez encargado da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II. Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 RRC), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio en la Marruecos, entre un ciudadano español, de origen marroquí y una ciudadana marroquí, y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Es un matrimonio concertado, ella dice que el marido de su tía paterna es tío de su marido y la familia de él fue a hablar con la familia de ella, el interesado declara que se la presentó su madre que ha sido la mediadora. Ella dice que han mantenido relación por teléfono y que no se han vuelto a ver pero él dice que se veían cada día cuando él estaba en Marruecos, el compromiso se hizo en el mismo momento de conocerse porque las dos familias lo acordaron. El interesado desconoce los estudios de ella ya que dice que tiene bachiller cuando ella asegura que estudia filología inglesa en la facultad, de él dice ella que no tiene profesión y que hace trabajos esporádicos, sin embargo él declara que es agricultor de profesión. Ella desconoce el domicilio de él en A., su número de teléfono, sus aficiones, comidas favoritas, etc. Las pruebas presentadas no son concluyentes.

VI. A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el ministerio fiscal y el juez encargado del registro civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de intermediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Agramunt (Lleida)

Resolución de 21 de octubre de 2016 (4ª)

IV.2.2. Capacidad matrimonial

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del juez encargado del Registro Civil de Calella.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el registro civil, doña L. P. M. nacida en España y de nacionalidad española solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Túnez con don A. D. nacido y domiciliado en Túnez y de nacionalidad tunecina. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada y certificado literal de nacimiento, certificación de soltería y certificación de residencia del interesado.

2. Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal emite un informe desfavorable. El juez encargado del registro civil dictó auto en fecha 10 de noviembre de 2015 no autoriza la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4. Notificado el ministerio fiscal, éste informa que debe confirmarse la resolución recurrida. El juez encargado da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de

junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II. Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 RRC), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. instrucción de 9 de Enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio en Túnez entre una ciudadana española y un ciudadano tunecino, y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Se conocieron por Facebook y después de un mes iniciaron la relación, la interesada ha ido dos veces a Túnez, el interesado declara que decidieron contraer matrimonio hace cuatro meses hablando por internet, sin embargo ella dice que lo decidieron en el primer viaje de ella en el apartamento donde estaban. Ella dice que no se han hecho ningún regalo, sin embargo él dice que un adorno en forma de corazón. Ninguno de los dos sabe los nombres de los padres del otro, el interesado desconoce la fecha y lugar de nacimiento de ella, ella desconoce el número y los nombres de los hermanos de él y él desconoce el nombre de la hermana de ella. Desconocen gustos, aficiones, comidas favoritas, deportes practicados, direcciones y teléfonos. El interesado dice que ella es diseñadora que no tiene trabajo, no sabe los estudios que tiene y los idiomas que habla, declara que aunque ella no trabaja le ha ayudado económicamente enviándole unos mil euros,

sin embargo ella dice que es contable, que está empezando un nuevo proyecto, que gana 1.500 euros y que no ayuda económicamente al interesado, desconociendo el salario de él. Por otro lado ella es 11 años mayor que el interesado. Las pruebas aportadas no son concluyentes.

VI. A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el ministerio fiscal y el juez encargado del registro civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediatez, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid a 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego

Sr. juez encargado del Registro Civil de Calella (Barcelona)

Resolución de 28 de octubre de 2016 (31ª)

IV.2.2. Capacidad matrimonial

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado contra auto del juez encargado del Registro Civil de Alcoy.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el registro civil, Don F. G. Á. nacido en España y de nacionalidad española, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con Dª K. K. nacida y domiciliada en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento del interesado y certificación literal de acta de nacimiento, fe de soltería y certificación de residencia de la interesada.

2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal emite un informe desfavorable. El juez encargado del registro civil

dictó auto en fecha 13 de abril de 2015 no autoriza la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

4. Notificado el ministerio fiscal, éste impugna el recurso interpuesto, interesando su desestimación y la ratificación del auto apelado. El juez encargado da traslado del recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo, 13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero, 25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero, 31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.

II. Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 RRC), el expediente previo para la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr. instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

III. La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este

caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

V. En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para la celebración de un matrimonio en la Marruecos, entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí, y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. No tienen idioma común como se pudo constatar en las audiencias reservadas, la interesada no habla español y el interesado no habla árabe, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Se conocieron a través de un primo de la interesada que trabajaba con el promotor, la llamó por teléfono para preguntarle si quería casarse con un español y ella contestó que sí, decidieron casarse la primera vez que se vieron, el interesado ha realizado tres viajes a Marruecos. La interesada desconoce todo sobre el interesado donde trabaja, salario, estudios, dirección, no sabe cómo es físicamente ya que dice que tiene los ojos verdes, es blanco, rubio y alto, cuando en realidad tiene los ojos marrones y el pelo moreno. El interesado dice que ella habla varios idiomas como italiano, francés y árabe cuando sólo habla árabe. Desconocen gustos y aficiones del otro. Ella declara que si el matrimonio con el interesado no le va bien se marcharía a Italia o volvería a Marruecos, dice que sus primos le han comentado que él es una buena persona, y que no ha querido casarse con alguno de su pueblo porque no quiere vivir en un pueblo sino en una ciudad. Las pruebas aportadas no son concluyentes.

VI. A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que el ministerio fiscal y el juez encargado del registro civil hayan deducido la inexistencia de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible simulación.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Alcoy.

IV.3 IMPEDIMENTO DE LIGAMEN

IV.3.2 IMPEDIMENTO DE LIGAMEN EN INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO

Resolución de 7 de octubre de 2016 (2ª)

IV.3.2. Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Mali, por un maliense que adquirió posteriormente la nacionalidad española.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don B. S. S. nacido en Mali y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2014, presentó en el registro civil impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en Mali el 2 de agosto de 2007 con doña F. K. nacida en Mali y de nacionalidad maliense. Acompañaba como documentación acreditativa de su solicitud: copia literal de acta de matrimonio local; certificado de nacimiento del interesado y certificación de nacimiento de la interesada.
2. El encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo con fecha 17 de septiembre de 2015, denegando la práctica de la inscripción, ya que en el certificado de matrimonio que aportan el interesado opta por la poligamia, si bien en cuanto a la validez del matrimonio ha de estarse a la ley local, aplicable conforme al estatuto personal de los contrayentes, es lo cierto que la ley extranjera ha de quedar aquí excluida por virtud de la excepción de orden público establecida en el artículo 12.3 del Código Civil por cuanto se trata de un matrimonio poligámico que atenta contra la concepción española del matrimonio que se funda en la igualdad total entre el hombre y la mujer.
3. Notificada la resolución a los interesados, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo por estimar que el acuerdo recurrido es ajustado a Derecho. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 8, 9, 12, 46, 65 y 73 del Código Civil (CC); 15, 16, 23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 256, 257, 258 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 14-2ª de mayo de 2001, 23-3ª de noviembre y 4-7ª de diciembre de 2002; 10-3ª de septiembre de 2003; 15-1ª de enero, 15-1ª de abril y 22-1ª de octubre de 2004 y 19-3ª de marzo de 2008.

II. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, son inscribibles en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.

III. En el presente caso, el promotor, de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2014, solicita que se inscriba en el registro civil español el matrimonio que celebró en Mali el 2 de agosto de 2007, inscripción que es denegada por el Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por estar el interesado domiciliado en España (cfr. art. 68,II, RRC), porque según se observa en el certificado de matrimonio el interesado opta por la poligamia.

IV. Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento maliense, es claro que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 CC) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la concepción española de la institución matrimonial.

V. No es cuestión de entrar a dilucidar los efectos de distinto tipo que, de acuerdo con el ordenamiento español, este hecho puede producir. Pero resulta evidente que en el registro español no puede practicarse una inscripción de matrimonio por transcripción de un acta en la que consta que uno de los contrayentes opta por la poligamia. Recuérdese que el estado civil de los contrayentes en el momento de celebración es un dato obligado en la inscripción de matrimonio (cfr. arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 7 de octubre de 2016 (4ª)

IV.3.2. Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Gambia, por un gambiano que luego adquirió la nacionalidad española.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado, contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don A. J. J. nacido en Gambia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2012, presentó en el registro civil, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en Gambia el 20 de enero de 2008 con doña N. B. nacida en Gambia y de nacionalidad gambiana. Acompañaba como documentación acreditativa de su solicitud: acta de matrimonio local; certificado de nacimiento del interesado.

2. El encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo con fecha 13 de noviembre de 2015, denegando la práctica de la inscripción, ya que el matrimonio celebrado conforme al ordenamiento de matrimonio musulmán se ha contraído según el ordenamiento jurídico de la República de Gambia que concede competencia para este tipo de negocio jurídico según la *sharía* siendo el órgano que lo emite un tribunal islámico, cuando se hace constar “matrimonio legal” lo que se está diciendo es que ambas partes aceptan “sin condición alguna” lo preceptuado en dicho cuerpo legal *sharia*, tratándose por tanto de un matrimonio poligámico, que no se puede inscribir en el Registro español por atentar contra la concepción española de matrimonio y que se funda en la igualdad entre hombre y mujer.

3. Notificada la resolución a los interesados, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo por estimar que el acuerdo recurrido es ajustado a Derecho. El encargado del registro civil consular ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 8, 9, 12, 46, 65 y 73 del Código Civil (CC); 15, 16, 23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 256, 257, 258 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 14-2ª de mayo de 2001, 23-3ª de noviembre y 4-7ª de diciembre de 2002; 10-3ª de septiembre de 2003; 15-1ª de enero, 15-1ª de abril y 22-1ª de octubre de 2004 y 19-3ª de marzo de 2008.

II. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, son inscribibles en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.

III. En el presente caso, el promotor, de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2012 solicita que se inscriba en el registro civil español el matrimonio que celebró en Gambia el 20 de enero de 2008, inscripción que es denegada por el

Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por estar el interesado domiciliado en España (cfr. art. 68,II, RRC), porque según se observa en el certificado de matrimonio se trata de un matrimonio poligámico. En el apartado 15 del certificado de matrimonio aportado se hace referencia a que se trata de un matrimonio legal, que según la ley por la que se rige (*sharia*), lo que está diciendo es que ambas partes aceptan sin condición alguna lo preceptuado por dicha ley es decir que es un matrimonio poligámico porque si fuera monogámico se haría constar como tal en el certificado de matrimonio.

IV. Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento gambiano, y, en principio, haya que aplicar el estatuto personal de los contrayentes, es claro que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 CC) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la concepción española de la institución matrimonial.

V. No es cuestión de entrar a dilucidar los efectos de distinto tipo que, de acuerdo con el ordenamiento español, este hecho puede producir. Pero resulta evidente que en el registro español no puede practicarse una inscripción de matrimonio por transcripción de un acta en la que consta que uno de los contrayentes opta por la poligamia. Recuérdese que el estado civil de los contrayentes en el momento de celebración es un dato obligado en la inscripción de matrimonio (cfr. arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 7 de octubre de 2016 (16ª)

IV.3.2. Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Senegal, por un senegalés que adquirió posteriormente la nacionalidad española.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don O. H. D. nacido en Senegal y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2014, presentó en el registro civil impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en Senegal el 21 de diciembre de

2007 con doña D. D. nacida en Senegal y de nacionalidad senegalesa. Acompañaba como documentación acreditativa de su solicitud: certificado de matrimonio constatado, donde el interesado opta por la poligamia, certificado de nacimiento del interesado y certificación en extracto de nacimiento de la interesada.

2. El encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo con fecha 26 de marzo de 2015, denegando la práctica de la inscripción, ya que en el certificado de matrimonio que aportan el interesado opta por la poligamia, si bien en cuanto a la validez del matrimonio ha de estarse a la ley local, aplicable conforme al estatuto personal de los contrayentes, es lo cierto que la ley extranjera ha de quedar aquí excluida por virtud de la excepción de orden público establecida en el artículo 12.3 del Código Civil por cuanto se trata de un matrimonio poligámico que atenta contra la concepción española del matrimonio que se funda en la igualdad total entre el hombre y la mujer.

3. Notificada la resolución a los interesados, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo por estimar que el acuerdo recurrido es ajustado a Derecho. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 8, 9, 12, 46, 65 y 73 del Código Civil (CC); 15, 16, 23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 256, 257, 258 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 14-2ª de mayo de 2001, 23-3ª de noviembre y 4-7ª de diciembre de 2002; 10-3ª de septiembre de 2003; 15-1ª de enero, 15-1ª de abril y 22-1ª de octubre de 2004 y 19-3ª de marzo de 2008.

II. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, son inscribibles en el Registro Civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.

III. En el presente caso, el promotor, de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2014, solicita que se inscriba en el registro civil español el matrimonio que celebró en Senegal el 21 de diciembre de 2007, inscripción que es denegada por el Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por estar el interesado domiciliado en España (cfr. art. 68,II, RRC), porque según se observa en el certificado de matrimonio el interesado opta por la poligamia. Además se trata de un matrimonio constatado, donde se dice que los interesados han contraído matrimonio según la costumbre no constando ni la hora, el lugar ni la autoridad ante la que se casan. Por lo que según el artículo 257, del Reglamento no cumple los requisitos que se exigen para que el matrimonio sea válido.

IV. Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento senegalés, es claro que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 CC) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la concepción española de la institución matrimonial.

V. No es cuestión de entrar a dilucidar los efectos de distinto tipo que, de acuerdo con el ordenamiento español, este hecho puede producir. Pero resulta evidente que en el Registro español no puede practicarse una inscripción de matrimonio por transcripción de un acta en la que consta que uno de los contrayentes opta por la poligamia. Recuérdese que el estado civil de los contrayentes en el momento de celebración es un dato obligado en la inscripción de matrimonio (cfr. arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 14 de octubre de 2016 (3ª)

IV.3.2. Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Gambia, por un gambiano que luego adquirió la nacionalidad española.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado, contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don F. F. K. nacido en Gambia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2007, presentó en el registro civil, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en Gambia el 18 de marzo de 2004 con doña O. T. nacida en Gambia y de nacionalidad gambiana. Acompañaba como documentación acreditativa de su solicitud: acta de matrimonio local; certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2. El encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo con fecha 17 de agosto de 2015, denegando la práctica de la inscripción, ya que el matrimonio celebrado conforme al ordenamiento de matrimonio musulmán se ha contraído según el ordenamiento jurídico de la República de Gambia que concede competencia para este tipo de negocio jurídico según la *sharíá* siendo el órgano que lo emite un tribunal islámico, cuando se hace constar “matrimonio legal” lo que se está diciendo es que

ambas partes aceptan “sin condición alguna” lo preceptuado en dicho cuerpo legal *sharia*, tratándose por tanto de un matrimonio poligámico, que no se puede inscribir en el registro español por atentar contra la concepción española de matrimonio y que se funda en la igualdad entre hombre y mujer.

3. Notificada la resolución a los interesados, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo por estimar que el acuerdo recurrido es ajustado a Derecho. El encargado del registro civil consular ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 8, 9, 12, 46, 65 y 73 del Código Civil (CC); 15, 16, 23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 256, 257, 258 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, 14-2ª de mayo de 2001, 23-3ª de noviembre y 4-7ª de diciembre de 2002; 10-3ª de septiembre de 2003; 15-1ª de enero, 15-1ª de abril y 22-1ª de octubre de 2004 y 19-3ª de marzo de 2008.

II. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, son inscribibles en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.

III. En el presente caso, el promotor, de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2007 solicita que se inscriba en el registro civil español el matrimonio que celebró en Gambia el 18 de marzo de 2004, inscripción que es denegada por el Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por estar el interesado domiciliado en España (cfr. art. 68,II, RRC), porque según se observa en el certificado de matrimonio se trata de un matrimonio poligámico. En el apartado 15 del certificado de matrimonio aportado se hace referencia a que se trata de un matrimonio legal, que según la ley por la que se rige (*sharia*), lo que está diciendo es que ambas partes aceptan sin condición alguna lo preceptuado por dicha ley es decir que es un matrimonio poligámico porque si fuera monogámico se haría constar como tal en el certificado de matrimonio.

IV. Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento gambiano, y, en principio, haya que aplicar el estatuto personal de los contrayentes, es claro que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 CC) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la concepción española de la institución matrimonial.

V. No es cuestión de entrar a dilucidar los efectos de distinto tipo que, de acuerdo con el ordenamiento español, este hecho puede producir. Pero resulta evidente que en el

registro español no puede practicarse una inscripción de matrimonio por transcripción de un acta en la que consta que uno de los contrayentes opta por la poligamia. Recuérdese que el estado civil de los contrayentes en el momento de celebración es un dato obligado en la inscripción de matrimonio (cfr. arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 14 de octubre de 2016 (11ª)

IV.3.2. Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Senegal, por un senegalés que adquirió posteriormente la nacionalidad española.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don A. A. S. G. nacido en Senegal y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2013, presentó en el registro civil impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en Senegal el 20 de junio de 1999 con Dª A. G. nacida en Senegal y de nacionalidad senegalesa. Acompañaba como documentación acreditativa de su solicitud: certificado de matrimonio local; certificado de nacimiento del interesado y permiso de residencia y certificación de nacimiento de la interesada.

2. El encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo con fecha 16 de julio de 2015, denegando la práctica de la inscripción, ya que en el certificado de matrimonio que aportan el interesado opta por la poligamia, aunque este matrimonio sea válido y subsistente conforme a la Ley senegalesa, la aplicación de esta Ley extranjera ha de quedar excluida por virtual de la excepción de orden público internacional establecida en el artículo 12.3 del Código Civil, que no puede permitir la inscripción de un matrimonio poligámico que atentaría contra la concepción española el matrimonio y contra la dignidad constitucional de la mujer.

3. Notificada la resolución a los interesados, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesa la confirmación del auto apelado al ser conforme a Derecho. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 8, 9, 12, 46, 65 y 73 del Código Civil (CC); 15, 16, 23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 256, 257, 258 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, 14-2ª de mayo de 2001, 23-3ª de noviembre y 4-7ª de diciembre de 2002; 10-3ª de septiembre de 2003; 15-1ª de enero, 15-1ª de abril y 22-1ª de octubre de 2004 y 19-3ª de marzo de 2008.

II. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, son inscribibles en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.

III. En el presente caso, el promotor, de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2013, solicita que se inscriba en el registro civil español el matrimonio que celebró en Senegal el 20 de junio de 1999, inscripción que es denegada por el Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por estar el interesado domiciliado en España (cfr. art. 68,II, RRC), porque según se observa en el certificado de matrimonio el interesado opta por la poligamia.

IV. Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento senegalés, es claro que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 CC) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la concepción española de la institución matrimonial.

V. No es cuestión de entrar a dilucidar los efectos de distinto tipo que, de acuerdo con el ordenamiento español, este hecho puede producir. Pero resulta evidente que en el registro español no puede practicarse una inscripción de matrimonio por transcripción de un acta en la que consta que uno de los contrayentes opta por la poligamia. Recuérdese que el estado civil de los contrayentes en el momento de celebración es un dato obligado en la inscripción de matrimonio (cfr. arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 21 de octubre de 2016 (5ª)

IV.3.2. Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Senegal, por un senegalés que adquirió posteriormente la nacionalidad española.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don P. D. nacido en Senegal y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2015, presentó en el registro civil impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en Senegal el 12 de julio de 1987 con doña R. T. nacida en Senegal y de nacionalidad senegalesa. Acompañaba como documentación acreditativa de su solicitud: certificado de matrimonio constatado, donde el interesado opta por la poligamia, certificado de nacimiento del interesado y permiso de residencia y certificación de nacimiento de la interesada.

2. El encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo con fecha 3 de noviembre de 2015, denegando la práctica de la inscripción, ya que se trata de un certificado de matrimonio celebrado según la costumbre, si bien en cuanto a la validez del matrimonio ha de estarse a la ley local, aplicable conforme al estatuto personal de los contrayentes, es lo cierto que la ley extranjera ha de quedar aquí excluida por virtud de la excepción de orden público establecida en el artículo 12.3 del Código Civil por cuanto se trata de un matrimonio poligámico que atenta contra la concepción española del matrimonio que se funda en la igualdad total entre hombre y mujer.

3. Notificada la resolución a los interesados, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo por estimar que el acuerdo recurrido es ajustado a Derecho. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 8, 9, 12, 46, 65 y 73 del Código Civil (CC); 15, 16, 23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 256, 257, 258 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 14-2ª de mayo de 2001, 23-3ª de noviembre y 4-7ª de diciembre de 2002; 10-3ª de septiembre de 2003; 15-1ª de enero, 15-1ª de abril y 22-1ª de octubre de 2004 y 19-3ª de marzo de 2008.

II. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, son inscribibles en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.

III. En el presente caso, el promotor, de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2015, solicita que se inscriba en el registro civil español el matrimonio que celebró en Senegal el 12 de julio de 1987, inscripción que es denegada por el Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por estar el interesado domiciliado en España (cfr. art. 68,II, RRC), porque según se observa en el certificado de matrimonio el interesado opta por la poligamia. Además se trata de un matrimonio constatado, donde se dice que los interesados han contraído matrimonio según la costumbre no constando ni la hora, el lugar ni la autoridad ante la que se casan, además el matrimonio ha sido registrado el 4 de junio de 2004. Por lo que según el artículo 257, del Reglamento no cumple los requisitos que se exigen para que el matrimonio sea válido.

IV. Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento senegalés, es claro que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 CC) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la concepción española de la institución matrimonial.

V. No es cuestión de entrar a dilucidar los efectos de distinto tipo que, de acuerdo con el ordenamiento español, este hecho puede producir. Pero resulta evidente que en el registro español no puede practicarse una inscripción de matrimonio por transcripción de un acta en la que consta que uno de los contrayentes opta por la poligamia. Recuérdese que el estado civil de los contrayentes en el momento de celebración es un dato obligado en la inscripción de matrimonio (cfr. arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid a 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 21 de octubre de 2016 (13ª)

IV.3.2. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega la inscripción por concurrir impedimento de ligamen. En el momento de celebración subsistía el anterior matrimonio del interesado.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don M. B. S. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2014, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la transcripción del matrimonio civil celebrado en Marruecos el 21 de septiembre de 2005 con Doña M. D. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: acta de matrimonio, acta de nacimiento y acta de confirmación de irrevocabilidad de divorcio del interesado y permiso de residencia y acta de nacimiento de la interesada.
2. El encargado del Registro Civil Central mediante auto de fecha 26 de octubre de 2015 deniega la inscripción del matrimonio ya que en el momento de dicho matrimonio el interesado estaba casado con Doña H. E-H. de la que se divorció de manera irrevocable mediante sentencia de divorcio de fecha 5 de diciembre de 2005.
3. Notificada la resolución, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 46, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 15 y 73 de la Ley del Registro Civil; 12, 54, 66, 240, 247, 256, 258 y 354 del Reglamento del Registro Civil; y las resoluciones, entre otras, de 19-3ª de abril, 14-4ª de mayo y 5-2ª y 31-8ª de octubre de 2001 y 1-2ª y 19-1ª de febrero, 15-1ª de junio y 4 de julio de 2002; 20-3ª y 24-3ª de octubre de 2005; 27-1ª de octubre de 2006 y 4-3ª de 6 de junio de 2007 y 8-2ª de enero de 2009.
- II. Los hechos ocurridos fuera de España que afectan a españoles se inscribirán en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC), si se cumplen, claro es, los requisitos en cada caso exigidos.
- III. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2º del Código Civil no pueden contraer matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial, norma imperativa a la que es aplicable el artículo 6.3 del mismo cuerpo legal, en virtud del cual “los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho,...”. Si no puede celebrarse, tampoco puede inscribirse en el registro civil español un

matrimonio celebrado en el extranjero que es nulo para el ordenamiento jurídico español.

IV. El matrimonio celebrado en Marruecos el 21 de septiembre de 2005, entre un ciudadano español, de origen marroquí y una ciudadana marroquí, es nulo por impedimento de ligamen porque cuando se celebró el matrimonio el interesado estaba casado con Doña H. E-H. , de la que se divorció mediante sentencia de divorcio irrevocable de fecha 5 de diciembre de 2005 dictada por el Tribunal de Apelación de B- M.. El estado civil de los contrayentes en el momento de la celebración del matrimonio es un dato obligado en la inscripción (cfr. arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC) y en el registro civil español no puede practicarse una inscripción de matrimonio en la que conste que uno de los contrayentes, en este caso el español, está casado cuando se celebra el acto.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 28 de octubre de 2016 (30ª)

IV.3.2. Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Marruecos, por un marroquí que adquirió posteriormente la nacionalidad española.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don M. B. O. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia el 6 de junio de 2008, presentó en el registro civil impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en Marruecos el 27 de marzo de 2008 con Dª J. Y. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Acompañaba como documentación acreditativa de su solicitud: acta de matrimonio de poligamia, anexo de acta de matrimonio, certificado de nacimiento del interesado y certificación de nacimiento de la interesada.

2. El encargado del registro civil central dictó acuerdo con fecha 23 de abril de 2015, denegando la práctica de la inscripción, ya que los interesados aportan un acta de matrimonio de poligamia, si bien en cuanto a la validez del matrimonio ha de estarse a la ley local, aplicable conforme al estatuto personal de los contrayentes, es lo cierto

que la ley extranjera ha de quedar aquí excluida por virtud de la excepción de orden público establecida en el artículo 12.3 del Código Civil por cuanto se trata de un matrimonio poligámico que atenta contra la concepción española del matrimonio que se funda en la igualdad total entre el hombre y la mujer.

3. Notificada la resolución a los interesados, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo por estimar que el acuerdo recurrido es ajustado a Derecho. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 8, 9, 12, 46, 65 y 73 del Código Civil (CC); 15, 16, 23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 256, 257, 258 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 14-2ª de mayo de 2001, 23-3ª de noviembre y 4-7ª de diciembre de 2002; 10-3ª de septiembre de 2003; 15-1ª de enero, 15-1ª de abril y 22-1ª de octubre de 2004 y 19-3ª de marzo de 2008.

II. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, son inscribibles en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.

III. En el presente caso, el promotor, de nacionalidad española adquirida por residencia el 6 de junio de 2008, solicita que se inscriba en el registro civil español el matrimonio que celebró en Marruecos el 27 de marzo de 2008, inscripción que es denegada por el Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por estar el interesado domiciliado en España (cfr. art. 68, II, RRC), porque los interesados aportan un acta de matrimonio de poligamia.

IV. Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento maliense, es claro que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 CC) que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la concepción española de la institución matrimonial.

V. No es cuestión de entrar a dilucidar los efectos de distinto tipo que, de acuerdo con el ordenamiento español, este hecho puede producir. Pero resulta evidente que en el registro español no puede practicarse una inscripción de matrimonio por transcripción de un acta en la que consta que uno de los contrayentes opta por la poligamia. Recuérdese que el estado civil de los contrayentes en el momento de celebración es un dato obligado en la inscripción de matrimonio (cfr. arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

IV.4 MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO

IV.4.1 INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO POR ESPAÑOL O EXTRANJERO NATURALIZADO

Resolución de 4 de octubre de 2016 (3ª)

IV.4.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Guinea por un ciudadano guineano, después nacionalizado español, porque aunque sea válido para el ordenamiento extranjero y en materia de capacidad matrimonial rija el estatuto personal de los contrayentes, uno de los cuales ahora español, es claro que la ley extranjera, aplicable como regla según nuestras normas de conflicto, ha de quedar excluida por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 Cc).

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra acuerdo del magistrado juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. El 26 de junio de 2015, don I. D. D. nacido en C. (República de Guinea) el 1 de enero de 1966, de estado civil soltero antes de la celebración del matrimonio y de nacionalidad española adquirida por residencia en fecha 28 de noviembre de 2014 y doña A. D., nacida en C. (Guinea) el 20 de febrero de 1983, de estado civil soltera antes de la celebración del matrimonio y de nacionalidad senegalesa, presentaron en el Registro Civil de Puerto del Rosario impreso de declaración de datos para la inscripción de matrimonio religioso celebrado el día 20 de agosto de 2006 en C. (Guinea).

Acompañaba, como documentación acreditativa de su pretensión: certificado del registro civil guineano acreditativo del matrimonio, traducido y legalizado, documento nacional de identidad y pasaporte del interesado, permiso de residencia de la interesada, certificado literal de nacimiento del interesado, certificado de empadronamiento. Dicha documentación fue remitida al Registro Civil Central.

2. Por acuerdo de 11 de noviembre de 2015, dictado por el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central se deniega la inscripción del matrimonio solicitado entre los promotores toda vez que sin perjuicio del sometimiento de los interesados a su estatuto personal, es claro que la aplicación de esta ley extranjera ha de quedar excluida por aplicación de la excepción de orden público internacional establecida en el artículo 12.3 del Código Civil, que no puede permitir la inscripción de un matrimonio poligámico que atentaría contra la concepción española del matrimonio.

3. Notificada la resolución al ministerio fiscal y a los promotores, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la revocación de la resolución recurrida y la inscripción del matrimonio solicitada.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que interesó su desestimación por informe de fecha 19 de abril de 2016 y el magistrado-juez encargado del Registro Civil Central dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado indicando que a su juicio procedía la desestimación del recurso interpuesto al no haber sido desvirtuados los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar tal resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 8, 9, 12, 46, 65 y 73 del Código Civil (Cc); 15, 16, 23 y 35 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 66, 68, 256, 257 y 258 del Reglamento del Registro Civil (RRC), 133, 134, 135 y 141 del Código de Familia Senegalés y las resoluciones, entre otras, de 8 de abril, 30 de septiembre y 2-2ª de noviembre de 1999, 14 de diciembre de 2000, 14-2ª de mayo de 2001, 23-3ª de noviembre y 4-7ª de diciembre de 2002, 10-3ª de septiembre de 2003; 15-1ª de enero, 15-1ª de abril y 22-1ª de octubre de 2004; 19-3ª de marzo, 30-4ª de septiembre y 11-1ª de diciembre de 2008; 23-4ª de marzo y 18-2ª de septiembre de 2009, 27-4ª de abril de 2010 y 3-2ª de enero de 2011.

II. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la condición de tales, han de inscribirse, en principio, en el registro civil español (cfr. art. 66, I, RRC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. La inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero y subsistente cuando uno de los contrayentes adquiere la nacionalidad española requiere, además del título documental oportuno o de un expediente (cfr. arts. 256 y 257 RRC), que el enlace sea válido para el ordenamiento español, siendo esto así con mayor motivo cuando uno de los contrayentes ya es español con renuncia a su nacionalidad anterior.

III. En el presente caso el interesado, de nacionalidad española adquirida por residencia el 28 de noviembre de 2014, nacido en C., solicita la inscripción en el registro civil español de matrimonio celebrado el día 20 de agosto de 2006 en C. (Guinea). La inscripción es denegada por el Registro Civil Central, a quien corresponde la competencia por estar el interesado domiciliado en España (cfr. art. 68, II RRC), por cuanto se trata de un matrimonio poligámico que atenta contra la concepción española

del matrimonio (artº 32 de la Constitución Española, 44 y siguientes del Código Civil) que se funda en la igualdad total entre el hombre y la mujer”, toda vez que en el certificado de matrimonio aportado se especifica que el matrimonio se ha celebrado con arreglo a los usos y costumbres del país. De acuerdo a la información proporcionada por el Consulado español en Bata, el denominado matrimonio consuetudinario de Guinea Ecuatorial admite, con plena eficacia civil, la celebración de varios matrimonios consuetudinarios por la misma persona sin necesidad de disolución del vínculo previo.

IV. En definitiva, aun cuando en principio, rija el estatuto personal de los contrayentes, es claro que en este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 CC) que impide la inscripción de un matrimonio poligámico que atenta contra la concepción española del matrimonio y la dignidad constitucional de la mujer y afecta directamente a la organización social.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 4 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 7 de octubre de 2016 (3ª)

IV.4.1. Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio celebrado en Marruecos, por quien luego se hizo español, porque al casarse por poder y no comparecer ningún contrayente en la ceremonia, no cumple los requisitos del artículo 55 del Código Civil.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Doña H. T. G. nacida en Marruecos y de nacionalidad española obtenida por residencia en 2008, presentó ante el Registro Civil Central, hoja de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado por poder en Marruecos el 6 de julio de 1991 con don A. B. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de matrimonio, certificado de nacimiento de la interesada y permiso de residencia, certificado de nacimiento y certificado de defunción del interesado.

2. Mediante acuerdo de fecha 4 de agosto de 2015 el encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción del matrimonio ya que en el presente caso el certificado de matrimonio de los promotores consta que ambos esposos otorgan poder a favor de

un tercero para que actúe en su nombre en el acto de su contrato de matrimonio, el esposo, en el momento del matrimonio es representado por don A. B. y la esposa es representada por don A. T. Al no comparecer ninguno de los dos contrayentes el citado matrimonio no reúne los requisitos legales para el ordenamiento jurídico español, establecidos en el artículo 55 del Código Civil.

3. Notificados los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que interesa su desestimación y la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 55 del Código civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil.

II. En el presente caso, la interesada de nacionalidad española obtenida por residencia, en el año 2008, pretende inscribir un matrimonio que se celebró por poder en Marruecos en 1991 sin embargo la inscripción que es denegada por el juez encargado porque los interesados se casaron mediante representante sin estar al menos uno presente en la ceremonia.

III. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse la cuestión sobre si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado, según se dice, en Marruecos en 1991.

IV. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central por estar el promotor domiciliado en España. (cfr. art. 68,II RRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del Registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. arts. 23 LRC y 85 y 256-3º RRC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento “en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos”.

V. En el caso actual, los interesados aportan un acta matrimonial en la que consta que ambos esposos otorgan poder a favor de un tercero para que actúe en su nombre en el contrato de matrimonio, así el interesado es representado por don A. B. y la interesada por don A. T., al no comparecer ninguno de los contrayentes en el acto de matrimonio, éste no reúne los requisitos establecidos en el artículo 55 del Código Civil para su inscripción: “ podrá autorizarse en el expediente matrimonial que el contrayente no resida en el distrito o demarcación del juez, alcalde o funcionario autorizante celebre

el matrimonio por apoderado a quien haya concedido poder especial en forma auténtica, pero siempre será necesaria la asistencia personal del otro contrayente”.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 14 de octubre de 2016 (8ª)

IV.4.1. Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio celebrado en Senegal, entre una española y un senegalés, porque no hay certificación del registro correspondiente y porque en el expediente del art. 257 del Reglamento no se ha acreditado la celebración en forma del matrimonio.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Doña I. A. C. nacida en España y de nacionalidad española y don M. L. F., nacido en Senegal y de nacionalidad senegalesa, presentaron ante el Registro Civil Central, hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Senegal el 23 de diciembre de 2012. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, certificado de matrimonio constatado, certificado de nacimiento de la interesada y extracto del registro de las partidas de nacimiento del interesado.
2. Mediante auto de fecha 4 de marzo de 2015, el encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción del matrimonio pretendida ya que presenta un certificado de matrimonio celebrado al estilo del país, porque la certificación de matrimonio expedida por el registro civil no cumple los requisitos necesarios para su inscripción.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 65 del Código Civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 4-2ª de junio de 2001; 9-2ª y 24-2ª de mayo de 2002; 13-3ª de octubre de 2003; 17-2ª de febrero, 31-5ª de mayo y 2-2ª de noviembre de 2004; 16-2ª de noviembre de 2005 y 17-3ª de marzo de 2008.

II. En el presente caso, la interesada de nacionalidad española pretende inscribir un matrimonio que se celebró en Senegal el 23 de diciembre de 2012 sin embargo la inscripción que es denegada por el Juez Encargado por estimar que no está suficientemente probada la celebración del acto cuya inscripción se solicita ni acreditados determinados datos de los que la inscripción hace fe.

III. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse la cuestión sobre si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado, según se dice, en Senegal en 2012.

IV. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central por estar la promotora domiciliada en España (cfr. art. 68,II RRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. arts. 23 LRC y 85 y 256-3º RRC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento “en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos”.

V. En el caso actual, los interesados presentan un “acta de matrimonio constatado” celebrado según la costumbre. Este tipo de matrimonios son una forma de unión conyugal que produce efectos en Senegal, tratándose de una forma de matrimonio poligámico que permite la subsistencia de otros vínculos matrimoniales anteriores o posteriores al mismo. Esta forma de matrimonio choca frontalmente con el sistema jurídico matrimonial instituido en nuestro país. Los interesados con el recurso presentan una certificación literal de acta de matrimonio que tampoco es válida para su inscripción.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 14 de octubre de 2016 (9ª)

IV.4.1. Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio celebrado en Marruecos, por quien luego se hizo español, porque no hay certificación del registro correspondiente y porque en el expediente del art. 257 del Reglamento no se ha acreditado la celebración en forma del matrimonio.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don A. S. R. nacido en Marruecos y de nacionalidad española obtenida por residencia en 2013, presentó ante el Registro Civil Central, hoja de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en Marruecos en el 16 de febrero de 2000 con doña M. K. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, acta de confirmación de matrimonio, certificado de nacimiento del interesado y copia literal de acta de nacimiento y permiso de residencia de la interesada.

2. El encargado del Registro Civil Central mediante acuerdo de fecha 21 de agosto de 2014 deniega la inscripción de matrimonio ya que no ha quedado suficientemente acreditada la celebración del matrimonio, el lugar y la fecha en que tuvo el mismo toda vez que en el certificado emitido no consta autoridad competente ante la cual se celebró el matrimonio y los testigos en el certificado emitido no asistieron al acto del matrimonio y tan sólo conocen los hechos por referencia.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que interesa la desestimación del mismo y la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 65 del Código Civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones de 4-2ª de junio de 2001; 9-2ª y 24-2ª de mayo de 2002; 13-3ª de octubre de 2003; 17-2ª de febrero, 31-5ª de mayo y 2-2ª de noviembre de 2004; 16-2ª de noviembre de 2005 y 17-3ª de marzo de 2008.

II. En el presente caso, el interesado de nacionalidad española obtenida por residencia, en el año 2013, pretende inscribir un matrimonio que se celebró en Marruecos en 2000 sin embargo la inscripción que es denegada por el juez encargado por estimar

que no está suficientemente probada la celebración del acto cuya inscripción se solicita ni acreditados determinados datos de los que la inscripción hace fe.

III. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse la cuestión sobre si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado, según se dice, en Marruecos en 2000.

IV. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central por estar el promotor domiciliado en España (cfr. art. 68,II RRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. arts. 23 LRC y 85 y 256-3º RRC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento “en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos”.

V. En el caso actual, los interesados aportan “copia de acta de confirmación de matrimonio”, donde se expresa, “ante doce testigos, que los interesados declaran que están casados desde hace aproximadamente un año anterior a la fecha”. No se precisan las circunstancias en las que se llevó a cabo el matrimonio como lugar, hora, autoridad ante la que se celebró, etc.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 14 de octubre de 2016 (12ª)

IV.4.1. Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio celebrado en Senegal, por dos guineanos que adquirieron posteriormente la nacionalidad española, porque no hay certificación del registro correspondiente y porque en el expediente del art. 257 del Reglamento no se ha acreditado la celebración en forma del matrimonio.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. D^a M. G. M. nacida en Guinea Bissau y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2014, presentó ante el Registro Civil Central, hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Senegal, según la costumbre el 10 de noviembre de 1989 con Don P. M. Da C., nacido en Guinea Bissau y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2011. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, certificado de matrimonio constatado, certificado de nacimiento de la interesada y certificado de nacimiento y certificado de defunción del interesado.

2. Mediante auto de fecha 15 de septiembre de 2015, el encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción del matrimonio pretendida ya que presenta un certificado de matrimonio celebrado según la costumbre, porque la certificación de matrimonio expedida por el registro civil no cumple los requisitos necesarios para su inscripción.

3.- Notificados los interesados, la interesada interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo por estimar que el acuerdo recurrido es ajustado a Derecho. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 65 del Código Civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones de 4-2^a de junio de 2001; 9-2^a y 24-2^a de mayo de 2002; 13-3^a de octubre de 2003; 17-2^a de febrero, 31-5^a de mayo y 2-2^a de noviembre de 2004; 16-2^a de noviembre de 2005 y 17-3^a de marzo de 2008.

II. En el presente caso, la interesada de nacionalidad española pretende inscribir un matrimonio que se celebró en Senegal el 10 de noviembre de 1989 sin embargo la inscripción que es denegada por el juez encargado por estimar que no está suficientemente probada la celebración del acto cuya inscripción se solicita ni acreditados determinados datos de los que la inscripción hace fe.

III. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse la cuestión sobre si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado, según se dice, en Senegal en 1989.

IV. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central. por estar el promotor domiciliado en España. (cfr. art. 68,II RRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del registro extranjero,

expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. arts. 23 LRC y 85 y 256-3º RRC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento “en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos”.

V. En el caso actual, los interesados presentan un “acta de matrimonio constatado” celebrado según la costumbre, el 10 de noviembre de 1989 y registrado por la oficina del estado civil senegalesa el 2 de enero de 2009. El certificado presentado no es válido porque no ha quedado acreditado la celebración del matrimonio, según el artículo 257 del Reglamento del Registro Civil.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 21 de octubre de 2016 (3ª)

IV.4.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque los interesados se han divorciado mediante sentencia emitida por un juzgado español, habiendo sido inscrito dicho divorcio en el registro español.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Doña L. A. H. nacida en Bolivia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2014, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Bolivia el 16 de junio de 1993 con don G. A. V. nacido en Bolivia y de nacionalidad boliviana. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento de la interesada y permiso de residencia y certificado de nacimiento del interesado y anotación soporte, realizada por el Registro Civil Central, de celebración de dicho matrimonio e inscripción de divorcio del mismo matrimonio realizada por el mismo Registro.

2. Con fecha 8 de octubre de 2015 el encargado del registro civil dicta auto denegando la inscripción del matrimonio al no ostentar la nacionalidad española ninguno de los contrayentes en el momento de la celebración ni al disolverse éste.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar el matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que impugna el mismo e interesa la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 49 y 56 del Código Civil (CC); 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 243, 244 y 246 del Reglamento del Registro Civil (RRC); las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 9-1ª y 2ª de julio, 19-2ª de octubre y 16 de diciembre de 1996; 13 de marzo de 2000, 5-3ª de enero de 2002, 17-3ª de mayo de 2004, 29-1ª de enero de 2007, 2-6ª de abril y 5-13ª de noviembre de 2008 y 27-1ª de enero de 2009.

II. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.

III. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central por estar los promotores domiciliados en España. (cfr. art. 68,II RRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. arts. 23 LRC y 85 y 256-3º RRC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento “en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos”.

IV. En este caso los interesados pretenden inscribir un matrimonio celebrado en Bolivia el 16 de junio de 1993, ambos eran bolivianos en el momento del matrimonio, y posteriormente la interesada obtuvo la nacionalidad española en el año 2014. En el expediente consta un asiento, meramente informativo, de dicho matrimonio realizado por el Registro Civil Central con fecha 18 de julio de 2014. Los interesados se divorciaron mediante sentencia de 31 de enero de 2013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Alcobendas, dicho divorcio se inscribió también por el Registro Civil Central con fecha 6 de junio de 2012. En ambos casos, es decir en la celebración del matrimonio y en su divorcio, los interesados eran bolivianos, por este motivo el encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción de dicho matrimonio, sin embargo según el artículo 66 del Reglamento del Registro Civil “en el registro constarán los hechos que afecten a españoles, aunque determinen la pérdida de su condición de tales o hayan acaecido antes de adquirirla, también se inscribirán los que afecten mediatamente a su estado civil. La duda sobre la nacionalidad del sujeto, no es obstáculo para la inscripción de los hechos”. Por otro lado en el recurso

interpuesto por los interesados no queda claro la petición de los interesados, o bien solicitan nuevamente la inscripción del matrimonio o bien solicitan la autorización del mismo. Si es el primer caso, no se puede inscribir un matrimonio que ha sido disuelto por divorcio por un juzgado español, si es el segundo caso, es decir solicitan autorización para contraer matrimonio, tendrían que hacer una nueva solicitud de autorización para contraer matrimonio en el registro civil del domicilio de los interesados.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto no confirmando la resolución apelada.

Madrid a 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 28 de octubre de 2016 (18ª)

IV.4.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

No es inscribible el matrimonio celebrado en Senegal, entre una española, de origen senegalés, y un senegalés, porque no hay certificación del registro correspondiente y porque en el expediente del art. 257 del reglamento no se ha acreditado la celebración en forma del matrimonio.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Doña F-B. S. D. nacida en Senegal y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2013, presentó ante el Registro Civil Central, hoja de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Senegal el 3 de diciembre de 2012 con Don A. B. S., nacido en Senegal y de nacionalidad senegalesa. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, extracto de registro de los actas de matrimonio, certificado de nacimiento de la interesada y extracto del registro de las actas de nacimiento del interesado.

2. Mediante auto de fecha 19 de junio de 2015, el encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción del matrimonio pretendida ya que presenta un certificado de matrimonio celebrado al estilo del país, es decir en forma consuetudinaria, que es una forma de unión conyugal que produce efectos en Senegal y es una forma de matrimonio poligámico que permite la subsistencia de otros vínculos anteriores o posteriores al mismo. Sus efectos se producen con independencia de su inscripción, la cual es discrecional y puede efectuarse por medio de una simple declaración.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 65 del Código Civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones de 4-2ª de junio de 2001; 9-2ª y 24-2ª de mayo de 2002; 13-3ª de octubre de 2003; 17-2ª de febrero, 31-5ª de mayo y 2-2ª de noviembre de 2004; 16-2ª de noviembre de 2005 y 17-3ª de marzo de 2008.

II. En el presente caso, la interesada de nacionalidad española pretende inscribir un matrimonio que se celebró en Senegal el 3 de diciembre de 2012, sin embargo la inscripción es denegada por el juez encargado por estimar que no está suficientemente probada la celebración del acto cuya inscripción se solicita ni acreditados determinados datos de los que la inscripción hace fe.

III. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse la cuestión sobre si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado, según se dice, en Senegal en 2012.

IV. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central por estar la promotora domiciliada en España (cfr. art. 68, II RRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. arts. 23 LRC y 85 y 256-3º RRC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del reglamento “en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos”.

V. En el caso actual, los interesados presentan un “acta de matrimonio celebrado según la costumbre”. Este tipo de matrimonios son una forma de unión conyugal que produce efectos en Senegal, tratándose de una forma de matrimonio poligámico que permite la subsistencia de otros vínculos matrimoniales anteriores o posteriores al mismo. Esta forma de matrimonio choca frontalmente con el sistema jurídico matrimonial instituido en nuestro país. Por otro lado el certificado presentado no ofrece las garantías necesarias para su inscripción pues no se precisan las circunstancias en las que se celebró el matrimonio como lugar, hora, autoridad ante la que se celebró, etc.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

IV.4.1.1 Se deniega la inscripción por ausencia de consentimiento matrimonial

Resolución de 4 de octubre de 2016 (1ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra resolución del encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

HECHOS

1. Don N. R. A. O., nacido en S. V., M. (República Dominicana) y de nacionalidad dominicana, presentó en el Registro Civil del Consulado español en Santo Domingo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 24 de julio de 2014 con doña F. A. H. nacida en L. P., T. (República Dominicana) y de nacionalidad española de origen adquirida por opción el 17 de diciembre de 2009. Adjuntan como documentación: documentos de identidad y pasaporte de los interesados, acta inextensa de matrimonio legalizada, acta inextensa de divorcio del esposo legalizada, certificación literal de nacimiento de la interesada, acta inextensa de nacimiento del interesado, acta inextensa del primer matrimonio del interesado, acta de nacimiento y declaración jurada de soltería del interesado.
2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada. Con fecha 13 de noviembre de 2015 el encargado del registro civil consular dicta resolución denegando la inscripción del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al Canciller de dicho Consulado General, en ejercicio de las funciones correspondientes al ministerio fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del

expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el

mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre una ciudadana española y un ciudadano dominicano, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Existen numerosas contradicciones en las declaraciones prestadas en dicha audiencia reservada, que ponen de manifiesto cierto desconocimiento mutuo entre los contrayentes, al menos de su respectiva situación con posteridad a la celebración del matrimonio. En primer lugar, don N. desconoce la fecha de nacimiento de la contrayente, también afirma que su cónyuge tiene seis hermanos cuando en realidad son siete. Discrepan las declaraciones en cuanto al momento en que se conocieron, así como las relativas a la duración y el momento en que iniciaron su relación sentimental. Así, don N. manifiesta que se conocieron en 1986, cuando doña F. declara que se conocen desde 1989. En cuanto al inicio de la relación sentimental la interesada manifiesta que son novios desde 1990, don N., no obstante, declara que tuvieron una relación sentimental desde 1991 hasta 1996, y nuevamente desde 2012 hasta ahora. Se contradicen las declaraciones relativas a la ocupación e ingresos de doña F. El interesado manifiesta que la otra contrayente cuida a gente mayor, no obstante ésta declara que es empleada de hogar. Así mismo, ella declara que ingresa unos 900 euros al mes, si bien el interesado afirma que tales ingresos ascienden a 1000 euros. Por último, de las declaraciones resulta que apenas ha existido convivencia entre los interesados, concretamente doña F. viajó dos veces a República Dominicana, una de ellas en 2012, durante un mes, y la segunda en 2014, durante veinte días aproximadamente, viaje en el que se celebró el matrimonio.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este

camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 4 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (5ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

1º. Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º. Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

HECHOS

1. Don T. Á. B. O. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana, presentó en el Consulado español en Santo Domingo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 24 de junio de 2006 con doña R. P. P., nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2013. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento de la interesada y acta inextensa de nacimiento del interesado.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 24 de noviembre de 2015 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3. Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del

expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado informando desfavorablemente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II. Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en La República Dominicana el 24 de junio de 2006 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, la interesada adquiere después la nacionalidad española por residencia en el año 2013.

III. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta Dirección General dictó en su momento la instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad

conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI. Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el registro civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 LRC), la doctrina oficial de este centro directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 CC), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las resoluciones de esta dirección general en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII. Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este centro directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es

cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 CC) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 CC), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, “*ipso iure*” e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 CC), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII. En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos dominicanos celebrado en La República Dominicana y, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Se conocieron en el año 2000 porque eran vecinos, ella dice que los presentó una hermana de él. El interesado desconoce la fecha y las circunstancias en que la interesada vino a España ya que dice que fue el 25 de octubre de 2007 porque una hermana la pidió, sin embargo ella dice que vino por un visado de trabajo el 24 de octubre de 2006. Ninguno de los dos sabe la fecha de nacimiento del otro, el interesado desconoce número y nombres de los hermanos de ella y ella desconoce cuántos hermanos tiene en total el interesado. Ella dice que no han convivido mientras que él dice que han convivido dos años. Ella afirma que ha ido varias veces a la isla sin poder precisar fechas, mientras que el interesado dice que ella ha viajado tres veces. Ella declara que él trabaja en la construcción y gana 8.000 pesos mientras que él dice que es carpintero y gana 9.500 pesos, él tampoco sabe el salario que tiene ella. El interesado afirma tener tres sobrinos viviendo en España, sin embargo ella dice que él tiene una prima en B. a la que no conoce, desconocen estudios e idiomas hablados

por cada uno. Ella dice que sus aficiones favoritas son ir a la iglesia, salir de tiendas, cine o tomar un helado, sin embargo él dice que la afición de ella es ir a la iglesia.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (7ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

1º. Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º. Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

HECHOS

1. Don N. M. H. A. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana, presentó en el Consulado español en Santo Domingo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 16 de abril de 2014 con doña I. D. R. A., nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia el 28 de agosto de 2014. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento de la interesada y acta inextensa de nacimiento, acta inextensa de matrimonio y acta inextensa de divorcio del interesado.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 30 de noviembre de 2015 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3. Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del

expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado informando desfavorablemente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II. Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en La República Dominicana el 16 de abril de 2014 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, la interesada adquiere después la nacionalidad española por residencia el 28 de agosto de 2014.

III. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad

conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI. Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el registro civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 LRC), la doctrina oficial de este centro directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 CC), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las resoluciones de esta dirección general en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII. Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este centro directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es

cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 CC) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 n°3 CC), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, “*ipso iure*” e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 CC), y ello cualquiera sea la *causa simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII. En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos dominicanos celebrado en La República Dominicana y, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados declaran que se conocen desde siempre, retomaron el contacto en el año 2013 en un viaje que hace la interesada a la isla e inician la relación en ese momento, en el siguiente viaje de la interesada contraen matrimonio. La interesada declara que han convivido seis días antes de contraer matrimonio. El interesado desconoce alguno de los nombres de los hermanos de ella. El interesado detalla los viajes que ella ha realizado a la isla, sin embargo ella dice que no ha viajado. Ella dice que él trabaja de electricista y gana 150 euros al mes, sin embargo él dice que no trabaja. En lo relativo a la frecuencia de las comunicaciones, el interesado declara que se comunican dos veces a la semana por teléfono y diariamente por wasap, sin embargo ella dice que se comunican por wasap varias veces al día. Ella dice que le gusta el fútbol y él dice que a ella le gusta la música y ver televisión. En lo relativo al estado civil de cada uno antes de casarse, ella indica que ambos eran

solteros mientras que él dice que era divorciado y ella soltera. No coinciden en lo referente al nivel de estudios de ella.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (11ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Doña P. F. P. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2003 presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 13 de agosto de 2008 con don F. G. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento de la interesada y pasaporte y acta inextensa de nacimiento del interesado.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. Con fecha 17 de septiembre de 2015 el encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio ya que los interesados habían solicitado la inscripción de su matrimonio ante el Consulado de España en Santo Domingo que procedió a denegarlo mediante auto de fecha 20 de noviembre de 2009, los interesados recurrieron ante la Dirección General de los Registros y del Notariado que ratificó el auto apelado mediante resolución de 9 de diciembre de 2010. Como no se han desvirtuado los hechos que motivaron la citada resolución denegatoria, procede su denegación.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que impugna el mismo interesando su desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se

llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre una ciudadana española, de origen dominicano y un ciudadano dominicano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados habían solicitado la inscripción de su matrimonio ante el Consulado de España en Santo Domingo, siendo denegada dicha inscripción mediante auto de fecha 20 de noviembre de 2009, los promotores recurrieron dicho auto ante la Dirección General de los Registros y del Notariado que ratificó el auto apelado mediante resolución de fecha 9 de diciembre de 2010. En las audiencias reservadas se observan varias contradicciones, así por ejemplo el interesado en una primera audiencia dice que ella lleva en España 15 años, mientras que en una segunda audiencia dice que lleva 25 años. Declara primero, que ella está en paro y luego dice que es ama de llaves en una casa de familia; ella dice que él tiene dos hermanos mientras que él dice que tiene tres. El interesado manifiesta que no han solicitado la inscripción de su matrimonio en el Consulado correspondiente cuando es la segunda vez que lo solicitan. Los dos coinciden en señalar que se conocieron en un comedor en el año 2003, sin embargo mientras que ella no especifica más, él dice que se detuvo a comer en un comedor de un hermano de ella, ella había ido desde España y le estaba ayudando. En lo relativo a cuando y donde decidieron contraer matrimonio discrepan ya que ella dice que en 2008 mientras que él dice que en 2013 (se casaron en 2008). El interesado declara que es representante de venta de ferretería y ella está en paro, sin embargo ella dice que él es vendedor ambulante de ferretería. Las pruebas aportadas no son concluyentes.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento

del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 7 de octubre de 2016 (12ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

HECHOS

1. Doña S. M. H., nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana, presentó en el Consulado español en Santo Domingo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 14 de noviembre de 2014 con don L. M. T. B. nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y acta inextensa de nacimiento y declaración jurada de estado civil de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 10 de diciembre de 2015 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados se conocen desde el 18 de diciembre de 2012 a través de una red social mediante un perfil de un amigo llamado Á. R., es de destacar que en las conversaciones vía wasap presentadas como pruebas el nombre que aparece en dicha documentación es el de Á. R. y no el de L. M. como aparece en alguno de los papeles. No queda claro por las conversaciones si con quien mantiene la relación es con Á. R. El interesado ha realizado un viaje el 8 de octubre de 2013 con una estancia de 17 días y el segundo de los viajes fue el 31 de octubre de 2014 con una estancia de 33 días, en este viaje se casaron. El interesado dice que a la boda fueron siete personas y ella dice que fue un compartir íntimo. Ella dice que él ha tenido tres hijos uno de ellos fallecido, él no hace referencia a este hecho.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (13ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

HECHOS

1. Doña S. G., nacida en Argentina y de nacionalidad argentina, presentó en el Consulado español en Buenos Aires, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Argentina el 17 de septiembre de 2009 con don R. N. C., nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio de la interesada y certificado de nacimiento del interesado.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 29 de julio de 2015 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de

diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Argentina entre un ciudadano español y una ciudadana argentina y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. La interesada era la cuidadora de una vecina del interesado, cuando ésta falleció pasó a cuidar a la esposa del promotor, y cuando falleció ésta

pasó a cuidar al interesado. Ella indica que fue él el que tomó la decisión de casarse porque, al no tener hijos, no quería dejar la herencia a la familia de su anterior esposa, manifestando que reciben amenazas por parte la familia de la anterior esposa del interesado, contraen matrimonio al año de haber enviudado el interesado y a los tres meses de haberse divorciado ella. Declara que no han inscrito el matrimonio antes por ignorancia pero que ahora les asesora un abogado. Viven los dos con el hijo de ella. La interesada no supo especificar cuantas propiedades tiene él en Argentina, dijo dos o tres y tiene un apartamento en O. Ella no recuerda quienes fueron los testigos de la boda, tampoco sabe los nombres de los padres del interesado. Según el encargado del registro civil consular, no fue posible practicarle la audiencia al interesado por la enfermedad que padece (P.), dando unas respuestas balbuceadas e inexactas, evidenciando un desconocimiento absoluto del trámite que se estaba realizando. Se solicitó la presentación de un certificado de discapacidad del interesado y ella dijo que no era posible. Por otro lado el interesado es 23 años mayor que la interesada.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en Buenos Aires (Argentina)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (14ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Pekín.

HECHOS

1. Don A. P. G., nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Pekín, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en China el 2 de diciembre de 2015 con doña H. L. nacida en China y de nacionalidad china. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y pasaporte, certificado de nacimiento y acuerdo de divorcio de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 23 de diciembre de 2015 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se remite a su anterior informe. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta Dirección General dictó en su momento la instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006,

dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en China entre un ciudadano español y una ciudadana china y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. No tienen idioma común, la interesada necesitó un intérprete para poder realizar la entrevista, aunque ella declara que se comunican en español, se pudo constatar que la comunicación entre ellos era muy limitada, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y que no tengan un idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Se conocieron en España, en el año 2010, según el interesado dicha cafetería estaba regentada por una familia china a cuyos hijos cuidaba la interesada (este hecho es omitido por la interesada). En lo relativo a cómo llegó ella a España, manifiesta que lo

hizo por influencia de un pariente que había trabajado en la embajada de China en Argentina, dice que vino a aprender español, pero cuando llegó le robaron dinero, sin embargo posteriormente reconoce que entró en España de manera ilegal, haciendo escala en Italia con un visado *Schengen* en Polonia, la interesada permaneció en España hasta el 24 de febrero de 2015, fecha en la que regresó a su país para preparar la documentación para contraer matrimonio. Declara la interesada que poco después de conocer el interesado estuvieron conviviendo desde agosto de 2014 hasta el 24 de febrero de 2015, dice que cuidó del interesado porque tiene conocimientos de enfermería y éste tiene salud delicada. El interesado declara que ella tiene un hijo mientras que ella dice que no tiene hijos. Ella afirma que se ha divorciado dos veces añadiendo que él desconoce este hecho. El interesado tiene 74 años y está jubilado declarando que fue técnico de televisión y se dedicó a hacer algún negocio, sin embargo ella dice que él tenía una tienda o supermercado. El interesado manifiesta que ella había trabajado en España como canguro y como empleada de servicio doméstico, sin embargo ella declara que cuando estuvo en España no había trabajado nunca. El interesado declara que espera que ella pueda volver a España porque él necesita una persona que le cuide debido a su estado de salud. El interesado es 20 años mayor que la interesada.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en Pekin (China)

Resolución de 7 de octubre de 2016 (15ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

HECHOS

1. Doña M. E. C. Y., nacida en Cuba y de nacionalidad cubana presentó en el Consulado español en La Habana, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Cuba el 11 de diciembre de 2013 con don M. E. B. nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado del interesado y certificado de nacimiento y certificación de divorcio de la interesada.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 30 de octubre de 2015 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, el cual estima que se han guardado en su tramitación las prescripciones legales y en consecuencia, el auto que se recurre resulta conforme a Derecho. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba entre un ciudadano español y una ciudadana cubana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. No se conocían personalmente antes del matrimonio, el interesado llegó a la isla el 3 de diciembre de 2013 y el día 11 se casó, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Se conocieron en 2011 a través de una

prima de ella que es nuera del interesado. El interesado desconoce el lugar de nacimiento de ella, los apellidos, edades y a que se dedican los hijos de la interesada. Por su parte la interesada desconoce el lugar donde nació el interesado, de uno de los hijos del interesado dice que vive en Canadá cuando es en Alemania y de otro dice que estudia Economía cuando estudia música (violonchelo). Ella indica que la última celebración que han compartido fue el cumpleaños de su nieta de dos años, sin embargo él dice que no han compartido ninguna celebración. En lo relativo a los regalos que se han hecho existen discrepancias ya que él dice que ambos se han regalado colonia, mientras que ella dice que él le ha regalado un perfume, crema y champú, y ella no le ha regalado nada porque tiene el regalo comprado en O. y ahora están en L. H. Desconocen gustos y aficiones del otro y ella no recuerda el nombre del medicamento que él toma para su enfermedad. El interesado desconoce la profesión de ella, estudios, ingresos que tiene, idiomas hablados, etc. Ambos reconocen que es su deseo contraer matrimonio a fin de que ella pueda salir de su país y obtener la nacionalidad española en menos tiempo, aunque ella declara que ella no sabe esta circunstancia ni él tampoco (él dice que ambos lo saben). No aportan pruebas de su relación.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)

Resolución de 11 de octubre de 2016 (1ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra resolución del encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

HECHOS

1. Doña D. C. C., nacida en S. C. (República Dominicana) y de nacionalidad española adquirida el 23 de julio de 2013, presentó en el Registro Civil del Consulado español en Santo Domingo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 9 de enero de 2015 con don B. A. M. P., nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: pasaporte y documentos de identificación de ambos interesados, certificación literal de nacimiento de la interesada, certificado de matrimonio anterior de la interesada, fe de vida y estado de la interesada, acta inextensa de matrimonio, acta inextensa de nacimiento del interesado, declaración jurada de estado civil del interesado.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada. Con fecha 6 de noviembre de 2015 el encargado del registro civil consular dicta resolución denegando la inscripción del matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al Canciller de dicho Consulado General, en ejercicio de las funciones correspondientes al ministerio fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de

septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre una ciudadana española, de origen dominicano y un ciudadano dominicano, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Existen numerosas contradicciones en las declaraciones prestadas en dicha audiencia reservada, que

ponen de manifiesto cierto desconocimiento mutuo entre los contrayentes, al menos de su respectiva situación con posteridad a la celebración del matrimonio. En primer lugar, don B. desconoce la dirección de su cónyuge en España. Discrepan, además, las declaraciones en cuanto a la fecha en que comenzó la relación sentimental. Doña D. afirma que comenzó en un viaje a República Dominicana, en 2013, por su parte, don B. declara que la relación sentimental empezó en 2014. Tampoco coinciden las declaraciones respecto de los viajes que la interesada ha efectuado a República Dominicana, en particular, don B. parece no conocer el viaje que su cónyuge realizó en 2013. Discrepan las declaraciones relativas a los ingresos de la interesada, así ella indica que percibe 1000 euros al mes, cuando don B. afirma que obtiene 1500. Así mismo, don B. desconoce que su cónyuge ha pasado por operaciones estéticas. Por lo demás la interesada declara que su cónyuge tiene una tía en España, no obstante, afirma que se encuentra en Z., cuando según él, reside en V. Finalmente, debe subrayarse que desde el momento de la celebración del matrimonio hasta el trámite de audiencias reservadas no ha habido convivencia conyugal.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana)

Resolución de 11 de octubre de 2016 (2ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra resolución del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Doña N. C. C., nacida en T. – V. (Colombia) y de nacionalidad española adquirida por residencia el 23 de Marzo de 2001, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 23 de mayo de 2013 con don J. R. M. P., nacido en A. Q. (Colombia) y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio expedido por el registro civil colombiano apostillado, documentos de identidad y pasaporte de los interesados, y de los hijos de la interesada, certificación literal de nacimiento de la interesada, certificado de matrimonio de la interesada, certificado de nacimiento del interesado apostillado y certificado de empadronamiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada. Con fecha 19 de agosto 2015 el encargado del Registro Civil Central dicta resolución denegando la inscripción del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la Instrucción

de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia, entre una ciudadana española de origen colombiano y un ciudadano colombiano, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Existen numerosas contradicciones en las declaraciones prestadas en dicha audiencia reservada, que ponen de manifiesto cierto desconocimiento mutuo entre los contrayentes. En primer lugar, doña N. parece no conocer que su cónyuge tiene una hija. No cabe admitir las alegaciones del recurrente en este punto, en la medida en que las preguntas formuladas en la audiencia reservada distinguen claramente entre hijos en común e hijos de anteriores relaciones de los comparecientes. Así mismo discrepan las declaraciones relativas al momento en que los interesados decidieron contraer matrimonio, don J. R. manifiesta que dicha decisión la tomaron en 2010, si bien doña N. afirma que fue en 2012. No coinciden las declaraciones prestadas en cuanto al lugar en que se conocieron los

interesados, en particular, el interesado manifiesta que se conocieron en una gasolinera, y ella que se conocieron en su lugar de trabajo. Tampoco concuerdan las declaraciones relativas a la ocupación de la interesada, puesto que, según doña N., trabaja con una empresa de agua como promotora, pero según su cónyuge, ella es ama de casa.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 11 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 14 de octubre de 2016 (1ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega la inscripción porque hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1. Doña J. M. A. V. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 1 de noviembre de 2013 con don J. A. D. P. nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 1

de septiembre de 2014 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin

excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana colombiana y un ciudadano español y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. No se conocían personalmente antes del matrimonio, el interesado llegó a Colombia el 29 de octubre de 2013 y el 1 de noviembre contrajo matrimonio con la interesada, en ese sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Discrepan en cuando se conocieron ya que él dice que fue en junio de 2011, mientras que ella dice que fue en marzo de 2011. El interesado desconoce o se equivoca con la fecha de nacimiento de ella. La interesada desconoce la dirección del interesado, así como los oficios que éste ha realizado antes de ser transportista, oficio actual, ya que dice que siempre ha sido transportista, mientras que él indica que ha trabajado de pintor y en fábricas. Discrepan en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo operaciones quirúrgicas de cada uno, lo que más les irrita, lugar donde han estado juntos, con que banco operan, comidas favoritas, parejas anteriores de cada uno, edades de los padres de cada uno, programas favoritos, mejores amigos de cada uno, etc. Por otro lado y aunque no es determinante, el interesado es 19 años mayor que la interesada. Las pruebas presentadas no son concluyentes.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del registro consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no

quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá (Colombia)

Resolución de 14 de octubre de 2016 (2ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don S. C. H. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 12 de noviembre de 2014 con doña A. J. A. nacida y residente en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio, certificado de nacimiento del interesado y acta inextensa de nacimiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. Con fecha 4 de noviembre de 2015 el encargado del Registro Civil Central dicta auto denegando la inscripción del matrimonio por falta de consentimiento matrimonial.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su desestimación y la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de

certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados no se conocían personalmente antes del matrimonio, el interesado realizó un único viaje a la isla para contraer matrimonio y no consta que haya vuelto, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Se conocieron a través de un hermano de ella que vive en España, se lo presentó por teléfono y estuvieron ocho meses tratándose, luego se casaron (la interesada dice que en febrero de 2014). Desconocen gustos y aficiones de cada uno, discrepan en la cantidad monetaria que el interesado le envía a ella ya que ésta dice que son entre 10 y 12 mil pesos mientras que él dice que de cinco a siete mil pesos. Ella indica que se comunican por wasap todos los días, sin embargo él dice que también se comunican por tango y laika. El interesado se equivoca o desconoce en el nombre de uno de los hermanos de ella que vive en España. Ella desconoce el lugar de nacimiento de él ya que dice que nació en P. V., Canarias, cuando fue en V. y el interesado desconoce el año de nacimiento de ella ya que dice que nació en 1989 cuando fue en 1979. No presentan pruebas de su relación.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 14 de octubre de 2016 (4ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

1º. Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º. Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

HECHOS

1. Doña L. Y. B. S., nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana presentó en el Consulado español en Santo Domingo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 11 de agosto de 2009 con don D. F. S. A. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2013. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento, acta inextensa de matrimonio y acta inextensa de divorcio del interesado y acta inextensa de nacimiento de la interesada.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 30 de noviembre de 2015 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II. Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en La República Dominicana el 11 de agosto de 2009 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, el interesado adquiere después la nacionalidad española por residencia en el año 2013.

III. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de

certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI. Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el registro civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 LRC), la doctrina oficial de este centro directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 CC), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las resoluciones de esta dirección general en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII. Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este centro directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 CC) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al

consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 CC), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 CC), y ello cualquiera sea la causa *simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII. En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos dominicanos celebrado en La República Dominicana y, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado reside en España desde 2003, en el primer viaje que realiza a la isla, de una duración de once días, se casa con una ciudadana dominicana en el año 2005 a la que reagrupa en el año 2006 y se divorcian el 26 de mayo de 2009, en el segundo viaje que realiza a la isla en agosto de 2009 contrae matrimonio con promotora, tres meses después de divorciarse de su primera esposa. Discrepan en cuando inician la relación sentimental pues ella señala que en 1994, afirmando que llevan más de 22 años de relación, mientras que él dice que se conocen desde 1994, como pareja llevan desde 1996 con motivo del nacimiento de su hija y rompen en 1997-98, después de que él viniera a España reanudan la relación. Ella tiene un hijo de otra relación, nacido en 2003, que vive con ella y él también tiene una hija de otra relación, nacida en 2007. También difieren en el tiempo de convivencia ya que él declara que han convivido entre uno y dos años mientras que ella dice que han convivido entre siete y ocho años. Desconocen los estudios del otro, el interesado desconoce el nombre de uno de los hermanos de ella, dando un nombre diferente. Mientras que el interesado detalla los regalos que se han hecho, ella dice que no

recuerda, tampoco sabe con qué banco opera el interesado. La interesada dice que a ambos les gusta las películas románticas y de acción, el interesado declara que a él le gustan las de Bruce Willis. El interesado afirma que no han solicitado la inscripción del matrimonio en otro registro civil español, sin embargo ella dice que sí. Las pruebas presentadas no son concluyentes.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana)

Resolución de 14 de octubre de 2016 (5ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

HECHOS

1. Don B. M. C., nacido en España y de nacionalidad española presentó en el Consulado español en La Habana, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Cuba el 17 de septiembre de 2013 con doña Y. C. M. D. nacida en Cuba y de nacionalidad cubana. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 30 de octubre de 2015 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, el cual estima que se han guardado en su tramitación las prescripciones legales y en consecuencia, el auto que se recurre resulta conforme a Derecho. El encargado del registro civil consular

ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el

mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba entre un ciudadano español y una ciudadana cubana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando se conocieron ya que él dice que fue en el 2001 a través del marido cubano de su madre, mientras que ella dice que fue en 2004. También difieren en lo relativo a la última celebración que han hecho juntos ya que ella dice que el cumpleaños del padre de ella en abril, sin embargo él dice que el cumpleaños de su hijo F. en febrero de 2015. El interesado dice que el último regalo que le ha hecho ha sido un juguete erótico, mientras que ella dice que fue un ramo de flores por el día de los enamorados. Ella declara tener alergias y ser hipertensa, sin embargo él dice que ella no padece de nada. La interesada dice que él es administrador de empresas y que trabaja administrando la empresa de su madre, desconociendo el salario, sin embargo él dice que es promotor inmobiliario y que trabaja en la construcción de apartamentos en una zona residencial, variando sus ingresos. Según las declaraciones de ambos, no van a vivir juntos, cada uno vivirá en su país, sin embargo él realiza muchos viajes a Cuba porque él tuvo un hijo en 2013 con una cubana llamado F. J. M. M., cuando él viaje a ver a su hijo estará con ella. Declaran que es su intención contraer matrimonio a fin de que ella pueda obtener la nacionalidad española en menos tiempo.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)

Resolución de 14 de octubre de 2016 (10ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

1º. Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º. Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto del juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don H. S. El F., nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia el 23 de mayo de 2011, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el día 8 de marzo de 2011 en Marruecos, según la ley local, con Dª M. D. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y acta de matrimonio y sentencia de divorcio del interesado.

2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El juez encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 29 de julio de 2014 deniega la inscripción del matrimonio por falta de consentimiento matrimonial.

3. Notificada la resolución a los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que impugna el mismo interesando la desestimación del mismo y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II. Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en Marruecos el 8 de marzo de 2011 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, el interesado adquiere después la nacionalidad española por residencia en mayo de 2011.

III. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta Dirección General dictó en su momento la instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de

certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI. Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el registro civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 LRC), la doctrina oficial de este centro directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 CC), lo que justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las resoluciones de esta dirección general en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII. Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este centro directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 CC) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al

consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 n.º3 CC), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, *ipso iure* e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 CC), y ello cualquiera sea la causa *simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII. En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos marroquíes celebrado en Marruecos y, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ninguno de los dos recuerda la fecha del matrimonio. Se conocieron porque son familia, ella declara que se lo presentó su tía, le dijo que era un chico muy bueno y no se acuerda de nada más. Desde que se conocieron hasta que firmaron el acta de matrimonio pasaron cuatro días. Declara ella que el mismo día que se conocieron él le pidió matrimonio, ella se lo pensó dos días y dos días después ya estaban casados. El interesado declara que no sabe cuándo decidieron casarse. El interesado declara que ha ido a Marruecos cuatro veces, sin embargo ella dice que dos. El interesado dice que se comunican por teléfono cada semana o dos semanas, sin embargo ella dice que cada dos o tres días. Ninguno de los dos sabe la fecha y lugar de nacimiento del otro y tampoco saben los gustos y aficiones. El interesado dice que no han solicitado la inscripción del matrimonio en el Consulado de España, sin embargo ella dice que sí. Ella no sabe en qué circunstancias vino el interesado a España, declarando que se lo trajo su madre. Se trata por tanto de un matrimonio concertado por las familias, en el que no hubo relación previa ya que cuatro días después de conocerse contrajeron matrimonio.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 14 de octubre de 2016 (25ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero.

No es inscribible el matrimonio celebrado en Colombia, por española y colombiano, porque no aporta poder para la celebración del matrimonio conforme al artículo 55 del Código Civil.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Dª S.-K. G. A., mayor de edad, casada, nacida en Colombia y de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2010, presentó, ante el Registro Civil Central, solicitud de inscripción de su matrimonio contraído en Colombia, el 7 de junio de 2011 con Don M.-Á. Q. A., mayor de edad, casado, nacido en Colombia y de nacionalidad. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos, certificado de matrimonio de los interesados, certificado español de nacimiento de la interesada, fotocopia del DNI de la interesada, certificado de empadronamiento de la interesado, certificado de nacimiento del interesado, y escritura pública de matrimonio civil otorgada en Colombia.
2. Mediante acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2015, el encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción del matrimonio ya que habiéndosele requerido para ello previamente, los interesados no aportaron la escritura de poder para contraer matrimonio por lo que no puede determinarse si este matrimonio contraído reúne los requisitos del artículo 55 del Código Civil.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que interesa su desestimación por estimar que el acuerdo recurrido es plenamente ajustado a Derecho. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 55 del Código Civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil.

II. En el presente caso, la interesada, de nacionalidad española obtenida por residencia en 2010 pretende obtener la inscripción de su matrimonio arriba referenciado: En el certificado de matrimonio no consta que dicho matrimonio fue celebrado por poderes, sin embargo, de las declaraciones de los cónyuges practicadas en audiencias reservadas, el encargado del registro civil deduce que se celebró por poderes, pues al tiempo de la misma celebración en Colombia, la interesada se hallaba en España. Visto esto, el encargado requirió a las partes que aclararan que efectivamente el matrimonio fue celebrado por poderes y que presentasen escritura de poder a los efectos de examinar si el matrimonio celebrado por poderes reunía los requisitos del artículo 55 del Código Civil. La interesada aportó escritura pública colombiana de celebración del matrimonio en el que ella intervenía a través de una representante pero no aportó la escritura de poder requerida.

III. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RCC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por esta razón ha de examinarse la cuestión sobre si cumple estas exigencias el matrimonio de los promotores celebrado, según se dice, en Colombia en 2011.

IV. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central por estar el promotor domiciliado en España. (cfr. art. 68, II RRC) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. arts. 23 LRC y 85 y 256-3° RRC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento “en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos”.

V. En el caso actual, al no haber sido aportada la escritura de poder especial para contraer matrimonio no se puede calificar si estamos ante un matrimonio por poderes que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 55 del Código Civil para su inscripción, el cual determina que: “Podrá autorizarse en el expediente matrimonial que el contrayente que no resida en el distrito o demarcación del juez, alcalde o funcionario autorizante celebre el matrimonio por apoderado a quien haya concedido poder especial en forma auténtica, pero siempre será necesaria la asistencia personal del otro contrayente. En el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, con expresión de las circunstancias personales precisas para establecer su identidad.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 14 de octubre de 2016 (26ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Central

HECHOS

1. Don J.-R. L. G., español nacido en España, mayor de edad y soltero presentó ante el Registro Civil Central solicitud de la inscripción de su matrimonio contraído en Colombia el 14 de marzo de 2012 con Dª A. O. M., mayor de edad, divorciada, de nacionalidad colombiana y nacida en Colombia. Adjuntan como documentación: hoja de declaración de datos, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de la esposa, certificado de divorcio de la esposa, certificado de empadronamiento, certificado de nacimiento del interesado.
2. Con fechas 11 de febrero de 2015 y 29 de mayo del mismo año se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. Y con fecha 4 de noviembre de 2015 el encargado del Registro Civil Central dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que informa interesando su desestimación. El encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73

de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español y una colombiana, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. En este sentido discrepan en cuanto al período de convivencia previo de los contrayentes pues él manifiesta que fue de dos años y ella de un año y medio, en ambos casos la respuesta también es incongruente con el certificado de empadronamiento que indica que ella vivió en la casa de él desde el 12 de diciembre de 2011. Él manifiesta desconocer un dato personal importante de su cónyuge como es su domicilio en Colombia y se limita a asegurar que vive en B. Y por último, preguntado el interesado si solicitó la inscripción de este matrimonio previamente en el registro consular correspondiente, responde negativamente, cuando de la documentación presentada resulta que así fue, que fue denegada dicha inscripción y, recurrido el auto denegatorio ante esta dirección fue desestimado el recurso. En el escrito de recurso no se aportan pruebas suficientes para desvirtuar lo anteriormente expuesto.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del Registro Central, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 14 de octubre de 2016 (28ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular de Santo Domingo, República Dominicana

HECHOS

1. D^a S de la R. N., mayor de edad, soltera, nacida en República Dominicana y de nacionalidad dominicana presentó ante el Registro Civil Consular de Santo Domingo, República Dominicana, solicitud de inscripción de su matrimonio contraído el dos de octubre de 2009 en H., República Dominicana con Don J.-M. R. R., mayor de edad, divorciado nacido en España y de nacionalidad española. Acompaña a su solicitud la siguiente documentación: certificado de empadronamiento del interesado, fotocopia del pasaporte de los interesados, fotocopia del DNI del interesado y de la cédula de identidad de la interesada, fotocopia del acta inextensa de matrimonio de los interesados fotocopia del certificado español de nacimiento del interesado, fotocopia de acta inextensa de nacimiento de la interesada, declaración jurada de soltería de la interesada anterior a la celebración del matrimonio, y fotocopia del certificado de matrimonio donde consta el posterior divorcio del interesado.
2. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados y con fecha 17 de diciembre de 2015 el encargado del Registro Civil Consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal que informa interesando su desestimación. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4^a de diciembre de 2005; 23-3^a y 5^a de junio, 3-1^a, 21-1^a y 5^a, 25-2^a de julio, 1-4^a y 5-4^a de septiembre, 29-2^a y 5^a de diciembre de 2006; 29-2^a y 26-5^a de enero, 28-5^a de febrero, 31 de marzo, 28-2^a de abril, 30-1^a de mayo, 1-4^a de junio, 10-4^a, 5^a y 6^a y 11-1^a de septiembre; 30-6^a de noviembre y 27-1^a y 2^a de diciembre de 2007; 29-7^a de abril, 27-1^a de junio, 16-1^a y 17-3^a de julio, 30-2^a de septiembre y 28-2^a de noviembre de 2008; 19-6^a y 8^a de enero y 25-8^a de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en República Dominicana entre un español y una dominicana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Así, desconocen datos personales básicos de sus respectivas parejas, de este modo ella da una edad equivocada de su marido, no sabe su dirección ni teléfono, y confunde su lugar de residencia pues es G. y no V. También desconoce dónde nació el interesado. Por su parte él no sabe dónde vive ella y desconoce su edad exacta. Tampoco sabe si ella habla otros idiomas ni cómo dio a luz a sus hijos. Además, en la

audiencia reservada y según se deduce del auto denegatorio, él quería casarse con una dominicana y que ella se encargara del cuidado de su madre en España. Por último debe tenerse en cuenta que en el escrito de recurso no se ha presentado ninguna alegación que desvirtúe lo anterior y se ha fundado en un embarazo de riesgo de la interesada sin que ninguna prueba de ello se aporte.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del Registro Central, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

Resolución de 18 de octubre de 2016 (1ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra resolución del encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

HECHOS

1. Don J. M. P. N., presentó en el Registro Civil del Consulado español en Santo Domingo, en calidad de testigo, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado en La República Dominicana el 13 de septiembre de 2014, entre don K. T. R. M., nacido en V. I., República Dominicana, y de nacionalidad dominicana, y doña C. M. C. F., nacida en H. B., República Dominicana, de nacionalidad española adquirida el 16 de febrero de 2004. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio, acta inextensa de nacimiento del interesado, certificado del matrimonio anterior del interesado, declaración jurada de estado civil del interesado,

certificación literal de nacimiento de la interesada, fe de vida y estado de la interesada, documentos de identificación y pasaporte de los interesados

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada. Con fecha 14 de diciembre de 2015 el encargado del registro civil consular dicta resolución denegando la inscripción del matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al canciller de dicho consulado general, en ejercicio de las funciones correspondientes al ministerio fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como

medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre una ciudadana española, de origen dominicano y un ciudadano dominicano, y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. En primer lugar, discrepan las declaraciones de los interesados en lo relativo al número de asistentes a la boda y al lugar de celebración.

En otro orden de cosas, doña C. M. no conoce el nombre del mejor amigo de su cónyuge. Por su parte, don K. T. desconoce cuántos hermanos tiene ella. Así, afirma que tiene cinco hermanos, cuando en realidad, y según la declaración prestada por la interesada son trece hermanos. Igualmente, doña C. M. afirma que su cónyuge tiene solamente dos hermanos, cuando en realidad son cinco. En el escrito de recurso se alega que dado el distanciamiento personal, es muy difícil haber conocido personalmente a todos ellos, no obstante, han de seguirse los razonamientos que el encargado del registro consular efectúa en su informe, según los cuales, la pregunta formulada se refiere a conocer la existencia de tales hermanos, no a haberlos tratado o conocido personalmente. No ha existido convivencia conyugal desde la celebración del matrimonio. De las audiencias reservadas resulta que los interesados convivieron juntos desde 2010 hasta 2013, año en que él partió hacia República Dominicana. Desde entonces ella ha viajado en dos ocasiones para visitar a don K. T., de forma que en la última de ellas contrajeron matrimonio. En el punto relativo a la convivencia que

los interesados mantuvieron antes de contraer matrimonio, puede observarse una importante discrepancia, respecto de lo manifestado en el escrito de recurso. En dicho escrito se afirma que entablaron su relación sentimental en 2011, iniciándose la convivencia en 2012. Otra de las discrepancias que pueden observarse en las declaraciones consiste en que la interesada afirma que él monta de vez en cuando en bicicleta, no obstante él manifiesta que no practica ningún deporte.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid a 18 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico

Sr. encargado del Registro Civil Consular de Santo Domingo (República Dominicana)

Resolución de 21 de octubre de 2016 (2ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

1º. Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º. Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto del juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don G. B. M. T. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia el 5 de diciembre de 2013, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el día 1 de marzo de 2013 en Colombia, según la ley local, con doña R. R. P. nacida en Colombia

y de nacionalidad colombiana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y acta de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio de la interesada.

2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El juez encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 23 de noviembre de 2015 deniega la inscripción del matrimonio por falta de consentimiento matrimonial.

3. Notificada la resolución a los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que impugna el mismo interesando la desestimación del mismo y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril, 19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril de 2006.

II. Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en Colombia el 1 de marzo de 2013 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, el interesado adquiere después la nacionalidad española por residencia en diciembre de 2013.

III. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

V. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las audiencias reservadas antes mencionadas.

VI. Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad española, caso en el que el registro civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 LRC), la doctrina oficial de este centro directivo viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 CC), lo que

justifica su inscripción registral. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las resoluciones de esta dirección general en la materia, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados favorablemente por parte de las órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VII. Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que integre el estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional español, deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de este centro directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es cuestión que por su carácter esencial en nuestro Derecho (cfr. art. 45 CC) y en el Derecho Internacional Convencional y, en particular, el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, debe ser considerada de orden público.

Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el que conseguir fines impropios del mismo, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 CC), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero con ser esto último importante, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, “*ipso iure*” e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 CC), y ello cualquiera sea la causa *simulationis*, o propósito práctico pretendido *in casu*, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica que de la que es propia del *ius nubendi* se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

VIII. En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos colombianos celebrado en Colombia y, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el

matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados estuvieron casados entre sí desde 2004 hasta 2008 en que se divorciaron, el interesado vino a España y contrajo un segundo matrimonio con una española en el año 2009 y se divorció de la misma en 2012, el 1 de marzo de 2013 vuelve a contraer matrimonio con la promotora. Tienen una hija en común y el interesado reconoce que antes del año 2013 no se habían vuelto a ver excepto por temas que concernían a la hija que tienen en común. No ha existido apenas contacto entre ellos excepto por temas de su hija por lo que se puede deducir que se trata de un matrimonio con fines exclusivamente migratorios.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid a 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 21 de octubre de 2016 (7ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

No procede la inscripción porque el contrayente español fallecido antes de la solicitud de inscripción del matrimonio no ha sido posible oírlo reservadamente en los términos previstos en el artículo 246 RRC, la validez del documento presentado resulta afectada.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra acuerdo del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Doña M. G. L., nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó, con fecha 16 de octubre de 2014, en el Registro Civil Central, hoja declaratoria de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 8 de marzo de 2008 con don J. M. L. S., nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntaba como documentación: certificado de matrimonio, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y certificado de defunción del interesado y certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio de la interesada.

2. Se celebra la entrevista en audiencia reservada con la interesada. El encargado del Registro Civil Central mediante auto de fecha 6 de noviembre del 2015, deniega la inscripción del matrimonio ya que en la declaración taxativa que realizó la interesada con las preguntas que le fueron formuladas, sus respuestas no fueron coherentes,

dando las explicaciones oportunas para concretar los aspectos sobre los que se le pedía alguna precisión resultando contradictorias entre sí. Todo unido a la imposibilidad de oír al interesado y contrastar lo manifestado por ella ya que éste falleció en el año 2013, siendo la solicitud de inscripción de matrimonio presentada por la interesada en octubre de 2014, por lo que se observan datos de los que se puede presumir la existencia de un matrimonio de conveniencia.

3. Notificada la resolución a la interesada ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que impugna el mismo interesando su desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del registro civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9, 45, 49, 65 y 73 del Código Civil (CC); 23, 24, 29, 32, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 85, 246, 252, 256, 257, 355 y 356 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 4-2ª de junio de 2001, 9-2ª y 24-2ª de mayo de 2002, 13-3ª de octubre de 2003, 17-2ª de febrero, 31-5ª de mayo y 2-2ª de noviembre de 2004; 16-2ª de noviembre de 2005, 7-1ª de febrero y 13-1ª de noviembre de 2006, 30-2ª de enero de 2007, 24-3ª de abril de 2008 y 3-8ª de octubre de 2011.

II. La solicitante, de nacionalidad colombiana, promueve, con fecha 16 de octubre de 2014 expediente a fin de que sea inscrito en el registro civil español matrimonio celebrado en Colombia, según la ley local, el día 8 de marzo de 2008 con un ciudadano español fallecido el 28 de octubre del año 2013. El 6 de noviembre de 2015 el encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio, ya que celebrada la entrevista en audiencia reservada con la interesada se observan contradicciones e incoherencias y además al fallecer el cónyuge no se pudo celebrar entrevista con éste por lo que no se pueden comparar las respuestas. Este acuerdo constituye el objeto del presente recurso.

III. El matrimonio tuvo lugar en el extranjero, conforme a *lex fori*, y se pretende su inscripción con la mera aportación de la certificación expedida por el registro civil del país de celebración (cfr. art. 256. 3º RRC). Sin embargo esta, por sí sola, no es documento bastante en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo 256 RRC, que prevé que el título para la inscripción en los casos, como el que es objeto del presente recurso, a que dicho artículo se refiere será la expresada certificación “y las declaraciones complementarias oportunas”. Es decir, que siempre que no haya duda de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la normativa española, el acta aportada y las declaraciones complementarias oportunas constituyen, conjunta e indisolublemente, el título para practicar la inscripción.

Habida cuenta de que, fallecido uno de los contrayentes, no ha sido posible oírlo reservadamente en los términos previstos en el artículo 246 RRC, la validez del documento presentado resulta afectada y la inscripción no puede practicarse.

IV.- Por otro lado en la entrevista que se le practicó a la interesada, ésta declara en principio ser viuda y en la hoja de datos declara ser soltera, lo cierto es que era divorciada cuando contrajo matrimonio con el interesado. Dice que viven en España desde 2007 pero dice que conoció a su marido en un bar de Reus hace 10 años; manifiesta que decidieron contraer matrimonio tras cuatro años de relación, sin embargo contrajeron matrimonio en 2008 y ella llegó a España en 2007, vivieron en Colombia dos años antes de casarse, regresando a España en 2009 cuando el interesado ya estaba enfermo, cursando baja en el volante de empadronamiento desde el año 2011, declarando que su matrimonio estaba vigente cuando él falleció. Se le requirieron volantes de empadronamiento a fin de que acreditara el periodo de convivencia que dijo, dichos volantes no fueron aportados.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid a 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 21 de octubre de 2016 (10º)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

HECHOS

1. Don J. H. M. M., nacido en Cuba y de nacionalidad española, obtenida mediante la Ley 52/07 en el año 2010, presentó en el Consulado español en La Habana, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Cuba el 2 de abril de 2015 con doña C. Z. R. nacida en Cuba y de nacionalidad cubana. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 30

de octubre de 2015 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, el cual estima que se han guardado en su tramitación las prescripciones legales y en consecuencia, el auto que se recurre resulta conforme a Derecho. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la Instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro

consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba entre un ciudadano español, de origen cubano y una ciudadana cubana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado declara que comenzaron la relación a la semana de conocerse mientras que ella dice a los quince días. Los interesados no conviven, el interesado dice que es porque sus casas son muy pequeñas y no hay privacidad, él vive con su hijo y ella con sus dos hijos en una habitación muy pequeña, sin embargo ella afirma que no viven juntos porque la casa donde vive ella está a nombre del padre de sus hijos y de ella y ahí no puede estar el interesado, quieren vender la casa para irse a España. El interesado declara que decidieron casarse en 2015 en la casa porque estaba una sobrina que vive en T. y les explicó las posibilidades de trabajo en España, sin embargo ella dice que lo decidieron en 2014. Discrepan en los familiares que fueron a la boda, declara ella que vivirán en casa de su sobrina hasta que puedan alquilar algo, el interesado dice que no disponen de casa y que alquilarán. Ninguno de los dos conoce los nombres de los padres del otro, y ella desconoce todo sobre uno de los hijos del interesado incluyendo el segundo apellido. Por otro lado el interesado es 16 años mayor que la interesada. No aportan pruebas de su relación.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo han estimado el encargado del registro consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no

quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid a 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo

Sr. encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba)

Resolución de 21 de octubre de 2016 (14ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto del juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don J-L. Z. V. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia el 5 de diciembre de 2007, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado el día 15 de octubre de 2012 en Colombia, según la ley local, con Doña A. S. P. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, sentencia de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El juez encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 4 de noviembre de 2015 deniega la inscripción del matrimonio por falta de consentimiento matrimonial.
3. Notificada la resolución a los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo y la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado del

Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de Enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el

mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español, de origen colombiano y una ciudadana colombiana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado desconoce la fecha de nacimiento de la hija de la interesada, desconoce que ella ha sido operada de vesícula, nariz, vista y cesárea, ya que dice que “cree” que de apendicitis, dice que ella tiene animales domésticos una lora y dos canarios y ella dice que no tiene animales domésticos, tampoco sabe cuántos hermanos tiene ella ni los nombres de los mismos, declara que ella no trabaja actualmente cuando ella afirma trabajar en un colegio, dice que le envía a la interesada a veces 150 euros, sin embargo ella dice que le envía dinero mensualmente. El interesado declara que cuando va a Colombia cada uno vive en su casa y se hospeda en casa de su hermana; desconocen gustos y aficiones del otro, el interesado dice que se comunican por teléfono y ella dice que se comunican por redes sociales. Las pruebas aportadas no son concluyentes.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo han estimado el encargado del registro consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 24 de octubre de 2016 (1ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don P. M. M. F., mayor de edad, divorciado, nacido en República Dominicana y de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2002, presentó ante el Registro Civil Central solicitud para la inscripción de su matrimonio contraído en República Dominicana el 13 de febrero de 2014 con doña A. G. M., mayor de edad, viuda, nacida en República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Acompaña la siguiente documentación: acta inextensa de matrimonio de los interesados, certificado de nacimiento del interesado, acta inextensa de nacimiento de la interesada, fotocopia de certificado de matrimonio y posterior divorcio del interesado, fotocopia del DNI del interesado, fotocopia del pasaporte dominicano de la interesada, certificado de empadronamiento del interesado en Z., fotocopia de la cédula de identidad de la interesada, fotocopia de los pasaportes español y dominicano del interesado y acta inextensa de defunción del anterior esposo de la interesada.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. Con fecha 20 de octubre de 2015 el encargado del Registro Civil Central dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3. Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del recurso. El encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73

de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero, 25-8ª de febrero de 2009 y 17-1ª de noviembre de 2011

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre un español y una dominicana y del trámite de audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Así, la interesada, preguntada por el estado civil de su marido con anterioridad a la celebración del matrimonio, declaró que era el de soltero y no hizo referencia a la existencia de un matrimonio anterior, igualmente, la interesada no sabe qué estudios tiene su marido ni si quiera el grado alcanzado y dice que ninguno tiene alergias sin embargo el interesado manifiesta que el polen le hace estornudar. Por su parte él dice que ella tiene dos hijas cuando en realidad tiene cuatro hijos. Desconoce el número de hermanos que tiene su mujer y sólo sabe el nombre de algunos. Además no coinciden en las declaraciones relativas a gustos musicales, pues él señala que a ella le gusta principalmente la música religiosa, cuando es un género que ella ni siquiera menciona. Por último, a todo esto debe unirse el hecho de que, desde que iniciaron su relación sólo han coincidido una vez con ocasión del viaje que él hizo a República Dominicana para contraer matrimonio.

VI. De estos hechos objetivos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del Registro Civil Central, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto a ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 24 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 24 de octubre de 2016 (4ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Doña F. G. d. J., mayor de edad, nacida el 10 de febrero de 1955 en República Dominicana y de nacionalidad española adquirida por residencia en el año 2013, presentó ante el Registro Civil Central solicitud de inscripción de su matrimonio contraído en República Dominicana el 14 de enero de 2014 con don S. S. R., nacido el 24 de diciembre de 1983 en República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de nacimiento del interesado, acta inextensa de matrimonio que se pretende inscribir, fotocopia del DNI y de la cédula de identidad de los interesados, certificado español de nacimiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. Con fecha 1 de diciembre de 2015 el encargado del Registro Civil Central dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.
3. Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del recurso. El encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero, 25-8ª de febrero de 2009 y 17-1ª de noviembre de 2011 .
- II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción

de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en República Dominicana entre una española y un dominicano y del trámite de audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. De entrada discrepan en la forma en que se conocieron pues ella manifiesta que se conocieron coincidiendo con uno de sus viajes a República Dominicana en el mercado, mientras que él señala que se conocieron en casa de su madre. Tampoco coinciden con los gustos y aficiones respectivos pues él señala en varias ocasiones que le gusta viajar, particularmente al campo y al río y que a ella lo mismo, mientras que ella dice que a ambos lo que les gusta es la playa e ir de cervezas. Ella dice que hablan todos los días por teléfono mientras que él dice que sólo se comunican los fines de semana. Ella no conoce los hermanos de él ni su fecha de nacimiento exacta, sólo el año. Ella dice ser soltera y que no ha contraído matrimonio ni civil ni canónico con nadie anteriormente, mientras que él manifiesta que ella es viuda y que desconoce

los datos de fallecimiento del esposo anterior. Por último y sin ánimo de ser más exhaustivo, él dice que ella tiene tres hijas mientras que ella manifiesta que son cuatro las que tiene. Puede entenderse, en resumen, que existe un desconocimiento recíproco en hechos esenciales de la vida de los contrayentes impropios de quienes están formando un proyecto de vida en común.

VI. De estos hechos objetivos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del Registro Civil Central, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto a ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 24 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 24 de octubre de 2016 (5ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don J. P. D. G., mayor de edad, español nacido en España, presenta ante el Registro Civil Central solicitud de inscripción de su matrimonio contraído en República Dominicana el 8 de enero de 2015 con doña A. M. M. B., mayor de edad nacida en República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de nacimiento de la interesada, acta inextensa de matrimonio que se pretende inscribir, fotocopia del DNI y de la cédula de identidad de los interesados, certificado español de nacimiento del interesado y volante de empadronamiento del interesado en C. d. O.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. Con fecha 23 de noviembre de 2015 el encargado del Registro Civil Central dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3. Notificados los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del recurso. El encargado del Registro Civil Central ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero, 25-8ª de febrero de 2009 y 17-1ª de noviembre de 2011.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC.), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues

bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República Dominicana entre un español y una dominicana y del trámite de audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados dicen haberse conocido a través de una amiga, él aclara que a través de *Facebook*, ella no especifica más pero, en cualquier caso, no se conocieron personalmente hasta la celebración de la boda, cuando tuvo lugar la única visita del contrayente al país de su mujer. Además, de la declaración de él, que dice que se conocieron “hace casi dos años” y que tomaron la decisión de casarse en noviembre de 2014 en una conversación telefónica, parece deducirse que la decisión de contraer matrimonio fue inmediata al inicio de su relación sin que en ningún caso se hubiesen conocido aun personalmente. Además se observan contradicciones en las declaraciones, de este modo, siendo él preguntado por el número de hermanos tanto propios como los de su cónyuge, señala, respecto a sí mismo, el número de hermanos y medio hermanos que tiene sólo por parte de madre o padre. Sin embargo, respecto de ella sólo nombra al hermano de doble vínculo, y, aunque en otras declaraciones parece dar a entender que conoce que ella tiene otros medio hermanos, el hecho es que no sabe cuántos son éstos, ni si quiera los que viven en España (una en este caso). Tampoco existe coincidencia en las versiones acerca de los envíos de dinero pues él señala una periodicidad y cantidad aproximada, 200 euros mensuales, mientras que ella señala que no hay cantidad ni periodicidad fija.

VI. De estos hechos objetivos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del Registro Civil Central, quien por su

inmediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto a ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 24 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 28 de octubre de 2016 (19ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

HECHOS

1. Doña Y. A. S., nacida en la República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2010, presentó en el Consulado español en Santo Domingo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en la República Dominicana el 19 de septiembre de 2014 con Don R-I. A. M. nacido en la República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento, acta inextensa de matrimonio y acta inextensa de divorcio de la interesada y acta inextensa de nacimiento, acta inextensa de matrimonio y acta inextensa de divorcio del interesado.
2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 22 de enero de 2016 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se

llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en la República Dominicana entre una ciudadana española, de origen dominicano y un ciudadano dominicano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado declara que no hubo celebración del matrimonio, sin embargo ella dice que fueron cuatro invitados. El interesado desconoce cuándo se fue ella por primera vez a España, declara que ella es divorciada, que se casó con un dominicano y se lo llevó a España, desconociendo cuanto duró el matrimonio, la interesada tuvo un hijo con un español de origen aunque no contrajo matrimonio con él. Ella dice que no han convivido y él dice que sí. Los interesados se conocían desde pequeños, retomaron la relación en 2013 por *Facebook*, ese año viaja a la República Dominicana y el siguiente viaje en septiembre de 2014 contrae matrimonio con promotor. Ella declara que el parto de su hijo fue normal, sin embargo él dice que fue por cesárea. Ella dice que le gusta ver la tele en el sofá y a él criar peces, sin embargo él indica que a él le gusta ver películas. Ella dice que él tiene una hermana en España y él dice que es un hermano. Ella dice que ha estudiado bachillerato en S. D. y en España auxiliar de enfermería mientras que él dice que ella no ha terminado la carrera de pedagogía. Las pruebas presentadas no son concluyentes.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

Resolución de 28 de octubre de 2016 (22ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

1º. Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

2º. Cuando el matrimonio extranjero se ha celebrado en forma canónica y se solicita su inscripción por transcripción de la causada en el registro civil del lugar de celebración, el encargado puede y debe practicar las audiencias reservadas de ambos contrayentes para comprobar que el matrimonio reúne todos los requisitos que para su validez exige el Código Civil.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1. Don G. G. V. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio canónico celebrado en Colombia el 17 de enero de 2015 con Doña A- M. C. R., nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 12 de noviembre de 2015 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar, en la medida de lo posible, la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de enero de 1995 y, más recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se pretende inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana y, del trámite de audiencia reservada, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados se conocieron en España, la interesada no contesta a la pregunta de cuánto tiempo vivió en España y por qué regresó a Colombia, sin embargo el interesado declara que ella vivió en España seis años y regresó a España por falta de papeles. El interesado viaja a Colombia para contraer matrimonio. El interesado declara como lugar de nacimiento de ella Colombia sin especificar lugar concreto, tampoco sabe la fecha de nacimiento exacta de ella. El interesado declara que ella no trabaja y por lo tanto no tiene salario, sin embargo ella dice que gana mil pesos y trabaja en R. B. Discrepan en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo comidas favoritas, ciudades de España donde ha trabajado el interesado, último lugar donde fueron de vacaciones (ella dice que S. y él A.), no coinciden en los colores favoritos de cada uno, en los regalos que se han hecho y motivo ya que ella dice que los anillos de boda y un osito y ella a él ropa interior, sin embargo él dice que una pulsera sin motivo y un ramo de flores por su cumpleaños. El interesado declara que los gastos familiares no han hablado como los atenderán, sin embargo ella dice que sí lo han hablado y será a partes iguales; tampoco coinciden en los regalos de boda que recibieron, banco con el que operan. Ella no da el número de teléfono de él ni los correos electrónicos. En general la interesada deja en blanco muchas de las preguntas del cuestionario.

VI. De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro civil consular quien, por su intermediación a los hechos, es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.

VII. No obstante, antes de confirmar la anterior conclusión, ha de examinarse si constituye obstáculo el hecho de que el matrimonio extranjero examinado tenga carácter canónico, dado el particular régimen jurídico que los matrimonios autorizados bajo tal forma tienen en el Derecho español. Pues bien, antes de la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 de julio, si el matrimonio de españoles en el extranjero en forma

religiosa se celebraba en forma canónica, bastaba para la inscripción la simple certificación eclesiástica (circular de 15 de febrero de 1980) y, si se trataba de otra forma religiosa era necesario acudir al expediente previsto en el artículo 73 de la Ley del Registro Civil (resolución de 25 de noviembre de 1978). La entrada en vigor de la citada Ley 30/1981 suscitó ciertas dudas ya que de la vigente redacción del artículo 63 del Código Civil podría deducirse que, a diferencia del matrimonio canónico celebrado en España, el que tuviera lugar en el extranjero exigiría para su inscripción en el registro civil español la tramitación del expediente previo previsto en el citado artículo de la Ley del Registro Civil. Ciertamente una interpretación literal de los artículos 63 y 65 del Código Civil llevaría a la conclusión de que en la legalidad actual, y con respecto de los matrimonios contraídos una vez entrada en vigor la citada Ley 30/1981, la inscripción del matrimonio celebrado fuera de España en forma religiosa requeriría, además de la presentación de la certificación de la Iglesia y de que, de los documentos presentados o de los asientos del registro, no resulte la nulidad del matrimonio, que el encargado del registro compruebe, antes de practicar el asiento, si concurren los requisitos legales para su celebración. Las dudas surgen porque tal interpretación literal tropieza con la disposición general contenida en el artículo 49 del propio Código Civil que, sin distinciones y, por tanto, con un carácter indiferenciado y general, permite a cualquier español contraer matrimonio en la forma religiosa legalmente prevista “dentro o fuera de España”. Igualmente podría entenderse que el artículo VI, número 1, de los acuerdos vigentes sobre asuntos jurídicos entre el Estado español y la Santa Sede constituye otro elemento obstativo a aquella interpretación literal, dado que, también en este caso sin distinciones por razón del lugar de celebración, establece que la inscripción en el registro civil “se practicará con la simple presentación de certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio”. Esta aparente contradicción con una norma que refleja un compromiso internacional suscrito por España fue lo que llevó a este centro directivo a estimar en su resolución de consulta de 2 de noviembre de 1981 que no existen en nuestro ordenamiento jurídico motivos suficientes para establecer, a efectos de su inscripción en el registro, una diferencia tajante entre los matrimonios en forma canónica celebrados dentro o fuera del territorio español, especialmente porque todos ellos están sometidos al control impuesto por el segundo párrafo del artículo 63 del Código Civil, a cuyo tenor “se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título”, por lo que, concluíamos entonces, resulta excesivo obligar, además, al encargado a comprobar por otros medios no concretados, si concurren los requisitos legales para su celebración. Sin embargo, lo anterior no ha de impedir, antes al contrario, que cuando se solicite la inscripción, como en este caso, por transcripción de la certificación de la inscripción causada por el matrimonio canónico en el registro civil extranjero del lugar de celebración, el encargado cumpla con su función de comprobación de que el matrimonio que se pretende inscribir reúne todos los requisitos legales exigidos para su validez a la vista de los documentos presentados, entre los cuales figurará no sólo “la certificación expedida por autoridad

o funcionario del país de celebración” (cfr. art. 256-3º RRC), sino también “las declaraciones complementarias oportunas” exigidas por el párrafo final del citado precepto reglamentario, tendentes a formar la convicción del encargado sobre la “realidad del hecho y su legalidad conforma a la ley española”, lo que obliga a examinar con tal objeto el contenido de las audiencias reservadas practicadas a cada uno de los contrayentes de acuerdo con el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil, tal y como hizo el encargado, alcanzando con ello la conclusión examinada en los anteriores fundamentos jurídicos que, por ser ajustada a Derecho, este centro directivo debe confirmar.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 28 de octubre de 2016 (23ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1. Dª C. N. F. nacida en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2007, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 14 de enero de 2014 con Don J.-F. A. C. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y declaración de soltería de la interesada y certificado de nacimiento con inscripción de matrimonio y divorcio del interesado.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 24 de septiembre de 2015 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad

conforme a la ley española". Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana española, de origen colombiano y un ciudadano colombiano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando se conocieron e iniciaron su relación sentimental pues ella dice que se conocieron e iniciaron la relación en 1985 y él dice que en 1995. Ambos declaran que no han mantenido una relación continuada. Discrepan en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo, talla de zapatos utilizada, como toman el café, lo último que hacen antes de acostarse, si montan o no en bicicleta, si tienen fobias o miedos, gustos en común, perfume utilizado, domicilio de la interesada (él no lo da), ingresos mensuales, etc. La interesada no el número y nombres de los hijos del interesado. No aportan pruebas de su relación.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su inmediatez a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 28 de octubre de 2016 (24ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

HECHOS

1. Don E.-A. D. A. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el Consulado español en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 9 de enero de 2015 con Dª A.-L. T. D. nacida en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2010. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento de la interesada y certificado de nacimiento del interesado.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 23 de septiembre de 2015 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de

septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre una ciudadana española, de origen colombiano y un ciudadano colombiano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en cuando se conocieron e iniciaron la relación sentimental pues él dice que se conocieron en septiembre de 2013 y comenzaron la relación en octubre del mismo año, mientras que ella dice que

se conocieron el 9 de octubre de 2013 y comenzaron la relación en octubre de 2014. La interesada desconoce la fecha de nacimiento completa del interesado y su domicilio. Discrepan en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo nombre de la mejor amiga de ella, ciudades donde han trabajado o residido, si se han ayudado económicamente, si tienen animales de compañía, idiomas que hablan además del propio, número de parejas que ha tenido cada uno, países donde han estado, operaciones quirúrgicas que ha tenido el interesado, películas que han visto juntos, si toman o no café, etc. Por otro lado la interesada es 29 años mayor que el interesado.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 28 de octubre de 2016 (26ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Don A.-R. O. C. nacido en la República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2009 presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en la República Dominicana el 3 de octubre de 2013 con Dª S.-L. S. R. nacida en la República

Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y acta inextensa de nacimiento de la interesada.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. Con fecha 13 de octubre de 2015 el encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio por falta de consentimiento matrimonial.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la desestimación del mismo y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia

personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en la República Dominicana entre un ciudadano español, de origen dominicano y una ciudadana dominicana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ninguno de los dos sabe la fecha en que se conocieron, ella dice que sabe que fue en 2012, el interesado dice que viajó una vez a la isla hace tres años, permaneció dos y contrajo matrimonio con la interesada, después de la boda no ha vuelto a ir a la isla, los dos manifiestan que no han convivido bajo el mismo techo. El interesado desconoce la fecha de nacimiento de ella, dice que cree que tiene 25 años, declara que trabaja de secretaria en la universidad, sin embargo ella dice que no trabaja y que está estudiando licenciatura en idiomas. El interesado dice que le envía dinero, entre 50 y 60 euros al mes, sin embargo desde que trabaja no le envía nada, ella dice que él le envía dinero pero no dice cantidad. El interesado declara que cree que ella no tiene familiares en España, sin embargo ella dice que tiene primas en M. Las pruebas aportadas no son concluyentes.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su intermediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en

momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 28 de octubre de 2016 (33ª)

IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

HECHOS

1. D^a S. P. B., nacida en la República Dominicana y de nacionalidad dominicana, presentó en el Consulado español en Santo Domingo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en la República Dominicana el 11 de septiembre de 2013 con Don W. B. D. nacido en la República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por opción en 2011. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y acta inextensa de nacimiento de la interesada.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 11 de enero de 2016 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del

expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta dirección general dictó en su momento la instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la *lex loci*. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el

mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en la República Dominicana entre un ciudadano español, de origen dominicano y una ciudadana dominicana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Se conocen desde niños, el interesado realizó un único viaje desde 6 de febrero de 2012 hasta 14 de noviembre de 2013, en este viaje se casaron, según ella él no ha vuelto, sin embargo él dice que fue a la isla en 2015 aunque este hecho no está probado. El interesado se equivoca o desconoce la fecha de la boda. Ella dice que a la boda asistieron 30 personas y él dice que asistieron 50 personas. Ella dice que él trabaja en la limpieza de un restaurante desconociendo lo que gana, sin embargo él dice que trabaja de auxiliar de cocina. El interesado declara que los padres de ella viven juntos con dos de sus hermanos, sin embargo ella dice que sus padres viven separados, tampoco sabe dónde viven las primas de la interesada en España.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

IV.4.1.2 Se inscribe. No puede deducirse la ausencia de consentimiento matrimonial

Resolución de 14 de octubre de 2016 (7ª)

IV.4.1.2. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

HECHOS

1. Don E. O. V. G. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana, presentó en el Consulado español en Santo Domingo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 12 de septiembre de 2014 con doña S. B. A. nacida en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio de la interesada y acta inextensa de nacimiento y declaración jurada de soltería del interesado.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 25 de noviembre de 2015 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, aportando numerosas pruebas documentales.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un informe desfavorable. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe desfavorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256,

257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4^a de diciembre de 2005; 16-1^a de marzo, 7-2^a y 3^a y 11-4^a de abril, 31-1^a y 5^a de mayo, 23-2^a de junio, 20-5^a, 22 y 25-1^a de julio, 5-2^a de septiembre, 30-2^a de octubre, 10-5^a y 11 de noviembre y 28-5^a de diciembre de 2006; 5-3^a y 29-3^a y 4^a de enero, 28-1^a y 2^a de febrero, 25-7^a de abril, 31-2^a de mayo, 1-2^a y 3^a de junio, 11-2^a, 5^a y 6^a de septiembre, 26-5^a de noviembre y 28-5^a de diciembre de 2007; 11-1^a y 31-1^a y 4^a de enero, 4-3^a y 5-1^a de marzo, 13-1^a, 2^a, 3^a y 5^a de mayo, 8-6^a de septiembre y 22-1^a de diciembre de 2008; 29-8^a y 10^a de enero y 6-1^a de marzo de 2009.

II. No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el registro civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3^o RRC), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

IV. En el caso actual los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las respuestas dadas en las entrevistas, no existen prácticamente contradicciones y han mantenido una relación continuada a lo largo del tiempo, los interesados presentan numerosas pruebas, que evidencian una relación continuada.

V. Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto

similar la resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de aquí inscribir un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este centro directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el ministerio fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 CC) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1. Estimar el recurso
2. Declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en La República Dominicana el 12 de septiembre de 2014 entre E. O. V. G. y S. B. A..

Madrid, 14 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de España en Santo Domingo (República Dominicana)

Resolución de 26 de octubre de 2016 (1ª)

IV.4.1.2. Matrimonio celebrado en el extranjero

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

HECHOS

1. Don F. L. G. G. nacido en Ecuador y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2010, presentó en el Consulado español en Santo Domingo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 5 de abril de 2014 con doña N. A. F. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 4 de febrero de 2016 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, aportando numerosas pruebas documentales.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un informe favorable. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe favorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción del 9 de enero de 1995; la instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4^a de diciembre de 2005; 16-1^a de marzo, 7-2^a y 3^a y 11-4^a de abril, 31-1^a y 5^a de mayo, 23-2^a de junio, 20-5^a, 22 y 25-1^a de julio, 5-2^a de septiembre, 30-2^a de octubre, 10-5^a y 11 de noviembre y 28-5^a de diciembre de 2006; 5-3^a y 29-3^a y 4^a de enero, 28-1^a y 2^a de febrero, 25-7^a de abril, 31-2^a de mayo, 1-2^a y 3^a de junio, 11-2^a, 5^a y 6^a de septiembre, 26-5^a de noviembre y 28-5^a de diciembre de 2007; 11-1^a y 31-1^a y 4^a de enero, 4-3^a y 5-1^a de marzo, 13-1^a, 2^a, 3^a y 5^a de mayo, 8-6^a de septiembre y 22-1^a de diciembre de 2008; 29-8^a y 10^a de enero y 6-1^a de marzo de 2009.

II. No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el registro civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3^o RRC), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.

III. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas

del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).

IV. En el caso actual los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero consentimiento matrimonial. Si se comparan las respuestas dadas en las entrevistas, no existen prácticamente contradicciones y han mantenido una relación continuada a lo largo del tiempo, los interesados presentan numerosas pruebas, que evidencian una relación continuada.

V. Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el *ius nubendi*, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de aquí inscribir un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el *ius connubii*, este centro directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el ministerio fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art. 74 CC) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1. Estimar el recurso

2. Declarar que no hay obstáculo para que se inscriba el matrimonio celebrado en La República Dominicana el 5 de abril de 2014 entre F. L. G. G. y N. A. F.

Madrid, 26 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo (República Dominicana).

VII RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y TRASLADO DE INSCRIPCIONES

VII.1 RECTIFICACIÓN DE ERRORES

VII.1.1 RECTIFICACIÓN DE ERRORES, ART. 93 Y 94 LRC

Resolución de 7 de octubre de 2016 (45ª)

VII.1.1. Rectificación de errores en inscripción de nacimiento

No acreditados los errores denunciados, no prospera el expediente de rectificación en inscripción de nacimiento de varias menciones de identidad de la madre del inscrito.

En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Zaragoza.

HECHOS

1. En escrito presentado en el Registro Civil de Zaragoza en fecha 8 de enero de 2015 la Sra. D. C., mayor de edad y domiciliada en dicha población, expone que en la inscripción de nacimiento de su hijo O. C., nacido en Z. de padres mauritanos el de 2009, se observa la existencia de error en datos de la madre del inscrito, ya que consta que sus padres se llaman Sikhou y Sira y que nació en 1973 en lugar de Cheikhou, Djeinaba y 1977, que es lo correcto. Acompaña certificación literal de la inscripción de nacimiento cuya rectificación interesa, copia simple de su NIE y certificado de autenticidad nº 24/2014 expedido por el Registro Civil de Sebkhá, wilaya de Nouakchott (Mauritania) a partir de declaración de dos testigos.

2. Ratificada la promotora en el escrito presentado y unido testimonio del cuestionario para la declaración de nacimiento y del extracto de acta de matrimonio en ese momento presentado, se acordó instruir expediente gubernativo de rectificación de error, el ministerio fiscal informó que, a la vista de las pruebas practicadas, procede la rectificación del error existente en la inscripción de nacimiento y seguidamente la juez encargada dispuso que se deduzca testimonio del expediente a idéntico fin tramitado en 2014, con el resultado de que a él se aportó certificado de autenticidad nº 10/2014 expedido por la misma autoridad sobre declaración de los mismos testigos y concluyó con auto de 1 de diciembre de 2014, denegatorio de la rectificación interesada.

3. El ministerio fiscal fue notificado de la anterior diligencia y el 17 de marzo de 2015 la juez encargada, razonando que la inscripción se practicó en plena concordancia con lo declarado por el padre del inscrito y que la certificación ahora aportada difiere de la que obra en el expediente anterior en el nombre de la madre, Djeinaba/Djeiwaba, y en el lugar de nacimiento, Bouanze/Nouakchott, de la promotora, dictó auto disponiendo que, al no haber quedado acreditado en modo alguno el error alegado, no ha lugar a la rectificación interesada.

4. Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el certificado del primer expediente estaba hecho a mano y contiene errores pero que el aportado al segundo, hecho a máquina o en ordenador, expresa claramente los nombres y que los que constan en la inscripción de nacimiento del menor, consignados solamente porque así los declaró el padre sin aportar prueba alguna, no tienen nada que ver con los verdaderos.

5. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que informó que procede la rectificación del error existente en la inscripción de nacimiento, y la juez encargada, por su parte, informó en el sentido de dar por reproducidos los fundamentos jurídicos del auto dictado y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 2, 23, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 296, 342 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 12 de abril y 4-5ª de noviembre de 2003, 1-26ª y 3-17ª de septiembre de 2010, 1-2ª de diciembre de 2011, 23-1ª de febrero y 13-2ª y 4ª de marzo de 2012, 15-60ª de julio y 4-2ª y 15-78ª de noviembre de 2013; 3-53ª, 10-46ª y 30-51ª de enero, 20-42ª y 45ª de marzo, 24-112ª de junio, 31-234ª de julio y 1-81ª de octubre de 2014 y 30-8ª de marzo, 10-29ª de julio y 9-47ª de octubre de 2015.

II. Solicita la promotora que en la inscripción de nacimiento de su hijo, nacido en Zaragoza de padres mauritanos el 28 de julio de 2009, se rectifiquen las menciones de la madre del inscrito relativas al nombre de su padre y de su madre y a la fecha de su nacimiento, exponiendo que constan como tales Sikhou, Sira y 1973 en lugar de Cheikhou, Djeinaba y 1977, que es lo correcto, y la juez encargada, visto que el dato se consignó en plena concordancia con lo declarado por el padre del inscrito y que la certificación ahora aportada difiere de la que obra en expediente inmediatamente anterior promovido a idéntico fin en el nombre de la madre, Djeinaba/Djeiwaba, y en el lugar de nacimiento, Bouanze/Nouakchott, de la promotora, dispone que, no acreditados en modo alguno los errores alegados, no ha lugar a la rectificación interesada. Este auto de fecha 17 de marzo de 2015 constituye el objeto del presente recurso.

III. La regla general en materia de errores registrales es que las inscripciones solo pueden rectificarse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (cfr. art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé determinados supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia en el registro del error denunciado.

IV. A excepción del nombre (cfr. art. 12 RRC), las menciones de identidad de los padres de una persona son en su inscripción de nacimiento datos no esenciales no cubiertos por la fe pública registral (cfr. art. 41 LRC) de modo que, si se demuestra que han sido consignados erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93.3º de la Ley. En este caso no han llegado a probarse los errores denunciados en la fecha de nacimiento de la madre y en los nombres de los padres de esta ya que, unido al expediente de rectificación testimonio de la documentación en cuya virtud se practicó el asiento, se comprueba que en el cuestionario para la declaración de nacimiento se consignaron los datos que resultaron inscritos, la alegación formulada en el escrito de recurso de que se dio por bueno lo manifestado por el padre sin aportar prueba alguna, sobre descartar que los errores que se denuncian sean registrales, queda contradicha por el acta de matrimonio del Registro local aportada en ese momento por el progenitor, plenamente coincidente con su declaración; consta dictado auto de 1 de diciembre de 2014 denegando idéntica pretensión en expediente de igual naturaleza al que únicamente se aportó un certificado mauritano de autenticidad expedido el 10 de junio de 2014 a partir de declaración de dos testigos y, prácticamente sin solución de continuidad, en fecha 8 de enero de 2015 se insta un nuevo expediente sin más prueba que otro certificado de autenticidad expedido por la misma autoridad a partir de declaración de los mismos testigos seis meses después y que, obviamente, tampoco puede desvirtuar lo que consta en la inscripción de nacimiento del menor y en el acta mauritana de matrimonio de sus progenitores.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 25 de Enero de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Zaragoza

Resolución de 7 de octubre de 2016 (46ª)

VII.1.1. Rectificación de error en inscripción de nacimiento

1º. No acreditado el error denunciado, no prospera el expediente de rectificación en inscripción de nacimiento del primer apellido de la inscrita.

2º. En principio los apellidos de un español son los determinados por la filiación según la ley española, primero del padre y primero de los personales de la madre, sin que la

ley personal distinta de uno de los progenitores pueda condicionar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Registro Civil.

En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Zaragoza.

HECHOS

1. En comparecencia en el Registro Civil de Zaragoza de fecha 14 de octubre de 2014 el Sr. J. E. B. T. y doña S. D. G., mayores de edad y domiciliados en dicha población, manifiestan que en la inscripción de nacimiento de su hija J. E. Batinga D., nacida en Z. el de 2014, se omitió consignar, respecto al padre de la inscrita, que su lugar de nacimiento es D., I. N. y, respecto a la madre, que su país de nacimiento es Filipinas y su nacionalidad la española y que su hija debería llevar como primer apellido el segundo de su padre ya que, conforme a su ley personal, “Batinga” es el apellido materno o middle name y “Talon” el apellido paterno; y solicitan que se subsanen las omisiones reseñadas y que se haga constar que el primer apellido de la menor es “Talon” acompañando certificación literal de las inscripciones de nacimiento de madre e hija y certificado de nacimiento filipino del padre.

2. Acordada la incoación de expediente gubernativo y unida al mismo copia de las actuaciones que precedieron a la práctica del asiento, el ministerio fiscal informó que, a la vista de las pruebas practicadas, procede la rectificación del error existente en la inscripción de nacimiento, de conformidad con el art. 93 de la Ley del Registro Civil y concordantes de su reglamento, y la subsanación de la omisión de datos y el 29 de octubre de 2014 la juez encargada, razonando que ha quedado acreditada la existencia de las omisiones denunciadas y, respecto a los apellidos de la nacida, que tal como señala el art. 194 RRC deben ser el primero de su padre y el primero de su madre, dictó auto acordando completar los datos omitidos y que, al no haber quedado acreditado el error alegado en el primer apellido de la inscrita, no ha lugar a la rectificación solicitada.

3. Notificada la resolución al ministerio fiscal y al padre, los dos progenitores interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que, debido a la diferencia en el orden de los apellidos que existe entre España y su país de origen, donde el apellido de la madre se escribe primero pero el que se transmite, como generalmente ocurre también en España, es el del padre, a su hija se le ha puesto como primer apellido el de su abuela paterna en lugar del de su abuelo paterno, que para ellos es muy importante que la niña, plenamente española, tenga los apellidos correctos y que no entienden que no se acepte la rectificación que solicitan y aportando certificado al respecto emitido por la Sección Consular de la Embajada de Filipinas en España y copia simple de pasaporte filipino y de NIE del padre de la menor.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que informó que, al no haberse acreditado el error alegado en el apellido de la inscrita, está conforme con el auto apelado y la juez encargada, por su parte, informó en el sentido de que se debe confirmar en todos sus extremos la resolución dictada y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 y 109 del Código civil (Cc), 2, 23, 26, 41, 53, 55, 57 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 194, 205, 342, 358 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC); las instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de mayo de 2007 y 24 de febrero de 2010 y las resoluciones, entre otras, de 12 de abril y 4-5ª de noviembre de 2003, 3-17ª de septiembre de 2010, 1-2ª de diciembre de 2011, 23-1ª de febrero y 13-2ª y 4ª de marzo de 2012, 15-60ª de julio y 15-78ª de noviembre de 2013 y 3-53ª de enero, 20-42ª de marzo, 22-18ª de mayo y 31-234ª de julio de 2014.

II. Solicitan los promotores que en la inscripción de nacimiento de su hija, nacida en Z. de padre filipino y madre española el de 2014, se consignen datos omitidos, referentes al lugar de nacimiento del padre de la inscrita y al país de nacimiento y la nacionalidad de su madre, y se haga constar que el primer apellido de la menor es el segundo de su padre, exponiendo que este, conforme a su ley personal, ostenta como primero el materno y como segundo el paterno, y la juez encargada, razonando que ha quedado acreditada la existencia de las omisiones denunciadas y, respecto a los apellidos de la nacida, que conforme al art. 194 RRC deben ser el primero de su padre y el primero de su madre, acordó que la inscripción se complete con los datos omitidos y que, al no haber quedado acreditado el error alegado en el primer apellido de la inscrita, no ha lugar a la rectificación interesada. Este auto de fecha 29 de octubre de 2014, en lo que a la denegación respecta, constituye el objeto del presente recurso.

III. La regla general en materia de errores registrales es que las inscripciones solo pueden rectificarse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé determinados supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia en el registro del error denunciado.

IV. Los apellidos de una persona son en su inscripción de nacimiento menciones de identidad (art. 12 RRC) no cubiertas por la fe pública registral (cfr. art. 41 LRC) de modo que, si se demuestra que han sido consignados erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93.1º de la Ley. En este caso, no queda probado el error denunciado puesto que consta que el apellido "Batinga" inscrito como primero a la menor es el primero de su padre, el artículo 194 RRC dispone que, si la filiación está determinada por ambas líneas y a salvo la opción prevista en el artículo 109 del Código Civil, primer apellido de un español es el primero del padre y segundo apellido el primero de los personales de la madre y, en

consecuencia, no cabe hacer constar como primer apellido de una española el segundo apellido de su padre filipino.

V. Aun cuando la menor a la que se refiere este expediente, al parecer de doble nacionalidad española y filipina, pudiera verse abocada a una situación en la que fuera identificada con apellidos distintos en los dos países de los que es nacional, cabe recordar que el Derecho Internacional Privado y los ordenamientos jurídicos internos han previsto medidas de coordinación entre los registros civiles de los estados para asegurar la adecuada identificación de una persona con doble nacionalidad inscrita con apellidos distintos en uno y otro país y que la legislación española admite que este hecho, que afecta al estado civil de un español según una ley extranjera, sea objeto de anotación registral, conforme al artículo 38.3 de la Ley del Registro Civil, a fin de poner en relación el contenido de los registros español y extranjero y disipar dudas en cuanto a la identidad del inscrito.

VI. De otro lado, el derecho de los interesados plurinacionales o de sus representantes legales a elegir una de las leyes nacionales concurrentes puede ejercitarse a través del expediente de cambio de apellidos regulado en los artículos 57 y siguientes de la Ley del Registro Civil que se instruye por el registro civil del domicilio y se resuelve por el ministerio de Justicia y hoy, por delegación (Orden JUS/696, de 16 de abril de 2015), por la Dirección General de los Registros y del Notariado, que puede autorizar el cambio de apellidos si resulta acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos (arts. 57 LRC y 205 RRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Zaragoza

Resolución de 7 de octubre de 2016 (53ª)

VII.1.1. Rectificación de errores en inscripción de nacimiento.

Procede retrotraer actuaciones para que el encargado del registro se pronuncie sobre las demás peticiones planteadas junto a la rectificación de la fecha de nacimiento del inscrito, que fue desestimada.

En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores contra auto del encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado el 29 de abril de 2014 en el Registro Civil de Gandía (Valencia), don C. O. V. y doña A.-D. G. C., con domicilio en M. (G.), solicitaban la

rectificación de la fecha de nacimiento y el nombre del inscrito en la inscripción de nacimiento de su hijo Yu-Long O. G., adoptado por los promotores en China, para hacer constar que la expresión correcta del nombre es Yulong y que el menor nació el de 2008 (en lugar del de 2007, como actualmente figura consignado), alegando que exámenes médicos realizados en España han concluido que la edad de su hijo es menor de la que le atribuyeron en su día las autoridades chinas. En el mismo escrito solicitaban también el traslado de la inscripción a un nuevo folio en el que consten los datos rectificadas. Aportaban los siguientes documentos: DNI de los promotores; DNI e inscripción de nacimiento practicada en el Registro Civil del Consulado General de España en Cantón (China) de Yulong Y. (cuerpo principal), nacido en G. el de 2007, con marginal de 20 de noviembre de 2013 de adopción por los promotores mediante escritura notarial de 13 de noviembre de 2013, pasando a ser el nombre y apellidos del inscrito Yu Long O. G.; traducción de un informe médico de la institución de acogimiento china que se hizo cargo del menor en 2011; un informe radiológico realizado en España; libro de familia; certificado de empadronamiento y certificación de nacimiento china.

2. Remitido el expediente al Registro Civil Central, competente para su resolución, previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado dictó auto el 21 de enero de 2015 denegando la rectificación de la fecha de nacimiento por no resultar acreditado el error pretendido y porque se trata de un dato esencial del que la inscripción hace fe, de manera que solo cabe obtener su rectificación en vía judicial.

3. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando los promotores que, si bien ya han sido informados de que la rectificación de la fecha de nacimiento solo es posible obtenerla por vía judicial, la resolución dictada no se ha pronunciado respecto de las otras dos cuestiones planteadas inicialmente, es decir, la rectificación del nombre del inscrito y el traslado posterior del asiento, con los datos que resulten modificados, al Registro Civil de Gandía, correspondiente al domicilio familiar, cancelando el actual.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil Central ratificó la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12, 342, 344 y 355 del Reglamento del Registro Civil (RRC); 218 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) y las resoluciones 2-6ª de octubre de 2007, 13-3ª de febrero, 13-51ª de diciembre y 27-4ª de noviembre de 2013 y 11-62ª y 63ª de abril de 2014.

II. Los promotores del expediente presentaron una solicitud en la que solicitaban la rectificación de la fecha de nacimiento y el nombre de su hijo en la inscripción de nacimiento de este, practicada tras un procedimiento de adopción internacional, así

como el traslado del asiento, una vez rectificado, al registro civil de su domicilio. El encargado del registro dictó auto denegando la rectificación relativa a la fecha de nacimiento del inscrito pero sin pronunciamiento alguno respecto a las otras dos cuestiones planteadas, lo que motivó la presentación del recurso reclamando una resolución al respecto.

III. Dispone el artículo 355, párrafo primero, del Reglamento del Registro Civil que “las resoluciones del encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente son recurribles ante la Dirección General durante quince días hábiles, a partir de la notificación”. En este caso, como se ha visto, el encargado dictó resolución poniendo fin al expediente pero su pronunciamiento, denegando la rectificación pretendida, alcanzaba solamente a una de las tres cuestiones planteadas en la solicitud inicial, denegación, por otra parte, asumida en sus términos por los recurrentes según manifiestan en el escrito de recurso. En consecuencia, es preciso retrotraer las actuaciones para que el encargado competente dicte resolución resolviendo en el sentido que proceda sobre las cuestiones no abordadas en el auto recurrido y poniendo así fin al expediente.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y retrotraer las actuaciones para que el encargado del registro se pronuncie sobre las cuestiones no decididas en la resolución emitida el 21 de enero de 2015

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 14 de octubre de 2016 (24ª)

VII.1.1. Rectificación de errores en inscripción de nacimiento.

Hay que acudir a la vía judicial para rectificar la fecha de nacimiento del inscrito en una inscripción de nacimiento.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores contra auto del encargado del Registro Civil de Madrid.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado el 10 de noviembre de 2015 en el Registro Civil de Madrid Dª A. C. S. y Don J.-C. de la V. B., con domicilio en la misma ciudad, solicitaban la rectificación de la fecha de nacimiento que figura en la inscripción de nacimiento de su hijo N., adoptado en Etiopía, para hacer constar como año de nacimiento 2013 en lugar de 2012, alegando que exámenes físicos, psicológicos y escolares realizados en España han concluido que la edad de su hijo es menor de la que le atribuyeron en su

día las autoridades etíopes. Aportaban los siguientes documentos: DNI de los promotores; pasaporte etíope e inscripción de nacimiento practicada en el Registro Civil de Madrid de N. de la V. C., nacido en A. (Etiopía) el de 2012, hijo de los promotores; informe radiológico de mano; traducción de resolución de un tribunal etíope de 17 de octubre de 2013 por la que se declara a la madre del menor B. G. tutora legal de este; traducción del historial de circunstancias vitales del mismo menor, declarado en situación de vulnerabilidad, donde consta 2013 como fecha de su nacimiento; informe pediátrico realizado en una clínica extranjera (no consta la localidad ni el país); informe de un equipo de atención temprana de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid referido al menor N. de la V. C.; informe psicopedagógico de una entidad española privada e informe médico de un centro hospitalario de A.

2. Incorporado al expediente el que se siguió en su día para la inscripción de la adopción en España el encargado acordó la práctica de un examen al menor por parte de un médico forense, quien emitió informe fechado el 19 de enero de 2016 concluyendo que, si bien no puede determinarse con seguridad, es probable que la edad del menor en ese momento se situara entre los dos años y medio y los tres, de manera que el nacimiento pudo haber tenido lugar en los primeros meses de 2013.

3. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 29 de marzo de 2016 denegando la rectificación solicitada por no resultar acreditado el error invocado a la vista de las conclusiones de los diferentes informes contenidos en el expediente y porque, una vez practicada la inscripción, la fecha de nacimiento constituye un dato esencial cuya rectificación solo es posible en vía judicial.

4. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando los promotores que en el momento de practicarse la inscripción desconocían cuál era la edad real de su hijo, por lo que no pudieron plantear entonces su pretensión actual, y que, aunque es imposible determinar la fecha exacta del nacimiento, del conjunto de la documentación aportada al expediente se desprende que, en cualquier caso, la registrada no es correcta y que las capacidades del inscrito coinciden más con las de un niño nacido en 2013 que con las de uno nacido en 2012. Con el escrito de recurso, además de copias de los informes que ya constaban en el expediente, se incorporaron algunos más de contenido médico y uno de logopedia.

5. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil de Madrid remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 16-2ª de febrero de 2002; 21 de marzo, 10 de julio y 5-1ª de diciembre de 2003; 14-4ª de mayo de 2004;

18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 13-1ª y 28-2ª de marzo y 3-4ª de abril de 2006; 24-2ª de abril, 28-2ª de diciembre de 2007; 3-3ª de enero, 18-3ª de junio 22-6ª de octubre y 25-8ª de noviembre de 2008; 9-5ª de marzo de 2009; 15-5ª de julio de 2010 y 26-6ª de julio de 2012.

II. Pretenden los promotores la rectificación en la inscripción de nacimiento de su hijo, adoptado en Etiopía, del dato correspondiente a la fecha de nacimiento del inscrito, alegando que la consignada actualmente no se corresponde con su desarrollo físico e intelectual. El encargado del registro denegó la rectificación pretendida porque los informes aportados al expediente no permiten determinar con seguridad la fecha que deba hacerse constar y porque, en cualquier caso, se trata de un dato esencial de la inscripción que solo es susceptible de rectificación en vía judicial.

III. Es doctrina constante de este centro directivo que el dato sobre la fecha de nacimiento de la persona inscrita consignada en una inscripción de nacimiento no es una simple mención de identidad del nacido susceptible de rectificación, si fuera errónea, mediante expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93 de la Ley del Registro Civil. Por el contrario, ese dato es una circunstancia esencial de la inscripción de nacimiento de la que esta hace fe (art. 41 LRC), por lo que su rectificación ha de obtenerse, en principio, acudiendo a la vía judicial ordinaria conforme al criterio general que proclama el artículo 92 de la Ley del Registro Civil. Esa doctrina resulta plenamente aplicable a este caso en el que, además, si bien la mayoría de los informes aportados al expediente coinciden en rebajar unos meses la edad biológica del menor, no es posible, sin embargo, determinar de forma concluyente a través de su contenido cuál deba ser el alcance de tal rebaja, lo que refuerza la conveniencia de acudir a la jurisdicción ordinaria en aras de una mayor seguridad.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 21 de octubre de 2016 (35ª)

VII.1.1. Rectificación de errores en inscripción de nacimiento.

En principio, ha de hacerse constar en la inscripción la fecha de nacimiento que consta en la documentación local relativa a una adopción. Una vez practicada la inscripción, para rectificar ese dato ha de acudirse a la vía judicial.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores contra auto de la encargada del Registro Civil de Valladolid.

HECHOS

1. Mediante comparecencia el 1 de marzo de 2016 en el Registro Civil de Valladolid don C. G. P. y D^a C. I. A., con domicilio en la misma ciudad, solicitaban la inscripción de nacimiento, con marginal de adopción internacional, de su hijo Erick-Antonio M., nacido en Nicaragua el de 2011 según la certificación local de nacimiento, si bien pedían el cambio de nombre del menor por “Erick” y la rectificación de su año de nacimiento, alegando que, según pruebas médicas realizadas en España, resulta que la edad ósea se corresponde con la de un niño de tres años. Al mismo tiempo solicitaban que, una vez practicada la inscripción, se trasladara su contenido a otro folio en el que no constaran los datos de la adopción y se consignara como lugar de nacimiento el del domicilio de los adoptantes, V. Aportaban los siguientes documentos: DNI de los promotores; pasaporte y certificación de nacimiento nicaragüense del menor practicada el 21 de enero de 2016; certificado de idoneidad para la adopción de la Junta de Castilla y León; sentencia nicaragüense de aprobación de la adopción de 21 de enero de 2016; informe médico de 29 de febrero de 2016 según el cual, a partir de las radiografías realizadas en España, la edad ósea del menor corresponde a tres años, por lo que se considera que la fecha de nacimiento declarada no es correcta; inscripciones de nacimiento y de matrimonio de los progenitores; volantes de empadronamiento y cuestionarios de declaración de datos para la inscripción.

2. La encargada del registro acordó la práctica de examen médico forense al menor, del que resultó un informe, fechado el 5 de abril de 2016, en el que se concluye que, valoradas las radiografías realizadas mediante comparativa con los índices estándares para la población española, el desarrollo óseo del menor interesado se corresponde con la imagen tipo de tres años y de tres años y seis meses.

3. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 19 de abril de 2016 acordando la práctica de la inscripción en los términos solicitados excepto en lo relativo a la fecha de nacimiento, que deberá ser la que figura en la certificación del país de origen, dado que el informe médico forense establece un margen de seis meses y, además, se refiere a tablas de población española, por lo que no se considera suficientemente acreditada la existencia de una discordancia entre la fecha de nacimiento oficial y la real.

4. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando los promotores que en la institución nicaragüense que acogió al menor una vez declarado su desamparo desconocían su fecha de nacimiento porque no había sido registrado, de manera que, según les dijeron, habían hecho constar una fecha que se inventaron, aunque al poco tiempo se constató que el niño era más pequeño, y que, una vez en España, tanto las pruebas médicas como los informes del centro educativo en el que está matriculado su hijo y el informe del médico forense, coinciden en que el niño tiene una edad de entre tres años y tres y medio, por lo que, de no accederse a la rectificación pretendida, los perjuicios para el menor en su desarrollo educativo y adaptación social serían muy importantes. Con el

escrito de recurso se incorporó al expediente un informe del centro escolar en el que está matriculado el menor certificando que su desarrollo se corresponde con el de 1º de Educación Infantil y la resolución nicaragüense de 11 de noviembre de 2015 por la que se declaró al menor, con una edad aproximada de tres años de edad, en situación de desamparo, atribuyéndole como fecha de nacimiento la declarada por la institución de acogida que se hizo cargo de él.

5. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Valladolid se ratificó en la decisión recurrida ordenando la práctica de la inscripción y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 10-5ª de septiembre de 2001; 16-2ª de febrero de 2002; 21 de marzo, 10 de julio y 5-1ª de diciembre de 2003; 14-4ª de mayo de 2004; 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 13-1ª y 28-2ª de marzo y 3-4ª de abril de 2006; 24-2ª de abril, 19-7ª de septiembre y 28-2ª de diciembre de 2007; 3-3ª de enero, 18-3ª de junio 22-6ª de octubre y 25-8ª de noviembre de 2008; 9-5ª de marzo de 2009; 15-5ª de julio de 2010 y 26-6ª de julio de 2012.

II. Los promotores solicitaron que se practicara en España la inscripción de nacimiento de su hijo, adoptado en Nicaragua, pero atribuyéndole una fecha distinta de nacimiento (no especifican cuál) alegando que la que figura en la certificación local es errónea, pues fue establecida, a falta de otros datos, arbitrariamente por la entidad nicaragüense que se hizo cargo de él tras ser declarado en desamparo y que, según se desprende de informes médicos realizados en España, la edad ósea del menor es inferior a la declarada. La encargada del registro acordó la práctica de la inscripción según los datos que constaban en la documentación local, denegando la rectificación pretendida porque los informes incorporados al expediente no permiten determinar con seguridad la fecha que deba hacerse constar y porque sus conclusiones están basadas en tablas correspondientes a la población española.

III. En principio, ha de hacerse constar en la inscripción que se practique en España la fecha de nacimiento que figura en la certificación local de nacimiento del adoptado, si bien, ante las alegaciones de los progenitores, se procedió en este caso a realizar un examen por el médico forense (cfr. art. 169 RRC) cuya conclusión no fue suficiente para que la encargada del registro acordara modificar la que figuraba en la documentación nicaragüense. Por otro lado, es doctrina constante de este centro directivo que, una vez practicada la inscripción, el dato sobre la fecha de nacimiento de la persona inscrita consignada en la inscripción de nacimiento no es una simple mención de identidad del nacido susceptible de rectificación, si fuera errónea, mediante expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93 de la Ley del Registro Civil. Por el contrario, ese dato es una circunstancia esencial de la inscripción de

nacimiento de la que esta hace fe (art. 41 LRC), por lo que su rectificación ha de obtenerse acudiendo a la vía judicial ordinaria conforme al criterio general que proclama el artículo 92 de la Ley del Registro Civil. Esa doctrina resulta plenamente aplicable a este caso en el que, además, si bien los informes médicos aportados al expediente coinciden en rebajar la edad biológica del menor, no es posible, sin embargo, determinar de forma cierta a través de su contenido cuál deba ser el alcance de tal rebaja, lo que refuerza la conveniencia de acudir a la jurisdicción ordinaria en aras de una mayor seguridad.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Valladolid.

Resolución de 21 de octubre de 2016 (40ª)

VII.1.1. Rectificación de error en inscripción de nacimiento

La rectificación en una inscripción de nacimiento de datos de los que hace fe requiere, en principio, acudir a la vía judicial.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de Navalcarnero (Madrid).

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Navalcarnero en fecha 14 de septiembre de 2011 doña G. K. K., mayor de edad y domiciliada en A. (Madrid), insta expediente de rectificación en su inscripción de nacimiento de error existente en la fecha de nacimiento de la inscrita exponiendo que se consignó como tal el 11 de diciembre de 1966 y que el año que debe constar es 1967. Acompaña certificación literal de la inscripción de nacimiento cuya rectificación interesa, practicada en el Registro Civil de Navalcarnero el 22 de abril de 2008 con marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia en fecha 2 de agosto de 2007, certificación literal de inscripción de nacimiento de dos hijos nacidos en Ucrania en 1988 y 1991 e inscritos asimismo en abril de 2008 con sendas marginales de adquisición de la nacionalidad española por residencia, volante de empadronamiento en A. y copia simple de DNI y de certificado de nacimiento ucraniano.

2. Ratificada la promotora en el contenido del escrito presentado, el ministerio fiscal, considerando que no consta de manera indubitada la certeza de la fecha propuesta, se opuso a lo solicitado y el 17 de enero de 2012 el juez encargado, razonando que para que pueda accederse a la rectificación en base a lo establecido en el artículo 94

de la Ley del Registro Civil se requiere dictamen favorable del ministerio fiscal, dictó auto disponiendo desestimar la petición formulada.

3. Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en la tramitación del procedimiento de adquisición de la nacionalidad española y por motivos ajenos a su voluntad se produjo un error en la inscripción de la fecha de su nacimiento, que al expedirse la certificación literal apreció la incorrección e instó el expediente de rectificación, en el que cree haber acreditado suficiente e indubitadamente el error material en que se incurrió al transcribir sus datos personales, y que la falta de correlación entre los inscritos y los reales podría ocasionar perjuicios no solo a ella sino también a sus hijos, en cuyas inscripciones de nacimiento consta correctamente la fecha de nacimiento de la madre de los inscritos y, aportando, como prueba documental adicional, copia simple de certificado de matrimonio ucraniano.

4. De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que se adhirió al recurso en base a las alegaciones en él formuladas y a la documental obrante en el expediente, y seguidamente el juez encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 2, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12, 295, y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 16-2ª de febrero de 2002; 21 de marzo, 10 de julio y 5-1ª de diciembre de 2003; 14-4ª de mayo de 2004, 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005, 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005, 13-1ª y 28-2ª de marzo y 3-4ª de abril de 2006, 24-2ª de abril, 18-1ª de septiembre y 28-2ª de diciembre de 2007; 3-3ª de enero, 18-3ª de junio, 22-6ª de octubre y 25-8ª de noviembre de 2008; 9-5ª de marzo de 2009, 15-5ª de julio y 6-16ª de septiembre de 2010, 18-3ª de noviembre y 1-3ª de diciembre de 2011, 19-56ª de diciembre de 2012, 8-53ª y 15-2ª de octubre y 11-144ª y 13-52ª de diciembre de 2013; 10-2ª de febrero, 20-7ª de marzo, 31-238ª de julio, 1-29ª de octubre y 19-110ª de diciembre de 2014 y 29-10ª de mayo, 26-57ª de junio y 28-75ª de agosto de 2015.

II. Solicita la promotora que en su inscripción de nacimiento, practicada en el Registro Civil de Navalcarnero el 22 de abril de 2008 con marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia en fecha 2 de agosto de 2007 con renuncia a su anterior nacionalidad ucraniana, se rectifique la fecha en que acaeció el hecho, exponiendo que nació el 11 de diciembre de 1967 y por error consta que el año de su nacimiento es 1966, y el juez encargado, visto que no concurre el dictamen favorable del ministerio fiscal requerido para que pueda accederse a la rectificación en base a lo establecido en el art. 94 LRC, dispone desestimar la petición formulada mediante auto de 17 de enero de 2012 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por la interesada y al que se adhiere el ministerio fiscal.

III. La fecha de nacimiento de una persona no es en su inscripción de nacimiento una simple mención de identidad susceptible de rectificación, si se demuestra errónea, por expediente gubernativo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 93.1º de la Ley de Registro Civil, sino un dato esencial de la inscripción, del que esta hace fe (cfr. art. 41 LRC). De ahí que su rectificación, por muy evidente que pueda parecer el error, ha de obtenerse, en principio, por sentencia firme recaída en juicio ordinario, conforme establece el artículo 92 de la Ley del Registro Civil.

IV. Si bien de la documental aportada resultan indicios de que el año de nacimiento de la interesada pudiera ser el que aduce correcto y existen determinados supuestos en los que excepcionalmente cabe la rectificación por la vía del expediente registral, en este caso, al no haberse encontrado en los archivos del registro el expediente de nacionalidad por residencia en el que trae causa el asiento, no es posible la confrontación con los documentos en cuya sola virtud se practicó la inscripción y queda impedida la rectificación en virtud de lo dispuesto en el art. 94.1º LRC. Tampoco cabe aplicar el art. 93.3º LRC porque, de una parte, las inscripciones de nacimiento de los hijos hacen fe de las respectivas fechas de nacimiento pero no de la de su madre, que ni tan siquiera es en ellas mención de identidad de los inscritos (cfr. art. 12 RRC) y, de otra, la certificación extranjera de nacimiento aportada al expediente de rectificación, copia simple de un documento sin la preceptiva apostilla y traducido por persona que se identifica únicamente por el nombre propio y no acredita ser intérprete jurado, carece de fuerza probatoria para desvirtuar la fecha de nacimiento que el registro proclama. Por todo ello la rectificación instada respecto a dato del que la inscripción hace fe no puede prosperar en vía gubernativa y habrá de instarse, conforme a la regla general contenida en el art. 92 LRC, en la vía judicial en la que, sin los límites del art. 2 LRC, son admisibles medios más amplios de prueba.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil en Navalcarnero (Madrid).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (41ª)

VII.1.1. Rectificación de error en inscripción de nacimiento

Acreditado el error denunciado, prospera el expediente de rectificación en inscripción de nacimiento del nombre de la inscrita.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil Central en fecha 29 de enero de 2015 doña Neuly Isabel P. P., mayor de edad y domiciliada en A. H. (Madrid), solicita la incoación de expediente de rectificación de error en su inscripción de nacimiento exponiendo que al practicarla se incurrió en el error de consignar el nombre que consta en lugar de “Neuly Isabel”, que es lo correcto, y acompañando certificación literal de la inscripción cuya rectificación interesa, practicada en el Registro Civil Central el 14 de octubre de 1998 con marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia en fecha 28 de julio de 1998 sin renuncia a su nacionalidad anterior dominicana.
2. Acordada la incoación de expediente gubernativo, el ministerio fiscal informó que, siendo el nombre inscrito el facilitado por la interesada en el impreso de declaración de datos y con el que le fue concedida la nacionalidad española, no se aprecia el error alegado y el 30 de abril de 2015 el juez encargado, razonando que al practicar el asiento, conforme establece el art. 213 del Reglamento del Registro Civil, se mantuvo el nombre que la promotora venía usando y que, por tanto, no ha quedado de manifiesto la existencia del error denunciado, dictó auto disponiendo que no ha lugar a la rectificación instada.
3. Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que su nombre real es “Neuly Isabel” y que por causa del nombre está teniendo en estos momentos problemas con la Embajada de España en la República Dominicana.
4. De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la desestimación del recurso y la confirmación del acuerdo apelado, y el juez encargado informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución impugnada, entiende que debe confirmarse y seguidamente dispuso la remisión del expediente, junto con lo actuado en 1998, con ocasión de la inscripción del nacimiento y del matrimonio de la interesada, y en 1999, con ocasión de la opción por la nacionalidad española de dos hijas menores de edad, a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 23, 26, 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 213, 342 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 13-2ª y 20-2ª de mayo de 1998, 9-1ª de octubre de 1999, 4-1ª de abril de 2001, 27-2ª de abril de 2002, 19-3ª de septiembre de 2003, 29-4ª de octubre de 2007, 26-1ª de marzo y 1-8ª y 9-7ª de julio de 2008, 27-8ª de febrero y 20-1ª de abril de 2009; 21-81ª de junio, 2-109ª de septiembre y 7-44ª de octubre de 2013; 17-112ª de julio y 1-85ª de octubre de 2014 y 28-7ª de agosto de 2015.

II. Solicita la promotora que en su inscripción de nacimiento, practicada en el Registro Civil Central en octubre de 1998 con marginal de adquisición de la nacionalidad

española por residencia en julio de 1998, se rectifique el nombre de la inscrita, Neully Isabel, exponiendo que fue consignado por error en lugar de “Neully Isabel”, que es lo correcto, y el juez encargado, razonando que, conforme establece el art. 213 RRC, se mantuvo a la interesada el nombre que venía usando y, por tanto, no ha quedado de manifiesto la existencia del error denunciado, dispone que no ha lugar a la rectificación instada mediante auto de 30 de abril de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. La regla general en materia de errores registrales es que las inscripciones solo pueden rectificarse por sentencia firme recaída en juicio ordinario (cfr. art. 92 LRC). No obstante, la propia ley contempla determinados supuestos en los que la rectificación es posible por la vía del expediente gubernativo, con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC, siempre que quede acreditada la existencia en el registro del error denunciado.

IV. El nombre de una persona es en su inscripción de nacimiento una mención de identidad (cfr. art. 12 RRC) no cubierta por la fe pública registral (cfr. art. 41 LRC) de modo que, si se demuestra que ha sido consignado erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo al amparo de lo dispuesto en el artículo 93.1º de la Ley. En este caso, incorporadas al expediente de rectificación las actuaciones que precedieron a la práctica del asiento, se comprueba que el nombre inscrito es el consignado por la interesada en el impreso de declaración de datos y con el que le fue concedida la nacionalidad española y, por tanto, el mantenimiento del que resulta probado que venía usando se atiene plenamente a lo dispuesto en el art. 213.1º RRC. No obstante, del propio asiento de nacimiento consta que se aportó certificación legalizada del registro local y esta acredita que, con independencia de la forma en que se viniera usando, el nombre oficial inscrito es el que se aduce correcto y consta asimismo en las certificaciones extranjeras de matrimonio propio y de nacimiento de dos hijas de modo que, practicada la inscripción en virtud de documento auténtico (art. 23 LRC) que expresa que el primer nombre de la inscrita es “Neully” y establecida indudablemente la identidad por las demás circunstancias de la inscripción, no hay obstáculo legal para acordar la rectificación instada.

Esta Dirección General, a propuesta del Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Estimar el recurso.

2º. Disponer que en el asiento de nacimiento de la interesada se rectifique el nombre del inscrito, en el sentido de que conste que es “Neully Isabel” y no “Neully Isabel”, como por error figura.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 28 de octubre de 2016 (17ª)

VII.1.1. Rectificación de error en inscripción de nacimiento

No prospera el expediente de rectificación en inscripción de nacimiento del nombre de la inscrita al no resultar suficientemente acreditado el error invocado.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la promotora contra auto del encargado del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).

HECHOS

1. Mediante formulario presentado el 11 de noviembre de 2014 en el Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana, Doña Eismel-E. S. V., mayor de edad y con domicilio en S. L. (L.P.), solicitaba la rectificación del nombre con el que figura inscrita en su inscripción de nacimiento en España para hacer constar que el correcto es Eismel-E. Aportaba la siguiente documentación: pasaporte venezolano caducado y certificación de nacimiento venezolana expedida el 23 de junio de 2014 a nombre de Eismel-E. S. V., certificado de empadronamiento, DNI español e inscripción de nacimiento en el Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana de Eismel-E. S. V., venezolana de origen, con marginal fechada el 20 de marzo de 2014 de adquisición de la nacionalidad española por residencia mediante resolución de 6 de mayo de 2013.

2. Ratificada la promotora y previo informe favorable del ministerio fiscal, se incorporó al expediente la certificación de nacimiento venezolana expedida el 6 de diciembre de 2011 que sirvió de base para practicar la inscripción en España, donde consta Eismel-E. como nombre de la inscrita.

3. El encargado del registro dictó auto el 13 de enero de 2015 denegando la rectificación por no considerar acreditado el error invocado dada la contradicción entre la certificación de nacimiento que sirvió de base para practicar la inscripción y la aportada posteriormente por la promotora.

4. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el certificado aportado al expediente de nacionalidad contenía un error que no fue detectado en ese momento pero que el nombre correcto siempre ha sido Eismel-E., tal como aparece en la siguiente documentación complementaria que aporta la recurrente: pasaporte venezolano en vigor en el momento de la presentación del recurso, citación expedida el 8 de noviembre de 2001 por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas para realizar trámites relativos al permiso de residencia, resolución de renovación de permiso de trabajo y residencia expedida el 11 de octubre de 2002, resguardo de pago de tasas administrativas el 13 de mayo de 2003, acuse de recibo de solicitud de permiso de trabajo el 11 de octubre de 2002, resolución de concesión de renovación de permiso de trabajo de 23 de abril de 2003, solicitud de renovación de permiso de residencia de 21 de octubre de 2004, resolución de concesión de autorización de residencia

permanente de 28 de diciembre de 2006, tarjeta de residencia expedida el 2 de noviembre de 2011, inscripción de matrimonio celebrado en España el 8 de febrero de 2013, libro de familia, permiso de conducción, tarjeta sanitaria, tarjeta bancaria y certificación venezolana de nacimiento expedida el 21 de enero de 2013.

5. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su estimación. El encargado del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, 16-2ª de febrero de 2002; 21 de marzo, 10 de julio y 5-1ª de diciembre de 2003; 14-4ª de mayo de 2004; 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 13-1ª y 28-2ª de marzo y 3-4ª de abril de 2006; 24-2ª de abril, 28-2ª de diciembre de 2007; 3-3ª de enero, 18-3ª de junio 22-6ª de octubre y 25-8ª de noviembre de 2008; 9-5ª de marzo de 2009; 3-7ª de diciembre de 2010; 13-1ª de diciembre de 2011; 26-6ª de noviembre y 19-55ª de diciembre de 2012 y 17-23ª de julio de 2015.

II. Solicita la promotora la rectificación del primer nombre consignado en su inscripción de nacimiento en el registro civil español (Eisnel) alegando que el correcto es Eismel, tal como aparece en toda su documentación, tanto venezolana como española, anterior a la obtención de la nacionalidad española por residencia.

III. En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse a través de la vía judicial ordinaria (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación también es posible por la vía del expediente gubernativo con apoyo en los artículos 93 y 94 LRC. Concretamente, el artículo 93.1º prevé la rectificación de las menciones erróneas de identidad siempre que esta quede indudablemente establecida por las demás circunstancias de la inscripción, y el apartado 3º del mismo artículo prevé asimismo la rectificación del error cuya evidencia resulte de la confrontación con otra inscripción que haga fe del hecho correspondiente. El error que se denuncia en este caso recae sobre el primer nombre de la interesada que, según ella, debe ser Eismel y no Eisnel, como se ha hecho constar en la inscripción, pero lo cierto es que este último es el que figuraba claramente consignado (en mayúsculas y en negrilla) en la certificación aportada al expediente de nacionalidad, cuya resolución de concesión, según ha podido comprobar este centro, también se emitió con dicho nombre, por lo que no cabe que la promotora alegue ahora que no había detectado el error. Es cierto que en el pasaporte venezolano y en la documentación relativa a los permisos de residencia y trabajo (que se tramitan a partir de los datos del pasaporte y no de la certificación de nacimiento) figura el nombre ahora pretendido e incluso se han aportado otras dos certificaciones de nacimiento venezolanas expedidas posteriormente a la adjuntada al expediente de nacionalidad. Pero ello no supone más que la existencia de documentos contradictorios entre sí, sin

que sea posible determinar en esta vía cuál es la grafía correcta mientras no conste acreditación, por parte de las autoridades venezolanas, de que la certificación expedida el 6 de diciembre de 2011 contenía un error en el nombre de la inscrita.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.

Madrid, 28 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).

VII.1.2 RECTIFICACIÓN DE ERRORES, ART. 95 LRC

Resolución de 7 de octubre de 2016 (43ª)

VII.1.2. Sustitución en inscripción de nacimiento del apellido de la madre extranjera del inscrito

1º. Puede anotarse sin expediente la modificación de apellido de un extranjero según su ley personal siempre que con documentos oficiales auténticos se acrediten la nacionalidad y el hecho concerniente al estado civil que motiva la alteración.

2º. Sin constancia suficiente de que, conforme a su estatuto personal, la madre del inscrito ha perdido su apellido y adoptado el de su cónyuge y padre del menor en fecha posterior a la de la práctica del asiento de nacimiento no cabe la anotación marginal de esta circunstancia.

En las actuaciones sobre constancia marginal del apellido de casada de la madre en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores contra calificación de la juez encargada del Registro Civil de Castellón de la Plana (Castellón).

HECHOS

1. En escrito presentado en el Registro Civil de Benicàssim (Castellón) en fecha 3 de abril de 2014 el Sr. V. D., mayor de edad y domiciliado en dicha población, expone que en la inscripción de nacimiento de su hijo N.-L. D., nacido el de 2014 de padres rumanos e inscrito en el Registro Civil de Benicàssim el 29 de enero de 2014, consta que el apellido de la madre del inscrito es N., que han contraído matrimonio en Rumanía y la esposa ha perdido su apellido y pasado a tener el de su marido y que madre e hijo se encuentran en Rumanía sin posibilidad de regresar a España ya que al recién nacido no le expiden el pasaporte hasta que no se clarifique que el apellido de la progenitora ha pasado a ser D. y solicita que, previos los trámites que procedan, se acuerde la modificación en el asiento de nacimiento del menor del nombre de la madre del inscrito acompañando copia simple de pasaporte rumano y de certificado

de registro en España como ciudadano de la Unión Europea propios, fotocopia compulsada de pasaportes rumanos de la madre con el apellido N. y, expedido el 24 de febrero de 2014, con el apellido D., partida rumana de matrimonio celebrado por los progenitores en su país natal el 5 de noviembre de 2011 y certificado emitido el 14 de enero de 2014 por el ayuntamiento de C., Rumanía, para constancia de que D. M. es la misma persona que N. M.

2. Ratificado el promotor en la solicitud presentada, la juez encargada del Registro Civil de Benicàssim dispuso la remisión al de Castellón de la Plana de lo actuado junto con certificación literal de la inscripción de nacimiento del menor y copia de la documentación obrante en el correspondiente legajo: acta de comparecencia de ambos progenitores a efectos de reconocimiento del nacido y práctica de la inscripción en el registro civil del domicilio común, certificado de inscripción de ambos progenitores en el padrón de Benicàssim, certificación expedida por el Hospital General de Castellón de la Plana para constancia de que por el centro sanitario no se ha promovido la inscripción en el registro civil correspondiente al lugar de nacimiento y cuestionario para la declaración de nacimiento, documentos todos ellos en los que la madre del nacido consta identificada como M. N.

3. El ministerio fiscal informó que, al ser lo solicitado conforme a derecho, nada tiene que oponer y, previa comparecencia de la madre en el Registro Civil Castellón a efectos de ratificación, la juez encargada dictó acuerdo calificador de 16 de junio de 2014 denegando la marginal de cambio de apellido de la madre del inscrito por aplicación de su ley personal, ya que, conforme al certificado de matrimonio aportado, la fecha de la boda es el 5 de noviembre de 2011, la de nacimiento del niño el 18 de enero de 2014 y en el cuestionario para la declaración de nacimiento los padres manifestaron ser solteros; y en la misma fecha, 12 de junio de 2014, acordó comunicar la discrepancia observada al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.

4. Notificada la resolución a los dos progenitores en el registro civil de su domicilio en fecha 30 de junio de 2014, el 30 de julio de 2014 tuvo entrada en el de Castellón escrito de recurso en el que, con los datos de la madre en el encabezamiento, se alega que esta, entendiendo que se le preguntaba si estaba casada en España y estándolo en Rumanía, contestó que no por un error de comprensión carente de dolo que en modo alguno debe invalidar la cuestión de fondo, que afecta a un menor cuyos intereses deben protegerse por las administraciones públicas, y aportando extracto plurilingüe del acta de nacimiento del inscrito. Advertido por el secretario que la apelación no ha sido firmado por los interesados, se dispuso citarlos en el Registro Civil de Benicàssim, donde comparecieron el 17 de febrero de 2015 y, tras manifestar que actualmente ya no residen en España, se ratificaron en el recurso interpuesto por quien aducen letrado suyo.

5. De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, a la vista de las manifestaciones efectuadas por la promotora y teniendo en cuenta que debe

prevalecer el interés del menor, solicitó la estimación del recurso y la juez encargada del Registro Civil de Castellón de la Plana informó que considera que debe confirmarse la resolución impugnada, completamente ajustada a derecho, por los mismos hechos y fundamentos jurídicos que obran en ella y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 9 del Código Civil; 2, 15, 23 y 41 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12, 152, 219, 296 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 4-2ª de abril, 26-1ª de septiembre y 7-4ª de diciembre de 2001, 14-2ª de enero de 2005, 28-6ª de noviembre de 2007, 19-12ª de abril de 2013 y 10-44ª de enero, 17-28ª de marzo y 28-49ª de octubre de 2014.

II. Solicita el promotor que en la inscripción de nacimiento de su hijo N-L. D., nacido el de 2014 de padres rumanos e inscrito el 29 de enero de 2014, previo reconocimiento, en el registro civil de su domicilio, se haga constar que, por aplicación de su ley personal, el apellido de la madre del inscrito es D., exponiendo que han contraído matrimonio en Rumanía y que la esposa ha perdido el apellido N. y adquirido el de su marido, y la juez encargada del Registro Civil de Castellón de la Plana, razonando que, conforme al certificado del Registro local aportado, el matrimonio se celebró el 5 de noviembre de 2011 y que en el cuestionario para la declaración de nacimiento los padres manifestaron ser solteros, dispone denegar la marginal de cambio de apellido de la madre del inscrito por aplicación de su ley personal mediante acuerdo calificador de 16 de junio de 2014 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por ambos progenitores.

III. Sin necesidad de expediente (arts. 23 LRC y 296 RRC) puede hacerse constar en el registro el cambio de nombre y apellidos de un extranjero conforme a su estatuto personal siempre que con documentos oficiales auténticos se justifiquen tanto la nacionalidad como que, en efecto, el nombre y los apellidos que se pretende que consten son los que corresponden por aplicación de la correspondiente ley nacional. En este caso no ha llegado a justificarse la variación del apellido de la madre del inscrito cuya constancia en el asiento de nacimiento se solicita porque, aun cuando se alega que el hecho concerniente al estado civil que ha determinado la modificación es que han contraído matrimonio, lo cierto es que este se celebró tres años antes del nacimiento del hijo y que, incorporada a las actuaciones la documentación en cuya virtud se practicó la inscripción, se comprueba que el certificado de empadronamiento en Benicàssim de ambos progenitores y la certificación expedida por el Hospital General de Castellón de la Plana para constancia de que por el centro sanitario no se ha promovido la inscripción en el registro civil correspondiente al lugar de nacimiento expresan que el apellido de la madre es "N.", apellido que asimismo se consignó en el cuestionario para la declaración de nacimiento y con el que la interesada firmó no solo dicho documento sino también el acta de comparecencia de ambos progenitores a efectos de reconocimiento del nacido y práctica de la inscripción en el registro civil del

domicilio común. Así pues, aunque el certificado de matrimonio del registro local aportado indica que el apellido de la contrayente después del matrimonio es D., consta que no pasó a ostentarlo automáticamente en noviembre de 2011 y, por tanto, no cabe tener por acreditado el hecho relativo al estado civil que, años después, ha determinado la sustitución de apellido ni la fecha a partir de la cual tal modificación ha surtido efectos legales siendo insuficiente a tales efectos la documentación administrativa presentada.

IV. Lo anterior no es óbice para que, al objeto de lograr la concordancia entre el registro civil y la realidad (cfr. art. 26 LRC) y en aras del interés prevalente del menor al que afecta la inscripción que invocan tanto el ministerio fiscal como los recurrentes, puedan estos obtener, previo expediente gubernativo (art. 93.3 LRC), constancia marginal en el asiento de nacimiento de que el estado del padre y de la madre del inscrito es el de casados, de que entre ellos existe matrimonio celebrado el 5 de noviembre de 2011 en C. (Rumanía) y, en su caso, del apellido de la contrayente después del matrimonio.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado: desestimar el recurso y confirmar la calificación apelada.

Madrid, 25 de Enero de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Castellón de la Plana (Castellón)

Resolución de 21 de octubre de 2016 (39ª)

VII.1.2. Cancelación en inscripción de nacimiento de marginal de no constancia de la nacionalidad española del nacido y rectificación de error en la subsiguiente inscripción marginal de opción

Tratándose de asiento permitido y no resultando del propio asiento que se haya basado de modo evidente en título manifiestamente ilegal (cfr. artículos 95.2º LRC y 297.3º RRC), no procede la cancelación por expediente de la marginal de no constancia de la nacionalidad española del nacido y, en consecuencia, no puede prosperar la solicitud de rectificación de la inscripción marginal de nacionalidad a fin de que conste que en fecha 25 de marzo de 2011 la inscrita recuperó la nacionalidad española en vez de que optó por ella en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1.b) del Código Civil.

En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil Central.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Santiago de Compostela (A Coruña) en fecha 26 de diciembre de 2013 doña E. C. M., mayor de edad y domiciliada en dicha población, solicita que en su inscripción de nacimiento se cancele la diligencia

marginal de fecha 17 de julio de 1975 y, en consecuencia, se rectifique la inscripción marginal practicada el 30 de julio de 2012, de opción por la nacionalidad española el 25 de marzo de 2011, a fin de que conste que esta última fecha es la de recuperación la nacionalidad española, exponiendo que su madre, al casarse con su padre, no adquirió la nacionalidad peruana del marido ni renunció a la española, que ella no siguió la nacionalidad del padre y, por tanto, es española de origen, y que ello determina que la fecha de opción que consta deba considerarse de recuperación, sin necesidad de levantar un acta específica. Acompaña la siguiente documentación: propia, copia cotejada de DNI y certificación literal de inscripción de nacimiento acaecido 1 de julio de 1975 en L. (Reino Unido), inscrito en el registro civil consular el 17 de julio de 1975 con diligencia marginal que expresa que a la inscrita no le corresponde la nacionalidad española salvo en virtud de la opción prevista en el artículo 18 del Código Civil y en la que consta practicada por el Registro Civil Central en fecha 30 de julio de 2012 inscripción marginal de constancia de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1.b) del Código Civil ha optado por la nacionalidad española ante el encargado del Registro Civil de Santiago de Compostela el 25 de marzo de 2011 con renuncia a su nacionalidad anterior (británica); de su madre, copia cotejada de DNI y certificación literal de inscripción de nacimiento acaecido en O. (A Coruña) el 18 de mayo de 1947; certificación literal de inscripción del matrimonio de sus padres, celebrado en L. el 3 de agosto de 1974 e inscrito en el registro civil consular el 10 de septiembre de 1974 y certificación familiar de empadronamiento en S.

2. Ratificada la promotora en el escrito presentado, el ministerio fiscal informó que, sin perjuicio de que se abra el trámite de presunción de nacionalidad, no se opone a la estimación de la petición y el juez encargado del Registro Civil de Santiago de Compostela dispuso la remisión de lo actuado, con informe favorable, al central, en el que tuvo entrada el 11 de febrero de 2014.

3. Acordada la incoación de expediente gubernativo, el ministerio fiscal, a la vista de la documentación obrante, se opuso a que se acceda a lo solicitado y el 4 de junio de 2014 el juez encargado, considerando que no ha quedado de manifiesto la existencia de los errores denunciados, toda vez que a la fecha de nacimiento de la interesada la mujer no transmitía la nacionalidad española, dictó auto disponiendo que no ha lugar a la rectificación de la diligencia marginal efectuada por el Consulado de España en Londres en fecha 17 de julio de 1975 ni de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de fecha 25 de marzo de 2011.

4. Notificada la resolución al ministerio fiscal y, en comparecencia en el registro civil del domicilio de fecha 10 de noviembre de 2014, a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la legislación en vigor al tiempo de su nacimiento establece la presunción de la nacionalidad española de los hijos de madre española casada con extranjero y solicitando que, con rectificación del error cometido, se le reconozca su condición de española de origen.

5. De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que impugnó el recurso e interesó la confirmación del acuerdo apelado, y el juez encargado informó que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución impugnada, entiende que debe confirmarse y seguidamente dispuso la remisión del expediente, junto con lo actuado con ocasión de la opción por la nacionalidad española y práctica en el asiento de nacimiento de la correspondiente inscripción marginal, a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20, 24 y 26 del Código Civil (CC), 2 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 66, 295, 342 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de junio de 2008 y las resoluciones de 7 de mayo de 1993, 1-1ª de junio y 5-27ª de septiembre de 2012 y 1-28ª de febrero y 4-120ª de noviembre de 2013.

II. Solicita la promotora, nacida en Reino Unido de madre española de origen, inscrita en el Registro Civil Consular de Londres el 17 de julio de 1975 con marginal de constancia de que a la inscrita no le corresponde la nacionalidad española salvo en virtud de la opción prevista en el artículo 18 del Código Civil y en cuyo asiento de nacimiento consta inscrito marginalmente en fecha 30 de julio de 2012 el hecho de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1.b) del Código Civil, el 25 de marzo de 2011 la inscrita ha optado por la nacionalidad española ante el encargado del Registro Civil de Santiago de Compostela con renuncia a su anterior nacionalidad británica, la cancelación de la constancia marginal y, en consecuencia, la rectificación de la inscripción marginal, en el sentido de que exprese que la fecha que figura como de opción por la nacionalidad española es de recuperación, exponiendo que su madre, al casarse con su padre, ni adquirió la nacionalidad peruana del marido ni renunció a la española y que por tanto ella, que no siguió la nacionalidad de su padre, es española de origen; y el juez encargado del Registro Civil Central, considerando que no ha quedado de manifiesto la existencia de los errores denunciados, toda vez que a la fecha de nacimiento de la interesada la mujer no transmitía la nacionalidad española, dispuso que no ha lugar a la rectificación solicitada mediante auto de 4 de junio de 2014 que constituye el objeto del presente recurso.

III. El art. 66 RRC prevé expresamente que en las inscripciones de nacimiento que, por afectar el hecho a un español -en este caso, a la madre-, hayan de practicarse en los registros consulares sin que esté acreditada conforme a ley la nacionalidad española del nacido se haga constar expresamente esta circunstancia, la promotora no aporta documental alguna que pruebe su alegación de que no siguió la nacionalidad del padre y declarante del nacimiento, considerada preferente por el art. 17.2º CC vigente al momento de su nacimiento y, por tanto, siendo la constancia marginal debatida asiento permitido y no resultando del propio asiento que se haya basado de modo evidente en título manifiestamente ilegal (cfr. arts. 95.2º LRC y 297.3º RRC), no cabe acordar su cancelación en expediente.

IV. Aun cuando llegaran a probarse los hechos aducidos y a cancelarse la citada referencia marginal seguiría sin proceder la cancelación, por errónea, de la inscripción marginal de opción por la nacionalidad española practicada en la de nacimiento porque, aunque en los supuestos de progenitor español nacido en España que nunca perdió la nacionalidad española parece en principio más adecuado instar la recuperación que formalizar la opción del artículo 20.1.b) CC, dicho criterio se ha exceptuado cuando es el propio interesado -no su progenitor- quien ha perdido la nacionalidad originaria española por utilización exclusiva de otra que también tuviera atribuida y, en un supuesto similar, la resolución de la dirección general de 7 de mayo de 1993 estimó procedente el ejercicio del derecho de opción, evitando así la recuperación por la vía del artículo 26 CC. Aunque, tras las reformas operadas por la Ley 29/1995, que suprimió para los emigrantes y sus hijos el requisito de la residencia legal en España, y la Ley 36/2002, que eliminó la exigencia de la renuncia a la nacionalidad anterior, parece más favorable la vía de la recuperación, a efectos prácticos no ocasiona perjuicios a la promotora ni supone trato discriminatorio mantener la adquisición sobrevenida de la nacionalidad española por opción, toda vez que es hecho indiscutido que no tenía la nacionalidad española en la fecha en la que compareció ante el encargado del registro civil, consta que en dicho acto no declaró su voluntad de recuperar la nacionalidad española sino la de optar por ella y que su solicitud se tramitó siguiendo cauce legal adecuado y con su consentimiento, dado al firmar el acta correspondiente, y, acreditada la concurrencia de los requisitos necesarios, ha de concluirse que el asiento se practicó correctamente.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 28 de octubre de 2016 (9ª)

VII.1.2. Integración de datos en dos inscripciones de filiación

Se completan en expediente dos inscripciones marginales de filiación con el dato omitido de los apellidos que en adelante ostentan los inscritos.

En el expediente para completar datos en dos inscripciones de filiación remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por el juez encargado del Registro Civil de León.

HECHOS

1. En escrito presentado en el Registro Civil de Villaquilambre (León) en fecha 22 de octubre de 2014 don M.-Ó. M. B., mayor de edad y domiciliado en V. (León), expone que, pese a la determinación de la filiación paterna de los menores O. y C. L. G. en

virtud de sentencia de 27 de octubre de 2011 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Amurrio (Araba), sus hijos siguen constando en el registro civil con los datos del padre en blanco y con los apellidos de la madre invertidos e insta el oportuno expediente, a fin de que se proceda a inscribir las menciones de identidad del padre de los filiados y que los apellidos de estos han pasado a ser M. G., acompañando testimonio de la sentencia que invoca, certificación literal de las inscripciones de nacimiento cuya integración interesa, asentadas en el Registro Civil de Villaquilambre el 13 de septiembre de 2010 en virtud de lo dispuesto en el art. 16.2 LRC, en las que constan practicadas en fecha 3 de enero de 2012 sendas marginales de constancia de que por la sentencia arriba citada se ha reconocido que el inscrito es hijo no matrimonial de Don M.-Ó. M. B.

2. Recibidas las actuaciones en el Registro Civil de León, acordada la formación del oportuno expediente y ratificado el promotor en el contenido del escrito presentado, fue requerido a fin de que aportara certificación literal de nacimiento, fotocopia de DNI y certificado de empadronamiento, en comparecencia de 9 de diciembre de 2014 presentó dichos documentos y facilitó el domicilio y el teléfono de contacto de la madre de los menores y esta, notificada de la incoación del expediente, presentó escrito de oposición alegando que, dada su edad, más de cuatro años, los niños ya se identifican con los apellidos que figuran en el registro civil y su alteración, lejos de representar un beneficio para ellos, les supone un perjuicio y aportando copia simple de DNI, de carné de familia numerosa y de tarjeta sanitaria de ambos menores.

3. El ministerio fiscal informó, respecto a los apellidos, que, teniendo en cuenta el art. 109 del Código Civil y que no se trata de ninguna de las excepciones recogidas en el art. 111 del mismo cuerpo legal, no se opone a la atribución a los menores del primer apellido del padre y, respecto a que las inscripciones de nacimiento recojan su nombre, que ya consta en la marginal y el 29 de abril de 2015 el juez encargado, razonando que por expediente gubernativo (arts. 95.1 de la Ley del Registro Civil y 296 de su reglamento) puede restablecerse la concordancia del registro con la realidad, por la que debe velar, y que los apellidos de los hijos han de determinarse atendiendo al régimen general previsto por el Código Civil y por la Ley y el Reglamento del Registro Civil, dictó auto disponiendo la práctica en las inscripciones de nacimiento de la oportuna inscripción marginal para constancia de que en lo sucesivo el primer apellido del inscrito es M. y el segundo G. y de los datos relativos a la filiación del padre de los inscritos como hijo de M. y M. del C., nacido en V. el 1 de junio de 1965.

4. Notificada la resolución al ministerio fiscal y a los dos progenitores, la madre interpuso recurso, respecto a lo resuelto acerca de los apellidos de los menores, ante la Dirección General de los Registros y del Notariado proponiendo que, atender al interés de los menores, que debe prevalecer sobre lo legalmente establecido, estos continúen con el uso de los apellidos a los que ya están acostumbrados, unidos con un guion, como primer apellido y se inscriba como segundo el del padre, alegando que la resolución dictada da un papel preponderante al apellido del padre en detrimento de los derechos de la madre y no tiene en cuenta la jurisprudencia existente respecto al

mantenimiento por el filiado del primer apellido materno como primero y aportando certificados de escolarización de los dos menores en los cursos 2013/2014 y 2014/2015 expedidos el 26 de mayo de 2015.

5. De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que se adhirió parcialmente al recurso, en el sentido de que los menores puedan conservar como primer apellido el primero de la madre, e informando que, la unión de los dos apellidos maternos como primero de los menores debería, en su caso, hacerse valer en expediente; y al padre, que presentó escrito de oposición alegando que nada se ha acreditado respecto al perjuicio que utilizar el apellido de su padre puede conllevar a un menor de cuatro años, que la unión de apellidos ha de ser solicitada por el padre y la madre de común acuerdo y que resulta contrario a derecho el registro de una persona con el primer apellido del padre y el segundo de la madre.

6. Trasladadas las alegaciones del padre al ministerio fiscal, este, reiterando los argumentos expuestos en su informe anterior, solicitó que se dicte resolución que revoque la apelada en el sentido de acceder a que los menores tengan como primer apellido el de la madre y como segundo el del padre, y el juez encargado del Registro Civil de León informó que estima que debe confirmarse la resolución impugnada por los mismos hechos y fundamentos de derecho que en ella se contemplan y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 109, 111, 156 y 162 del Código Civil (CC); 2, 26, 41, 53, 55, 57, 59, 60 y 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 12, 194, 196, 197, 205, 209, 210, 296, 342 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 11 de febrero 1997, 24-2ª de julio y 4-2ª de septiembre de 1999, 8-1ª de octubre de 2001, 26-2ª de marzo y 5-1ª de abril de 2002 y 5-44ª de diciembre de 2014.

II. Solicita el promotor que los asientos de nacimiento de dos hijos, inscritos el 13 de septiembre de 2010 en el registro civil del domicilio de la madre con filiación materna y apellidos maternos en orden inverso y en los que constan practicadas en fecha 3 de enero de 2012 sendas inscripciones marginales de que por sentencia de 27 de octubre de 2011 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Amurrio se ha reconocido que el inscrito es hijo no matrimonial de Don M.-Ó. M. B., se completen con los datos relativos a las menciones de identidad del padre del inscrito y a los apellidos, M. G., que ostenta en adelante y el juez encargado del Registro Civil de León, razonando que lo pretendido puede acordarse en expediente gubernativo (arts. 95.1 LRC y 296 RRC) a fin de obtener la concordancia del registro con la realidad y que los apellidos de los hijos han de determinarse atendiendo al régimen general previsto por la Ley, dispone la práctica en las inscripciones de nacimiento de la oportuna marginal que integre los datos omitidos mediante auto de 29 de abril de 2015 que constituye el objeto del presente recurso, interpuesto por la madre contra lo resuelto respecto a los apellidos de los menores y al que se adhiere parcialmente el ministerio fiscal.

III. El expediente incoado para completar una inscripción se instruye y resuelve por el registro del nacimiento de modo que, habiendo comprobado el encargado que dos inscripciones de filiación no expresan los apellidos que por tal filiación corresponden al inscrito (cfr. art. 197 RRC) y acordado que se completen los asientos haciendo constar que, conforme a los arts. 109 Cc y 194 RRC, los apellidos de los inscritos son en adelante M. G., procede confirmar el auto dictado.

IV. Ciertamente los preceptos citados posibilitan que el padre y la madre decidan antes de la inscripción el orden de transmisión a los hijos de su respectivo primer apellido, las alegaciones formuladas versan sobre este particular y, sin embargo, en las actuaciones consta que la promotora no solicita en ningún momento que a los filiados se les atribuyan los apellidos G. M.: en su comparecencia en el expediente propugna el mantenimiento de los apellidos L. G., los suyos en orden inverso por ella determinados al inscribir dentro de plazo los nacimientos (cfr. art. 55, II LRC) y que, establecida la filiación paterna, pierden vigencia (art. 196 RRC); en el escrito de recurso plantea la cuestión nueva de que los apellidos de los menores sean L.-G. M. y tanto la conservación instada transcurridos los dos meses siguientes a la inscripción de la filiación (arts. 59 LRC y 209 RRC) como la unión de apellidos (arts. 57 LRC y 205 RRC) han de sustanciarse en el expediente distinto de cambio de apellidos que requiere el concurso de los dos progenitores, cotitulares de la patria potestad, se tramita e instruye en el registro civil del domicilio y se resuelve por el ministro de Justicia y, por delegación, (Orden JUS/696/2015, de 16 de abril), por la dirección general.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar en todos sus extremos el auto apelado.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. juez encargado del Registro Civil de León.

VII.2 CANCELACIÓN

VII.2.1 CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO

Resolución de 7 de octubre de 2016 (40ª)

VII.2.1. Cancelación de inscripción de nacimiento.

Procede la cancelación de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española del promotor porque el asiento se practicó en virtud de título manifiestamente ilegal.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la interesada contra auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Mediante formulario presentado el 2 de septiembre de 2009 en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana, D^a. Y. H. A., de nacionalidad cubana, solicitaba la nacionalidad española y su inscripción de nacimiento en el registro civil español en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción en el que consta que nació el 8 de marzo de 1983 en L.T. (Cuba), hija de E. E. H. I., nacido en L. T. aunque no consta su año de nacimiento y de E. F. Á. P., nacida en H. 1950, carné de identidad cubano de la interesada, certificación literal de nacimiento de la solicitante, certificado de nacimiento cubano de la madre de la solicitante, inscrita en 1961, 11 años después de su nacimiento, certificado literal de nacimiento español de la precitada, hija de F. Á. M., nacido en V. (Asturias) en 1907, del que no se hace constar su nacionalidad y de M. P. G., nacida en B., G. (Cuba) y de nacionalidad cubana, con marginal de opción a la nacionalidad española en fecha 30 de abril de 2003, con base en el artículo 20.1.b del Código Civil, según la redacción dada por la Ley 36/2002, certificado de defunción del abuelo materno de la solicitante, inscrito como F. G. Á. M., fallecido en Cuba a los 80 años de edad en 1987, certificación negativa del registro civil cubano relativa a que en la Sección de Ciudadanía de este no consta inscripción del Sr. Á. M., certificado de nacionalidad del precitado, expedido por el Consulado General de España en La Habana en 1986 y certificados de las autoridades cubanas de inmigración y extranjería, expedidos en el año 2009 a petición de la solicitante, relativos al Sr. Á. M., el cual no consta en el registro de ciudadanía como naturalizado cubano y si en el registro de extranjeros con nº, habiendo formalizado su inscripción en La Habana a los 31 años, es decir en 1938.

2. Previo auto del encargado del registro de fecha 5 de septiembre de 2012, se practicó la inscripción de nacimiento de la interesada en el registro civil consular el día 20 de diciembre siguiente, con marginal de nacionalidad española por opción en virtud de lo establecido en la Ley 52/2007.

3. Posteriormente examinada la documentación cubana aportada y comparadas con las de otros expedientes de familiares de la Sra. H. Á., que también tenía como ascendiente al abuelo materno de la interesada, se aprecian contradicciones que afectarían a la nacionalidad española de aquél y de su hija y madre de la interesada, evidenciando irregularidades documentales en cuanto al formato y firma de los documentos. En consecuencia la encargada del registro dictó providencia, con fecha 14 de noviembre de 2014, acordando instruir un nuevo expediente de oficio para cancelar la inscripción practicada, por considerar que había tenido acceso al registro

en virtud de título manifiestamente ilegal, en tanto que no resulta acreditado que la madre de la inscrita fuera española de origen.

4. Previa notificación mediante edictos en el tablón de anuncios del registro civil consular, al comparecer la interesada en el Consulado con fecha 17 de noviembre que había sido citada, e informe favorable a la cancelación del órgano en funciones de ministerio fiscal, la encargada del registro civil consular dictó auto el 15 de diciembre de 2014 acordando la cancelación de la inscripción por haberse practicado basándose en un título manifiestamente ilegal, dado que contrastada la documentación aportada con la posterior de la que se tenía información se aprecia falsedad documental que impide tener por acreditada la nacionalidad española de origen de la madre de la interesada y, en consecuencia, no se cumplen los requisitos para la opción previstos en la Ley 52/2007.

5. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que no pueden tenerse por irregulares los documentos por ella presentados porque han sido expedidos por las autoridades competentes y legalizados conforme a derecho, aportando copia de certificado expedido en el año 2011 por el Ministerio del Interior cubano, Dirección de Identificación y Registros, distinta a la que expidió el anterior, que declara que el Sr. Á. M., abuelo materno de la promotora, consta inscrito en el registro de extranjeros con n° de expediente, distinto del que aparecía en el documento anterior, formalizado en G., provincia diferente del documento anterior y a la edad de 25 años, es decir en 1932, momento diferente del documento anterior.

6. De la interposición del recurso se dio traslado al órgano en funciones de ministerio fiscal, que informa que en la tramitación se han seguido las prescripciones legales y por tanto el auto es conforme a derecho. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba) se ratificó en su decisión y remite la documentación a esta Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso presentado.

7. Consta entre la documentación del expediente certificado literal de nacimiento española de la madre de la interesada, Sra. Á. P., en la que consta inscripción marginal relativa a que optó por el apartado 1° de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 con fecha 21 de septiembre de 2010, otra de subsanación de datos, con fecha 10 de noviembre de 2011, que corrige el nombre del padre, es F. G., otra de fecha 27 de enero de 2014 que añade la nacionalidad española del padre y cubana de la madre de la inscrita.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17 del Código Civil (CC); 15, 16, 23 y 95.2° de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 297.3° del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de septiembre de 2001; 5-2ª de octubre de 2004;

9-6ª y 22-1ª de mayo y 21-4ª de septiembre de 2007; 6-7ª de mayo y 27-5ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de 2009.

II. La interesada, nacida en Cuba en 1983, instó en 2009 la inscripción de su nacimiento en el registro civil español y la opción a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima, apartado 1º, de la Ley 52/2007, por ser hija de ciudadana española de origen, nacida en Cuba de padre también español. Practicada la inscripción de nacimiento y la marginal de opción, la encargada del registro inició un procedimiento de cancelación de los asientos una vez comprobado que el abuelo materno de la solicitante era originariamente español pero no quedaba debidamente acreditado que conservara dicha nacionalidad cuando su hija nació en 1950, ya que el nuevo examen de los documentos aportados en su momento, comparándolos con aquellos de los que se tuvo información por el registro civil con motivo de expedientes de familiares de la Sra. H. Á., suscitan dudas más que razonables sobre su legalidad y la veracidad de su contenido, apreciándose discrepancias significativas, de modo que la inscripción tuvo acceso al registro sobre la base de un título manifiestamente ilegal y procede su cancelación.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba)

Resolución de 17 de octubre de 2016 (7ª)

VII.2.1. Cancelación de asiento marginal de nacionalidad.

Se desestima el recurso al no quedar suficientemente acreditado el cumplimiento de los presupuestos para la aplicación del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

En las actuaciones sobre cancelación de la inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra auto dictado por el encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de La Habana el 30 de abril de 2009, Doña R. V. C. nacida el 20 de marzo de 1956 en Cuba, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española de origen por opción en virtud del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Aportaba, entre otra, la siguiente documentación: certificados locales de nacimiento de la interesada y de su madre y el de bautismo de su abuelo expedido por la Diócesis de G., así como documentación sobre inmigración y extranjería, expedida a nombre de este último en

la que se refleja que se inscribió en el registro de extranjeros a la edad de 57 años, es decir en 1933. Documentación que, posteriormente, ha resultado que adolece de irregularidades que vician de ilegalidad las actuaciones realizadas, toda vez que la firma y el cuño que aparece en estos certificado no es la habitualmente utilizada y la fecha reflejada en los mismos son incongruentes .

De oficio se ha incorporado a este expediente la documentación sobre inmigración y extranjería que consta en el expediente de nacionalidad tramitado por el hermano de la recurrente, en la que consta que el abuelo no se inscribió en el registro de extranjeros y, certificado de defunción del mismo, que obra en el expediente sobre adquisición de la nacionalidad española de la madre de la optante en la que se acredita que falleció en 1927

2. Por auto de 4 de agosto de 2010 el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana estimó la pretensión de la interesada, procediendo a la inscripción de nacimiento y marginal de nacionalidad española de origen por opción, conforme a la Ley 52/2007. Posteriormente, se procedió a la incoación de expediente gubernativo para cancelar la inscripción de nacimiento de la interesada, que había tenido acceso al registro civil consular en virtud de título manifiestamente ilegal.

3. El ministerio fiscal informó que, examinados los documentos obrantes en el expediente, estimaba que procedía la cancelación solicitada. El encargado del registro civil consular mediante auto de fecha 28 de enero de 2015 procedió a cancelar totalmente la inscripción de nacimiento de la interesada por haberse basado en título manifiestamente ilegal (artículos 95.2º de la Ley del Registro Civil y 297.3º del Reglamento del Registro Civil), dado que no ha quedado establecido que la madre de la promotora ostentara la nacionalidad española con el carácter de originaria, y por lo tanto no cumple con el requisito establecido por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

4. Notificada la interesada, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revocase el auto dictado.

5. Notificado el ministerio fiscal, interesa la desestimación del recurso, y el encargado del registro civil consular se ratificó en el acuerdo adoptado y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil; los artículos 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo,

17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.

II. La recurrente, nacida en Cuba en 1956, solicitó la inscripción en el registro civil consular en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiesen sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”. Posteriormente se dictó auto de 4 de agosto de 2010 estimando la opción a la nacionalidad española y ordenando la correspondiente inscripción. El 28 de enero de 2015, tras tramitar expediente al efecto, el encargado del registro civil consular dictó auto por el que procedió a cancelar la inscripción de nacimiento de la recurrente por haber tenido acceso al registro en virtud de título manifiestamente ilegal. Dicho auto constituye el objeto del presente recurso.

III. En el presente caso procede confirmar la resolución recurrida en cuanto a la cancelación del asiento marginal de opción a la nacionalidad española de origen. En efecto, el acuerdo apelado basa, en esencia, su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha acreditado que su madre hubiese ostentado la nacionalidad española originaria.

IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiesen ostentado la nacionalidad española originaria”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición.

En este caso, las certificaciones de los registros de extranjería y ciudadanía de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio de Interior cubano, aportadas al expediente, sobre el abuelo de la optante, Don A. J. C. C., ofrecen dudas de autenticidad en cuanto al formato y la firma de la funcionaria, usados habitualmente, presumiéndose falsedad documental; no concuerdan con las incorporadas al expediente sobre adquisición de la nacionalidad española tramitado por su hermano; ni tampoco es posible que accediera a dicho registro en el año 1933, toda vez que había fallecido en 1927 tal y como consta en el correspondiente certificado de defunción aportado por la madre de la interesada en otro expediente. Por todo ello queda acreditado, que la interesada tuvo acceso al registro civil español en base a “título manifiestamente ilegal” por lo que no cabe reconocer la condición de española de origen de su madre, conforme al apartado primero de la disposición adicional séptima de la ley 52/2007.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado en lo relativo a la cancelación de la declaración de la nacionalidad española de origen por opción, en virtud del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Madrid, 17 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba)

Resolución de 28 de octubre de 2016 (4ª)

VII.2.1. Cancelación de inscripción de nacimiento.

Procede la cancelación de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española del promotor porque el asiento se practicó en virtud de título manifiestamente ilegal.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el representante legal del interesado contra auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Mediante comparecencia el día 11 de enero de 2012 en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana, Don Y. F. C., menor de 14 años, representado legalmente por su padre, Don Y. F. P., de origen cubano y nacionalidad española, obtenida por la opción del apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, solicitaba la nacionalidad española y la inscripción de su nacimiento en el registro civil español en virtud de lo dispuesto en el artículo 201.a del Código Civil. Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción en el que consta que el menor interesado nació el de 2004 en S., actualmente provincia de Artemisa (Cuba), hijo de Y. F. P. y de B. C. P., ambos nacidos en P. (Cuba) en 1976 y 1970 respectivamente, casados en el año 2002, tarjeta de identidad cubana del interesado, de su madre y pasaporte español del padre, certificación de nacimiento del solicitante, inscripción literal de nacimiento española del padre del solicitante, Sr. F. P., hijo de A. F. Á. y de M. P. P., ambos nacidos en P. en 1950 y 1949, respectivamente, con marginal de opción a la nacionalidad española por aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 con fecha 15 de enero de 2010 e inscrita el día 22 de abril siguiente, certificado no literal de nacimiento de la madre del solicitante, Sra. P. P., certificado de matrimonio de los padres del solicitante, celebrado en Cuba en 2002 e inscrito en el registro civil español el 17 de junio de 2011, documento consular que recoge el consentimiento para la opción prestado por la madre del menor solicitante y acta de la declaración de opción a la nacionalidad española formulada ante la encargada del registro civil consular, tras obtener la autorización correspondiente de ésta, por el Sr. F. P. como representante legal del solicitante.

2. Previo auto de la encargada del registro de fecha 11 de enero de 2012, se practicó la inscripción de nacimiento del menor en el registro civil consular el día 30 de abril de

2013, con marginal de nacionalidad española por opción en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a del Código Civil.

3. Revisada la documentación del expediente anterior, la encargada del registro dictó providencia acordando instruir un nuevo expediente de oficio para cancelar la inscripción practicada por considerar que había tenido acceso al registro en virtud de título manifiestamente ilegal, en tanto que se estaba tramitando expediente para la cancelación de la inscripción de marginal de opción a la nacionalidad española del padre del inscrito por haber tenido acceso al registro también con título manifiestamente ilegal.

4. Previa notificación mediante edicto en el tablón de anuncios del consulado, ya que el padre como representante legal del menor no comparece en la fecha de citación, e informe favorable a la cancelación del órgano en funciones de ministerio fiscal, la encargada del registro civil consular dictó auto el 16 de marzo de 2015 acordando la cancelación de la inscripción de nacimiento y opción de nacionalidad de Y. F. C. por haberse practicado basándose en un título manifiestamente ilegal, dado que se procede también a la cancelación de la inscripción de marginal de opción a la nacionalidad española de su padre, Y. F. P., igualmente por haber accedido al registro en base a título manifiestamente ilegal, puesto que no reunía los requisitos para la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 y, en consecuencia, tampoco se cumplen en su hijo menor de edad los requisitos para la opción prevista en el artículo 20.1.a del Código Civil, prevista para las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español.

5. Notificada la resolución, el Sr. F. P. como representante legal interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que no está de acuerdo con los motivos de la cancelación de su propia inscripción de nacionalidad, que ha motivado también la de su hijo, y que no se le ha dado posibilidad de demostrarlo.

6. De la interposición del recurso se dio traslado al órgano en funciones de ministerio fiscal, que informa que en la tramitación se han seguido las prescripciones legales y por tanto el auto es conforme a derecho. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba) se ratificó en su decisión y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso presentado.

7. Consta a este centro directivo que la inscripción de marginal de nacionalidad en la principal de nacimiento en el registro civil español del padre del interesado, Sr. F. P., por resolución registral de fecha 13 de marzo de 2015, por haber tenido acceso al mismo en base a título manifiestamente ilegal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 del Código Civil (CC); 15, 16, 23 y 95.2º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 297.3º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de septiembre de 2001; 5-2ª de octubre de 2004;

9-6ª y 22-1ª de mayo y 21-4ª de septiembre de 2007; 6-7ª de mayo y 27-5ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de 2009.

II. El interesado, nacido en Cuba en 2004, instó en 2012 y mediante la representación legal de su padre, la inscripción de su nacimiento en el registro civil español y la opción a la nacionalidad española en virtud del artículo 20.1.a del Código Civil por estar bajo la patria potestad de ciudadano español, su padre, nacido en Cuba y que obtuvo la nacionalidad por aplicación del apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Practicada la inscripción de nacimiento y la marginal de opción, la encargada del registro inició un procedimiento de cancelación de los asientos una vez comprobado que al padre del solicitante no le correspondía la nacionalidad española, ya que su abuelo no había perdido o renunciado a su nacionalidad española originaria como consecuencia del exilio, por lo que también se procedía a la cancelación de su propia inscripción de nacimiento y por tanto en el interesado no concurría en el año 2012 el requisito previsto en el artículo 20.1.a del Código Civil, por lo que la inscripción tuvo acceso al registro sobre la base de un título manifiestamente ilegal y procedía su cancelación.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de octubre de 2016 (5ª)

VII.2.1. Cancelación de inscripción de nacimiento.

Procede la cancelación de inscripción marginal de opción a la nacionalidad española del interesado porque el asiento se practicó en virtud de título manifiestamente ilegal.

En el expediente sobre cancelación de inscripción marginal de opción a la nacionalidad española remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el interesado contra auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Mediante formulario presentado el 15 de enero de 2010 en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana, Don Y. F. P., de nacionalidad cubana, solicitaba la nacionalidad española y su inscripción de nacimiento en el registro civil español en virtud de lo dispuesto en el apartado II de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción en el que hace constar nació el 23 de marzo de 1976 en P. R. (Cuba), hijo de A. F. Á. y M. P. P.,

ambos nacidos en L. en 1950 y 1949, respectivamente, carné de identidad cubano del promotor, certificación literal de nacimiento del promotor, certificación literal de nacimiento española de su padre, Sr. F. Á., hijo de A.-M. F. F., nacido en V. (Asturias) el 22 de septiembre de 1907 y de M. Á. M., nacida en L. en 1924, ambos de nacionalidad cubana, con marginal de opción la nacionalidad española con base en el artículo 20.1.b del Código Civil con fecha 26 de febrero de 2007 y de posterior opción por aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 con fecha 5 de junio de 2009, certificado negativo de inscripción de nacimiento en el mes de septiembre de 2007 del abuelo paterno del promotor, Sr. F. F., expedido por el registro civil español, certificado literal de partida de bautismo del precitado, expedida por la parroquia de nacimiento del mismo, en la que consta que nació el 22 de septiembre de 1907, fue bautizado el día 25 del mismo mes y era hijo natural de E. F. F., natural de la misma localidad, certificado literal de matrimonio de los padres del promotor, celebrado en Cuba en 1975, en el que la fecha de nacimiento de la contrayente es 1951, no 1949 como se hizo constar por el declarante en su hoja de datos, certificado literal de defunción de abuelo del promotor, Sr. F. F., fallecido en Cuba en 1990 a los 83 años de edad, certificado de las autoridades cubanas de inmigración y extranjería, relativo a que el precitado consta inscrito en el Registro de Ciudadanía al haberle sido expedida carta de ciudadanía en 1942, a la edad de 34 años.

2. Previo auto del encargado del registro de fecha 2 de febrero de 2010, se practicó la inscripción de nacimiento del interesado en el registro civil consular, con fecha 22 de abril de 2010, con marginal de nacionalidad española por opción en virtud de lo establecido en la Ley 52/2007.

3. Posteriormente el registro civil consular tiene conocimiento de la literalidad de la inscripción en el registro civil cubano de la comparecencia en 1938 del abuelo del interesado, Sr. F. F., declarando su voluntad de obtener la ciudadanía cubana, en ella consta que llegó a Cuba en 1913 y allí permaneció desde entonces y que contrajo matrimonio en 1936 y consta marginal de que se ratificó la declaración en enero de 1940. La encargada del registro acordó instruir un nuevo expediente de oficio para cancelar la inscripción de nacionalidad practicada por considerar que había tenido acceso al registro en virtud de título manifiestamente ilegal, en tanto que no resulta acreditado que se cumplieran los requisitos legalmente previstos para la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en su apartado 2, ya que el abuelo del inscrito no perdió su nacionalidad como consecuencia del exilio.

4. Previa notificación al interesado, mediante la publicación de edicto en el tablón de anuncios del registro civil consular al no comparecer el día que había sido citado e informe favorable a la cancelación del órgano en funciones de ministerio fiscal, la encargada del registro civil consular dictó auto el 13 de marzo de 2015 acordando la cancelación de la inscripción por haberse practicado basándose en un título manifiestamente ilegal, dado que el abuelo paterno del inscrito, Sr. F. F., perdió la nacionalidad española en 1940 al obtener la ciudadanía cubana, tras residir en dicho país desde el año 1913, no constando que saliera de España en el periodo establecido

en la norma que se aplicó y, en consecuencia, no se cumplían los requisitos para la opción previstos en la Ley 52/2007.

5. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reconociendo la residencia del abuelo del interesado en Cuba desde mucho antes de la guerra civil española, pero alegando el recurrente que cuando formuló su solicitud presentó documentos de agradecimiento de diversas entidades que acreditaban las actividades llevadas a cabo por su abuelo desde Cuba contra el régimen franquista, esta documentación le fue devuelta por considerarla innecesaria el consulado, según manifiesta, solicitando nueva oportunidad para presentarla.

6. De la interposición del recurso se dio traslado al órgano en funciones de ministerio fiscal, que informa que en la tramitación se han seguido las prescripciones legales y por tanto el auto es conforme a derecho. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba) se muestra conforme con la decisión en su día adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 17 del Código Civil (CC); 15, 16, 23 y 95.2º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 297.3º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de septiembre de 2001; 5-2ª de octubre de 2004; 9-6ª y 22-1ª de mayo y 21-4ª de septiembre de 2007; 6-7ª de mayo y 27-5ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de 2009.

II. El promotor, nacido en P. R. (Cuba) en 1976, instó en 2010 la inscripción de su nacimiento en el registro civil español y la opción a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima, apartado 2º, de la Ley 52/2007, por ser nieto de español de origen que había perdido su nacionalidad. Practicada la inscripción de nacimiento y la marginal de opción, la encargada del registro inició un procedimiento de cancelación del asiento de opción de nacionalidad, una vez comprobado que el abuelo paterno del solicitante era originariamente español pero perdió tal condición por adquirir la ciudadanía cubana tras residir en dicho país desde 1913, sin que concurriera la circunstancia del exilio.

III. La nacionalidad española del abuelo perdida por su condición de exiliado no podía pues servir de base para que el interesado optara a la nacionalidad española al amparo de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de modo que la inscripción tuvo acceso al registro sobre la base de un título manifiestamente ilegal y procede su cancelación, ya que no se ha aportado certificación literal de nacimiento del abuelo, sólo partida de bautismo, pero aunque bajo ciertas condiciones pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española de aquel, consta de forma suficiente que la pérdida o renuncia a la nacionalidad española del abuelo del interesado no fue como consecuencia del exilio,

en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada instrucción, circunstancia esta del exilio que debe confluir en la persona del abuelo/a del optante de forma ineludible, sino por la adquisición voluntaria de la cubana tras una residencia de 25 años en dicho país, sin que pueda tenerse en cuenta, en caso de que se hubieran aportado, los documentos relativos a la actividad política de su abuelo durante los años que establece la norma aplicables.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de octubre de 2016 (6ª)

VII.2.1. Cancelación de inscripción de nacimiento.

Procede la cancelación de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española del promotor porque el asiento se practicó en virtud de título manifiestamente ilegal.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el representante legal del interesado contra auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba).

HECHOS

1. Mediante comparecencia el día 11 de enero de 2012 en el Registro Civil del Consulado General de España en La Habana, Don Y. F. C., menor de 14 años, representado legalmente por su padre, Don Y. F. P., de origen cubano y nacionalidad española, obtenida por la opción del apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, solicitaba la nacionalidad española y la inscripción de su nacimiento en el registro civil español en virtud de lo dispuesto en el artículo 201.a del Código Civil. Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción en el que consta que el menor interesado nació el de 2003 en S., actualmente provincia de Artemisa (Cuba), hijo de Y. F. P. y de B. C. P., ambos nacidos en P. (Cuba) en 1976 y 1970 respectivamente, casados en el año 2002, tarjeta de identidad cubana del interesado, de su madre y pasaporte español del padre, certificación de nacimiento del solicitante, inscripción literal de nacimiento española del padre del solicitante, Sr. F. P., hijo de A. F. Á. y de M. P. P., ambos nacidos en P. en 1950 y 1949, respectivamente, con marginal de opción a la nacionalidad española por aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 con fecha 15 de enero de 2010 e inscrita el día 22 de abril siguiente, certificado no literal de nacimiento de la madre del solicitante, Sra. P. P., certificado de matrimonio de los

padres del solicitante, celebrado en Cuba en 2002 e inscrito en el registro civil español el 17 de junio de 2011, documento consular que recoge el consentimiento para la opción prestado por la madre del menor solicitante y acta de la declaración de opción a la nacionalidad española formulada ante la encargada del registro civil consular, tras obtener la autorización correspondiente de ésta, por el Sr. F. P. como representante legal del solicitante.

2. Previo auto de la encargada del registro de fecha 10 de agosto de 2012, se practicó la inscripción de nacimiento del menor en el registro civil consular el día 30 de abril de 2013, con marginal de nacionalidad española por opción en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a del Código Civil.

3. Revisada la documentación del expediente anterior, la encargada del registro dictó providencia acordando instruir un nuevo expediente de oficio para cancelar la inscripción practicada por considerar que había tenido acceso al registro en virtud de título manifiestamente ilegal, en tanto que se estaba tramitando expediente para la cancelación de la inscripción de marginal de opción a la nacionalidad española del padre del inscrito por haber tenido acceso al registro también con título manifiestamente ilegal.

4. Previa notificación mediante edicto en el tablón de anuncios del consulado, ya que el padre como representante legal del menor no comparece en la fecha de citación, e informe favorable a la cancelación del órgano en funciones de ministerio fiscal, la encargada del registro civil consular dictó auto el 16 de marzo de 2015 acordando la cancelación de la inscripción de nacimiento y opción de nacionalidad de Y. F. C. por haberse practicado basándose en un título manifiestamente ilegal, dado que se procede también a la cancelación de la inscripción de marginal de opción a la nacionalidad española de su padre, Y. F. P., igualmente por haber accedido al registro en base a título manifiestamente ilegal, puesto que no reunía los requisitos para la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 y, en consecuencia, tampoco se cumplen en su hijo menor de edad los requisitos para la opción prevista en el artículo 20.1.a del Código Civil, prevista para las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español.

5. Notificada la resolución, el Sr. F. P. como representante legal interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que no está de acuerdo con los motivos de la cancelación de su propia inscripción de nacionalidad, que ha motivado también la de su hijo, y que no se le ha dado posibilidad de demostrarlo.

6. De la interposición del recurso se dio traslado al órgano en funciones de ministerio fiscal, que informa que en la tramitación se han seguido las prescripciones legales y por tanto el auto es conforme a derecho. La encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana (Cuba) se ratificó en su decisión y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso presentado.

7. Consta a este centro directivo que la inscripción marginal de nacionalidad en la principal de nacimiento en el registro civil español del padre del interesado, Sr. F. P., por resolución registral de fecha 13 de marzo de 2015, por haber tenido acceso al mismo en base a título manifiestamente ilegal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 20 del Código Civil (CC); 15, 16, 23 y 95.2º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 297.3º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de septiembre de 2001; 5-2ª de octubre de 2004; 9-6ª y 22-1ª de mayo y 21-4ª de septiembre de 2007; 6-7ª de mayo y 27-5ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de 2009.

II. El interesado, nacido en Cuba en 2003, instó en 2012 y mediante la representación legal de su padre, la inscripción de su nacimiento en el registro civil español y la opción a la nacionalidad española en virtud del artículo 20.1.a del Código Civil por estar bajo la patria potestad de ciudadano español, su padre, nacido en Cuba y que obtuvo la nacionalidad por aplicación del apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Practicada la inscripción de nacimiento y la marginal de opción, la encargada del registro inició un procedimiento de cancelación de los asientos una vez comprobado que al padre del solicitante no le correspondía la nacionalidad española, ya que su abuelo no había perdido o renunciado a su nacionalidad española originaria como consecuencia del exilio, por lo que también se procedía a la cancelación de su propia inscripción de nacimiento y por tanto en el interesado no concurría en el año 2012 el requisito previsto en el artículo 20.1.a del Código Civil, por lo que la inscripción tuvo acceso al registro sobre la base de un título manifiestamente ilegal y procedía su cancelación.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de octubre de 2016 (14ª)

VII.2.1. Cancelación de inscripción de nacimiento

Procede cancelar, a petición de los promotores, una inscripción de nacimiento acordándose la extensión de otra nueva en la que consten los datos correspondientes a la filiación paterna posteriormente determinada.

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento y extensión de una nueva remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores contra auto de la encargada del Registro Civil de Barakaldo (Bizkaia).

HECHOS

1. Mediante escrito presentado el 13 de febrero de 2015 en el Registro Civil de Barakaldo, Don A.-J. J. E. y D^a M.-C. S. P. solicitaban la cancelación de la inscripción de nacimiento de su hija menor de edad, M. J. S., y la extensión de una nueva para hacer constar su doble filiación sin referencia al hecho de que la nacida fue inscrita inicialmente solo con filiación materna y con el nombre de “Manuel” como padre a efectos de identificación, habiéndose inscrito posteriormente el reconocimiento paterno realizado unos meses después. Consta en el expediente la siguiente documentación: DNI de los promotores, volante de empadronamiento, libro de familia e inscripción de nacimiento en B. el de 2003 de M. S. P. (cuerpo principal del asiento), hija de M. (a efectos de identificación) y de M.-C. S. P., con marginal de 23 de enero de 2004 de notificación a la madre del asiento practicado, segunda marginal del mismo día de constancia de nombre de padre a efectos de identificación y tercera marginal de 9 de julio de 2004 de inscripción de reconocimiento paterno de la inscrita por parte de Don A.-J. J. E. en virtud de comparecencia ante el encargado del Registro Civil de Bilbao el 3 de junio de 2004.

2. Ratificados los promotores y previo informe del ministerio fiscal no oponiéndose a la supresión de la mención relativa al nombre del padre a efectos de identificación, la encargada del registro dictó acuerdo el 27 de marzo de 2015 denegando la pretensión planteada por considerar que carece de amparo legal.

3. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el progenitor cometió un error en su momento, del que se siente muy avergonzado, al no realizar el reconocimiento inmediato de su hija y que desea evitar que esta, cuando solicite una certificación de nacimiento, pueda pensar que su padre no la quiso durante sus primeros meses de vida.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su estimación. La encargada del Registro Civil de Barakaldo se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 163, 164, 306, 307 y 342 del Reglamento del Registro Civil y las resoluciones 8-5^a de abril de 2008, 26-10^a de noviembre de 2012 y 10-135^a de enero de 2014.

II. Pretenden los promotores la cancelación de la inscripción de nacimiento de su hija menor de edad, en la que consta una marginal de reconocimiento paterno realizado varios meses después del nacimiento tras haberse practicado la inscripción solo con filiación materna, y su traslado a una nueva donde la doble filiación y los apellidos actuales figuren en el cuerpo principal, alegando para ello razones de preservación de la intimidad. La encargada del registro dictó auto denegatorio por considerar que la pretensión carece de amparo legal.

III. La regla general en materia de inscripción de resoluciones firmes de rectificación o corrección y de las que completen, como en este caso, un asiento principal es la contenida en el artículo 306 RRC, en virtud del cual la inscripción ha de practicarse en el folio registral al que se refiere la resolución determinando las expresiones que se cancelan y las que las sustituyen o las circunstancias que se agregan y fue así como se practicó la inscripción cuya cancelación se solicita. El artículo 307 RRC permite excepcionalmente, para mayor claridad del asiento y mayor seguridad de los datos reservados, que se cancele totalmente el antiguo asiento y se extienda otro nuevo si la resolución así lo ordena, cosa que no sucedió en este caso, pero también, tras la reforma operada en 2005 (RD 820/2005, de 8 de julio) contempla la posibilidad de traslado total del asiento a petición del interesado mayor de edad o de los representantes legales del menor en caso de rectificación o modificación de sexo o de filiación, siendo evidente que la pretensión de los promotores entra de lleno en este último supuesto, dado que se ha producido una modificación de la filiación de la inscrita por reconocimiento paterno posterior.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

- 1º. Estimar el recurso y revocar la resolución apelada.
- 2º. Proceder, según lo establecido por el artículo 307 RRC, a la cancelación de la inscripción principal de nacimiento junto con la marginal de reconocimiento paterno, practicándose una nueva, con referencia a la antigua, en la que figuren los datos actuales relativos a la filiación paterna y apellidos de la inscrita.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El Director General: Francisco Javier Gómez Gálligo.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Barakaldo (Vizcaya).

VIII PROCEDIMIENTO Y OTRAS CUESTIONES

VIII.2 REPRESENTACIÓN

VIII.2.1 RECURSO INTERPUESTO POR MEDIO DE REPRESENTANTE

Resolución de 28 de octubre de 2016 (12ª)

VIII.2.1. Recurso interpuesto por medio de representante (atribución de apellidos).

No es admisible el recurso presentado por un tercero sin que conste acreditada suficientemente la representación.

En el expediente sobre atribución de apellidos a un menor hispanoportugués remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el recurrente contra resolución de la encargada del Registro Civil de Barcelona.

HECHOS

1. Mediante comparecencia el 24 de marzo de 2015 en el Registro Civil de Barcelona, D^a A. P. M. y Don J.-F. P. C., en representación de Don F. P.-O. M.-S., de nacionalidad portuguesa, y D^a M. M. B., de nacionalidad española, solicitaban la inscripción de nacimiento del hijo de sus representados, T., nacido en B. el de 2015, con los apellidos M.-S. (primer apellido) M. (segundo apellido). Consta en el expediente la siguiente documentación: poderes notariales otorgados por los progenitores a favor de los declarantes para proceder a la inscripción de su hijo tanto en el registro civil español como en el portugués, pasaportes de los poderdantes, DNI del Sr. P. C. y certificado expedido por un abogado portugués acerca del régimen legal de atribución de apellidos en Portugal.

2. La encargada del registro dictó acuerdo el 31 de marzo de 2015 denegando la atribución al nacido de los apellidos solicitados por no resultar ajustada a la legislación española, según la cual, los apellidos de los hijos deben ser el primero del padre y el primero de la madre, a salvo la opción prevista en el artículo 109 del Código civil (CC).

3. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el apellido paterno solicitado es en realidad el primer apellido del progenitor según su ley personal portuguesa y el que se transmite a los hijos, funcionando el que aparece en primer lugar (habitualmente el materno, pero no necesariamente según la normativa portuguesa actual) como un *middle name*

que identifica a quien lo lleva pero que no se transmite. Con el escrito de recurso se adjuntaban poderes generales otorgados por Don F. P.-O. M.-S. y D^a M. M. B. a favor del recurrente, inscripciones de nacimiento españolas de la madre y del hijo, registrado como T. P.-O. M., carné de identidad y certificado de nacimiento portugués del padre.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que no presentó alegaciones. El encargado del Registro Civil de Barcelona ratificó la calificación efectuada, sin perjuicio de que los interesados promuevan un expediente de cambio de apellidos de su hijo, y remitió las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 1280 del Código Civil; 97 de la Ley del Registro Civil; 16, 348 y 358 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, 23-1^a de junio de 1998; 11 de noviembre de 1999, 14-2^a de septiembre de 2004, 23-1^a de mayo de 2005, 16-2^a de junio de 2006, 15-4^a de febrero de 2007 y 22-1^a de septiembre de 2008, 21-3^a de julio de 2009, 4-3^a de enero y 14-4^a de abril de 2010, 10-2^a de enero de 2011, 25-55^a de enero de 2012, 13-1^a de febrero y 11-154^a de diciembre de 2013, 17-15^a de febrero y 4-24^a de septiembre de 2014 y 26-20^a de junio de 2015.

II. Los promotores realizaron la declaración para la inscripción de nacimiento en el registro civil español del hijo, nacido en España, de un ciudadano portugués y una española solicitando que se atribuyera al nacido el segundo apellido del padre, que es el que se transmite según el sistema portugués, seguido del primer apellido de la madre. La encargada del registro, en trámite de calificación, acordó la práctica de la inscripción atribuyendo al menor el apellido que figura en primer lugar en la identificación del progenitor, desestimando la pretensión inicial por no resultar conforme con la legislación española. Dicha calificación ha sido recurrida por uno de los abogados declarantes del nacimiento a quien los progenitores han otorgado un poder notarial general de representación.

III. La admisibilidad del recurso requiere la acreditación fehaciente de las facultades de representación alegadas por el letrado que suscribe el escrito de interposición o bien la ratificación de este último por parte de los representados, ambos representantes legales, a su vez, del menor interesado. Además, hay que decir que el nombre y los apellidos, por su consideración jurídica de derecho subjetivo de carácter privado, reciben en la mayor parte de los países, y también en España, el trato común de los derechos vinculados al estatuto personal, de modo que la facultad para solicitar su cambio es personalísima y, en consecuencia, la pretensión debe ser planteada por los propios interesados o bien por un representante legal a quien se le haya otorgado un poder especial para ello, no siendo suficiente la presentación de un poder general como el aportado en este caso, que no especifica el alcance y contenido concreto de la pretensión. No se puede, por ello, dar trámite al recurso entablado por una tercera

persona, aunque diga actuar en representación de los interesados, quienes no han suscrito el recurso y cuyo poder especial no consta auténticamente (art. 1280-5º CC).

IV. En cualquier caso, hay que tener presente que en supuestos de doble nacionalidad, la ley personal distinta de la española de uno de los progenitores no puede condicionar la aplicación del artículo 194 del Reglamento del Registro Civil, sin perjuicio, en caso de ciudadanos comunitarios, de la posibilidad de instar un cambio de apellidos para adaptarlos a la ley aplicable en el país de la nacionalidad del progenitor extranjero a través del expediente registral regulado por los artículos 57 y siguientes de la Ley del Registro Civil que se instruye en el registro civil del domicilio del promotor y cuya resolución corresponde al Ministerio de Justicia y hoy, por delegación (orden JUS/696/2015, de 16 de abril), a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado que no procede admitir el recurso interpuesto por falta de representación.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Barcelona.

VIII.3 CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE

VIII.3.1 CADUCIDAD POR INACTIVIDAD DEL PROMOTOR, ART. 354 RRC

Resolución de 14 de octubre de 2016 (23ª)

VIII.3.1. Caducidad por inactividad del promotor. Art. 354 RRC

1º) La declaración de caducidad por causa imputable al promotor requiere la paralización del procedimiento durante más de tres meses y la previa citación del interesado.

2º) No habiéndose cumplido las formalidades previstas legalmente para la declaración de caducidad y no acreditado por parte del registro que la citación a la promotora se realizara correctamente, procede retrotraer las actuaciones al momento en que se debió notificar la citación para comparecer ante el registro.

En las actuaciones sobre declaración de caducidad de un expediente de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del encargado del Registro Civil de Alcalá de Henares (Madrid).

HECHOS

1. Por medio de formulario presentado el 29 de julio de 2009 en el Registro Civil de Alcalá de Henares (Madrid), la Sra. F.-D. C. D., mayor de edad y de nacionalidad ecuatoriana, solicitó la concesión de la nacionalidad española por residencia. Aportaba la siguiente documentación: formulario de solicitud cumplimentado y firmado por la promotora, tarjeta de residencia, certificación de nacimiento, certificación de ausencia de antecedentes penales en su país de origen, inscripción de matrimonio celebrado en España en 2006 con un ciudadano español, DNI del cónyuge, contrato de trabajo, nóminas, pasaporte ecuatoriano y certificado de empadronamiento.

2. El encargado del registro dictó providencia el 20 de septiembre de 2013 acordando citar a la promotora con objeto de requerirle la aportación de documentación complementaria que consideraba necesaria para la tramitación de la solicitud. Intentada infructuosamente la notificación a la interesada por vía telefónica, se intentó a continuación la notificación por correo certificado el 27 de septiembre de 2013 en el domicilio que figuraba en la solicitud, también con resultado infructuoso.

3. Ante la incomparecencia de la promotora el día para el que se había fijado la cita (7 de octubre de 2013), el encargado del registro dictó nueva providencia el 30 de octubre de 2013 declarando la improcedencia de la tramitación y el archivo de las actuaciones notificándolo al mismo tiempo al ministerio fiscal.

4. La interesada presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en 2015 (no consta ni el día exacto de la presentación del recurso ni la fecha en que la recurrente tuvo conocimiento efectivo del archivo de su expediente) alegando que había presentado su solicitud en 2009 en la localidad en la que llevaba residiendo quince años, que, pasado un tiempo, preguntó en el mismo registro y le habían dicho que el expediente se había remitido a Madrid, que había vuelto a interesarse en algunas ocasiones y que, finalmente, le habían comunicado el archivo contra el cual recurre.

5. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se adhirió a la pretensión en vista de que la interesada, quien no había sido advertida previamente de que se iba a proceder a la caducidad del expediente, manifiesta su interés en la continuación del procedimiento. El encargado del Registro Civil de Alcalá de Henares remitió el expediente con informe desfavorable a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Visto el artículo 354 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 28 de abril de 2003; 7-1ª de enero, 27-3ª de febrero y 19-4ª de noviembre de 2004; 25-1ª, 2ª, 3ª y 4ª de enero, 8-2ª y 17-3ª de febrero, 27-4ª y 31-1ª de octubre de 2006; 27-9ª de marzo de 2007; 12-3ª de enero y 23-10ª de marzo de 2009; 9-2ª de febrero y 7-1ª de octubre de 2010; 11-4ª de enero, 4-2ª de abril y 13-1ª de junio de

2011; 28-16ª de junio de 2012; 19-5ª y 15ª de abril y 18-35ª de septiembre de 2013; 10-44ª de febrero de 2014 y 30-7ª de enero de 2015.

II. La recurrente presentó su solicitud de nacionalidad española por residencia en 2009, iniciándose el procedimiento por parte del registro el 20 de septiembre de 2013 mediante una providencia que ordenaba citar a la interesada para que aportara documentación complementaria. Sin embargo, la citación no pudo ser entregada porque la destinataria no fue localizada ni en su domicilio ni a través del número de teléfono que constaba en la solicitud, de manera que el encargado, ante la incomparecencia de la solicitante el día fijado para la cita (7 de octubre de 2013), declaró el archivo de las actuaciones veintitrés días después. Contra esta resolución se presentó el recurso ahora examinado.

III. Pasados tres meses desde que un expediente se paralice por culpa del promotor, el ministerio fiscal podrá pedir que se declare su caducidad previa citación al interesado (art. 354, párrafo tercero RRC). En este caso, sin embargo, ni habían transcurrido los mencionados tres meses desde el último intento de notificación, ni consta que la interesada hubiera sido advertida en algún momento de las consecuencias de su inactividad. Además, tampoco se intentó siquiera la notificación del inicio de un procedimiento de caducidad antes de ser declarada, razón por la cual, ya en principio, procedería estimar el recurso y retrotraer las actuaciones al momento en que la promotora debió ser citada con carácter previo a la declaración sobre la caducidad de su expediente.

IV. Por otra parte, se observa que el registro no realizó ninguna actuación hasta pasados cuatro años desde la presentación de la solicitud y, aunque es cierto que intentó, con resultado infructuoso, ponerse en contacto con la interesada mediante correo certificado y, según se afirma en providencia de 20 de septiembre de 2013, también por vía telefónica, lo cierto es que no se realizaron todas las actuaciones precisas hasta agotar los intentos de notificación para comparecer ante el registro (diligencias de averiguación de nuevo domicilio mediante consulta padronal o petición de informe policial y, en última instancia, publicación de edictos). No obstante, también es cierto que la interesada no ha probado su alegada comparecencia ante el registro para interesarse por su expediente en ningún momento entre la presentación de la solicitud y la del recurso y, por otra parte, los intentos de notificación se realizaron en el teléfono y la dirección postal que ella misma había consignado en el formulario, debiendo recordarse a este respecto que es obligación de los interesados comunicar al registro o al órgano competente para resolver su expediente los cambios de domicilio (se entiende que dicha obligación alcanza asimismo al número de teléfono o a la dirección de correo electrónico si los datos facilitados inicialmente hubieran dejado de ser operativos, como parece que ha ocurrido en este caso en tanto que el teléfono que consta en el escrito de recurso es distinto del que figura en el impreso de solicitud). En definitiva, se aprecian relevantes negligencias por ambas partes, de manera que no resulta claro en este caso determinar a cuál de ellas es imputable en mayor medida la responsabilidad en la paralización y archivo del expediente, si bien, teniendo en cuenta

los incumplimientos legales mencionados en el fundamento tercero, así como el hecho de que la resolución de archivo no menciona siquiera la causa legal en que se funda ni la posibilidad de interponer recurso y, especialmente, a la vista del informe favorable del ministerio fiscal, se considera que el recurso debe ser estimado en esta ocasión.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Estimar el recurso y dejar sin efecto la resolución de archivo.

2º. Retrotraer las actuaciones al momento en que la interesada debió ser citada para comparecer en el registro.

Madrid, 14 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Alcalá de Henares (Madrid).

VIII.4 OTRAS CUESTIONES

VIII.4.2 RECURSOS EN LOS QUE HA DECAÍDO EL OBJETO

Resolución de 21 de octubre de 2016 (9ª)

VIII.4.2. Matrimonio celebrado en el extranjero

No ha lugar a su resolución por haber decaído su objeto.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

HECHOS

1. Doña O. C. H., nacida en Cuba y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2011, presentó en el Consulado español en La Habana, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Cuba el 21 de julio de 2014 con don Y. N. N. nacido en Cuba y de nacionalidad cubana. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio de la interesada y certificado de nacimiento del interesado.

2. Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 29 de octubre de 2015 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la inscripción del matrimonio

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, el cual estima que se han guardado en su tramitación las prescripciones legales y en consecuencia, el auto que se recurre resulta conforme a Derecho. El encargado del registro civil consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.

5. Con fecha 14 de julio de 2016 el Registro Civil Central inscribe el matrimonio de los interesados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 22 y 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 16 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y la Resolución de 13-3ª de octubre de 2006.

II. La interesada, de nacionalidad española, presentó en el Registro Civil de España en La Habana hoja declaratoria de datos a fin de inscribir su matrimonio celebrado en Cuba el 21 de julio de 2014 con don Y. N. N. Una vez celebradas las preceptivas audiencias reservadas, el encargado del registro civil consular deniega la inscripción del matrimonio mediante auto de fecha 29 de octubre de 2015. Los interesados presentaron con fecha 23 de noviembre de 2015, recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.

III. Con fecha 14 de julio de 2016 el Registro Civil Central inscribe el matrimonio celebrado por los interesados en Cuba el 21 de julio de 2014.

IV. Por lo que en aras del principio de economía procedimental que rige en materia registral que obliga a evitar dilaciones o trámites superfluos o desproporcionados con la causa (cfr. art. 354.II RRC), procede acordar el archivo del expediente por carencia sobrevinida de su objeto al haber obtenido los interesados la satisfacción de su pretensión al margen del procedimiento de recurso (cfr. art. 22 LEC y 16 RRC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado que no ha lugar a resolver el recurso presentado, por haber decaído su objeto, acordándose el archivo de las actuaciones.

Madrid a 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico

Sr. encargado del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba)

Resolución de 28 de octubre de 2016 (1ª)

VIII.4.2. Competencia. Expedición de Fe de Vida y Estado

1º) El expediente para la acreditación de la vida o estado ha de decidirlo el encargado del registro del domicilio del sujeto a que se refiere.

2º) *Procede acordar el archivo del expediente por pérdida sobrevenida de objeto, al haber obtenido los interesados la satisfacción de su pretensión al margen del procedimiento de recurso (cfr. art. 22 LEC y 16 RRC).*

En las actuaciones sobre solicitud de certificación de fe de estado remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra resolución dictada por el magistrado juez encargado del Registro Civil de Sevilla.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado el 30 de marzo de 2015 en el Registro Civil de Sevilla Don M. M. M., abogado, y en representación de M. E. G.-G., nacido en G. y con domicilio en M. d. A. (S.), solicitaba la expedición de una certificación de fe de estado, que declarase que el Sr. E. era soltero, por serle necesaria para la tramitación de expediente de autorización de matrimonio que se pretendía celebrar próximamente. Declarando el Sr. M. como apoderado y tío del interesado que éste es soltero. Se adjuntaba copia del poder otorgado a favor del Sr. M. M.

2. El encargado del Registro Civil de Sevilla dictó resolución el 31 de marzo de 2015 denegando lo solicitado, en primer lugar por entender que la competencia correspondía al Registro Civil de Mairena del Aljarafe, en cuya demarcación territorial está el domicilio del Sr. E. G.-G., en segundo lugar porque debía comparecer el precitado por sí mismo para declarar sobre su soltería y por último porque el documento solicitado no es necesario para la tramitación del expediente de autorización de matrimonio, bastando la declaración del interesado sobre su soltería en audiencia reservada ante el Registro Civil.

3. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que el Registro Civil de Sevilla debía haber remitido su escrito al que considerara competente, que la solicitud de certificación del estado civil podía realizarla el apoderado y que el documento si era necesario para tramitar el expediente matrimonial si se trata de la celebración de un matrimonio canónico, como era el caso.

4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil de Sevilla informa en el sentido de que debe confirmarse la resolución dictada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

5. Consta a este centro directivo que el interesado, Sr. E. G.-G., contrajo matrimonio canónico en G. con fecha 23 de mayo de 2015, que fue inscrito en el registro civil de dicha localidad el día 26 siguiente, constando en dicha inscripción como domicilio del precitado la ciudad de C.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 325 a 327 del Código Civil (CC); 22 y 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), 16, 363 y 364 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones de 13-3ª de octubre de 2006 y 25-1ª de febrero de 2008.

II. Se pretende la expedición de fe de estado civil, soltero, del interesado, mediante representante legal, para su aportación a expediente de autorización de matrimonio. El encargado del registro acordó denegar lo solicitado porque el domicilio del promotor no se encuentra en su demarcación sino en la de otro registro civil, porque debía comparecer personalmente el interesado para declarar su soltería y porque no resulta necesario para el expediente matrimonial.

III. El artículo 364 del Reglamento del Registro Civil establece en su punto 1º que para tramitar el expediente de fe de vida o estado “es competente el encargado y, por delegación, el juez de paz del domicilio del sujeto a que se refiere”, en este caso M. d. A., localidad en la que está domiciliado el Sr. E., según declara su apoderado en el escrito de solicitud y según se hace constar en el poder notarial presentado. El punto 3º del mismo artículo establece que “siempre que sea posible se pedirá declaración al propio sujeto sobre su identidad o estado” y en el punto 6º se añade que “para el estado de soltero, viudo o divorciado se acreditará suficientemente su posesión, salvo que al encargado le conste, y basta para acreditarlo la declaración jurada de una persona, preferentemente familiar”. En el caso presente tal y como declaró el encargado del registro la competencia no le correspondía por razón del territorio, motivo por sí solo suficiente para no acceder a lo solicitado, sin perjuicio de que posteriormente pudiera haberse procedido a remitir la petición al registro civil competente.

IV. De otro lado y pese a lo manifestado por el recurrente respecto a la necesidad del documento solicitado para el expediente matrimonial canónico, es lo cierto, tal y como se recoge en el último de los antecedentes de hecho, que el matrimonio previsto se celebró en forma canónica menos de un mes después de la solicitud que ahora se examina y fue inscrito en el Registro Civil de Granada, lugar de celebración, por lo que se estima que procede acordar el archivo del expediente de expedición de fe de estado para contraer matrimonio por carencia sobrevenida de objeto, al haber obtenido el recurrente la satisfacción de su pretensión.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 28 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gálligo

Sr. juez encargado del Registro Civil de Sevilla.

VIII.4.4 PROCEDIMIENTO Y OTRAS CUESTIONES

Resolución de 21 de octubre de 2016 (42ª)

VIII.4.4. Inscripción de nacimiento y opción por la nacionalidad española por razón de patria potestad

Estando legalmente previsto que cuando las certificaciones extranjeras no ofrezcan garantías análogas a las exigidas por la normativa española se tramite expediente (art. 95.5º LRC), no cabe denegar su incoación invocando los arts. 23 LRC y 85 RRC.

En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción por la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el padre de los tres interesados contra resolución dictada por el encargado del Registro Civil Consular de Orán (Argelia).

HECHOS

1. El 6 de junio de 2012 el Sr. O. S., en calidad de familiar, presentó en el Registro Civil Central sendas solicitudes e impresos de declaración de datos para la inscripción de los nacimientos de M., E. y A. Y. A., nacidos en el Sahara Occidental el 20 de octubre de 1992, el 28 de octubre de 1998 y el de 2005, respectivamente, acompañados de la siguiente documentación: certificados de nacimiento de los no inscritos expedidos por la autodenominada República Árabe Saharaui Democrática y, de Y. A. A., el padre consignado en las tres declaraciones, copia simple de volante de empadronamiento en V.-G. (Araba) y de DNI y certificación literal de inscripción de nacimiento practicada en el Registro Civil Central el 6 de octubre de 2006 con marginal de nacionalidad española declarada con valor de simple presunción en virtud de resolución de 14 de febrero de 2005 dictada por el encargado del Registro Civil de Torrent, Valencia.

2. El 30 de agosto de 2013 el juez encargado, considerando que los certificados de nacimiento aportados no cumplen los requisitos de los arts. 23 de la Ley del Registro Civil y 85 de su reglamento, dictó providencia disponiendo que se informe a los padres de que habrán de solicitar la incoación de expedientes gubernativos de inscripción de nacimiento fuera de plazo, conforme a los arts. 95.5º de la Ley y 311 a 316 y 341 y siguientes del reglamento, con práctica de prueba de información testifical, informe del médico afecto al registro sobre edad y sexo de los optantes, testimonio de la documentación de la madre y acta de reconocimiento por ambos progenitores; que el mayor de los hermanos ha de ratificar la solicitud presentada y prestar su consentimiento al reconocimiento; y, respecto a las opciones por la nacionalidad española, deberán levantarse las correspondientes actas, la de M., mayor de 18 años, conforme al art. 20.2.c del Código Civil, la de E. según el art. 20.2.b y la de A. por el art. 20.2.a, previa autorización del encargado del registro civil del domicilio del declarante.

3. Recibida la comunicación en el Registro Civil de Vitoria-Gasteiz y cursada citación a los tres optantes y al padre, el 21 de enero de 2014 compareció este último, manifestando que los menores y la madre residen en los campamentos y tramitarán la

opción en el Consulado de España en Orán y, a la vista de lo anterior, el encargado del Central acordó el archivo de las actuaciones.

4. El 22 de septiembre de 2014 el progenitor presentó en el Registro Civil Central escrito en solicitud de que se envíe el exhorto a O., facilitando domicilio y teléfono de contacto en esa población de los interesados, establecido que los optantes tienen fijada su residencia en los Campamentos de Refugiados Saharauis, se libró comunicación al Registro Consular de Orán a fin de que se prosiga la tramitación del expediente de inscripción de nacimiento y nacionalidad española por opción y, recibido el escrito precedente en fecha 1 de diciembre de 2014, el 23 de enero de 2015 el encargado dictó resolución denegando, en virtud de lo dispuesto en los arts. 23 LRC y 85 RRC, la inscripción de nacimiento y, consecuentemente, la incoación del expediente de nacionalidad.

5. Notificada la resolución, el padre interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que se ha dictado sin que hayan sido oídos ni él ni sus hijos, que son los interesados, y que, si se considera que las partidas de nacimiento aportadas no ofrecen garantías, se les tendría que haber dado la alternativa del expediente gubernativo.

6. De la interposición del recurso se dio traslado al canciller en funciones de ministerio fiscal (art. 54 RRC), que no formuló alegación alguna, y el encargado del Registro Civil Consular emitió el preceptivo informe y dispuso la remisión de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 23, 29, 64 y 95 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 85, 226 a 229, 311 a 316, 342, 355 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC).

II. El promotor, de nacionalidad española de origen declarada con valor de simple presunción en virtud de resolución registral de 14 de febrero de 2005, insta en el Registro Civil Consular de Orán la inscripción de nacimiento y opción por la nacionalidad española de tres hijos nacidos fuera de España el 20 de octubre de 1992, el 28 de octubre de 1998 y el de 2005, y el encargado, apreciando que las certificaciones presentadas no ofrecen garantías de regularidad y autenticidad análogas a las exigidas para la inscripción por la Ley española, deniega la inscripción de nacimiento y, consecuentemente, la incoación del oportuno expediente de nacionalidad mediante resolución de 23 de enero de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. Prevé el artículo 355 RRC que contra las resoluciones del encargado no admitiendo el escrito inicial cabe recurso ante la dirección general durante quince días hábiles a partir de la notificación y debe estimarse que en este caso procede dicho recurso ya que, presentada la solicitud, el encargado ha denegado la incoación del expediente instado.

IV. Son inscribibles en el registro civil español los nacimientos acaecidos en territorio español y los que afectan a españoles (art. 15 LRC) y, en este último caso, la vía registral adecuada es, bien la transcripción de certificación de asiento extendido en un registro extranjero (cfr. arts. 23 LRC y 85 RRC), bien el expediente registral al que alude el artículo 95-5º LRC y que desarrollan los artículos 311 a 316 RRC. Por tanto, el hecho de las certificaciones extranjeras aportadas no constituyan título suficiente para practicar los asientos cierra la primera vía y abre la segunda, que no es complementaria sino alternativa, de modo que, instado el oportuno expediente, ha de instruirse y resolverse por el encargado y no hay fundamento legal para denegar la incoación por una circunstancia que, de haber concurrido, habría determinado que el procedimiento fuera otro.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:

1º. Estimar el recurso y dejar sin efecto la resolución apelada.

2º. Disponer que por el Registro Civil Consular de Orán se admita la solicitud presentada, se tramite el oportuno expediente conforme a las reglas generales y las específicas de los de su clase y se dicte la resolución que proceda.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállego.

Sr. encargado del Registro Civil Consular en Orán (Argelia).

Resolución de 21 de octubre de 2016 (45º)

VIII.4.4. Recurso contra decisión no comprendida en el art. 355 RRC

No es admisible el recurso entablado contra providencia por la que se acuerda dejar en suspenso la práctica de la inscripción de apoderamiento preventivo en la de nacimiento en tanto no se aporte copia autorizada de la escritura de poder sellada y firmada en forma, porque no se trata de una resolución recurrible ante este órgano según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil.

En las actuaciones sobre indicación en inscripción de nacimiento de poder otorgado incluso para el caso de incapacidad remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra resolución de la encargada del Registro Civil de Antequera (Málaga).

HECHOS

1. Don M. L. P., notario de C. comunicó, con fecha 13 de febrero de 2015, al Registro Civil de Antequera que don M. G. H., nacido en dicha localidad el 5 de octubre de 1942, había otorgado el día 30 de diciembre de 2014 escritura de apoderamiento para el caso de incapacidad, sin que conste el mandatario. Con el escrito el Sr. L.

interesaba la práctica de indicación marginal de la existencia del apoderamiento en la inscripción de nacimiento del poderdante.

2. La encargada del registro dictó acuerdo el mismo día de la presentación por el que dejaba en suspenso la práctica del asiento interesado a la espera de que el Sr. L. aportara copia autorizada de la escritura de poder sellada y firmada, añadiéndose que de no remitir la copia auténtica interesada, en el plazo máximo de tres meses a partir de la notificación en forma de la presente podrá denegarse la práctica del asiento.

3. Notificada la resolución, en la misma fecha de su emisión, el notario autorizante interpuso recurso, con fecha 18 de marzo de 2015, ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que no era legalmente necesaria la aportación de la escritura de apoderamiento, siendo suficiente la notificación al registro civil del nacimiento del poderdante.

4. Notificado el recurso al ministerio fiscal, éste se opuso a su estimación. La encargada del Registro Civil de Antequera se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 29 de la Ley del Registro Civil (LRC) y 16, 355 y 356 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones 1-3ª de diciembre de 2008, 30-6ª de julio de 2009, 29-20ª de octubre y 26-2ª de diciembre de 2012, 19-14ª de abril de 2013 y 30-43ª de enero de 2014.

II. Solicita el notario autorizante que se indique en una inscripción de nacimiento la existencia de un apoderamiento para el caso de incapacidad, sin que se mencione la identidad del apoderado. La encargada del registro acordó dejar en suspenso la práctica del asiento interesado en tanto no se aportara copia autorizada de la escritura de poder sellada y firmada. Dicha resolución constituye el objeto del presente recurso.

III. La regulación propia del registro civil se contiene en la Ley de 8 de junio de 1957 y en su reglamento, aprobado por decreto de 14 de noviembre de 1958, cuyo artículo 16 dispone que, en las actuaciones y expedientes sujetos a dichas normas, se aplicarán supletoriamente las de jurisdicción voluntaria. Esta normativa registral específica prevé, de un lado, un recurso contra las resoluciones del encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente que se entablará en el plazo de quince días hábiles (art. 355 RRC) y, de otro, un recurso contra la calificación de los hechos inscribibles efectuada por el encargado del registro con un plazo de interposición de treinta días (art. 29 LRC). Aun cuando en este caso se participa al promotor de que cabe interponer el segundo de los recursos mencionados, lo cierto es que la resolución dictada no tiene encaje legal en este precepto, ya que no se ha denegado la práctica de la indicación interesada sino que únicamente se ha diferido la calificación que precede a la práctica del asiento al momento en que se aporte el documento requerido por la encargada, así se concluye en el apartado 4º de la parte

dispositiva de la resolución, “de no remitir la copia auténtica interesada, en el plazo máximo de tres meses a partir de la notificación en forma de la presente podrá denegarse la práctica del asiento.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado que no procede admitir el recurso, debiendo retrotraerse las actuaciones para que la encargada del Registro Civil de Antequera resuelva acerca de la procedencia o no de practicar el asiento interesado, tras haber transcurrido el plazo concedido para la aportación del documento solicitado.

Madrid, 21 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Antequera (Málaga).

Resolución de 28 de octubre de 2016 (11ª)

VIII.4.4. Rectificación de error en inscripción de defunción

Conocida de la propia inscripción de defunción la existencia de otros interesados a quienes afectada el estado civil del finado al tiempo de su fallecimiento, procede retrotraer las actuaciones a fin de que sean notificados de la incoación del expediente (cfr. art. 97.3º LRC), intervengan en el mismo si lo estiman oportuno y, practicado lo anterior, se dicte resolución motivada sobre la cuestión de fondo planteada.

En el expediente sobre rectificación de error en inscripción de defunción remitido a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la promotora contra auto dictado por la juez encargada del Registro Civil de Xátiva (Valencia).

HECHOS

1. El 16 de octubre de 2014 doña S. A. R., mayor de edad y domiciliada en la demarcación del Consulado General de España en París (Francia), comparece en el registro civil consular al objeto de manifestar que en la inscripción de defunción de su marido don J.-L. G. M., fallecido el 5 de diciembre de 2011 en C. (Valencia), se constata error en el estado civil del difunto, que es el de separado y no el de divorciado que consta, y en su viuda, que es ella y no la que figura, doña E. C. S., y solicita la rectificación de dichos datos acompañando certificación literal de inscripción de matrimonio entre ellos celebrado en O. (Ourense) el 9 de agosto de 1975 en la que constan practicadas tres marginales referidas a autos seguidos bajo el número en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Zaragoza: la primera, de fecha 20 de mayo de 1990, refleja una sentencia de 9 de abril de 1990 por la que se decreta la separación conyugal, la segunda, de fecha 20 de febrero de 1991, que por sentencia dictada en día no legible de diciembre de 1990 se rescinde la sentencia de separación y la tercera, de fecha 6 de noviembre de 1992, que se ha dictado sentencia de separación conyugal en fecha que no se indica; fotocopia del libro de familia de ambos, certificación literal de inscripciones de nacimiento y de defunción del finado y

certificación literal de inscripción de nacimiento y fotocopia compulsada de DNI propios.

2. Recibida la anterior documentación en el Registro Civil de Chella, elevada al de Xátiva y acordada por este la formación del oportuno expediente gubernativo de rectificación de error, el ministerio fiscal informó en fecha 15 de enero de 2015 que, refiriéndose los datos a rectificar a terceras personas, el error debe de acreditarse a través de la vía judicial ordinaria, el 24 de abril de 2015 tuvo entrada en el Registro Civil de Xátiva solicitud de cooperación judicial procedente del Registro Civil Consular de París interesando que sea anotada en el libro de familia de la promotora la defunción del esposo y que se remita certificación de defunción de este donde conste la rectificación relativa a su estado civil en el momento del fallecimiento, el 4 de mayo de 2015 se libró exhorto al Registro Civil de Chella a fin de que se cumplimente lo primero y el 7 de mayo de 2015 la juez encargada, razonando que los errores alegados por la promotora, referidos a datos que afectan a terceras personas, no pueden incardinarse en los supuestos previstos en los arts. 93 y 94 de la Ley del Registro Civil, dispuso denegar la rectificación.

3. Notificada la resolución al ministerio fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante la dirección general de los Registros y del Notariado alegando que la rectificación interesada se subsume en el apartado 3 del art. 93 de la Ley, ya que la inscripción de matrimonio del fallecido evidencia que solo ha habido un matrimonio y que en la fecha de fallecimiento su estado civil era el de separado, que la anotación en el apartado “otros títulos o datos” se realizó sin soporte documental alguno y no es circunstancia sobre la que, a tenor de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley, pueda realizarse anotación con valor simplemente informativo y solicitando que se acuerde reformar el auto dictado y ordenar la rectificación del estado civil del difunto, que es el de separado de doña S. A. R. y no el de “divorciado de E. C. S., de cuyo matrimonio tuvo 1 hijo, D. G. C.”.

4. De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que, considerando que, conforme a lo previsto legalmente, el cauce adecuado para la pretensión es el juicio declarativo ordinario, se opuso al recurso y la juez encargada del Registro Civil de Xátiva informó que, afectando la cuestión a terceras personas que no han sido parte en el procedimiento, existen motivos para considerar que no procede la rectificación de error instada y seguidamente dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 2, 23, 26, 81 y 92 a 97 de la Ley del Registro Civil (LRC), 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y 12, 16, 342, 346 y 358 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, de 29-1ª de enero y 2-6ª de octubre de 2007, 2-6ª de abril, 17-6ª de julio, 5-13ª de noviembre y 9-1ª de diciembre de 2008, 27-1ª de enero, 13-8ª de abril y 2-5ª de julio de 2009, 13-3ª de febrero y 13-5ª y 30ª de septiembre de 2013 y 3-108ª de enero y 29-27ª de octubre de 2014.

II. Solicita la promotora la rectificación de la inscripción de defunción de quien fue su cónyuge, fallecido el 5 de diciembre de 2011, exponiendo que se constata error en el estado civil del difunto, que es el de separado de ella y no el de divorciado de doña E. C. S., como figura por error, y la juez encargada, razonando que el error cuya rectificación se interesa, referido a datos que afectan a terceras personas, no puede incardinarse en los supuestos previstos en los arts. 93 y 94 LRC, dispone denegar lo instado, sin perjuicio de que la peticionaria pueda hacer valer sus derechos en el juicio declarativo ordinario que corresponda, mediante auto de 7 de mayo de 2015 que constituye el objeto del presente recurso.

III. Dispone el art. 97.3ª LRC que la incoación del expediente se comunicará a los interesados a fin de que puedan hacer las manifestaciones que estimen oportunas, en este caso la existencia de otras personas con interés legítimo es conocida desde el principio -resulta de la propia inscripción de defunción que se trata de rectificar-, en las actuaciones no consta que se haya practicado la preceptiva notificación y, en consecuencia, no cabe declarar improcedente la rectificación instada por el solo hecho de que esas terceras personas no han sido parte en el procedimiento de modo que, sin entrar en el fondo del asunto, procede dejar sin efecto el auto dictado y retrotraer las actuaciones para que los interesados sean informados de la incoación del expediente, intervengan en el mismo si lo estiman oportuno y, practicado lo anterior, se dicte resolución motivada sobre la rectificación de error solicitada.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado dejar sin efecto el auto apelado y retrotraer las actuaciones a fin de que se comunique la incoación del expediente a las terceras personas a las que afectan los datos cuya rectificación se interesa y, tras las diligencias que procedan, se dicte resolución motivada sobre la cuestión de fondo planteada.

Madrid, 28 de octubre de 2016.

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil Xativa (Valencia).

IX PUBLICIDAD

IX.1 PUBLICIDAD FORMAL, ACCESO DE LOS INTERESADOS AL CONTENIDO DEL RC

IX.1.1 PUBLICIDAD FORMAL, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y CONSULTA LIBROS DEL REGISTRO

Resolución de 7 de octubre de 2016 (50ª)

IX.1.1. Publicidad formal

Se confirma la denegación para acceder a la consulta de los libros de defunción entre 1990 y 2014 en un registro civil porque el examen directo de los libros es una posibilidad excepcional que ha de entenderse limitada por razones preferentes del servicio y para preservar la publicidad restringida de determinados asientos.

En el expediente sobre solicitud de consulta de libros de defunción remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra resolución dictada por la encargada del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria.

HECHOS

1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria el 15 de octubre de 2014, doña M. P. P. y don J.-I. U. solicitaban el acceso directo a los libros de defunción entre 1990 y 2014 con el fin de localizar los fallecimientos de personas ocurridos mientras intentaban llegar de forma irregular a la costa española y cumplimentar así las estadísticas de un estudio académico en el que están trabajando, dirigido por la Universidad V. de Á., sobre inmigración irregular en la frontera sur de Europa. Constan en el expediente varios documentos, algunos en español y otros en inglés, informando sobre las características de la investigación mencionada.

2. La encargada del registro dictó auto el 28 de octubre de 2014 denegando la autorización solicitada porque la finalidad institucional del registro civil está circunscrita a la publicidad del estado civil de las personas y porque la consulta de la extensa documentación que se pretende examinar, con la necesaria protección de la causa de defunción bajo la vigilancia del encargado, conllevaría dificultades y perturbaciones en la prestación del servicio ordinario.

3. Notificada la resolución, la solicitante interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la única forma de obtener datos fiables para su investigación es el acceso directo a los libros de los registros civiles, varios de los cuales les han permitido ya realizar consultas similares, que su investigación posee carácter de excepcionalidad al estar respaldada por altos organismos oficiales internacionales (ONU) y que su metodología de trabajo asegura que no se producirá ninguna interferencia en la actividad diaria del registro. Con el escrito de recurso se adjuntaba una autorización para la consulta de libros expedida a la recurrente por el Registro Civil de San Cristóbal de la Laguna y la diligencia de ordenación de inicio de expediente con el mismo fin en el Registro Civil de Málaga.

4. Notificada la interposición del recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Vistos los artículos 6 de la Ley del Registro Civil (LRC); 17, 18, 21 y 22, del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, de 3 de mayo de 1999, 10 de abril de 2002, 1-1ª de junio y 22-2ª de julio de 2004, 6-1ª de julio de 2005, 28-2ª de febrero de 2006, 25-2ª de septiembre de 2007, 28-2ª de marzo y 2-3ª de julio de 2008; 15-80ª de noviembre de 2013; 30-54ª de enero, 12-26ª de marzo y 23-3ª de abril de 2014; 23-17ª de enero, 10-24ª de julio y 20-22ª de noviembre de 2015.

II. El registro civil español, como instrumento específico destinado a probar el estado civil de las personas, tiene, por regla general, el carácter de público. Por esto, quienes tengan interés en conocer los asientos tienen derecho, en principio, a examinarlos y a obtener la certificación oportuna y este interés se presume en el que solicita la certificación o la consulta (art. 6 LRC y 17 RRC), sin perjuicio, claro está, de los supuestos de publicidad restringida a que se refieren los artículos 21 y 22 del Reglamento del Registro Civil. Ello significa, en principio, que el interesado en obtener una certificación o consultar un asiento del registro civil no tiene que acreditar un interés especial, porque este se le presume por el hecho de solicitarlo. Pero esta regla general, como recordó la instrucción de este centro directivo de 9 de enero de 1987, no debe hacer olvidar, sin embargo, de un lado, que hay casos de publicidad restringida porque afectan a cuestiones relacionadas con la intimidad personal y familiar que no deben ser objeto de divulgación indiscriminada y, de otro lado, que, si bien el interés en conocer los asientos se presume en quien solicita la información (arts. 6 LRC y 17 RRC), no existe disposición legal alguna que sancione esta presunción cuando se solicita conocer un indeterminado número de asientos, debiendo el encargado en tal caso valorar la existencia o no de un interés que pueda estar amparado en el derecho fundamental recogido en la Constitución a recibir y difundir información veraz.

III. En los libros de defunciones el único dato de publicidad restringida es, precisamente, la causa de la muerte (OM de 13 octubre 1994) de manera que la publicidad de las

inscripciones de defunción para los terceros distintos de los descendientes o herederos del fallecido queda sometida a la obtención de autorización especial del encargado del registro. No obstante, la propia orden de 1994 preveía una excepción a este régimen limitativo en los casos en los que se cumpliera la doble condición de que la publicidad de la causa de la muerte no afectara a la intimidad personal o familiar y hubiesen transcurrido veinticinco años desde la fecha de la muerte. La concurrencia en algunos casos de los supuestos de hecho previstos para la excepción ha permitido a este centro directivo, en vía de recurso, facilitar el acceso a la información cuando el periodo de tiempo a que se refería la petición era anterior a los últimos veinticinco años. Ahora bien, es igualmente cierto que el carácter masivo de la petición de información necesaria para llevar a cabo una investigación referida a un periodo de varios años no puede garantizar, en caso de que los libros de defunción se pretendan consultar directamente, la protección de la intimidad personal y familiar en todos los casos. Por otra parte, el carácter masivo de la petición de información, obliga al cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 RRC, que impone que el examen y manifestación de los libros se hará “a la hora más conveniente para el servicio y bajo la vigilancia del encargado”, ya que en caso contrario podrían generarse graves dificultades y perturbaciones al servicio ordinario del registro.

IV. Todo lo anterior se ha de entender, no obstante, sin perjuicio del régimen jurídico que rige para las investigaciones científicas o históricas que los organismos y autoridades públicas puedan emprender en el marco de acciones o iniciativas oficiales (cfr. art. 19 RRC) y, en particular, de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

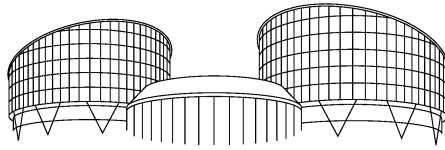
V. No habiéndose acreditado convenientemente en este caso la concurrencia de las circunstancias anteriormente descritas, la pretensión de la recurrente, tal como ha sido formulada, no puede ser estimada porque, siendo el objeto de la solicitud la consulta masiva de libros de defunción de un periodo de veinticuatro años, no cabe presumir la existencia de un interés legítimo y porque la autorización para la consulta directa de los libros del registro es una posibilidad excepcional que ha de entenderse limitada a la manifestación de determinados asientos una vez localizados pero que no puede extenderse al examen de cualquier libro a elección del consultante.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Madrid, 7 de octubre de 2016

Firmado: El director general: Francisco Javier Gómez Gállico.

Sr. juez encargado del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

SECCIÓN TERCERA

DECISIÓN

Demanda n° 2649/16
Mercedes JIMÉNEZ RUIZ v España

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Tercera), reunido el 10 de octubre de 2017 en Comité compuesto por:

Dmitry Dedov, *Presidente*,

Luis López Guerra,

Jolien Schukking, *juez*,

y Fatoş Aracı, *Secretaria adjunta de Sección*,

Teniendo en cuenta la demanda interpuesta el 24 de diciembre de 2015,

Teniendo en cuenta las declaraciones formales de aceptación de un acuerdo amistoso del caso,

Tras haber deliberado, decide lo siguiente:

HECHOS Y PROCEDIMIENTO

La demandante, Mercedes Jiménez Ruiz, de nacionalidad española, nació en 1952 y reside en Torroix. Estuvo representada ante el Tribunal por M. Riera Oriol, abogada en ejercicio en Barcelona.

El Gobierno español (« el Gobierno ») estuvo representado por su agente, R.A. León Cavero, Abogado del Estado y Jefe del Área de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

La demandante reclamó que la negativa en reconocerle una pensión de viudedad en base a la falta de notificación al juez de su reconciliación tras haberse separado judicialmente, podía atentar contra el principio de no discriminación reconocido en el artículo 14 del Convenio, junto al derecho a la propiedad garantizado por el artículo 1 del Protocolo 1.

Los días 25 de mayo y 9 de junio de 2017, el Tribunal recibió una propuesta de acuerdo amistoso firmada por las partes. En base a dicha propuesta, el Gobierno se compromete a :

- reconocer la vulneración del artículo 14 del Convenio en conjunción con el artículo 1 del Protocolo 1;

- acordar una pensión de jubilación para la demandante como consecuencia del fallecimiento de su pareja por un importe mensual de 1.662,96 EUR (mil seiscientos sesenta y dos euros con noventa y seis

céntimos), correspondiente al 52% de la base reguladora de la citada pensión ;

- abonar a la demandante los atrasos de la pensión correspondiente al periodo comprendido entre el 5 de octubre de 2010 y el 5 de mayo de 2017 es decir, 135.130,68 EUR (ciento treinta y cinco mil ciento treinta euros con sesenta y ocho céntimos) ;

- abonar 19.188 EUR (diecinueve mil ciento ochenta y ocho euros) a la demandante en concepto de indemnización ;

- abonar 6.000 EUR (seis mil euros) en concepto de costas.

Por su parte, la demandante ha renunciado a cualquier otra pretensión contra España como consecuencia de los hechos que dieron lugar a la demanda.

Las cantidades mencionadas cubren cualquier daño moral y material así como los gastos y costas del procedimiento. Estarán exentas de cualquier impuesto que pudiera ser de aplicación y se le abonarán dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la decisión del Tribunal. En caso de incumplimiento de dicho plazo, el Gobierno se compromete a abonar, desde el vencimiento de los citados tres meses hasta su liquidación, un interés simple sobre las cantidades anteriores igual al tipo de interés de la facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo durante el periodo de mora, incrementado en un tres por ciento. Dicho abono se considerará que resuelve definitivamente el asunto.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El Tribunal toma nota del acuerdo amistoso al que han llegado las partes. Considera que dicho acuerdo se inspira en el respeto de los derechos humanos reconocidos en el Convenio y sus protocolos, y manifiesta no apreciar motivo alguno para continuar con el examen de la demanda. En consecuencia, decide archivar el asunto.

En base a dichos motivos, el Tribunal, por unanimidad,

Decide archivar la demanda en aplicación del artículo 39 del Convenio.

Hecho en francés y notificado a continuación por escrito el 9 de noviembre de 2017.

Fatoş Aracı
Secretaria adjunta

Dmitry Dedov
Presidente

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

ESCALAFÓN DE LA CARRERA FISCAL

(Cerrado a 21 de septiembre de 2017)

De conformidad con lo prevenido en el artículo 47 y la disposición adicional primera de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en relación con el artículo 300 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, he acordado hacer público en el "Boletín de Información del Ministerio de Justicia" el Escalafón general de la carrera fiscal, cerrado a 21 de septiembre de 2017, que se acompaña como anexo a esta Resolución.

El presente escalafón tiene carácter provisional y se elevará a definitivo una vez transcurrido el plazo que por Resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado se establezca para que los interesados puedan solicitar las rectificaciones que estimen oportunas.

Madrid, 25 de octubre de 2017

El Director General de Relaciones con la Administración de Justicia

Joaquín Delgado Martín

ÍNDICE

Fiscales de Sala	1
Fiscales	1
Abogados Fiscales	50
Fiscales de Primera excedentes	69
Fiscales de Segunda excedentes	69
Fiscales de Tercera excedentes	71

ESCALAFÓN DE LA CARRERA FISCAL

(Cerrado a 21 de Septiembre de 2017)

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS										
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO				
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días		
FISCALES DE SALA															
1	1	FUNGAIRIÑO BRINGAS EDUARDO	30/05/1946	FISCAL DE SALA DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	44	4	28	20	4	11					
2	2	NAVAJAS RAMOS LUIS MANUEL	17/12/1948	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	41	5	4	14	2	18					
3	3	FERNANDEZ VALCARCEL PILAR	12/10/1952	FISCAL DE SALA DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	39	9	14	14	2	18					
4	4	FERNANDEZ BERMEJO MARIANO	10/02/1948	FISCAL DE SALA DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	43	3	29	13	3	15					
5	5	HERRERO ORTEGA ANTOLIN	26/02/1947	FISCAL DE SALA DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	43	5	2	12	8	5					
6	6	PAZ RUBIO JOSE MARIA	30/10/1950	FISCAL DE SALA DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	39	9	7	12	8	5	4	4	8		
7	7	ZARAGOZA AGUADO JAVIER ALBERTO	20/11/1955	FISCAL DE SALA DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	35	8	14	12	5	18	0	3	27		
8	8	CAMPOS CAMPOS JUAN IGNACIO	07/11/1950	FISCAL DE SALA DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	39	9	5	12	3	17					
9	9	BUEREN RONCERO JOSE LUIS	22/03/1952	FISCAL DE SALA DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	39	9	5	12	0	10					
10	10	BARRERO JUAN PILAR	30/09/1952	FISCAL DE SALA DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	36	8	14	11	6	12					
11	11	VERCHER NOGUERA ANTONIO	21/09/1953	FISCAL DE SALA ORDENACIÓN TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE (MADRID)	36	8	14	11	6	12					
12	12	NOREÑA SALTO JOSE RAMON	25/08/1952	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA ANTIDROGA (MADRID)	40	8	29	10	11	27					
13	13	VARGAS CABRERA BARTOLOME	19/05/1950	FISCAL DE SALA DE SEGURIDAD VIAL (MADRID)	40	9	15	10	10	18					
14	14	SANCHEZ-COVISA VILLA JOAQUIN	20/07/1952	FISCAL DE SALA DE EXTRANJERIA (MADRID)	37	9	29	10	10	18					
15	15	NARVAEZ RODRIGUEZ ANTONIO	23/02/1958	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	34	11	25	10	4	28					
16	16	TEJADA DE LA FUENTE ELVIRA	31/05/1957	FISCAL DE SALA DE CRIMINALIDAD INFORMATICA (MADRID)	35	8	14	9	7	28	0	3	28		
17	17	MADRIGAL MARTINEZ-PEREDA CONSUELO	02/11/1956	FISCAL DE SALA DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	36	8	17	9	7	17					
18	18	AYA ONSALO ALFONSO	19/09/1950	FISCAL DE SALA DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	37	2	2	8	1	18					
19	19	SANCHEZ CONDE MA.ANGELES	26/12/1956	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (MADRID)	34	11	26	8	1	18					
20	20	MORAN MARTINEZ ROSA ANA	15/07/1961	FISCAL DE SALA DE COOPERACION PENAL INTERNACIONAL (MADRID)	29	9	8	6	6	13					
21	21	CRESPO BARQUERO PEDRO JOSE	03/03/1963	FISCAL DE SALA DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	26	3	21	6	3	14					
22	22	SANCHEZ TEMBLEQUE PINEDA ANSELMO	19/12/1947	FISCAL DE SALA DE SINIESTRALIDAD LABORAL (MADRID)	40	9	6	3	6	12					
23	23	MORENO VERDEJO JAIME	25/07/1958	FISCAL DE SALA DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	33	8	15	3	6	12					
24	24	ROSA CORTINA JOSE MIGUEL	03/07/1965	FISCAL JEFE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	26	3	19	2	8	12					
25	25	CARTAGENA PASTOR FAUSTO JOSE	19/01/1951	FISCAL INSPECTOR DE LA INSPECCIÓN FISCAL	39	9	1	2	7	0					
26	26	CADENA SERRANO FIDEL	19/02/1954	FISCAL DE SALA DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	37	9	28	2	7	0					
27	27	HUETE NOGUERAS JOSE JAVIER	22/08/1955	FISCAL DE SALA DE MENORES (MADRID)	36	8	14	2	7	0					
28	28	TORRES MORATO MIGUEL ANGEL	04/11/1953	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (MADRID)	34	11	21	2	2	18					
29	29	MARTIN NAJERA MARIA DEL PILA	18/11/1957	FISCAL DE SALA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (MADRID)	34	11	24	2	0	21					
30	30	MORENO CARRASCO FRANCISCO	30/01/1958	FISCAL JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO	32	3	27	0	6	28					
31	31	MOIX BLAZQUEZ MANUEL	26/04/1958	FISCAL DE SALA DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	31	6	28	0	6	28					
32	32	ALONSO CRISTOBAL JESUS	22/03/1962	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)	28	8	0	0	6	28					
33	33	LUZON CANOVAS ALEJANDRO	03/06/1964	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	27	7	24	0	2	15					
FISCALES															

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1	34	SILVA JARAQUEMADA ANTONIO	19/04/1947	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEGOVIA)	43	4	18	34	10	20			
2	35	RIVERA HERNANDEZ JOSE MARIA	15/02/1949	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEARAGÓN (ZARAGOZA)	43	4	11	34	9	4			
3	36	SEQUEROS SAZATORNIL FERNANDO JAVIE	26/08/1947	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	43	4	25	34	9	4	0	8	23
4	37	ROMERO DE TEJADA Y GOMEZ JOSE MARIA	15/08/1948	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DECATALUÑA (BARCELONA)	43	4	22	34	9	4			
5	38	POYATOS RUIPEREZ PEDRO JOSE	19/12/1947	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	43	4	12	34	9	4			
6	39	BREA SERRA FERNANDO	18/10/1947	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	40	9	2	33	6	25			
7	40	QUINTANA GIMENEZ CARMELO	14/08/1951	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	40	9	3	33	6	25			
8	41	MONTABES CORDOBA ANTONIO	14/01/1948	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEVALENCIA (VALENCIA)	39	9	1	33	6	25			
9	42	LOMBARDO VAZQUEZ JOSE MARIA	02/02/1950	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA ANTIDROGA (MADRID)	39	9	5	33	6	25			
10	43	HERRERO ABAD FELIX	29/12/1947	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	39	9	5	33	6	25			
11	44	ROIG BUSTOS LADISLAO	25/12/1952	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	39	9	14	33	2	15			
12	45	ALVAREZ ANLLO JOSE MARIA	19/01/1949	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	38	9	5	33	2	15			
13	46	CASADO GONZALEZ JOSE MARIA	14/11/1951	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	38	9	5	33	2	15			
14	47	VILLALONGA SERRANO MARIA DOLORES	01/05/1953	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	38	9	1	33	2	15			
15	48	MARTINEZ HENARES ARCADIO	09/08/1949	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	38	10	14	33	2	15			
16	49	LOPEZ COIG JUAN CARLOS	05/09/1952	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	37	9	27	33	2	15			
17	50	GANZENMULLER ROIG CARLOS	16/07/1952	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	37	9	27	33	2	15			
18	51	LLERA Y SUAREZ BARCENA EMILIO DE	03/03/1951	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	37	9	28	33	2	15			
19	52	GARCIA BARREIRO ALVARO JOSE	22/08/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	36	8	21	33	2	15			
20	53	MONTES ALVARO MARIA ANGELES	17/09/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	36	8	14	33	2	15			
21	54	GUTIERREZ DIAZ VICTORIA	22/07/1953	FISCAL DE LA SECCIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA DE LA FISCALÍA DELA C.A. DE ANDALUCÍA	36	8	14	33	2	15			
22	55	RODRIGUEZ SOL MARTIN	19/03/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA (BARCELONA)	36	8	15	33	2	15			
23	56	GOMEZ CORTES JUAN MIGUEL	18/10/1947	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ÁVILA)	35	8	14	33	2	15	8	5	3
24	57	REDONDO HERMIDA ALVARO GABRIEL	01/01/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	36	5	15	32	11	15			
25	58	SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS	23/03/1957	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SALAMANCA)	34	11	25	32	11	15			
26	59	PINOL RODRIGUEZ JOSE RAMON	02/04/1954	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA (CORUÑA, A)	34	11	25	32	11	12			
27	60	MARTINEZ JIMENEZ JOSE	02/01/1958	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (ALBACETE)	34	11	25	32	7	11			
28	61	PERA ELFAU ENRIQUE	19/09/1957	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEARAGÓN (ZARAGOZA)	34	11	24	32	7	11			
29	62	LUQUE GARCIA FRANCISCO TOMA	19/12/1957	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	34	11	27	32	7	11			
30	63	SOLIS GARCIA ISIDORA	04/12/1956	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	34	11	25	32	7	11			
31	64	RIVES SEVA ANTONIO PABLO	28/04/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	34	11	28	32	7	11			
32	65	NAVAJAS RAMOS ANTONIO	03/01/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	34	11	22	32	7	11			
33	66	GARRIDO GARCIA VICENTE MAXIMO	18/11/1955	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS (PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS)	34	11	22	32	7	11			
34	67	SANZ MARQUES LUIS ADOLFO	10/09/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA (VALENCIA)	34	11	24	32	7	11			
35	68	COMPTE MASSACHS TERESA	07/12/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA (BARCELONA)	34	11	25	32	7	11			
36	69	SALINAS DE LA CASTA CONCEPCION	14/06/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	34	11	25	32	7	11			
37	70	CAMPOY REBOLLO PEDRO	01/04/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	34	11	25	32	7	11			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
38	71	CUEVAS MIAJA ISABEL DE LAS	27/02/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	34	11	24	32	7	11			
39	72	JARAMILLO GUERREIRA JOSE CARLOS	31/12/1956	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	34	11	25	32	7	11			
40	73	CABALLERO SANCHEZ-IZQUIERDO JOSE MARIA	30/11/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	34	11	24	32	7	11			
41	74	SUANZES PEREZ FERNANDO	18/09/1953	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA (CORUÑA, A)	34	11	24	32	7	11			
42	75	SAINZ RUIZ JOSE ANTONIO	28/04/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	34	11	25	32	7	11			
43	76	MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ MANUEL	03/01/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	34	11	24	32	7	11			
44	77	VIEIRA MORANTE ANTONIO	01/03/1952	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SALAMANCA)	34	11	22	32	7	11			
45	78	FERNANDEZ AREVALO LUIS	07/07/1958	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	34	11	22	32	7	11			
46	79	FERNANDEZ-AMIGO DE LA TORRE JUAN IGNACIO	21/05/1949	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA (GRANADA)	34	11	25	32	7	11			
47	80	MARTIN-GRANIZO SANTAMARIA MANUEL	23/06/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	34	11	25	32	7	11			
48	81	LOPEZ SANZ-ARANGUEZ LUIS MANUEL	15/04/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	34	11	25	32	7	11			
49	82	COTTA HENRIQUEZ DE LUNA FERNANDO	21/02/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (MADRID)	34	11	24	32	7	11			
50	83	LOPEZ BERNAL MANUEL	02/07/1949	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	34	11	25	32	7	11			
51	84	GARRIDO LORENZO MARIA ANGELES	25/06/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	34	11	25	32	7	11			
52	85	PINTADO MARRERO DEMETRIO	08/04/1957	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS (PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS)	34	11	25	32	7	11			
53	86	SERRANO HERRAINZ JOSE ANGEL	25/08/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (MADRID)	33	5	16	30	8	3			
54	87	MUÑOZ CUESTA FCO. JAVIER	12/09/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	35	1	20	30	6	7			
55	88	SALOM ESCRIVA JUAN SALVADOR	04/12/1947	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA (VALENCIA)	35	8	14	28	9	19	8	5	11
56	89	DE LA ROSA MORENO MARIA AUXILIADORA	14/05/1947	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	35	8	14	28	9	19	8	5	3
57	90	ANDRADE OTERO MARIA DOLORES	08/06/1950	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID (MADRID)	35	8	14	28	9	19	5	4	2
58	91	NAVARRO CAMARASA RAFAEL	18/10/1950	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA (VALENCIA)	35	8	14	28	9	19	5	4	19
59	92	DOLZ LAGO MANUEL JESUS	24/09/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	35	8	14	28	9	19	0	4	1
60	93	LOPEZ EBRI GONZALO	27/11/1951	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA (VALENCIA)	35	8	14	28	9	19	3	9	0
61	94	ALVAREZ GARCIA ROSA MARIA	29/02/1956	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA GIJÓN	35	8	14	28	9	19	0	3	24
62	95	ALMELA VICH CARLOS LUIS	24/03/1953	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	35	8	14	28	9	19	2	5	0
63	96	ABAD ARROYO PALOMA	24/03/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	35	8	14	28	9	19	0	3	23
64	97	CONTRERAS CEREZO PABLO VICENTE	25/11/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (MADRID)	35	8	14	28	9	19	0	3	25
65	98	REY HUIDOBRO LUIS FERNANDO	19/11/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	35	8	14	28	9	19	0	3	23
66	99	GOMEZ MARTIN MARIA ASUNCION	25/03/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	35	8	14	28	9	19	0	4	9
67	100	SANCHO CASAJUS CARLOS	22/09/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN (ZARAGOZA)	35	8	14	28	9	19	0	4	2
68	101	LOSADA SABATER MARIA ASUNCION	25/06/1957	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	35	8	14	28	9	19	0	3	25
69	102	LOPEZ CABALLERO JUAN CARLOS	11/04/1956	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	35	8	14	28	9	19	0	3	23
70	103	RODRIGUEZ GARCIA NATIVIDAD	06/04/1953	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	35	8	14	28	9	19	0	3	23
71	104	RUIZ GARCIA JOSE LUIS	18/07/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	35	8	14	28	9	19	3	8	29
72	105	PAINCEIRA VAZQUEZ MARIA CONSOLACION	08/07/1952	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	35	8	14	28	9	19	3	8	28
73	106	NAVIA-OSORIO GARCIA-BRAGA ILLANA	28/12/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	35	8	14	28	9	19	3	9	4
74	107	SOLER SOLER MERCEDES	05/08/1953	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	35	8	14	28	9	19	3	9	0

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
75	108	ALVAREZ GONZALEZ JESUS	04/08/1948	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LUGO)	35	8	14	28	9	19	3	9	6
76	109	GARCIA VICENTE FERNANDO	21/07/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	35	8	14	28	9	19	3	9	5
77	110	ESPESO RAMOS FLORENCIO	01/03/1950	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	35	8	14	28	9	19	3	7	18
78	111	RODRIGUEZ ABADIA MARIA JOSE	19/03/1950	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID (MADRID)	35	8	14	28	9	19	3	9	7
79	112	RUEDA BELTRAN CARLOS	08/06/1952	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	35	8	14	28	9	19	3	8	24
80	113	DEL ROSAL ALONSO M. JULIA	18/04/1948	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	35	8	14	28	9	19	8	5	7
81	114	LOPEZ GASTON ANA JOSEFA	17/12/1950	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	35	8	14	28	9	19	5	4	10
82	115	TORRALBA BAYO MANUEL F.	07/02/1947	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	35	8	14	28	9	19	5	3	28
83	116	GASSO ARIAS MANUELA	23/01/1952	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	35	8	14	28	9	19	3	9	3
84	117	VEGA GARCIA FELISINDO ANGE	30/12/1945	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID (MADRID)	35	8	14	28	9	19	3	9	4
85	118	VAZQUEZ DE PRADA VALARES CANDIDO E.	09/09/1952	FISCAL DE LA SECCIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID DE LA FISCALÍA DE LA C.A. DE CASTILLA Y LEÓN	35	8	14	28	9	19	3	9	4
86	119	GUILLEN OQUENDO JUAN PEDRO	06/10/1947	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALBACETE)	35	8	14	28	9	19	3	9	5
87	120	ALCAZAR VIEYRA-ABREU JOSE MARIA	25/09/1948	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	33	6	3	28	9	19	6	5	17
88	121	LLOR BLEDA JOSE	03/07/1951	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	35	8	14	28	8	12	3	7	2
89	122	JOVER CAPILLA RAFAEL	19/04/1953	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA (GRANADA)	35	8	14	28	8	1	3	6	22
90	123	VENTURA ALARMA MARIA VICTORIA	04/12/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	35	8	14	28	3	27	2	6	0
91	124	GRANELL PONS FRANCISCO	29/06/1949	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	35	8	14	28	3	27	2	4	7
92	125	VALENZUELA CAMEANS CARLOS	01/06/1960	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (OURENSE)	35	8	14	28	3	27	2	5	29
93	126	CAVERO MORENO PILAR	18/10/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	35	8	14	28	3	27	2	6	0
94	127	BARRANTES SANDOVAL M. JESUS	05/11/1955	INSPECTOR FISCAL DE LA INSPECCIÓN FISCAL	35	8	14	28	3	27	2	5	8
95	128	RIVA LLERANDI JOAQUIN DE LA	08/10/1954	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	35	8	14	28	3	27	2	5	8
96	129	RODRIGUEZ COUSO CANDIDO	09/01/1952	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	35	8	14	28	3	27	2	4	6
97	130	PALOMAR LINARES CARMEN	21/07/1947	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	35	8	14	28	3	27	2	4	3
98	131	PENIN GONZALEZ ADORACION	05/07/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	35	8	14	28	3	27	0	4	3
99	132	CLAVER DE PABLO MA. CARMEN	27/01/1953	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	35	8	14	28	3	27	0	4	8
100	133	MARISCAL DE GANTE CASTILLO CARLOS	22/02/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA (CORUÑA, A)	35	8	14	28	3	27	0	3	26
101	134	CANTON RAYADO ANA YOLANDA	07/09/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	35	8	14	28	3	27	0	4	8
102	135	COARASA LIRON DE ROBLES MARIA TERESA	15/03/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA (LOGROÑO)	35	8	14	28	3	27	0	4	2
103	136	GISBERT JORDA M. TERESA	05/11/1957	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	35	8	14	28	3	27	0	4	1
104	137	GARGALLO GINER JESUS	02/12/1953	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TERUEL)	35	8	14	28	3	27	0	3	26
105	138	LANUZA GARCIA ANA MARIA	06/09/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	35	8	14	28	3	27	0	4	2
106	139	VIDAL DELGADO MARIA TERESA	03/02/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	35	8	14	28	3	27	0	4	4
107	140	BRUZON LIMIA JULIO	08/07/1953	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	35	8	14	28	3	27	0	4	1
108	141	PARDINAS SANZ JULIAN FRANCISCO	15/11/1953	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (OURENSE)	35	8	14	28	3	27	0	3	25
109	142	FIERRO GOMEZ AVELINO	30/06/1956	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LEÓN)	35	8	14	28	3	27	0	3	17
110	143	MONTERO JUANES FCO. JAVIER	14/01/1958	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA (CÁCERES)	35	8	14	28	3	27	0	4	2
111	144	HEDO IDOPE JOSE LUIS	04/06/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	35	8	14	28	3	27	0	3	26

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
112	145	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	01/01/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA GIJÓN	35	8	14	28	3	27	0	4	10
113	146	CABALLERO GOMEZ JOSE MARIA	02/03/1953	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	35	8	14	28	3	27	0	3	24
114	147	PASTOR BORGONÓN ROSA MARIA	22/01/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	35	8	14	28	3	27	0	3	25
115	148	RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA CARLOS	04/07/1952	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEMADRID (MADRID)	35	8	14	28	3	27	0	4	8
116	149	BEGUER MIQUEL ROSARIO	22/08/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA (BARCELONA)	35	8	14	28	3	27	0	4	2
117	150	IGLESIAS MORENO M. PALOMA	29/03/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	35	8	14	28	3	27	0	4	3
118	151	ALEMANY MARTINEZ CARMEN	21/12/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	35	8	14	28	3	27	0	4	2
119	152	WILHELMI LIZUR ALFREDO	09/09/1951	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	35	8	14	28	3	27	0	3	27
120	153	NOVO COLLDEFORS MARIA CARMEN	26/08/1957	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	35	8	14	28	3	27	0	4	9
121	154	MAGALDI PATERNOSTRO ANA M	29/12/1952	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	35	8	14	28	3	27	0	4	1
122	155	PADILLA MENDIVIL M. ISABEL	19/06/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	35	8	14	28	3	27	0	3	27
123	156	GALINDO AYUDA JOSE LUIS	17/02/1954	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUESCA)	35	8	14	28	3	27	0	3	26
124	157	POLO CATALAN BEGOÑA	15/05/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	33	8	19	28	3	27			
125	158	GULLON PEREZ M. ANGELES	21/11/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	33	8	23	28	3	27			
126	159	GONZALEZ CERRON RICARDO FRANCISCO	15/05/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	33	8	16	28	3	27			
127	160	FERNANDEZ GARCIA EMILIO MANUEL	11/11/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DECASTILLA-LA MANCHA (ALBACETE)	33	8	23	28	3	27			
128	161	RODRIGUEZ REY M. LOURDES	23/06/1958	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DECASTILLA Y LEÓN (BURGOS)	33	8	16	28	3	27			
129	162	CARRANZA CANTERA JUAN CARLOS	10/11/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	33	8	16	28	3	27			
130	163	ALMENDRAL PARRA MARIA CARMEN	29/08/1955	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	33	8	21	28	3	27			
131	164	BLANCO PEÑALVER AURELIO	06/02/1954	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEEXTREMADURA (CÁCERES)	33	8	21	28	3	27			
132	165	RUESTA BOTELLA MARIA LUISA	18/01/1957	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	33	8	16	28	3	27			
133	166	TORRES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	26/10/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	33	8	15	28	3	27			
134	167	MARCOS POSSE MARIA DOLORES	01/12/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	33	8	15	28	3	27			
135	168	PUJOL RIBERA MARIA ASUNCION	01/09/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA (BARCELONA)	33	8	22	28	3	27			
136	169	SANCHEZ MELGAR BEGOÑA	29/09/1958	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZAMORA)	33	8	8	28	3	27			
137	170	SUAREZ PANTIN M. BELEN	07/09/1958	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	33	8	22	28	3	27			
138	171	REY OZORES JAVIER LUIS	01/01/1960	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	33	8	16	28	3	27			
139	172	CAMPOS SANCHEZ MANUEL	02/01/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	33	8	22	28	3	27			
140	173	VIADA BARDAJI SALVADOR	19/09/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	33	8	22	28	3	27			
141	174	CABRERA PADRON CONCEPCION	07/03/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	33	8	22	28	3	27			
142	175	CALVO GARCIA MARIA TERESA	18/01/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	33	8	22	28	3	27			
143	176	MONTESINOS DE LAGO MARIA JOSE	11/07/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	33	8	22	28	3	27			
144	177	SANCHEZ LUCERGA JOSE FRANCISCO	07/05/1958	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEMURCIA (MURCIA)	33	8	15	28	3	27			
145	178	COSMELLI MAROTO ROSA	22/04/1946	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	33	8	16	28	3	27			
146	179	BRAN SANCHEZ MARIA NIEVES	17/09/1952	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA (BARCELONA)	33	8	22	28	3	27			
147	180	GALVEZ DIEZ MARIA TERESA	13/06/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	33	8	15	28	3	27			
148	181	SOTO BRUNA FCO. JOAQUIN	10/02/1959	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	33	8	22	28	3	27			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
149	182	PRIETO RIVERA FERNANDO	21/10/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	33	8	15	28	3	27			
150	183	RUIZ PESINI GUADALUPE	08/10/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA (LOGROÑO)	33	8	15	28	3	27			
151	184	MUÑOZ CUESTA JUAN ANTONIO	24/06/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	33	8	15	28	3	27			
152	185	SANCHEZ Y SANCHEZ-VILLARES JOSE ANTONIO	05/10/1956	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/IRUÑA)	33	8	15	28	3	27			
153	186	FERNANDEZ RODRIGUEZ EMILIO	17/05/1954	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEÓN (BURGOS)	33	8	16	28	3	27			
154	187	MELIS BOSCH AMADEU	15/03/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	33	8	22	28	3	27			
155	188	PEREZ DE GREGORIO JOSE JOAQUIN	12/10/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA (BARCELONA)	33	8	22	28	3	27			
156	189	PANTOJA GARCIA FELIX	23/12/1950	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	33	8	15	28	3	27			
157	190	BUENO CAVANILLAS VALENTIN	22/01/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	33	8	15	28	3	27			
158	191	TEJEDOR GIL M. PILAR AUXIL	16/10/1952	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SALAMANCA)	32	4	23	28	3	27	0	4	9
159	192	TEJIDO ROMAN JOSE IGNACIO	29/01/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	32	3	27	28	3	27			
160	193	ESCUDERO RUBIO JOSE	06/07/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	32	3	22	28	3	27			
161	194	GONZALEZ-HERRERO GONZALEZ VICTOR JOAQUIN	06/04/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	32	3	22	28	3	27			
162	195	SANCHEZ GARRIDO JOSE ANTONIO	16/09/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (MADRID)	32	3	26	28	3	27			
163	196	CARCELLER FABREGAT FCO. JAVIER	11/07/1959	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	32	3	22	28	3	27			
164	197	ESCOBAR JIMENEZ RAFAEL	14/09/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	32	3	22	28	3	27			
165	198	GUAJARDO PEREZ MARIA ISABEL	01/08/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (MADRID)	32	3	26	28	3	27			
166	199	ARNAIZ DE GUEZALA NURIA	09/06/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID (MADRID)	32	3	26	28	3	27			
167	200	VARELA GARCIA CARLOS	22/04/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA (CORUÑA, A)	32	3	21	28	3	27			
168	201	BARTHE GARCIA DE CASTRO MERCEDES	10/04/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	32	3	26	28	3	27			
169	202	FERRER BARO LUCIA	16/10/1958	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	32	3	21	28	3	27			
170	203	CUARTERO ITURRALDE MARIA JESUS	05/11/1959	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAÍS VASCO (BILBAO)	32	3	26	28	3	27			
171	204	HERMOSA MARTINEZ ANA MARIA	26/07/1957	FISCAL DE LA SECCIÓN TERRITORIAL DE SEVILLA DE LA FISCALÍA DE LA C.A. DE ANDALUCÍA	32	3	27	28	3	27			
172	205	ZAPATERO GOMEZ JUSTINO	14/04/1958	TENIENTE FISCAL INSPECTOR DE LA INSPECCIÓN FISCAL	32	4	2	28	3	27			
173	206	BUERO PICHARDO FEDERICO	01/08/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	32	3	27	28	3	27			
174	207	GOMA GARCIA MARGARITA	30/01/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	32	3	21	28	3	27			
175	208	ARBONIES LERANOS ANA CARMEN	03/08/1960	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/IRUÑA)	32	3	26	28	3	27			
176	209	FERNANDEZ GARCIA ESTHER	19/08/1959	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	32	3	22	28	3	27			
177	210	TARRAGO RUIZ ANA	10/11/1959	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA (GRANADA)	32	3	27	28	3	27			
178	211	PEREZ MARTINEZ ROSA MARIA	28/11/1960	FISCAL DE LA SALA DE SEGURIDAD VIAL (MADRID)	32	3	26	28	3	27			
179	212	VICEN BANZO ANTONIO	28/01/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	32	3	26	28	3	27			
180	213	RASILLO LOPEZ ESMERALDA	24/07/1960	FISCAL DE LA UNIDAD DE APOYO	32	3	26	28	3	27			
181	214	CUESTA MERINO JOSE LUIS	10/02/1955	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	32	3	26	28	3	27			
182	215	CABEDO VILLAMON FERNANDO	29/12/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (MADRID)	32	3	26	28	3	27			
183	216	MARTIN ROBREDO LUIS	08/07/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	32	3	27	28	3	27			
184	217	MONREAL BUENO JOSE IGNACIO	19/07/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	32	3	22	28	3	27			
185	218	GARCIA CANTERO FRANCISCO	08/08/1957	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	32	3	22	28	3	27			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
186	219	ADAN DEL RIO MARIA CARMEN	12/07/1960	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DELPAÍS VASCO (BILBAO)	32	3	26	28	3	27			
187	220	CAÑADAS LORENZO Mº JESUS	17/08/1960	FISCAL DE LA SALA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (MADRID)	32	3	21	28	3	27			
188	221	MARTINEZ VILLAVERDE M. ENGRACIA	28/09/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LEÓN)	32	3	21	28	3	27			
189	222	SANTALO RIOS AUGUSTO	06/01/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	32	3	21	28	3	27			
190	223	DE LA HOZ GARCIA MARIA LUISA	10/03/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (MADRID)	32	3	27	28	3	27			
191	224	JIMENEZ BADOS MARIA DEL PILAR	05/10/1959	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DECANTABRIA (SANTANDER)	32	3	27	28	3	27			
192	225	RODRIGUEZ MATEOS ISABEL	18/02/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	32	3	26	28	3	27			
193	226	MARTINEZ MATE SANZ JOSE MARIA	14/09/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	32	3	21	28	3	27			
194	227	SANZ GARCIA MARIA CARMEN	21/10/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	32	3	22	28	3	27			
195	228	MELERO TEJERINA M. PILAR	27/09/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	32	3	27	28	3	27			
196	229	RODRIGUEZ DEL VAL JUAN PEDRO	09/06/1958	FISCAL DE LA SALA DE MENORES (MADRID)	32	3	27	28	3	27			
197	230	ALONSO GONZALEZ VIRGINIA	10/12/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	32	3	22	28	3	27			
198	231	PINOL LLOP MARIA CINTA	03/08/1960	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LLEIDA)	32	3	22	28	3	27			
199	232	GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO	27/04/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	32	3	22	28	3	27			
200	233	CABALLERO KLINK JESUS	23/12/1959	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEMADRID (MADRID)	32	3	26	28	3	27			
201	234	GIL GARCIA CARLOS	12/07/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	32	3	21	28	3	27			
202	235	LOPEZ LOPEZ ALBERTO MANUEL	05/06/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA (GRANADA)	32	3	25	28	3	27			
203	236	ALCAZAR SANZ ANGEL	26/04/1946	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	30	7	27	28	3	27	3	4	5
204	237	BRIONES VIVES FELIPE	01/11/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	32	3	21	28	3	11			
205	238	CHIMENO GASCON LUIS JESUS	04/05/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	32	3	22	28	2	27			
206	239	BONE PINA JUAN FRANCISCO	24/09/1959	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LLEIDA)	32	3	22	28	2	14			
207	240	ABELLO ROMA MARTA	15/08/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	32	3	26	28	2	14			
208	241	SORIANO CAMPOS REMEI	17/09/1960	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (TERRASSA)	32	3	26	28	1	11			
209	242	BARCELO OLIVER BARTOLOME	29/11/1959	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	32	4	4	28	1	4			
210	243	SECO BERCIANO MARIA ALICIA	23/12/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	32	3	26	28	0	28			
211	244	NUNEZ TOMAS MARIA JOSE	19/03/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	32	3	26	28	0	5			
212	245	PIÑEIRO VAZQUEZ MARIO	17/12/1958	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)	32	3	21	28	0	5			
213	246	RUBIRA NIETO PEDRO	19/06/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)	32	3	22	27	11	18			
214	247	MOSQUERA FLORES MARIA ASCENSION	23/04/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	32	3	26	27	11	13			
215	248	MARTIN GOMEZ MIGUEL	24/08/1960	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOS)	32	3	26	27	11	12			
216	249	FERNANDEZ BUSTA BERTA	24/04/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA GJÓN	32	3	26	27	11	2			
217	250	PEREZ BLASCO MARGARITA	29/01/1958	INSPECTOR FISCAL DE LA INSPECCIÓN FISCAL	32	3	21	27	10	24			
218	251	RUIZ BERICIARTUA AVELINO	27/10/1956	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	32	3	26	27	10	17			
219	252	JOU MIRABENT XAVIER	14/02/1958	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	32	3	21	27	10	7			
220	253	SANCHEZ GOMEZ OLGA ENMA	23/06/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	32	3	21	27	9	13			
221	254	SOLER MORENO MARIA TERESA	23/05/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	32	3	27	27	8	13			
222	255	VIEIRA MORANTE ERNESTO JOSE	20/03/1958	FISCAL DE LA SECCIÓN TERRITORIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE DELA FISCALÍA DE LA C.A. DE CANARIAS	32	3	26	27	7	24			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
223	256	ANET RODRIGUEZ JUAN BOSCO	25/10/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	32	3	22	27	7	20			
224	257	BANERES SANTOS FRANCISCO	01/04/1959	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA (BARCELONA)	32	3	26	27	7	10			
225	258	TALON NAVARRO CONCEPCION	25/10/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	32	3	21	27	5	18			
226	259	VILANOVA PELLUCH MARIA DOLORES	26/05/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	32	3	21	27	4	24			
227	260	TIRADO ESTRADA JESUS JOSE	16/11/1960	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (MADRID)	32	3	26	27	3	25			
228	261	SEOANE RODRIGUEZ OFELIA	28/09/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	32	3	21	27	3	6			
229	262	SUAREZ-VARELA HIGUERAS JOSE MARIA	11/02/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	32	3	26	27	2	23			
230	263	CERRO ESTEBAN J. ANTONIO DEL	10/09/1953	FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (MADRID)	32	3	26	27	0	25			
231	264	LOPEZ OJEDA ANTONIO	05/03/1959	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS)	32	3	26	27	0	11			
232	265	MOLTO DELGADO FCO. JAVIER	27/04/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTIDROGA (MADRID)	31	7	8	27	0	11			
233	266	ZARAGOZA AGUADO MARIA NIEVES	07/06/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	31	6	28	27	0	11			
234	267	CALPARSORO DAMIAN JUAN RAMON	07/12/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAÍS VASCO (BILBAO)	31	6	26	27	0	11			
235	268	PRADOS FRUTOS EDUARDO J.	27/09/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	31	7	0	27	0	11			
236	269	MONFORT MARCH CARMEN MARIA	07/10/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)	31	6	28	27	0	11			
237	270	ALARCON ESCRIBANO JOAQUIN	06/08/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	31	7	2	27	0	11			
238	271	CALVO RUBIO BURGOS JUAN BAUTISTA	29/05/1960	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	31	7	3	27	0	11			
239	272	MEJIA GOMEZ ANA MARIA	03/09/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTIDROGA (MADRID)	31	6	28	27	0	11			
240	273	TIRADO GARABATOS M.CARMEN	14/04/1960	INSPECTOR FISCAL DE LA INSPECCIÓN FISCAL	31	7	3	27	0	11			
241	274	ANDREU ARNALTE CARMEN	04/12/1953	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	31	7	0	27	0	11			
242	275	MAILLO SUAREZ AMPARO	29/08/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	31	6	28	27	0	11			
243	276	MARTINEZ FRIGOLA MARIA FARNES	03/02/1959	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	31	6	26	27	0	11			
244	277	CARRASCON GIL MARIA MERCEDES	30/04/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	31	6	28	27	0	11			
245	278	STERN BRIONES ENRIQUE PEDRO	22/10/1958	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA (LOGROÑO)	31	6	26	27	0	11			
246	279	MARTINEZ PACHECO MARIA	19/10/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	31	7	3	27	0	11			
247	280	AICUA ELIZALDE MARIA LOURDES	05/09/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/IRUÑA)	31	6	28	27	0	11			
248	281	SOBRINO GARRIDO PURIFICACION	30/07/1960	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	31	7	0	27	0	11			
249	282	GAZQUEZ MARTIN JESUS MANUEL	17/07/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	31	6	27	27	0	11			
250	283	ANTUNA ALVAREZ AMADA	09/01/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA GIJÓN	31	7	1	27	0	11			
251	284	ALONSO BALLESTEROS GLORIA	30/11/1960	FISCAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	31	7	2	27	0	11			
252	285	ANTELO BERNARDEZ EVARISTO	13/10/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZAMORA)	31	7	2	27	0	11			
253	286	TORRES AILHAUD BERNARDETTE	21/02/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	31	7	2	27	0	11			
254	287	ZAZURCA GONZALEZ FELIPE	23/11/1958	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	31	7	2	27	0	11			
255	288	VARGAS GALLEGU ANA ISABEL	03/04/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	31	7	2	27	0	11			
256	289	CARRILLO ALVAREZ ARTURO	02/02/1957	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALENCIA)	31	7	5	27	0	11			
257	290	BLANCO ALHAMBRA M. CONCEPCION	24/05/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	31	7	1	27	0	11			
258	291	ESQUIVIAS JARAMILLO JOSE IGNACIO	25/06/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	31	7	2	27	0	11			
259	292	PEREZ VEIGA MANUEL	19/04/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTIDROGA (MADRID)	31	6	27	27	0	11			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
260	293	VELASCO MERINO MARIA ANGELES	01/03/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEÓN (BURGOS)	31	6	27	27	0	11			
261	294	REBOLLO FERNANDEZ CARMEN	17/03/1948	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SANSEBASTIÁN)	31	6	26	27	0	11			
262	295	LOPEZ ARIAS EUGENIA	14/02/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	31	6	27	27	0	11			
263	296	CHECA FERNANDEZ FCO. JAVIER	01/09/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	31	7	2	27	0	11			
264	297	TORRES LOPEZ JOSE MARIA	31/12/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	31	6	27	27	0	11			
265	298	CERDA BESTARD MARIA DEL PILA	06/12/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID (MADRID)	31	6	27	27	0	11			
266	299	MARTINEZ SANCHEZ CANDELARIA	19/04/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	31	7	2	27	0	11			
267	300	GUIRALT MARTINEZ ROSA MARIA	11/03/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	31	7	2	27	0	11			
268	301	GARCIA LACUNZA FCO.JAVIER	15/05/1952	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	31	7	2	27	0	11			
269	302	CABANAS ARANDA MARIA OLIVA	25/08/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	31	7	5	27	0	11			
270	303	BRIOSO DIAZ JORGE	17/12/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	31	6	28	27	0	11			
271	304	GONZALEZ BLANCO ANGEL	16/03/1959	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DECANTABRIA (SANTANDER)	31	7	4	27	0	11			
272	305	ZAPATERO REMON ANA MARIA	04/09/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	31	7	2	27	0	11			
273	306	GARCIA CALDERON JESUS M.	10/08/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA (GRANADA)	31	7	1	27	0	11			
274	307	MANZANO GONZALEZ AGUSTIN	10/05/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOZ)	31	7	5	27	0	11			
275	308	OLAVARRIA IGLESIA M. TERESA	03/01/1958	INSPECTOR FISCAL DE LA INSPECCIÓN FISCAL	31	7	5	27	0	11			
276	309	CASADEVALL BARNEDA JOSE MARIA	17/07/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	31	7	2	27	0	11			
277	310	BARRILERO YARNOZ ANA	20/08/1950	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	31	7	8	27	0	11			
278	311	OLARTE MADERO EUSEBIO	12/12/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	31	7	2	27	0	11			
279	312	MARTINEZ-JUNQUERA PASTOR JUAN JOSE	08/03/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	31	7	4	27	0	11			
280	313	MARTIN MARRERO MANUEL A.	22/02/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	31	6	28	27	0	11			
281	314	POLO RODRIGUEZ JOSE JAVIER	03/12/1960	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	31	7	1	27	0	11			
282	315	JIMENEZ SORIA JESUS	10/09/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	31	7	1	27	0	11			
283	316	JIMENEZ ALARCON MANUEL	29/07/1960	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	31	7	5	27	0	11			
284	317	MESALLES GALINDO PILAR	06/07/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LLEIDA)	29	9	7	27	0	11			
285	318	SECADA GUTIERREZ ANA ISABEL	29/11/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	29	8	29	27	0	11			
286	319	CAMPOS BUCE MARIA JOSE	22/11/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	29	8	27	27	0	11			
287	320	PENA OLIETE MERCEDES DE LA	23/02/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	29	9	8	27	0	11			
288	321	BEDATE GUTIERREZ CARLOS	16/05/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	29	9	7	27	0	11			
289	322	SOTERAS ESCARTIN RAFAEL	29/10/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	29	9	7	27	0	11			
290	323	MATEOS RODRIGUEZ ARIAS ANTONIO	31/05/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOZ)	29	9	4	27	0	11			
291	324	TORO ARIZA CRISTINA	17/02/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTIDROGA (MADRID)	29	8	28	27	0	11			
292	325	VALLE PARDO ANA MARIA	16/12/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	29	9	7	27	0	11			
293	326	GARCIA BARREIRO ADELA	11/04/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	29	9	8	27	0	11			
294	327	ALEGRET TEJEIRO VICTOR	05/06/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	29	9	8	27	0	11			
295	328	OSUNA CEREZO MARIA JOSE	31/12/1960	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	29	9	7	27	0	11			
296	329	AYUSO CASTILLO ANGELES	12/06/1957	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	29	9	0	27	0	11			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
297	330	ALBA NOVILLO CARLOS	08/08/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	29	8	27	27	0	11			
298	331	GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS	16/12/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	29	9	8	27	0	11			
299	332	BENTABOL MANZANARES FERNANDO	02/09/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	29	9	2	27	0	11			
300	333	SANCHEZ JAUREGUI Y ALCAIDE JOSE LUIS	09/12/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	29	9	10	27	0	11			
301	334	MORETA HIERROS JESUS MARIA	25/10/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	29	9	8	27	0	11			
302	335	ANTUNEZ GONZALEZ LUIS ERNESTO	31/08/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LEÓN)	29	8	29	27	0	11			
303	336	CAVERO FORRADELLAS GERARDO	08/05/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	29	9	8	27	0	11			
304	337	LOPEZ GIMENO MARIA ELENA	18/04/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	29	9	8	27	0	11			
305	338	ALANA PEREZ DE MENDIGUREN JESUS ANGEL	15/06/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	29	9	4	27	0	11			
306	339	CABRE RICO JORGE	08/10/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	29	9	4	27	0	11			
307	340	LORENTE VALERO M. TERESA	13/07/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	29	9	4	27	0	11			
308	341	ESPARZA ARANDA JOSE MARIA	13/09/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	29	9	8	27	0	11			
309	342	ZURIARRAIN FERNANDEZ MARIA IDOYA	17/08/1960	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	29	9	3	27	0	11			
310	343	GONZALEZ AVELLA ESPERANZA	13/06/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	29	8	27	27	0	11			
311	344	RUEDA GARCIA LUIS	17/09/1959	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (MADRID)	29	8	27	27	0	11			
312	345	RODRIGUEZ VELASCO MARIA GRACIA	19/04/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	29	8	27	27	0	11			
313	346	BALLESTER RICART MARIA CARMEN	22/06/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTIDROGA (MADRID)	29	9	4	27	0	11			
314	347	RUIZ CRESPO SIXTO	03/06/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	29	9	7	27	0	2			
315	348	PIEDRABUENA LEON EDUARDO	05/02/1950	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LLEIDA)	29	9	7	26	11	21			
316	349	GARCIA-ZUBALEZ GARCIA PILAR	07/01/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	29	9	8	26	10	0			
317	350	SEGARRA CRESPO MARIA JOSE	22/02/1963	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	29	9	8	26	9	15			
318	351	RABASA DOLADO JORGE IGNACIO	27/11/1960	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	29	9	4	26	9	8			
319	352	MARTIN MARTIN DE LA ESCALERA ANA MARIA	17/09/1961	FISCAL DE LA SALA DE CRIMINALIDAD INFORMATICA (MADRID)	29	9	0	26	9	5			
320	353	VIOLAN GONZALEZ INMACULADA	15/02/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	29	9	8	26	8	7			
321	354	SANDE GIL VIRGINIA DE	02/01/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	29	9	4	26	8	6			
322	355	GIL GARCIA ANTONIO	23/04/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	29	9	6	26	8	0			
323	356	GONZALEZ MOTA VICENTE J.	02/06/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)	29	9	8	26	6	28			
324	357	NUNO DE LA ROSA AMORES JOSE ANTONIO	14/12/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	29	9	6	26	5	12			
325	358	SERRANO SOLIS MIGUEL	08/08/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	29	9	8	26	4	1			
326	359	ORTOLA FAYOS SALVADOR	26/08/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	29	9	8	26	3	12			
327	360	TORRES PORRAS MARIA FLOR DE	20/10/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	29	9	2	26	3	0			
328	361	VALLE SANTANA ANGELES	18/07/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	29	9	2	26	2	28			
329	362	FERNANDEZ OLALLA PATRICIA	17/12/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	29	9	2	26	1	9			
330	363	RUIZ RUIZ ROSA MARIA	27/07/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	29	9	8	26	0	29			
331	364	GARCIA ARIAS JUAN IGNACIO	16/07/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	29	9	4	26	0	15			
332	365	FRUTOS GOMEZ MARIA CARMEN	23/06/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	29	9	0	26	0	7			
333	366	LEON PALOMARES M. ANGELES	27/11/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	29	9	0	25	11	1			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
334	367	RAMOS SANCHEZ ALFREDO	03/09/1953	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (MADRID)	29	9	7	25	10	6			
335	368	MARTIN NAJERA SOLEDAD	25/11/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	29	8	28	25	8	3			
336	369	ZARAGOZA CAMPOS MARIA SOCORRO	27/06/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	29	9	7	25	5	20			
337	370	MUÑOZ OYA JOSE ROGELIO	16/09/1959	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA (GRANADA)	29	9	0	25	5	10			
338	371	LOPEZ-NIETO DE CASTRO ANTONIO	05/08/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	29	9	8	25	4	29			
339	372	SALAZAR LARRACOECHEA ADRIAN	17/10/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	29	9	4	25	4	11			
340	373	BERNAL DEL CASTILLO GABRIEL	03/09/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	29	9	3	25	3	15			
341	374	ROJO LOPEZ FCO. JAVIER	31/10/1956	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ÁVILA)	29	8	29	25	3	13			
342	375	LOPEZ-HERRERO Y PEREZ MARIA DEL MAR	28/02/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	29	9	7	25	3	13			
343	376	HIDALGO GARCIA JOSE	09/09/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	29	9	7	25	2	18			
344	377	ALCANTARA BARBANY FELISA	21/11/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	29	9	7	25	1	15			
345	378	JIMENEZ LAFUENTE PEDRO JAVIER	14/03/1960	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	29	9	0	25	1	15			
346	379	COMYN RODRIGUEZ FRANCISCO JAVI	12/03/1957	INSPECTOR FISCAL DE LA INSPECCIÓN FISCAL	29	9	0	25	1	15			
347	380	BULLON MARTIN MARIA ENCARNACION	29/04/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	28	8	0	25	1	15			
348	381	RANCAÑO MARTIN EMILIA ANGELES	09/06/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	28	7	27	25	1	15			
349	382	CUSSAC GRAU JAIME	25/07/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	28	8	0	25	1	15			
350	383	SABATER MORATO MARIA DOLORES	18/10/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	28	8	0	25	1	15			
351	384	RON FERNANDEZ M. JOSE	07/09/1961	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALENCIA)	28	7	25	25	1	15			
352	385	RODRIGUEZ OLMEDO MARTA	01/01/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	28	7	24	25	1	15			
353	386	TORRES HUG ANA MARIA	19/09/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	28	8	0	25	1	15			
354	387	MARTIN GALLARDO GUSTAVO	20/10/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	28	7	27	25	1	15			
355	388	VAZQUEZ PRESENCIO PILAR	10/10/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	28	7	27	25	1	15			
356	389	RODRIGUEZ LEON LUIS CARLOS	17/05/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	28	8	7	25	1	15			
357	390	MORALES FERNANDEZ NATIVIDAD	09/02/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	28	7	27	25	1	15			
358	391	DEXEUS FERRER MARIA CRISTINA	11/12/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	28	8	0	25	1	15			
359	392	MONTIJANO SERRANO FRANCISCO	28/08/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	28	7	27	25	1	15			
360	393	ALTOLAGUIRRE SAGASTIBERRI JOSE IGNACIO	07/12/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	28	7	25	25	1	15			
361	394	FLORIT DE CARRANZA FERNANDO	06/12/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	28	7	27	25	1	15			
362	395	VALPUESTA CONTRERAS DANIEL JOSE	13/10/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	28	8	7	25	1	15			
363	396	ORTIZ PINTOR MIGUEL ANGEL L	24/06/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (ALBACETE)	28	7	25	25	1	15			
364	397	CAMPOS DAVO MANUEL LEONARD	26/11/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	28	7	25	25	1	15			
365	398	SILES SUAREZ RAMON	07/12/1959	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	28	7	27	25	1	15			
366	399	CALVO GARCIA MARIA ASUNCION	14/11/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	28	8	0	25	1	15			
367	400	ROMERAL MORALED A ANTONIO	26/03/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	28	7	27	25	1	15			
368	401	SANTA-OLALLA FERNANDEZ FIGARES MARIA	19/02/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	28	7	27	25	1	15			
369	402	GUTIERREZ MATUTE M. DEL ROSARIO	02/10/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA (LOGROÑO)	28	8	0	25	1	15			
370	403	ALVAREZ BUYYLA GARCIA TOMAS	24/12/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	28	7	24	25	1	15			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
371	404	BALBAS GUTIERREZ JOSE IGNACIO	08/03/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	28	7	27	25	1	15			
372	405	ALONSO RODENAS ANGEL CARLOS	30/10/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	28	8	7	25	1	15			
373	406	LLORENTE PRESA LUIS MIGUEL	08/05/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA GIJÓN	28	7	26	25	1	15			
374	407	GOMEZ PASCUAL SANTIAGO	16/12/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	28	8	7	25	1	15			
375	408	MORANDO MARTINEZ MARIA LUISA	29/11/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MAJADAHONDA)	28	8	0	25	1	15			
376	409	CARRASCO FERRAN JESUS	04/03/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	28	8	0	25	1	15			
377	410	FAUS PROSPER FRANCISCO	31/12/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	28	8	0	25	1	15			
378	411	MIRANDA ESTRAMPES MANUEL	21/10/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (MADRID)	28	7	27	25	1	15			
379	412	GIL RUBIO JAIME	28/11/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	28	7	27	25	1	15			
380	413	MORO MALMIERCA M. AUXILIADORA	18/06/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SALAMANCA)	28	7	27	25	1	15			
381	414	ALADRO FERNANDEZ JUAN CARLOS	08/10/1958	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	28	7	26	25	1	15			
382	415	BERMEJO ROMERO DE TERREROS JUAN ANDRES	23/09/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	28	7	27	25	1	15			
383	416	BAÑOS ALONSO JOAQUIN	26/06/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	28	7	27	25	1	15			
384	417	RUIZ GOMEZ VALENTIN	03/07/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	28	7	27	25	1	15			
385	418	ALONSO CARBAJO JOSE MIGUEL	04/03/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	28	8	7	25	1	15			
386	419	GALAN CACERES JUAN CALIXTO	28/05/1961	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOZ)	28	7	27	25	1	15			
387	420	PRENDES MENENDEZ M. EUGENIA	23/08/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	28	8	7	25	1	15			
388	421	BARRACHINA BELLO MARIA VICTORIA	28/12/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	28	8	3	25	1	15			
389	422	PRENDES MENENDEZ M.ISABEL RAM.	23/01/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA GIJÓN	28	7	26	25	1	15			
390	423	PARAMO Y DE SANTIAGO CASTO	20/04/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	28	7	27	25	1	15			
391	424	FIDALGO MARTIN CONSUELO	28/08/1962	INSPECTOR FISCAL DE LA INSPECCIÓN FISCAL	28	8	6	25	1	15			
392	425	MARTIN MAYO ELENA	02/09/1960	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEGOVIA)	28	8	6	25	1	15			
393	426	MENA CERDA SANTIAGO	05/11/1960	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	28	8	0	25	1	15			
394	427	SANTOS URBANEJA FERNANDO	10/09/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	28	8	6	25	1	15			
395	428	SANCHEZ MELGAREJO FRANCISCO RAMO	31/08/1963	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (ALBACETE)	28	7	27	25	1	15			
396	429	SERRA ABARCA MARIA ALICIA	20/05/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	28	8	6	25	1	15			
397	430	GANDOLFO BARJA SONIA INES	13/04/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOZ)	28	7	27	25	1	15			
398	431	MUNOZ MARIN ANGEL JAVIER	07/07/1962	FISCAL DE LA SALA DE SINIESTRALIDAD LABORAL (MADRID)	28	7	27	25	1	15			
399	432	SANTIAGO RUIZ ANGEL EMILIO	24/12/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	28	7	27	25	1	15			
400	433	MENDIOLA GOMEZ MARIA CARMEN	12/03/1962	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	28	8	6	25	1	15			
401	434	LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA FERNANDO	26/09/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	28	8	0	25	1	15			
402	435	GALLO GARCIA DEL VALLE INES ALICIA	04/05/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	28	8	0	25	1	15			
403	436	LARRAYOZ OSES MARIA PILAR	26/12/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/IRUÑA)	28	7	27	25	1	15			
404	437	ESTEBAN RINCON EDUARDO	18/03/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (MADRID)	28	7	27	25	1	15			
405	438	LOPEZ SANCHEZ SUSANA	18/01/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	28	8	0	25	1	15			
406	439	ALVAREZ CIURANA CONSUELO	21/06/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	28	8	0	25	1	15			
407	440	BUJANDA BUJANDA MERCEDES	14/11/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	28	7	26	25	1	15			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
408	441	LOPEZ SALCEDO M.DOLORES	02/12/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTIDROGA (MADRID)	28	8	0	25	1	15			
409	442	IBAÑEZ CUESTA LUIS	19/07/1962	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	28	8	0	25	1	15			
410	443	LOPEZ OREJAS M. ARGIMIRA	31/08/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	28	8	0	25	1	15			
411	444	HUETE PEREZ LUIS	13/01/1953	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	28	8	0	25	1	15			
412	445	CARRAU MELLADO JUAN	11/12/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	28	8	0	25	1	15			
413	446	GARCIA GUILLOT MARIA ROSARIO	16/08/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	28	8	0	25	1	15			
414	447	CABEZON ELIAS JESUS MARIA	06/09/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	28	7	26	25	1	15			
415	448	ESCRIBANO SIERRA MARIA JESUS	11/06/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	28	8	0	25	1	15			
416	449	GARCIA HERNANDEZ GEMA	02/02/1962	FISCAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	28	8	0	25	1	15			
417	450	LOPEZ LEONOR MARIA BEGONA	29/12/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	28	8	0	25	1	15			
418	451	FABREGA RUIZ CRISTOBAL FRANCISCO	22/05/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	28	7	26	25	1	15			
419	452	DE JUAN JIMENEZ ENRIQUE	15/10/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	28	8	0	25	1	15			
420	453	BRUN AZNAR LUIS ANTONIO	13/01/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	28	7	27	25	1	15			
421	454	FLOREZ ITURRINO ALFREDO	29/05/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	28	7	25	25	1	15			
422	455	LOPEZ BELENGUER ARTURO	20/09/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	28	7	27	25	1	15			
423	456	LUCAS GALVEZ MARIANO DE	01/12/1950	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	28	7	25	25	1	15			
424	457	ARCINIEGA BERMEJO MARIA JOSE	25/07/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	28	7	25	25	1	15			
425	458	GOMEZ-ESCOLAR MAZUELA PABLO	17/07/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	27	7	24	25	1	15			
426	459	ANDRES MARTINEZ LUIS CARMELO	11/07/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	27	7	20	25	1	15			
427	460	HERNANDEZ GARCIA JOSE IGNACIO	06/12/1963	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	27	7	24	25	1	15			
428	461	LOPEZ-MORA GONZALEZ NURIA	21/11/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	15	25	1	15			
429	462	CAMPOS POZUELO MARGARITA	01/06/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	27	7	24	25	1	15			
430	463	BOGUNA PACHECO JORGE	22/01/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	27	7	25	25	1	15			
431	464	HORTA SICILIA MARIA CRISTINA	20/05/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	27	7	23	25	1	15			
432	465	MERLOS CHICHARRO JUAN ANTONIO	28/05/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	27	7	14	25	1	15			
433	466	FRAJ LAZARO JUAN PABLO	20/01/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	27	7	23	25	1	15			
434	467	FERREIROS MARCOS CARLOS ELOY	15/05/1963	FISCAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	27	7	24	25	1	15			
435	468	HERNANDEZ GUERRERO FRANCISCO JOSE	12/03/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	27	7	15	25	1	15			
436	469	HERNANDEZ HERNANDEZ RICARDO	06/08/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	27	7	14	25	1	1			
437	470	ROMERO SANZ ANTONIO JAVIER	13/01/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	27	7	15	25	0	24			
438	471	MATA LLORCA MARIA AMPARO	25/12/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	27	7	25	25	0	8			
439	472	JIMENEZ MADRID CARLOS	27/03/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTIDROGA (MADRID)	27	7	23	24	11	2			
440	473	IGLESIAS BALBOA ANGELA	10/07/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	14	24	11	1			
441	474	ANADON JIMENEZ MIGUEL ANGEL	11/01/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	27	7	19	24	10	13			
442	475	MELLENDEZ GIL ANA MARIA	20/05/1964	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	27	7	15	24	9	29			
443	476	FARO PERELLA JOSE LUIS	17/08/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	30	1	25	24	9	4			
444	477	RUEDA NEGRI JOSE MANUEL	05/04/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	27	7	14	24	8	23			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
445	478	JIMENEZ-VILLAREJO FERNANDEZ FRANCISCO	07/12/1962	FISCAL DE LA EUROJUST (MADRID)	27	7	14	24	6	19			
446	479	ALVAREZ-CIENFUEGOS SUAREZ RAFAEL	04/02/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	27	7	14	24	3	1			
447	480	CABEZAS RANGEL INOCENCIA	08/01/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOZ)	27	7	14	24	3	1			
448	481	AZNAR GRACIA MARIA LOURDES	20/11/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	23	24	3	1			
449	482	BERNAL MARSALLA LORENZO R.	23/01/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	15	24	2	26			
450	483	VALCARCE LOPEZ MARTA	13/02/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	27	7	14	23	4	15			
451	484	SARO SANCHEZ DE RIVERA MARIA DEL PILA	14/07/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	27	7	25	23	2	15			
452	485	ILLAN MEDINA MARIA	08/05/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	27	7	24	23	0	15			
453	486	ZARZOSA HERNANDEZ ADRIAN	21/02/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	15	22	8	29			
454	487	CONDE-PUMPIDO GARCIA PALOMA	04/08/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTIDROGA (MADRID)	27	7	25	22	8	15			
455	488	MORUNO DAVILA CRISTINA	16/05/1965	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CUENCA)	27	7	24	22	8	15			
456	489	VAZQUEZ BERDUGO ISABEL B.	28/06/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	27	7	14	22	8	15			
457	490	CORDOBA ITURRIAGAGOITIA CRISTINA	27/03/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/IRUÑA)	27	7	20	22	8	15			
458	491	MONTES GARCIA VICTOR	25/04/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	27	7	25	22	7	15			
459	492	SOTO BRUNA JOAQUIN ALFONS	01/05/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	25	22	7	15			
460	493	PRIETO PASCUAL MARIA ANGELES	03/01/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	27	7	14	22	5	15			
461	494	MARTINEZ MUNUERA JUAN JOSE	18/05/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	27	7	23	22	5	15			
462	495	TURON LENA MIQUEL	25/06/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	26	0	28	22	5	13			
463	496	FERNANDEZ CALDEVILLA JORGE	19/02/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	27	7	24	22	4	15			
464	497	MARTINEZ CARAZO JULIO ANGEL	23/12/1961	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	27	7	14	22	2	15			
465	498	MORETO MATOSAS MARIA	04/11/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	27	7	25	22	2	15			
466	499	FELEZ GONZALEZ MARIA PIEDAD	03/01/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	27	7	20	22	2	15			
467	500	SOBRON OSTOS FERNANDO	18/12/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	27	7	14	22	2	15			
468	501	CRESPO CUADRADO ANA JOSEFA	10/12/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	27	7	20	22	2	15			
469	502	MARTICORENA SERRANO M. DEL CARMEN	13/09/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	23	22	2	15			
470	503	LAFUENTE AYUSO M. DEL CARMEN	09/07/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	27	7	19	22	2	15			
471	504	IPARRAGUIRRE NEGRETE VICTORIA	03/12/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	26	6	16	21	11	29			
472	505	SANTAMARIA VILLALAIN MARIA DEL PILA	17/09/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	27	7	15	21	11	0			
473	506	SARASATE OLZA MARIA ELENA	29/07/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/IRUÑA)	27	7	19	21	10	11			
474	507	SANCHEZ CARRERAS BEATRIZ	08/08/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	27	7	15	21	9	15			
475	508	MAESTRE VICENTE ANTONIO	05/08/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	27	7	14	21	9	15			
476	509	JIMENEZ COLMENERO FRANCISCO DIEG	18/05/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	27	7	14	21	9	15			
477	510	MONTON SERRANO MARIA TERESA	28/06/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CUENCA)	27	7	24	21	6	15			
478	511	MARTINEZ TORRIJOS PEDRO	02/02/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)	27	7	25	21	6	15			
479	512	DUERTO ARGEMI TERESA	20/09/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	27	7	20	21	6	15			
480	513	VAZQUEZ ALBENTOSA RAMON	18/11/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	27	7	25	21	6	15			
481	514	SUBIRAN ESPINOSA MIGUEL ANGEL	20/04/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	27	7	25	21	6	15			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
482	515	PERAMATO MARTIN TERESA	12/11/1962	FISCAL DE LA SALA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (MADRID)	27	7	18	21	6	15			
483	516	SANCHEZ PRIETO VIRGINIA	01/10/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	27	7	15	21	6	15			
484	517	ALVAREZ CANTALAPIEDRA MARIA PETRA	29/06/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	27	7	11	21	6	15			
485	518	SANZ GAITE MARIA ANTONIA	07/03/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)	27	7	20	21	6	15			
486	519	PEREZ DE GREGORIO MIGUEL ANGEL	22/02/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	27	7	25	21	6	15			
487	520	RODRIGO DE FRANCIA FCO. JAVIER	23/02/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	20	21	6	15			
488	521	CASTILLO FORNIES ELENA ESPERANZ	05/07/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	27	7	20	21	6	15			
489	522	ARICHE AXPE PEDRO JAVIER	14/05/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	27	7	20	21	6	15			
490	523	MUNCHARAZ MUNCHARAZ JOSE	19/05/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	27	7	15	21	6	15			
491	524	ARTIEDA GRACIA JOSE ANTONIO	16/02/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	27	7	20	21	6	15			
492	525	ESPONERA ESTREMER VICTORIA EUGEN	21/03/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	27	7	25	21	6	15			
493	526	DIAZ MANZANERA JOSE LUIS	09/02/1962	FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEMURCIA (MURCIA)	27	7	23	21	6	15			
494	527	DELGADO AYUSO FLORENTINO	14/11/1962	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (OURENSE)	27	7	25	21	6	15			
495	528	ARIÑO PELLICER M. CONCEPCION	06/11/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	27	7	25	21	6	15			
496	529	RULLAN LOSADA GABRIEL ANGEL	16/06/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	27	7	15	21	6	15			
497	530	EGUILUZ CASANOVAS CARLOS MARIA	15/08/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	27	7	15	21	6	15			
498	531	SERRANO RAMALLO ROSA MARIA	01/06/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	27	7	18	21	6	15			
499	532	NIETO FAJARDO MARIA DOLORES	13/08/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	14	21	6	15			
500	533	FERNANDEZ DIAZ-MUNIO MARIA ANGELES	01/07/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	27	7	24	21	6	15			
501	534	DIAZ ROLDAN CARLOS	06/02/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	14	21	6	15			
502	535	LOPEZ CARMONA INMACULDA	05/01/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	27	7	15	21	6	15			
503	536	LLEDO MARTINEZ ROSA ANA	13/08/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)	27	7	15	21	6	15			
504	537	SERRANO HERRERO CRISTINA	15/05/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	27	7	15	21	6	15			
505	538	PUJAL SANCHEZ MARIA NIEVES	14/04/1962	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	27	7	20	21	6	15			
506	539	ALONSO TEJUCA JOSE LUIS	15/07/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOZ)	27	7	18	21	6	15			
507	540	VINUALES LORIENTE MARTA	14/10/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LLEIDA)	27	7	20	21	6	15			
508	541	MENDEZ VILCHEZ FERNANDO	19/10/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	27	7	15	21	6	15			
509	542	MARTIN ARAGON M. DEL CARMEN	31/07/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	27	7	20	21	6	15			
510	543	VENTOSA BLASCO ELENA	20/02/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LLEIDA)	27	7	19	21	6	15			
511	544	ABELLAN-GARCIA MACHO MARTA	07/02/1964	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁCERES)	27	7	19	21	6	15			
512	545	USON ARROYO ANA MARIA	23/06/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	27	7	20	21	6	15			
513	546	SANZ ALVAREZ ANA CRISTINA	24/04/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	14	21	6	15			
514	547	DURA GIMENA MARIA PAZ	09/09/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	27	7	20	21	6	15			
515	548	CONTRERAS GALINDO ELENA	17/07/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	27	7	23	21	6	15			
516	549	CALLES VILLAMANDOS JESUS MANUEL	07/01/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	27	7	13	21	6	15			
517	550	ORDOQUI URDACI SILVIA	26/08/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/IRUÑA)	27	7	20	21	6	15			
518	551	MORENO PASTOR ENEDINA	01/08/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MAJADAHONDA)	27	7	19	21	6	15			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
519	552	CANOA GONZALEZ ERNESTO DAVID	07/12/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	27	7	18	21	6	15			
520	553	PERALTA GAYO FERNANDO LUIS	25/10/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	27	7	24	21	6	15			
521	554	HIDALGO DE MORILLO JIMENEZ AGUSTIN	13/08/1962	INSPECTOR FISCAL DE LA INSPECCIÓN FISCAL	27	7	20	21	6	15			
522	555	NEGRE MOR MARIA ANGELES	01/10/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	27	7	20	21	6	15			
523	556	TORRES TUR ANTONIO	14/12/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	27	7	25	21	6	15			
524	557	ESCRIHUELA CHUMILLA FCO. JAVIER	28/01/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	27	7	14	21	6	15			
525	558	PASTOR MOTTA LUIS	14/02/1963	FISCAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	27	7	20	21	6	15			
526	559	HEREDIA PUENTE MERCEDES	14/02/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	27	7	14	21	6	15			
527	560	ANGLADA GOTOR MARIA CRISTINA	29/10/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	27	7	15	21	6	15			
528	561	HUELAMO BUENDIA ANTONIO JESUS	20/04/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	27	7	24	21	6	15			
529	562	DELGADO GARCIA DOLORES DAMIAN	09/11/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)	27	7	20	21	6	15			
530	563	MARCOS SANCHEZ M. DEL AMPARO	25/07/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	27	7	18	21	6	15			
531	564	ORTEGA FRANCISCO LUIS ANGEL	15/08/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	27	7	20	21	6	15			
532	565	ELORRI GASCON ANA ISABEL	05/03/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	27	7	15	21	6	15			
533	566	GONZALEZ-CASANOVA RUIZ JUAN MANUEL	18/08/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	27	7	20	21	6	15			
534	567	DIAZ BERBEL MARIA	22/05/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	27	7	20	21	6	15			
535	568	TUDELA CABALLERO LUIS JAVIER	03/12/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	14	21	6	15			
536	569	PELEGRIN LOPEZ ANTONIO	12/09/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	27	7	20	21	6	15			
537	570	FERNANDEZ PINOS JOSE ERNESTO	16/11/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CUENCA)	27	7	20	21	6	15			
538	571	APARICIO PEREZ JESUS BERNABE	28/10/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	27	7	14	21	6	15			
539	572	LORENTE PABLO MARIA ELENA	26/02/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	27	7	20	21	6	15			
540	573	JIMENEZ PEÑA MARIA DEL PILA	09/07/1964	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SORIA)	27	7	20	21	6	15			
541	574	MONTES SANCHEZ LUCIA	13/10/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	27	7	18	21	6	15			
542	575	MARTINEZ QUIROGA JOSE FERNANDO	06/10/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	27	7	18	21	6	15			
543	576	BENAVENTE PALOP MARIA CONSUELO	23/09/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	27	7	19	21	6	15			
544	577	ALMENDRA SANCHEZ ARACELI	04/04/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	15	21	6	15			
545	578	RODRIGUEZ PEREZ M. DEL CARMEN	19/09/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	27	7	18	21	6	15			
546	579	VILLANUEVA CAPARROS JESUS MIGUEL	15/09/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (AVILÉS)	27	7	18	21	6	15			
547	580	LA BANDA BRUSI M. BEGONA	22/07/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	14	21	6	15			
548	581	GARCIA CRIADO JUAN JOSE	06/11/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	27	7	18	21	6	15			
549	582	GARCIA INGELMO FCO. MANUEL	27/12/1962	FISCAL DE LA SALA DE MENORES (MADRID)	27	7	20	21	6	15			
550	583	SUAREZ MARTIN MARIA LUZ	12/09/1948	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	27	7	18	21	6	15			
551	584	SIRVENT BOTELLA ANA	09/08/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	27	7	24	21	6	15			
552	585	MUR MAIRAL INMACULADA	08/12/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	27	7	15	21	6	15			
553	586	RUIZ FELIX MARIA JOSE	19/06/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	27	7	20	21	6	15			
554	587	BERDONCES ALFARO RITA	12/09/1962	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SORIA)	27	7	23	21	6	15			
555	588	PEREZ ENCISO PEDRO	25/05/1964	FISCAL DE LA SALA DE COOPERACION PENAL INTERNACIONAL (MADRID)	27	7	25	21	6	15			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
556	589	PEREZ MARTINEZ JUAN BENITO	02/10/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	23	21	6	15			
557	590	LEON MARTINEZ CARLOS	06/11/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOZ)	27	7	18	21	6	15			
558	591	GONZALEZ BALOT MONTSERRAT	05/07/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	27	7	15	21	6	15			
559	592	DE LAS HERAS GARCIA JOSE LUIS	05/10/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	27	7	15	21	6	15			
560	593	AVILA SERRANO INMACULADA	08/06/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTIDROGA (MADRID)	27	7	18	21	6	15			
561	594	CASTRO VAZQUEZ MARIA ANGELES	02/02/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	18	21	6	15			
562	595	MARTINEZ-PARDO CABRILLO MILAGROS	29/03/1963	FISCAL DE LA SALA ORDENACIÓN TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE (MADRID)	27	7	11	21	6	15			
563	596	GILABERT IBAÑEZ FCO. JAVIER	19/04/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	27	7	14	21	6	15			
564	597	BRAVO SAN ESTANISLAO MARIA GABRIELA	25/02/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	27	7	9	21	6	13			
565	598	AVILA ALVAREZ M. DEL CARMEN	17/07/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	27	7	20	21	5	20			
566	599	GONZALEZ MARTINEZ ESTHER	05/07/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	27	7	14	21	5	15			
567	600	SILVA FERNANDEZ M. DE LA O	09/11/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID (MADRID)	27	5	23	21	4	15			
568	601	GONZALEZ CAMPO ELEUTERIO	09/12/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	0	12	20	11	4			
569	602	RIOS PINTADO JUAN FRANCISCO	19/09/1961	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALBACETE)	27	7	23	20	10	15			
570	603	DE JUAN ORLANDIS VICENTE	12/10/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	27	7	11	20	10	15			
571	604	RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCA	08/09/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LORCA)	27	7	14	20	10	12			
572	605	LACASA ESCUSOL M. DEL ROSARIO	18/05/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	20	20	10	4			
573	606	LAUNA ORIOL CARMEN	21/02/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	27	7	11	20	9	22			
574	607	GARCIA-JUANES GUERRERO JOSE LUIS	16/06/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	15	20	6	12			
575	608	PEREZ RODRIGUEZ ROBERTO	29/04/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	27	7	23	20	4	10			
576	609	ROMERO CARRASCAL MARIA SUSANA	23/11/1964	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LA GELTRÚ)	27	7	20	20	3	15			
577	610	SALCEDO FAURA LUIS	20/11/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	27	7	18	19	11	10			
578	611	ROJO ANGUIX ROCIO DE LA PA	30/06/1964	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GUADALAJARA)	27	7	11	19	10	15			
579	612	PINOS MARCOS MERCEDES	14/12/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	27	7	19	19	10	15			
580	613	FERNANDEZ RUBIN MARIA DEL PILAR	16/11/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	27	7	20	19	9	15			
581	614	RUIZ ANTON CARLOS	18/09/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	27	7	18	19	7	26			
582	615	SARABIA MORENO M. ENCARNACION	26/07/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	27	7	20	19	2	15			
583	616	GALA GARCIA MARIA DOLORES	28/03/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	27	7	11	19	1	7			
584	617	BOUZAS LOUZAO MARIA DE LAS MERCEDES	06/09/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	27	7	18	19	1	7			
585	618	MENESES GIMENO SANTOS FERNAND	26/05/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	27	7	20	19	1	7			
586	619	RODRIGUEZ SUAREZ INMACULADA	14/03/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	11	19	1	7			
587	620	ANGUITA JUEGA LUIS	02/07/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	27	7	20	19	1	7			
588	621	GUERRERO GOMEZ M. CRUZ	30/08/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LEÓN)	27	7	18	19	1	7			
589	622	GONZALEZ MOLINA AMPARO	28/06/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	27	7	14	19	1	7			
590	623	GIL SORIANO M. CARMEN	20/10/1950	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	27	7	11	19	1	7			
591	624	HERNANDEZ COFRADES ANDRES	11/01/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CUENCA)	27	7	25	19	1	7			
592	625	MONDELO GARCIA MARIA DOLORES	10/08/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	27	3	14	19	1	7	0	0	1

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
593	626	GALAN MIGUEL JUAN ANTONIO	17/01/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA (CÁ CERES)	26	3	24	19	1	7			
594	627	CARBALLO CUERVO MIGUEL ANGEL	09/01/1964	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)	26	3	15	19	1	7			
595	628	RODRIGUEZ SOL LUIS	02/12/1965	INSPECTOR FISCAL DE LA INSPECCIÓN FISCAL	26	3	19	19	1	7			
596	629	PEREZ JEREZ MARIA ESTHER	24/04/1964	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	26	3	25	19	1	7			
597	630	DIAZ CAPP A JOSE	17/02/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	26	3	18	19	1	7			
598	631	RIO HERRERA JUAN JOSE DEL	10/01/1953	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LEÓN)	26	3	21	19	1	7			
599	632	PACIOS YAÑEZ BEATRIZ	13/02/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	26	3	19	19	1	7			
600	633	LLUSAR MARTI JUAN ANTONIO	26/02/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	26	3	25	19	1	7			
601	634	AMADO PICO EMILIA RAQUEL	06/06/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	26	3	21	19	1	7			
602	635	ZAPATA AGÜERA SEBASTIAN	24/02/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	26	3	15	19	1	7			
603	636	SANCHO ORTIZ RAFAEL	06/01/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	26	3	19	19	1	7			
604	637	ALONSO-MAJAGRANZAS CENAMOR PATRICIA	05/10/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	26	3	15	19	1	7			
605	638	DELGADO FONTANEDA ALVARO	07/03/1962	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VITORIA-GASTEIZ)	26	3	15	19	1	7			
606	639	GARCIA CERDA CARMEN MARIA	19/01/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	26	3	19	19	1	7			
607	640	CABRERA PADRON MARIA ELENA	07/05/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	26	3	15	19	1	7			
608	641	FERNANDEZ MERIDA JOSE	08/11/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	26	3	18	19	0	28			
609	642	BERMEJO PEREZ LUIS FELIPE	02/05/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	26	3	20	19	0	15			
610	643	DIEZ LIRIO LUIS CARLOS	16/10/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	26	3	15	18	6	15			
611	644	CANO CUENCA ADORACION	11/10/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	26	3	20	18	5	25			
612	645	FERNANDEZ GONZALEZ RAMIRO	17/01/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	26	3	22	18	2	23			
613	646	SAN ROMAN IBARRONDO JOSE ALFONSO	18/10/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	26	3	20	18	2	23			
614	647	CORDERO BORGES MARIA ANGELES	30/04/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZAMORA)	26	3	24	18	2	23			
615	648	BLANCO DIAZ ELISEO T. DEL	07/11/1965	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁ CERES)	26	3	18	18	2	23			
616	649	CALVO GONZALEZ-REGUERAL M.ROSA	27/03/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	26	3	19	18	2	23			
617	650	LINARES VALLECILLOS ANA MARIA	13/05/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	26	3	19	18	2	23			
618	651	FERNANDEZ-DELGADO AGUILAR MARIA LUISA	20/02/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	26	3	18	18	2	23			
619	652	PUENTE GALACHE PEDRO	23/12/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SALAMANCA)	26	3	18	18	2	23			
620	653	SANCHEZ DIAZ MARIA ISABEL	30/01/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	26	3	13	18	2	23			
621	654	SANZ-GADEA GONCER RICARDO	01/01/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	26	3	21	18	2	23			
622	655	IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA JESUS MARIA	13/11/1964	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VITORIA-GASTEIZ)	26	3	15	18	2	23			
623	656	MARTI GARCIA JOSE	02/04/1963	FISCAL DE LA SALA ORDENACIÓN TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE (MADRID)	26	3	15	18	2	23			
624	657	PARRADO BENITO MARIA JOSE	17/03/1960	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	26	3	13	18	2	23			
625	658	SANCHEZ MORCILLO VICENTE ANGEL	03/08/1949	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA GJÓN	26	3	15	18	2	23			
626	659	CASAS DE CENDOYA MARIA TERESA	05/08/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	26	3	19	18	2	23			
627	660	PAVIA CARDELL JUAN	15/03/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	26	3	13	18	2	23			
628	661	FLORES PRADA ALFREDO	12/06/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	26	3	18	18	2	23			
629	662	MARZAN DE CABO M. DEL PILAR	12/10/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	26	3	21	18	2	23			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
630	663	DEVESA BARRACHINA VICENTE	19/07/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	26	3	18	18	2	23			
631	664	PELEGRIN MARTINEZ DE PISON M. PALOMA	09/11/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	26	3	21	18	2	23			
632	665	PEREÑA MUÑOZ JUAN JOSE	18/10/1962	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SALAMANCA)	26	3	18	18	2	23			
633	666	MIRANTES LOPEZ M. MAR	28/08/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LEÓN)	26	3	19	18	2	23			
634	667	UCEDA CARRASCOSA MARIA ISABEL	19/09/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	26	3	20	18	2	23			
635	668	SANCHEZ CABELLO JOSEFINA	22/11/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	26	3	20	18	2	23			
636	669	MIRALLES GIL JOSE VICENTE	20/03/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	26	3	15	18	2	23			
637	670	VINAMBRES ALONSO DAVID	27/01/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	26	3	21	18	2	23			
638	671	PITA MOREDA RAFAEL	12/01/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	26	3	18	18	2	23			
639	672	URBANO GARZON CARLOS	11/07/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	26	3	21	18	2	23			
640	673	OCAÑA NIETO ASCENSION	01/10/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	26	3	19	18	2	23			
641	674	BARRIGON GERVAJOS JOSE MIGUEL	29/10/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	26	3	18	18	2	23			
642	675	FERNANDEZ OLMO ISABEL	23/02/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	26	3	19	18	2	23			
643	676	CARRERA COTADO ROSALINA	04/02/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	26	3	18	18	2	23			
644	677	PARICIO RODRIGUEZ MARIA ROSARIO	16/05/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	26	3	21	18	2	23			
645	678	RUFINO RUS JAVIER	20/08/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	26	3	21	18	0	15			
646	679	FERNANDEZ ALVAREZ LUIS ALBERTO	22/06/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	26	3	21	18	0	8			
647	680	HERNANDEZ MUÑOZ JUAN IGNACIO	10/04/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	26	3	26	17	11	11			
648	681	LASTRA DE INES ALMUDENA	16/10/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID (MADRID)	26	3	21	17	11	7			
649	682	NUÑEZ SANCHEZ ANGEL MARIA	14/06/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	26	3	13	17	10	15			
650	683	GIMENO TOLOSA MARIA DOLORES	28/10/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	26	3	21	17	10	15			
651	684	MUÑOZ-COBO GARCIA SARA LOURDES	11/01/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	26	3	15	17	9	15			
652	685	GOMEZ SANTIAGO MARIA CRUZ	03/05/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA (LOGROÑO)	26	3	18	17	9	3			
653	686	VEGA IRAÑETA RAFAEL CARLOS DE	06/01/1964	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZAMORA)	26	3	21	17	8	15			
654	687	RODRIGUEZ REY FERNANDO	05/11/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	26	3	21	17	7	15			
655	688	MARTINEZ GUTIERREZ JUAN FERNANDO	28/07/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALBACETE)	26	3	20	17	7	15			
656	689	RUBIO VICENTE MARIA CARMEN	18/04/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	26	3	13	17	6	15			
657	690	LANZAROTE MARTINEZ PABLO ALFONSO	01/10/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	26	3	26	17	6	15			
658	691	LOPEZ ORDIALES JULIO JESUS	29/01/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOZ)	26	3	26	17	3	15			
659	692	RIO SAURA M. JOSE	21/01/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	26	3	21	17	2	26			
660	693	BAENA OLABE M.CARMEN	17/05/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTIDROGA (MADRID)	26	3	24	17	2	26			
661	694	AGRELA ROMERO LETICIA SILVIA	16/04/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	26	3	20	17	2	26			
662	695	STEINGER DOALLO MARIA ELENA	13/08/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	26	3	19	17	2	26			
663	696	ARMERO VILLALBA SILVIA	07/04/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	26	3	18	17	2	26			
664	697	RUBIO INSUA M. DEL CARMEN	27/06/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	26	3	13	17	2	26			
665	698	RODRIGUEZ CABEZAS CONCEPCION	04/07/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	26	3	18	17	2	26			
666	699	LUZON CANOVAS MARIA	19/07/1965	FISCAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	26	3	24	17	2	26			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
667	700	MUÑOZ DE LA TORRE MARIA DOLORES	25/10/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	26	3	13	17	2	26			
668	701	PEDRAJAS RAMADA YOLANDA	16/06/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	26	3	13	17	2	26			
669	702	PEREZ GALLEGOS ANTONIO GABRIEL	14/05/1963	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	26	3	18	17	2	26			
670	703	ANGUITA SANCHEZ JESUS MARIA	16/10/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	26	3	20	17	2	26			
671	704	GARCIA ESCUDERO MARIA VALLE	17/07/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	26	3	21	17	2	26			
672	705	GUIARD ABASCAL MARIA DOLORES	15/10/1962	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GUADALAJARA)	26	3	21	17	2	26			
673	706	HERRANZ SAURI TOMAS	11/01/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	26	3	15	17	2	26			
674	707	CALVO GALLEGO MARIA ANGELES	10/05/1963	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (DOS HERMANAS)	26	3	13	17	2	26			
675	708	GARCIA GONZALEZ JUANA MARIA	05/12/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	26	3	21	17	2	26			
676	709	ALVAREZ VELICIA JOSE ANDRES	08/01/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	26	3	19	17	2	26			
677	710	FORTE MORAN YOLANDA	16/10/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁCERES)	26	3	24	17	2	26			
678	711	PENALVA MELERO PALOMA	04/12/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GUADALAJARA)	26	3	18	17	2	26			
679	712	VILLAFRANCA SANCHEZ ANGEL	31/12/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	26	3	20	17	2	26			
680	713	GARCIA ATIENZA JOSE MARIA	15/03/1963	FISCAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	26	3	13	17	2	26			
681	714	MUÑOZ MARTIN M. CARMEN	21/04/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	26	3	18	17	2	26			
682	715	GURRIARAN FERNANDEZ NATIVIDAD	03/08/1959	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	26	3	18	17	2	26			
683	716	FERNANDEZ ARIAS PILAR	12/10/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	26	3	15	17	2	26			
684	717	ESTIRADO DE CABO CESAR	09/07/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	26	3	18	17	2	26			
685	718	TEJADA CHACON JUAN MANUEL	25/05/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOZ)	26	3	26	17	2	26			
686	719	SANCHEZ ALVAREZ M. FRANCISCA	05/01/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	26	3	18	17	2	26			
687	720	ALES GAMBERO MARIA LUISA	13/11/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	26	3	13	17	2	26			
688	721	PEREZ RUIZ FRANCISCO JAVI	13/09/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	26	3	15	17	2	26			
689	722	LOPEZ GALINDO MARIA	22/12/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	26	3	19	17	2	26			
690	723	GONZALEZ MIRASOL PABLO	28/12/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALBACETE)	26	3	26	17	2	26			
691	724	LOPEZ CABALLOS FRANCISCO	28/08/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	26	3	13	17	2	26			
692	725	PLANELLES SILVESTRE LEONOR MARIA	19/09/1957	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	26	3	15	17	2	26			
693	726	VILLAGOMEZ MUÑOZ ANA ISABEL	27/01/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	26	3	13	17	2	20			
694	727	SOTO DIAZ FCO. JAVIER	24/07/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	26	3	26	17	2	15			
695	728	PAILLET VIGUERAS FERNANDO	27/01/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	26	3	19	17	1	15			
696	729	BLASCO PAREDES MIGUEL	06/07/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	26	3	20	17	1	15			
697	730	BUJ ROMERO MARIA ISABEL	31/07/1964	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TERUEL)	26	3	18	17	0	6			
698	731	GALDEANO SANTAMARIA ANA MARIA	08/05/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	26	3	19	16	11	1			
699	732	SANCHEZ MARTINEZ JUAN	09/10/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HUÉRCAL-OVERA)	26	3	26	16	9	3			
700	733	MORAN GONZALEZ MARIA ISABEL	02/02/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	26	3	18	16	9	3			
701	734	GUAZA MARTINEZ JOSE MIGUEL	10/08/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	26	3	18	16	9	3			
702	735	DE RAMOS VILARINO M. BEATRIZ	14/08/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEGOVIA)	26	3	19	16	9	3			
703	736	CAMPO MIRANDA MARIA LUZ	06/09/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	26	3	15	16	9	3			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
704	737	MONTILLA FERNANDEZ MARIA MERCEDES	22/09/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	26	3	18	16	9	3			
705	738	MELERO VELEZ MARIA ISABEL	06/12/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (OURENSE)	26	3	18	16	9	3			
706	739	FERNANDEZ LLEBREZ CASTANO SANTIAGO JUAN	11/11/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	26	3	18	16	9	3			
707	740	CAMARERO IZQUIERDO GEMMA	06/12/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	26	3	18	16	9	3			
708	741	LUIS GONZALEZ MARIA ANGELES	28/06/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA GIJÓN	26	3	19	16	9	3			
709	742	VIERA DIEZ MARGARITA	25/05/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	26	3	18	16	9	3			
710	743	SENRA JIMENEZ ROSA MARIA	16/08/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	26	3	20	16	9	3			
711	744	PLAZA SAN JUAN VICENTE	18/10/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	26	3	18	16	9	3			
712	745	PEREZ GONZALEZ ANGELA	25/01/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZAMORA)	26	3	15	16	9	3			
713	746	JOGA ROMERO MARIA PILAR	03/09/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	26	3	19	16	9	3			
714	747	ROSSIGNOLI ARRIAGA MARGARITA	29/03/1957	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	26	3	13	16	9	3			
715	748	REDONDO LOPEZ FCO. JAVIER	30/08/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTIDROGA (MADRID)	26	3	13	16	9	3			
716	749	DURET ARGUELLO MARIA PALOMA	12/06/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (COLLADO VILLALBA)	26	3	19	16	9	3			
717	750	QUESADA DE LA TORRE EMILIA AMPARO	22/12/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	26	3	18	16	9	3			
718	751	MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO	28/11/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LUGO)	26	3	18	16	9	3			
719	752	SOLA IBARRA ANA MARIA	03/11/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	26	3	18	16	9	3			
720	753	ONTIVEROS VALERA MARIA CARMEN	25/08/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	26	3	18	16	9	3			
721	754	MORADELL AVILA JORGE	10/09/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TERUEL)	24	6	16	16	9	3			
722	755	GOMEZ VILLORA CONCEPCION	12/06/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	24	6	16	16	9	3			
723	756	PENARRUBIA SANCHEZ MARIA ISABEL	26/12/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALBACETE)	24	6	20	16	9	3			
724	757	TOMAS GOMEZ MARIA PILAR	04/07/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	24	6	16	16	9	3			
725	758	ARIAS SENSO MIGUEL ANGEL	13/10/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	24	6	16	16	9	3			
726	759	GARCIA DE EULATE LOPEZ MARIA LUISA	27/11/1947	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (FIGUERES)	24	6	23	16	9	3			
727	760	MARTINEZ CARMONA ESPERANZA	01/04/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	24	6	17	16	9	3			
728	761	SANCHEZ ALCARAZ MARIA PILAR	25/06/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	24	6	20	16	9	3			
729	762	GRINDA GONZALEZ JOSE	20/08/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	24	6	22	16	9	3			
730	763	FERNANDEZ GOMEZ DE SEGURA LUIS MARIA	31/03/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA (LOGROÑO)	24	6	16	16	9	3			
731	764	SOPEÑA BIARGE PALOMA BERTA	08/03/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	24	6	15	16	9	3			
732	765	CAÑADA MILLAN ALBERTO	21/07/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA GIJÓN	24	6	23	16	9	3			
733	766	RODRIGUEZ BAREA DOLORES MILAGR	26/10/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	24	6	16	16	9	3			
734	767	MENDEZ SANCHEZ MARIA JESUS	19/06/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	24	6	23	16	9	3			
735	768	ESCOBAR JIMENEZ CRISTINA	02/11/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	24	6	20	16	9	3			
736	769	PLASENCIA DOMINGUEZ NATIVIDAD	15/01/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	24	6	16	16	9	3			
737	770	GISBERT GRIFO SUSANA	17/12/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	24	6	16	16	9	3			
738	771	DURAN TEJADA CARMEN	23/03/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	24	6	17	16	9	3			
739	772	PALAU BENLLOCH INMACULADA	22/04/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	24	6	16	16	9	3			
740	773	SANCHEZ LOPEZ-TAPIA MARIA DE LOS A	22/07/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	24	6	17	16	9	3			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
741	774	NOE SEBASTIAN ANA	18/08/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)	24	6	16	16	9	3			
742	775	DIAZ FRAILE MARIA MONTANA	28/04/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	24	6	22	16	9	3			
743	776	BARRUTIA SOLIBERDI BEGONA	12/11/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MAJADAHONDA)	24	6	20	16	9	3			
744	777	BENITO REQUES SILVIA	04/10/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	24	6	16	16	9	3			
745	778	QUESADA DORADOR JOSE ALBERTO	14/08/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	24	6	16	16	9	3			
746	779	LOPEZ SANCHEZ-VIZCAINO AURORA	24/07/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	24	6	20	16	9	3			
747	780	GONZALEZ ESTEVEZ MARIA ELENA	10/09/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	24	6	16	16	9	3			
748	781	TARANCON MARTINEZ GEMMA SOLEDAD	14/02/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	24	6	23	16	9	3			
749	782	ANDRES PUERTO FELICIDAD	28/07/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	24	6	23	16	9	3			
750	783	FIDALGO GONZALEZ ANA BELEN	15/10/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	24	6	17	16	9	3			
751	784	GOYENA HUERTA JAIME	27/04/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/IRUÑA)	24	6	16	16	9	3			
752	785	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA PILAR	11/06/1966	FISCAL DE LA SALA DE CRIMINALIDAD INFORMATICA (MADRID)	24	6	17	16	9	3			
753	786	MONTERO PUJANTE LORENA	06/10/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	24	6	17	16	9	3			
754	787	SANCLEMENTE LANUZA ADELA	08/06/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/IRUÑA)	24	6	17	16	9	3			
755	788	BODOQUE AGREDANO ANGEL	05/12/1965	FISCAL DE LA MINISTERIO DE JUSTICIA. SERVICIOS CENTRALES (MADRID)	24	6	16	16	9	3			
756	789	ROMERO TIRADO ANTONIO RAFAEL	09/07/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	24	6	20	16	9	3			
757	790	SANCHEZ NOGUEROLES JAIME	19/10/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	24	6	16	16	9	3			
758	791	GARCIA PALACIOS JOSE RAMON	18/01/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	24	6	23	16	9	3			
759	792	MAYORAL HERNANDEZ MARIA ROSA	09/03/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	24	6	23	16	9	3			
760	793	NEIRA CAMPOS MARIA ISABEL	27/05/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	24	6	16	16	9	3			
761	794	BAUTISTA VAZQUEZ MERCEDES	23/05/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	24	6	16	16	9	3			
762	795	COLMENAREJO FRUTOS ANTONIO	22/09/1965	FISCAL DE LA SALA ORDENACIÓN TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE (MADRID)	24	6	17	16	9	3			
763	796	GRAU NAVARRO MARIA JESUS	31/12/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	24	6	16	16	9	3			
764	797	PALLARES RODRIGUEZ MIGUEL	25/01/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	24	6	16	16	9	3			
765	798	SANCHEZ ALVAREZ BEATRIZ	09/06/1966	FISCAL DE LA SALA DE EXTRANJERIA (MADRID)	24	6	17	16	9	3			
766	799	DIEZ GIMENEZ ANA MARIA	26/07/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	24	6	23	16	9	3			
767	800	ALONSO ALIJA M. VICTORIA	03/08/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LEÓN)	24	6	20	16	9	3			
768	801	GIL LOSCOS FERNANDO	25/01/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	24	6	16	16	9	3			
769	802	SAIZ MARTIN JUAN IGNACIO	26/01/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	24	6	23	16	9	3			
770	803	SORIANO IBANEZ BENITO	19/08/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TERUEL)	24	6	16	16	9	3			
771	804	ARMESTO RODRIGUEZ MARIA JESUS	29/05/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	24	6	23	16	9	3			
772	805	COTELO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	09/09/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VITORIA-GASTEIZ)	24	6	20	16	9	3			
773	806	BORRAS RAMIREZ CARMEN	18/12/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	24	6	23	16	9	3			
774	807	JAINAGA ALVAREZ MARTA ARANZAZU	03/01/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	24	6	23	16	9	3			
775	808	RIOS ALMELA Mª ESPERANZA	06/10/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	24	6	15	16	9	3			
776	809	CALVO ALONSO ROSA	23/01/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	24	6	22	16	9	3			
777	810	JAVATO MARTIN MANUEL	02/03/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	24	6	20	16	9	3			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
778	811	GASSENT RAMOS JESUS	19/04/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	24	6	23	16	9	3			
779	812	RUIZ RUIZ MARIA DOLORES	10/01/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (CIEZA)	24	6	23	16	9	3			
780	813	SANCHEZ CALDERON MARIA NIEVES	07/10/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	24	6	23	16	9	3			
781	814	NUÑEZ PORTILLO ANA LAURA	09/11/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	24	6	16	16	9	3			
782	815	BAUTISTA SAMANIEGO CARLOS MIGUEL	04/11/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)	24	6	22	16	9	3			
783	816	CONDE LOZANO ALVARO DE JESU	10/03/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	24	6	16	16	9	3			
784	817	MUÑOZ ARNANZ RAQUEL	01/01/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID (MADRID)	24	6	17	16	9	3			
785	818	SANDOVAL ALTELARREA MARIA TERESA	15/12/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)	24	6	22	16	9	3			
786	819	HERAS CANTALAPIEDRA SANTIAGO, DE L	12/06/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	24	6	23	16	9	3			
787	820	RUBIO DE LA IGLESIA JOSE MANUEL	20/12/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (PLASENCIA)	24	6	21	16	9	3			
788	821	MANSILLA BARREIRO RAMON	26/05/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	24	6	16	16	9	3			
789	822	TEBAR VILLAR JESUS	19/07/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	24	6	16	16	9	3			
790	823	GUASP FERRER JAIME	22/07/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	24	6	22	16	9	3			
791	824	CAMPOY MINARRO MANUEL	15/03/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	24	6	16	16	9	3			
792	825	GARCIA CANTON LUIS MANUEL	07/01/1964	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MATARÓ-ARENYS) (MATARÓ)	24	6	22	16	9	3			
793	826	ROMERO URRUTIA MARIA DEL CARMEN	18/08/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	24	6	20	16	9	3			
794	827	CRESPO GONZALEZ MARIA JOSE	04/11/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	24	6	20	16	9	3			
795	828	MARCO ORENES MARIA GRACIELA	27/01/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	24	6	20	16	9	3			
796	829	SANCHEZ DE LA PARRA Y SEPTIEN PEDRO FERNANDO	26/07/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SALAMANCA)	24	6	17	16	9	3			
797	830	AÑON AGUILERA MARIA JOSE	06/07/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	24	6	16	16	9	3			
798	831	CARBALLIDO GONZALEZ MARIA ISABEL	22/10/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	24	6	20	16	9	3			
799	832	DELGADO PEREZ-IÑIGO ANA	06/01/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (OURENSE)	24	6	19	16	9	3			
800	833	PRIETO ALONSO ADELA	18/01/1965	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	24	6	17	16	9	3			
801	834	HORRO GONZALEZ JUAN CARLOS	22/02/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	24	6	20	16	9	3			
802	835	VILCHEZ COBO MARIA LOURDES	14/09/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	24	6	20	16	9	3			
803	836	MANSO LOPEZ MARIA DEL PILAR	03/12/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (OURENSE)	24	6	19	16	9	3			
804	837	CASADO MONGE ROSA MARIA	01/01/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	24	6	22	16	9	3			
805	838	MARTIN MARTIN ROSA MARIA	06/04/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOZ)	24	6	20	16	9	3			
806	839	UTRERA GOMEZ MARIA VICTORIA	18/06/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	24	6	20	16	9	3			
807	840	GARCIA CABAÑAS JAVIER	02/09/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	24	6	21	16	9	3			
808	841	PUEYO VAL CLARA ISABEL	15/05/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	24	6	21	16	9	3			
809	842	LOPEZ SAN NARCISO MARIA CARMEN	20/05/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	24	6	16	16	9	3			
810	843	AGUILAR GARCIA MIGUEL ANGEL	20/06/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	24	6	23	16	9	3			
811	844	CEREZUELA ROSIQUE ORENCIO	10/08/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA CARTAGENA	24	6	22	16	9	3			
812	845	ASENSIO GALDIANO MARIA CRISTINA	06/09/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	24	6	23	16	9	3			
813	846	DOMINGUEZ CASTELLANO MARIA FATIMA	28/10/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	24	6	16	16	9	3			
814	847	ARTEAGA QUINTANA JESUS DACIO	24/12/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	24	6	20	16	9	3			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
815	848	ALESANCO DEL POZO ESTHER MARIA	08/08/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA (LOGROÑO)	24	6	16	16	9	3			
816	849	LOPEZ ESTEBAN MARIA DEL MAR	03/06/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	24	6	20	16	9	3			
817	850	CASTELLON ARJONA JOSE MIGUEL	17/09/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	24	6	17	16	9	3			
818	851	NEVOT MURILLO MARIA ISABEL	16/08/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	24	6	22	16	4	0			
819	852	GARCIA RULL FCO. JAVIER	25/01/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	24	6	20	16	3	5			
820	853	ORTIN MARTIN JOSE MARIA	22/04/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	24	6	23	16	3	5			
821	854	JIMENEZ SANCHEZ FELICISIMA	22/09/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	24	6	23	16	2	29			
822	855	RAMOS AGUILAR FRANCISCO JOSE	28/09/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	24	6	20	16	2	15			
823	856	VICENTE CARBAJOSA ISABEL	09/09/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	24	6	16	16	2	9			
824	857	MELLENDEZ ALONSO MARIA DEL CARM	31/12/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	24	6	22	16	0	0			
825	858	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL PILA	15/09/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	24	6	20	15	8	15			
826	859	PEÑAS JIMENEZ PAULA	18/10/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/IRUÑA)	24	6	23	15	8	6			
827	860	GUTIERREZ VICEN GERMAN	29/10/1962	FISCAL DE LA UNIDAD DE APOYO	24	6	17	15	7	27			
828	861	GAMEZ SANCHEZ MARIA VICTORIA	12/08/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	24	6	16	15	6	15			
829	862	VEGA TORRES SUSANA	08/01/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	24	6	20	15	4	15			
830	863	PUERTA MARTI JOSE LUIS	22/03/1964	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (CEUTA)	24	6	17	15	4	15			
831	864	MORALES GUERRERO IGNACIO	11/09/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	24	6	20	15	3	15			
832	865	MENAC COMAS JUAN RAMON	11/09/1961	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	24	6	22	15	1	15			
833	866	MALDONADO CLAVERO FERNANDO JOSE	16/05/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	24	6	22	15	0	14			
834	867	PEREZ GUTIERREZ MARIA ANGELES	26/02/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	24	6	20	15	0	14			
835	868	CEA SANGUINO MARIA DEL MAR	07/06/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	24	6	21	15	0	14			
836	869	GARCIA SANCHEZ RICARDO	15/01/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	24	6	16	15	0	14			
837	870	VICENTE CALVO MARIA TERESA	13/03/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	24	6	23	15	0	14			
838	871	ROSSIÑOL RODERO MARIA JOSE	03/10/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	24	6	17	15	0	14			
839	872	ANDRADE ORTIZ ABEL CARMELO	16/07/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	24	6	17	15	0	14			
840	873	LUENGO NIETO ANTONIO	09/06/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOZ)	24	6	20	15	0	14			
841	874	TABUENCA ARCE FRANCISCO JAVI	06/10/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	24	6	23	15	0	14			
842	875	GARCIA-TORRES ENTRALA JAIME	11/05/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	24	6	16	15	0	14			
843	876	OROZ TRELL MARIA TERESA	19/01/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	24	6	23	15	0	14			
844	877	ALVAREZ COVELO ELISA	03/08/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	24	6	20	15	0	14			
845	878	JIMENEZ MARQUEZ CARMEN	29/11/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	24	6	23	15	0	14			
846	879	GASTALDI MATEO ANTONIO	28/01/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	24	6	21	15	0	14			
847	880	MURILLO TAPIA ANA	01/04/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	24	6	23	15	0	14			
848	881	RUIZ GARJO ANTONIA	25/04/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	24	6	16	15	0	14			
849	882	VELASCO GARCIA JOSE ALEJANDRO	09/07/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	24	6	16	15	0	14			
850	883	FERNANDEZ VILLALVILLA JACINTO	09/02/1963	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (PONFERRADA)	24	6	21	15	0	14			
851	884	SACALUGA RABELLO LORENZO	25/11/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	24	6	20	15	0	14			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
852	885	MIRANDA HERRAN MIREN EDURNE	15/01/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	24	6	20	15	0	14			
853	886	VICENTE GONZALEZ MARIA SOLEDAD	15/06/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	24	6	22	15	0	14			
854	887	REY ZAMORA ARANZAZU	18/07/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	24	6	22	15	0	14			
855	888	LOVERA TEJEDOR ANTONIO MIGUEL	11/04/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	24	6	20	15	0	14			
856	889	FERNANDEZ LORA ELENA MARIA	23/11/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	24	6	17	15	0	14			
857	890	LOPEZ CARDUS M. DE LA CINTA	25/06/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (REUS)	24	6	22	15	0	14			
858	891	ARCAS TRIGUEROS JUANA	03/03/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	24	6	23	15	0	14			
859	892	ABAD RUIZ BEGOÑA	14/01/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	24	6	23	15	0	14			
860	893	FERNANDEZ RODRIGUEZ ELENA	18/08/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (OURENSE)	24	6	19	15	0	14			
861	894	HERRAIZ ESPANA SANTIAGO	19/11/1965	TENIENTE FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DELA RIOJA (LOGROÑO)	23	2	17	15	0	14			
862	895	CARRASCOSO LOPEZ MARIA ELENA	23/03/1967	FISCAL DE LA SALA DE SINIESTRALIDAD LABORAL (MADRID)	23	2	18	15	0	14			
863	896	GARCIA-PANASCO MORALES GUILLERMO	14/02/1968	TENIENTE FISCAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	23	2	19	15	0	14			
864	897	PIRFANO LAGUNA MARIA CRISTINA	27/09/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	23	2	19	15	0	14			
865	898	DOMINGUEZ BLASCO MARIA YOLANDA	17/03/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	23	2	19	15	0	14			
866	899	PERALS CALLEJA JOSE	21/07/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)	23	2	19	15	0	14			
867	900	TORIO ABAD MARIA ALMUDENA	11/11/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	23	2	18	15	0	14			
868	901	RIO MONTESDEOCA LUIS DEL	21/05/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS (PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS)	23	2	19	15	0	14			
869	902	BAUTISTA TORRES MARIA EUGENIA	06/04/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	23	2	18	15	0	14			
870	903	VILLACAMPA ABADIAS ALFONSO CARLOS	29/07/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	23	2	17	15	0	14			
871	904	JIMENEZ-VILLAREJO FERNANDEZ ADELAIDA	04/10/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	23	2	19	15	0	14			
872	905	ELVIRA ELVIRA MARIA CRISTINA	13/01/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	23	2	20	15	0	14			
873	906	PEÑALVER SERRAMALERA MARIA DEL MAR	23/03/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	23	2	17	15	0	14			
874	907	SAN NICOLAS LOPEZ M.ANUNCIACION	11/12/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	23	2	17	15	0	14			
875	908	CORTES COSME AMALIA	26/12/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁ CERES)	23	2	17	15	0	14			
876	909	MARQUINA BERTRAN MARTA	29/04/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	23	2	18	15	0	14			
877	910	CAMARERO GONZALEZ GONZALO JOSE	19/03/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID (MADRID)	23	2	19	15	0	14			
878	911	GUERRERO RODRIGUEZ ROSA	14/11/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	23	2	17	15	0	14			
879	912	SANCHEZ DONATE MARIA DEL PILA	20/12/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	23	2	19	15	0	14			
880	913	MORILLAS ALBA MARIA LUZ	28/02/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	23	2	14	15	0	14			
881	914	MOYA MARTINEZ MARIA JESUS	17/06/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	23	2	18	15	0	14			
882	915	FLORES BLANCO JOSE MANUEL	28/06/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	18	11	15	14	10	19	0	2	5
883	916	GARCIA BORO BEGOÑA	03/09/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOZ)	23	2	19	14	10	15			
884	917	TORAN MUÑOZ ALEJANDRO ISID	01/04/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	23	2	19	14	9	12			
885	918	BRAVO ROJAS LUIS	08/01/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ÚBEDA)	23	2	18	14	4	16			
886	919	NOVO PAZ ANA	28/03/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	23	2	20	14	4	16			
887	920	AGUIRRE SEOANE JUAN	25/06/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	23	2	20	14	4	16			
888	921	GARCIA ALMAGRO VALENTINA	10/08/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	23	2	18	14	4	16			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
889	922	SANCHEZ ULLED EMILIO JESUS	14/09/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	23	2	18	14	4	16			
890	923	OLIVARES JUAN RICARDO	16/03/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	23	2	18	14	4	16			
891	924	ALVAREZ GARCIA JOSE LUIS	21/06/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LUGO)	23	2	18	14	4	16			
892	925	ESQUIU HERNANDEZ MARIA NATIVIDA	13/10/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	23	2	19	14	4	16			
893	926	HERNANDEZ CORDERO LAURA FRANCISC	23/11/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	23	2	19	14	4	16			
894	927	RINCON ARRANZ SUSANA	02/11/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	23	2	18	14	4	16			
895	928	LAPEÑA ESCUSOL MARIA TERESA	03/08/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	23	2	18	14	4	16			
896	929	BLANCO SANTOS GEMMA	24/03/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	23	2	18	14	4	16			
897	930	ESPINA RAMOS JORGE ANGEL	02/10/1967	FISCAL DE LA EUROJUST (MADRID)	23	2	18	14	4	16			
898	931	ALDEA DORADO MARIA CONSUELO	06/12/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	23	2	18	14	4	16			
899	932	CUENA BOY AMALIA MARIA	16/06/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	23	2	19	14	4	16			
900	933	MARTINEZ GARCIA MARIA INMACULA	30/08/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEGOVIA)	23	2	19	14	4	16			
901	934	RODRIGUEZ LORENZO MARIA CANDELAS	10/04/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	23	2	19	14	4	16			
902	935	SANZ EZQUERRA MARIA DUNIA	30/08/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TUDELA)	23	2	18	14	4	16			
903	936	ALBERT PEREZ SILVIA	29/04/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	23	2	18	14	4	16			
904	937	LOPEZ FERNANDEZ VICENTE	10/08/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	23	2	17	14	4	16			
905	938	ROMA VALDES ANTONIO	22/11/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)	23	2	20	14	4	16			
906	939	GAYETE PENA GERARDO	23/11/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	23	2	18	14	4	16			
907	940	RUIZ FRANCO M.DE LA PAZ	10/08/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	23	2	20	14	4	1			
908	941	LOPEZ CERVILLA JOSE MARIA	01/07/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	23	2	17	14	4	1			
909	942	OLMEDO DE LA CALLE EDUARDO	16/12/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	23	2	18	14	4	1			
910	943	CRESPO RAYA RAQUEL	23/11/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	23	2	20	14	4	1			
911	944	FERNANDEZ PEREZ NURIA	13/08/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LUGO)	23	2	17	14	2	16			
912	945	TAMBO PEREZ MARIA LUISA AN	09/10/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	23	2	17	14	2	16			
913	946	PONCE MARTINEZ PABLO ANGEL	02/07/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	23	2	19	14	2	16			
914	947	MANZANERA VILA LYDIA ESPERANZ	18/12/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	23	2	14	14	2	16			
915	948	GREGORI ORELLANA TERESA	07/06/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORTOSA)	23	2	19	14	2	15			
916	949	BOUZA CEREJO MARIA LUISA	01/09/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	23	2	18	14	2	15			
917	950	BARROSO LABRADOR RAUL	21/07/1961	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ÁVILA)	23	2	20	14	2	15			
918	951	LANDERAS MARTIN SUSANA	02/10/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)	23	9	17	14	0	18			
919	952	MENDEZ MATEOS MARIA DEL PILA	12/03/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	23	2	19	13	10	15			
920	953	POYATOS ADEVA LUIS MANUEL	29/11/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	23	2	19	13	10	15			
921	954	SIERRA PIZARRO RAQUEL	13/12/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	23	2	19	13	9	15			
922	955	CASTELLANO RAUSELL MARIA ISABEL	14/07/1954	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	23	2	14	13	9	15			
923	956	GONZALEZ MUNOZ MARINA	26/05/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	23	2	18	13	8	15			
924	957	SEGURA RODRIGO MYRIAM GLORIA	30/03/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	23	2	19	13	8	15			
925	958	RODENAS IBANEZ MARIA ISABEL	14/05/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	23	2	19	13	8	15			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
926	959	RODRIGUEZ ZARAUZ MARIA JESUS	03/02/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	21	10	4	13	8	15			
927	960	GARCIA-BAQUERO BORRELL SUSANA	11/08/1966	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	20	11	6	13	8	15			
928	961	GARCIA VEGA MARIA LUISA	19/07/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA GIJÓN	20	6	13	13	8	15			
929	962	PUENTE SANTIAGO SOFIA	11/02/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	20	6	15	13	7	20			
930	963	SALABERT CARDONA ALICIA	22/12/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	20	6	13	13	7	15			
931	964	LLOP ESTEBAN MARIA LUISA	04/08/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	20	6	22	13	5	25			
932	965	ARTACHO IZQUIERDO VIRGINIA	27/11/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (COLLADO VILLALBA)	20	6	15	13	5	15			
933	966	LUCAS MARTIN IGNACIO MIGUEL DE	19/12/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA ANTIDROGA (MADRID)	20	6	13	13	5	0			
934	967	GOMEZ RECIO FERNANDO	28/07/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	20	6	15	13	3	25			
935	968	SANAHUJA PAULO FCO. RAFAEL	15/09/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	20	6	13	13	3	15			
936	969	ORTIZ NAVARRO JOSE FRANCISCO	21/07/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	20	6	13	13	3	15			
937	970	CRUZ ANDRADE ANGEL DEMETRIO	10/12/1956	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TALAVERA DE LA REINA)	20	6	15	13	3	15			
938	971	EGOCHEAGA CABELLO JUAN ENRIQUE	23/10/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	20	6	10	13	3	9			
939	972	NAVARRO RODENAS GIL	03/08/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALBACETE)	20	6	15	13	3	9			
940	973	DE LA CALLE PAUNERO MARIA MONTSERRAT	21/07/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	20	6	10	13	3	9			
941	974	SIMARRO GOMEZ ISABEL MARIA	05/08/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	20	6	13	13	3	9			
942	975	RODRIGUEZ FERNANDEZ ALBERTO	09/12/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	20	6	13	13	3	9			
943	976	MARTIN MELENDEZ SUSANA MARIA	11/04/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	20	6	13	13	3	9			
944	977	CANTALAPIEDRA DIAGO INIGO	21/12/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALENCIA)	20	6	15	13	3	9			
945	978	GIMENO MORENO PEDRO JAVIER	23/03/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	20	6	14	13	3	9			
946	979	DORREGO DE CARLOS MARIA PILAR	07/12/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	20	6	14	13	3	9			
947	980	PEÑA SALINAS FRANCISCO JAVI	08/09/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	20	6	10	13	3	9			
948	981	SUAREZ HERRANZ OLGA	18/06/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁCERES)	20	6	14	13	3	9			
949	982	LOPEZ MUÑOZ MARIA JOSE	23/10/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	20	6	14	13	3	9			
950	983	SOTO PATIÑO FERNANDO	13/02/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	20	6	15	13	3	9			
951	984	CORCOLES SANCHEZ FRANCISCO JOSE	10/11/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	20	6	14	13	3	9			
952	985	CABEZA ALBAS ANA MARIA	26/06/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	20	6	14	13	3	9			
953	986	GONZALEZ MARCHAL ANA ISABEL	02/11/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	20	6	15	13	3	9			
954	987	CUESTA SANCHEZ MARIA DEL MAR	17/03/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	20	6	14	13	3	9			
955	988	ALVAREZ MENENDEZ M. PILAR	04/05/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	20	6	15	13	3	9			
956	989	FERNANDEZ APARICIO JUAN MANUEL	01/06/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	20	6	14	13	3	9			
957	990	GIMENEZ PERICAS GINER MARIA LOURDES	11/02/1970	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	20	6	14	13	3	9			
958	991	NUNEZ CORREGIDOR MARIA PAZ	24/01/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	20	6	22	13	2	15			
959	992	SANTOS MENA CAROLINA	05/06/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	20	6	13	13	2	15			
960	993	OVIEDO BRAÑAS MARIA ELENA	19/09/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (OURENSE)	20	6	13	13	0	15			
961	994	MERINO RODRIGUEZ JUAN FCO.	04/01/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁCERES)	20	6	10	12	11	15			
962	995	CASAÑA OLIVER MARIA DEL MAR	04/09/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	20	6	13	12	9	17			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
963	996	GUILLAMON SENENT JOSE VICENTE	17/09/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	20	6	15	12	9	15			
964	997	SANZ HERRERO MARIA	09/05/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ÁVILA)	20	6	13	12	8	15			
965	998	MORALES ORTIZ MARIA ARANZAZU	29/07/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	20	6	13	12	8	15			
966	999	INIGO FRANCO M.CRISTINA	07/05/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (CATAYUD)	20	6	13	12	8	15			
967	1000	BAEZA DIAZ-PORTALES LUIS ANGEL	30/04/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	20	6	10	12	8	15			
968	1001	REGUEIRO RODRIGUEZ MARIA EVANGELINA	15/01/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (OURENSE)	20	6	13	12	8	15			
969	1002	DIAZ-REIXA SUAREZ ISABEL	15/02/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	20	6	13	12	8	15			
970	1003	RUBIO ANAYA SONIA	02/09/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	20	6	12	12	8	14			
971	1004	BARQUILLA BERMEJO M.CARMEN	12/12/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁCERES)	20	6	13	12	8	4			
972	1005	LARRAYA ASTIBIA FCO. JAVIER	10/12/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	20	6	13	12	8	4			
973	1006	SABADELL CARNICERO CONCEPCION	19/03/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	20	6	13	12	7	29			
974	1007	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA-PILAR	22/11/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	20	6	13	12	6	15			
975	1008	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ESTELA	20/06/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	18	6	4	12	6	15			
976	1009	RUIZ ALARCON ROMAN	20/06/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (FERROL)	18	6	3	12	5	15			
977	1010	HERNANDO RAMOS MARIA SUSANA	11/04/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	18	6	3	12	5	15			
978	1011	ZERAIBI LARREA SORAYA	18/12/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	18	6	3	12	5	15			
979	1012	GIL MUNOZ ANA BELEN	01/08/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	18	6	3	12	4	15			
980	1013	TERRACHET LAZCANO ENRIQUE	05/03/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	18	6	1	12	4	15			
981	1014	CELDRAAN RUIZ VERONICA	17/07/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	18	6	3	12	4	7			
982	1015	FERNANDEZ AMANDI MONTSERRAT	18/01/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LANGREO)	18	6	4	12	4	7			
983	1016	GONZALEZ MAGAN MARIA ANGELES	15/10/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	18	6	1	12	4	7			
984	1017	NAVARRO HERRERA ALEJANDRA	05/01/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	3	12	4	7			
985	1018	LOPEZOSA RODRIGUEZ MARIA JESUS	28/02/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	18	6	1	12	4	7			
986	1019	GARCIA LEON ANA ISABEL	26/07/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	3	12	4	7			
987	1020	REMON PEÑALVER ENRIQUE JOSE	09/05/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID (MADRID)	18	6	3	12	4	7			
988	1021	MOUZO GARCIA SONIA MARIA	23/10/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	18	6	7	12	4	7			
989	1022	URIARTE VALIENTE LUIS MARIA	10/03/1967	FISCAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	18	6	3	12	4	7			
990	1023	IRANZO VELASCO JUAN BAUTISTA	17/10/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	18	6	3	12	4	7			
991	1024	AGÜERO RAMON-LLIN ELENA	17/02/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	3	12	4	7			
992	1025	EIRO BOUZA MARIA DEL CARMEN	05/09/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (OURENSE)	18	6	4	12	4	7			
993	1026	LOZANO OLMOS JUAN PABLO	08/09/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	18	6	9	12	4	7			
994	1027	ROSA ALVAREZ JUAN JOSE	08/03/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	18	6	3	12	4	7			
995	1028	QUINTELA LOPEZ BELEN	05/12/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LUGO)	18	6	7	12	4	7			
996	1029	CARRION SAN CECILIO MARIA ELISA	24/04/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁCERES)	18	6	2	12	4	7			
997	1030	JIMENEZ MUÑOZ FRANCISCO DE BORJA	30/04/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	18	6	4	12	4	7			
998	1031	ALONSO LUMBRERAS MONICA	19/10/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LEÓN)	18	6	1	12	4	7			
999	1032	ROJAS DELGADO MARIA ANGELES	26/06/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	18	6	1	12	4	7			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1000	1033	OFRECIO MULET MARIA DOLORES	24/08/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	18	6	2	12	4	7			
1001	1034	MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE	19/03/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LLEIDA)	18	6	2	12	4	7			
1002	1035	CREHUET OLIVIER RUTH	07/03/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁCERES)	18	6	1	12	4	7			
1003	1036	TITOS ARRIAZA OLGA	01/04/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	18	6	9	12	4	7			
1004	1037	GARCIA KROMER MARIA GRACIA	01/05/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	18	6	3	12	4	7			
1005	1038	CASTRO MELIAN ELOINA	01/12/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	18	5	27	12	4	7			
1006	1039	IGLESIAS ESCALERA MARIA PAZ	24/01/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	4	12	4	7			
1007	1040	AVILA RIVERA VALLE	02/11/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	18	6	1	12	4	7			
1008	1041	RUBIO RAMOS MARIA ROSA	12/09/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	18	6	9	12	4	7			
1009	1042	MARTOS SANCHEZ MARIA VICTORIA	20/08/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	18	6	1	12	4	7			
1010	1043	DELGADO NEVARES LUIS	30/03/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALENCIA)	18	6	0	12	4	7			
1011	1044	HERRANZ SANZ OLGA MILAGROS	04/01/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	2	12	4	7			
1012	1045	ORTI MORIS MARIA NIEVES	04/02/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	18	6	3	12	4	7			
1013	1046	DE PRADO ORTIZ NURIA	17/12/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	18	6	3	12	3	15			
1014	1047	CIRIZA MAISTERRA IRENE	28/07/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	18	6	3	12	3	15			
1015	1048	ALFARO MENCHON ESPERANZA	28/06/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	18	6	2	12	2	24			
1016	1049	GARCIA GOMEZ MARIA JOSE	05/04/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	18	6	1	12	2	15			
1017	1050	SAN JOSE GONZALEZ ARANZAZU	08/06/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)	18	6	9	12	2	8			
1018	1051	QUINTANILLA NAVARRO PORFIRIO	04/08/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	1	12	2	4			
1019	1052	MARCOS ALMAZAN MONICA	23/10/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	18	6	3	12	1	15			
1020	1053	URIZ JUANGO FRANCISCO J.	26/04/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/TRUÑA)	18	6	0	12	0	15			
1021	1054	DOMINGUEZ DOMINGUEZ VICTOR	12/01/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	18	6	1	12	0	15			
1022	1055	GONZALEZ ROLDAN MARIA ANGELES	01/06/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	18	6	1	12	0	9			
1023	1056	MIRA HERRERA MARIA TERESA	28/11/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	18	6	1	11	11	15			
1024	1057	GARCIA MERINO ANA ELENA	15/08/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	3	11	11	15			
1025	1058	MONTEJO SANCHO CARLOS VICENTE	15/08/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	18	6	3	11	10	15			
1026	1059	LASERNA COCINA FERNANDO	06/10/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LANGREO)	18	6	3	11	10	15			
1027	1060	AZCARRAGA URTEAGA MARCELO JUAN	02/11/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)	18	6	3	11	10	15			
1028	1061	PEDROS FUENTES ENRIQUE	19/08/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	18	6	9	11	9	15			
1029	1062	MARTIN VICENTE SUSANA	07/04/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	3	11	9	15			
1030	1063	SAIZ NICOLAS CONRADO ALBERTO	04/01/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	18	6	0	11	9	15			
1031	1064	FERNANDEZ FONTECHA ANA ISABEL	20/02/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALENCIA)	18	6	3	11	9	15			
1032	1065	VAZQUEZ SECO LUIS	20/05/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	18	6	7	11	9	15			
1033	1066	CUENCA RUIZ ANA	23/07/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	18	6	3	11	9	15			
1034	1067	GALVEZ MARLASCA JUAN CARLOS	08/01/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	18	6	2	11	9	15			
1035	1068	BRAVO ANGULO OLGA	27/10/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	18	6	2	11	9	15			
1036	1069	RIOS DORADO EVANGELINA	24/04/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	18	6	9	11	9	15			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1037	1070	LOZANO SUAREZ LUIS MIGUEL	31/12/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	2	11	9	15			
1038	1071	SANCHO DE SALAS MANUEL	31/10/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	18	6	3	11	9	15			
1039	1072	ALIA ROBLES AVELINA	28/07/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	18	6	2	11	9	15			
1040	1073	MIOTA JARQUE JOSE LUIS	12/06/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	18	6	1	11	9	15			
1041	1074	VILLAMUZA RODRIGUEZ M. JESUS	25/06/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALENCIA)	18	6	3	11	9	15			
1042	1075	GUTIERREZ HERNANDEZ FCO. JAVIER	18/06/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LEÓN)	18	6	1	11	9	15			
1043	1076	SCHARFHAUSEN PELAEZ MARIA DEL MAR	27/08/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	3	11	9	15			
1044	1077	BARBERAN LOPEZ M. DEL CARMEN	21/04/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ÁVILA)	18	6	3	11	9	15			
1045	1078	GALINDO SACRISTAN CARLOS	08/09/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MOTRIL)	18	6	2	11	9	15			
1046	1079	MARCOTEGUI BARBER ANA	08/02/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/IRUÑA)	18	6	0	11	9	15			
1047	1080	RODRIGUEZ GONZALEZ M. GUADALUPE	29/11/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	3	11	9	15			
1048	1081	DIEZ REMARTINEZ M. YOLANDA	20/10/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOBENDAS)	18	6	7	11	9	15			
1049	1082	ORO RAMAS MARIA SOFIA	05/04/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	18	6	2	11	9	15			
1050	1083	YOLDI MUNOZ MARIA TERESA	23/09/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	18	6	3	11	9	15			
1051	1084	LAFON NICUESA LUIS	25/06/1968	FISCAL DE LA SALA DE EXTRANJERIA (MADRID)	18	6	3	11	9	15			
1052	1085	BUDIÑO GRANADO INMACULADA	12/03/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORREMOLINOS)	18	6	2	11	9	15			
1053	1086	BERNAL MONTEAGUDO ROCIO	28/09/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	18	6	3	11	9	15			
1054	1087	CALZADA RODRIGUEZ DAVID	04/09/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	18	6	0	11	9	15			
1055	1088	ROMERO RODRIGUEZ MARIA BELEN	17/07/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORREMOLINOS)	18	6	2	11	9	15			
1056	1089	GALAN ISLA ALFONSO	11/08/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	18	6	3	11	9	15			
1057	1090	MARGALET VIQUEIRA CRISTINA	14/08/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)	18	6	3	11	9	15			
1058	1091	CORTES PUERTO MARIA ISABEL	28/11/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VERÍN)	18	6	4	11	9	15			
1059	1092	PEDREÑO AVILA GONZALO	05/11/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	18	6	1	11	9	15			
1060	1093	SORIANO VILLANUEVA MARIA TERESA	02/09/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	18	6	2	11	9	15			
1061	1094	ORTIZ BARQUERO ANA MARIA	06/01/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	18	6	9	11	9	15			
1062	1095	PORTOLES GIL CARMEN	15/02/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	18	6	3	11	9	15			
1063	1096	GUTIERREZ ALHAMBRA ARANZAZU LUCIA	13/12/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUESCA)	18	6	3	11	9	15			
1064	1097	JIMENEZ JIMENEZ CRISTOBAL	31/07/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ÚBEDA)	18	6	4	11	9	15			
1065	1098	SARMIENTO CARAZO CARLOS	24/03/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	18	6	3	11	9	15			
1066	1099	CASTRO SALMERON PEDRO	15/11/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	18	6	3	11	9	15			
1067	1100	GARCIA-MALTRAS DE BLAS ELSA	22/07/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	3	11	9	15			
1068	1101	EZQUERECOCHA RUIZ AMAYA	12/09/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SALAMANCA)	18	6	3	11	9	15			
1069	1102	LOPEZ SISO MARIA LILIANA	13/04/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	18	6	4	11	9	15			
1070	1103	MILLANES MASA YOLANDA	24/11/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	3	11	9	15			
1071	1104	BARRIOS GARCIA OSCAR	07/08/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ÁVILA)	18	6	3	11	9	15			
1072	1105	UCHA LOPEZ JOSE MANUEL	30/08/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (OURENSE)	18	6	3	11	9	15			
1073	1106	GARCIA ORTIZ ALVARO	16/12/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)	18	6	7	11	9	15			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1074	1107	LABIANO MERINO MARIA ARACELI	27/02/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	7	11	9	15			
1075	1108	CONEJERO MARQUEZ YOLANDA	21/09/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	2	11	9	15			
1076	1109	DURANTEZ GIL MARTA	02/10/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	18	6	2	11	9	15			
1077	1110	MARIN LOPEZ JUAN IGNACIO	03/09/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	18	6	9	11	9	15			
1078	1111	ROSSIGNOLI ARRIAGA JOSE	01/11/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUESCA)	18	6	2	11	9	15			
1079	1112	ALONSO FERNANDEZ VIRNA MARIA	28/02/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	3	11	9	15			
1080	1113	VIVO PINA ANTONIO JESUS	28/01/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	18	6	2	11	9	15			
1081	1114	RODA ALCAYDE JAVIER	20/04/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	18	6	3	11	9	15			
1082	1115	MIRANDA DE MIGUEL M. CONCEPCION	11/12/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	18	6	3	11	9	15			
1083	1116	CALVETE GARCIA EVA MARIA	23/12/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	18	6	3	11	9	15			
1084	1117	FERNANDEZ GUTIERREZ ARANZAZU	18/07/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	18	6	7	11	9	15			
1085	1118	MAS CURIA EVA MARIA	21/10/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	18	6	2	11	9	15			
1086	1119	GOMEZ PONCE MARIOLA	24/06/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	18	6	2	11	9	15			
1087	1120	PASTOR BARBERA M. DEL CARMEN	22/08/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	18	6	2	11	9	15			
1088	1121	BARATA PARTIDO ENRIQUE	25/07/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	18	6	2	11	9	15			
1089	1122	YEBRA ROVIRA DIEGO	28/04/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOZ)	18	6	2	11	9	15			
1090	1123	RODRIGUEZ JIMENEZ CARLOS	19/09/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	3	11	9	15			
1091	1124	SANCHEZ LORENZO MIGUEL ANGEL	26/09/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MOTRIL)	18	6	2	11	9	15			
1092	1125	DE LAS HERAS GARCIA MARIA	01/05/1971	FISCAL DE LA SALA DE COOPERACION PENAL INTERNACIONAL (MADRID)	18	6	2	11	9	15			
1093	1126	FERNANDEZ PEREZ NATALIA	21/03/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	18	6	2	11	9	15			
1094	1127	MARCO MACIAN INMACULADA	18/06/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	3	11	9	15			
1095	1128	COMPANY CATALA JOSE MIGUEL	23/12/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	18	6	3	11	9	15			
1096	1129	GARCIA CRESPO LYDIA MARIA	29/03/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	18	6	9	11	9	15			
1097	1130	MUNOZ MOTA OLGA	19/07/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	3	11	9	15			
1098	1131	ARMAS ROLDAN ENRIQUETA	29/12/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	18	6	9	11	9	15			
1099	1132	SANTOS HERRERO MARIA GLORIA	03/09/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUESCA)	18	6	2	11	9	15			
1100	1133	SOTOMAYOR ALARCON NORBERTO	16/07/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	18	6	2	11	9	15			
1101	1134	HERRERO ALONSO AGUSTIN	19/12/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	9	11	9	15			
1102	1135	RAIMUNDO RODRIGUEZ MARIA JESUS	30/12/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	3	11	9	15			
1103	1136	CISNEROS DEL PRADO JUAN JACOBO	10/04/1967	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	18	6	2	11	9	15			
1104	1137	ROCA AGUSTI NIEVES	01/01/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	18	6	2	11	9	15			
1105	1138	FERNANDEZ PEREZ MARIA PILAR	25/08/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)	18	6	2	11	9	15			
1106	1139	GARCIA GARCIA LUIS ARAN	15/05/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LORCA)	18	6	9	11	9	15			
1107	1140	MARTIN-FORERO BRAVO ANA MARIA	15/11/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	18	6	3	11	9	15			
1108	1141	LOMAS GARRIDO JUAN MIGUEL	07/06/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ÚBEDA)	18	6	2	11	9	15			
1109	1142	NOVOA MORENO MARIA ISABEL	29/12/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	18	6	0	11	9	15			
1110	1143	CASTRO CAAMAÑO ANA MARIA	27/08/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	18	6	3	11	9	15			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1111	1144	FRAGA LOPEZ MARIA LUISA	22/12/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	18	6	9	11	9	15			
1112	1145	CORONADO MUÑOZ M. CONCEPCION	06/06/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	18	6	3	11	9	15			
1113	1146	GONZALEZ MORAL M. TERESA	22/03/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORRELAVEGA)	18	6	3	11	9	15			
1114	1147	MARTINEZ RANCAÑO ALBERTO	14/07/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	18	6	3	11	9	15			
1115	1148	PALOMAR MARCOS ANA MARIA	27/01/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	18	6	3	11	9	15			
1116	1149	DIAZ CASTELLANOS M. DEL ROCIO	30/11/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	18	6	3	11	9	15			
1117	1150	LOPEZ UBIETO SILVIA ISABEL	25/05/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	18	6	0	11	9	15			
1118	1151	GAZAPO MEDINA TERESA MARIA	03/05/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOBENDAS)	18	6	9	11	9	15			
1119	1152	CASASUS VALERO SILVIA	25/11/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	18	6	3	11	9	15			
1120	1153	LOPEZ GALLEGO JOAQUIN	12/11/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	18	6	3	11	9	15			
1121	1154	COTOS ESPERANZA JOSE RAMON	06/12/1945	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	17	11	8	11	9	15	7	8	9
1122	1155	DOMINGUEZ PECO ELENA MARIA	24/05/1975	FISCAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	16	5	22	11	9	15			
1123	1156	UNZUETA ELORRIAGA LEIRE	14/11/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	16	5	26	11	9	15			
1124	1157	CAÑAL FERNANDEZ DE PEÑARANDA JOSE MARIA	21/02/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	16	5	18	11	8	15			
1125	1158	ROMERO ESTEBAN PABLO JOSE	18/04/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	16	5	22	11	8	15			
1126	1159	OLLOQUI ARANA MARTA	20/08/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	16	5	22	11	7	15			
1127	1160	ARCINIEGA CANO M. PILAR	12/07/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUESCA)	16	5	22	11	6	15			
1128	1161	LOPEZ GOMEZ CONCEPCION	24/04/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	16	5	19	11	6	15			
1129	1162	HOLGADO MADRUGA MARTA	12/07/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	16	5	22	11	6	15			
1130	1163	BUENO PEÑA JOSE LUIS	19/10/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	16	5	18	11	6	15			
1131	1164	OTEGUI LLONA ANE MIREN	19/02/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	16	5	26	11	6	15			
1132	1165	ESCUDERO MORA MARIA DEL CARMEN	12/08/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	16	5	22	11	5	15			
1133	1166	RAMIREZ-CARDENAS FERNANDEZ DE AREVALO FAINE	24/08/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOZ)	16	5	22	11	5	15			
1134	1167	HERNANDEZ ESCOBAR MARIA ISABEL	10/05/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	16	5	22	11	5	15			
1135	1168	DE LA MUELA PALOMARES SANDRA M.	02/10/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BARAKALDO)	16	5	22	11	4	15			
1136	1169	FERNANDEZ RIVERO RAQUEL	13/06/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOBENDAS)	16	5	22	11	3	15			
1137	1170	CHACON DAVILA NIEVES	24/02/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	16	5	22	11	3	15			
1138	1171	LASO MOTA ANA ISABEL	17/09/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	16	5	22	11	3	15			
1139	1172	CALVO LOPEZ DAVID	11/06/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	16	5	19	11	3	15			
1140	1173	GOMEZ VILLORA JERONIMO E.	14/03/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	16	5	22	11	3	15			
1141	1174	MESONES ORUE ELSA	20/09/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (AVILÉS)	16	5	22	11	3	15			
1142	1175	LAJO INFANTE PILAR	24/07/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEGOVIA)	16	5	22	11	3	15			
1143	1176	TORRES CLEMENTE ESTHER	25/11/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOBENDAS)	16	5	22	11	3	15			
1144	1177	JAUDENES CASAUBON JOSE LUIS	13/08/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	16	5	18	11	3	15			
1145	1178	BENTERRAK AYENZA FATIMA GREGORI	14/06/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	16	5	22	11	3	15			
1146	1179	ALBENDEA CORDOBA ISABEL	25/03/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	16	5	22	11	3	15			
1147	1180	DIEZ MORENO SONIA	18/06/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	16	5	22	11	3	15			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1148	1181	GRAU LOPEZ PAULA	06/09/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	16	5	22	11	3	15			
1149	1182	NICOLAS GARCIA CONCEPCION	03/09/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	16	5	22	11	3	15			
1150	1183	BARATECH IBAÑEZ JUAN	08/10/1967	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUESCA)	16	5	22	11	3	15			
1151	1184	MONSALVE CORDOVA LEONOR	29/12/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	16	5	22	11	3	15			
1152	1185	GARCIA-BERRO MONTILLA CARLOS	20/02/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	16	5	22	11	3	15			
1153	1186	RODRIGUEZ LOPEZ ISABEL	17/06/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VÉLEZ-MÁLAGA)	16	5	18	11	3	15			
1154	1187	DE LA CERA GALACHE EVA MARIA	29/03/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	16	5	22	11	3	15			
1155	1188	GOMEZ-RODULFO DE SOLIS ANGELA	07/03/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (MADRID)	16	5	22	11	3	15			
1156	1189	PEDREIRA CARDENAS MANUEL ANGEL	11/02/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VITORIA-GASTEIZ)	16	5	23	11	3	15			
1157	1190	CAMPAYO SOLER DAVID	12/01/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA CARTAGENA	16	5	20	11	3	15			
1158	1191	MARTIN PEINADOR GEMMA	11/09/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	16	5	22	11	3	15			
1159	1192	ALZUETA ALBO SUSANA	10/12/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	16	5	22	11	3	15			
1160	1193	MARTINEZ MARZAL M. ANGELES	31/03/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	16	5	22	11	3	15			
1161	1194	PARRILLA ROJAS MAGDALENA	03/07/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	16	5	22	11	3	15			
1162	1195	PEREZ MARTINEZ ENCARNACION C	02/02/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALBACETE)	16	5	22	11	3	15			
1163	1196	ACEBAL GIL CECILIA MARIA	26/09/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS)	16	5	20	11	3	15			
1164	1197	BANDE LOPEZ BARBARA	07/09/1974		16	5	22	11	3	15			
1165	1198	TENA FRANCO MARTA ALMUDENA	25/07/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	16	5	22	11	3	15			
1166	1199	MIRO RODRIGUEZ EMILIO MANUEL	01/05/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	16	5	18	11	3	15			
1167	1200	LUCIÁÑEZ SANCHEZ M CARMEN	14/01/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	16	5	22	11	3	15			
1168	1201	FERNANDEZ GONZALEZ M BELEN	07/12/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORREAVEGA)	16	5	26	11	3	15			
1169	1202	LOPEZ GOMEZ MARIA YOLANDA	13/09/1968	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ARRECIFE-PTOROSARIO) (ARRECIFE)	16	5	20	11	3	15			
1170	1203	HIDALGO SANCHEZ MARIA RITA	26/01/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	16	5	18	11	3	15			
1171	1204	CAMARA PEREZ TERESA	28/10/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	16	5	26	11	3	15			
1172	1205	FRIAS MARTINEZ ROSA MARIA	07/06/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	16	5	22	11	3	15			
1173	1206	RAMIREZ RUIZ ROSARIO	04/06/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	16	5	26	11	3	15			
1174	1207	PADIN JUY JUAN CARLOS	30/12/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	16	5	20	11	3	15			
1175	1208	BREZMES CARAMANZANA ROBERTO	07/10/1971	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LUGO)	16	5	26	11	3	15			
1176	1209	LEYVA MUÑOZ JOSE LUIS	05/01/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MOTRIL)	16	5	23	11	3	15			
1177	1210	YAÑEZ SANCHEZ HUGO	11/01/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	16	5	23	11	3	15			
1178	1211	GARROTE GOMEZ M JESUS	15/03/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	16	5	26	11	3	15			
1179	1212	ARIAS DOMINGUEZ MONICA	10/06/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	15	5	25	11	3	15			
1180	1213	ORTIZ MALLOL YOLANDA ROCIO	18/06/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	15	6	2	11	3	15			
1181	1214	FUENTES AGUILAR MARIA VICTORIA	27/12/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	15	5	29	11	3	15			
1182	1215	DIEZ GARCIA MARIA CARMEN	08/10/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (CAMBADOS)	15	5	25	11	3	15			
1183	1216	CANO ANTON JULIO	23/05/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	15	5	28	11	3	15			
1184	1217	GONZALEZ FERNANDEZ GABRIEL	14/02/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	15	5	28	11	3	15			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1185	1218	LUACES MASAVEU JAIME	26/04/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MAJADAHONDA)	15	5	25	11	3	15			
1186	1219	SANZ FERNANDEZ-VEGA MARIO JESUS	02/01/1972	FISCAL DE LA SALA DE SEGURIDAD VIAL (MADRID)	15	5	25	11	0	15			
1187	1220	MARTINEZ TERUEL ELENA MARIA	20/07/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	15	5	28	10	11	26			
1188	1221	ABAD RODRIGUEZ VIRGINIA	22/04/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	15	5	28	10	11	15			
1189	1222	PELLON SUAREZ DE PUGA LAURA	20/02/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	15	5	29	10	11	15			
1190	1223	SAEZ MALCEÑIDO EMILIO	24/05/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	15	6	2	10	10	21			
1191	1224	FERNANDEZ BEZANILLA ELENA	29/03/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	15	5	28	10	10	17			
1192	1225	GARCIA ANDREU CARLOS	28/03/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	15	5	29	10	10	17			
1193	1226	BOADO OLABARRIETA MARIA	17/02/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	15	5	25	10	10	15			
1194	1227	GOMEZ LOPEZ M ISABEL	09/10/1973	FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CUENCA)	15	5	28	10	9	15			
1195	1228	LAVADO AUTRIC CLARA	02/07/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	15	5	29	10	9	15			
1196	1229	TUREGANO ACOSTA CESAR	09/05/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÉRIDA)	15	5	25	10	9	15			
1197	1230	FONTS TORRES ANNA	04/03/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (REUS)	15	5	28	10	9	15			
1198	1231	PAREJO MESA ANA CAROLINA	16/11/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LINARES)	15	5	25	10	9	15			
1199	1232	ARRANZ ARRANZ RAQUEL	18/09/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA (LOGROÑO)	15	5	25	10	9	15			
1200	1233	MARTINEZ SEBASTIAN GEMA	13/07/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	15	6	2	10	9	15			
1201	1234	RUIZ DE MOLINA SANCHEZ JOSE MIGUEL	29/08/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	15	5	28	10	9	15			
1202	1235	GUTIERREZ CRUZ Mª PIEDAD	15/12/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	15	5	28	10	9	15			
1203	1236	SANTOS LEON MARIA	12/01/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LEÓN)	15	5	25	10	9	15			
1204	1237	GARCIA-MAROTO GONZALEZ IGNACIO MIGUEL	29/09/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	15	5	28	10	9	15			
1205	1238	CUERVO ESTRADA MARIA PILAR	16/09/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	15	5	28	10	9	15			
1206	1239	PAZOS PIÑEIRO JOSE ALEJANDRO	02/06/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	15	5	25	10	9	15			
1207	1240	ALONSO GONZALEZ ANA BELEN	27/03/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	15	5	28	10	9	15			
1208	1241	RODRIGUEZ TUÑAS MARIA DOLORES	18/10/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	15	6	2	10	9	15			
1209	1242	LOPEZ BLASCO ANA BELEN	15/11/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	15	6	2	10	9	15			
1210	1243	GRANADOS ALBA MONICA	17/12/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	15	5	28	10	9	15			
1211	1244	TORRES CERVERA VICENTE MANUEL	24/06/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	15	5	25	10	9	15			
1212	1245	BALLESTEROS APARICIO SILVIA	04/04/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALBACETE)	15	5	28	10	9	15			
1213	1246	GARCIA GARCIA MONICA	15/10/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	15	5	28	10	9	15			
1214	1247	MIGUEL CRUCES SANTIAGO	14/10/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	15	5	28	10	9	15			
1215	1248	ESPINOSA LARA CRISTINA	15/12/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	15	6	2	10	9	15			
1216	1249	OJEDA BASTIDA JOSE MANUEL	28/04/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	15	5	28	10	9	15			
1217	1250	VIDAL RADIGALES MONICA	18/01/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (CATAYUD)	15	5	28	10	9	15			
1218	1251	RODRIGUEZ MONTEQUIN INMACULADA	08/12/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	15	5	28	10	9	15			
1219	1252	LAMELAS OLIVAN ELISA MARIA	13/07/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	15	5	28	10	9	15			
1220	1253	GONZALEZ SANCHEZ PANIAGUA RAQUEL	22/07/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	15	5	28	10	9	15			
1221	1254	SANCHEZ CERVERA VALDES M INMACULADA	01/12/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	15	5	28	10	9	15			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1222	1255	DIEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	29/03/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	15	5	28	10	9	15			
1223	1256	FERRER SIERRA CRISTINA MARIA	07/10/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (PONFERRADA)	15	5	28	10	9	15			
1224	1257	MIRANDA AGREDA RAUL ANTONIO	22/08/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	15	5	28	10	9	15			
1225	1258	RIVAS MARTIN MANUEL JOSE	12/07/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	15	5	28	10	9	15			
1226	1259	PELLICER DOMINGUEZ GEMMA	27/08/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	15	5	28	10	9	15			
1227	1260	GUTIERREZ VAZQUEZ MARIA CARMEN	09/03/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOBENDAS)	15	6	2	10	9	15			
1228	1261	AMOR LOPEZ ANTONIO	08/09/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	15	5	28	10	9	15			
1229	1262	LOPEZ CATALA MARTA GLORIA	22/04/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	15	5	28	10	9	15			
1230	1263	VALDUEZA VEGA M CRISTINA	21/05/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	15	5	28	10	9	15			
1231	1264	CAMACHO RUBIO MARIA AMPARO	28/07/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (DOS HERMANAS)	15	6	2	10	9	15			
1232	1265	RICO GOMEZ BELEN	06/01/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (AVILÉS)	15	5	28	10	9	15			
1233	1266	COLLADO CESPEDES M. ISABEL	08/09/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	15	5	28	10	9	15			
1234	1267	GARCIA ESTEVEZ EVA MARIA	27/02/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	15	5	25	10	9	15			
1235	1268	PEREZ BARROSO MARCIAL	12/04/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (DOS HERMANAS)	15	5	25	10	9	15			
1236	1269	MARTIN VICENTE M. DEL CARMEN	08/01/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	15	5	28	10	9	15			
1237	1270	MODREGO ARANDA CARMEN	21/11/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCAÑIZ)	15	5	25	10	9	15			
1238	1271	VIDAL HOYO HEREDIO	07/06/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	15	5	28	10	9	15			
1239	1272	GONZALEZ VIVANCOS M. CARMEN	27/03/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	15	5	28	10	9	15			
1240	1273	SANCHEZ MANCHA TERESA	30/09/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	15	5	25	10	9	15			
1241	1274	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	22/11/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	15	5	25	10	8	15			
1242	1275	COBO REUTERS ALBERTO J.	25/11/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	15	5	28	10	7	15			
1243	1276	GARCIA CHICARRA M. DEL ROSARIO	04/03/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	15	5	28	10	5	27			
1244	1277	PAMPLIEGA DE JUAN SONIA MARIA	10/07/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	15	5	28	10	5	16			
1245	1278	MONFORTE RUIZ MARIA ISABEL	24/09/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	15	5	28	10	5	16			
1246	1279	MARTI CRUCHAGA VICENTE	23/10/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/IRUÑA)	15	5	28	10	5	16			
1247	1280	ZARATE CONDE ANTONIO	20/06/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	15	5	28	10	5	16			
1248	1281	IZQUIERDO SILES NATALIA	06/07/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LUCENA)	15	6	1	10	5	16			
1249	1282	TEROL GARAULET ALVARO	09/06/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	15	5	28	10	5	16			
1250	1283	BACHERO SANCHEZ LUCIA	12/03/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	15	6	1	10	5	15			
1251	1284	GARCIA LLORIS JUAN JOSE	04/06/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	15	5	25	10	4	27			
1252	1285	LOPEZ NARBONA MIGUEL	21/09/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	15	5	28	10	4	15			
1253	1286	AGUILERA MARTIN MARIA DE LA PEÑA	29/09/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	15	6	1	10	3	16			
1254	1287	DIAZ-AMBRONA MEDRANO AMELIA	08/01/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	15	5	28	10	3	16			
1255	1288	BERMEJO MONJE FERNANDO	22/02/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	15	5	25	10	3	16			
1256	1289	MARTINEZ SANCHEZ JOSE FRANCISCO	03/05/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUESCA)	15	5	25	10	3	16			
1257	1290	ALONSO LORENZO EVA M	23/10/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	15	5	25	10	3	16			
1258	1291	JIMENEZ CORREAL IVAN PEDRO	21/05/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	14	5	24	10	3	16			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1259	1292	DE LA FUENTE VALDES DAVID	15/07/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (CAMBADOS)	14	5	26	10	3	16			
1260	1293	MORENO FALCO MARIA JOSE	20/02/1973	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALZIRA)	14	5	25	10	3	16			
1261	1294	GONZALEZ DIEZ FCA. PILAR	08/03/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	14	5	25	10	2	15			
1262	1295	FERNANDEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO	04/10/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SALAMANCA)	14	5	24	10	2	14			
1263	1296	GASCO ENRIQUEZ ELENA	11/09/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	14	5	25	10	1	14			
1264	1297	TEJADA BAÑALES CARLOS	11/08/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	14	5	24	10	0	14			
1265	1298	GONZALEZ FERNANDEZ CLAUDIA	21/04/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MONDOÑEDO)	14	5	24	9	11	24			
1266	1299	BARRIO PEÑA CAROLINA	04/12/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	14	5	24	9	11	14			
1267	1300	GARCIA DE LA CONCHA ALVAREZ MARTA	23/04/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	14	5	25	9	10	21			
1268	1301	PEREZ-SERRANO DE RAMON NICOLAS JOSE	19/12/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	14	5	25	9	9	15			
1269	1302	FERNANDEZ GEGUNDE ISABEL	22/05/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MATARÓ-ARENYS) (MATARÓ)	14	5	25	9	9	15			
1270	1303	ROBLES REY ANA MARIA	27/07/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)	14	5	26	9	9	15			
1271	1304	MEDINA VELAZQUEZ MARIA ISABEL	14/12/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	14	5	25	9	9	15			
1272	1305	SANZ IRANZO ANA PILAR	26/07/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANT FELIU DELLOBREGAT)	14	5	25	9	9	15			
1273	1306	CRIBADO GUTIERREZ MARIA JEZABEL	18/06/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	14	5	24	9	9	15			
1274	1307	CATALA ALCAÑIZ MIGUEL MANUEL	31/12/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	14	5	25	9	9	15			
1275	1308	BLANCO QUINTANA MA. DEL CARMEN	02/11/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SALAMANCA)	14	5	24	9	9	15			
1276	1309	PEIRONA AGUELO CARMEN TERESA	25/12/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	14	5	25	9	9	15			
1277	1310	KONDO PEREZ GLORIA YOSHIKO	04/12/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	14	6	1	9	9	15			
1278	1311	DE MATA HERVAS MIGUEL EDUARDO	19/04/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	14	5	25	9	9	15			
1279	1312	BESCOS ARANDA BEATRIZ	05/11/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	14	5	25	9	9	15			
1280	1313	ABA GARROTE SANTIAGO	20/06/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	14	5	25	9	9	15			
1281	1314	CEACERO LORITE FRANCISCO	16/03/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	14	6	1	9	9	15			
1282	1315	DE MIGUEL MORANTE RAQUEL	02/11/1971	FISCAL DE LA MINISTERIO DE JUSTICIA. SERVICIOS CENTRALES (MADRID)	14	5	25	9	9	15			
1283	1316	ARAGON BARNES MARIA MERCEDES	24/02/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	14	6	1	9	9	15			
1284	1317	ROMERO BURGOS ROSA MARIA	25/01/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORREMOLINOS)	14	5	25	9	9	15			
1285	1318	GIL TRUJILLO JESUS	20/05/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	14	5	25	9	9	15			
1286	1319	CEBOLLADA DUESO YOLANDA	27/11/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LLEIDA)	14	5	25	9	9	15			
1287	1320	MORALA FIDALGO EVA MARIA	30/09/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LEÓN)	14	5	25	9	9	15			
1288	1321	LAMAS LOPEZ ANA PILAR	12/10/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	14	5	25	9	9	15			
1289	1322	RUIZ BARCIA MARIA RITA	30/05/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	14	5	26	9	9	15			
1290	1323	REVENGA MONFORTE RAQUEL	09/04/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	14	5	25	9	9	15			
1291	1324	LLUCH PALAU CAROLINA	03/10/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	14	6	1	9	9	15			
1292	1325	PEREZ MARTINEZ EVA	06/05/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	14	5	24	9	9	15			
1293	1326	MATEO COARASA MARIA JOSE	15/06/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	14	5	24	9	9	15			
1294	1327	FERNANDEZ ALONSO RAQUEL	20/10/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	14	5	25	9	9	15			
1295	1328	JIMENEZ GARCIA ANGELA MARIA	05/03/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LUCENA)	14	5	25	9	9	15			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1296	1329	GUTIERREZ CAÑAS FCO. JAVIER	21/07/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	14	5	24	9	9	15			
1297	1330	MENDIZABAL IZQUIERDO MIGUEL ANGEL	02/06/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORREMOLINOS)	14	5	24	9	9	15			
1298	1331	DORREMOCHEA FERNANDEZ BELEN	27/07/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	14	5	24	9	9	15			
1299	1332	IAÑEZ MARTINEZ CARLOS	16/12/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	14	5	25	9	9	15			
1300	1333	SAN JUAN GONZALEZ MARIA LOURDES	30/08/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALENCIA)	14	6	3	9	9	15			
1301	1334	TORNERO TENDERO NURIA	30/06/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALBACETE)	14	6	1	9	9	15			
1302	1335	AVILA ESCARTIN GUILLERMO DE	20/08/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	14	5	25	9	9	15			
1303	1336	GARCIA ARIZA MARIA SILVIA	22/03/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	14	5	25	9	9	15			
1304	1337	SUAREZ CABO LUISA MARIA	05/04/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	14	6	3	9	9	15			
1305	1338	REJAS UGENA AMPARO	25/04/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÉRIDA)	14	5	24	9	9	15			
1306	1339	MARINER BALDOVI SOFIA	19/02/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	14	5	25	9	9	15			
1307	1340	PEREZ SEDANO YOLANDA	03/10/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	14	5	24	9	9	15			
1308	1341	RUIZ BONDIA FELICIDAD	19/06/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	14	5	25	9	9	15			
1309	1342	JIMENEZ CASSO CRISTINA	22/05/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	14	5	25	9	9	15			
1310	1343	GARCIA GARCIA TESEIDA	15/03/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	14	5	25	9	9	15			
1311	1344	MONSERRAT LAPUENTE BARBARA	13/09/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	14	5	25	9	9	15			
1312	1345	LADRON DE CEGAMA ESCUDERO MARIA FUENCISLA	21/07/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)	14	5	25	9	9	15			
1313	1346	SAEZ ILLERA ANA BELEN	27/12/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	14	5	25	9	9	15			
1314	1347	CERDAN URRA ELENA	27/02/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/IRUÑA)	14	5	23	9	9	15			
1315	1348	GONZALEZ RODRIGUEZ EMMA	21/03/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	14	5	26	9	9	15			
1316	1349	SALVADOR MATEOS MARIA BRIGIDA	19/07/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	14	6	3	9	9	15			
1317	1350	LLORCA ALCALA PATRICIA	14/03/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALZIRA)	14	5	25	9	9	15			
1318	1351	BENITO FERNANDEZ MONTSERRAT	20/12/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LAREDO)	14	5	25	9	9	15			
1319	1352	VILLEN MEDINA INMACULADA	19/12/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	14	5	25	9	9	15			
1320	1353	FERNANDEZ GUERRA MANUEL	27/08/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	14	5	24	9	9	15			
1321	1354	MARIN DE LA ROSA FRANCISCO ANGEL	29/10/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BAZA)	14	5	24	9	9	15			
1322	1355	MORENO ORDUNA MARIA BARBARA	01/06/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA EIVISSA	14	5	25	9	9	15			
1323	1356	VALENZUELA FERNANDEZ FRANCISCA ASUNCION	12/11/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LINARES)	14	5	25	9	9	15			
1324	1357	GARCIA HUESA MARIA CRUZ	07/05/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/IRUÑA)	14	6	3	9	9	15			
1325	1358	LEON CERNUDA MARIA OLGA	03/11/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	14	5	24	9	9	15			
1326	1359	COBO CALERO MARIA JOSE	25/05/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	14	5	25	9	9	15			
1327	1360	LECUMBERRI MARTINEZ-MARI NOELIA	14/04/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	14	5	25	9	9	15			
1328	1361	DE LA IGLESIA PALACIOS VALENTIN JOSE	11/04/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA (LOGROÑO)	14	6	3	9	9	15			
1329	1362	RUIZ IBAÑEZ RAFAEL ADRIAN	08/07/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	14	5	25	9	9	15			
1330	1363	OYARZUN FONTANET VALERIE ISABEL	01/11/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (OSUNA)	14	5	25	9	9	15			
1331	1364	CORRERO SEGURA MACARENA	09/08/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	14	5	4	9	9	15			
1332	1365	ORTEGA CALDERON JUAN LUIS	11/08/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (OCAÑA)	13	5	24	9	9	15			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1333	1366	RAMIREZ BLANCO MARIA PAZ	11/03/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	13	5	27	9	9	15			
1334	1367	LOPEZ DE LA TORRE MARIA DEL CARMEN	25/11/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	13	5	23	9	9	15			
1335	1368	COYA LINARES MARIA VANESA	15/08/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	13	5	23	9	9	15			
1336	1369	MARTIN RUBIO ANA BELEN	20/03/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORREMOLINOS)	13	5	23	9	9	15			
1337	1370	BARREIRA BLASCO VICTORIA EUGENIA	04/03/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TERUEL)	13	5	20	9	9	15			
1338	1371	SORIANO PASCUAL MANUEL	19/07/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (GANDIA)	13	6	2	9	9	15			
1339	1372	IBAÑEZ SANZ RAQUEL	25/06/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (GANDIA)	13	6	2	9	9	15			
1340	1373	HERREROS HERNANDEZ INES MARIA	11/08/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	13	5	24	9	9	15			
1341	1374	GARCIA DIEZ MONSERRAT	19/10/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	13	5	24	9	9	15			
1342	1375	PALMA CARAZO MONTSERRAT	16/04/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	13	5	18	9	9	15			
1343	1376	RODENAS MOLINA JAVIER	30/08/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	13	6	1	9	9	15			
1344	1377	BLANCO ALONSO JOSE ANTONIO	06/03/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	13	5	24	9	9	15			
1345	1378	SANCHEZ ARANDA MARIA PILAR	13/12/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LLEIDA)	13	6	2	9	9	15			
1346	1379	ZURDO GARAY-GORDOVIL MARIA CRISTINA	17/07/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	13	5	18	9	9	15			
1347	1380	POBRE MENGUY JORGE JESUS	20/05/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA)	13	5	24	9	9	15			
1348	1381	DURAN BOLLO ROCIO	02/06/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	13	6	2	9	9	15			
1349	1382	STAMPA FUENTE IGNACIO	20/12/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	13	6	1	9	9	15			
1350	1383	CAMPOS MARTIN PATRICIA ASCENSION	31/05/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	13	5	20	9	9	15			
1351	1384	NICAS CABALLERO ARTURO JESUS	02/05/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (DOS HERMANAS)	13	6	2	9	9	15			
1352	1385	ROJAS RODRIGUEZ SILVIA	14/08/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (CEUTA)	13	5	23	9	9	15			
1353	1386	AZCUE LABAYEN OIHANA	24/05/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	13	5	18	9	9	15			
1354	1387	LOPEZ-YUSTE PADIAL CONCEPCION	25/11/1974	FISCAL DE LA UNIDAD DE APOYO	13	5	23	9	9	15			
1355	1388	CONTRERAS RODRIGUEZ MARIA JOSE	06/02/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	13	5	23	9	9	15			
1356	1389	VERDUGO MORENO MARIA TERESA	05/09/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	13	5	24	9	9	15			
1357	1390	MUÑOZ DE DIOS SAEZ ANA MARIA	19/03/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	13	6	2	9	9	15			
1358	1391	GOSALVEZ OLMO PEDRO JOSE	22/07/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	13	6	2	9	9	15			
1359	1392	LOPEZ RIERA ISABEL	05/09/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	13	6	2	9	9	15			
1360	1393	SANCHEZ SANCHEZ MARTA	27/02/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SALAMANCA)	13	6	2	9	9	15			
1361	1394	PALLARES FOUILLADE ARMELLE	23/09/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	13	6	2	9	9	15			
1362	1395	ROMERO SOLER MARIA CONSUELO	24/01/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	13	6	2	9	9	15			
1363	1396	LEON FERNANDEZ DAVID JOSE	14/03/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (FUENGIROLA)	13	5	20	9	9	15			
1364	1397	SAGREDO CAÑAVATE JUAN ANTONIO	03/09/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	13	6	2	9	9	15			
1365	1398	RAMOS ARES MARIA BEGOÑA	04/04/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	13	6	2	9	9	15			
1366	1399	VELLIBRE MIRANDA MARIA BELEN	24/12/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	13	6	2	9	9	15			
1367	1400	ARIAS ROBLES MONICA	02/01/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	13	5	20	9	9	15			
1368	1401	LAZARO MARTINEZ NURIA	08/06/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	13	5	20	9	9	15			
1369	1402	SERRANO-JOVER GONZALEZ JAIME	24/06/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	13	5	20	9	9	15			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1370	1403	TORRES MOURULLO MARIA CONSUELO	14/06/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (DOS HERMANAS)	13	6	2	9	9	15			
1371	1404	GONZALEZ VERDEJO SARA	14/07/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LINARES)	13	6	2	9	9	15			
1372	1405	GONZALEZ SANZ JUAN IGNACIO	24/08/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	13	6	2	9	9	15			
1373	1406	MENDEZ LOPEZ ANA MARIA	28/07/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	13	5	23	9	9	15			
1374	1407	LOBATO CAMBERO MARIA DE LA MONTAÑA	04/07/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÉRIDA)	13	6	2	9	9	15			
1375	1408	FRIAS MARTINEZ EMILIO	18/07/1978	FISCAL DE LA MINISTERIO DE JUSTICIA. SERVICIOS CENTRALES (MADRID)	13	6	2	9	9	15			
1376	1409	VINUESA MORA MARIA ARANZAZU	29/08/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	13	6	2	9	9	15			
1377	1410	FERREIRA MORALES CRISTINA	27/05/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	13	6	2	9	9	15			
1378	1411	RIAZA SUAREZ LETICIA	13/06/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	13	5	20	9	9	15			
1379	1412	GARCIA ROMERO MARIA ELENA	07/02/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	13	5	23	9	9	15			
1380	1413	CONTRERAS BRAVO ISABEL MARIA	09/12/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	13	6	2	9	8	25			
1381	1414	ORIOLA PERIS MARIA CARMEN	05/06/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	13	6	2	9	8	25			
1382	1415	LOPEZ MALDONADO INMACULADA	17/10/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOBENDAS)	13	6	2	9	8	25			
1383	1416	MARTIN FUSELLAS Mª. DEL CARMEN	12/12/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	13	6	2	9	8	25			
1384	1417	BATALLER LARA SERGIO	29/05/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VINARÓS)	13	5	20	9	8	25			
1385	1418	RAMOS CANOSA MARIA	14/01/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	13	6	2	9	8	25			
1386	1419	GARCIA RODRIGUEZ ANGEL JOAQUIN	07/09/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ARONA)	13	5	20	9	8	25			
1387	1420	PERRINO PEREZ ANGEL LUIS	09/05/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	13	6	2	9	8	25			
1388	1421	DAVILA DE LEON MARTA	30/11/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	13	5	20	9	8	25			
1389	1422	HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA EUGENIA	31/03/1972	FISCAL DE LA MINISTERIO DE JUSTICIA. SERVICIOS CENTRALES (MADRID)	13	5	23	9	8	25			
1390	1423	GONZALO MINGUEZA M. CARMEN	23/10/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	13	6	2	9	8	25			
1391	1424	JUAN AHIS RAQUEL	26/06/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	13	6	2	9	8	25			
1392	1425	SELVA VICEDO MARIA ASUNCION	19/01/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	13	6	2	9	8	25			
1393	1426	LUQUE MOLINA MONTSERRAT	04/11/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	13	6	2	9	8	25			
1394	1427	GIRON CONDE MARIA LUCIA	13/12/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LUGO)	13	5	23	9	8	25			
1395	1428	SALINAS CASADO ALEJANDRO	03/02/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	13	5	23	9	8	25			
1396	1429	RODRIGUEZ FERNANDEZ IGNACIO	29/09/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	12	6	1	9	8	25			
1397	1430	FERNANDEZ DE ARANGUIZ CAÑO JORGE	22/04/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)	12	6	1	9	8	25			
1398	1431	ARMENTEROS LEON MIGUEL	02/03/1978	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (FERROL)	12	5	28	9	8	25			
1399	1432	PODEROSO MARTINEZ MONTSERRAT	01/08/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	12	6	1	9	8	25			
1400	1433	MARTIN SANTOS MARTA	24/06/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	12	6	1	9	8	25			
1401	1434	PECO MORENO FRANCISCO JAVIER	02/03/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	12	6	1	9	8	25			
1402	1435	CAMPILLO ROLDAN LAURA	07/03/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LEÓN)	12	6	1	9	8	25			
1403	1436	MENDEZ CARRIL ELENA MARIA	12/11/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	12	6	1	9	8	25			
1404	1437	ALVAREZ TABOADA LORENA VICTORIA	02/09/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID (MADRID)	12	6	1	9	8	25			
1405	1438	MARQUES OUVIAÑO JAVIER	16/06/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	12	6	1	9	8	25			
1406	1439	PRIETO JUAREZ IVAN	12/07/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	12	6	1	9	8	25			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1407	1440	HERNANDO GARCIA ROSA Mª HENAR	29/09/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	12	6	1	9	8	25			
1408	1441	GURRIARAN FLORIDO ISABEL	22/09/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	12	5	28	9	8	25			
1409	1442	FERNANDEZ ARIAS MARIA DEL CAMINO	04/03/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	12	6	1	9	8	25			
1410	1443	LARA GONZALEZ ANGELA	01/10/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	12	6	1	9	8	25			
1411	1444	VAZQUEZ MORAGA OLALLA	21/12/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	12	6	1	9	8	25			
1412	1445	DE RIVAS VERDE-MONTENEGRO CESAR	01/01/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	12	6	1	9	8	25			
1413	1446	PEREZ CABOT ESPERANZA	28/04/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (OSUNA)	12	6	1	9	8	25			
1414	1447	ARIAS SUAREZ MARIA	11/12/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (AVILÉS)	12	6	1	9	8	25			
1415	1448	TERUEL GARCIA MANUEL ISMAEL	10/04/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	12	6	5	9	8	25			
1416	1449	DIAZ ESTEBAN MARIA MERCEDES	22/06/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	12	6	1	9	8	25			
1417	1450	PASTOR DELAS ESTEFANIA	07/08/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALZIRA)	12	6	1	9	8	25			
1418	1451	CANAL PASCUAL SONIA	11/10/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	12	6	1	9	8	25			
1419	1452	SALVA BESTUE ANA MARIA	24/02/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	12	6	1	9	8	25			
1420	1453	FERNANDEZ GONZALEZ LAURA BELEN	10/05/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	12	6	1	9	8	25			
1421	1454	MARTINEZ BOMBIN CARLOS	02/05/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (COLLADO VILLALBA)	12	5	28	9	8	25			
1422	1455	CALZADA MARTIN SARA	15/01/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	12	6	1	9	8	25			
1423	1456	SOLANA ALVAREZ CECILIA	29/12/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VÉLEZ-MÁLAGA)	12	6	1	9	8	25			
1424	1457	FUERTES DE MENDIZABAL INES	11/01/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	12	6	1	9	8	25			
1425	1458	LOPEZ FONDON Mª PILAR	07/09/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	12	6	1	9	8	25			
1426	1459	VALVERDE MEGIAS ROBERTO	03/11/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	12	6	1	9	8	25			
1427	1460	IZAGUERRI GRACIA Mª PILAR	03/11/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	12	6	1	9	8	25			
1428	1461	CAMBERO VALENCIA LAURA	26/12/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	12	6	1	9	8	25			
1429	1462	GIMENEZ ESTEBAN Mª PILAR	27/02/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	12	6	1	9	8	25			
1430	1463	ROMERO DEL HOMBREBUENO LARA ROSA GEMA	24/10/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	12	5	28	9	8	25			
1431	1464	ANAYA CAMACHO PILAR MARIA	06/04/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	12	5	28	9	8	25			
1432	1465	FERNANDEZ MONTORO Mª JOSE	24/06/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	12	6	1	9	8	25			
1433	1466	ARTES PAYAN MARIA DOLORES	05/12/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	12	6	1	9	8	25			
1434	1467	ARJONA RODRIGUEZ MANUEL LUIS	27/06/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	12	6	1	9	8	25			
1435	1468	BELTRAN JANE MARIA	16/07/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	12	6	1	9	8	25			
1436	1469	BRUALLA GONZALEZ MARIO	08/08/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (OURENSE)	12	5	28	9	8	25			
1437	1470	CANAL PASCUAL SILVIA	11/10/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	12	5	28	9	8	25			
1438	1471	RODRIGUEZ UTRERA JUAN CARLOS	26/02/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	11	3	23	9	8	25			
1439	1472	HORMIGO PEREZ MARIA JOSE	25/05/1977	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÉRIDA)	11	3	24	9	8	25			
1440	1473	OSSORIO CARMONA JUAN MIGUEL	21/06/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	11	4	1	9	8	25			
1441	1474	PEREZ COLOMER NATALIA	20/06/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	11	3	24	9	8	25			
1442	1475	ORTIZ MARQUEZ JOSE MANUEL	19/05/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	11	3	23	9	8	25			
1443	1476	FRUTOS PEREZ-SURIO LAURA	15/08/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TUDELA)	11	4	0	9	8	25			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1444	1477	ALONSO VILLAR MARIA	13/07/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	11	3	23	9	8	25			
1445	1478	MARTINEZ MORENO RAUL	16/10/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	11	4	0	9	8	25			
1446	1479	CERVIÑO AYUCAR ITZIAR	01/04/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	11	4	0	9	8	25			
1447	1480	SANCHEZ OVEJERO ALFONSO	29/05/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	11	3	24	9	8	25			
1448	1481	ESTEVEZ SANCHEZ LUIS LEOPOLDO	20/06/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	11	3	20	9	8	25			
1449	1482	MIRANDA GONZALEZ DIEGO	29/03/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	11	4	0	9	8	25			
1450	1483	BORJABAD TENA PABLO ALBERTO	02/10/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	11	4	0	9	8	25			
1451	1484	VILLALONGA TOMAS ALFONSO	11/11/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	11	3	24	9	8	25			
1452	1485	DIEZ BLANCO MARIA JOSE	10/11/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	11	4	0	9	8	25			
1453	1486	SALTO TORRES JULIAN	25/04/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	11	3	24	9	8	15			
1454	1487	ELORZA MORENO ALEJANDRA	25/10/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	11	3	23	9	7	29			
1455	1488	OLAZARAN VICENTE CRISTINA	21/02/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VÉLEZ-MÁLAGA)	11	3	23	9	7	29			
1456	1489	ESLAVA NAVARRO MARIA DEL PILAR	17/06/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALBACETE)	11	4	0	9	7	5			
1457	1490	BENITEZ PEREZ-FAJARDO FERNANDO	06/09/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	11	3	23	9	6	14			
1458	1491	COLUMNA MARTIN MARTA	26/01/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MAJADAHONDA)	11	4	0	8	11	25			
1459	1492	ANDRES FERNANDEZ MARIA AURORA	14/10/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	11	3	23	8	11	11			
1460	1493	GUIJARRO GUIJARRO ANTONIA	03/03/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	11	3	23	8	9	29			
1461	1494	CORRAL HERMOSO MARIA DE LA PAZ	14/03/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MOTRIL)	11	4	0	8	9	0			
1462	1495	ORTEGA SILVA FRANCISCO	25/01/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÉRIDA)	11	3	20	8	9	0			
1463	1496	GARCIA NAVAS JOSE LUIS	02/07/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	11	4	0	8	9	0			
1464	1497	MONTAÑES LOZANO JUAN DIEGO	24/07/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	11	4	0	8	9	0			
1465	1498	BORREGO AREVALO MARIA FRANCISCA	21/06/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	11	3	23	8	9	0			
1466	1499	LUCIA MORLANS JORGE	08/10/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LLEIDA)	11	4	0	8	9	0			
1467	1500	GRAS SAUQUET PATRICIA	02/12/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	11	4	0	8	9	0			
1468	1501	CASORRAN MARTINEZ CESAR JOSE	08/10/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	11	3	20	8	9	0			
1469	1502	ABAD GARCIA MARIA DEL CARMEN	13/03/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	11	3	20	8	9	0			
1470	1503	GIL REGUERO MARIA LUCIA	23/04/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MONDOÑEDO)	11	3	23	8	9	0			
1471	1504	MANSILLA LOZANO CARMEN	29/11/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALBACETE)	11	3	24	8	9	0			
1472	1505	CORTES ROJO ANTONIO	09/02/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	11	3	23	8	9	0			
1473	1506	NORRO RUIPEREZ EDUARDO	18/05/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MAÓ-MAHÓN)	11	3	23	8	8	6			
1474	1507	SEOANE GONZALEZ RAQUEL	02/04/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	11	3	20	8	8	6			
1475	1508	NAVARRO ROS MARIA DEL CARMEN	30/05/1976	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA EIVISSA	11	3	23	8	8	6			
1476	1509	CARMONA MIJARES LAURA MARIA	20/09/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (COLLADO VILLALBA)	11	4	0	8	8	6			
1477	1510	SERRANO ZARAGOZA OSCAR	23/10/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	11	4	0	8	8	6			
1478	1511	GARCIA-MALVAR GUTIERREZ RAMON FERNANDO	10/05/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALENCIA)	11	4	0	8	8	6			
1479	1512	RODENAS LOPEZ JOSE ANTONIO	30/06/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	11	3	24	8	8	6			
1480	1513	CAMPO RUBIN MONICA	18/02/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	11	3	23	8	8	6			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1481	1514	NAVARRO RAMIREZ RAQUEL	10/08/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	11	4	0	8	8	6			
1482	1515	DE LOMBERA CASAS MARGARITA	04/05/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	11	3	23	8	8	6			
1483	1516	ELIAS GIL FERNANDO	03/07/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	11	4	0	8	8	6			
1484	1517	RENDO COLLAZO LORENA	30/11/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	11	3	20	8	8	6			
1485	1518	GUTIERREZ GARCIA YOLANDA	10/11/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	11	3	23	8	8	6			
1486	1519	ROJO ABAD MARTA MARIA	18/02/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	11	3	23	8	8	6			
1487	1520	MARIN YEPES ROSA BELEN	07/06/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	11	4	0	8	8	6			
1488	1521	CIVERA TORRES MARIA ENRIQUETA	14/10/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	11	3	23	8	8	6			
1489	1522	PEDRERO REDONDO MARIA CATALINA	15/01/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	11	3	20	8	8	6			
1490	1523	SANTOS RODADO MARIA DEL PRADO	28/08/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	11	4	0	8	8	6			
1491	1524	LLINARES GUARDIOLA ELENA	18/11/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	11	4	0	8	6	3			
1492	1525	MELGAREJO UTRILLA CRISTOBAL	27/03/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	11	4	0	8	3	24			
1493	1526	BONET MARTINEZ SANDRA	18/06/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	11	4	0	8	3	15			
1494	1527	GARCIA ASUNCION MARIA ELENA	28/04/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	11	4	0	8	1	16			
1495	1528	RODRIGUEZ GARCIA MARIA	24/05/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MELILLA)	11	3	23	8	1	16			
1496	1529	VALVERDE REGEL ALVARO	28/10/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	11	4	0	8	1	6			
1497	1530	GUTIERREZ DIEZ-QUIJADA MANUEL	05/11/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SALAMANCA)	11	3	20	7	11	17			
1498	1531	MARTINEZ VALERO CARMEN	16/05/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	11	4	0	7	11	12			
1499	1532	BERCERUELO BLANCO MARIA DEL PILAR	12/11/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZAMORA)	11	3	20	7	11	0			
1500	1533	GALLEGO FERNANDEZ MARTA	14/02/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	11	4	0	7	10	21			
1501	1534	ROCHE BARINGO BLANCA MARIA	03/12/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUESCA)	11	4	0	7	10	6			
1502	1535	SANZ FABREGAT MARGARITA	30/07/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	11	4	0	7	9	22			
1503	1536	LOPEZ FERNANDEZ NOEMI	23/07/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZAMORA)	11	4	0	7	9	17			
1504	1537	MARTIN GONZALEZ FELIX	31/07/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	11	4	0	7	9	17			
1505	1538	ASINS POCОВI MARIA CARMEN	27/05/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	11	4	0	7	9	17			
1506	1539	FERNANDEZ SEIJO CARLOS	21/05/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	11	3	20	7	9	17			
1507	1540	RODRIGUEZ FIGUEROA REBECA	13/07/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	11	4	0	7	9	17			
1508	1541	SAN BALDOMERO JIMENEZ JOSE MANUEL	27/03/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	11	4	0	7	9	17			
1509	1542	GONZALEZ SANTORUM CARLOS	21/07/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MANZANARES)	11	4	0	7	9	17			
1510	1543	MARIN CANO ANGEL	05/10/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SALAMANCA)	11	4	0	7	9	17			
1511	1544	CALETRIO ARCOS ANA CARMEN	23/05/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	11	3	23	7	9	17			
1512	1545	CRUZ DEL PINO JESUS JUAN	17/04/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	11	3	20	7	9	17			
1513	1546	PARDO SAIZ YOLANDA MARIA	21/09/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORRELAVEGA)	11	3	20	7	9	17			
1514	1547	VARELA CASTEJON PABLO	30/11/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	11	3	20	7	9	17			
1515	1548	GOMEZ ARIAS JOSE ANTONIO	09/09/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MAJADAHONDA)	11	3	23	7	9	17			
1516	1549	MARTINEZ CERRADA CARLOS	06/11/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TUDELA)	11	4	0	7	9	17			
1517	1550	FAGIL FRAGA SANDRA MARIA	24/07/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (MADRID)	11	4	0	7	9	17			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1518	1551	ARENERE MENDOZA MARIA VICTORIA	22/08/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUESCA)	11	3	23	7	9	17			
1519	1552	VALDIVIESO BARRERA ELENA	10/11/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	11	4	0	7	9	17			
1520	1553	PEREGRIN MARCOS SILVIA BASILISA	17/06/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	11	3	20	7	9	17			
1521	1554	GARCIA SUAREZ SANDRA	10/10/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (PONFERRADA)	11	4	0	7	9	17			
1522	1555	MARIN GILA JUAN	15/02/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	11	4	0	7	9	17			
1523	1556	ESCORIHUELA GALLEN CARLOS VICENTE	30/12/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	11	4	0	7	9	17			
1524	1557	CABALEIRO ARMESTO ALEJANDRO	25/02/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	11	4	0	7	9	17			
1525	1558	SANCHEZ RAMOS CRISTINA	22/01/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	11	3	23	7	9	17			
1526	1559	LADRON PIJUAN LAIA	20/05/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	11	4	0	7	9	17			
1527	1560	MARTINEZ GONZALEZ IVAN	30/01/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	11	3	20	7	9	17			
1528	1561	COTS CAÑADA MIGUEL MARIA	15/04/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (GANDIA)	11	4	0	7	9	17			
1529	1562	GARCIA PALOMO GLORIA	16/04/1975	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GRANOLLERS)	11	3	20	7	9	17			
1530	1563	ORDAS YUSTO LAURA	06/11/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ARONA)	11	3	20	7	9	17			
1531	1564	MOREJON FENOY ROCIO	04/05/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	11	3	23	7	9	17			
1532	1565	SANCHEZ QUINTANA BELEN	11/06/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	11	3	20	7	9	17			
1533	1566	GORDILLO RUBIO MARIA	13/06/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	11	3	20	7	9	17			
1534	1567	VIDAL BENEYTO FRANCISCO DE PAULA	01/04/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANTA CRUZ DE LAPALMA)	11	3	20	7	9	17			
1535	1568	MOLINER DE LA FUENTE CRISTINA	30/01/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANTA CRUZ DE LAPALMA)	11	3	20	7	9	17			
1536	1569	MARTIN ARENAS MARIA MICAELA	23/03/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	11	3	20	7	9	17			
1537	1570	CUBILLO MARTIN ISABEL	03/06/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (GANDIA)	10	3	18	7	9	17			
1538	1571	URIAS GAMONAL MARIA INMACULADA	28/12/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	10	3	17	7	9	17			
1539	1572	ROJO ALONSO ANA VICTORIA	09/02/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (COLLADO VILLALBA)	10	3	18	7	9	17			
1540	1573	CALVO ISASI MARIA EUGENIA	09/11/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUESCA)	10	3	14	7	9	17			
1541	1574	MATEO AZUARA CRISTINA LORENA	24/02/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	10	3	18	7	9	17			
1542	1575	RIVERO FERNANDEZ ROCIO	03/07/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	10	3	17	7	9	17			
1543	1576	MIÑARRO MARZAL ANA CATALINA	17/11/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LORCA)	10	3	18	7	9	17			
1544	1577	ORTIZ GARCIA ELENA	06/03/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOBENDAS)	10	3	18	7	9	17			
1545	1578	FONDO ROCA SABELA	29/05/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	10	3	14	7	9	17			
1546	1579	FIGUEROA ALVAREZ JUDITH ELENA	23/07/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	10	3	14	7	9	17			
1547	1580	CASTELLS DOMENECH VICTOR	18/07/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L')	10	3	14	7	9	17			
1548	1581	GOMEZ EXPOSITO SARA	18/06/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	10	3	14	7	9	17			
1549	1582	DURAN GOMEZ PAULA	02/03/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (COLLADO VILLALBA)	10	3	18	7	9	17			
1550	1583	LOPEZ MARTIN ARANTZA	02/05/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	10	3	24	7	9	17			
1551	1584	GARCIA MARTIN MARIA DEL PILAR	04/04/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	10	3	18	7	9	17			
1552	1585	ESTEBAN FALCON DOMINGO	11/07/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	10	3	14	7	9	17			
1553	1586	FRAGO AMADA JUAN ANTONIO	24/05/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	10	3	14	7	9	17			
1554	1587	NAVARRO GARCIA PATRICIA	24/05/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	10	3	18	7	9	17			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1555	1588	GALLARDO MONZO JUSTO	22/03/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	10	3	18	7	9	17			
1556	1589	CAÑARTE EZCURRA JUAN MANUEL	10/09/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	10	3	14	7	9	17			
1557	1590	GIMENO AGUILERA ALFREDO	09/03/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOZ)	10	3	18	7	9	17			
1558	1591	BENITO PORTERO Mª DE LOS ANGELES	12/04/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	10	3	14	7	9	17			
1559	1592	PILLADO LOPEZ JOSE LUIS	01/05/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	10	3	24	7	9	17			
1560	1593	NUEVO GOMEZ MIGUEL JORGE	04/10/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	10	3	19	7	9	17			
1561	1594	CLEMENTE FUENTES CARMEN	03/01/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	10	3	17	7	9	17			
1562	1595	ZARCO NOSTI REBECA	10/11/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	10	3	18	7	9	17			
1563	1596	FERNANDEZ FERNANDEZ MARTA ISABEL	03/07/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	10	3	24	7	9	17			
1564	1597	ESTEBAN MESEGUER MARIA	18/08/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L')	10	3	14	7	9	17			
1565	1598	TORRES SAURA SARA	17/02/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	10	3	17	7	9	17			
1566	1599	GARCIA DE PRADO DE OLIVES MARIA CONCEPCION	28/11/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	10	3	18	7	9	17			
1567	1600	MARTIN LOPEZ MARIA ISABEL	04/08/1976	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MELILLA)	10	3	17	7	9	17			
1568	1601	GARCIA DE MIGUEL MARIO	21/05/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	10	3	14	7	9	17			
1569	1602	SANCHEZ MARTINEZ MARIA JOSE	06/06/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	10	3	18	7	9	17			
1570	1603	DE SOTO CARDENAL CRISTINA ALEJANDRA	20/10/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (PLASENCIA)	10	3	18	7	9	17			
1571	1604	LOMBA MONTESDEOCA JESUS JAVIER	03/07/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS)	10	3	14	7	9	17			
1572	1605	SANCHEZ DIAZ MARIA BELEN	21/12/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	10	3	18	7	9	17			
1573	1606	CONDE RUIZ ALMA MARIA	18/03/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	10	3	14	7	9	17			
1574	1607	GALLARDO LERUITE MARTA FRANCISCA	30/08/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GUADALAJARA)	10	11	18	7	9	17			
1575	1608	LOBILLO GARCIA ANA	24/09/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	10	3	14	7	9	17			
1576	1609	COMPANY MALONDA ISABEL	09/03/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALZIRA)	10	3	18	7	9	17			
1577	1610	VEREZ VILAS MERCEDES	14/05/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	10	3	18	7	9	17			
1578	1611	PADILLA RAMOS LUCIA DEBORA	13/12/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ARONA)	10	3	14	7	9	17			
1579	1612	MARIN RODRIGUEZ BLANCA MARTINA	20/09/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	10	3	18	7	9	17			
1580	1613	FERNANDEZ GARCIA BLANCA ESTHER	23/09/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BARAKALDO)	10	3	24	7	9	17			
1581	1614	CASTAÑEDA REDONDO SONIA	22/07/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁCERES)	10	3	18	7	9	17			
1582	1615	RUIZ HERRERO JOSE MARIA	07/09/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	10	3	14	7	9	17			
1583	1616	ARCONADA IBARRA CRISTINA	18/09/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (COLLADO VILLALBA)	10	3	14	7	9	4			
1584	1617	FERNANDEZ ALVAREZ MANUELA	13/09/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	10	3	18	7	6	20			
1585	1618	DE LA FUENTE MENDEZ M. DEL CARMEN	10/07/1971	FISCAL JEFE DE ÁREA DE LA FISCALÍA DE ÁREA CARTAGENA	14	2	8	7	5	20			
1586	1619	CASAS OLEA MARIA FATIMA	19/09/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BAZA)	10	3	18	7	4	19			
1587	1620	RODRIGUEZ ACUÑA IRENE	11/12/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	10	3	17	7	3	1			
1588	1621	GOMEZ BAQUERO ANA MIREYA	19/08/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L')	10	3	14	7	2	19			
1589	1622	CHAVARINO LARAÑO JESUS	27/06/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (AMPOSTA)	9	10	1	7	0	28			
1590	1623	NEVADO HOLGADO ANA BELEN	21/06/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	10	3	18	7	0	15			
1591	1624	ABINZANO MURILLO IGNACIO	20/07/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	10	3	14	7	0	4			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1592	1625	DIAZ TORREJON PEDRO	26/03/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	10	3	18	7	0	3			
1593	1626	TIRADO GALVEZ MARIA CARMEN	27/09/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	10	3	18	6	10	26			
1594	1627	PEREZ FERNANDEZ VERONICA	28/02/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (AVILÉS)	10	3	24	6	10	7			
1595	1628	GARCIA ANDRES ELENA	20/06/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	10	3	14	6	9	17			
1596	1629	MORENO AMAYA MARIA ESTHER	09/04/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	10	3	14	6	9	17			
1597	1630	JUEZ BENGOCHEA ISABEL	31/10/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LLEIDA)	10	3	14	6	9	17			
1598	1631	PORTALES ALBEROLA MARIA	28/12/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	10	3	14	6	9	17			
1599	1632	ALVAREZ GONZALEZ ANA ISABEL	22/05/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (COLLADO VILLALBA)	10	3	14	6	9	17			
1600	1633	ORTA RODRIGUEZ MARIA ANGELES	25/09/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	10	3	18	6	9	17			
1601	1634	GONZALEZ BETANCORT SILVIA	10/03/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	10	3	14	6	9	17			
1602	1635	BONILLA GARCIA VICTORIA	11/06/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	10	3	18	6	9	17			
1603	1636	RODERO NAVARRO EVA	27/08/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	10	3	14	6	9	17			
1604	1637	SERRANO PEDROS MARIA OLGA	28/08/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	10	3	18	6	9	17			
1605	1638	HERNANDEZ PRIETO MARIA DEL SOL	14/06/1966	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SALAMANCA)	10	3	18	6	9	17			
1606	1639	LOPEZ PESQUERA BEATRIZ	04/02/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MATARÓ-ARENYS) (MATARÓ)	10	3	14	6	9	17			
1607	1640	PILLADO QUINTAS VICTOR	27/12/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	10	3	14	6	9	17			
1608	1641	CORDEIRO VILLAR REBECA	28/09/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	10	3	14	6	9	17			
1609	1642	VEIGA VAZQUEZ Mª DE LA ALMUDENA	15/12/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA GIJÓN	10	3	24	6	9	17			
1610	1643	FERNANDEZ JORDA GONZALO	08/08/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	10	3	18	6	9	17			
1611	1644	MONTERO GONZALEZ MARCO	20/03/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	10	3	17	6	9	17			
1612	1645	DE LA ENCINA VARA LAURA	18/05/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	10	3	18	6	9	17			
1613	1646	LAGUNA MARTIN BLANCA	30/10/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	10	3	17	6	9	17			
1614	1647	RUIZ MARTINEZ-CAÑAVATE MANUEL	06/06/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MOTRIL)	10	3	17	6	9	17			
1615	1648	ARROYO MARIN MACARENA	24/08/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	10	3	18	6	9	17			
1616	1649	SEDANO RUEDA MARIA DE LOS ANGELES	06/05/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	10	3	17	6	9	17			
1617	1650	RUIZ MARTINEZ EMMA	14/06/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	10	3	14	6	9	17			
1618	1651	FERNANDEZ-MAQUEDA SAENZ DE SANTA MARIA	17/07/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	10	3	19	6	9	17			
1619	1652	DE JESUS VIZCAINO MARIA CONSUELO	13/01/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	10	3	14	6	9	17			
1620	1653	RAMOS GARCIA CRISTINA BEATRIZ	13/08/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	10	3	14	6	9	17			
1621	1654	MENCIA BARRADO MARIA JIMENA	22/09/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MAJADAHONDA)	10	3	14	6	9	17			
1622	1655	HERNANDEZ LOPEZ NEREIDA MARIA	25/04/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	10	3	14	6	9	17			
1623	1656	DE LA BARGA SANCHEZ MARGARITA	08/01/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	10	3	14	6	9	17			
1624	1657	SARABIA MONTALVO ENRIQUE	23/07/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	10	3	14	6	9	17			
1625	1658	LOJO CORBAL RAMON	15/06/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)	10	3	14	6	9	17			
1626	1659	FERNANDEZ DE PAIZ TOMAS RAFAEL	28/01/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ARRECIFE-PTO ROSARIO) (ARRECIFE)	10	3	14	6	9	17			
1627	1660	DE LA BLANCA GARCIA ANGELES	06/11/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	10	3	14	6	9	17			
1628	1661	ALVAREZ EXPOSITO NATALIA	08/03/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	10	3	24	6	9	17			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1629	1662	MAYOR FERNANDEZ DAVID	31/01/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	10	3	21	6	9	17			
1630	1663	PAREDES CHANCA Mª VICTORIA	09/01/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	10	3	14	6	9	17			
1631	1664	GREDILLA CARDERO MERCEDES	15/09/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GUADALAJARA)	10	3	21	6	9	17			
1632	1665	COBAS VILLANUSTRE XOSE MANUEL	18/04/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	10	3	14	6	9	17			
1633	1666	VILLAFANE DIEZ DIEGO	03/04/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L')	10	3	14	6	9	17			
1634	1667	MENDEZ HERNANDEZ MIGUEL	25/05/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	10	3	14	6	9	17			
1635	1668	SANCHEZ MELLADO FRANCISCO JOSE	22/04/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	10	3	14	6	9	17			
1636	1669	BERMUDEZ GONZALEZ JORGE ARMANDO	10/07/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	10	3	21	6	9	17			
1637	1670	GARCIA ALLER VIRGINIA	29/01/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	10	3	14	6	9	17			
1638	1671	TOVAR FRAILE Mª. DE LAS NIEVES	17/06/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (COLLADO VILLALBA)	10	3	14	6	9	17			
1639	1672	POZO CASAL DEL REY SILVIA ISABEL	20/05/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	10	3	14	6	9	17			
1640	1673	BLANCO QUINTANA MARIA JESUS	11/12/1979	FISCAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	10	3	14	6	9	17			
1641	1674	ISIEGAS LORENTE Mª DEL ROSARIO	21/12/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L')	10	3	14	6	9	17			
1642	1675	RIOS MARTOS RAQUEL DE LOS	29/09/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	10	3	14	6	9	17			
1643	1676	SANCHEZ RECIO MARTA	09/09/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	10	3	21	6	9	17			
1644	1677	SABATER BERMEJO ALMUDENA	31/03/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	10	3	14	6	9	17			
1645	1678	VALLEJO TORRES OSCAR VLADIMIR	14/11/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	10	3	14	6	9	17			
1646	1679	SANCHEZ DEL CUETO DE LA FUENTE RAQUEL	02/03/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ÁVILA)	10	3	21	6	9	17			
1647	1680	FERNANDEZ VIZAN BELEN	03/07/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZAMORA)	10	3	14	6	9	17			
1648	1681	CHACON LEDESMA LUCIA	26/05/1955	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	10	3	14	6	9	17			
1649	1682	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS	05/11/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	10	3	19	6	9	17			
1650	1683	ROYES RAMIREZ SILVIA	24/03/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SEU D'URGELL, LA)	10	3	14	6	9	17			
1651	1684	SAEZ GUTIERREZ MARIA	30/12/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	10	3	14	6	9	17			
1652	1685	CARVAJAL PEDROSA MARIA ANGELES	20/12/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MOTRIL)	10	3	14	6	9	17			
1653	1686	FERNANDEZ CAPOTE MARIA BELEN	06/12/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	9	3	15	6	9	17			
1654	1687	DOMINGUEZ GARCIA BEATRIZ ISABEL	25/03/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	9	3	15	6	9	17			
1655	1688	VALENCIA FERNANDEZ MARIA FATIMA	19/03/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	9	3	15	6	9	17			
1656	1689	RODRIGUEZ FUENTES MARIA IBALLA	15/01/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	9	3	15	6	9	17			
1657	1690	NEMIÑA SUAREZ MARIA	17/12/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (FERROL)	9	3	15	6	9	17			
1658	1691	BOCANEGRA SANCHEZ MARIA TERESA	27/06/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	9	3	15	6	9	17			
1659	1692	ONRUBIA MERA PILAR	02/01/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÉRIDA)	9	3	15	6	9	17			
1660	1693	LOZANO ALONSO EVA MARIA	07/09/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZAMORA)	9	3	15	6	9	17			
1661	1694	MEDRANO ABADIA LEYRE	19/06/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/IRUÑA)	9	3	15	6	9	17			
1662	1695	FERNANDEZ BANCES CRISTINA	24/11/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LEÓN)	9	3	15	6	9	17			
1663	1696	BALDA MAJADA ROSA MARIA	30/08/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	9	3	15	6	9	17			
1664	1697	LESCUN GUTIERREZ M. INES	06/02/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (PONFERRADA)	9	3	15	6	9	17			
1665	1698	CAMPOMANES RODRIGUEZ MARIA	06/11/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	9	3	15	6	9	17			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1666	1699	TALLON SALGADO ROSA MARIA	02/04/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VERÍN)	9	3	15	6	9	17			
1667	1700	SANTOS ECHEVARRIA MARIA DEL PILAR	27/04/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	9	3	15	6	9	17			
1668	1701	CALAFAT DIEZ EVA MARIA	12/09/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOBENDAS)	9	3	15	6	9	17			
1669	1702	GONZALEZ SANZ MONICA	04/09/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	9	3	15	6	9	17			
1670	1703	JIMENEZ YDOATE GONZALO	26/03/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	9	3	15	6	8	26			
1671	1704	NAVAS MARQUEZ ANA VANESA	23/08/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MELILLA)	9	3	15	6	8	11			
1672	1705	DE LA TORRE FORNES ANA	21/05/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	9	3	15	6	8	10			
1673	1706	TORRES ESCOBAR MARIA MERCEDES	20/12/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	9	3	15	6	8	7			
1674	1707	GONZALEZ GUTIERREZ RUTH	19/03/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA EIVISSA	9	3	15	6	8	7			
1675	1708	MARCO GAONA FRANCISCO JOSE	20/12/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	9	3	15	6	6	26			
1676	1709	FUENTE VIDAL RAQUEL DE LA	07/04/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	9	3	15	6	6	24			
1677	1710	DE MOSTEYRIN SAMPALO RICARDO	23/04/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	9	3	15	6	6	13			
1678	1711	AGUADO FERNANDEZ MARIA FLORENTINA	26/10/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	9	3	15	6	6	3			
1679	1712	PALOMO CANO EVA MARIA	26/03/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	9	3	15	6	5	25			
1680	1713	LOZANO GARCIA MARIA JOSE	30/09/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	9	3	15	6	4	15			
1681	1714	LOPEZ RUIZ MARIO	16/12/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA EIVISSA	9	3	15	6	4	5			
1682	1715	CUADRADO GUIRADO YOLANDA MARIA	09/11/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	9	3	15	6	3	15			
1683	1716	GANDARA ALVAREZ MARIA ELENA	18/04/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (FERROL)	9	3	15	6	3	4			
1684	1717	ROZAS ALVARO ARANTZAZU	11/07/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	9	3	15	6	2	4			
1685	1718	FERNANDEZ-CREHUET LOPEZ CRISTINA	26/06/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	9	3	15	5	11	7			
1686	1719	ORDOÑEZ DE BARRAICUA VELASCO MARIA LUISA	07/09/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	9	3	15	5	10	21			
1687	1720	MACEDA RODRIGUEZ VANESSA	17/08/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	9	3	15	5	7	24			
1688	1721	HERRERO CEBRIAN PAULA	26/09/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	9	3	15	5	6	14			
1689	1722	BUELTA RODRIGUEZ SONIA	01/04/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	9	3	15	5	4	5			
1690	1723	SOUTO TABOADA MARIA ELENA	04/01/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (CAMBADOS)	9	3	15	5	2	12			
1691	1724	NAVARRO BURGUERA ELENA MARIA	17/05/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALZIRA)	9	3	15	5	1	1			
1692	1725	RODRIGUEZ LASTRAS PATRICIA	21/12/1978	FISCAL DE LA MINISTERIO DE JUSTICIA. SERVICIOS CENTRALES (MADRID)	9	3	15	5	0	12			
1693	1726	BREA SANCHIZ MARTA	16/12/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	9	3	15	5	0	12			
1694	1727	SOLANO MARINO RAQUEL	07/05/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MANACOR)	9	3	15	4	10	12			
1695	1728	ALBERT ABADIAS ANA	26/07/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUESCA)	9	3	15	4	9	25			
1696	1729	JOVE MARTINEZ DANIEL	27/08/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (FERROL)	9	3	15	4	9	24			
1697	1730	SANCHEZ GARCIA BEATRIZ	21/01/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	9	3	15	4	9	5			
1698	1731	FERROL ROSA ALICIA	30/04/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	9	3	15	4	9	1			
1699	1732	PRADO BENAYAS BEATRIZ	30/07/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	9	3	15	4	8	26			
1700	1733	CUEVAS GUTIERREZ ALBERTO JOSE	01/05/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	9	3	15	4	8	9			
1701	1734	SANCHEZ FERNANDEZ MARTA	07/02/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	9	3	15	4	7	12			
1702	1735	MENA COLINO JUAN DE	20/07/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VILLANUEVA DE LASERENA)	9	3	15	4	7	11			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1703	1736	BENAGES LEAL DAVID	22/11/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (PRAT DELLOBREGAT, EL)	9	3	15	4	6	19			
1704	1737	MARIN LOPEZ MARIA DEL MAR	10/06/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	9	3	15	4	3	0			
1705	1738	HERMOSO GUERRERO MANUEL LEVI	29/07/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	9	3	15	4	2	9			
1706	1739	RABADAN ROJANO MARIA VICENTA	11/03/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	9	3	15	4	2	9			
1707	1740	VALDES-SOLIS IGLESIAS ENRIQUE	21/02/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	9	3	15	4	2	3			
1708	1741	MAESTRO PEREZ MARTA	16/02/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	9	3	15	4	1	10			
1709	1742	SANZ GONZALEZ ANTONIO JOSE	02/06/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (CAMBADOS)	9	3	15	4	1	1			
1710	1743	GARCIA MORAN MARIA ARANZAZU	06/04/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TALAVERA DE LA REINA)	9	3	15	4	0	24			
1711	1744	DIAZ FERREIRA ELENA	20/11/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BADALONA)	9	3	15	3	11	22			
1712	1745	PEDRAZA CAMPOS M. CONCEPCION	24/12/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	9	3	15	3	10	13			
1713	1746	AROCAS MARIN MARIA	01/08/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	9	3	15	3	8	28			
1714	1747	MIRASOL MESEGUER MARIA AUXILIADORA	08/10/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALZIRA)	9	3	15	3	6	4			
1715	1748	RODRIGUEZ GARCIA ALEJANDRA INMACULADA	06/12/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	9	3	15	3	6	4			
1716	1749	FERNANDEZ GONZALEZ VANESSA	05/05/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	9	3	15	3	6	2			
1717	1750	FEITO RUIZ INMACULADA	14/04/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA GIJÓN	9	3	15	3	5	21			
1718	1751	OLMO MARTINEZ JOSE GABRIEL	07/02/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BADALONA)	9	3	15	3	2	19			
1719	1752	ARIAS FRANCES JAVIER	07/12/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	9	3	15	3	2	16			
1720	1753	TORNADUJO ALONSO MARIA	07/11/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LEÓN)	9	3	14	3	2	4			
1721	1754	PEDRO TOMAS JAVIER DE	17/12/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZARAGOZA)	9	3	15	3	2	2			
1722	1755	MARTINEZ FERNANDEZ ESTHER	13/10/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	9	3	15	3	2	1			
1723	1756	HAYA LASA VERONICA	03/06/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	9	3	15	3	1	28			
1724	1757	PRECIADO VENERO JOSE ANGEL	09/03/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	9	3	15	3	1	13			
1725	1758	VILLAR NUÑEZ EMILIO JOSE	30/07/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (PONFERRADA)	9	3	15	3	1	1			
1726	1759	RUIZ SANZ MIGUEL ANGEL	06/05/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (OURENSE)	9	3	15	3	0	25			
1727	1760	MONJE HERRERO Mª MERCEDES	13/07/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	9	3	15	3	0	20			
1728	1761	SIÑERIZ GONZALEZ PATRICIA	02/02/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORRELAVEGA)	9	3	15	3	0	9			
1729	1762	CASTELLANO OSORIO MONICA	12/03/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALZIRA)	9	3	15	2	10	8			
1730	1763	REMACHA ROCE LUCIANA	03/06/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	9	3	15	2	9	19			
1731	1764	ANDUJAR HERNANDEZ JORGE	05/05/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	9	3	15	2	9	15			
1732	1765	TAUS BALLESTER JOSE JOAQUIN	26/11/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	9	3	0	2	8	25			
1733	1766	MARTINEZ CASTRO ELENA	09/07/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (AMPOSTA)	6	6	1	2	7	16			
1734	1767	MATEOS FERNANDEZ ESTER	02/04/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SALAMANCA)	9	3	15	2	7	13			
1735	1768	GUTIERREZ PEREZ VERONICA	01/09/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	9	3	15	2	7	8			
1736	1769	CARPENA MONTALVA MARIA AMPARO	14/08/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (GANDIA)	9	3	15	2	7	8			
1737	1770	MORA DIEZ PABLO	31/12/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	9	3	15	2	7	8			
1738	1771	BURGOS MONGE MARIA JOSE	16/01/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SORIA)	9	3	15	2	7	8			
1739	1772	ROVIRA GARRIDO SONIA	07/02/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	9	3	15	2	7	8			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1740	1773	LOPEZ AMAT CRISTINA	11/06/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	9	3	15	2	7	8			
1741	1774	ESTELLES MARTI ANA	26/05/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (GANDIA)	9	3	15	2	7	8			
1742	1775	MONTIEL NAVARRO ELOISA	11/06/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LORCA)	9	3	15	2	7	8			
1743	1776	ARCELLARES GIL JUDITH	27/04/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	9	3	15	2	7	8			
1744	1777	CARCELEN CORCHERO SILVIA	15/08/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	9	3	15	2	7	8			
1745	1778	NEGRETE CEGARRA RUTH	12/10/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA EIVISSA	9	3	15	2	7	8			
1746	1779	ZAYAS LOPEZ ISABEL	02/09/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	9	3	15	2	7	8			
1747	1780	RUIZ-RISUEÑO RIERA ANTONIO	11/08/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOBENDAS)	9	3	15	2	7	8			
1748	1781	CHICON PASCUAL JOSE MIGUEL	13/09/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	9	3	15	2	7	8			
1749	1782	PEÑA ALONSO DESIREE	26/11/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (PRAT DELLOBREGAT, EL)	9	3	15	2	7	8			
1750	1783	VELAZQUEZ YEBENES RUT	16/05/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	9	3	15	2	7	8			
1751	1784	SANCHEZ ROMERO ROSARIO	21/01/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	9	3	15	2	7	8			
1752	1785	TAJES ESPERATO ALICIA	30/10/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	9	3	15	2	7	8			
1753	1786	NICASIO ALIAGA MARIA DEL CARMEN	12/07/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALZIRA)	9	3	15	2	7	8			
1754	1787	BRULL VEGA CRISTINA	19/08/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	9	3	15	2	7	8			
1755	1788	SANCHEZ VALENCIA LEOPOLDO	31/10/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (CEUTA)	9	3	15	2	7	8			
1756	1789	PEREZ COMPAÑ FERMIN	12/07/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALZIRA)	9	3	15	2	7	8			
1757	1790	CONILL TORT ALBA	17/02/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	9	3	15	2	7	8			
1758	1791	RIGLA NOVELLA NOEMI	11/04/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALENCIA)	9	3	15	2	7	8			
1759	1792	FARRERO RUA ANA	08/07/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	9	3	15	2	7	8			
1760	1793	CABRERA DELGADO MARIA MACARENA	03/04/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	9	3	15	2	7	8			
1761	1794	CASAMAYOR GUALLAR JAVIER JUAN	08/11/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA GIJÓN	9	3	15	2	7	8			
1762	1795	RIAL DE LA CALLE MARIA DOLORES	01/09/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	8	3	9	2	7	8			
1763	1796	MIGUEL HERRERO CAROLINA	12/10/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	8	3	9	2	7	8			
1764	1797	GARCIA IGLESIAS MARIA LUISA	02/06/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	8	1	28	2	7	8			
1765	1798	PEREZ ABASCAL AURORA	04/01/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS)	8	1	28	2	7	8			
1766	1799	ALDAZ GALLEGO CELIA SUSANA	02/06/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA CARTAGENA	8	3	9	2	7	8			
1767	1800	MONTESINOS ALBERT MANUELA	27/07/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	8	3	9	2	7	8			
1768	1801	ESPEJA MUÑOZ MIGUEL	23/10/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	8	3	9	2	7	8			
1769	1802	CALLE PUENTE IRENE	19/12/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	8	3	9	2	7	8			
1770	1803	MORAL PASCUAL MARIA VICTORIA	13/06/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (COLLADO VILLALBA)	8	3	9	2	7	8			
1771	1804	PAYA AGUIRRE RAFAEL	18/07/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	8	3	9	2	7	8			
1772	1805	ESTEBAN HERNANDO REBECA	27/06/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LLEIDA)	8	3	9	2	7	8			
1773	1806	GIL OLALLA MARIA PILAR	13/10/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (COLLADO VILLALBA)	8	3	9	2	7	8			
1774	1807	RODRIGUEZ CID JUDIT	21/04/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	8	3	9	2	6	26			
1775	1808	VALVERDE TOQUERO MARIA VICTORIA	06/05/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	8	3	9	2	6	25			
1776	1809	ORDOÑEZ IGLESIAS ERIKA	27/11/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (DOS HERMANAS)	8	3	9	2	6	20			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
1777	1810	SIXTO TEJO MARTA	29/07/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)	9	3	15	2	6	12			
1778	1811	DEL BLAS GORORDO ITZIAR	10/12/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	8	3	9	2	5	17			
1779	1812	SALINAS CASADO ALMUDENA	03/11/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	8	3	9	2	5	15			
1780	1813	LAVADO ASENSIO SOLEDAD	29/09/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BADAJOZ)	8	3	9	2	5	9			
1781	1814	FERNANDEZ CAMACHO MIRIAM	22/09/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	8	3	9	2	4	27			
1782	1815	FERNANDEZ GUTIERREZ SANDRA	29/04/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	8	3	9	2	4	27			
1783	1816	RUIZ VALERO ANTONIO	03/06/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALZIRA)	8	3	9	2	4	27			
1784	1817	CASAS HERVILLA JORDI	16/08/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BADALONA)	8	3	9	2	4	24			
1785	1818	BARBA GARCIA JOSE ANTONIO	30/08/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (FUENGIROLA)	8	3	9	2	4	7			
1786	1819	LOPEZ-TORRES MARTINEZ M. DE LOS ANGELES	31/03/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOBENDAS)	8	3	9	2	3	15			
ABOGADOS FISCALES													
1	1820	BODAS RIOS MANUEL LORENZO	15/05/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA GIJÓN	8	3	9	8	3	9			
2	1821	MOLINA ARIAS MARTA MARIA	07/04/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	8	3	9	8	3	9			
3	1822	RUIZ LIDON LARA REYES	02/01/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUESCA)	8	3	9	8	3	9			
4	1823	BLASCO PEREZ DAVID	23/06/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	8	3	9	8	3	9			
5	1824	FERNANDEZ IRIZAR CARLOS JAVIER	12/11/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	8	3	9	8	3	9			
6	1825	ANDREU VALIÑA PATRICIA	20/10/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	8	3	9	8	3	9			
7	1826	RICART RIUS LAURA	04/09/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L')	8	3	9	8	3	9			
8	1827	CASTILLO AVILA ASCENSION	17/10/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ZAMORA)	8	3	9	8	3	9			
9	1828	GARCIA MACIAS MARIA	12/04/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	8	3	9	8	3	9			
10	1829	RANZ GIL MARGARITA	06/10/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (AVILÉS)	8	3	9	8	3	9			
11	1830	BAHAMONDE BLANCO MIRIAN	18/05/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SALAMANCA)	8	3	9	8	3	9			
12	1831	SOTOS FALGUERAS MARIA	19/11/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALZIRA)	8	3	9	8	3	9			
13	1832	MARTINEZ FERNANDEZ JUAN PABLO	26/09/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	8	3	9	8	3	9			
14	1833	SARRIA PUEYO FRANCISCO JAVIER	27/02/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	8	3	9	8	3	9			
15	1834	SANTA PAU VAZQUEZ LAURA	01/12/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MELILLA)	8	3	9	8	3	9			
16	1835	MONTES SANCHEZ GEMMA	22/03/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MAJADAHONDA)	8	3	9	8	3	9			
17	1836	BADIA BENEDITO M. ROSARIO	09/08/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALZIRA)	8	3	9	8	3	9			
18	1837	HERNANDEZ VILLALBA JUAN	25/09/1982	FISCAL DE LA MINISTERIO DE JUSTICIA. SERVICIOS CENTRALES (MADRID)	8	3	9	8	3	9			
19	1838	PINA LANA O JUAN JOSE	06/05/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA (LOGROÑO)	8	3	9	8	3	9			
20	1839	CATALAN VERDEJO CAROLINA	23/08/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	8	3	9	8	3	9			
21	1840	MELCHOR GONZALEZ SILVIA	12/07/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	8	3	9	8	3	9			
22	1841	GARCIA SANTOS MARIA DE LA CORONADA	24/11/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÉRIDA)	8	3	9	8	3	9			
23	1842	SANCHEZ RAMOS OLG A SUCCION	15/08/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALENCIA)	8	3	9	8	3	9			
24	1843	CALDERON NAJERA ALFONSO ALEJANDRO	11/01/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALENCIA)	8	3	9	8	3	9			
25	1844	MONTERO NEBOT ALVARO FERNANDO	09/10/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (GANDIA)	8	3	9	8	3	9			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
26	1845	MARTIN RIOS ROCIO	09/06/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	8	3	9	8	3	9			
27	1846	GARCIA ROIG ENRIQUE	22/09/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (GANDIA)	8	3	9	8	3	9			
28	1847	FERNANDEZ GONZALEZ TERESA DE JESUS	14/07/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (DOS HERMANAS)	8	3	9	8	3	9			
29	1848	BENEYTO LLORES ISABEL MARIA	14/08/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA EIVISSA	8	3	9	8	3	9			
30	1849	MEANA SANCHEZ-BERMEJO ANGEL LUIS	20/11/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	8	3	9	8	3	9			
31	1850	ARCONADA IBARRA ANA	23/08/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MAJADAHONDA)	8	3	9	8	3	9			
32	1851	TORRES MORALES DAVID	11/09/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOY/ALCOI)	8	3	9	8	3	9			
33	1852	RODRIGUEZ ALONSO SARA MARIA	26/11/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	8	3	9	8	3	9			
34	1853	CEREZO SIERRA MARIA TRINIDAD	23/05/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	8	3	9	8	3	9			
35	1854	MARTINEZ FERRE JOSE JAVIER	25/12/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BARAKALDO)	8	3	9	8	3	9			
36	1855	APARICIO VARELA ALICIA MARIA	26/09/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	8	3	9	8	3	9			
37	1856	ROMAN CAPELI ANTONIO FRANCISCO	04/10/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	8	3	9	8	3	9			
38	1857	COY LOPEZ MARIA BELEN	04/04/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	8	3	9	8	3	9			
39	1858	LUNA PONCE INMACULADA	04/07/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	8	3	9	8	3	9			
40	1859	PEREZ CLOTET BECERRA MARIA DOLORES	01/10/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	8	3	9	8	3	9			
41	1860	ALVAREZ MEDIALDEA ANDRES FRANCISCO	21/05/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	8	3	9	8	3	9			
42	1861	DEL CASTILLO ROBLES MARIA ISABEL	26/12/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (PONFERRADA)	8	3	9	8	3	9			
43	1862	MARQUEZ BOZAL CARMEN	03/10/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	8	3	9	8	3	9			
44	1863	FERNANDEZ CARRASCO MARIA ALEJANDRA	26/03/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (PLASENCIA)	8	3	9	8	3	9			
45	1864	JIMENEZ VICENTE AMADOR	07/08/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CUENCA)	8	3	9	8	3	9			
46	1865	MUÑIZ ANTEQUERA ANTONIO JOSE	24/11/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (DOS HERMANAS)	8	3	9	8	3	9			
47	1866	ALONSO MOSQUEIRA MARTA	06/03/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	8	3	9	8	3	9			
48	1867	RODRIGUEZ LABORDA MARIA	02/05/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	8	3	9	8	3	9			
49	1868	CORTAJARENA GARCIA AINHOA	15/04/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	8	3	9	8	3	9			
50	1869	NAVA POZO MONICA	02/09/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L')	8	3	9	8	3	9			
51	1870	IZUEL GASTON ALEJANDRO	05/05/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	8	3	9	8	3	9			
52	1871	FERNANDEZ MARTINEZ M. ASUNCION	01/09/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	8	3	9	8	3	9			
53	1872	SOLERA GUIJARRO FIDEL	16/10/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	8	3	9	8	3	9			
54	1873	SANCHEZ SECILLA RAFAEL	14/11/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	8	3	9	8	3	9			
55	1874	LOPEZ-JURADO CAPUTO MARIA PAULA	01/01/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	8	3	9	8	3	9			
56	1875	GARCIA PEREZ-IRAOLA ALVARO	10/12/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	8	3	9	8	3	9			
57	1876	VALERO IBARRA PATRICIA	04/12/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	8	3	9	8	3	9			
58	1877	SANCHEZ DE LA RUA MIGUEL ANGEL	23/10/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	8	3	9	8	3	9			
59	1878	SENDRA DOMENECH MARIA	11/03/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	8	3	9	8	3	9			
60	1879	ROMERA CABALLERO MARIA DEL PILAR	30/09/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA CARTAGENA	8	3	9	8	3	9			
61	1880	CARRILLO CARMONA RAQUEL	22/04/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	8	3	9	8	3	9			
62	1881	GOIMIL SEÑARIS FRANCISCO JAVIER	12/04/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (REUS)	8	3	9	8	3	9			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
63	1882	TASCON GONZALEZ ISMAEL	08/07/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (PONFERRADA)	8	3	9	8	3	9			
64	1883	PORTELL RUIZ MIGUEL	11/09/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	8	3	9	8	3	9			
65	1884	DEUS RAMOS TAIS	09/04/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MATARÓ-ARENYS) (MATARÓ)	8	3	9	8	3	9			
66	1885	FURIO PERIS MARA	23/06/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VINARÒS)	8	3	9	8	3	9			
67	1886	TORRES MERCADER JULIA	03/11/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	8	3	9	8	3	9			
68	1887	PIELTAIN CEGARRA MARIA	16/01/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	8	3	9	8	3	9			
69	1888	CARRILLO GROMAZ Mª ANGELES	29/04/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	8	3	9	8	3	9			
70	1889	ESCUDERO PANDO LUIS ALFONSO	19/01/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (DOS HERMANAS)	8	3	9	8	3	9			
71	1890	RODRIGUEZ PEREZ JAVIER	03/10/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ÁVILA)	8	3	9	8	3	9			
72	1891	VIÑAS BELLO YURBIN MAGDALENA	03/01/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANTA CRUZ DE LAPALMA)	8	3	9	8	3	9			
73	1892	GARCIA GUZMAN MONICA	30/03/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	8	3	9	8	3	9			
74	1893	REY RIVERA MARIA	08/04/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	8	3	9	8	3	9			
75	1894	SEIJAS UZQUIZA MARTA	08/09/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LANGREO)	8	3	9	8	3	9			
76	1895	DOMENECH RABASO JORDI	08/05/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	8	3	9	8	3	9			
77	1896	PRADES LINARES ISABEL	01/08/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	8	3	9	8	3	9			
78	1897	ALVAREZ SANCHEZ EVA	22/02/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	8	3	9	8	3	9			
79	1898	GARCIA MORENO SILVIA	14/09/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANT FELIU DELLOBREGAT)	8	3	9	8	3	9			
80	1899	ROIG MATEO BETLEM	11/10/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (FIGUERES)	8	3	9	8	3	9			
81	1900	TAPIADOR GUARGA ERICA	11/04/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LLEIDA)	8	3	9	8	3	9			
82	1901	FERNANDEZ DE PAIZ RAFAEL	13/03/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	8	3	9	8	3	9			
83	1902	RODRIGUEZ GARCIA ALEJANDRO	10/06/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LAREDO)	8	3	9	8	3	9			
84	1903	SILVA TORRES MARIA ISABEL CRISTINA	24/04/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ARONA)	8	3	9	8	3	9			
85	1904	RODRIGUEZ MARCOS MIGUEL	12/02/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS (OVIEDO)	8	3	9	8	3	9			
86	1905	DIAZ GAROFANO ALVARO	04/10/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÉRIDA)	8	3	9	8	3	9			
87	1906	ALCANTARA ARMENTEROS FRANCISCO JAVIER	19/06/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	8	3	9	8	3	9			
88	1907	RAMOS SANDOVAL M. PILAR ORLETA	06/01/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEGOVIA)	8	3	9	8	3	9			
89	1908	FERNANDEZ DEL OLMO RAUL	11/10/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VALLADOLID)	8	3	9	8	3	9			
90	1909	GONZALEZ GARROTE NOELIA	21/06/1976	FISCAL DE LA MINISTERIO DE JUSTICIA. SERVICIOS CENTRALES (MADRID)	8	3	9	8	3	9			
91	1910	SANTIAGO VILLAFANE LAURA	06/06/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEGOVIA)	8	3	9	8	3	9			
92	1911	GARCIA GARCIA FAUSTINO	10/07/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALBACETE)	8	3	9	8	3	9			
93	1912	PINTOR PAVON MARIA DEL ROCIO	11/09/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	8	3	9	8	3	9			
94	1913	GONZALEZ CAJIDE ELENA	07/03/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	8	3	9	8	3	9			
95	1914	RAUSELL BORRELL ALEJANDRO	11/02/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALZIRA)	8	3	9	8	3	9			
96	1915	GALBEÑO ALMARAZ CLAUDIA	01/11/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	8	3	9	8	3	9			
97	1916	COTERON ROMERO CRISTINA	16/04/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	7	3	22	7	3	22			
98	1917	MARTIN MELENDEZ ISABEL	05/07/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	7	3	22	7	3	22			
99	1918	BOUZADA ESCUDERO BELEN	19/06/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)	7	3	22	7	3	22			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
100	1919	CLAVERIA PORTILLO CRISTINA	14/04/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANT FELIU DELLOBREGAT)	7	3	22	7	3	22			
101	1920	HERRERA RODRIGUEZ ELENA	12/06/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA)	7	3	22	7	3	22			
102	1921	RAMOS SAENZ DIEGO	26/05/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	7	3	22	7	3	22			
103	1922	BONET IVARS PATRICIA	10/02/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	7	3	22	7	3	22			
104	1923	HIDALGO MERINO VIRGINIA	09/09/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEGOVIA)	7	3	22	7	3	22			
105	1924	LLAMAS MORON MARIA	09/07/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	7	3	22	7	3	22			
106	1925	MORALES BRAVO JOSE MARIA	12/05/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	7	3	22	7	3	22			
107	1926	ROMERO SUMILLERA ALICIA	25/06/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	7	3	22	7	3	22			
108	1927	GARCIA ALVAREZ AIDA TERESA	02/10/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	7	3	22	7	3	22			
109	1928	LOZANO PASCUAL AIDA	28/08/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VITORIA-GASTEIZ)	7	3	22	7	3	22			
110	1929	VERGARA RODRIGUEZ HISPANA	08/03/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	7	3	22	7	3	22			
111	1930	CARDITO CANELO LUIS ALBERTO	05/06/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L)	7	3	22	7	3	22			
112	1931	DIAZ PEREZ RUT SUSANA	27/11/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	7	3	22	7	3	22			
113	1932	LUCAS ALVAREZ DIEGO	05/10/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOBENDAS)	7	3	22	7	3	22			
114	1933	LEES OCHANDO PATRICIA	01/01/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	7	3	22	7	3	22			
115	1934	ARES DEL VALLE ANA BELEN	13/06/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	7	3	22	7	3	22			
116	1935	HERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL	16/08/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	7	3	22	7	3	22			
117	1936	PUNTE LLANOS VERONICA	10/06/1945	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	7	3	22	7	3	22			
118	1937	MORAN MARTINEZ ALFONSO	11/06/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (TERRASSA)	7	3	22	7	3	22			
119	1938	FERNANDEZ PICAZO CALLEJO JORGE	19/03/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	7	3	22	7	3	22			
120	1939	URZAINQUI ILLESCAS MARINA EVA	16/02/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	7	3	22	7	3	22			
121	1940	GAITE GONZALEZ MARIA	07/07/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	7	3	22	7	3	22			
122	1941	GARCIA BAQUERO BORRELL SANTIAGO JUAN	14/12/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA (LOGROÑO)	7	3	22	7	3	22			
123	1942	MILLAN GOMEZ ALMUDENA	05/09/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (DOS HERMANAS)	7	3	22	7	3	22			
124	1943	SANCHEZ HERRERA MARIA FE	26/09/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	7	3	22	7	3	22			
125	1944	ORTIZ LOPEZ MARIA DEL MAR	30/05/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	7	3	22	7	3	22			
126	1945	PEREZ FERNANDEZ DIEGO JOSE	15/02/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORREVIEJA)	7	3	22	7	3	22			
127	1946	HIDALGO CORREA ANTONIO	27/01/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	7	3	22	7	3	22			
128	1947	CARRERAS BARRUECO MARTA	07/01/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MANACOR)	7	3	22	7	3	22			
129	1948	RUIZ RODRIGUEZ CRISTINA	21/10/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LUCENA)	7	3	22	7	3	22			
130	1949	LOPEZ NIETO MARTIN	28/08/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	7	3	22	7	3	22			
131	1950	CRIBADO DIAZ MARIA JOSE	07/06/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	7	3	22	7	3	22			
132	1951	IBAÑEZ GALLARDO PABLO	19/09/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	7	3	22	7	3	22			
133	1952	OLIVA SOTO MARIA DE LAS MERCEDES	31/03/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (DOS HERMANAS)	7	3	22	7	3	22			
134	1953	GARCIA GUIJO JULIA	24/07/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	7	3	22	7	3	22			
135	1954	GARCIA RENGIFO SONIA	06/09/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOY/ALCOI)	7	3	22	7	3	22			
136	1955	COTAN JAIMEZ ALMUDENA	10/07/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (DOS HERMANAS)	7	3	22	7	3	22			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
137	1956	RODRIGUEZ SUAREZ REBECA	08/10/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	7	3	22	7	3	22			
138	1957	HERNANDEZ MARCOS MIRYAM	08/02/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	7	3	22	7	3	22			
139	1958	ROS MARTINEZ MIGUEL	30/06/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TUDELA)	7	3	22	7	3	22			
140	1959	ALONSO-LECIÑANA ALONSO RUBEN	15/06/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA EIVISSA	7	3	22	7	3	22			
141	1960	SERRERA ALVAREZ CRISTINA	01/08/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	7	3	22	7	3	22			
142	1961	PETIT ESPERT MARIOLA	19/12/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALZIRA)	7	3	22	7	3	22			
143	1962	SERRANO SANCHEZ EVA	29/08/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	7	3	22	7	3	22			
144	1963	CASTEJON MARIN MARIA TERESA	18/06/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	7	3	22	7	3	22			
145	1964	CARDONA SALAS ANA NATALIA	13/07/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	7	3	22	7	3	22			
146	1965	JIMENEZ DIAZ MARIA LUCIA	02/01/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MELILLA)	7	3	22	7	3	22			
147	1966	SOLDEVILA ROMERO JOAQUIM	11/08/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (OLOT)	7	3	22	7	3	22			
148	1967	NUÑEZ SOLANA ANA	09/11/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TALAVERA DE LA REINA)	7	3	22	7	3	22			
149	1968	ZAMARRO BALLESTEROS RICARDO	07/12/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	7	3	22	7	3	22			
150	1969	GUZMAN FERNANDEZ ANGEL	28/03/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MADRID)	7	3	22	7	3	22			
151	1970	NIEVES GARCIA XELA	12/10/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA EIVISSA	7	3	22	7	3	22			
152	1971	SUFFO ABOZA NICOLAS	08/03/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	7	3	22	7	3	22			
153	1972	CASADO FERNANDEZ EVA	21/04/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	7	3	22	7	3	22			
154	1973	GARMILLA REDONDO NOEMI MARIA	15/02/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BURGOS)	7	3	22	7	3	22			
155	1974	MARTIN CLEMENTE MARIA DEL PILAR	29/12/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LINARES)	7	3	22	7	3	22			
156	1975	VILCHES SANZ SHEILA	30/03/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (CEUTA)	7	3	22	7	3	22			
157	1976	ANDRES BERIAN ELVIRA	01/08/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GUADALAJARA)	7	3	22	7	3	22			
158	1977	HIDALGO MARIN CARMEN MARIA	25/03/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	7	3	22	7	3	22			
159	1978	TUERO GONZALEZ ALEJANDRO	02/07/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	7	3	22	7	3	22			
160	1979	AGUELO BAHRENBERG LAURA	09/05/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BADALONA)	7	3	22	7	3	22			
161	1980	GRANADO JAPON ENCARNACION	27/12/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (PLASENCIA)	7	3	22	7	3	22			
162	1981	CALVILLO ARBIZU DAVID	16/05/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (DOS HERMANAS)	7	3	22	7	3	22			
163	1982	JIMENEZ FERNANDEZ JUANA MARIA	22/12/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	7	3	22	7	3	22			
164	1983	CABRERA GALVEZ CARMEN	26/04/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	7	3	22	7	3	22			
165	1984	ABAD JUARRANZ PAULA MARIA	04/02/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	7	3	22	7	3	22			
166	1985	ALVAREZ BARREIRO RAQUEL	25/05/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)	7	3	22	7	3	22			
167	1986	BOLAÑOS BANDERAS CRISTINA	21/02/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANTA COLOMA DE GRAMENET)	7	3	22	7	3	22			
168	1987	BARINAGA LOPEZ AINHOA	03/12/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	7	3	22	7	3	22			
169	1988	BOLET CARREÑO LETICIA	10/12/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	7	3	22	7	3	22			
170	1989	CALDES RODRIGUEZ AITANA MARIA	08/06/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GRANOLLERS)	7	3	22	7	3	22			
171	1990	GONZALEZ-GRANO DE ORO GARCIA NATALIA VICTORIA	07/02/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁCERES)	6	4	0	6	4	0			
172	1991	BERDUGO DOMINGUEZ SILVIA	03/08/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LUCENA)	6	4	0	6	4	0			
173	1992	RODRIGUEZ CONTRERAS PEREZ CARMEN	04/07/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	6	4	0	6	4	0			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
174	1993	JIMENEZ MARTIN DE NICOLAS VIOLETA	05/10/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALBACETE)	6	4	0	6	4	0			
175	1994	VARGAS LUQUE ESTRELLA MARIA	30/06/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GUADALAJARA)	6	4	0	6	4	0			
176	1995	MENDEZ SANCHEZ MARIA DEL CAMINO	10/09/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VITORIA-GASTEIZ)	6	4	0	6	4	0			
177	1996	BAEZA NIETO CRISTINA	18/02/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	6	4	0	6	4	0			
178	1997	HERNANDEZ GARCIA MARIA ANGEL	01/03/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUESCA)	6	4	0	6	4	0			
179	1998	MOLINA MELGUIZO DIEGO FRANCISCO	08/09/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (CIEZA)	6	4	0	6	4	0			
180	1999	RAMOS LOPEZ-HERRERO MARIA DEL MAR	10/11/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	6	4	0	6	4	0			
181	2000	YAGÜE BERMEJO JOSE JAVIER	08/05/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	6	4	0	6	4	0			
182	2001	GARCIA-LOMAS GAGO VERENA	08/11/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SEVILLA)	6	4	0	6	4	0			
183	2002	MONGE CUIEL Mª DEL VALLE	23/03/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	6	4	0	6	4	0			
184	2003	RODRIGUEZ CASTELLANO MONICA DEL CARMEN	02/10/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	6	4	0	6	4	0			
185	2004	GARCIA RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA	28/06/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LEÓN)	6	4	0	6	4	0			
186	2005	MOHEDANO SANCHEZ MARIA DOLORES	10/06/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	6	4	0	6	4	0			
187	2006	GONZALEZ LOPEZ IRIA SABELA	03/07/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	6	4	0	6	4	0			
188	2007	ARGANDOÑA PALACIOS ELVIRA CARMEN	18/05/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALBACETE)	6	4	0	6	4	0			
189	2008	VAZQUEZ GOMEZ MARIA	16/09/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LUGO)	6	4	0	6	4	0			
190	2009	SANCHEZ PAREDES ROSALIA	24/05/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	6	4	0	6	4	0			
191	2010	GOYANES VIVIANI CAROLINA	16/12/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)	6	4	0	6	4	0			
192	2011	LORANCA BUJAN REBECA	19/09/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (OCAÑA)	6	4	0	6	4	0			
193	2012	ZABALA GUADALUPE MARIA TERESA	31/01/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÓSTOLES)	6	4	0	6	4	0			
194	2013	CRIADO MADRIGAL Mª INMACULADA	21/12/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	6	4	0	6	4	0			
195	2014	SOTELO MARTINEZ JESSICA	27/09/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	6	4	0	6	4	0			
196	2015	LUCINI NAVARRETE MIRIAM	18/05/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GETAFE-LEGANÉS) (GETAFE)	6	4	0	6	4	0			
197	2016	CALVO VALMORISCO LAURA	01/12/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (PLASENCIA)	6	4	0	6	4	0			
198	2017	MERINO DA SILVA BRENDA	09/09/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GUADALAJARA)	6	4	0	6	4	0			
199	2018	SANCHEZ LIMA INMACULADA CONCEPCION	08/12/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (DOS HERMANAS)	6	4	0	6	4	0			
200	2019	AVILA TABLADO ANA	11/02/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	6	4	0	6	4	0			
201	2020	RODA ALCAYDE PATRICIA	18/09/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	6	4	0	6	4	0			
202	2021	PANADERO LOZANO CARMEN	25/04/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	6	4	0	6	4	0			
203	2022	RAMOS ARAGON MARIA DEL CARMEN	10/01/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	6	4	0	6	4	0			
204	2023	JOYA AMEZCUA ANA MARIA	15/07/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	6	4	0	6	4	0			
205	2024	ARAZURI BARROSO MARIA	06/04/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (CEUTA)	6	4	0	6	4	0			
206	2025	GONZALEZ VIDAL ISABEL	17/01/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	6	4	0	6	4	0			
207	2026	CAIÑO DASILVA SERVANDO	12/01/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	6	4	0	6	4	0			
208	2027	RUBIERA MORIS ANA MARIA	31/01/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BARAKALDO)	6	4	0	6	4	0			
209	2028	MUÑOZ SANCHEZ RUTH	02/09/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (EJIDO, EL)	6	4	0	6	4	0			
210	2029	BELZUNCES LLEDO MARIA DEL PILAR	03/06/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (MÁLAGA)	6	4	0	6	4	0			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
211	2030	GARCIA DELGADO GENOVEVA	14/06/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	6	4	0	6	4	0			
212	2031	RUBIO LLERGO M. PILAR	08/11/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALZIRA)	6	4	0	6	4	0			
213	2032	MARTIN LOPEZ CRISTINA	08/11/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	6	4	0	6	4	0			
214	2033	NIEBLAS PERUJO JOSE ANTONIO	20/02/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	6	4	0	6	4	0			
215	2034	PRIETO ROMAN MARIA TERESA	17/07/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	6	4	0	6	4	0			
216	2035	LACUEVA BERTOLACCI ADRIANA	17/05/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANTA COLOMA DEGRAMENET)	6	4	0	6	4	0			
217	2036	LENDINEZ ARTEAGA MARIA	11/01/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA CARTAGENA	6	4	0	6	4	0			
218	2037	CAÑO ALCAINA JOSE CARLOS	02/07/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MATARÓ-ARENYS) (MATARÓ)	6	4	0	6	4	0			
219	2038	SOBRINO GUERRA OLGA	11/09/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	6	4	0	6	4	0			
220	2039	ISABEL GIL ANGELA	21/08/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	6	4	0	6	4	0			
221	2040	ALOY FERNANDEZ MARIA ELIA	20/06/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	6	4	0	6	4	0			
222	2041	VILELA FRAILE PATRICIA	02/09/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GUADALAJARA)	6	4	0	6	4	0			
223	2042	MUÑOZ SAN MARTIN EDUARDO	01/06/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANT FELIU DELLOBREGAT)	6	4	0	6	4	0			
224	2043	GIL RUBIO ANGELES	23/04/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOY/ALCOI)	6	4	0	6	4	0			
225	2044	GONZALEZ-AMBEL DUEÑAS ANA	31/01/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÉRIDA)	6	4	0	6	4	0			
226	2045	MARTINEZ-ARRIETA MARQUEZ DE PRADO CRISTINA	20/04/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TOLEDO)	6	4	0	6	4	0			
227	2046	REY LUQUE BEATRIZ	04/06/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	6	4	0	6	4	0			
228	2047	SEGARRA COBO MARIA	21/11/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	6	4	0	6	4	0			
229	2048	QUERALTO GUTIERREZ JUAN RAMON	11/12/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LORA DEL RÍO)	6	4	0	6	4	0			
230	2049	AREVALO LORIDO M. GRACIA	12/05/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L')	6	4	0	6	4	0			
231	2050	CARROCCIA MUÑOZ ANA ISABEL	22/04/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORREAVEGA)	6	4	0	6	4	0			
232	2051	GONZALEZ AREVALO ELENA MARIA	16/05/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA CARTAGENA	6	4	0	6	4	0			
233	2052	SANCHEZ NIETO M. DESAMPARADOS	09/06/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (DOS HERMANAS)	6	4	0	6	4	0			
234	2053	BERDUGO GARCIA MAESTRO MARIA JOSE	16/01/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BARAKALDO)	6	4	0	6	4	0			
235	2054	MATEO CARMONA RAFAEL IGNACIO	24/08/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (EJIDO, EL)	6	4	0	6	4	0			
236	2055	CHULIA ROMEU CAROLA	08/03/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L')	6	4	0	6	4	0			
237	2056	BETANCOR DIAZ YAISA	20/07/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BADALONA)	6	4	0	6	4	0			
238	2057	LOPEZ RIERA ANA	16/05/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (TERRASSA)	6	4	0	6	4	0			
239	2058	CARRERAS SALARICH MONTSERRAT	17/06/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BADALONA)	6	4	0	6	4	0			
240	2059	PRESA GONZALEZ OSCAR	08/10/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORREVIEJA)	6	4	0	6	4	0			
241	2060	ALVAREZ RODRIGUEZ NATALIA	27/11/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	6	4	0	6	4	0			
242	2061	COLLADO COBALEA MARIA BELEN	05/12/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VÉLEZ-MÁLAGA)	6	4	0	6	4	0			
243	2062	MARTINEZ SERRANO DOLORES MARIA	13/08/1969	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	6	4	0	6	4	0			
244	2063	GOMEZ-RIVERA CASTAÑO JOSE LUIS	17/07/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TALAVERA DE LAREINA)	6	4	0	6	4	0			
245	2064	SALGUERO GIL MARIA NAZARET	22/05/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (OSUNA)	6	4	0	6	4	0			
246	2065	ASENCIO AGUILAR MARIA DEL PILAR	23/06/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	6	4	0	6	4	0			
247	2066	MATENCIO LOPEZ OLGA	10/07/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	6	4	0	6	4	0			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
248	2067	ALVAREZ DE CIENFUEGOS JOYA FRANCISCO JAVIER	14/04/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CUENCA)	6	4	0	6	4	0			
249	2068	DE LA CERDA OSUNA CESAR	18/11/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	6	4	0	6	4	0			
250	2069	OTI CABANELAS AZUCENA	22/11/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ARRECIFE-PTO ROSARIO) (ARRECIFE)	6	4	0	6	4	0			
251	2070	HERNANDEZ COARASA BLANCA	19/03/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LLEIDA)	6	4	0	6	4	0			
252	2071	TRIGUERO CAMPOS MARIA CRISTINA	13/04/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	6	4	0	6	4	0			
253	2072	ALAVA ZALDUENDO DORLETA	29/03/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	6	4	0	6	4	0			
254	2073	MAGARIÑOS YANEZ JOSE ALBERTO	19/06/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	6	4	0	6	4	0			
255	2074	COBERTERA HIDALGO CARLOS	21/08/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GRANOLLERS)	6	4	0	6	4	0			
256	2075	REAL CAMPOS MARIO	18/03/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	6	4	0	6	4	0			
257	2076	GARCIA GAVILANES VICTORIA JULIA	31/07/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALCALÁ DE HENARES)	6	4	0	6	4	0			
258	2077	BUENDIA LOPEZ AZAHARA MARIA	17/09/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÓRDOBA)	6	4	0	6	4	0			
259	2078	TRILLES FENOLLOSA NURIA	13/12/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (GANDIA)	6	4	0	6	4	0			
260	2079	MARTIN MARTIN PABLO	22/09/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	6	4	0	6	4	0			
261	2080	DUQUE OPORTO SARA	03/10/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	6	4	0	6	4	0			
262	2081	ORTIZ TEJONERO MACARENA	10/10/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MATARÓ-ARENYS) (MATARÓ)	6	4	0	6	4	0			
263	2082	JUAREZ MUÑOZ CRISTINA	17/03/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	6	4	0	6	4	0			
264	2083	VELASCO VARGAS MARIA ELOISA	13/11/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	6	4	0	6	4	0			
265	2084	ALVAREZ FERNANDEZ DANIEL RODRIGO	11/06/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	6	4	0	6	4	0			
266	2085	MARUGAN FLORES GEMA MARIA	09/07/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	6	4	0	6	4	0			
267	2086	CHINARRO ENRIQUE Mº JOSE	23/01/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	6	4	0	6	4	0			
268	2087	PEREZ UGIDOS MARIA EUGENIA	19/05/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GUADALAJARA)	6	4	0	6	4	0			
269	2088	GRANO DE ORO GARCIA EVA Mº	21/07/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁCERES)	6	4	0	6	4	0			
270	2089	VALLEJO MARTIN LUISA MARIA	13/04/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BARAKALDO)	6	4	0	6	4	0			
271	2090	BAS SORIO ANA ISABEL	28/09/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	6	4	0	6	4	0			
272	2091	MILLAN CAMPILLO CARMEN MARIA	25/12/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORREVIEJA)	6	4	0	6	4	0			
273	2092	DEL CAMPO IRAÑETA Mº SANTISIMA TRINIDAD	16/11/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD FORAL NAVARRA (PAMPLONA/IRUÑA)	6	4	0	6	4	0			
274	2093	NAVERO GALVEZ MARIA DESIRE	07/10/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (TERRASSA)	6	4	0	6	4	0			
275	2094	JIMENEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE	14/10/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	6	4	0	6	4	0			
276	2095	SANCHEZ ESPINOLA AMABEL RAFAELA	20/08/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MOTRIL)	6	4	0	6	4	0			
277	2096	CASAL ESCUDERO PAOLA	18/11/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LORA DEL RÍO)	6	4	0	6	4	0			
278	2097	RODRIGUEZ ESCARTIN M. ARANZAZU	07/07/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VENDRELL, EL)	6	4	0	6	4	0			
279	2098	SOLANA SAENZ AMPARO	18/12/1958	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (CALATAYUD)	6	4	0	6	4	0			
280	2099	GARCIA MOLINA CRISTINA	20/12/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (CIEZA)	6	4	0	6	4	0			
281	2100	CARRETERO TOMAS JAVIER	26/05/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GRANOLLERS)	6	4	0	6	4	0			
282	2101	ROVIRA COLL AIDA	24/02/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	6	4	0	6	4	0			
283	2102	CORONADO MAROTO GONZALO	22/01/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	6	4	0	6	4	0			
284	2103	RODRIGUEZ GOMEZ SONIA MARIA	01/06/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (OURENSE)	6	4	0	6	4	0			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
285	2104	FERNANDEZ MORLANES RAFAEL	31/03/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANT FELIU DELLOBREGAT)	6	4	0	6	4	0			
286	2105	NAVARRO PRIETO EVA MARIA	17/01/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA CARTAGENA	6	4	0	6	4	0			
287	2106	FELIX COBO MARIO	14/11/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	6	4	0	6	4	0			
288	2107	ORTEGA ARROYO GONZALO BARTOLOME	26/01/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	6	4	0	6	4	0			
289	2108	CERRADA HERNANDEZ SANDRA	22/02/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	6	4	0	6	4	0			
290	2109	ROLDAN LORA BLANCA	29/05/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	6	4	0	6	4	0			
291	2110	DOMINGUEZ SILVA GREGORIO	11/04/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	6	4	0	6	4	0			
292	2111	NUEVO DE LA TORRE MIGUEL	24/06/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	6	4	0	6	4	0			
293	2112	GARCIA ANGOS MARIA	03/08/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SORIA)	6	4	0	6	4	0			
294	2113	FORADADA BERMEJO JOSEP AURELI	11/05/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	6	4	0	6	4	0			
295	2114	CIRAJAS GONZALEZ FERNANDO	16/06/1968	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LAREDO)	6	4	0	6	4	0			
296	2115	FERNANDEZ VIZCAY BEATRIZ	02/03/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	6	4	0	6	4	0			
297	2116	GARCES MORE MARIA ARANZAZU	12/08/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (REUS)	6	4	0	6	4	0			
298	2117	MORENO PLAZA MARIA	05/04/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	5	3	17	5	3	17			
299	2118	VIÑA GARCIA MARTA MARIA	28/07/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LAREDO)	5	3	17	5	3	17			
300	2119	GAMEZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA	05/05/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MARBELLA)	5	3	17	5	3	17			
301	2120	GIL ALONSO MARIA	10/01/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L')	5	3	17	5	3	17			
302	2121	NOGALES VARA SILVIA	20/05/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (OCAÑA)	5	3	17	5	3	17			
303	2122	SAN NICOLAS RIQUELME ADELAIDA	06/07/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	5	3	17	5	3	17			
304	2123	ARAUJO MIER GERMAN	10/09/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ARONA)	5	3	17	5	3	17			
305	2124	NAVAJAS ANGULO M. DE LOS REYES	06/11/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	5	3	17	5	3	17			
306	2125	LOPEZ-VERAZA PEREZ CARLOS	17/10/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	5	3	17	5	3	17			
307	2126	MARTIN BONILLA MIRIAM	20/12/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	5	3	17	5	3	17			
308	2127	ORTIZ CASTELLANOS BEATRIZ	24/03/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	5	3	17	5	3	17			
309	2128	VADELL MERCADAL M. TERESA	01/04/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	5	3	17	5	3	17			
310	2129	CAMPILLO ROLDAN CARMEN	26/07/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	5	3	17	5	3	17			
311	2130	PERTUSA RODRIGUEZ MARIA ELENA	12/06/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L')	5	3	17	5	3	17			
312	2131	AGUINAGALDE SALAZAR IRUNE	14/10/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	5	3	17	5	3	17			
313	2132	GARCIA DE QUESADA DELGADO M. DEL CARMEN	16/12/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	5	3	17	5	3	17			
314	2133	BALMASEDA CODINA XIOMARA LETICIA	12/01/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	5	3	17	5	3	17			
315	2134	SALMERON LUCAS CARLOS	01/04/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (CIEZA)	5	3	17	5	3	17			
316	2135	CALPE ALMELA JOSEP MARIA	18/11/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA)	5	3	17	5	3	17			
317	2136	NAVARRO DOMINGUEZ EDUARDO	22/11/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	5	3	17	5	3	17			
318	2137	HUETE MERINO LAURA	24/06/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	5	3	17	5	3	17			
319	2138	BLANES CHACON ALFREDO	26/11/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	5	3	17	5	3	17			
320	2139	TORRES BERNAL EVA MARIA	04/12/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (CIEZA)	5	3	17	5	3	17			
321	2140	TORRES GIMENEZ ANGELES	10/09/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	5	3	17	5	3	17			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
322	2141	DEL TESO ESTEBAN MARIA	11/12/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	5	3	17	5	3	17			
323	2142	BALBIN ALVAREZ GUILLERMO P.	07/08/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	5	3	17	5	3	17			
324	2143	MARCO CAÑADA LUIS MANUEL	30/06/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	5	3	17	5	3	17			
325	2144	NEIRA ALONSO ANA ISABEL	18/11/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	5	3	17	5	3	17			
326	2145	ROMERO MORENO MARIA	25/05/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	5	3	17	5	3	17			
327	2146	LOPEZ BAEZA ISABEL REGINA	04/03/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	5	3	17	5	3	17			
328	2147	GOMEZ CUEVAS CAROLINA	20/09/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	5	3	17	5	3	17			
329	2148	CALATAYUD CASTELLO RICARDO	11/05/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	5	3	17	5	3	17			
330	2149	CACHO GARCIA MARIA	21/09/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	5	3	17	5	3	17			
331	2150	VILCHES FERNANDEZ MARIA	15/08/1982	FISCAL DE LA MINISTERIO DE JUSTICIA. SERVICIOS CENTRALES (MADRID)	5	3	17	5	3	17			
332	2151	MARTINEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO	30/04/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANT FELIU DELLOBREGAT)	5	3	17	5	3	17			
333	2152	MARTINEZ ROZALEN JESUS ANGEL	13/04/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CUENCA)	5	3	17	5	3	17			
334	2153	GARCIA VILCHEZ ALICIA	09/05/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	5	3	17	5	3	17			
335	2154	BENAVIDES MEDINA ALICIA	29/06/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (EJIDO, EL)	5	3	17	5	3	17			
336	2155	TERCERO RUBIO ISABEL M.	12/12/1986	FISCAL DE LA MINISTERIO DE JUSTICIA. SERVICIOS CENTRALES (MADRID)	5	3	17	5	3	17			
337	2156	MARTINEZ DE LA FUENTE AUREA	20/06/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LUGO)	5	3	17	5	3	17			
338	2157	PERAL PASCUAL M° JOSE	02/10/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	5	3	17	5	3	17			
339	2158	SOCAS PEREZ JONAY	24/10/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	5	3	17	5	3	17			
340	2159	NAVARRO RUIZ SOLEDAD	12/01/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (FUENGIROLA)	5	3	17	5	3	17			
341	2160	AMADOR MARTI CATALINA	22/10/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA CARTAGENA	5	3	17	5	3	17			
342	2161	CONTINENTE ANTOLINEZ M. CARMEN	15/07/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCAÑIZ)	5	3	17	5	3	17			
343	2162	MORILLA SERRADA ELENA MARIA	22/12/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (OSUNA)	5	3	17	5	3	17			
344	2163	CALATRAVA PRADOS MARIA PILAR	12/05/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CUENCA)	5	3	17	5	3	17			
345	2164	MARRO ORTIZ DE SOLORZANO ANA	18/09/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	5	3	17	5	3	17			
346	2165	DE HARO MOYA ANA ISABEL	01/01/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	5	3	17	5	3	17			
347	2166	SANCHEZ GARCIA FRANCISCO DE PAULA	31/08/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GRANADA)	5	3	17	5	3	17			
348	2167	ASENSIO GONZALEZ MARIA DEL PILAR	13/05/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VILLANUEVA DE LASERENA)	5	3	17	5	3	17			
349	2168	GALLARDO HURTADO MARIA ELISA	27/07/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CIUDAD REAL)	5	3	17	5	3	17			
350	2169	ORTIGOSA GONZALEZ LEYRE	28/05/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BARAKALDO)	5	3	17	5	3	17			
351	2170	FERNANDEZ MONTESDEOCA ANA BEATRIZ	04/08/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	5	3	17	5	3	17			
352	2171	CAMPOMANES CALEZA ALBERTO	27/03/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	5	3	17	5	3	17			
353	2172	SANCHEZ VERA MARIA ARANZAZU	01/05/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (OSUNA)	5	3	17	5	3	17			
354	2173	VELASCO DELGADO SANDRA	04/11/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	5	3	17	5	3	17			
355	2174	MEDRANO BOSQUE ISABEL	02/11/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	5	3	17	5	3	17			
356	2175	NAVARRO GARCIA ALVARO	15/10/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	5	3	17	5	3	17			
357	2176	GALAN ALVAREZ PATRICIA MARIA	26/01/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MÉRIDA)	5	3	17	5	3	17			
358	2177	VAZQUEZ DE PRADA DE LA HOZ JUAN IGNACIO	30/12/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	5	3	17	5	3	17			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
359	2178	DOVAL PEREZ EMMA	13/10/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PONTEVEDRA)	5	3	17	5	3	17			
360	2179	PIZARRO RUBIO ISABEL	14/07/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORREVIEJA)	5	3	17	5	3	17			
361	2180	ROMERO URRUTIA MONICA	19/05/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VILLANUEVA DE LASERENA)	5	3	17	5	3	17			
362	2181	PASCUAL DE SA MARIA INMACULADA	08/12/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (FERROL)	5	3	17	5	3	17			
363	2182	ALVAREZ GONZALEZ DE LA PEÑA ANGEL	08/01/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	5	3	17	5	3	17			
364	2183	RAMIREZ GORDILLO MARIA DOLORES	10/12/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	5	3	17	5	3	17			
365	2184	GUTIERREZ RODRIGUEZ SARA MARIA	13/09/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	5	3	17	5	3	17			
366	2185	MARCOS ALISES JOSE MANUEL	11/12/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA CARTAGENA	5	3	17	5	3	17			
367	2186	MANCHON LLOPIS ENRIQUE	08/01/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	5	3	17	5	3	17			
368	2187	DE LA PARRA JIMENEZ LAURA	18/09/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MATARÓ-ARENYS) (MATARÓ)	5	3	17	5	3	17			
369	2188	FERNANDEZ TOUS CARMEN	09/10/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (INCA)	5	3	17	5	3	17			
370	2189	CAJARAVILLE LEIRO PAULA	21/06/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	5	3	17	5	3	17			
371	2190	LAZARO RODRIGUEZ DELIA	12/04/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	5	3	17	5	3	17			
372	2191	CRUZ PELLITERO LUCIA	28/10/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L)	5	3	17	5	3	17			
373	2192	LABRADOR MENDEZ LIDIA	14/01/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (CAMBADOS)	5	3	17	5	3	17			
374	2193	ARANA LUCAS ROCIO	19/06/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	5	3	17	5	3	17			
375	2194	REDONDO ARTIGUES CRISTINA	15/01/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BARCELONA)	5	3	17	5	3	17			
376	2195	LOPEZ FORCADA ELENA	03/08/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SORIA)	5	3	17	5	3	17			
377	2196	UCLES DEL POZO IGNACIO	06/10/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	5	3	17	5	3	17			
378	2197	MATA ARTECHE ANA	10/04/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (FUENGIROLA)	5	3	17	5	3	17			
379	2198	ORDIZ MARTINEZ ANDREA	24/05/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	5	3	17	5	3	17			
380	2199	UNCETA GONZALEZ RAFAEL MARIA	13/08/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	5	3	17	5	3	17			
381	2200	LOPEZ PALMERO CARMEN	04/02/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ZAFRA)	5	3	17	5	3	17			
382	2201	PEREZ MARTI CYNTHIA	05/12/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	5	3	17	5	3	17			
383	2202	MARTIN ALVAREZ HORACIO	11/12/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (SANTANDER)	5	3	17	5	3	17			
384	2203	ZARAGOZA TEJADA JAVIER IGNACIO	11/06/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	5	3	17	5	3	17			
385	2204	PRESA LORITE MARIA DE LA PAZ	26/04/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	5	3	17	5	3	17			
386	2205	LOZANO PASTOR OLIVIA	20/03/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CUENCA)	5	3	17	5	3	17			
387	2206	GALVEZ TRIVIÑO JOSEFA	01/04/1962	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LORCA)	5	3	17	5	3	17			
388	2207	CEÑAL BRETONES RAMON	07/01/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORREVIEJA)	5	3	17	5	3	17			
389	2208	GARCIA CORTIZO PAULA	27/03/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	5	3	17	5	3	17			
390	2209	PEREZ AVILA FRANCISCO	11/11/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ÚBEDA)	5	3	17	5	3	17			
391	2210	DOMINGUEZ PINOS MARIA DEL MAR	01/06/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	5	3	17	5	3	17			
392	2211	SALA GARCIA NOEMI BERTA	30/12/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GRANOLLERS)	5	3	17	5	3	17			
393	2212	VAZQUEZ ROLDAN MARIA DEL PILAR	31/10/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	5	3	17	5	3	17			
394	2213	CALVO ESPINO CESAR	08/06/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GRANOLLERS)	5	3	17	5	3	17			
395	2214	JIMENEZ CABESTANY ELISABET	26/09/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (TERRASSA)	5	3	17	5	3	17			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
396	2215	REYES DELGADO Mª DEL CAMINO	29/07/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOY/ALCOI)	5	3	17	5	3	17			
397	2216	MARFIL ARAGON MARIA DEL CARMEN	04/09/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	5	3	17	5	3	17			
398	2217	MOLINA PUENTE PALOMA	22/05/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	5	3	17	5	3	17			
399	2218	GALINDO DURAN MARIA CRISTINA	21/09/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	5	3	17	5	3	17			
400	2219	FERNANDEZ LEIRAS RAQUEL	05/11/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	5	3	17	5	3	17			
401	2220	VILLEGAS GARZON CRISTINA MARIA	17/02/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	5	3	17	5	3	17			
402	2221	JESUS RODRIGUEZ ELENA	30/12/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	5	3	17	5	3	17			
403	2222	MORENO ROMAN ANGELA	30/06/1960	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BARAKALDO)	5	3	17	5	3	17			
404	2223	LOIZAGA MARTINEZ ESTELA	27/05/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BARAKALDO)	5	3	17	5	3	17			
405	2224	REBOLLEDO OLMEDO MARIA DEL CARMEN	18/06/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (CAMBADOS)	5	3	17	5	3	17			
406	2225	VASCO GARCIA ANA	22/12/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MONDOÑEDO)	5	3	17	5	3	17			
407	2226	FORNES MASSA MONTSERRAT	21/09/1967	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BLANES)	5	3	17	5	3	17			
408	2227	HERNANDEZ CERDEIRA BLANCA IRIS	09/05/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)	5	3	17	5	3	17			
409	2228	RAMOS VALVERDE ANA MARIA	15/03/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	5	3	17	5	3	17			
410	2229	GARCIA DE VINUESA CACERES ROCIO	02/09/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	5	3	17	5	3	17			
411	2230	VIDAL BENEYTO MARIA	24/06/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VITORIA-GASTEIZ)	5	3	17	5	3	17			
412	2231	CALDERON DE LA BARCA GONZALEZ JAVIER	07/07/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	5	3	17	5	3	17			
413	2232	FERNANDEZ DE AREVALO DE ANDUJAR ALEJANDRO	26/08/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VILLANUEVA DE LASERENA)	5	3	17	5	3	17			
414	2233	VIGIL DE QUIÑONES PARRA ADELA	25/10/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (TERRASSA)	5	3	17	5	3	17			
415	2234	CASTRO RODRIGUEZ MARIA LUJAN	04/03/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	5	3	17	5	3	17			
416	2235	GARCIA RUIZ VIOLETA	17/03/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA CARTAGENA	5	3	17	5	3	17			
417	2236	TORRES ROBLES MARIA DOLORES	21/12/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ÚBEDA)	5	3	17	5	3	17			
418	2237	MUÑOZ CASAS RAMONA	09/01/1973	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ARRECIFE-PTO ROSARIO) (ARRECIFE)	5	3	17	5	3	17			
419	2238	ALBARELLOS ESTERAS PATRICIA	05/09/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORTOSA)	5	3	17	5	3	17			
420	2239	GARCIA AGUADO JESUS ABELARDO	01/06/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	5	3	17	5	3	17			
421	2240	RIVERA CUMBRAOS MARTA	13/11/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LUGO)	5	3	17	5	3	17			
422	2241	PEREZ CARTON MONICA	07/03/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANT FELIU DELLOBREGAT)	5	3	17	5	3	17			
423	2242	VIDAL MARTINEZ MARIA SOLEDAD	04/08/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA)	5	3	17	5	3	17			
424	2243	RAMOS VILLASEVIL SANDRA	05/11/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	5	3	17	5	3	17			
425	2244	RODRIGUEZ CEPEDANO MARIA CRISTINA	15/07/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (REUS)	5	3	17	5	3	17			
426	2245	ROMAGUERA GARCIA MACARENA	27/06/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ARRECIFE-PTO ROSARIO) (ARRECIFE)	5	3	17	5	3	17			
427	2246	BENAVIDES MARIN SANDRA	28/11/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	5	3	17	5	3	17			
428	2247	GONZALEZ GONZALEZ MARIA SOL	03/09/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SORIA)	5	3	17	5	3	17			
429	2248	CABALLERO OLIVARES JUANA	20/07/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LINARES)	5	3	17	5	3	17			
430	2249	MARTIN COMAS FERNANDEZ INMACULADA	17/01/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MANZANARES)	5	3	17	5	3	17			
431	2250	NAVARRO CASTELL DEBORA	19/04/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	5	3	17	5	3	17			
432	2251	CHAPULI LORENTE LEYRE	25/10/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	5	3	17	5	3	17			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
433	2252	SALVADOR MARTINEZ NURIA	25/01/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALICANTE/ALACANT)	5	3	17	5	3	17			
434	2253	CADENA PLA FIDEL	06/11/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VITORIA-GASTEIZ)	4	3	27	4	3	27			
435	2254	MARTINEZ GONZALEZ BELEN	28/08/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	4	3	27	4	3	27			
436	2255	ZALVIDEGOITIA RENOBALDES NEREA	06/03/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	4	3	27	4	3	27			
437	2256	MONTERO ORTEGA MONICA	03/07/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (REUS)	4	3	27	4	3	27			
438	2257	GIMENEZ ESTEBAN ANA	13/06/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	4	3	27	4	3	27			
439	2258	IZQUIERDO SALVATIERRA JOSE MANUEL	16/04/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MELILLA)	4	3	27	4	3	27			
440	2259	ALONSO PEREZ JOSE JOAQUIN	29/03/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CORUÑA, A)	4	3	27	4	3	27			
441	2260	SANZ RODRIGUEZ ANA	07/01/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (REUS)	4	3	27	4	3	27			
442	2261	MANGAS CAMPOS ALVARO	24/07/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	4	3	27	4	3	27			
443	2262	ARIZA FERNANDEZ JUAN	01/07/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	4	3	27	4	3	27			
444	2263	PARRA LORENS VERONICA	17/10/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GRANOLLERS)	4	3	27	4	3	27			
445	2264	BLASCO MUELA PAULA	21/09/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VIGO)	4	3	27	4	3	27			
446	2265	MORENO PORTER LUZ ELENA	15/07/1975	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)	4	3	27	4	3	27			
447	2266	SUAREZ SANCHEZ-ANDRADE ANDREA	12/02/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VITORIA-GASTEIZ)	4	3	27	4	3	27			
448	2267	MARTINEZ GONZALEZ ROCIO	03/11/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANTA COLOMA DE GRAMENET)	4	3	27	4	3	27			
449	2268	GARCIA GALVAN MARIA ISABEL	23/10/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ARRECIFE-PTO ROSARIO) (ARRECIFE)	4	3	27	4	3	27			
450	2269	MARTINEZ DIAZBEDIA MARIA DEL ROCIO	15/07/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS)	4	3	27	4	3	27			
451	2270	BERNAL MOLERO ROCIO	09/08/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ZAFRA)	4	3	27	4	3	27			
452	2271	MUÑOZ MORENO MARIA SALUD	06/01/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LORA DEL RÍO)	4	3	27	4	3	27			
453	2272	SANZ ALDANA BLANCA	05/08/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	4	3	27	4	3	27			
454	2273	MARTINEZ SANCHEZ BEATRIZ	16/01/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANTA COLOMA DE GRAMENET)	4	3	27	4	3	27			
455	2274	MIRANDA CUCHET GABRIEL	19/06/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GRANOLLERS)	4	3	27	4	3	27			
456	2275	BRUZON ROMAGOSA CLAUDIA ANDREA	16/05/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (REUS)	4	3	27	4	3	27			
457	2276	FERNANDEZ SALVATIERRA MIGUEL	06/11/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MATARÓ-ARENYS) (MATARÓ)	4	3	27	4	3	27			
458	2277	ALVAREZ CAMPILLO JOAQUIN	07/12/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (TERRASSA)	4	3	27	4	3	27			
459	2278	SICILIA CALVO JUDIT	30/10/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (TERRASSA)	4	3	27	4	3	27			
460	2279	VAZQUEZ CAMPOS MARIA	10/11/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MANACOR)	4	3	27	4	3	27			
461	2280	CAINZOS SUAREZ MARIA	24/02/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (FERROL)	4	3	27	4	3	27			
462	2281	PASCUAL ESPINOSA MARIA VICTORIA	07/02/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	4	3	27	4	3	27			
463	2282	BENAVENTE JIMENEZ ROCIO	01/03/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOY/ALCOI)	4	3	27	4	3	27			
464	2283	TENORIO GONTAN ALBA PILAR	01/08/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MANZANARES)	4	3	27	4	3	27			
465	2284	CERDA BENEROSO JUAN CARLOS	22/04/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (CEUTA)	4	3	27	4	3	27			
466	2285	GUTIERREZ MAYO ESCARLATA	30/05/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MANZANARES)	4	3	27	4	3	27			
467	2286	SANTOS MORALES MANUEL	19/03/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS)	4	3	27	4	3	27			
468	2287	GARCIA ENCABO SARA	24/03/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VITORIA-GASTEIZ)	4	3	27	4	3	27			
469	2288	LUQUE MUÑOZ IRENE	24/08/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	4	3	27	4	3	27			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
470	2289	MUÑOZ MESA SILVIA	01/11/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (JAÉN)	4	3	27	4	3	27			
471	2290	DE GOICOECHEA MANZANARES PALOMA	24/03/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	4	3	27	4	3	27			
472	2291	PEREZ BOCANEGRA IRENE	27/11/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	4	3	27	4	3	27			
473	2292	AGUAYO DE FLORES MARIA ANGUSTIAS	01/03/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (CEUTA)	4	3	27	4	3	27			
474	2293	GARCIA-PUMARINO PEREZ CARMEN MARIA	06/10/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	4	3	27	4	3	27			
475	2294	VALLE PAVON ALBERTO	09/01/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	4	3	27	4	3	27			
476	2295	JIMENEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	06/01/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (EJIDO, EL)	4	3	27	4	3	27			
477	2296	BLANCO SANCHEZ PALOMA	04/10/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (PLASENCIA)	4	3	27	4	3	27			
478	2297	GONZALEZ MARTIN ANGEL DOMINGO	14/11/1963	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	4	3	27	4	3	27			
479	2298	RAMOS DEL VALLE BEATRIZ	01/12/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA CARTAGENA	4	3	27	4	3	27			
480	2299	FRIGOLA MARTINEZ JOSEP ANIOL	20/01/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L')	4	3	27	4	3	27			
481	2300	CORTES PEREZ-MUÑOZ JUAN FRANCISCO	12/08/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	4	3	27	4	3	27			
482	2301	PEREZ BENEITEZ YOLANDA LEONOR	27/12/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	4	3	27	4	3	27			
483	2302	GARCIA-REYES PARRA ANA MARIA	18/08/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	4	3	27	4	3	27			
484	2303	DIAZ-JIMENEZ TRIVIÑO DEBORAH	27/11/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	4	3	27	4	3	27			
485	2304	HERNANDEZ LEAL JORGE ENRIQUE	23/07/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (PALMAS DE GRAN CANARIA,LAS)	4	3	27	4	3	27			
486	2305	GUTIERREZ REDONDO CARMEN	22/01/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	4	3	27	4	3	27			
487	2306	RODRIGUEZ RUIZ MARIA	24/04/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	4	3	27	4	3	27			
488	2307	BERJON MACHIO ANDREA	27/02/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORREVIEJA)	4	3	27	4	3	27			
489	2308	SERNA PANADERO RAQUEL	13/06/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MATARÓ-ARENYS) (MATARÓ)	4	3	27	4	3	27			
490	2309	JIMENEZ MORENO YOLANDA	30/05/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VINARÒS)	4	3	27	4	3	27			
491	2310	SERRANO STAMPA MARIA LORETO	21/06/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	4	3	27	4	3	27			
492	2311	PEREZ-CARRAL GARCIA RICARDO	12/10/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	4	3	27	4	3	27			
493	2312	FERNANDEZ RODRIGUEZ JULIA	16/03/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GRANOLLERS)	4	3	27	4	3	27			
494	2313	SEVILLA PEREA ELENA	22/01/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	4	3	27	4	3	27			
495	2314	AGUADO VALCARCEL LUCIA	30/04/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MONFORTE DE LEMOS)	4	3	27	4	3	27			
496	2315	MEDINA ROBERT ROSALIA	08/09/1972	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SEU D'URGELL, LA)	4	3	27	4	3	27			
497	2316	NAVAS COBOS MARIA DEL CARMEN	23/02/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MANZANARES)	4	3	27	4	3	27			
498	2317	PEREZ FRUTOS FULGENCIO	01/05/1971	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA CARTAGENA	4	3	27	4	3	27			
499	2318	SANCHEZ-MORA BEY MARIA MARTA	01/05/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA (MURCIA)	4	3	27	4	3	27			
500	2319	JURADO LOPEZ JOSE RAMON	17/06/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	4	3	27	4	3	27			
501	2320	SANS ALEMANY JOSE GONZALO	27/04/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MANACOR)	4	3	27	4	3	27			
502	2321	BOBILLO MARTINEZ JOAQUIN MANUEL	29/02/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ARRECIFE-PTO ROSARIO) (ARRECIFE)	4	3	27	4	3	27			
503	2322	MORAN AGUIRRE MARIA ISABEL	15/07/1964	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LORCA)	4	3	27	4	3	27			
504	2323	RUIZ ALCALA FRANCISCO JOSE	04/12/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ALGECIRAS)	4	3	27	4	3	27			
505	2324	BUENCUERPO FARIÑA JULIANA	25/08/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA EIVISSA	4	3	27	4	3	27			
506	2325	HUESO MARTIN ANGEL	19/08/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VINARÒS)	4	3	27	4	3	27			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
507	2326	PEREZ-OLIVARES MARTIN SARA	14/10/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ARRECIFE-PTO ROSARIO) (ARRECIFE)	4	3	27	4	3	27			
508	2327	BAÑOS GIMENEZ PENELOPE RAQUEL	12/07/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HUÉRCAL-OVERA)	4	3	27	4	3	27			
509	2328	MORENO BRUNA MARIA ISABEL	30/06/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BAZA)	4	3	27	4	3	27			
510	2329	AROLAS LLORIS FRANCISCA	17/11/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ALCOY/ALCOI)	4	3	27	4	3	27			
511	2330	GONZALEZ CASTILLO ROSA MACARENA	11/03/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VENDRELL, EL)	4	3	27	4	3	27			
512	2331	PALOMARES MANCHADO ARIADNA	13/10/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANT FELIU DELLOBREGAT)	4	3	27	4	3	27			
513	2332	QUEROL IGLESIAS EILA	13/11/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	4	3	27	4	3	27			
514	2333	SOBRINO HERRERO MARIA ISABEL	14/12/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VITORIA-GASTEIZ)	4	3	27	4	3	27			
515	2334	VICENTE BRIANSO CRISTINA	26/02/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VITORIA-GASTEIZ)	4	3	27	4	3	27			
516	2335	MARTIN GARCIA VIRGINIA	06/06/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	4	3	27	4	3	27			
517	2336	RODRIGUEZ BALSERA FRANCISCO JAVIER	08/01/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	4	3	27	4	3	27			
518	2337	HERNANDEZ AGUIRAN SUSANA	14/02/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	4	3	27	4	3	27			
519	2338	SANCHEZ LOPEZ SANTIAGO	11/12/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	4	3	27	4	3	27			
520	2339	VICENTE CUESTA MARIA CRISTINA	22/08/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	4	3	27	4	3	27			
521	2340	NIETO SANCHEZ PATRICIA JULIA	07/03/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	4	3	27	4	3	27			
522	2341	IZQUIERDO BORRELLA MARIA DEL PRADO	03/10/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (PLASENCIA)	4	3	27	4	3	27			
523	2342	RODRIGUEZ LEON MARTA	22/10/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ARRECIFE-PTO ROSARIO) (ARRECIFE)	4	3	27	4	3	27			
524	2343	LOPEZ FERNANDEZ DIANA MARIA	15/08/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MATARÓ-ARENYS) (MATARÓ)	4	3	27	4	3	27			
525	2344	PLAZAS PEREIRA PAOLA REBECA	01/12/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (TERRASSA)	4	3	27	4	3	27			
526	2345	TORRES CANADELL MARIA DOLORS	09/07/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	4	3	27	4	3	27			
527	2346	GONZALEZ CAMARA ANA ISABEL	30/10/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MONFORTE DE LEMOS)	4	3	27	4	3	27			
528	2347	MARTI DEL MORAL LAURA	22/05/1978	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (EJIDO, EL)	4	3	26	4	3	26			
528	2348	PEREZ JIMENEZ MARIA	08/12/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	4	3	27	4	3	27			
529	2349	SOLER LLACER JOSE	29/01/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	4	3	27	4	3	27			
530	2350	GUTIERREZ AZANZA DIEGO ALBERTO	16/12/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	4	3	27	4	3	27			
531	2351	LACASA MUÑOZ MARTA	31/07/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	4	3	27	4	3	27			
532	2352	SOUSA HERRANZ RAFAEL ANTONIO	13/06/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TERUEL)	4	3	27	4	3	27			
533	2353	GARCIA MERINO SILVIA	28/08/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	4	3	27	4	3	27			
534	2354	OCON CABRIA ANA MARIA	13/01/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALBACETE)	4	3	27	4	3	27			
535	2355	JIMENEZ LAZUEN CLARA	25/07/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORTOSA)	4	3	27	4	3	27			
536	2356	MIRANDA FERNANDEZ MARIA	27/07/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MATARÓ-ARENYS) (MATARÓ)	4	3	27	4	3	27			
537	2357	GARRIDO NOVOA CRISTINA SUSANA	04/08/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SEU D'URGELL, LA)	4	3	27	4	3	27			
538	2358	LOPEZ RODRIGUEZ DIEGO	06/03/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA CARTAGENA	4	3	27	4	3	27			
539	2359	PASTOR GOMEZ CRISTINA	01/05/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORREVIEJA)	4	3	27	4	3	27			
540	2360	GARRIDO JIMENEZ MACARENA	24/02/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	4	3	27	4	3	27			
541	2361	MAYAN SANTOS MARIA ENCARNACION	25/06/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	4	3	27	4	3	27			
542	2362	NIETO MENGOTTI JUAN PABLO	12/06/1958	FISCAL DE LA MINISTERIO DE JUSTICIA. SERVICIOS CENTRALES (MADRID)	4	3	27	4	3	27			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
543	2363	GOMEZ LAGE EVA	01/09/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (FIGUERES)	4	3	27	4	3	27			
544	2364	LUCAS SALMERON MARIA DE LAS MERCEDES	17/03/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HUÉRCAL-OVERA)	4	3	27	4	3	27			
545	2365	NAVARRO MARTINEZ ISABEL EMILIA	31/01/1976	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ZAFRA)	4	3	27	4	3	27			
546	2366	LANSEROS LOBATO DIANA	24/12/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	4	3	27	4	3	27			
547	2367	GARCIA CALLEJA ESTHER MARIA	02/10/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	4	3	27	4	3	27			
548	2368	LOPEZ RIVERA CRISTINA	13/04/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (VITORIA-GASTEIZ)	4	3	27	4	3	27			
549	2369	GARCIA RODRIGUEZ MARIA AURELIA	15/02/1974	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MONDOÑEDO)	4	3	27	4	3	27			
550	2370	LANZAS VIEDMA OLIVIA	23/02/1979	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	4	3	27	4	3	27			
551	2371	LOPEZ TINEO JORGE	14/01/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANTA CRUZ DE LAPALMA)	4	3	27	4	3	27			
552	2372	GORDILLO RUBIO BELEN	28/02/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (PRAT DELLOBREGAT, EL)	4	3	27	4	3	27			
553	2373	LIZAN NUÑEZ EDUARDO	05/09/1977	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (TERRASSA)	4	3	27	4	3	27			
554	2374	GUIBERT OVEJERO-BECERRA SANTIAGO	14/10/1970	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	4	3	27	4	3	27			
555	2375	ABOLAFIA MOYA VIRGINIA	15/03/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L')	4	3	27	4	3	27			
556	2376	REMON SUAREZ NAYADE	31/01/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	3	3	16	3	3	16			
557	2377	CASADEVALL PORTAS ALEXANDRE	26/09/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (TERRASSA)	3	3	16	3	3	16			
558	2378	MELERO RUEDA CARLA	23/11/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	3	3	16	3	3	16			
559	2379	PINA MONTANER CLARA	22/11/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	3	3	16	3	3	16			
560	2380	QUEVEDO JUANALS MARIA VIOLETA	09/11/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (INCA)	3	3	16	3	3	16			
561	2381	LAHIDALGA GUEREÑU MARIA DEL CARMEN	06/01/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BLANES)	3	3	16	3	3	16			
562	2382	RODRIGUEZ PARDO MARIA VICTORIA	03/10/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	3	3	16	3	3	16			
563	2383	AYALA SANTANDER CRISTINA	17/11/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GRANOLLERS)	3	3	16	3	3	16			
564	2384	DE ESCALANTE ATIENZA ISABEL	26/11/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	3	3	16	3	3	16			
565	2385	CABEZAS BERDION LORENA	30/10/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	3	3	16	3	3	16			
566	2386	GOMEZ NAVARRO ANGELA	25/01/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	3	3	16	3	3	16			
567	2387	SORIA ALFARO MARTA	06/04/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN)	3	3	16	3	3	16			
568	2388	GOMEZ COLLADO SOFIA	02/05/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	3	3	16	3	3	16			
569	2389	FERNANDEZ COBO BORJA	15/08/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (BILBAO)	3	3	16	3	3	16			
570	2390	ALMAGRO LOPEZ AMARA	02/03/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (TERRASSA)	3	3	16	3	3	16			
571	2391	DIAZ SANCHEZ JUAN CARLOS	03/08/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L')	2	3	11	2	3	11			
572	2392	GOMEZ VARON ARANZAZU DEL MAR	14/08/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LORCA)	2	3	11	2	3	11			
573	2393	ARJONA BERNALDEZ ANGEL	04/08/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ARONA)	2	3	11	2	3	11			
574	2394	SANCHEZ WILHELM VANESSA DANIELA	04/02/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ARONA)	2	3	11	2	3	11			
575	2395	MARTINEZ BLANCO INES	30/11/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ARONA)	2	3	11	2	3	11			
576	2396	GARCIA JUESAS BELEN YESICA	06/11/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	2	3	11	2	3	11			
577	2397	RUIZ MEDINA ELISA	02/01/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BADALONA)	2	3	11	2	3	11			
578	2398	RIVERO DIAZ BEATRIZ	03/10/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BADALONA)	2	3	11	2	3	11			
579	2399	GARRIDO MARTINEZ FRANCISCO	05/01/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BLANES)	2	3	11	2	3	11			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
580	2400	CARRERO ALONSO FERNANDO MANUEL	24/11/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MAÓ-MAHÓN)	2	3	11	2	3	11			
581	2401	BELLO JUBANY ROSA LUCIA	22/09/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORREVIEJA)	2	3	11	2	3	11			
582	2402	ALVAREZ DE TOLEDO PEREZ ARANZAZU	18/04/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	2	3	11	2	3	11			
583	2403	FERNANDEZ DEL POZO MARTA	29/10/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	2	3	11	2	3	11			
584	2404	MENDEZ PEREZ VANESA	11/11/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	2	3	11	2	3	11			
585	2405	BARRAGAN ANDINO ANDRES	03/12/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MAÓ-MAHÓN)	2	3	11	2	3	11			
586	2406	MUT DE LUCCHI EUGENIA CAROLINA	14/12/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MELILLA)	2	3	11	2	3	11			
587	2407	CAPELA MELGUIZO MARIA ELENA	04/08/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	2	3	11	2	3	11			
588	2408	GARCIA-FOGEDA MANSILLA INES	21/09/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	2	3	11	2	3	11			
589	2409	TEBAN LOPEZ MARIA TERESA	27/07/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (CIEZA)	2	3	11	2	3	11			
590	2410	ESCRIBANO ZARDOYA MARTA	12/11/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (TERRASSA)	2	3	11	2	3	11			
591	2411	RODRIGUEZ BUENDIA SONIA	16/05/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	2	3	11	2	3	11			
592	2412	MORENO DORADO CARMEN ANGELA	23/10/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	2	3	11	2	3	11			
593	2413	FIDALGO BLANCO LIDIA	29/11/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	2	3	11	2	3	11			
594	2414	RODRIGUEZ LORENTE VERONICA	24/04/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (TERRASSA)	2	3	11	2	3	11			
595	2415	MUÑOZ GONZALEZ-ADALID LORETO	23/10/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANT FELIU DELLOBREGAT)	2	3	11	2	3	11			
596	2416	MARQUEZ VICENTE ARANTXA	13/10/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (AMPOSTA)	2	3	11	2	3	11			
597	2417	GUTIERREZ GULLON EDUARDO ROMAN	14/01/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	2	3	11	2	3	11			
598	2418	CABALLERO PRATS LIDIA	27/05/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VENDRELL, EL)	2	3	11	2	3	11			
599	2419	GUITIAN IZQUIERDO MARIA CARMEN	06/11/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	2	3	11	2	3	11			
600	2420	CASCALES MARTINEZ LUCIA	06/05/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA)	2	3	11	2	3	11			
601	2421	SANCHEZ GARCIA MARIA	31/08/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	2	3	11	2	3	11			
602	2422	MARTIN LLORENTE ANA ISABEL	29/12/1980	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GRANOLLERS)	2	3	11	2	3	11			
603	2423	ROMERO AGUIRRE GUILLERMO JAVIER	29/01/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (PRAT DELLOBREGAT, EL)	2	3	11	2	3	11			
604	2424	DONOSO ISIDORO ALBA	22/01/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA)	2	3	11	2	3	11			
605	2425	SERRANO PARDA CLARA	11/08/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ARRECIFE-PTO ROSARIO) (ARRECIFE)	2	3	11	2	3	11			
606	2426	MILLAN GARCIA ANA	11/06/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BLANES)	2	3	11	2	3	11			
607	2427	LINARES RIVAS TOVAR MARIA ANA	22/01/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MATARÓ-ARENYS) (MATARÓ)	2	3	11	2	3	11			
608	2428	CAMPOS RAPUN CLARA	03/06/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (TERRASSA)	2	3	11	2	3	11			
609	2429	CASTAÑO ANGOSTO ISABEL	10/02/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MATARÓ-ARENYS) (MATARÓ)	2	3	11	2	3	11			
610	2430	LOZANO BARANDA MARIA	11/12/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	2	3	11	2	3	11			
611	2431	YEBRA LOPEZ ALICIA	17/12/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BLANES)	2	3	11	2	3	11			
612	2432	PICASSO SANZ ANA	04/02/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (INCA)	2	3	11	2	3	11			
613	2433	CALABUIG GOENA ANA MARIA	15/09/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	2	3	11	2	3	11			
614	2434	RAMOS RUANO ANA MARIA	06/12/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	2	3	11	2	3	11			
615	2435	MARTIN ESCUDERO SARA	03/06/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SORIA)	2	3	11	2	3	11			
616	2436	GILA MALO MARIA ANA	27/12/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VENDRELL, EL)	2	3	11	2	3	11			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
617	2437	ALONSO VIDAL ALBA MARIA	20/01/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MONFORTE DE LEMOS)	2	3	11	2	3	11			
618	2438	RODRIGUEZ TORRENTI INES AMPARO	03/04/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	2	3	11	2	3	11			
619	2439	FERRER SALA MARTA	28/03/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (FIGUERES)	2	3	11	2	3	11			
620	2440	MARTINEZ CAYON FRANCISCO JAVIER	15/07/1981	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (OLOT)	2	3	11	2	3	11			
621	2441	BOLAÑOS MARTIN MARIA ISABEL	29/03/1990	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LORA DEL RÍO)	1	0	13	1	0	13			
622	2442	CAMPOS VIVAS MARIA LUISA	30/10/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (REUS)	1	0	13	1	0	13			
623	2443	HERNANZ ROMAN MARIO	02/03/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA)	1	0	13	1	0	13			
624	2444	POZO GUGLIERI MARIA CRISTINA	05/07/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HOSPITALET DELLOBREGAT, L')	1	0	13	1	0	13			
625	2445	FERNANDEZ CABEZUDO ROSA MARIA	10/08/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (PRAT DELLOBREGAT, EL)	1	0	13	1	0	13			
626	2446	DIAZ GOMEZ ELBA	21/08/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BLANES)	1	0	13	1	0	13			
627	2447	SERRANO FLORIDO ALEXANDRA	14/06/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MELILLA)	1	0	13	1	0	13			
628	2448	DOMINGUEZ LOPEZ CARLOS LUIS	05/02/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VENDRELL, EL)	1	0	13	1	0	13			
629	2449	HEREDIA GONZALEZ IRENE	21/09/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANT FELIU DELLOBREGAT)	1	0	13	1	0	13			
630	2450	JORDAN DE URRIES RUIZ JORGE	30/06/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MATARÓ-ARENYS) (MATARÓ)	1	0	13	1	0	13			
631	2451	CORDOBA GONZALEZ NOEMI	28/06/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	1	0	13	1	0	13			
632	2452	PEREZ PLIEGO MARIA	01/08/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ARRECIFE-PTO ROSARIO) (ARRECIFE)	1	0	13	1	0	13			
633	2453	HERRERO RUBI ANGELA	01/02/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANT FELIU DELLOBREGAT)	1	0	13	1	0	13			
634	2454	ASENSIO RODRIGUEZ CELIA MARIA	10/12/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ARRECIFE-PTO ROSARIO) (ARRECIFE)	1	0	13	1	0	13			
635	2455	DELGADO GARCIA DIEGO	10/03/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	1	0	13	1	0	13			
636	2456	ARCE ARROYO LAURA	06/05/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ARRECIFE-PTO ROSARIO) (ARRECIFE)	1	0	13	1	0	13			
637	2457	DEL VALLE DE LA SEN LIDIA	22/10/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LORA DEL RÍO)	1	0	13	1	0	13			
638	2458	CUESTA PALOMEQUE ODEI	16/05/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	1	0	13	1	0	13			
639	2459	VAZQUEZ GEMMELL DAVID WILLIAN	08/04/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (ARONA)	1	0	13	1	0	13			
640	2460	PEON FERNANDEZ MARIA ESTHER	24/01/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORREVIEJA)	1	0	13	1	0	13			
641	2461	VAQUERA MARQUEZ JOSE LUIS	28/05/1965	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	1	0	13	1	0	13			
642	2462	TENA RUFO VERONICA	10/06/1984	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	1	0	13	1	0	13			
643	2463	OCHOA RUBIO MARIA DEL CARMEN	30/09/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VENDRELL, EL)	1	0	13	1	0	13			
644	2464	VELASCO ALMENDRAL PAULA	11/08/1985	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (SABADELL)	1	0	13	1	0	13			
645	2465	ROMERA MARTIN ANA	05/09/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANT FELIU DELLOBREGAT)	1	0	13	1	0	13			
646	2466	GOTOR VAZQUEZ CARMEN ROCIO	11/01/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MAÓ-MAHÓN)	1	0	13	1	0	13			
647	2467	FERNANDEZ BERMUDEZ ALBERTO LEOPOLDO	05/08/1982	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MATARÓ-ARENYS) (MATARÓ)	1	0	13	1	0	13			
648	2468	AROZAMENA BARO LUCIA MARINA	09/04/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GRANOLLERS)	1	0	13	1	0	13			
649	2469	PIQUER NAVARRO NEUS	08/02/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORTOSA)	1	0	13	1	0	13			
650	2470	LAZARO MARNOTES MARIA	18/09/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (VENDRELL, EL)	1	0	13	1	0	13			
651	2471	TORA GADEA ESTEFANIA	14/07/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	1	0	13	1	0	13			
652	2472	RIUS COSTA LAIA	04/02/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	1	0	13	1	0	13			
653	2473	FREIRE MONTERO ANTON FRUCTUOSO	18/04/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (FIGUERES)	1	0	13	1	0	13			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
654	2474	GUTIERREZ CASTELLANO PEDRO	21/10/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	1	0	13	1	0	13			
655	2475	HERNANDEZ SANCHEZ DE OCAÑA MARINA	15/02/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (FIGUERES)	1	0	13	1	0	13			
656	2476	SÁEZ RIERA ROCÍO	16/09/1990	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	0	0	15	0	0	25			
657	2477	FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ EMILIO	08/11/1990	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (TARRAGONA)	0	0	15	0	0	15			
658	2478	MENESES GARCÍA MÓNICA	10/08/1991	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GRANOLLERS)	0	0	15	0	0	15			
659	2479	BALEA ROUCO ALEJANDRO	09/10/1990	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	0	0	15	0	0	15			
660	2480	SÁNCHEZ DEL RÍO PATRICIA	23/07/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (GIRONA)	0	0	15	0	0	15			
661	2481	MOYANO FERNÁNDEZ MARÍA LUISA	29/09/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	0	0	15	0	0	15			
662	2482	BLANCO DE LA FUENTE MARÍA	12/04/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (GRANOLLERS)	0	0	15	0	0	15			
663	2483	ARES BACHILLER CARMEN	16/07/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (JEREZ DE LA FRONTERA)	0	0	15	0	0	15			
664	2484	ROJO ALDAMA LARA	11/02/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (REUS)	0	0	15	0	0	15			
665	2485	LÓPEZ ORERO MARTA	06/06/1991	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MATARÓ-ARENYS) (MATARÓ)	0	0	15	0	0	15			
666	2486	MARTÍNEZ-CANALES SÁNCHEZ-PEDREÑO MARTA	23/09/1990	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MANACOR)	0	0	15	0	0	15			
667	2487	OCAÑA GARCÍA CARLOS	21/12/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (BADALONA)	0	0	15	0	0	15			
668	2488	MARTÍN GALÁN CARMEN	24/06/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)	0	0	15	0	0	15			
669	2489	MENDEZ ALONSO OLGA	21/11/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (SANTA CRUZ DE LAPALMA)	0	0	15	0	0	15			
670	2490	PALAO CORTES ANTONIO	09/05/1983	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (FIGUERES)	0	0	15	0	0	15			
671	2491	MOLINA MARTINEZ NATALIA	28/02/1990	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	0	0	15	0	0	15			
672	2492	POLVOROSA ARRIAZU FÁTIMA	02/11/1992	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (FIGUERES)	0	0	15	0	0	15			
673	2493	CANO ACEITUNO ELENA	12/08/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HUÉRCAL-OVERA)	0	0	15	0	0	15			
674	2494	PASTOR PÉREZ-ESTRADA MARÍA	31/03/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (HUÉRCAL-OVERA)	0	0	15	0	0	15			
675	2495	CABRERA GARBALLO MARÍA DEL ROCÍO	09/03/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (VILANOVA-GAVÁ) (VILANOVA I LAGELTRÚ)	0	0	15	0	0	15			
676	2496	SOLER CORTINA MARIA AMPARO	08/05/1986	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	0	0	15	0	0	15			
677	2497	ALAÍZ GUDÍN MARGARITA MARÍA	18/01/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	0	0	15	0	0	15			
678	2498	BRIONES PASCUAL FELIPE ALBERTO	29/11/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (MANRESA-IGUALADA-VIC) (MANRESA)	0	0	15	0	0	15			
679	2499	JIMÉNEZ NOGUEIRA MARTA	25/06/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (FUENGIROLA)	0	0	15	0	0	15			
680	2500	JIMENEZ VACAS FRANCISCO JAVIER	17/02/1987	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ARRECIFE-PTO ROSARIO) (ARRECIFE)	0	0	15	0	0	15			
681	2501	ALONSO GALNARES RAQUEL	22/05/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (CÁDIZ)	0	0	15	0	0	15			
682	2502	YUSTE FRANCO MARÍA DEL PUERTO	02/04/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (LUGO)	0	0	15	0	0	15			
683	2503	MIÑAMBRES ALONSO MARÍA DE LOS REYES	08/01/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (MAÓ-MAHÓN)	0	0	15	0	0	15			
684	2504	ENRIQUE RUIZ MELANIA	22/10/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (ALMERÍA)	0	0	15	0	0	15			
685	2505	BELDA SIMÓ PABLO	25/08/1993	FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL (HUELVA)	0	0	15	0	0	15			
686	2506	TORRA ESCÁNEZ ELENA	16/01/1988	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (ELCHE/ELX)	0	0	15	0	0	15			
687	2507	GARCÍA MELÉNDEZ MARÍA CRISTINA	30/06/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA DE ÁREA (BENIDORM-DENIA) (BENIDORM)	0	0	15	0	0	15			
688	2508	MOZOTA PIRLA JUAN	14/06/1990	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (OLOT)	0	0	15	0	0	15			
689	2509	GRANADO CÓRCOLES ROCÍO	11/09/1989	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (TORTOSA)	0	0	15	0	0	15			
690	2510	LAÍN BRIHUEGA AITANA	18/06/1991	FISCAL DE LA FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL (LORCA)	0	0	15	0	0	15			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS														
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO								
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días						
				FISCALES DE PRIMERA EXCEDENTES															
				FISCALES DE SEGUNDA EXCEDENTES															
	2511	TORRES-DULCE LIFANTE EDUARDO	14/05/1950		39	4	0	18	11	12									
	2512	GORDILLO ALVAREZ VALDES IGNACIO MARIA	25/11/1950		33	0	21	25	11	10									
	2513	MARQUEZ DE PRADO Y DE NORIEGA MARIA DOLORES	10/01/1955		27	10	17	23	3	24	0	0	1						
	2514	HUERTA TROLEZ FRANCISCO JAVIER	09/06/1950		28	9	16	23	2	29									
	2515	CARRASCO ROMERO JUAN PEDRO	27/11/1959		26	10	16	22	4	0									
	2516	DEL MORAL GARCIA ANTONIO	13/07/1959		28	2	15	22	9	20									
	2517	SANTOS ALONSO JESUS IGNACIO	05/07/1959		26	8	22	22	1	25									
	2518	CAMPOS NAVAS DANIEL	13/05/1961		24	11	19	18	10	10									
	2519	CASTRESANA FERNANDEZ CARLOS	12/07/1957		24	4	24	18	3	19									
	2520	GOROSTIZA JIMENEZ INIGO MARIA	26/08/1960		25	10	13	17	9	5									
	2521	COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA MIGUEL	13/04/1951		25	1	6	17	10	28									
	2522	CALERO MARTINEZ JOSE MARIA	19/10/1961		19	6	16	16	7	11									
	2523	MARCHENA GOMEZ MANUEL	01/03/1959		21	9	7	17	9	8									
	2524	SEDANO BOCOS M.PRESENTACION	28/03/1962		22	6	29	16	5	29									
	2525	HORRACH ARROM PEDRO	08/09/1966		24	1	22	16	4	9									
	2526	CAMACHO VIZCAINO ANTONIO	11/02/1964		23	2	11	16	0	0									
	2527	MOLINA BENITO ENRIQUE	04/07/1964		17	8	1	15	2	1									
	2528	RAMOS RUBIO CARLOS	22/08/1956		20	11	5	15	6	10									
	2529	LAREDO CORDONIE MARIA ENCINA	24/07/1960		16	9	11	13	3	0									
	2530	SANCHEZ-PEGO LAMELAS ALVARO	23/03/1965		20	5	20	12	8	6									
	2531	SANCHEZ-JUNCO MANS JAVIER	29/12/1957		18	0	8	12	7	20									
	2532	RUIZ FERNANDEZ ANTONIO	12/02/1951		19	4	7	12	5	17	3	9	0						
	2533	CANAU PEREZ ALFONSO	01/07/1960		16	3	27	12	3	27									
	2534	PELAEZ MARQUES IGNACIO	16/10/1958		16	9	21	12	3	0									
	2535	JORDANA DE POZAS GONZALBEZ LUIS	21/05/1955		13	11	15	10	5	16									
	2536	SAIZ DIAZ CARLOS	16/06/1961		15	5	15	9	4	11									
	2537	MORAL DE LA ROSA JUAN	28/01/1965		16	9	6	8	11	18									
	2538	RAMOS REAL EDUARDO JESUS	08/04/1960		13	6	13	10	8	0	5	0	0						
	2539	PRIETO GONZALEZ HELENA MARIA	18/10/1975		12	1	3	8	4	16									
	2540	BARALLAT LOPEZ JUAN FRANCISCO	29/01/1965		16	9	1	7	2	28									
	2541	ORTI PONTE FLORENTINO	03/06/1959		10	9	9	6	2	19									
	2542	GARCIA FERNANDEZ MIGUEL	20/11/1976		8	6	13	6	0	16									
	2543	SANTOS GOMEZ JOSE	20/02/1956		14	7	23	9	2	29									

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
2544	RODRIGUEZ SOL ROMAN	21/07/1962		7	8	0	4	11	3				
2545	ESTEVEZ PENDAS RAFAEL	19/08/1960		11	8	16	9	0	0				
2546	DE BUERBA PANDO ADRIANA	24/11/1970		9	6	20	3	4	26				
2547	SANCHIS OSENDE ELENA	06/06/1964		7	11	19	2	2	19				
2548	HORCAS BALLESTEROS RAFAELA	17/06/1963		7	11	23	7	11	23				
2549	GARCIA CRESPO JOSE MANUEL	16/05/1957		7	0	20	1	8	1				
2550	MILANS DEL BOSCH JORDAN URRIES SANTIAGO	04/02/1960		5	6	9	1	7	0				
2551	HUERTA GARICANO INES MARIA	25/03/1951		9	5	15	6	8	20	2	5	22	
2552	SUAREZ PALOMARES EUGENIO	15/11/1948		8	9	3	0	11	2				
2553	RUIZ-GALLARDON JIMENEZ ALBERTO	11/12/1958		4	9	11	0	6	15				
2554	LOPEZ DE SAN ROMAN REGOYOS AGUSTIN	02/05/1954		6	8	9	6	8	9				
2555	ZAFORTEZA FORTUNY JOSE	25/10/1962		10	0	19	0	6	4				
2556	CASTILLO BADAL RAMON CARLOS	13/09/1961		8	11	3	6	2	7				
2557	CUEVA ALEU IGNACIO JAVIER	23/05/1962		8	10	22	6	1	29				
2558	MARTIN HERNANDEZ-CARRILLO MANUEL	21/11/1962		8	10	14	6	1	26				
2559	VICENTE PELEGRINI JOSE IGNACIO	20/02/1967		11	8	18	5	6	22				
2560	Apellido1 Apellido2 Nombre	01/01/1980					5	5	5				
2561	PARDO CASTILLO MIGUEL PEDRO	20/12/1979		8	10	3	5	4	6				
2562	ZATARAIN Y VALDEMORO FRANCISCO JAVI	01/12/1966		5	2	11	5	2	11				
2563	LESMESS SERRANO CARLOS	10/06/1958		9	5	26	4	1	1				
2564	TOLEDANO CANTERO RAFAEL	22/04/1959		9	5	10	4	0	21				
2565	CASTELLO CHECA MARIA BELEN	12/08/1973		8	8	13	4	0	0				
2566	COULLAUT ARIÑO GABRIEL	08/10/1945		12	1	18	3	9	0				
2567	CASTRO FERNANDEZ LUIS FERNANDO	23/03/1947		12	1	10	3	6	25				
2568	VIÑOLY PALOP MARCIAL	24/11/1959		9	7	12	3	6	7				
2569	PEREZ NIETO RAFAEL	04/04/1963		8	6	29	3	0	23				
2570	FERNANDEZ CARBALLO-CALERO RICARDO	09/09/1972		7	8	10	3	0	0				
2571	RUBIRA MORENO ANA	17/06/1949		7	4	14	2	9	23				
2572	MUÑOZ CORTES JORGE RAFAEL	05/08/1973		8	6	27	2	9	13				
2573	ORTEGA MARTIN EDUARDO	16/05/1960		5	6	9	2	9	10				
2574	LIBRAN SAINZ DE BARANDA PEDRO	24/07/1947		11	1	23	2	5	21				
2575	ALONSO SOTORRIO MARIA DEL PILA	06/07/1965		11	2	6	2	3	12				
2576	ROMAN GARCIA FERNANDO	22/09/1960		5	6	9	2	2	8				
2577	HERNANDEZ SERNA MIGUEL	19/10/1979		4	7	21	1	11	27				
2578	GULLON RODRIGUEZ JESUS	25/06/1948		9	2	0	1	6	13				
2579	CAMPOS SANCHEZ BORDONA MANUEL	28/11/1950		8	5	20	1	3	12				
2580	QUETCUTI MIGUEL JOSE	26/12/1951		7	5	24	1	3	12				

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
	2581	ALONSO SAURA JOSE LUIS	18/01/1951	FISCALES DE TERCERA EXCEDENTES	7	5	24	0	11	2			
	2582	CALVO IBARLUCEA M.MILAGROS	15/08/1947		6	5	18	0	11	2			
	2583	BLANCO DOMINGUEZ LUIS MIGUEL	09/01/1966		8	3	18	0	5	28			
	2584	GOMEZ DE LIAÑO BOTELLA MARIANO	28/02/1947		8	5	0	8	5	0			
	2585	TORRES-DULCE LIFANTE MIGUEL ANGEL	04/07/1951		6	8	9	6	8	9			
	2586	MAÑAS DE ORDUÑA ALVARO	09/06/1979		4	4	18	4	4	18			
	2587	GARCIA ROMEU FLETA IGNACIO	05/04/1944		3	8	17	3	8	17			
	2588	HERRERO RETIVEL PEDRO LUIS	21/01/1946		0	8	6	0	8	6			
	2589	GALINDO GIL M. DOLORES	16/12/1963		4	3	12	4	3	12			
	2590	GUTIERREZ GIL ANDRES JAVIER	20/12/1961		0	0	1	0	0	1			
	2591	MARTIN MORALES MARIA LUISA	02/06/1970		4	3	6	4	3	6			
	2592	FRANCO LLORENTE JOSE LUIS	19/12/1965		3	11	29	3	11	29			
	2593	GARCIA CERVERA ENRIQUE	15/07/1962		0	0	1	0	0	1			
	2594	URESTE GARCIA CONCEPCION R.	07/10/1961		3	10	8	3	10	8			
	2595	LOPEZ-POLIN Y MENDEZ DE VIGO JAVIER	12/04/1943		0	0	0	0	0	0	8	8	21
	2596	DIEZ CUQUERELLA JOSE RAFAEL	25/05/1944		0	0	0	0	0	0	5	3	8
	2597	PRAT WESTERLINDH CARLOS	11/09/1969		3	6	16	3	6	16			
	2598	BAYLOS HERNAN-PEREZ DANIEL	24/04/1953		0	0	0	0	0	0	3	4	20
	2599	DE CASTRO MEJUTO LUIS FERNANDO	22/10/1973		3	0	21	3	0	21			
	2600	BEJAR GARCIA FRANCISCO JAVIER	30/03/1952		0	0	0	0	0	0	0	9	8
	2601	DOMINGUEZ CARRASCO MARIA ISABEL	14/05/1950		0	0	0	0	0	0	0	0	18
	2602	ROMERA VAQUERO CONSUELO	09/07/1955		2	7	5	2	7	5	2	6	0
	2603	MORENO DE ACEVEDO SAMPEDRO JUAN IGNACIO	11/04/1947		0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2604	FRIAS MARTINEZ EUGENIO	01/07/1972		2	5	27	2	5	27			
	2605	MAZA MARTIN JOSE MANUEL	23/10/1951		2	3	10	2	3	10	3	8	27
	2606	BLANCO CAMPAÑA JESUS	17/11/1945		0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2607	FERNANDEZ DE AGUIRRE Y FERNANDEZ JUAN CARLOS	28/03/1950		2	2	6	2	2	6			
	2608	LOPEZ RODRIGUEZ M. ROSARIO	15/01/1972		2	1	4	2	1	4			
	2609	LEDESMA GARCIA MANUEL	01/01/1945		0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2610	ULLOA RUBIO IGNACIO	16/04/1967		2	1	4	2	1	4			
	2611	RAMIREZ GARCIA EVA ESTRELLA	18/06/1964		2	1	0	2	1	0			
	2612	MONTALBAN GOMEZ TERESA	14/10/1975	2	0	5	2	0	5				
	2613	MAQUEDA PEREZ DE ACEVEDO BELEN	30/01/1958	1	11	26	1	11	26				
	2614	MULERO FLORES FRANCISCO J.	29/03/1964	1	7	21	1	7	21				
	2615	MORENO GARCIA JUAN ANGEL	05/12/1957	1	7	10	1	7	10				

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
2616	MORENO GRAU JOAQUIN	25/04/1963			1	6	13	1	6	13			
2617	GARCIA MUÑOZ PEDRO LUIS	20/11/1961			1	6	7	1	6	7			
2618	ONORATO ORDONEZ MARIA CARMEN	29/06/1964			1	0	24	1	0	24			
2619	LOPEZ CANDELA JAVIER EUGENIO	15/07/1966			1	0	11	1	0	11			
2620	LLEDO FERNANDEZ ANA CRISTINA	10/07/1962			0	11	20	0	11	20			
2621	CERES MONTES CONCEPCION	28/09/1963			0	5	3	0	5	3			
2622	CERES MONTES JOSE	19/07/1962			0	5	1	0	5	1			
2623	GONZALEZ-GUIJA JIMENEZ ALFONSO	29/08/1959			0	4	19	0	4	19			
2624	SAEZ VALCARCEL RAMON	23/06/1957			0	4	10	0	4	10			
2625	MOTA BELLO JOSE FELIX	14/02/1960			0	4	10	0	4	10			
2626	SANCHEZ YLLERA IGNACIO JAVIER	11/02/1962			0	4	10	0	4	10			
2627	QUESADA VAREA JOSE LUIS	21/06/1959			0	4	7	0	4	7			
2628	GONZALEZ FERRERO M. ASUNCION	28/07/1958			0	4	4	0	4	4			
2629	GONZALEZ VIÑAS JOSE MANUEL	21/10/1958			0	3	13	0	3	13			
2630	BORREGO LOPEZ JOSE	02/04/1955			0	2	20	0	2	20			
2631	BARCALA FDEZ. DE PALENCIA ILDEFONSO	07/05/1959			0	2	20	0	2	20			
2632	MONTERO FERNANDEZ JOSE ANTONIO	01/04/1958			0	2	20	0	2	20			
2633	MARTINEZ OLALLA ANA M. VICTORI	21/09/1958			0	2	17	0	2	17			
2634	TORRES AILHAUD JUAN CARLOS	18/09/1959			0	2	17	0	2	17			
2635	HERRANDO MILLAN FRANCISCO	17/11/1945			0	2	13	0	2	13			
2636	TABOAS BENTANACHS MANUEL	17/01/1957			0	2	13	0	2	13			
2637	ARESTE SANCHO JACINTO	05/01/1959			0	2	9	0	2	9			
2638	RODRIGUEZ DUPLA M. JOSE	14/09/1957			0	2	5	0	2	5			
2639	PALOS PENARROYA IGNACIO M.	27/08/1953			0	2	4	0	2	4			
2640	BASSOLS MUNTADA NURIA	08/09/1958			0	2	4	0	2	4			
2641	PEREZ TORTOLA ANA MARIA	26/07/1958			0	1	19	0	1	19			
2642	SANCHEZ FRANCO ANGEL	21/05/1951			0	1	17	0	1	17			
2643	FERNANDEZ PRADO MANUELA FCA.	06/02/1959			0	1	9	0	1	9			
2644	MARTIN COSCOLLA M. PILAR	07/03/1957			0	0	21	0	0	21			
2645	GUIJARRO LOPEZ JESUS ANGEL	23/11/1949			0	0	20	0	0	20			
2646	ARROJO MARTINEZ JOSE MARIA	05/02/1959			0	0	1	0	0	1			
2647	VAZQUEZ CASTELLANOS M.CAMINO	21/07/1959			0	0	1	0	0	1			
2648	MELERO VILLACANAS-LAGRANJA MARIA CARMEN	03/01/1958			0	0	1	0	0	1			
2649	VEGA BRAVO JOSE ANTONIO	23/10/1960			0	0	1	0	0	1			
2650	DE LA MATA AMAYA JOSE	11/10/1961			0	0	1	0	0	1			
2651	RUIZ RUIZ ANGEL	30/03/1958			0	0	1	0	0	1			
2652	BLANCO LEON MARIA ISABEL	01/02/1962			0	0	1	0	0	1			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
2653	NOGUEROLES PEÑA MARIA DOLORES	29/02/1960			0	0	1	0	0	1			
2654	DIAZ ALVAREZ JOSE MANUEL	11/04/1959			0	0	1	0	0	1			
2655	PRESENCIA RUBIO LUIS CARLOS	12/02/1952			0	0	1	0	0	1			
2656	RIESCO IGLESIAS JOSE MANUEL	10/10/1961			0	0	1	0	0	1			
2657	NOGUES LINARES CRISTINA	02/07/1961			0	0	1	0	0	1			
2658	RUIZ RICO RUIZ MORON JULIO	09/07/1960			0	0	1	0	0	1			
2659	GUERRERO ROMEO MERCEDES	23/09/1961			0	0	1	0	0	1			
2660	SANTILLAN PEDROSA BERTA	17/04/1962			0	0	1	0	0	1			
2661	SANCHA SAIZ MERCEDES	17/06/1959			0	0	1	0	0	1			
2662	ORO-PULIDO SANZ HORTENSIA,DE	05/10/1961			0	0	1	0	0	1			
2663	QUINTANA SAN MARTIN ROSA MARIA	29/12/1961			0	0	1	0	0	1			
2664	RASCON ORTEGA JUAN LUIS	09/03/1961			0	0	1	0	0	1			
2665	PERDICES LOPEZ ARACELI	22/05/1962			0	0	1	0	0	1			
2666	MOLERO GOMEZ PEDRO	28/06/1959			0	0	1	0	0	1			
2667	SANCHEZ JIMENEZ JOSE M.	24/06/1961			0	0	1	0	0	1			
2668	SANCHEZ GARCIA MARIA DOLORES	19/01/1959			0	0	1	0	0	1			
2669	CALAMA TEIXEIRA JOSE LUIS	20/05/1959			0	0	1	0	0	1			
2670	QUINTAS RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA	29/09/1949			0	0	1	0	0	1			
2671	PUENTE SEGURA LEOPOLDO	09/04/1964			0	0	1	0	0	1			
2672	LOUSADA AROCHENA JOSE FERNANDO	27/09/1963			0	0	1	0	0	1			
2673	SANTANA PAEZ EMELINA	11/09/1963			0	0	1	0	0	1			
2674	RASILLO LOPEZ PILAR	06/10/1963			0	0	1	0	0	1			
2675	DE ISIDRO Y DE PABLO LUIS CARLOS	23/02/1963			0	0	1	0	0	1			
2676	FERNANDEZ LEICEAGA FERNANDO	05/03/1964			0	0	1	0	0	1			
2677	PATROCINIO POLO JOSE ANTONIO	12/07/1963			0	0	1	0	0	1			
2678	ROJAS POZO CASIANO	23/08/1961			0	0	1	0	0	1			
2679	CONCEPCION RODRIGUEZ JOSE LUIS	16/09/1961			0	0	1	0	0	1			
2680	GARCIA CASTILLO JOSE TOMAS	27/08/1961			0	0	1	0	0	1			
2681	SANCHO GARGALLO IGNACIO	23/04/1963			0	0	1	0	0	1			
2682	DOLADO PEREZ ANGEL	11/05/1962			0	0	1	0	0	1			
2683	SEGURA SANCHO FRANCISCO	03/08/1962			0	0	1	0	0	1			
2684	ZAPATA HIJAR JUAN CARLOS	27/12/1962			0	0	1	0	0	1			
2685	PEREZ PEREZ JUAN JAVIER	13/11/1963			0	0	1	0	0	1			
2686	GARCIA MORENO JOSE MIGUEL	16/05/1964			0	0	1	0	0	1			
2687	SOSPEDRA NAVAS FRANCISCO JOSE	30/07/1963			0	0	1	0	0	1			
2688	CAMPESINO TEMPRANO M ROSARIO	20/05/1964			0	0	1	0	0	1			
2689	NICOLAS MANZANARES JOSE MANUEL	12/10/1964			0	0	1	0	0	1			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
2690	HOYOS FLOREZ MA. LUZ DE	25/05/1964			0	0	1	0	0	1			
2691	DUEÑAS CAMPO ANTONIO NARCIS	24/05/1963			0	0	1	0	0	1			
2692	OJEDA DOMINGUEZ M DOLORES	19/08/1962			0	0	1	0	0	1			
2693	PASCUAL DEL RIQUELME HERRERO MIGUEL ALFONSO	26/06/1963			0	0	1	0	0	1			
2694	UTRILLAS CARBONELL FERNANDO	03/11/1961			0	0	1	0	0	1			
2695	SAENZ DE SAN PEDRO ALBA JUAN ANTONIO	17/01/1962			0	0	1	0	0	1			
2696	GONZALEZ MOVILLA MARIA JOSE	12/01/1963			0	0	1	0	0	1			
2697	CURA ALVAREZ ALFREDO,DEL	18/07/1962			0	0	1	0	0	1			
2698	ABELLA MAESO SILVIA	11/12/1964			0	0	1	0	0	1			
2699	SUBIJANA ZUNZUNEGUI IGNACIO J.	15/06/1963			0	0	1	0	0	1			
2700	PACHECO AGUILERA JOSE M.	18/11/1961			0	0	1	0	0	1			
2701	REVILLA PEREZ LUIS	01/04/1963			0	0	1	0	0	1			
2702	CASADO PORTILLA ANA ESMERALDA	03/05/1963			0	0	1	0	0	1			
2703	GOMEZ GARRIDO LUISA MARIA	20/04/1962			0	0	1	0	0	1			
2704	RUIZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	03/12/1963			0	0	1	0	0	1			
2705	CASADO LOPEZ LOURDES	16/02/1964			0	0	1	0	0	1			
2706	CUERDA SIERRA RAFAEL	06/01/1962			0	0	1	0	0	1			
2707	PEREZ APARICIO VALENTIN	26/07/1962			0	0	1	0	0	1			
2708	FERNANDEZ GALIÑO MARIA DOLORES	19/04/1963			0	0	1	0	0	1			
2709	MARTINEZ ALVAREZ YOLANDA	25/10/1964			0	0	1	0	0	1			
2710	ESPINOSA CONDE MA.GEMMA	11/11/1963			0	0	1	0	0	1			
2711	HIDALGO ARROQUIA ANTONIO P.	05/02/1963			0	0	1	0	0	1			
2712	FRIGOLA RIERA ANTONI	17/05/1963			0	0	1	0	0	1			
2713	GIL HERNANDEZ ANGEL	27/01/1962			0	0	1	0	0	1			
2714	PEÑAS GIL FRANCISCO JAVIER	13/01/1962			0	0	1	0	0	1			
2715	GARCIA CARRASCO ARMANDO	03/08/1960			0	0	1	0	0	1			
2716	GIBERT FERRAGUT JAIME	21/04/1962			0	0	1	0	0	1			
2717	MATEOS RODRIGUEZ MANUEL	13/04/1963			0	0	1	0	0	1			
2718	GUTIERREZ GONZALEZ BELEN	31/08/1963			0	0	1	0	0	1			
2719	MALLO GARCIA ERNESTO	05/06/1960			0	0	1	0	0	1			
2720	RADIO BARCIELA ESTRELLA	22/07/1960			0	0	1	0	0	1			
2721	BLAS GARCIA JAVIER DE	04/09/1963			0	0	1	0	0	1			
2722	CUMBRE CASTRO MARIA CARMEN	18/10/1963			0	0	1	0	0	1			
2723	CASTRESANA GARCIA M.REYES	08/01/1964			0	0	1	0	0	1			
2724	HERNANDEZ DIAZ-AMBRONA LUIS R.	22/02/1966			0	0	1	0	0	1			
2725	ESCRIBANO MORA ANA CRISTINA	16/10/1961			0	0	1	0	0	1			
2726	ESTEBAN PRADAS ROBERTO	12/07/1963			0	0	1	0	0	1			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
	2727	TOMAS GARCIA ISABEL	02/07/1962		0	0	1	0	0	1			
	2728	BALFAGON SANTAOLARIA BEATRIZ MARIA	23/05/1964		0	0	1	0	0	1			
	2729	BUSTOS MANJON JOSEFA	19/03/1952		0	0	1	0	0	1			
	2730	VALLE LORENZO PATRICIA	31/12/1964		0	0	1	0	0	1			
	2731	GONZALEZ-CARRERO FOJON PABLO SOCRATES	20/06/1962		0	0	1	0	0	1			
	2732	GARCIA DE YZAGUIRRE MONICA	14/07/1962		0	0	1	0	0	1			
	2733	FERRER-SAMA PEREZ M. ISABEL	07/01/1964		0	0	1	0	0	1			
	2734	PERCHIN BENITO NURIA	27/02/1965		0	0	1	0	0	1			
	2735	MARTINEZ SAIZ M. ESTHER	07/02/1964		0	0	1	0	0	1			
	2736	CUESTA PERALTA M. EUGENIA	23/09/1964		0	0	1	0	0	1			
	2737	SERRANO CASTRO FRANCISCO	21/03/1965		0	0	1	0	0	1			
	2738	AGUAYO MEJIA JAVIER	13/03/1964		0	0	1	0	0	1			
	2739	VACAS HERMIDA M. INMACULADA	04/10/1963		0	0	1	0	0	1			
	2740	VIDERAS NOGUERA ANTONIO	16/09/1963		0	0	1	0	0	1			
	2741	FERRANDEZ LOPEZ-EGEA ASUNCION C.	11/04/1963		0	0	1	0	0	1			
	2742	MIRMAN CASTILLO MARIA FERNANDA	21/09/1964		0	0	1	0	0	1			
	2743	VIDAL FONTCUBERTA ESTER	02/12/1964		0	0	1	0	0	1			
	2744	BADENES PUENTES HORACIO	13/01/1961		0	0	1	0	0	1			
	2745	PARAMIO MONTON M. ELENA	26/06/1965		0	0	1	0	0	1			
	2746	DE LA RUBIA COMOS BEATRIZ	27/06/1963		0	0	1	0	0	1			
	2747	GARCIA MORALES ADOLFO JESUS	14/09/1965		0	0	1	0	0	1			
	2748	IGLESIAS PINUAGA M. CARMEN	20/05/1964		0	0	1	0	0	1			
	2749	LORENZO HERNANDEZ ENCARNACION	11/02/1964		0	0	1	0	0	1			
	2750	CIENFUEGOS RODRIGUEZ M. LUISA	02/06/1962		0	0	1	0	0	1			
	2751	BRU AZUAR FRANCISCA	03/07/1965		0	0	1	0	0	1			
	2752	VIDAL CAROU RAMON	29/01/1963		0	0	1	0	0	1			
	2753	REGALADO VALDES MANUEL E.	11/05/1964		0	0	1	0	0	1			
	2754	REYERO SAHELICES JOSE M.	15/06/1954		0	0	1	0	0	1			
	2755	MELGOSA CAMARERO JOSE IGNACIO	19/07/1965		0	0	1	0	0	1			
	2756	MARCOS MADRUGA FLORENCIO	10/02/1964		0	0	1	0	0	1			
	2757	DELGADO PEREZ M. ISABEL	05/05/1962		0	0	1	0	0	1			
	2758	PONCELA GARCIA JESUS ALFONSO	06/06/1964		0	0	1	0	0	1			
	2759	QUINTANA LOPEZ FERNANDO D	19/11/1964		0	0	1	0	0	1			
	2760	BONO ROMERA NURIA	04/04/1964		0	0	1	0	0	1			
	2761	SANCHEZ SANCHEZ JUAN JOSE	14/09/1967		0	0	1	0	0	1			
	2762	MARTINEZ PALACIOS MARIA OTILIA	21/02/1967		0	0	1	0	0	1			
	2763	BLANCO REDONDO MARIA CELIA	31/01/1965		0	0	1	0	0	1			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
2764	CAMARENA GRAU SALVADOR	09/06/1962			0	0	1	0	0	1			
2765	DOMINGO DE LA FUENTE HORTENSIA	03/09/1966			0	0	1	0	0	1			
2766	HERNANDEZ HERNANDEZ VICTORIA	23/08/1965			0	0	1	0	0	1			
2767	MORENO DIAZ MARIA JOSE	14/08/1965			0	0	1	0	0	1			
2768	JIMENEZ ZAFRILLA M. LUZ	07/09/1964			0	0	1	0	0	1			
2769	MONGE BORDEJE AMPARO BIENVEN	22/08/1966			0	0	1	0	0	1			
2770	BROTO CARTAGENA JESUS	22/12/1971			0	0	1	0	0	1			
2771	MARTINEZ MIRANDA MARIA MACARENA	05/07/1974			0	0	1	0	0	1			
2772	GARCIA CELAA BEATRIZ	10/08/1973			0	0	1	0	0	1			
2773	ARELLANO MARTINEZ MARIA ROSARIO	28/04/1972			0	0	1	0	0	1			
2774	SOLER RUBIA NURIA	01/05/1971			0	0	1	0	0	1			
2775	OLLERO VALLES LUISA ISABEL	14/08/1975			0	0	1	0	0	1			
2776	SAMPEDRO IBANEZ DAVID	24/10/1973			0	0	1	0	0	1			
2777	VERASTEGUI HERNANDEZ M DEL PILAR	05/11/1973			0	0	1	0	0	1			
2778	GARCIA GARCIA SERGIO	20/03/1972			0	0	1	0	0	1			
2779	MARTIN JIMENEZ PALOMA	12/08/1972			0	0	1	0	0	1			
2780	SANTIAGO ANTUÑA PALOMA	13/05/1972			0	0	1	0	0	1			
2781	VILLELLAS SANCHO M BEGONA	09/07/1972			0	0	1	0	0	1			
2782	SANCHIS OSUNA FRANCISCO	30/08/1972			0	0	1	0	0	1			
2783	GARCIA AFONSO ESTHER N.	31/01/1969			0	0	1	0	0	1			
2784	HERNANDO VALLEJO M ISABEL	12/02/1971			0	0	1	0	0	1			
2785	REVUELTA MUÑOZ FRANCISCO JOSE	13/08/1973			0	0	1	0	0	1			
2786	NORTES NOLASCO MARIA DOLORES	19/07/1972			0	0	1	0	0	1			
2787	MARTINEZ RUIZ MARIA CARMEN	02/09/1970			0	0	1	0	0	1			
2788	ALONSO GRAÑEDA ALEJANDRA	03/11/1973			0	0	1	0	0	1			
2789	COLUBI MIER JOAQUIN	05/11/1974			0	0	1	0	0	1			
2790	TORRES MORENO MARTA DE	21/04/1969			0	0	1	0	0	1			
2791	ROMERO ADAN SAMANTHA	19/11/1972			0	0	1	0	0	1			
2792	GONZALO RODRIGUEZ M. TERESA	27/07/1972			0	0	1	0	0	1			
2793	MENDEZ CORTES CARMEN	07/03/1967			0	0	1	0	0	1			
2794	BELLO BRUNA M. SUSANA	18/04/1972			0	0	1	0	0	1			
2795	LACUNZA RUIZ RAQUEL	27/07/1974			0	0	1	0	0	1			
2796	BOLAÑO PIÑEIRO MARIA AMALIA	28/08/1969			0	0	1	0	0	1			
2797	BANDE RAMUDO ANA MARIA	26/07/1970			0	0	1	0	0	1			
2798	ROJAS DE LA VIUDA OSCAR LUIS	29/06/1975			0	0	1	0	0	1			
2799	MAYORDOMO LUJAN LUCIA	26/12/1973			0	0	1	0	0	1			
2800	RODRIGUEZ VIDAL LUIS JAVIER	07/05/1969			0	0	1	0	0	1			

Número de Escalafón	Número de Orden	NOMBRE Y APELLIDOS	Fecha de Nacimiento	DESTINO	SERVICIOS EFECTIVOS								
					CARRERA			CATEGORÍA			FISCAL DISTRITO		
					Años	Meses	Días	Años	Meses	Días	Años	Meses	Días
	2801	VARELA CASTRO LUCIANO	09/05/1947		0	0	0	0	0	0	5	2	4
	2802	MOSCOSO TORRES PABLO JOSE	30/05/1952		0	0	0	0	0	0	3	3	19
	2803	AZPARREN LUCAS AGUSTIN	14/09/1952		0	0	0	0	0	0	3	3	16
	2804	ENFEDAQUE MARCO ANDREU	20/06/1954		0	0	0	0	0	0	2	9	21
	2805	ALTARRIBA CANO CARLOS	06/10/1948		0	0	0	0	0	0	2	4	2
	2806	LECUMBERRI MARTI ENRIQUE	14/09/1943		0	0	0	0	0	0	1	1	21
	2807	ALCALA NAVARRO ANTONIO	05/01/1950		0	0	0	0	0	0	0	8	23
	2808	CEZON GONZALEZ CARLOS	05/12/1951		0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2809	OTERO PEDROUZO ALFONSO	21/08/1950		0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2810	CUBERO ROMEO VICTOR	13/02/1948		0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2811	FERNANDEZ ENTRALGO JESUS	10/12/1945		0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2812	MONTERO GAMARRA JOSE CARLOS	14/08/1947		0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2813	VELA TORRES FCO. JAVIER	27/06/1955		0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2814	AMEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	31/05/1953		0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2815	HUERTA GARICANO JESUS	10/09/1954		0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2816	RIVES SEVA JOSE MARIA	01/12/1952		0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2817	GUGLIERI VAZQUEZ JOSE MARIA	17/06/1948		0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2818	BARCELO OBRADOR PEDRO JOSE	20/05/1955		0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2819	MARTINEZ ARRIETA ANDRES	13/04/1955		0	0	0	0	0	0	0	0	1

